

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

Facultad de Filosofía y Letras

EL SISTEMA CAPITALISTA ESPAÑOL
EN LA EPOCA LIBERAL

Tesis Doctoral que presenta la
Licenciada María Jesús Matilla
Quiza bajo la dirección del Dr.
D. Miguel Artola Gallego, Categ
drático de Historia Contemporán
nea de la Universidad Autónoma
de Madrid.

Madrid, 1986

INDICE

INTRODUCCION	I
--------------------	---

PARTE I

LAS COMPAÑIAS MERCANTILES

EN LA ESPAÑA DEL ANTIGUO REGIMEN

CAPITULO 1.- LA LEGISLACION GENERAL SOBRE COMPAÑIAS EN LA ESPAÑA DEL ANTIGUO REGIMEN	2
1.1.- Introducción, 2	
1.2.- La constitución de las compañías mercantiles, 9	
1.2.1.- Definición, 9	
1.2.2.- Clases de compañías, 15	
1.2.3.- Modo de Constitución, 17	
1.3.- Características de las Compañías mercantiles, 32	
1.3.1.- Personalidad jurídica, 32	
1.3.2.- Responsabilidad, 37	
1.4.- Funcionamiento de las compañías mercantiles, 46	
1.4.1.- La gestión social, 46	
1.4.2.- El reparto de pérdidas y ganancias, 52	
1.4.3.- Disolución de las compa- ñías mercantiles, 58	
CAPITULO 2.- LAS COMPAÑIAS PRIVILEGIADAS EN LA ESPA ÑA DEL ANTIGUO REGIMEN	79
2.1.- La justificación del privilegio en el marco del comercio exte- rior, 80	
2.2.- La compañía mercantil privilegia da en Europa, 89	
2.2.1.- Holanda, 89	
2.2.2.- Inglaterra, 98	
2.2.3.- Francia, 110	

- 2.3.- La Compañía Privilegiada para el comercio colonial en España, 113
 - 2.3.1.- La organización del sistema: La Casa de Contratación y el Consulado de Sevilla, 113
 - 2.3.2.- Los proyectos alternativos, 122
 - 2.3.3.- Los proyectos complementarios, 137
- 2.4.- La Compañía Industrial Privilegiada en España, 167
 - 2.4.1.- El proceso de constitución, 173
 - 2.4.2.- Características, 194
 - 2.4.3.- El patrimonio social, 221
 - 2.4.4.- Dirección, participación y control, 248
 - 2.4.5.- El fin de las Reales Compañías de Comercio y Fábricas, 270

CAPITULO 3.- LA COMPAÑIA POR ACCIONES NO PRIVILEGIADA EN LA ESPAÑA DEL ANTIGUO REGIMEN ..

276

- 3.1.- La muestra analizada, 280
- 3.2.- Las compañías por acciones en Barcelona, Cádiz y Bilbao, 284
- 3.3.- Las Compañías de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, 329

PARTE II
LAS NORMAS Y EL DESARROLLO
DEL SISTEMA CAPITALISTA

INTRODUCCION	350
CAPITULO 1.- EL MERCADO LIBRE	362
1.1.- La propiedad libre de la tierra, 365	
1.2.- La libertad de industria, 371	
1.3.- La libertad de comercio, 377	
CAPITULO 2.- LA CODIFICACION MERCANTIL	397
2.1.- Solicitudes de una codificación mercantil antes de 1.790: su impreciso significado, 397	
2.2.- Las iniciativas del poder central hasta 1.828, 405	
2.3.- El Código de Comercio de 1.829, 416	
2.4.- La reforma del Código de Comercio: primeros proyectos y comisiones (1.834-1.869), 427	
2.5.- La reforma del Código de Comercio: la recta final (1.869-1.885), 436	
2.6.- El Código de Comercio de 1.885, 469	
CAPITULO 3.- LA REGULACION DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES	473
3.1.- Introducción, 473	
3.2.- La constitución de las sociedades, 485	
3.2.1.- El régimen del Código de Comercio: enero de 1.830 a febrero de 1.847, 485	
3.2.2.- La legislación general moderada y las leyes progresistas: 1.847-1.868, 489	
3.2.3.- Libertad de constitución: 1.868-1.923, 561	

3.3.- La centralización del capital,	
576	
3.3.1.- La legislación general,	
576	
3.3.2.- Las regulaciones especia <u>l</u> es,	
595	
3.4.- La negociación del capital. La	
Bolsa, 654	
3.4.1.- Introducción, 654	
3.4.2.- La legislación bursátil	
(1.831-1.923), 663	
3.4.3.- La creación de las Bol-	
sas, 696	
3.4.4.- Los efectos negociables,	
707	
3.4.5.- La negociación de valo-	
res, 716	
3.5.- El control sobre las sociedades	
anónimas, 744	
3.5.1.- Las Juntas Generales de	
Accionistas, 748	
3.5.2.- La publicidad, 759	
3.5.3.- Control gubernativo vs.	
control administrativo, 772	
 CAPITULO 4.- LA CREACION DE SOCIEDADES (1840-1923).	794
4.1.- Las fuentes utilizadas, 794	
4.2.- Las sociedades anónimas hasta	
1.848, 816	
4.3.- 1.848-1.868, 829	
4.4.- 1.868-1.923, 875	
 CONCLUSION	903
 FUENTES y BIBLIOGRAFIA	916

INDICE DE CUADROS DE LA PRIMERA PARTE

Cuadro

II,1:: Capital de las principales compañías mercan tiles privilegiadas	159
II,2: Gestión, representación y control en las principales compañías mercantiles privile- giadas	164
II,3: Composición de la Junta General de Accionis tas de las principales compañías mercanti- les privilegiadas	165
II,4: Fecha de creación, capital y división del mismo en las compañías industriales privile giadas	225
II,5: Accionistas colectivos en la Compañía de Za ragoza	232
II,6: Capital en Acciones necesario para poder ac ceder a la dirección de las compañías indus triales privilegiadas	253
II,7: Medida del derecho de participación en las Juntas Generales de Accionistas de las Com- pañías privilegiadas	262

ABREVIATURAS UTILIZADAS

A) Correspondientes a Archivos y Bibliotecas:

- A.C.A. Archivo General de la Corona de Aragón
- A.C.B. Archivo del Consulado de Bilbao
- A.G.S. Archivo General de Simancas
- A.H.N. Archivo Histórico Nacional
- A.H.P.B. Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona
- A.H.P.C. Archivo Histórico de Protocolos de Cádiz
- A.H.P.M. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
- B.C. Biblioteca de Cataluña
- B.D.G. Biblioteca de la Diputación de Guipúzcoa
- B.M.H. Biblioteca del Ministerio de Hacienda
- B.N. Biblioteca Nacional
- B.U.Z. Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
- R.A.H. Real Academia de la Historia

B) Correspondientes a fuentes documentales y estadísticas

- A.E.E. Anuario Estadístico de España
- A.F.V.M. Anuario Financiero y de Valores Mobiliarios
- A.F.S.A. Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas
- A.O.V.B.B. Anuario Oficial de Valores de la Bolsa de Barcelona
- A.O.V.B.M. Anuario Oficial de Valores de la Bolsa de Madrid
- A.R.N. Anuario de la Dirección General de los Registros Civiles, de la Propiedad y del Notariado.
- B.O.M.F. Boletín Oficial del Ministerio de Fomento

C.DD.	Colección de Decretos
C.L.E.	Colección Legislativa de España
DD.CC.	Decretos de las Cortes
DD.R.	Decretos del Rey
D.G.E.	Diccionario geográfico y estadístico (Pas- cual Madoz)
D.S.C.	Diario de las Sesiones de Cortes (Congreso)
D.S.C.C.	Diario de las Sesiones de Cortes Constituyen <u>tes</u> .
D.S.S.	Diario de las Sesiones de Cortes (Senado)
G.M.	Gaceta de Madrid
R.M.	Registro Mercantil

C) Otras:

Exp.	Expediente
Leg.	Legajo
Lib.	Libro
Mrs.	Maravedíes
O.	Ordenanza
R.C.	Real Cédula
R.D.	Real Decreto
R.O.	Real Orden
R.R.	Real Resolución
Rs.vn.	Reales de vellón

INTRODUCCION

La revolución industrial supuso el paso de la manufactura a la fabricación por medio de máquinas, en el ámbito de una organización fabril. Posibilitó la aplicación de nuevas fuentes de energía natural en sustitución de la humana y animal y, sobre todo, produjo un cambio irreversible en el curso de la historia. El inicio de la industrialización en un país —Inglaterra— en el último cuarto del siglo XVIII, provocó su rápida extensión al resto de Europa, a Estados Unidos y a Japón y, más tardíamente, al resto del mundo. Desde 1.780, la industrialización fue condición necesaria para el desarrollo económico.

La introducción del maquinismo en la esfera de la producción supuso la inversión de la relación tradicional entre capital y trabajo, en favor del primero. La empresa capitalista comenzó a marcar el ritmo y la dirección del desarrollo económico y se inició la construcción de lo que conocemos como sistema capitalista

En el Antiguo Régimen se habían desarrollado sociedades de capitales en el seno del comercio (especialmente marítimo y, dentro de él, ultramarino), en el sector financiero y en industrias tradicionalmente intensivas en capital (minería, metalurgia, astilleros). No obstante, no pasaban de ser islotes capitalistas en el seno de una sociedad agraria, frente a la cual no suponían una alternativa viable, tanto por su incapacidad política de transformación de las estructuras de

poder del Antiguo Régimen como por su escasa representación y fuerza económicas.

Los beneficios del maquinismo eran importantes. Permitía reasignar los factores de producción y los recursos naturales —tierra, trabajo, capital— de una forma más eficiente, así como la creación de economías de escala y, por tanto, la disminución de costes. Así, para una misma producción se ahorra trabajo y capital y se invertía la relación de estos factores a favor del capital fijo. A la vez, su utilización permitía un incremento de la producción, más que proporcional, y aumentaba las necesidades de ambos factores. Dejamos aquí de lado el problema de atracción de mano de obra y nos centramos en el hecho de que la financiación de la industrialización generó una importante demanda de capital —sin parangón con épocas precedentes— a la vez que ofrecía unas enormes posibilidades de acumulación.

Se requería capital para la fabricación o compra de equipo fijo, para la obtención de combustible, para la construcción o alquiler de los edificios necesarios para albergar la nueva maquinaria y la organización administrativa de las cada vez mayores unidades de producción. Consideremos un solo dato, del sector textil, que nos sirve para ilustrar la idea que desarrollamos. En Inglaterra, una spindle-jenny 40, costaba 6 libras en 1.792. En general, en este momento, la maquinaria era sencilla y barata y para el desarrollo de la industria podía seguir utilizándose la vía de la autofinanciación. Diez años más tarde, "el huso mecánico se había conver

tido en una gran máquina de más de mil púas, que funcionaba sólo a base de energía hidráulica o a vapor y costaba más de 1.000 libras" (i). Una evolución similar se produjo para otras industrias de bienes de consumo, la siderúrgica y, sobre todo, para el ferrocarril.

La capacidad de todas las máquinas de vapor en 10 países europeos —incluida España— era, en 1.840, de 860.000 caballos de vapor. En las décadas siguientes, esta cifra se multiplicó por 2'6, 2'5, 2'1 y 1'9. La cantidad correspondiente a España, en 1.840, era de 10.000 y su multiplicación, en las décadas posteriores: 2, 5, 2'1 y 2'2 (ii). Este índice es una pequeña muestra del incremento de la demanda para maquinaria —el vapor—.

Estas consideraciones nos conducen a una segunda consecuencia del maquinismo: el incremento de las unidades de producción. Las dimensiones de las empresas, necesariamente tuvieron que aumentar, para amortizar y maximizar el beneficio de unas máquinas que, en centros pequeños, estaban infrutilizadas y, por lo tanto, no eran meramente poco rentables sino deficitarias. El incremento no era sólo cuantitativo —mayor producción de una misma máquina y yuxtaposición de ingenios idénticos en una misma planta— sino también cualitativo. Se buscaba aprovechar al máximo las posibilidades median

(i) Walter Minchinton, "Los modelos de demanda, 1.750-1.914", en Carlo M. Cipolla (ed.), Historia económica de Europa (3). La Revolución Industrial, Barcelona, 1.979, p. 169.

(ii) Sobre datos incluidos en David S. Landes, The Unbound Prometheus. Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1.750 to the Present, Cambridge, 1.969, p. 221 (ed. española, Barcelona, 1.979).

te una integración de la maquinaria que permitiera un mejor aprovechamiento de la energía y la puesta en marcha de un proceso continuo de producción.

El incremento del tamaño de las máquinas provocó, a su vez, el de las industrias dedicadas a su construcción. Pronto se hizo imposible que cada empresa se construyera sus propios útiles. Asimismo, los beneficios de la utilización de la maquinaria supusieron un estímulo a la investigación tecnológica.

Los cambios provocados por la Revolución industrial no se produjeron sólo en la organización de la producción, en el incremento de la tasa de formación de capital (que para una economía industrializada se estima en más del 10%), en la posibilidad de una expansión indefinida mediante la reinversión de los beneficios como capitalización y en la internacionalización de la economía (extensión del mercado de productos y capitales) sino también en la estructura social. Y ello, en un doble sentido. En primer lugar, llevó a la sustitución de la sociedad estamental del Antiguo Régimen por una estructura clasista más adecuada al desarrollo de la nueva organización económica. En segundo, originó la división del mundo entre países industrializados y no industrializados o, si se quiere, en una segunda fase, países en vías de desarrollo.

La rígida organización social del Antiguo Régimen y sus fundamentos socio-económicos (extracción de buena parte de la tierra del mercado, control de precios y producción, exis

tencia de barreras aduaneras interiores, multiplicidad de or
denaciones mercantiles...) impedía el desarrollo, limitaba
la promoción de empresas y la acumulación de capital y difi-
cultaba la centralización e inversión del mismo así como del
ahorro inutilizado. La burguesía, relegada políticamente, no
podía desarrollar su modelo económico. Los intentos de moder-
nización pasaban por la destrucción del sistema socio-políti-
co del Antiguo Régimen, como lo demostraron los fracasos de
los programas del Despotismo Ilustrado, especialmente en
Francia y en España, en la segunda mitad del siglo XVIII. En
este momento, ya se manifestaba claramente la necesidad de
derribar los factores institucionales que impedían el pleno
aprovechamiento de las fuerzas productivas.

La acumulación de capital y su reinversión es una de las
condiciones necesarias para el florecimiento de la Revolu-
ción industrial. El inversor debía tener, por una parte, posi-
bilidades de acumular. Pero para ello debía tener libertad
de industria, de empleo, de utilización de los recursos y de
comercialización del producto. De otro lado, necesitaba po-
seer la seguridad de la apropiación del beneficio y posibili-
dades para su reinversión, mediante una fácil movilidad de
los factores entre diversos usos y la libertad para recombina-
rlos en la proporción más económica.

En el Antiguo Régimen, la acumulación de capital prove-
nía fundamentalmente del comercio, del seguro, de las finan-
zas y del arrendamiento de rentas. La mayor parte del produc-
to agrícola era incorporado a los titulares colectivos—Igle

sia y Nobleza, sobre todo— en forma de rentas. La división entre propiedad y explotación de la tierra impedía el incremento de la productividad agraria. Faltaba la "seguridad de la propiedad" tan solicitada desde el liberal Locke o el fisiócrata Quesnay, y que no podía conseguirse sin atentar contra la estructura del Antiguo Régimen.

Los ingresos obtenidos de la agricultura no eran reinvertidos en ella y diversos factores institucionales y doctrinales dificultaban su empleo en otros sectores. La productividad en la manufactura estaba, asimismo, limitada por la organización gremial, que actuaba sobre el bajo nivel de producción, potenciando la tendencia —ausencia de mecanización y división del trabajo—. Por último, debemos destacar la dificultad para la comercialización del producto, debido a la escasez de rutas, a la carestía del transporte, al sistema impositivo sobre el tráfico y el consumo, a la existencia de instituciones privilegiadas que impedían el desarrollo de un sistema de mercado...

El Estado liberal fue la alternativa de la clase revolucionaria, la burguesía, destinada a sustituir la estructura del Antiguo Régimen. La nueva organización, basada en unos principios diferentes —propiedad, igualdad, libertad— era, teóricamente, el Estado-árbitro, que no es sinónimo de no-Estado, sino una forma peculiar del mismo que, en el terreno económico, debía limitar su actuación a garantizar el desenvolvimiento de las relaciones económicas en un sistema de libre mercado. La teorización de las atribuciones del Estado

liberal por parte de Adam Smith y su comparación con el Estado mercantilista hace que se magnifiquen sus posiciones neutralistas, que sólo se dieron en la generalidad de los países en el momento de la transición y, en Inglaterra, de forma más remarcable.

No olvidemos que Adam Smith legitimó la intervención del Estado para "establecer y sostener aquellas instituciones y obras públicas que, aún siendo ventajosas en sumo grado a toda la sociedad, son, no obstante, de tal naturaleza que la utilidad nunca podría recompensar de costo a un individuo o a un corto número de ellos, y, por lo mismo, no debe esperarse que éstos se aventuren a fundarlas ni a mantenerlas". El filósofo escocés estaba pensando en "aquellas que sirven para facilitar el comercio de la nación y fomentar la instrucción del pueblo" (iii). Como especifica a continuación, en las obras públicas y —de forma muy crítica— en la educación.

Ciñéndonos al tema que aquí interesa, no es extraño, pues que en los países que siguieron a Inglaterra en el camino de la industrialización y, específicamente, en España, se desarrollara, por moderados y progresistas una teoría que —sin abandonar el clasicismo— legitimaba el incremento de las atribuciones del Estado. En primer lugar, éste debía, por todos los medios, impulsar las obras públicas. En segundo, debía desarrollar una forma de proteccionismo —a la industria

(iii) Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, lib. V, parte III (ed. de México, 1.958, pp. 639 y 640).

al comercio—, que permitiera que los particulares emprendieran las diversas actividades económicas que, sin estos beneficios, dada la preeminencia de Inglaterra, no serían abordadas. La alternativa parecía ser, intervención del Estado o atraso.

El Estado liberal, desde el modelo puro de laissez-faire a fórmulas de mayor o menor intervencionismo, debía servir —y sirvió— de marco para la construcción del nuevo modelo económico, el capitalismo. No cabe considerar aquí la posibilidad de que la industrialización en el siglo XIX se hubiera realizado en el seno de otro tipo de Estado, el socialista, y al margen del desarrollo del sistema de libre mercado. Ni siquiera su máximo teórico consideró factible tal posibilidad (iv) aunque tras la muerte de Marx y en unas nuevas circunstancias —generación del sistema capitalista desarrollado— se cuestione esta idea, no sólo con brillantez teórica sino, en ocasiones, con cierto éxito en la práctica.

El desarrollo industrial, por tanto, requiere la existencia de un mercado libre —frente al controlado del Antiguo Régimen—. Provoca, asimismo, una doble consecuencia. En primer lugar, como se ha mencionado, la necesidad de disponer de grandes masas de capital para empresas cada vez mayores. Esta demanda superaba las oportunidades de un individuo o de sus contactos personales. En segundo lugar, el desarrollo de la acumulación. El excedente podía ser generado por parte de

(iv) v., por ejemplo, Marx y Engels, Manifiesto comunista (1.848).

individuos que no deseaban participar como inversores activos o que habían alcanzado el techo de la acumulación de capital en su esfera.

La combinación de estos elementos es necesaria y se consigue a través de un mecanismo institucional: la creación de sociedades anónimas, figura de la que trata fundamentalmente esta Tesis. La sociedad anónima, como se considera a lo largo de estas páginas, es la figura que permite dar respuesta a la demanda del capital mediante la canalización del ahorro, que ve su riesgo limitado a su imposición. El accionista se compromete sólo por la cantidad deseada —que puede ser relativamente pequeña— y obtiene, a cambio, un aleatorio beneficio que espera sea siempre superior al del depósito bancario. El obligacionista puede, asimismo, invertir sus ahorros sin riesgos, a cambio de un módico interés. Ambos pueden recuperar su capital —a veces con un beneficio extraordinario— mediante la venta de sus acciones en la Bolsa.

Las sociedades anónimas consiguen el capital para sus empresas mediante la emisión de acciones; y sus préstamos, mediante la de obligaciones. Además generan un incremento de la demanda de crédito (a corto, medio y largo plazo) que sólo puede ser satisfecha por las instituciones financieras que canalizan el ahorro de sus depositantes. El papel de los Bancos en los inicios de la industrialización no es muy relevante en España, siendo, sin embargo, muy destacable el de esas sociedades de crédito de promoción industrial que se crearon —como en el resto de Europa— entre 1.856 y 1.864.

El objeto de estudio principal de esta Tesis es la construcción del sistema capitalista en España (hasta 1.923). Dentro de él, un aspecto esencial: las posibilidades de creación y las condiciones de desenvolvimiento de las sociedades anónimas en cuanto son el instrumento idóneo para realizar la centralización de capital que necesita la industria para realizar su acumulación. Hay que tener en cuenta que, así como la industrialización no supuso la total e inmediata desaparición de la artesanía, tampoco implicó la de formas de compañías personalistas desarrolladas en el Antiguo Régimen (colectivas y comanditarias). La proporción entre unas y otras nos ofrece un índice del grado de desarrollo económico.

SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN ESPAÑA

EN 1.909, 1.922 y 1.950 (en %)

	1.909 (1)		1.922 (2)		1.950 (3)	
	Número (%)	Capital (%)	Número (%)	Capital (%)	Número (%)	Capital (%)
Colectivas	69.8	15.3	56.7	8.3	16.7	4.7
Comanditarias	14.0	10.3	9.7	2.2	1.6	0.6
Anónimas	16.2	74.4	33.6	89.5	51.4	85.0
Respons. Lda.					30.3	9.7

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos incluidos en A.E.E., 1.915, p. 226 (para la columna 1); A.E.E., 1.923-24, p. 274 (para la columna 2); A.E.E., 1.951, (para la columna 3).

Este cuadro es un mero ejemplo ilustrativo de la transformación de las formas de sociedades en la primera mitad del siglo XX. En 1.909, las anónimas sólo suponían un 16.2% del total, pero ya casi las tres cuartas partes del ca-

pital. Sólo en la mitad del siglo, la anónima fue la sociedad mayoritaria, tanto en número como en capital. La comanditaria fue perdiendo su sentido, siendo en buena medida sustituida por la sociedad limitada.

En este trabajo, por tanto, se realiza el seguimiento de la normativa sobre sociedades anónimas en España. La legislación — aunque sea aquí el objetivo central — no quiere ser tomada como el único factor explicativo de la evolución del desarrollo económico en España (v), sino que es a la vez una de las causas y uno de sus efectos. Es causa, porque delimita el ámbito de actuación, diseña unas "reglas del juego". Aún después del triunfo de la alternativa liberal, éstas son distintas y se configuran diferentes modelos, que responden a los programas de los distintos grupos que ocupan el poder (moderados, progresistas, demócratas, conservadores, liberales). Hasta qué punto son diferentes en el terreno económico, dentro de la homogeneidad de su fin último — el desarrollo económico — es un aspecto central considerado en estas páginas. La legislación, indudablemente, puede promocionar o coartar la constitución de sociedades anónimas. Puede hacerlo en general o para alguno de los sectores. Puede ejercer un control más o menos amplio del desenvolvimiento de la vida de las compañías de la emisión y de la negociación de sus títulos. Pero la promulgación de una norma no se traduce inmediatamente en la asunción de un cambio de las conductas. No obstante, durante

(v) v., sobre todo, parte II, introducción al cap. 1.

buena parte de la época estudiada, la legislación fue considerada como una panacea. A su vez, se vio en ella la causa de las crisis económicas.

En un sistema representativo, la legislación es reflejo de la correlación de fuerzas existente en la sociedad. No obstante —y no sólo en España— gobierno y parlamento no representan exacta y proporcionalmente el estado de opinión en cada momento. No entro en el análisis de esta distorsión del sistema representativo, aunque debe ser tenido en cuenta para un cabal entendimiento del sistema de imposición de normas.

La legislación promulgada, no obstante, no es sino la expresión de la alternativa triunfante. Una parte importante de este trabajo consiste en el análisis de las proposiciones alternativas que fueron derrotadas o, simplemente, que no fueron tenidas en cuenta. El análisis de los debates parlamentarios de los proyectos de ley así como de la presentación de proposiciones e interpelaciones se ha efectuado por considerarse una expresión del grado de acuerdo o desacuerdo con las normas. En este trabajo no se ha abordado el análisis de otras fuentes, que sirven de vehículo de expresión de ideas, programas y opiniones, como son la prensa o los folletos. Es una tarea —como tantas otras sugeridas y no abordadas aquí— que deberá emprenderse en el futuro.

El análisis de la regulación de la sociedad anónima en España y la observación de la lenta introducción de la figura me llevó a estudiar sus antecedentes (parte I). La compañía

es una figura cuyos orígenes se remontan a los inicios del comercio marítimo de larga distancia; al momento en el que dos individuos se asocian para compartir recursos y riesgos. ¿Cuál fue su desarrollo a lo largo del Antiguo Régimen? El crecimiento económico tuvo que provocar la aparición de formas cada vez más sofisticadas de compañía para resolver el problema de la centralización de capital. ¿Podemos encontrar en ellas un antecedente de la sociedad anónima? Tales eran las preguntas que me planteaba al observar el rechazo institucional a la anónima tras 1.845 y su consideración como "anómala" a pesar de que el Código de Comercio de 1.829 había permitido su libre constitución. Así se daba la paradoja de que había más facilidades para la creación de estas asociaciones en una época absolutista que en una constitucional.

La explicación podía consistir en el carácter moderado de los gobiernos entre 1.845 y 1.848. Pero —y sólo a primera vista— había otra, como que en ningún país europeo había una legislación tan liberal, cosa que pudo ser capitalizada por los moderados, tras la crisis de 1.846-48. Pero podía también haber una causa en la evolución anterior de las sociedades por acciones en el siglo XVIII. No hay que olvidar que la crisis de 1.720 había provocado en Inglaterra una severa legislación sobre la sociedad por acciones (Bubble Act) de la que no se liberó totalmente hasta la década de los cincuenta del siglo XIX.

La primera parte de esta Tesis, por tanto, se centra en

el análisis de las compañías mercantiles en la España del Antiguo Régimen. En su primer capítulo, se analiza la legislación general (vi), que encontramos se ceñía exclusivamente a las compañías personalistas, es decir, colectivas y comanditarias simples. Estas figuras fueron utilizadas fundamentalmente en el comercio y en el sector financiero, pero la centralización de capital se reducía al acumulado en estas actividades, que se volvía a reinvertir en ellas. La agricultura, que generaba la mayor parte del excedente, quedaba fuera del circuito y las rentas no se reinvertían. Los interesados en estas compañías —un número limitado en cada una de ellas— pertenecían en su gran mayoría al núcleo mercantil. Estas fórmulas de asociación nos interesan por cuanto son las únicas aceptadas por el sistema legal vigente y por cuanto son las mayoritarias. Pero no son consideradas en su desarrollo, pues sus pequeñas dimensiones y sus características nos alejan de nuestro objetivo central: la sociedad por acciones de responsabilidad limitada.

Una importante excepción son las sociedades creadas para realizar contratos de envergadura con el Estado y que adquieren unas dimensiones considerables, que son necesarias para cumplir su objeto y que pueden ser mantenidas gracias a las oportunidades que éste proporciona. De estas compañías hemos

(vi) Dentro del sentido que, en el Antiguo Régimen, puede darse a este término. Entendemos por tal, las Partidas y las Recopilaciones, así como las Ordenanzas Consulares que actuaron como norma común más allá de las zonas para las que se crearon, ante la ausencia de una norma para todo el territorio del Estado. Es decir, la normativa que no tiene como único objeto la regulación de una sola compañía.

escogido las que consideramos más importantes: las constituidas por los Cinco Gremios Mayores de Madrid. No hay que olvidar que su gran desarrollo se debió a una peculiar combinación de la estructura gremial con un Estado en perpetua crisis hacendística (cap. 3, punto 3.3).

En el segundo capítulo se analizan las Compañías Privilegiadas (vii). Este grupo está formado por sociedades por acciones de responsabilidad limitada. En ese sentido, fueron un precedente de la anónima. Su carácter privilegiado, unido a las características enunciadas, motiva que el Estado se reserve su autorización y control, escapando así a la legislación general. Como en el resto de Europa, en España se crearon para la realización del comercio colonial. Pero, a diferencia de otros países, aquí se concibieron también como grandes y "Reales Compañías de Comercio y Fábricas".

El análisis de las privilegiadas se ha realizado con una doble perspectiva. Por una parte —y fundamentalmente— se atiende a su estructura organizativa, que las configura como una fórmula de vanguardia, que se propone atraer, centralizar e invertir el ahorro dormido de capas de población que no se encuentran directamente relacionadas con el negocio y, por tanto, que no participan en él a través de las personalistas. Por otra, se consideran los motivos para su promoción por parte del Estado, su carácter privilegiado en una sociedad basada en el privilegio y las grandes líneas de su fun-

(vii) Realicé un acercamiento al tema —que ahora ha sido revisado y completado— en "Las compañías privilegiadas en la España del Antiguo Régimen, en Miguel Artola (ed. e int.), La economía española al final del Antiguo Régimen, v. IV, Madrid, 1.982, pp. 271-401.

cionamiento. Se intenta, así, buscar las razones de su fracaso en el marco de la economía y la política económica del siglo XVIII.

Sociedades personalistas y grandes compañías de capitales. No eran éstos los únicos modelos que se desarrollaron en el Antiguo Régimen español. Hubo una tercera fórmula, que buscaba ampliar el círculo de los participantes, es decir, incrementar las posibilidades de centralización del capital sin, por ello, tener que pasar por el costoso trámite de la autorización real. Fundamentalmente en el ramo del seguro y —al menos— en Barcelona y Cádiz se desarrollaron, en el último tercio del siglo XVIII, unas compañías comanditarias por acciones que incluían cláusula de limitación de responsabilidad, como se realizaba para la misma época en Inglaterra, ante el mismo problema (Equitable Trust). Son una fórmula de transición entre la sociedad personalista y la sociedad de capitales (cap. 3, puntos 1 y 2). En este aspecto interesan a este trabajo, porque en los inicios de la industrialización, en un momento en el que podían haber desarrollado un importante papel en el proceso de acumulación y centralización del capital, su creación fue sometida a los mismos trámites que la sociedad anónima (1.848-1.868).

La segunda parte tiene por objeto el análisis de la regulación del sistema capitalista en España en los términos que ya han sido señalados. El primer capítulo pretende presentar las soluciones adoptadas frente a los problemas que no podían resolverse en un marco de Antiguo Régimen y su definiti

va destrucción en las cuatro primeras décadas del siglo Fren
te a la amortización y vinculación de las tierras, liberali-
zación y seguridad de la propiedad. Frente al sistema de pro
ducción gremial, la libertad de oficios y de producción. Fren
te al control del mercado, el libre juego de oferta y deman-
da. Frente a la existencia de múltiples aduanas interiores,
traslación de éstas a las fronteras...

Otra de las cuestiones que no se pudieron resolver en el
siglo XVIII fue la codificación mercantil. El proceso de su
demanda, la promulgación de los Códigos (1.829 y 1.885) y sus
revisiones parlamentarias —en los aspectos que vengo rese-
ñando como obeejeto de mi estudio — se tratan en el capítulo
segundo. En él se intenta analizar la continuidad y la ruptu-
ra, las razones de la promulgación del Código bajo el reina-
do de Fernando VII y el largo proceso de su reforma, que no
culminó sino hasta 1.885.

En materia de sociedades, sin embargo, la libérrima regu-
lación del Código de 1.829 —como hipótesis apuntamos que fue
debida a la inexperiencia y al escaso desarrollo del siste-
ma— fue sustituida entre 1.848 y 1.868. La regulación de las
sociedades mercantiles y del mercado de capitales es el obje-
to del capítulo tercero.

La importancia de la sociedad anónima para el proceso de
desarrollo económico capitalista aparece con fuerza para el
historiador. Esta idea, sin embargo, no es tan evidente en
la sociedad española hasta el Bienio Progresista y, nos atre-
vemos a insinuar, quizá hasta 1.868. La concepción de la so-

ciudad anónima en los discursos moderado, progresista y demócrata se realiza en el apartado 1 de este capítulo.

La legislación actúa regulando el modo de constitución de las sociedades (3.2), delimitando su capacidad para la centralización de capital y la obtención de recursos (3.3), diseñando el modo de funcionamiento del mercado de capitales (3.4) y regulando las formas de protección —de los derechos de los accionistas y del público— y de control e inspección estatal (3.5).

Estos son los aspectos tratados en el capítulo tercero, que nos muestran la actuación que el Estado liberal llevó a cabo en este terreno. Nuestro análisis revela la existencia de una abundante legislación. El modelo teórico de estado liberal no intervencionista no existió en la práctica —y no sólo en España—. Nos ceñimos al problema que nos ocupa, dejando de lado el análisis de aspectos políticos y sociales que es necesario tener en cuenta para caracterizar de forma completa y exacta el Estado liberal.

En este capítulo, se sigue el desarrollo de la legislación y de los debates sobre estos temas para intentar caracterizar de una forma más completa las tres etapas que suponen: 1) la plenitud del Código de Comercio (1.829-1.848); 2) la legislación restrictiva sobre sociedades (1.848-1.868) unida a la fuerte promoción del sector financiero y de las compañías de ferrocarriles en el Bienio progresista y 3) la liberalización de la creación de sociedades anónimas (desde 1.868).

El último capítulo (49) quiere ilustrar el análisis anterior, al observar el ritmo de creación de sociedades anónimas entre 1.840 y 1.923. No pretende ser exhaustivo, pero sí ofrecer los suficientes datos como para que se pueda ver la incidencia de la legislación. Hasta qué punto la permisividad de la normativa entre 1.829 y 1.848 se tradujo en la constitución de sociedades y en qué sectores. Cómo influyeron las leyes de 1.848 y 1.856 y, finalmente, la respuesta a la definitiva liberalización de la constitución de sociedades de 1.869.

Evidentemente, el análisis es parcial y como tal debe ser contemplado. La situación económica del país, la estabilidad política, la estructura de clases, la población, el nivel de alfabetización y educación, el grado de desarrollo de la agricultura, el marco internacional, la posibilidad de entrada de capital extranjero, la legislación de protección a la industria, la política arancelaria, la situación deficitaria del Estado... son factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar el capitalismo español en el siglo XIX y de buscar las razones sobre su peculiar evolución. Aquí sólo se ha tratado de analizar la construcción del sistema en los parámetros indicados, el marco de desenvolvimiento de la centralización de capital y de sus posibilidades de negociación y el control del Estado sobre el mismo.

El estudio concluye en 1.923, con la instauración de la Dictadura de Primo de Rivera. La historia económica, tradi-

cionalmente, prolonga el siglo XIX hasta 1.914, fecha en la que la Primera Guerra Mundial y la posición neutral de España supuso un reajuste de nuestra industria y nuestro comercio. Desde el punto de vista de la legislación, otro momento que nos aparecía indicado para finalizar nuestro trabajo era 1.885, con la promulgación del Código de Comercio. Se ha preferido, sin embargo, prolongarlo, para observar su desarrollo a lo largo de la Restauración, y terminar nuestro análisis con la definitiva ruptura de este sistema, que dió paso a un sensible cambio en la política económica, con un reforzamiento del intervencionismo que no desaparecerá con la dictadura primorriverista.

La elaboración de esta Tesis se ha basado, fundamentalmente, en fuentes legislativas. Tanto los Decretos de las Cortes (1.810-1.814, 1.820-1.823) como los de Fernando VII (1.814-1.820, 1.823-1.833), como los de Isabel II. La publicación comenzó a llamarse Colección Legislativa de España desde 1.846. En ella se contienen las leyes, Reales Decretos y Reales Ordenes de carácter general.

Para el análisis de los debates parlamentarios, de los proyectos y proposiciones de ley así como de las interpelaciones y de las informaciones parlamentarias, se ha realizado, asimismo, un vaciado sistemático de los Diarios de las Sesiones de las Cortes del período 1.808-1.923.

La legislación del Antiguo Régimen está dispersa y sin sistematizar. Se han utilizado los grandes corpus (Partidas,

Recopilaciones), así como las Ordenanzas consulares y la múltiple normativa particular en materia de compañías que se encuentra, fundamentalmente, en el Archivo Histórico Nacional (secciones, Consejos, Hacienda y Estado), en el de Simancas (sección de Hacienda) y en el de Indias (sección Indiferente General).

Las compañías, asimismo, generan información de interés. Aquí se ha utilizado, para el Antiguo Régimen, una muestra de escrituras, conservadas en los Archivos de Protocolos de Barcelona, Cádiz y Madrid, así como en el Archivo del Consulado de Bilbao. Respecto a las privilegiadas, se ha manejado, asimismo, la información contenida en los lugares citados en el párrafo anterior.

En los siglos XIX y XX, las compañías están obligadas a la publicación de sus escrituras, memorias y balances (v. parte II, cap. 3, punto 3.5). Su análisis no era un objetivo de este estudio, por lo que esta información no ha sido utilizada. Por otra parte, sus características y volumen requieren un tratamiento específico que, para algunos sectores ha sido o está siendo realizado por diferentes autores y que permitirá, en un futuro que deseamos no muy lejano, la presentación de datos de conjunto de la evolución de los negocios de las sociedades.

Las estadísticas oficiales son la base en la que se sustenta el capítulo 4 de la segunda parte. Los datos sobre las compañías (número, tipo, volumen de capital, emisión de acciones y obligaciones...) son extraordinariamente comple-

tos entre 1.858 y 1.868. Desgraciadamente, la publicación des aparece, excepto algunas publicaciones dispersas hasta que en 1.915 se reanuda la publicación del Anuario Estadístico de España, esta vez sin interrupción. Los datos que contiene respecto a las sociedades —en el período estudiado— son mucho más incompletos que en el período 1.858-1.868 y se limitan a reproducir la estadística del Registro Mercantil (creado en 1.885). Esperamos que la labor de vaciado sistemático de los mismos realizada por diferentes autores —de los que no me excluyo— nos dé pronto una serie pormenorizada del libro de sociedades de esta entidad. La pobreza de los datos estadísticos oficiales se revela en el hecho de que, para la época estudiada, sean más completos los incluidos en publicaciones particulares (v. cap. 4 de la parte segunda).

Por último, en esta somera enumeración de las fuentes utilizadas, hay que reseñar la utilidad de los Boletines de cotizaciones de Bolsa, de Madrid y Barcelona.

PARTE I

LAS COMPAÑIAS MERCANTILES
EN LA ESPAÑA DEL ANTIGUO REGIMEN

CAPITULO 1
LA LEGISLACION GENERAL SOBRE COMPAÑIAS
EN LA ESPAÑA DEL ANTIGUO REGIMEN

1.1.- Introducción

La compañía, en sus orígenes, no es una forma de asociación exclusivamente mercantil dado que, en ocasiones, los compañeros —o individuos que la forman— no son mercaderes de oficio (1) ni el objeto de su unión es alguna clase de comercio. Puede, incluso, que ni siquiera se forme con una intención directa de lucro, aunque de forma indirecta produzca beneficios. Este es el caso de las primitivas comunidades de bienes de origen natural —germanitas o hermandad— o pactado —fraternitas artificial— que se organizaban para dirigir o explotar en común iglesias, molinos, tierras, etc., sobre la base de una propiedad conjunta. Es frecuente, así, el mantenimiento de la unidad de una herencia mediante su explotación por una compañía formada por un grupo de herederos. En España, la existencia de estas fraternidades esta avalada por la documentación desde el siglo XII (2).

(1) Mercader de oficio, según la literatura de la época, es el que realiza la compraventa, regularmente. Juan Hevia Bolaños, Curia Philipica, parte II, lib. I, cap. I.

(2) v. Ramón Prieto Bance, "Un contrato de sociedad del siglo XII", Revista de Derecho Mercantil, núm. 27, 1.950, pp. 347-353; E. de Hinojosa, "La fraternidad artificial en España", en obras, I, Madrid, 1.948, pp. 257-278; José Martínez Gijón, "La commenda en el Derecho español", Anuario de Historia del Derecho español, 1.964 y 1.966, cuya segunda parte esta dedicada a la commenda mercantil; finalmente, citaremos un posterior estudio del mismo autor, La compañía mercantil en Castilla hasta las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737. Legislación y doctrina, Publicaciones de la Universidad de Sevilla 1.979, como una excelente aproximación al tema desde la perspectiva de la Historia del Derecho, v. para el punto citado, pp. 21 y 27.

Será, sin embargo, en el campo mercantil, donde el contrato de compañía alcance su completo desarrollo, ya que en este ámbito destaca en su doble carácter de acto preparatorio del comercio o como forma de realizarlo. Así impulsa este sector de actividad que sin esta forma de asociación vería dificultado su crecimiento. La compañía, como forma de asociación mercantil, es casi tan antigua como la práctica comercial misma. En efecto, cuando esta actividad sobrepasa el estadio del simple trueque y crecen las dimensiones de las transacciones así como las del área en que éstas se realizan, se revela como conveniente, y aún diríamos, necesaria, una asociación que permita abordar empresas que superen la capacidad individual y, al tiempo, dividir el riesgo creciente entre todos los participantes en la misma.

Esta es la razón por la que el origen de la compañía mercantil está asociado a actividades en las que concurren las características de lejanía y peligro, que son sinónimos casi siempre hasta la época contemporánea y que añadían complejidad a las empresas. Así, en el comercio marítimo era frecuente la commenda, en la que el comendante aportaba el dinero o las mercancías y permanecía en el punto de partida, mientras que el comendatario se comprometía a efectuar la operación comercial y era el que viajaba con el barco (3). La figura paralela en comercio terrestre eran las sociedades-caravanas (4),

(3) cfr. Martínez Gijón, La commenda..., pp. 385 a 388, que cita contratos de este tipo del siglo XII español.

(4) Martínez Gijón, La Compañía, p. 30; Cfr. Fuero de Cuenca, 640, (XXV, 2).

constituidas para mutua protección de los mercaderes, que para efectuar sus negociaciones debían atravesar extensos territorios, en ocasiones enemigos.

La compañía mercantil aparece y se desarrolla para disminuir los riesgos financieros y para incrementar las posibilidades de lucro. Lo primero, lo logra al difundir entre los socios las pérdidas; lo segundo, porque el aumento del volumen de capital centralizado genera un incremento en las dimensiones del objeto empresarial, que inicialmente es más que proporcional.

La asociación mercantil, por tanto, se reveló pronto necesaria para que el comercio saliera de un estrecho círculo de trueque o de un marco de inseguridad insoportable. Las empresas de comercio fueron creciendo y llenando las rutas marítimas a medida que se conocían; a ellas asociadas, pronto también se desarrollaron en el campo del seguro, lo que permitió un mayor crecimiento de la asunción de riesgos y, con ellos, de las propias empresas mercantiles.

La demanda de capital comercial creció de forma espectacular a raíz de los descubrimientos de la Edad Moderna que, a su vez, abrieron las puertas a nuevas fuentes de acumulación.

Esto motivó la peculiar relación entre los Estados y sus comerciantes que dió lugar a una política económica a la que está asociada una serie de doctrinas, a las que el estado actual de conocimientos da el nombre de mercantilismo. Es este estado de cosas el que nos explica la aparición de una forma peculiar de Compañías: Las Privilegiadas. Su desarrollo será

considerado en detalle en estas páginas. Aludir aquí a ellas no tiene más objeto que señalar que la normal evolución desde la sociedad personalista (colectiva y comanditaria simple) a la asociación capital (anónima) fue frenada en España por la intervención del poder público. La razón es que éste, desde el siglo XVII se reservó la concesión del carácter de anónimas a muy determinadas y escasas empresas protegidas.

La única asociación de capital posible en la España de los siglos XVII y XVIII era la Compañía Privilegiada que se creó, a imitación del modelo anglo-holandés, para el gran comercio marítimo. Fue, por ello, por lo que la burguesía mercantil española —y precisamente a raíz de la remodelación del comercio colonial en la segunda mitad del s. XVIII— desarrolló una peculiar fórmula mixta: la comanditaria por acciones. En estas compañías se mantenía una apariencia personalista y una ilimitación de la responsabilidad que permitían su existencia legal; pero, de hecho, funcionaban como anónimas.

La compañía mercantil tuvo un desarrollo mucho menor y posterior en la agricultura y la manufactura que en el comercio y las finanzas. Lo tardío de la revolución en sus técnicas productivas y la forma de organización de las empresas son factores que, interrelacionados, explican el escaso papel económico del excedente generado en estos sectores y su escasa importancia como demandantes de capital.

En la agricultura, la forma de propiedad de la tierra determinaba su forma de explotación que, a su vez, ralentizaba

el crecimiento del excedente. Por otra parte, éste, en su mayor parte rentas señoriales, no se reinvertía en la tierra, que no era explotada directamente por su titular y, mucho menos, en la producción manufacturera. La incorporación del ahorro nobiliario al mercado de capitales tuvo lugar —y tardíamente— unida a la especulación de granos, único gran comercio agrícola que ofrecía posibilidades de inversión altamente lucrativa. El arrendatario y el propietario libre de la tierra no generaron un volumen de demanda suficiente ni una organización de capital a su servicio lo suficientemente grandes como para alterar la imagen descrita. El primero, por factores institucionales: era el explotador real de la tierra pero no su titular; faltaban garantías jurídicas, la "seguridad en la propiedad" reclamada por los fisiócratas, para que fuera un agente que encauzara los capitales hacia la tierra. El propietario libre de la tierra, por su escasa significación económica en el conjunto, a pesar de su atractivo como excepción.

En la manufactura, la organización gremial frenó radicalmente la innovación y la demanda de capital. Del lado de la oferta, encontramos que el retraso y la rigidez del sector limitan el beneficio a pesar de la imagen aparente que ofrece el precio de monopolio.

Fue en el comercio, por tanto, en los seguros y, evidentemente, en el sector financiero (Bancos, arrendamiento de rentas...) donde florecieron las compañías en primer lugar. La importancia del capital en este tipo de empresas estaba

en la base de las mismas y así, fueron las que en el Antiguo Régimen, realmente, alimentaron el mercado de capitales si bien, como veremos, escasamente, ya que estaban limitados por la escasez de posibilidades ahorradoras de la mayoría de la población y por el rechazo doctrinal a la actividad inversora muy lentamente vencido. Todo ello ofrece una inicial explicación al hecho del mantenimiento de una fuerte base personalista en la organización de las compañías hasta, al menos, el siglo XVIII.

La reflexión sobre la crisis del siglo XVII y el retraso de la producción manufacturera española así como la influencia francesa que se hace más evidente a partir del reinado de Felipe V, provocaron un cambio en la política económica. Uno de sus puntos fundamentales es la preocupación por la producción y su fomento a través del intervencionismo en el sector secundario. Fruto de esta política fue la creación de Reales Fábricas y de Compañías privilegiadas industriales. Pienso que las raíces teóricas de este comportamiento de los Borbones españoles y sus ministros no se encuentra únicamente en el colbertismo, aunque también —y quizá fundamentalmente— en él; esta política económica tiene una base teórica indudable en los mercantilistas españoles cuyos escritos ofrecen aún un gran campo de investigación, aunque han sido objeto de considerable atención en los últimos años (5).

(5) Tras la obra clásica de José Larraz López, La época del mercantilismo en Castilla (1.500-1.700), Madrid, 1.943, son muchos los estudios de este período y sobre todo, del pensamiento económico. Citemos sólo las reflexiones de Pierre Vilar que invitaban a una

De esta forma, el siglo XVIII español conoció la extensión de la fórmula de la Compañía privilegiada al campo de la producción manufacturera. Fue un intento de promocionar este campo con un mecanismo que se había revelado fructífero en el comercio marítimo, especialmente en Holanda e Inglaterra. La iniciativa fracasó en su intento de fomentar la producción nacional, en el de atraer a dichas empresas el ahorro inactivo y, por tanto, en generar una acumulación de capital que se reinvirtiera en un sector que, así, no salió de su atraso. Todo ello será discutido y contemplado en su complejidad. Recordemos ahora que, aparte las consecuencias señaladas, el fomento de la Privilegiada en la producción tuvo otra fundamental: limitó la posibilidad de formar asociaciones de capital a las empresas autorizadas y protegidas por el Estado.

La legislación sobre compañías es considerada aquí, por tanto, bajo este doble aspecto. Por una parte, respondía a las exigencias de la propia evolución mercantil y, desde las Partidas hasta 1.829, se limitó a legitimar la propia práctica; por otra, en el crítico siglo XVIII, intervino positivamente, separando dos campos distintos y reservándose el control de uno de ellos. Las asociaciones personalistas se

relectura ("Los primitivos españoles del pensamiento económico. Cuantitativismo y bullosismo", Crecimiento y desarrollo, Barcelona, 1.964, pp. 134-162; caps. XVII y XVIII de Oro y moneda en la Historia, 1.450-1.920, Barcelona, 1.969...) y la visión de conjunto de Marjorie Grice Hutchinson, Early economic thought in Spain 1.117-1.740). Las ediciones críticas de nuestros pensadores son la base inexcusable para la reconsideración del tema. Aunque están aumentando en los últimos años, quedan textos por sacar a la luz.

siguieron desarrollando muy libremente en un marco de legislación general emanada de los comerciantes y sancionada por el Monarca (Ordenanzas Consulares). Las de capital, por el contrario, vieron su existencia legal limitada a una muy difícil obtención de unas normas particularizadas, que suponían un muy estricto control por parte del Poder Público.

En estas páginas vamos a analizar tanto la legislación común como la particular, pues el conocimiento del marco legal nos permitirá realizar con mayor rigor el análisis de la evolución de las formas de asociación de capital en la España del Antiguo Régimen. El conocimiento de la historia de las mismas en el siglo XVIII —privilegiadas y comanditarias por acciones—, con sus indudables ventajas teóricas y sus fracasos reales, se me revela cada vez más necesario para explicar la peculiar evolución de la anónima en la España del siglo XIX y, con ella, del capitalismo como modelo económico.

1.2.- La constitución de la Compañía Mercantil.

1.2.1.- Definición.

Es de destacar el escaso volumen de legislación española del Antiguo Régimen sobre la descripción formal de la

compañía. En el siglo XVII todavía se utiliza la clásica de finición de las Partidas (6). Al comienzo del siglo XIX, Gutiérrez, en su Febrero Reformado, reproduce la fórmula de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737, único cuerpo dispositivo mercantil que ofrece una definición de contrato de compañía distinta, si bien ligeramente, a la de recopilación alfonsina (7).

Encontramos dos razones principales para explicar este escaso desarrollo legislativo. En primer lugar, la inalterabilidad de los principios fundamentales que constituyen una compañía, definidos desde los albores de esta forma organizativa: existencia de personas que aportan un caudal que pasa a engrosar un fondo común que se utiliza de forma unitaria; la segunda razón estribaría en las propias características de lo mercantil, en el retraso que, en éste más que en otros campos, tiene la legislación respecto a la realidad que pretende regular. Es evidente que el desarrollo de las formas de compañía entre los siglos XIII y XVII fue muy superior al de su definición legislativa. A este desajuste que, en mayor o menor medida, encontramos en todas las ramas del derecho, se añade uno particular del mercantil. La ausencia de legislación general fue suplida, en el Antiguo Régimen, por las normas creadas, a partir de la experiencia,

(6) v., por ejemplo, Hevia Bolaños, Curia Philipica, ed. de Madrid, 1.825, II parte, lib. 1, cap. 1.

(7) Librería de escribanos, abogados y jueces, que compuso D. Josef febrero (...) y ha reformado de nuevo (...) el licenciado D. José Marcos Gutierrez..., Madrid, Oficina de los tres Garcías y cía, 1.807, tomo II, cap. 23.

por los propios mercaderes organizados en Consualdos. Estos, a su vez, eran los encargados de su aplicación (8). De ahí su carácter eminentemente práctico y la mayor proporción de las reglas dedicadas a los conflictos emanados del desarrollo del negocio que las referentes a una teorización de sus figuras.

Esto explica que el Libro del Consulado de Mar, s. XIV, no incluya ninguna definición de compañía, contrato a través del cual se realizan la mayor parte de las actividades que regulan sus capítulos, tales como los fletamentos de naos, seguros, etc., (9). Lo mismo podemos decir de las ordenanzas consulares de los siglos XV a XVII (Burgos, Bilbao, Sevilla, etc...).

Por todo ello se observará que, en estas páginas, nos basamos en las definiciones dadas en las Partidas, cuyas leyes generales no serán derogadas y sólo perfeccionadas en el siglo XVIII, en el aspecto que ahora nos interesa, por las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737. La ejemplaridad de estas ordenanzas, sobre todo en el campo que estudiamos, hace que el resto de los tribunales consulares las imiten y merezcan ser incluídas en la Novísima Recopilación (ley V, tit. XIX, lib. IX), al menos en una gran parte de su capítulo 10, que es el que trata específicamente sobre

(8) Por ejemplo, sobre este aspecto particular de la jurisdicción mercantil, Gacto, La Jurisdicción mercantil en España, Sevilla, 1.971.

(9) v., por ejemplo, los capítulos, núms. 57 a 61, que tratan sobre la construcción de un barco por parte de un patrón "que quiera hacer partes en la empresa", o los números 214 y ss sobre la encomienda.

compañías.

La definición de compañía que permanece vigente hasta 1.737 es la siguiente:

"Compañía es ayuntamiento de dos omes, o de más, que es fecho con intención de ganar algo de so uno, ayuntándose los unos con los otros. E nasce ende gran pro, quando se face entre algunos omes buenos, e leales: ca se acorren los vnos a los otros bien assi como si fuesen hermanos. E facese la compañía con consentimiento, e con otorgamiento de los que quieren ser compañeros" (10).

Para el legislador, pues, existe compañía cuando se unen libremente un mínimo de dos hombres, máximo sin determinar, con un objetivo común, que es el de obtener una ganancia. Se introduce un argumento moral cuando se alaba la existencia de "omes buenos e leales" para la constitución de una compañía; estima el legislador que la posesión de estas cualidades hará que los compañeros observen, en el seno de su asociación, el comportamiento que se presume idóneo para la misma: el de hermanos. En 1.807 la doctrina continuaba describiendo esta imagen; dicho año, el Febrero renovado..., al comentar las características de la compañía, afirma: "pues con especie de confraternidad que es..." (11).

Esta carga moral, por la que la buena voluntad, la palabra, el buen nombre, la religiosidad incluso, cuentan tanto a la hora de buscar compañeros como las características me-

(10) Part. 5, tit, X, ley I.

(11) Gutierrez, Librería de escribanos..., tomo II, p. 160.

ramente financieras o la habilidad comercial, estará presente en la legislación general sobre compañías durante todo el Antiguo Régimen español; en el siglo XVIII las ordenanzas particulares de las compañías privilegiadas despersonalizan las relaciones entre los socios con la introducción de la responsabilidad limitada, lo que no adquirirá rango de ley general hasta la promulgación del primer Código de Comercio (1.829) con su clásica tipificación de las compañías en colectivas, comanditarias y anónimas. La tradición personalista sobrevivirá, sin embargo, a la legislación liberal, lo que se puede observar en la propaganda de las sociedades anónimas de buena parte del siglo XIX, basada en la garantía moral de sus principales accionistas más que en la rentabilidad que, por sí mismos, ofrezcan sus negocios (cosa que, por otra parte, se supone viene dada por la presencia de aquéllos) (12). Para el siglo XVIII, el análisis del funcionamiento de las compañías privilegiadas, nos muestra los problemas que les acarrea dar la mayor importancia a contar con un organismo directivo compuesto por hombres de gran prestigio, olvidando la búsqueda de la capacidad organizativa industrial y financiera.

Esta concepción de las relaciones mercantiles es la que hace que el "estilo de mercaderes" se identifique con un método de trabajo en el que imperan "la verdad sabida y la buena fe guardada". Esta frase se repite con mucha frecuen-

(12) v. infra, caps. 3 y 4, parte II.

cia en los textos, se esgrimía como argumento en los pleitos y sigue formulada en las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737 (13). Este corpus marca el único hito importante entre las Partidas y el Código de Comercio de 1.829, en el aspecto que estudiamos. La definición que aquellas Ordenanzas nos brindan es la siguiente:

"Compañía, en términos de comercio, es un contrato, o convenio que se hace, o puede hacerse, entre dos, o más personas, en virtud del cual se obligan recíprocamente por cierto tiempo, y debaxo de ciertas condiciones, y pactos, a hacer y proseguir juntamente varios negocios, por cuenta y riesgo común..." (14).

Esta definición se mantendrá inalterada en las ordenanzas consulares posteriores a 1.737, que se inspiran en las de Bilbao. Su importancia estriba en que es la primera vez que se contempla en unas ordenanzas de este tipo la existencia de esta figura —la cual, sin embargo, regulaba de hecho— y se delimita con claridad; por otra parte, también es la primera ocasión en que se determina la compañía en un sentido estrictamente mercantil. Respecto a las Partidas, observamos que la definición no cambió sustancialmente, si bien se tecnificó: se sustituyeron algunas palabras por otras: "ayuntamiento" por "contrato", "consentimiento e otorgamiento" por "pacto" y se excluyó en ella la carga moral de la anterior, si bien, en la práctica, como hemos apunta-

(13) Ordenanzas de Bilbao de 1.737, cap. I, nº. 4, en Novísima Recopilación, lib. IX, tit. II, ley V.

(14) Ibidem, cap. X, núm. 4.

do, no desaparecerá.

1.2.2.- Clases de compañías.

Las Partidas contemplan dos clases de compañías, aunque su titulación es obra del glosador:

"que todas las cosas que han quando facen la compañía, en las que ganaren en adelante, sean comunales" (sociedad universal).

"quando la facen sobre vna cosa señaladamente, como en vender vino, o paño, o otra cosa semejante" (sociedad singular) (15).

Se ha visto como la Ley I, tit. X, Partida 5, incluía en la misma definición a toda clase de compañías, mercantiles o no. Es en la Ley III del mismo título, que acabamos de citar, donde se realiza una primera distinción; en ella, la sociedad universal sería asimilable a una "comunidad de bienes" (16) mientras que podemos considerar a la sociedad singular como compañía mercantil propiamente dicha: sin embargo, no existe ningún texto legal hasta el siglo XIX —Código de Comercio— que clasifique este último tipo de compañías, que es el que interesa a estas páginas. Sin embargo, la práctica comercial ya las había dividido en tres grupos a finales del siglo XVIII, y así lo consigna Gutiérrez, en sus adiciones a Febrero cuando, sobre las Partidas, nos pre

(15) Part. 5, tit. X, ley III.

(16) v., para esta figura, Martínez Gijón, La compañía..., pp. 52 a 59.

senta "otra división, cuyo conocimiento es mucho más necesario y útil por ser muy frecuente en el comercio" (17). Tal es la que distingue compañía colectiva, comanditaria y anónima, según las siguientes definiciones.

"La compañía colectiva o general es la que se hace entre dos o más personas que se emplean igualmente en los negocios de ella, y que hacen el comercio o tráfico baxo nombres colectivos, como los señores N. N. y cía" (18).

"La compañía en comanditá es la que se contrae entre dos sujetos, de los cuales uno solo pone en ella sus fondos, y el otro su talento o industria, de suerte que quien únicamente pone su dinero, no hace manifiestamente ninguna función ni acto de socio; y el otro, cuyo nombre solo aparece, está encargado de todos los negocios y operaciones que son el objeto de la compañía; si bien quien ha suministrado el dinero y se llama el comanditá, conserva una preponderancia conocida en la dirección de todos los negocios que el otro emprende" (19).

La definición de estas dos clases de compañías es similar a la realizada en el Código de Comercio. Pero no se contempla la existencia de las comanditas con su capital dividido —en todo o en parte— en acciones. Y ello, a pesar de que en la segunda mitad del siglo XVIII existían comanditarias por acciones con un número de socios que oscilaba entre una y tres decenas (20).

(17) Gutiérrez, Librería de escribanos..., tomo II, cap. XXIII, núm. 21.

(18) Ibidem. El subrayado es mío.

(19) Ibidem, núm. 20. El subrayado es mío.

(20) v. infra., pp. 276-348

La llamada anónima o incógnita en este texto no coincide con la moderna acepción del término, sino que se identifica con la cuenta en participación, sin nombre conocido, cuya existencia es secreta, que se contrae mediante contrato privado, oral o escrito, entre los individuos que la forman. Cada uno de estos participantes comercia en particular, y al finalizar el tiempo convenido se rinden recíprocamente cuentas (21).

Es decir, lo que se entiende por sociedad anónima desde la codificación comercial de 1.829, con su principal característica, la responsabilidad limitada para todos sus socios no ha tenido status legal que permita su libre existencia generalizada hasta esta fecha. Una compañía de este tipo sólo podía formarse mediante la constitución de una privilegiada, de concesión especial; no tenía, por tanto, una definición general, sino que estaba sujeta a legislación específica.

1.2.3.- Modo de constitución.

Dentro de las no privilegiadas o comunes, se encuentran las compañías mercantiles que han quedado definidas anteriormente bajo los nombres de colectivas, comanditarias y anónimas. Dado el carácter anómalo que estas últimas tenían en el Antiguo Régimen y su constitución secreta, cuyo único

(21) Gutiérrez, Librería de escribanos, tomo II, cap. XXIII, núm. 23.

requisito formal es el acuerdo privado, verbal o escrito de los socios, obviamos su análisis en estas páginas, limitándonos a las compañías colectivas y comanditarias.

Si bien el contrato de compañía es particular, entre los socios que la forman, la trascendencia de sus negociaciones, que implican en ellas a sujetos ajenos a la asociación, hace que el Estado intervenga en la regulación de dichos contratos, exigiendo ciertos requisitos para legalizar su existencia.

a) El régimen de las Partidas: la Carta de Compañía.— Según lo estipulado en las Partidas —y es norma que permanece vigente a lo largo de todo el período estudiado—, todo hombre capaz y mayor de 14 años podía formar compañía. No obstante, hasta los 25 años eran considerados menores de edad y contaban con el derecho de apelar al juez del lugar para ser rescatados de la obligación de cumplir un contrato de compañía en el caso de que creyeran que les perjudicaba (22).

Cualquiera, pues, que cumpliera esta mínima condición, podía reunirse en una compañía para cuya constitución no era necesario que mediara documento alguno ya que, si éste no existía, se entendía formada según la costumbre de la región (23). No obstante, lo normal era que se redactara una

(22) Part. 5, tít. X, ley I. Cfr. Gutiérrez, Librería de escribanos, tomo II, cap. XXIII, núm. 21.

(23) Cfr. glosa núm. 4 de Gregorio López a la ley III, tít. X, Part. 5 y Hevia Bolaños, Curia..., lib. I, cap. III, núm. 14.; Casariego, Historia del Derecho y de las

carta de compañía que formalizara el contrato entre compañeros. A este respecto, las Partidas ofrecían un modelo de redacción de tal documento; según el texto aludido, la carta de compañía debía contener los siguientes extremos: objeto para el que se constituye, el nombre de los socios que la forman y el capital que aporta cada uno, la duración del contrato y el modo de realizar el reparto de pérdidas y ganancias:

"Ley LXXVIII.- Como deve ser fecha la Carta de la compañía, que algunos quieren fazer.

Compañías fazen los omes vnos con otros, para ganar algo de consuno. E la carta de la compañía deuer ser fecha en esta guisa. Se pan quantos esta carta vieren, como Pedro de Rochela, e don Arberat, mercaderes de Sevilla, fizieron entre sí compañía por diez años, para comprar paños de color, de consuno, e venderlos a retajo en la rua de los Francos de Sevilla; e para fazer todas aquellas cosas que pertenescen a esta mercadería; en la qual compañía metió cada uno dellos mil maravedis Alfonsís, con los quales prometieron entre sí el vno al otro, de fazer esta mercadería bien e lealmente, e de compartir entre sí toda ganancia, o daño, o pérdida que ouiessen por razón desta mercadería. E todas estas cosas so bredichas, e cada vna dellas prometieron el vn Mercader al otro al fazer, e de guardar, assi como dichas son, e non fazer, ni venir contra ninguna dellas, so pena de mil maravedis; la qual pena quier sea pagada, o non, siempre sea firme la postura de la compañía;

Instrucciones marítimas del mundo hispánico, Madrid, 1.947, doc. núm. 5, p. 283, ofrece un ejemplo de compañía no formalizada mediante escritura en 1.678. Se trata de la Compañía que para al caza de la ballena tenía el gremio de mareantes y navegantes de Sta. Catalina de Gijón: "La compañía para la caza de la ballena se entiende estar hecha de conformidad de esta capitulación, sin que sea necesario renovarse ni pactarse por escritura ni otro contrato por excusar los gastos a dicha comunidad". Martínez Gijón, La Compañía..., p. 84, observa que en esta misma afirmación justificativa prueba, en sentido contrario, una práctica favorable a la formalización del contrato.

obligándose el vno al otro a sí mismo, e a sus herederos; e renunciando, e quitándose de toda ley, e de todo fuero" (24).

Este documento cumplía el papel de garantizar el comportamiento de los socios en sus negociaciones; pero no adquiría publicidad más que en caso de pleitos, entre ellos o con terceros. En ese momento podía deparar sorpresas acerca del capital y la solvencia de la compañía. Ofrecer una solución a este problema que, según los testimonios de la época, se planteaban con frecuencia, fue la razón fundamental que llevó a un cambio de régimen, en el que la escrituración y publicación de la carta de compañía se convirtió en obligatoria. Antes, sin embargo, de describir esta nueva etapa, nos detendremos en la consideración de los tipos de información que contiene la carta que, como modélica, se incluye en el texto de las Partidas, antes citado.

En primer lugar, el objeto de una compañía, para que ésta se considere válida, ha de ser lícito. No es nuestro propósito examinar el debate doctrinal que se desarrolló, tanto en la época medieval como moderna, acerca de los objetos legítimos del contrato de compañía, ni la no menos compleja discusión acerca de la licitud del propio contrato, ya que se produjeron a un nivel elevado de lo jurídico e incluso en el plano de lo teológico (25). Tales debates tenían lugar

(24) Part. 3, tít. XVIII, ley LXXVIII, que se incluye en Nueva Recopilación, lib. X, tít. XXIII, ley I.

(25) Cfr., por ejemplo, Martínez Gijón, La compañía, pp. 33 a 79.

generalmente al margen de la práctica mercantil, que necesitaba incrementar el número y la complejidad de sus operaciones, incluida la compañía. No obstante, es indudable que influyeron negativamente en el crecimiento del tráfico ya que pretendían frenar la inversión y el número de inversores. Es imposible cuantificar en qué medida se logró; es cierto que, con los siglos, la realidad se impuso; pero no lo es menos que se frenó la entrada de las rentas de la tierra en el ciclo productivo, convirtiéndose así en ahorro dormido una fuente de acumulación fundamental en el Antiguo Régimen.

El texto que acabamos de citar daba muestras de un pragmatismo del que ya hacía gala el escolasticismo de la época, que dedicaba parte de su especulación teórica a la tarea de demostrar la licitud de los contratos y del lucro bajo ciertas reglas. De este modo, las Partidas admitían la reunión en compañía mercantil y el lucro como su fin. El mismo corpus, en el estilo mencionado, no ofrecía una definición concreta que estableciera una línea de demarcación general entre lo lícito y lo ilícito, que permitiera conocer los derechos y resolver los conflictos. Proporcionaba únicamente una ennumeración ejemplar que, sin embargo, hasta 1.829 no fue renovada o sustituida por otra que la perfeccionara. Esto fue debido, a nuestro juicio, a que la licitud del objeto de la compañía perdía importancia como punto que hubiera de ser delimitado en la legislación mercantil. Su definición no tenía por qué ser distinta de la marcada por el resto de las ramas del derecho, tal y como, incluso, deja entrever

el texto de las Partidas y que reproducimos a continuación. La insistencia en este punto y su peculiar redacción puede ser debida a la intencionalidad moral de las Partidas en el aspecto "de lo mercantil", característica a la que ya hemos aludido y que se perdió paulatinamente con el desarrollo de la actividad comercial:

"facer se puede la compañía, sobre las cosas guisadas, e derechas; assi como en comprar, o en vender, o en camiar, e arrendar e logar, e en las otras cosas semejantes destas, en que pueden los omes ganar derechamente. Mas sobre cosas desaguissadas nonla pueden facer, ni deuen; así como para furtar, o robar o matar, o dar a logro: nin facer otra cosa ninguna semejante destas, que fuesse mala, e desaguissada, e contra buenas costumbres. E la compañía que fuesse fecha sobre tales cosas como estas, non deue valer; nin puede demandar ninguna cosa uno a otro, por razón de tan compañía" (26).

No hay, sin embargo, ninguna disposición en las Partidas, o fuera de ellas, en la etapa que consideramos, que indique cual es el mínimo de capital que se considera necesario para que la compañía se constituya ni, desde luego, sobre la parte de capital a desembolsar previamente del total prometido por cada uno de los socios. Este punto esencial, motivo de algunas quiebras por insolvencia de los compañeros (no olvidemos que en estos momentos la responsabilidad era ilimitada), no será contemplada de manera objetiva por la legislación hasta mediados del siglo XIX cuando en la ley de sociedades anónimas de 1.848 se hable de un "capital proporcional-

(26) Part. 5, tit. X, ley II.

do al objeto de la compañía" (27).

La duración de la compañía podía ser fijada en función de un objeto a conseguir o negociación determinada a realizar. Cuando este extremo no se regulaba, se entendía que el contrato se desharía a la muerte —natural o civil— de uno de los compañeros, siendo necesario, para su continuación, la realización de un nuevo contrato, con los mismos requisitos que si de una compañía nueva se tratara. No obstante, al referirse a este tema, Gregorio López, en su glosa a las Partidas contemplaba: la posibilidad de que la compañía continuara tácitamente —igual que se pudo constituir de esta manera— si los socios que permanecían vivos seguían con la negociación del mismo modo que ésta se venía realizando antes de la muerte acaecida. La absoluta falta de regulación del tema se demuestra en que este comentario, sin nuevas adiciones, permaneció en los tratadistas del siglo XVII y XVIII (28).

No era legítimo, siempre según el texto alfonsino, que el heredero del compañero desaparecido ocupara su lugar. La única excepción a esta regla se producía cuando "la compañía fue sse sobre arrendamiento de algunas cosas del Rey, o del común concejo" (29). De nuevo nos encontramos ante un texto no derogado ni contradicho por ninguna ordenanza consular poste

(27) Efr. ley 17 de febrero de 1.848, tratada en el capítulo 3, parte II.

(28) Part. 5, tít. X, ley X y glosa 1 a la misma de Gregorio López. Cfr. asimismo, Hevia Bolaños, Curia, lib. 1, cap. III, núm. 44 y Gutiérrez, Librería de Escribanos... tomo II, cap. XXIII, núm. 3, § 1.

(29) Part. 5, tít. X, ley I. Destaca la mayor facilidad que había en este tema para formar compañías.

rior, consecuencia de la base personalista de las compañías en la época que nos ocupa, en las que, tal y como destaca un comentarista de las Partidas, el contrato de sociedad supone la confianza recíproca la cual no pasa siempre a los herederos (30). Ni siquiera las tardías compañías comanditarias por acciones, cuya figura no está contemplada explícitamente en la legislación, van a tener un comportamiento muy distinto, ya que la Junta General de Accionistas se solía reservar el derecho de admisión del heredero que deseara convertirse en nuevo socio, y sólo lo aceptaba tras haberse comprometido éste en escritura pública a acatar las reglas de la compañía (31).

Hemos visto cómo el modelo de Carta de Compañía que señala el texto de las Partidas contiene un pacto de multa pecuniaria para aquel socio que quebrante el contrato. Sin embargo, como señala el glosador, no se acostumbra a pactar esta pena.

b) El régimen de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao: la escritura pública y el registro.— Las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737 convirtieron en un acto obligatorio la formalización por escrito, con categoría de instrumen

(30) Cfr. nota (a) a la Part. 5, tít. X, ley I, en la ed. de López de Iovar, Códigos españoles concordados y anotados, Madrid, tomo III, 1.848 y Gutierrez, Librería de Escribanos, tomo II, p. 164: "Ninguno de los socios puede sin consentimiento del otro donar, vender ni transpasar a un extraño el derecho que tiene en la sociedad, porque para formar ésta se elige la industria de la persona".

(31) v. por ejemplo, el capítulo X de la escritura de constitución de la Compañía de Seguros de la Inmaculada Concepción y Santa Eulalia, 1.772, A.H.P.B., R. Font y Alíer, 1.772, fols. 87r-43v. Aunque citamos este caso a modo de ejemplo, la práctica de estas compañías será estudiada en páginas posteriores.

to público, los pactos entre socios. La importancia que este texto reconoce a las compañías mercantiles y su intención de regularizar y controlar la existencia de las mismas hace que la norma tenga efecto retroactivo:

"... los comerciantes que actualmente están en compañía y los que en adelante la quieran formar serán obligados a hacerlo por Escritura Pública, ante escribano..." (32).

Junto a esta obligación, el texto que comentamos introdujo la del Registro consular como una forma de control de las compañías. Esta disposición entendemos transmite, implícitamente, al Tribunal del consulado, la interpretación de la ley de las Partidas sobre la legitimidad de los contratos que se deseen realizar. Así se renunció a una declaración de principios más completa o precisa que la formulada en aquéllas.

Hay, sin embargo, un precedente de la normativa bilbaína que debemos citar. Se trata de la Real Cédula expedida en 13 de abril de 1.640 generalizando una de las condiciones que "como útil al bien común del comercio" se solía pactar en los Asientos de la Avería, cuando estaban a cargo de la Universidad de Cargadores a Indias, en Sevilla. La norma consistía en que todos los que acudieran a negociar a esta ciudad con título de Compañía y Casa de Negocios, debían presentar, antes de comenzar sus operaciones, sus cartas de compañía,

(32) Ordenanzas del Consulado de Bilbao, 1.737, cap. X, núm. 4. El régimen de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737 está analizado profunda y detalladamente en CARLOS PETIT, La compañía mercantil bajo el régimen de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao 1.737-1.829, Sevilla, 1.980. La deuda que algunos de estos párrafos tienen con él exce de la sucesión de las citas a pie de página.

cédulas de crédito y cualquier justificante de la solvencia y solidez de sus establecimientos, a fin de que "fuese notorio a todo el Comercio". El propio testimonio del Consulado de Cádiz en 1.767, nos indica que esta norma pronto se dejó de cumplir (33).

Este precedente del siglo XVII se limitó a recomendar una práctica conveniente para incrementar las garantías de unos contratos que interesaban al Estado. Por ello podemos afirmar que fueron las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737, las que inauguraron el nuevo régimen de registro, que fue imitado por el resto de los consulados y observado sin interrupción hasta que el Código de Comercio de 1.829 lo sustituyó por el registro dependiente de los tribunales mercantiles (34).

El número V del capítulo X de las Ordenanzas que comentamos, estipula que tanto las compañías ya existentes como las que en adelante se constituyeran, deberían poner en manos del Prior y los Consules de la Universidad de Mercaderes "un testimonio en relación de las Escrituras que acerca de ella otorgaren" a fin de que constara por este medio al público todo lo que fuera conveniente para su seguridad. Este testimonio pasaría a engrosar el archivo del Consulado.

(33) cfr. R.C., de 7 de junio de 1.767, reproducida por Eugenio Larruga y Boneta en su Historia de la Real y General Junta de Comercio, Moneda y Minas, y dependencia de extranjeros y colección íntegra de los Reales Decretos, Pragmáticas, Resoluciones, Ordenes y Reglamentos que por puntos generales se han expedido para el gobierno de los comercios y manufacturas del Reyno, Madrid, 1.789, tomo VI, folios 9-11 y su propio comentario en tomo I, folio 467.

(34) a. 21 del Código de Comercio de 1.829. Este "Registro público de comercio" era público.

Pero esta norma, que la práctica tanto aconseja, no fue puesta en vigor sin oposición. Esta provenía de los comerciantes extranjeros (franceses, ingleses, holandeses) establecidos en la villa bilbaína, que interpusieron recurso contra las nuevas ordenanzas, alegando ser contrario a su honor y crédito la manifestación que se les exigía de sus caudales y créditos. A consulta de 19 de agosto de 1.740, fue debatido este asunto en el Consejo de Castilla. Al no considerar partes legítimas ni competentes en el asunto a los comerciantes extranjeros, el fallo se redujo a la firma, en 10 de diciembre del mismo año, de un Real decreto por el que se mandaba observar las Ordenanzas de Bilbao (35).

El régimen bilbaíno se extendió a Burgos y San Sebastián en 1.766, explicitándose en las ordenanzas consulares de esta última ciudad algo que reconocía implícito en sus inspiradoras de 1.737:

"... hasta que los comerciantes compañeros lo hayan entregado (el testimonio de las escrituras a los Cónsules) no se les ha de permitir que se formen compañía" (36).

El consulado de Cádiz, sin elaborar nuevas ordenanzas, ante la urgencia de poner fin a las quiebras que se producían en la ciudad por la formación incontrolada de las compañías,

(35) Cfr. la R.C. de 7 de abril de 1.767, ya citada, que se refiere al caso, y el Real decreto de 10 de diciembre de 1.740, impreso a continuación de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737 en sus sucesivas ediciones.

(36) Ordenanzas del Consulado de Burgos, 1.766, cap. VI, núm. II; Ordenanzas del Consulado de San Sebastián, 1.766, cap. VIII, núm. V.

consiguió la promulgación de la Real Cédula de 7 de junio de 1.767, por la que se adscribía, en este punto, a la normativa bilbaína. No obstante, se produjo una reacción extranjera, francesa en este caso, en contra de tal disposición, similar a la que despertaran las Ordenanzas de 1.737. Aunque la protesta se realizó inmediatamente y se consultó (esta vez en el Consejo de Indias, una muestra de la confusión de jurisdicciones tan frecuente en la España del Antiguo Régimen) en 16 de mayo de 1.771, no se publicó la resolución favorable al Consulado de Cádiz hasta el 10 de octubre de 1.775. De este modo, la colonia francesa de comerciantes de Cádiz se benefició de ocho años de retraso burocrático.

El Consulado de Valencia elevó una representación similar a las citadas a la Junta General de Comercio el 5 de septiembre de 1.772. Esta vez se utilizó la vía correcta y se obtuvo una relativamente pronta respuesta en la Orden de 9 de agosto de 1.773. Por ella, se mandaba observar en aquella jurisdicción, el capítulo X de las Ordenanzas de Bilbao de 1.737 y, en especial, los números 3, 4 y 5 que se referían a la escritura de compañía y su publicación (37).

En 1.778, el Consulado de Barcelona sufrió un proceso similar (38). Ello permite dibujar para esta fecha un mapa peninsular en el que se observa que los principales centros mercantiles del momento estaban sujetos a la normativa bilbaína:

(37) Orden de 9 de agosto de 1.773 en Larruga, Historia..., tomo VI, pp. 538-541.

(38) Cfr. Jaime Carrera Pujal, Historia de la Economía Española, Barcelona, 1.945 tomo V, p. 273. No hemos encontrado la cédula original.

el propio Bilbao, Burgos, San Sebastián, Valencia, Cádiz y Barcelona. En el trienio 1.784-86, con las ordenanzas de los Nuevos Consulados, culminó el proceso de extensión de estas normas, añadiendo únicamente la prescripción de un plazo máximo para la presentación de la copia de la escritura de compañía en el tribunal consular después de su otorgamiento, (ocho días para las firmadas en la capital consular y un mes para las suscritas en otras ciudades dentro de la jurisdicción) y de la multa que suponía el incumplimiento de este requisito (20 ducados). Esencialmente idénticas son las ordenanzas de los consulados de Sevilla (R.C. de 24 de octubre de 1.784), Málaga (R.C. de 18 de enero de 1.785), Alicante (R.C. de 26 de junio de 1.785), Santander (R.C. de 29 de noviembre de 1.785), La Coruña (R.C. de 29 de septiembre de 1.785) y La Laguna (R.C. de 22 de diciembre de 1.786) (39).

Las Ordenanzas de 1.737 describen la escritura compañía con mayor precisión que el texto de las Partidas, sobre todo en lo que se refiere al reparto de pérdidas y ganancias y al modo de desempeñar la administración. Ello refleja la existencia de un mayor grado de complejidad contractual frente al texto anterior, aunque no se contemplen más que las comanditarias simples:

"Primeramente, los Comerciantes que actualmente están en Compañía y los que en adelante la quisieran formar, serán obligados a hacerlo por Escritura Pública, ante escribano, donde con toda dis-

(39) Estas ordenanzas consulares se encuentran reproducidas en Larruga, Historia..., t. VII.

tinción declaren uniformemente sus nombres, apellidos, vecindario, el tiempo en que empezó o empezare, y el en que ha de acabar; la porción o porciones de caudal, efectos, o industria que cada uno lleve para el total capital de la Compañía; la administración, trabajo, y cuidado en que cada uno haya de entender, para el beneficio común de ella; la parte, y porción de dinero que cada uno haya de sacar anualmente para sus gastos personales, o familiares; los gastos comunes pertenecientes al Comercio, intereses, rentas de Casa y Almacenes, y otros que sean indispensables; las pérdidas en créditos fallidos, naufragios, y semejantes accidentes, cómo y de que suerte se han de entender; las prorratas de las pérdidas, o ganancias, que al fin de la Compañía resultaren, cómo hayan de pertenecer, y partirse; la estimación, que se ha de dar a las mercaderías, y efectos comunes que existieren al fin de la Compañía; el repartimiento que han de hacer de los créditos y haberes que tuvieren al tiempo de dividirse; el pago que deberán hacer de las cantidades, que debieren en común: con todas las demás circunstancias, capítulos y condiciones lícitas que se quisieren imponer, y pactar" (Cap. X, núm. IV).

Las mencionadas Ordenanzas, además, aludían explícitamente a dos extremos que la práctica contemplaba antes de ser promulgado tal corpus legislativo, ya que están recogidas en las glosas a las Partidas y en la Curia Philípica:

1) Se considera existe un compromiso que cada compañero contrae con los demás al firmar el contrato de compañía, por el que debe poner a disposición de la nueva asociación aquel capital que prometió. El cumplimiento de tal promesa está garantizado por la buena fe y por el derecho que el resto de los socios tienen a hacerle responsable de los daños que ocasione su morosidad.

2) Se puede contribuir a la constitución del capital de

la compañía con dinero o con industria. Esto da pie a la existencia de dos tipos de socios, el capitalista y el industrial, si bien un individuo puede realizar ambos tipos de aportaciones. El texto que define esta situación es el siguiente:

"En cualesquiera géneros de compañías deberán proceder de buena fe los comerciantes en la parte que se obligue hacia los demás compañeros, en poner el caudal, industria, y demás que llevare a la Compañía, y en cumplir exactamente con todo lo que prometiére hacer en ella; pena de contribuir, y pagar a los demás compañeros la prorrata, e importe de los daños que les causase en sus negociaciones" (40).

En este período, por tanto, se dejó de admitir la validez legal de los contratos tácitos de compañías, permitidos por las Partidas. Y ello porque la consideración de la transcendencia pública del contrato y la publicidad como una garantía necesaria para terceras personas tuvieron su primera explicitación legal en 1.737. El desarrollo de este principio, como veremos, continuó bajo el régimen del Código de Comercio de 1.829 y culminó en 1.869 con la exaltación de la publicidad de los contratos sobre cualquier otra garantía.

Por último, quiero destacar el hecho de que esta normativa permite al historiador disponer de una relación completa de las compañías creadas en Bilbao entre 1.737 y 1.829 (41).

(40) Ordenanzas del Consulado de Bilbao, 1.737, cap. X, núm. 2. También en Hevia Bolaños, Curia Philipica..., parte II, lib. I, cap. III, núm. 13. Gregorio López alude al socio que sólo aporta industria en Part. 5, tít. X, ley X, glosa 5.

(41) Lo que sustenta el excelente estudio de Petit, ya citado, La compañía...

Para los otros centros mercantiles hay que modificar la fecha inicial según el momento en el que se implantaron en su territorio las Ordenanzas bilbaínas, según la relación que se ha citado. Estadística que, a pesar de haber sido parcialmente destruida por acontecimientos posteriores —y no es el caso de Bilbao— es mucho más completa que la de períodos posteriores, como 1.830-1.848 y 1.868-1.885.

1.3.- Características de las compañías mercantiles

1.3.1.- Personalidad jurídica

No podemos ignorar la importancia del debate teórico que acerca de la naturaleza de la personalidad jurídica se desarrolla desde el siglo XVIII en el mundo occidental, con evidente influencia en los diversos códigos de comercio de cada país. El examen de dichas teorías en estas páginas, sin embargo, no sería, en el mejor de los casos, más que un fiel resumen de las mismas, siempre peor del que ofrece la literatura especializada; por otra parte, resultaría inútil a nuestros propósitos, dado que este debate no tuvo repercusión en la legislación mercantil española de la época estudiada (42).

(42) v., al respecto, por ejemplo, José L. de Benito Mampel, la personalidad jurídica de las compañías y sociedades mercantiles, Madrid, s.f.

Debemos partir, sin embargo, de unos presupuestos iniciales que nos permitan analizar la característica que da nombre a este epígrafe y su posible existencia en las sociedades mercantiles que se desarrollaron en España a lo largo del Antiguo Régimen.

Una elemental proposición de la filosofía del Derecho considera persona a todo ser capaz de derechos y obligaciones. En nuestros días encontramos en los diversos ordenamientos mercantiles un reconocimiento de tal condición a sujetos tanto individuales como colectivos. Aunque la legislación mercantil española del Antiguo Régimen no contemplaba explícitamente el tema que comentamos, el análisis de la realidad muestra la existencia de organizaciones mercantiles con vida propia, que actúan como personas, tal y como lo hemos expresado en la proposición inicial: son entes con derechos y obligaciones. El hecho de no existir legislación al respecto no impide que en este capítulo nos ocupemos del tema. Pensamos que el objeto de estas páginas es describir las coordenadas en las que se movía la realidad mercantil en la etapa y que, en un caso de indefinición legal como el presente, se pueden descubrir, sin embargo, ciertas reglas generales a la luz de las cuales se puede analizar el comportamiento de los diversos tipos de compañías.

Para poder afirmar que una compañía tiene personalidad jurídica se requiere que ésta posea cuatro requisitos:

- 1) Pluralidad de individuos.
- 2) Cooperación, o unidad de objetivos.

3) Organización (necesaria para la consecución del fin común).

4) Capacidad patrimonial exclusiva (43).

La concurrencia de estas condiciones nos ofrece una definición de personalidad jurídica por la cual, una entidad con esta característica, "es aquella unidad jurídica resultado de una ordenación hacia un fin de Derecho público o privado, en la que figuran como componentes personas individuales cuya suma de voluntades engendra una nueva voluntad colectiva, capaz del ejercicio de derechos patrimoniales frente a terceros y aún a sus propios componentes" (44).

Hay autores que a estos requisitos añaden el "reconocimiento por parte del poder público". Si entendemos por tal su contemplación en la legislación, deberíamos dar por concluido nuestro análisis del tema, ya que hasta el Código de Comercio de 1.885 no hubo un reconocimiento explícito de la personalidad jurídica, otorgada a todas las compañías mercantiles (art. 24); pero, como se ha afirmado repetidas veces, "la ley no puede más que reconocer lo ya existente pero no crear la institución" (45) y, a veces, como en este caso, la crea con un retraso de más de un siglo.

(43) Ibidem, p. 43. Elegimos esta enumeración y la definición que conlleva como más clara para nuestra exposición y no contradictoria con otras comunmente aceptadas.

(44) Ibidem, p. 56.

(45) Ibidem, p. 44: "la personalidad existe aunque legalmente no se haya reconocido".

Las tres primeras condiciones ennumeradas —pluralidad de individuos, unidad de objetivos y organización— son comunes a todas las sociedades mercantiles que hasta ahora hemos definido. Es, pues, la última, la capacidad patrimonial exclusiva, la que va a diferenciar las asociaciones con distinta personalidad jurídica. En efecto la sociedad mercantil no tiene vida propia si su existencia depende del patrimonio de los socios (no tiene un patrimonio independiente), si la quiebra de una de las partes supone la de la otra.

a) Compañías colectivas.— La existencia de un nombre social no supone en estas compañías el reconocimiento de personalidad jurídica. Recordemos que tal nombre es el de los socios que la forman. Sólo razones de brevedad hacen que se suela reducir la larga ennumeración que en ocasiones supone tal regla, sustituyendo a los ausentes por el apóstrofe "y compañía" (46).

La ausencia de un patrimonio propio, específico de la compañía es el segundo argumento que demuestra la falta de la característica que comentamos en las colectivas. Cuando una de estas compañías es parte de un pleito, la aparición del nombre de la compañía no es más que una cuestión formal ya que, en la práctica, es cada uno de los socios el demandado (o demandante), lo que se deriva de la responsabilidad, ilimitada y solidaria que contraen entre ellos. La responsa-

(46) cfr. Gutierrez, Librería de escribanos, tomo II, cap. XXIII.

bilidad limitada, primera consecuencia de la personalidad jurídica, está ausente de estas sociedades.

b) Compañías comanditarias.— En estas compañías, es condición sine qua non la existencia de, al menos, un socio colectivo. Este(os) son los gestores de la sociedad, quedando relegados los comanditarios a una segunda posición desde la que no participan en la toma de decisiones. Esta organización hace que en las comanditarias sean más relevantes las relaciones personales entre los socios que las aportaciones de capital; su carácter personalista, pues, las dota, en el tema que comentamos, de un comportamiento semejante al de las compañías colectivas.

c) Compañías anónimas.— En las compañías por acciones, privilegiadas o no, concurren todos los requisitos que hemos considerado necesarios para el reconocimiento de personalidad jurídica en una sociedad mercantil. La constitución de un patrimonio social que no coincide con la suma del de los socios, la ausencia de razón social, la utilización del objeto social para denominar la compañía, sustituyendo a cualquier apellido, son factores que las distinguen frente a otro tipo de compañías y demuestran la existencia de personalidad jurídica en las asociaciones que comentamos.

La inexistencia en España de legislación general sobre compañías por acciones en el Antiguo Régimen, hace que sea necesario examinar la documentación particular de las mismas

(Reales cédulas y escrituras) para extraer de ella las reglas generales que dibujan las coordenadas en las que encierran su comportamiento. Realizando este examen, se puede concluir que las Compañías privilegiadas tienen un comportamiento del que se deriva la posesión de personalidad jurídica y, asimismo, las compañías comanditarias por acciones van desprendiéndose de su carácter personalista y dotándose de personalidad jurídica plena; pero ambas cosas serán materia de próximos apartados.

1.3.2.- Responsabilidad.

El carácter del contrato de compañía mercantil, que implica la realización de operaciones sujetas a riesgo, hace que el problema de la responsabilidad adquiera en él la máxima importancia. Su indefinición implicaría dejar sin respuesta la cuestión de quién tiene la obligación de satisfacer las deudas contraídas en las negociaciones realizadas por miembros de una compañía en nombre de la misma. Este problema, planteado con frecuencia en el desarrollo normal de la vida de dichas asociaciones lo es con mucha más virulencia en caso de pleito o quiebra, situaciones, si bien anómalas, no por ello raras.

Los problemas de escasez y falta de sistematización característica de la legislación sobre compañías mercantiles en el Antiguo Régimen se plantean especialmente en el tema

que nos ocupa. A pesar de que consta documentalmente la existencia desde el siglo XII de compañías colectivas y comanditarias y de que la segunda mitad del siglo XVIII aparecieron las comanditarias por acciones, y que son tipos diferentes en lo que respecta a la responsabilidad de los socios (47), la legislación no los contempla de manera particularizada hasta la promulgación del Código de Comercio.

Por ello, a la hora de plantearnos la elección de un método para aproximarnos al tema, abandonamos el de la consideración cronológica de la legislación y optamos por el análisis de la misma en torno a tres cuestiones previas planteadas, cuya respuesta nos parece necesaria para la delimitación en cada uno de los tipos de compañías mercantiles. La primera cuestión, trata de la limitación o ilimitación de la responsabilidad, con que se responde ante las deudas sociales; en segundo lugar, del modo de hacerlo, que es diferente según sea la responsabilidad solidaria o simplemente mancomunada y, por último, del grado de responsabilidad del patrimonio y de los socios ya que de ello depende la circunstancia temporal, cuándo puede ejercer su acción el acreedor.

a) Compañías colectivas.— La responsabilidad de los socios en las compañías colectivas, está definido por las tres notas siguientes:

1.- Responsabilidad ilimitada, ya que todo el patrimon

(47) De hecho la clasificación de las compañías mercantiles realizada con criterio jurídico, toma esta característica como base de la misma.

monio personal de los compañeros es responsable de las deudas contraídas en las negociaciones de la compañía.

2.- Responsabilidad solidaria: si uno de los compañeros no puede pagar la parte de la deuda social que proporcionalmente le corresponde, esta obligación pasa al resto de sus compañeros solventes.

3.- Responsabilidad de segundo grado: el patrimonio individual sólo es responsable después de agotado el fondo de la caja de la compañía (48).

En los párrafos siguientes se discutirá en qué medida la legislación del Antiguo Régimen contempla estas tres notas que caracterizan la responsabilidad en las compañías colectivas.

Las Partidas describen con claridad el tipo de responsabilidad que se adquiere al entrar a formar parte de una compañía universal. En ella, son comunicables entre los socios las expensas, cargas y deudas de la compañía. La responsabilidad solidaria o in solidum (por utilizar el vocablo utilizado en el texto y acuñado posteriormente) se deriva, en este tipo de asociaciones, de su carácter de comunidad de bienes. En efecto, al formar este tipo de compañía, se transfiere a un socio el dominio de los bienes materiales de los otros, así como de los inmateriales (señorío o jurisdicción)

(48) cfr. Garrigues, Tratado de Derecho Mercantil, Madrid, 1.947-49 (3 vols.), t.1, p. 238.

si expresamente se pacta (49). No son éstas, sin embargo, las compañías que interesan a estas páginas, debido a su nula transcendencia económica. No obstante, hemos aludido al texto que se ocupa de estas asociaciones por ser el más claro en cuanto a la delimitación de la responsabilidad ilimitada e in solidum, típica de la compañía colectiva; en efecto, el resto de las disposiciones que en las Partidas tratan sobre el tema, lo hacen de una forma asistemática, reduciéndose a la mera enumeración de casos de los que se deduce que la responsabilidad in solidum ha de ser expresamente pactada, suponiéndose, cuando no sea así, una responsabilidad si bien personal, a prorrata, es decir, limitada a una fracción de la posible deuda. Esto describe una compañía del tipo comanditario. Así lo refleja también, una ley de 1.458, que se inserta en la Nueva Recopilación, y que reproducimos a continuación:

"Establecemos que si dos personas se obligaren simplemente por contrato o en otra manera alguna para hacer y cumplir alguna cosa, que por ese mismo hecho se entienda por obligado cada uno por la mitad; salvo si en el contrato de dixere, que cada uno sea obligado in solidum, o entre sí en otra manera fuere conveniente igualado, y esto no embargante cualesquier leyes del Derecho común que contra esto hablen; y sea guardado en los contratos parados como en lo porvenir" (50).

(49) Part. 3, tít. XXVIII, ley XLVII y Part. 5, tít I, ley VI. Cfr. Gutiérrez, Librería de escribanos..., tomo II, cap. XXIII, núm. 8.

(50) Nueva Recopilación, lib. I, tít. XVII, ley 5; Novísima Recopilación, lib. I, tít. I, ley 10.

La mayor preocupación de las Partidas por las compañías comanditarias puede ser debido, bien a una mayor frecuencia de esta forma de asociación, frente a la colectiva, bien a la mayor exigencia de normas del contrato más complejo y, por tanto, con mayor índice de pleitos. Sin ninguna apoyatura cuantitativa, nos inclinamos, como más probable, por la última explicación ofrecida, ya que resulta extraño que en una época tan temprana como la de las Partidas primara una forma más elaborada de compañía, frente a la más simple. En las Ordenanzas de Bilbao de 1.737, asimismo, sólo está contemplada la compañía comanditaria.

Si acudimos a la doctrina, sin embargo, la figura de la compañía colectiva aparece más clara. Por ejemplo, Febrero, si bien no la cita con este nombre, al comentar la posibilidad que tiene un miembro de una compañía singular de establecer un nuevo contrato de compañía, al margen de la primera, observa que es lícito un convenio en el sentido de que "teniendo alguno de ellos otra compañía ha de comunicar la utilidad a los demás". Este pacto supone, sin embargo, que los primitivos compañeros obligan sus fortunas solidariamente en las pérdidas de la nueva asociación. En decir, entran a formar parte como miembros de pleno derecho en ella (51).

Esta alusión indirecta de Febrero se convierte en referencia explícita en los comentarios que hace Gutiérrez a la obra de aquél, cuando formula "en éstas (las compañías colectivas) todos los socios están obligados in solidum" (52).

(51) Gutiérrez, Librería de escribanos..., tomo II, cap. XXIII, núm. 9.

(52) Ibidem, núm. 22.

Los dos autores, sin embargo, si bien reflejan en sus afirmaciones un comportamiento real, no citan —no existe— apoyatura legal.

A continuación, enumeremos los casos en los que la legislación española del Antiguo Régimen estima que existe responsabilidad in solidum:

1) Cuando está expresamente pactada, circunstancia de la ya se ha hablado.

2) Cuando la compañía tiene un fin público o está dirigida a cumplir una misión de esta índole. El caso más claro es el de los bancos desde la segunda mitad del siglo XVI: dos personas que contraen un contrato de este tipo "se obligan in solidum a todo lo tocante a dicho cambio" (53).

3) Cuando los socios resultan obligados secundariamente como consecuencia de una actuación dolosa o culposa (54).

4) En la venta de esclavos o animales (55).

b) Compañías comanditarias.— En relación con las preguntas que nos planteamos al comienzo de este epígrafe, la responsabilidad de los socios en las compañías comanditarias, se ajusta a las notas siguientes: la responsabilidad de los socios colectivos es idéntica a la descrita para las compañías

(53) R.C. de 6 de junio de 1.554, Nueva Recopilación.
Martínez Gijón, "La commenda...", p. 115.

(54) Part. 5, tít. X, ley VIII.

(55) Nevía Bolaños, Curia Philípica, 2ª parte, lib. 1, cap. 3, núm. 3. V. para todo este punto Martínez Gijón, La compañía..., pp. 184 a 186.

colectivas. La de los socios comanditarios es:

1.- Responsabilidad personal: el patrimonio de los socios es responsable de las deudas de la compañía.

2.- Responsabilidad limitada: hasta el importe de los fondos que se obligaron a poner. Por tanto, esta cantidad ha de ser fijada en la escritura de compañía y, aunque los acreedores tienen derecho a ejecución sobre el total del patrimonio personal del socio, en cuanto la suma recobrada alcance la cifra fijada, dicha ejecución ha de detenerse.

3.- Responsabilidad mancomunada, no solidaria. Las deudas ante las que debe responder cada socio no son transmisibles a los demás.

4.- Responsabilidad de segundo grado, dentro de los límites de su responsabilidad y de ninguno fuera de ellos (56).

Veamos en los siguientes párrafos, en qué medida la legislación del Antiguo Régimen contempla esta realidad.

El establecimiento de la prorrata como norma, en la legislación del Antiguo Régimen, con lo que implica de limitación y solidaridad de la responsabilidad, ha sido puesto de manifiesto al hablar de la compañía colectiva. En la doctrina, se va desarrollando una corriente, que tiene su punto de partida en Cino, Baldo, Pedro de Ubaldis y Bartolomé Salice-

(56) cfr. Garrigues, Tratado..., vol. I, p. 238.

to, que refleja la distinción, cada vez más clara, entre el capital de la compañía y el capital de los compañeros: "quia quod est societatis non est singulorum". A la inversa, lo que es particular de los socios, no es de la sociedad ni responde ante las deudas contraídas por ésta (57). Martínez Gijón, ha estudiado la aparición de estas ideas en la doctrina castellana y cita como ejemplo a Francisco Salgado de Somoza, en cuya obra "se hallan presentes las conclusiones que favorecen la distinción entre el patrimonio de la sociedad y el de los socios a la hora de formarse un concurso de acreedores, al prohibirse la compensación entre la deuda en favor de la sociedad y el crédito de ese deudor contra uno de los socios, y al exigirse que en el concurso de acreedores del socio o del administrador se separen los bienes de la administración o de la compañía de los suyos propios" (58).

Coincidiendo con esta posición, se abrió paso una corriente de pensamiento paralela, favorable a limitar la responsabilidad de los socios al capital aportado por cada uno de ellos. Su refrendo legal se realizó en las Ordenanzas de Bilbao de 1.737:

"Todos los interesados en una compañía serán obligados a abonar, y llevar a debida execución, a pérdida o ganancia, quealesquiera negocios que cada compañero haga, y execute en nombre de todos con otras personas, y negociantes fuera de ella; saneando cada uno las pérdidas que puedan suceder, hasta en la cantidad de capital, y ganancias en que fue interesado, y resultaren del total de la compañía;

(58) Martínez Gijón, La compañía..., p. 207. Cfr. Salgado, Labyrinthus creditorum concurrentium ad litem per debitorem communem inter illos causatem, Ed. 1.757, t.I y IX, p. 63.

entendiéndose, que aquél o aquellos, baxo cuya firma corriere la compañía, estarán obligados, demás del fondo, y ganancias que en ella les pertenezcan, con todo el resto de sus bienes, habidos y por haber al saneamiento de todas las pérdidas, aunque estos tales, o alguno de ellos entrase sin poner caudal en dicha compañía" (59).

Se manifiesta claramente, en este texto, la diferente responsabilidad que tiene cada tipo de compañeros; limitada en el caso de los comanditarios, e ilimitada en el caso de los colectivos.

c) Compañías anónimas.— Las notas que caracterizan la responsabilidad de los socios en las compañías de esta clase son las siguientes:

1.- No existe una responsabilidad personal: en todo caso, el patrimonio de los socios está exento de responsabilidad, que está cubierta exclusivamente por las aportaciones que forman el patrimonio social. Es decir, frente a la responsabilidad personal de las compañías colectivas y comanditarias, encontramos, en las anónimas, la responsabilidad de la compañía.

2.- Responsabilidad limitada al importe de la acción

3.- Responsabilidad solidaria sólo en el caso de que existan acciones nominativas, entre el antiguo y el nuevo tenedor de la acción.

(59) Ordenanzas del Consulado de Bilbao, 1.737, cap. X, núm. XIII. Cfr. Gutiérrez, Librería de escribanos..., tomo II, cap. XXIII, núms. 22, 30 y 32.

4.- No existe ningún grado de responsabilidad para el socio, fuera de su aportación (60).

Debido a la ausencia de legislación para estas compañías remitimos, como para el punto anterior, a los siguientes apartados. En ellos se verá cómo las Compañías Privilegiadas se ajustan perfectamente a estas notas. Consideramos, asimismo, el proceso que siguieron las comanditarias por acciones hacia la limitación de la responsabilidad en el último tercio del siglo XVIII y cómo fue truncado por los acontecimientos y por la peculiar evolución legislativa.

1.4.- Funcionamiento de las compañías mercantiles

1.4.1.- La gestión social

El grado de responsabilidad es la característica que fundamenta la clasificación de la compañía mercantil en tres tipos: colectiva, comanditaria y anónima. La unión de este criterio jurídico con el económico ha llevado a realizar una tipificación distinta, bajo la que aparecen estas asociaciones divididas en personalistas y de capitales. En las primeras, pro

(60) Garrigues, Tratado, vol. I, pp. 238-239.

pietarios y directores coinciden. La gestión de la compañía es ejercida por todos los socios (colectiva) o por un grupo (comanditaria). En las de capitales, el ejercicio de la gestión social no implica un mayor grado de responsabilidad ni tiene por qué recaer necesariamente en socios de la compañía. La actividad de dirección se convierte en un trabajo ejercido por especialistas, sean o no accionistas, unidos a la compañía mediante un contrato (61).

Las compañías mercantiles del Antiguo Régimen en España, desarrollaron a través del uso y la costumbre, un comportamiento que se ciñe al esquema trazado. Dicha conducta no se puede deducir de la legislación general, dado que ésta se limitó —y no de forma exhaustiva— a regular las compañías que hemos llamado personalistas. Esta es la razón de que en este punto apenas hablemos de las sociedades de capitales, cuyo comportamiento se ajustaba a una normativa particular que será considerada más adelante.

a) Compañías personalistas.— La redacción de la carta de compañía que ofrece el texto de las Partidas, no alude a que deba constar en ella el modo de gestión de la nueva asociación. Las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737, sin

(61) cfr. Garrigues, Tratado..., p. 235. Benito en La personalidad..., pp. 77-79 resalta la diferencia entre los vocablos compañía, que alude a una identificación personal de sus componentes y, sociedad (*societas*), que enfatiza la relación contractual, por lo que juzga erróneo aplicar este último a las sociedades de capital. Más específicamente se ocupan de estos significados J. Arias Ramos en su artículo "Los orígenes del contrato de sociedad: 'consortium' y 'societas'" en Revista de Derecho Privado, núm. 36, 1.942, pp. 141 y ss.

embargo, en su regulación del contrato de compañía estipulan que se defina en el mismo "la administración, trabajo y cuidado en que cada uno haya de entender, para el beneficio común de ella" (62). La importancia de esta definición se evidencia al establecer la conexión de la gestión con la responsabilidad, que el uso consagró en el Antiguo Régimen y que se puede reducir a dos leyes generales:

1.- En las compañías colectivas, todos los socios tienen el mismo derecho a ejercer la dirección de la compañía: La doctrina considera legítima, sin embargo, la delegación de las facultades gestoras a uno o varios de los compañeros. Esta delegación no supone, en ningún caso, la de la responsabilidad; los socios que no ejercen la administración de la compañía son responsables solidarios con aquellos que desarrollan tal actividad (siempre, claro está, que no incurran en delitos penados por la ley).

En este sentido, Tomas Mercado estima innecesaria la estipulación de una conducta fija al respecto en la estructura de la compañía. Considera que la dirección de la asociación es atributo, en cualquier caso, de todos los compañeros, y sólo se delega mediante "expreso capítulo" o "particular poder", en determinadas ocasiones, para una negociación concreta y nunca en personas que no gocen de la cualidad de socios (63).

(62) Ordenanzas del Consulado de Bilbao, 1.737, cap. X, núm. IV.

(63) Tomás Mercado, Suma de tratos y contratos, cap. 52. La edición que se ha manejado es la de Restituto Sierra Brezo, Madrid, 1.975.

Felicio supone un avance en la doctrina, al tipificar dos posiciones legítimas para la resolución del problema de la gestión social. Por la primera, la administración de la compañía está encomendada a todos los socios ("so socii omnes administraverunt") (64), y en ella caben delegaciones ocasionales como las descritas más arriba; por la segunda, en la carta de compañía se testimonia la delegación a uno o varios socios de la gestión de la sociedad, con lo que los demás quedan excluidos de este tipo de actividades (65).

La tendencia a individualizar la gestión de la compañía en una persona, como un aspecto de la división del trabajo entre los compañeros, se acentúa con el tiempo. Así está presente en Heví Bolaños, que considera necesario que determinadas actividades estén al cargo de un sólo compañero (66). La frecuencia de estas delegaciones de poder (compraventa de esclavos o ganado, alquileres de casas y tierras...) no destruye, sin embargo, la siguiente norma general que el Febrero Reformado repite en 1.807: en la compañía colectiva, "todos se emplean igualmente en los negocios de ella" (67). De hecho, actúen o no en una negociación concreta o en todas, su responsabilidad es la misma: ilimitada.

2.- En las compañías comanditarias sólo los socios colectivos tienen derecho a participar en su gestión: El socio colectivo pone en la compañía no sólo su dinero sino también

(64) Felicio, Tractatus, cap. XXXVII, núm. 22.

(65) Ibidem, cap. XIV, núm. 39. Cfr. Martínez Gijón, La compañía..., pp. 190-192.

(66) Heví Bolaños, Curia Philipica, parte 2ª, lib. 1, cap. XXI, núms. 19, 30 y 32.

(67) Gutiérrez, Librería de escribanos..., tomo II, cap. XXIII, núm. 21.

su trabajo, al servicio de los negocios comunes y asume la responsabilidad; el comanditario sólo aporta su capital lo que, al tiempo que limita su responsabilidad, le aparta de los órganos de gestión. Los problemas de delegación del derecho a gestión entre los socios colectivos, son los mismos que describimos en (a); la separación entre los dos tipos de compañeros está claramente expresada en Gutiérrez:

"... quien únicamente pone su dinero no hace manifiestamente ninguna función de acto de socio; y el otro, cuyo nombre sólo aparece, está encargado de todos los negocios y operaciones que son el objeto de la compañía..." (68).

A la luz de este texto, podemos interpretar el número 13 del capítulo X de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737 y concluir que la mera aportación de capital no conlleva capacidad de gestión: que para conseguir ésta, es necesario convertirse en socio colectivo, con responsabilidad ilimitada y solidaria y que, adquirida esta condición, se puede delegar sin por ello renunciar al nuevo tipo de responsabilidad. Esta distinción se refleja también en la razón "social, en la que sólo pueden aparecer los nombres de los socios colectivos.

Con estas líneas sólo pretendemos delimitar el tema y describir las posibilidades que existen en su resolución. Es evidente, sin embargo que la delegación de facultades de dirección entre los socios colectivos es un mecanismo, si bien posible, poco empleado y, cuando lo es, con muchas restriccio-

(68) Ibidem, núm. 22.

nes, como reflejan las escrituras de compañías.

b) Compañías capitales.— La ausencia de legislación general acerca de estas compañías en el Antiguo Régimen nos obliga a remitir este punto al apartado en el que realizamos su estudio pormenorizado. Aunque para este período no conocemos anónimas, sociedades capitalistas en el más puro sentido del término, hay dos tipos que pueden incluirse en este epígrafe: las Privilegiadas y algunas comanditarias por acciones.

Las mayores dimensiones de estas compañías frente a las personalistas hace que su funcionamiento interno sea más complejo. En ellas, descartada la posibilidad de que todos los socios constituyan el organismo gestor de la compañía, es necesario arbitrar un mecanismo de representación. En estas sociedades no hay las diferencias apriorísticas entre los socios, que en las comanditarias simples —y en algunas con sólo la parte de su capital dividido en acciones— solucionan el problema tomando como base su distinta responsabilidad. De ahí que deban arbitrar un mecanismo para realizar la selección de los directores. La regla general es la constitución de una Junta General de Accionistas que los elige periódicamente. A partir de este punto, el grado de participación, la definición de los requisitos de elegibilidad y del grado de control del conjunto sobre el órgano directivo, son pactados de forma diferente en las Ordenanzas y escrituras sociales.

En los dos tipos de compañías consideradas, destacaba to

avía el carácter personalista del que ni siquiera la anónima se vió totalmente libre en la primera mitad del siglo XIX. De ahí que, como veremos, en la mayor parte de las sociedades estudiadas se observe que, si bien el carácter de socio no supone por sí mismo la participación en la gestión de la compañía, hay que serlo —y casi siempre muy cualificado— para poder ejercer tal función.

La transición hacia la completa despersonalización de las compañías de capitales será lenta y llena de altibajos. Pero éso será discutido más adelante.

1.4.2.- El reparto de pérdidas y ganancias

a) Compañías personalistas.— La ley de las Partidas establece algunas reglas sobre el reparto de las pérdidas y las ganancias en las compañías particulares (69):

1.- El reparto de pérdidas y ganancias se realizará proporcionalmente al caudal que cada compañero haya depositado en la asociación, si no se han establecido en la carta de compañía otras reglas al respecto (70).

(69) Obviamos el tema de las compañías universales, por los argumentos expuestos al iniciar este capítulo. Los problemas que, en cuanto comunidad de bienes, ha de solucionar una asociación de este tipo a la hora de dividir un patrimonio que es la suma de los bienes de dos o más individuos, son numerosos y de una índole que sobrepasa el ámbito mercantil. V., sobre ello, Martínez Gijón, La Compañía..., pp. 137 y ss.

(70) Part. 5, tít. X, ley III.

2.- Se admitirá como legal el pacto que consagre un reparto desigual de las pérdidas y las ganancias, basado en el diferente valor de las aportaciones no materiales de los compañeros ("el vno de ellos es más sabidor... o se mete a mayor trabajo, o se aventura a mayores peligros"), si bien se prohíbe una situación límite de la desigualdad, la compañía leonina, en la "que el vno que ouiesse toda la ganancia, e que non ouiesse parte en la pérdida; o toda la pérdida fuesse suya, e non ouiesse parte en la ganancia" (71).

3.- Si se pacta, en la carta de compañía, el reparto de pérdidas y no el de ganancias, o viceversa, se hará el no definido igual que el definido (72).

Tomás de Mercado, al tiempo que subraya la conveniencia de que las compañías particulares fijen, en sus escrituras, la forma de realizar este reparto, señala la variedad de modos en que se hace y aprueba la libertad que permite la ley:

"En las ganancias, unas veces ganan por yguales partes, otras por desiguales, el uno dos tercios, el otro uno, y de otros mil modos se va vía y diferencia el concierto, tanto que no cae debaxo de número, ni sciencia, ni es menester que cayga" (73).

Las compañías podían elegir, por tanto, entre ajustarse a una norma general de proporcionalidad entre aportación y par

(71) Part. 5, tít. X, ley IV.

(72) Part. 5, tít. X, ley III.

(73) Tomás de Mercado, Suma de tratos y contratos, cap. 49. Cfr. Martínez Gijón, La compañía..., p. 148.

ticipación o pactar, dentro del amplio margen que permite la ley, una cuota de ganancias y pérdidas para cada socio. Sólo un estudio pormenorizado de las cartas de compañía nos permitiría calificar los diferentes comportamientos societarios dentro de una amplia gama legal que, según testimonios contemporáneos, no sólo era posible sino que también existía (74).

Después de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737, el abanico de posibilidades que las compañías tenían al respecto, seguía siendo tan amplio como el que dibujó el texto de las Partidas (ni la ley ni la costumbre derogan lo dicho en el punto 3)); la única novedad que aportó la nueva normativa consistía en la exigencia de hacer constar, en la escritura de compañía "las pérdidas en créditos fallidos, naufragios, y semejantes accidentes, cómo, y de qué suerte se han de entender las prorratas de las pérdidas o ganancias, que al fin de la compañía resultaren, cómo hayan de pertenecer o partirse" (75). Hasta la promulgación de dicha norma,

(74) Diversos tratados de los siglos XVI y XVII ofrecen algunos ejemplos de cómo realizar las operaciones matemáticas necesarias para efectuar la división de las ganancias y las pérdidas en las compañías comunes. Martínez Gijón supone que dichas obras (en las que destaca: Juan de Andrés, Sumario breve de la práctica de la aritmética de todo el curso del arte mercantil, Valencia, 1.515; Juan Ortega, Tratado subtilissimo de aritmética y geometría, Sevilla, 1.542 y Juan Pérez de Moya, Aritmética práctica y especulativa, Madrid, 1.598), fueron empleadas por los mismos socios y árbitros en la disolución de las compañías mercantiles. Pensamos que reflejar el contenido de estas obras en estas páginas carece de interés. Aquéllas se reducen a resolver matemáticamente el problema que plantea la concurrencia de cuatro variables: a) capital que aporta cada compañero; b) tiempo en que ha permanecido cada uno de ellos en compañía; c) porcentaje pactado de ganancia para cada compañero; d) porcentaje pactado de pérdida de cada compañero. Por otra parte, Martínez Gijón en La compañía..., pp. 158-164, ofrece un amplio y fiel resumen del desarrollo de este tema en la obra de Andrés.

(75) Ordenanzas del Consulado de Bilbao, 1.737, cap. X, núm. I. Sobre este punto Petit, La compañía..., cap. III.

tal inclusión era optativa.

b) Compañías de capitales.— A pesar de la ausencia de legislación que regule estas compañías, el análisis de sus escrituras —cuyo estudio pormenorizado nos ocupará más adelante—, nos permite comprobar la existencia de unas reglas generales, que resumimos brevemente a continuación:

1.— La acción, símbolo de la participación de cada socio: El capital de estas compañías está dividido (total o parcialmente) en un número determinado de partes iguales, cada una de ellas simbolizada por una acción. La compra de una o más acciones proporciona el derecho a participar en el resultado de la negociación de la compañía.

Un problema secundario, ya que se resuelve en el mismo momento de la incorporación de un socio a la compañía y no repercute en el posterior reparto de beneficios, es el que se plantea en las compañías que admitían aportaciones en mercancías. Lo entregado se sometía a una valoración, a precios de mercado, de la que se obtenía el número de acciones que correspondiera a dicha aportación, produciéndose el mismo resultado que si se hubiera realizado en dinero (76).

El problema que se planteaba en las compañías colectivas

(76) Señalamos aquí sólo dos muestras: los cosecheros que se quisieran interesar en la Compañía de la Habana lo podrían hacer comprando hasta cuatro acciones en frutos propios, "de buena calidad y a precios corrientes" (art. V de la R.C. de 18 de diciembre de 1.740). En la Compañía de Sevilla, se otorgaba a los directores el derecho a juzgar los géneros y efectos que se pretendiera aportar a la compañía, los cuales debían encontrar satisfactorios "no sólo en su calidad, sino también en su precio" (art. 29 de las Ordenanzas de 26 de agosto de 1.749).

y comanditarias a la hora de valorar la aportación no material de los socios, no surge en estas asociaciones que son, por encima de la relación personalista que prima en aquéllas, unidades de capital. Los diversos trabajos (vender, comprar, fabricar, viajar,...) que en las personalistas son realizados por los propios socios, son efectuados en las asociaciones de capital por personas vinculadas a la compañía por una relación contractual, aunque también puedan ser socios. No obstante, cabría la posibilidad de pagar o premiar un trabajo o una actuación extraordinaria en favor de la asociación con la entrega de un número determinado de acciones. Esta posibilidad, que no hemos encontrado utilizada en ninguna compañía del siglo XVIII, no afectaría, en cualquier caso, al esquema trazado, dado que su pago, al menos teóricamente, se habría de realizar con las ganancias obtenidas en su negociación por el cuerpo mercantil, en igual forma que si dichas acciones fueran compradas por un particular.

2.- El principio de la proporcionalidad en la participación: Todas las acciones de una sociedad representan una misma aportación: tienen el mismo valor nominativo. Por tanto, cada una de ellas representa idénticos derechos y obligaciones respecto a la compañía. La diferente participación de cada socio en los resultados de la misma, se basa únicamente en la posesión de un número diferente de acciones.

En las sociedades del siglo XVIII, no hemos encontrado se aplique el factor distorsionante que en esta realidad igualitaria supone la introducción de un elemento cualitativo en

las acciones. Todavía no existen las partes de fundador o las acciones preferentes que, en el siglo XIX se intentan usar para legitimar la preponderancia de un pequeño número de accionistas (promotores o primeros propietarios) y asegurarles un mayor beneficio. En el período analizado se encuentran casos de utilización de la calidad de fundador para mantener la dirección un tiempo determinado, pero no una legitimación explícita para dividir el beneficio en partes desiguales.

3.- El reparto periódico de dividendos: Al hablar de las colectivas y comanditarias simples no aludimos a este punto, ya que las relaciones personalistas predominantes en ellas y la pequeñez de sus dimensiones consagran un funcionamiento basado en la retirada anual, "para sus gastos" de una cantidad previamente pactada para cada uno de los compañeros, y en el reparto del capital que exista al disolver la compañía. Esta costumbre viene reseñada en las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737, donde al dictar las normas a las que se debía ajustar el contenido de la escritura social, se dice:

"... de donde con toda distinción declaren uniformemente (...) la parte, y porción de dinero que cada uno haya de sacar anualmente para sus gastos personales, o familiares..."

y, donde se hacía una clara división entre el patrimonio (capital más beneficios) y el capital, de tal manera que el reparto de beneficios sólo se haría junto con el del capital, "al tiempo de dividirse" (77).

(77) Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737, cap. X, núm. IV.

Las compañías por acciones, sin embargo, aparecen ante el accionista como una forma de invertir sus ahorros en una negociación que promete rendirle periódicamente algunos intereses. Por ello, las compañías por acciones necesitan, sobre las exigencias de las Ordenanzas de Bilbao concretar las fechas en que la dirección rendirá cuentas y, en caso positivo, repartirá los beneficios obtenidos. Como un ejemplo de este comportamiento general, cuyas variables estudiaremos con detalle en un apartado posterior, citamos el capítulo XXI de las Ordenanzas de la Compañía de Toledo (1.748):

"Se presentarán (a la Junta General de Accionistas) las cuentas generales, y se nombrarán revisores para su aprobación, y declarando éstos que están bien formadas y ciertas, se acordarán los intereses que deberán repartirse a los accionistas, y el tiempo de su entrega; pero de suerte que no se perjudique ostensiblemente al giro y progresos de la compañía".

1.4.3.- Disolución de las compañías mercantiles

a) Causas de la disolución.— El texto de las Partidas establece las causas que producían la disolución de las compañías mercantiles. Las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737 no se pronuncian sobre este punto, lo que hace suponer una aceptación de la práctica anterior; sin embargo, se ocupan con cierto detalle de un caso particular, la quiebra, cuya regulación trascendió en gran medida al Código de Comercio de 1.829. La doctrina discutió y manifestó posiciones di

versas en aquellos casos concretos a los que no descendía la legislación, lo que podemos considerar como reflejo de las diferentes soluciones adoptadas en la práctica mercantil.

Estas causas sólo son aplicables en su totalidad a las compañías colectivas y comanditarias simples, al ser éstos los únicos cuerpos mercantiles contemplados por la legislación. Las razones que motivan el fin del contrato en las compañías de capitales son las mismas que aparecen en las compañías personalistas, con la excepción de aquéllas que presuponen un sistema rígido de relaciones interpersonales. Por ello, en este punto realizaremos un análisis conjunto de las compañías. Tomamos como base —lo dicta la legislación— la regulación de la disolución de las personalistas y haremos las acotaciones pertinentes que cabe hacer para las sociedades de capital en el Antiguo Régimen.

1.- Conclusión del tiempo por el que se formó la compañía: Como tuvimos ocasión de observar al analizar la carta de compañía, el texto de las Partidas no considera obligatorio el pacto sobre el tiempo de negociación de la sociedad, si bien lo recomienda. Por ello, dicho texto no alude explícitamente a la variable tiempo como una de las que implican, a su término, la disolución inmediata de una compañía mercantil. Sin embargo, pensamos se puede deducir del propio texto legal que comentamos, que la conclusión del tiempo consignado en la carta de compañía supone su disolución. La frase que motiva tal deducción se encuentra en la ley que se ocupa de la consideración de la licitud de la ruptura del contrato por

parte de un compañero, y reza así:

"Pero si ese atal se partiesse de la compañía ante que sea acabado el fecho sobre el que la fizieron, o ante que sea acabado el tiempo en que auia de durar..." (78)

Las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737 clarificaron la cuestión al considerar obligatoria la fijación de la escritura de compañía de la de duración del contrato. No sólo la conclusión de dicho plazo implicaba la automática disolución de la compañía, sino que cualquier cambio que se deseara hacer al respecto, (por ejemplo, la continuación de las operaciones más allá del período de tiempo señalada al principio), al suponer modificación de la escritura social, hacía necesaria la redacción y formalización de una nueva; es decir, la posibilidad de una renovación existe porque se ha producido, previamente, la conclusión de la primitiva asociación (79).

2.- Conclusión del objeto para el que se formó la compañía: La definición del objeto para el que se constituye una compañía, al tiempo que muestra la razón fundamental por la que se ha producido una determinada asociación de personas y capitales (la realización de una empresa lucrativa que excede de las posibilidades individuales de los compañeros) era uno de los extremos que debía ser obligatoriamente incluido en la redacción del contrato (80). Por esta razón no sólo es

(78) Part. 5, tít. X, ley XI. Subrayado mío.

(79) Ibidem; v. también, Hevia Bolaños, Curia Philipica, parte II, lib.I, cap. III
núm 34.

(80) Part. 3, tít. XVIII, ley LXXVIII y Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737
cap. X, núm. IV.

aplicable a este punto la razón esgrimida para justificar la causa de disolución anterior —modificación de la escritura social—, sino que también fue definido explícitamente por el legislador:

"Otrosí dezimos, que se acaba la compañía muriéndose o perdiéndose de otra guisa la cosa por qué fué hecha" (81).

3.- El mutuo disenso: El mutuo disenso no está contemplado en los textos legales como una causa de disolución de la compañía personalista. Pero está aceptado que la extingue naturalmente, puesto que significa la pérdida de la affectio, elemento fundamental que dió vida al contrato (82). Estas consideraciones, evidentemente, no tienen ningún sentido en las asociaciones de capitales, fundadas sobre otras bases.

La formación de este disenso, igual que la del consentimiento, podía producirse expresa o tácitamente hasta que la promulgación de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737 y su posterior generalización suprimió la validez legal de cualquier acuerdo tácito en materia de compañías.

La extinción tácita del contrato de compañía —según Hevia Bolaños formula con abundante apoyatura doctrinal clásica—, se detecta en el cambio en la manera de llevar las

(81) Part. 5, tít. X, ley X.

(82) v., para un análisis de la doctrina al respecto, Martínez Gijón, La Compañía..., pp. 247 y 248, donde se pasa revista a las teorías que, sobre este punto, manifiestan Ubaldis, Molina, Azor y Felicio. Para 1.737-1.829, Petit, La compañía..., pp. 214-217.

cuentas o en la realización de contratación individual por parte de uno de los compañeros con conocimiento y consentimiento, de hecho, de los demás. Como correlato de esta argumentación y siempre antes de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737, existía la posibilidad de efectuar la renovación del contrato de compañía de una forma tácita que se manifiesta, al contrario que para la tácita disolución, en que los socios o sus herederos continúan la negociación, en los libros y en los contratos, del mismo modo que antes de cumplirse el tiempo por el que la compañía fue constituida (83).

4.- Ausencia de un compañero

Renuncia unilateral: la separación de un compañero de una sociedad mercantil, es una decisión personal que los demás no pueden impedir, si bien tienen derecho a obligarle al pago de "todo el daño o el menoscabo" que sobrevenga a la compañía por dicho abandono. Excepción hecha, claro está, de que se hubiese acordado, al constituir la compañía "que el que no se pagasse della, que la pudiesse desamparar, cada que quissiesse ante del tiempo sobredicho, o después" (84).

La doctrina ante este hecho, cuyas consecuencias no aclara suficientemente el texto legal, aclara dos posiciones por

(83) Gregorio López, Glosa 1.ª Part. 5, tít. X, ley X; v. Hevia Bolaños, Curia Philipica, parte II, lib. I, cap. III, núm. 44.

(84) Part. 5, tít. X, ley XII. Hevia Bolaños observa, con apoyatura doctrinal (Escobar) y no legal, que un compañero no se puede apartar de la compañía hasta transcurrido por lo menos un año de su constitución, Curia Philipica, parte II, lib. I, cap. III, núm. 37.

un lado, la que sostiene que el efecto de la renuncia es la disolución de la compañía —Gregorio López, Miguel Bartolomé Salón y Juan de Hevia Bolaños—, por otro, la que afirma que el pacto se mantiene, sin solución de continuidad, entre los compañeros que permanecen unidos en la negociación —Pedro de Ubaldis y Felicio— (85).

La discusión que, en torno a estas dos posturas, mantuvo la doctrina mercantil medieval y a lo largo del Antiguo Régimen, pensamos es más teórica que real, ya que sólo se puede aplicar a las compañías que se constituyen tácitamente. Para el resto de las compañías personalistas consideramos clara la disolución del contrato en el caso que comentamos. En efecto, si un compañero colectivo en una colectiva o comanditaria desea, y logra, apartarse de la misma, su primera preocupación será que su nombre no se refleje en el de la compañía, para no ver hipotecado su patrimonio en unas operaciones que, desde el momento de su separación, no realiza ni supervisa. Esta operación requiere la modificación de la carta de compañía. Por tanto, la defección de un compañero lleva al replanteamiento de la existencia de una asociación mercantil que nunca podrá ser la misma que la anterior ya que, en el mejor de los casos, tendrá una modificación sustancial: responderá a una nueva razón social y contará con unos recursos diferentes.

Si el caso se plantea con un socio comanditario, se pue-

(85) Martínez Gijón, La compañía..., pp. 248 a 251.

den producir dos situaciones: una, consistiría en que, de resultas de esta renuncia se redujera el capital o industria aportados; por tanto, igual que en el caso anterior, para continuar la negociación, los restantes socios habrían de realizar un nuevo contrato del que saldría una compañía con nuevas características. La segunda situación es la que se produciría si el comanditario fuera sustituido por otro que se hiciera cargo de su aportación. En ese caso quedaría asegurada la continuidad de la compañía por cuanto únicamente habría de realizar un cambio de nombres en sus libros de contabilidad. Aún en este caso, legalmente sería necesario consignar el cambio de nombres en la carta de compañía.

Las sociedades de capitales, en las que la constitución de un patrimonio social independiente del de los socios y la libre transmisión de las acciones son características fundamentales, tienen su existencia asegurada al margen de las personas que la compongan. Esta es una de las grandes ventajas por las que el desarrollo económico necesita la formación de este tipo de sociedades: las anónimas. En ellas, el cuerpo social no queda comprometido ante los posibles cambios de los intereses de sus componentes. Estos, por su parte, tampoco están obligados a realizar complejos trámites y rendiciones de cuentas para separarse: les basta vender sus acciones en el mercado.

La Ley XIX, título X, Partida 5 trata de "por qué razones se puede partir un compañero del otro antes de tiempo". En realidad, las causas que se ennumeran bajo este epígrafe

indican situaciones límite en las que se debe producir una ruptura de contrato, más que argumentos que avalen la decisión individual de renuncia que estamos comentando. Dichas razones son las siguientes:

—Por incompatibilidad con un compañero, lo que refleja la importancia de las relaciones personales en las compañías legisladas por el texto de las Partidas. En sus mismas palabras "quando alguno de los compañeros es tan brauo, o de tan mala parte, . o que ouiesse en sí otras maneras semejantes destas, que los otros compañeros non le pùdiessen sofrir, nin beuir con el en buena mano". Es la pérdida de la affectio ya mencionada.

—Por su descalificación como comerciante, como entrar al servicio del rey o perder las facultades mentales.

—Por ruina. Si un compañero se ve obligado a realizar la cesión de sus bienes en favor de sus deudores, debe renunciar a la compañía al no poder hacerse responsable de sus negociaciones.

Aunque de aplicación más clara en las compañías universales, debemos reseñar la garantía que la legislación otorga a los compañeros que son víctimas de uno de ellos que, con dolo o malicia, rompe el compromiso con la asociación. Si se prueba que dicho compañero, por no compartir unas ganancias futuras, que prevé grandes, abandona la compañía universal o que deja la compañía particular para realizar por su cuenta una operación lucrativa que entra dentro del ámbi

to del objeto social, la sociedad se liberta de él, pero él no se liberta de la sociedad. En otras palabras, ésta participa de las ganancias de aquél que se separó fraudulentamente, mas no de sus pérdidas; y éste participará de las pérdidas más no de las ganancias de la sociedad (86).

Muerte natural o civil de algún compañero: esta razón implica la disolución inmediata del contrato de compañía a menos que se pacte en contrario ("que maguer muriese alguno dellos, que los otros fincassen en la compañía").

El carácter fuertemente personalista de las compañías colectivas y comanditarias, la responsabilidad ilimitada que en aquéllas tienen todos los compañeros y en éstas algunos, y la responsabilidad personal en cualquier caso, justifica esta causa de disolución de compañía. Por argumentos contrarios a los expuestos y por la clara distinción entre patrimonio social y personal, ésta no se da en las compañías por acciones (87).

La sola prisión, fuga o incluso la quiebra de algún compañero no acaba necesariamente la compañía, según sostiene Juan de Hevia Bolaños, apoyándose en la doctrina mercantil clásica. En estos casos la responsabilidad se transfiere a los herederos de dicho compañero y a sus socios, por el meca

(86) Part. 5, tít. X, ley XII, Hevia Bolaños, Curia Philipica, parte II, lib. I, cap. III, núm. 38.

(87) Part. 5, tít. X, ley X. En las notas (c) y (d) a la ley que comentamos en la edición de las Partidas que manejamos —ya citada— se aclara que a partir de la pragmática de Carlos III de 12 de marzo de 1771 (Nueva Recopilación, lib. 12, tít. 40, ley VII), en España no se conoce la muerte civil, a la que acompañaba la pena de confiscación de bienes.

nismo descrito al tratar de la responsabilidad (88).

b) La liquidación: Una vez decidida y aceptada por los socios la disolución de su asociación, y si no existe una voluntad de renovación del contrato, se inicia el proceso de liquidación, cuyo fin es la total extinción de la compañía. La puesta en marcha de este mecanismo significa que no deben emprenderse negocios comunes, si bien deben proseguir hasta su conclusión las operaciones pendientes, continuando respecto a ellas las mismas obligaciones sociales que antes. De esta incapacidad para realizar nuevas contrataciones se desprende la necesidad de que la nueva situación social sea comunicada a todos aquellos que están relacionados con la compañía —acreedores, deudores, ...— y a los que podrían estarlo en algún momento —comerciantes, vendedores y compradores en general—.

Hasta la puesta en vigor en los diferentes territorios de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737, sin embargo, no existen normas legales que exijan el cumplimiento de requisitos especiales de publicidad de una compañía disuelta por una causa prevista en el contrato o por algunas de las admitidas por el Derecho y a las que se atribuyen efectos automáticos. Por ello, pueden manifestar autores como Felicio o Domínguez Vicente que cuando se disuelve una compañía por el transcurso del tiempo por el que fue concertada, "no

(88) cfr. Nevía Bolaños, Curia Philipica, parte II, lib. I, cap. III, núm. 34.

está obligado el compañero por los contratos celebrados por el otro, aunque a los acreedores no se les haya hecho constar del fin de la compañía" (89). Este texto, al tiempo que se pronuncia por la liberación de un compañero de la responsabilidad sobre los actos ejecutados por otro con mala fe, denota la posibilidad de que no se haya comunicado a los acreedores la disolución de una sociedad, cosa que en ausencia de una legislación general sobre publicidad de situaciones como la que comentamos, se confía se haga de forma individualizada, a las personas relacionadas con la compañía. Debemos observar, sin embargo, que la indefensión del acreedor y del comercio en general en este terreno, se ajusta a una situación general, ya que como se recordará, tampoco existe obligación de legalizar los contratos mediante instrumento público.

Martínez Gijón (90) cita una sentencia rotal romana de 1.648 por la que las sociedades concertadas sin cláusula temporal precisan de la notificación de su disolución en el ámbito mercantil en el que se desenvuelven. Dicha sentencia, incluso aceptando que siente jurisprudencia y sea así considerada por los tribunales mercantiles españoles, dado que se refiere a las menos de las sociedades —sin riesgos de negociación-fijado— no basta a clarificar una situación de inde

(89) H. y A. Felicio, Iractatus, XXII, núms. 12 y 13. Subrayado mío.

(90) Martínez Gijón, La compañía..., p. 257. La sentencia en H.A. Felicio, Iractatus, XXX, 68 y en F. Salgado de Somoza, Labyrinthus creditorum ad litem per debitum communem inter illos causatam, Ludguni, 1.757; XXX, núm. 10.

finición cuyos inconvenientes denuncian e intentan poner fin
las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737:

"Y atendiendo a que en algunas ocasiones, por malicia o mala fe de alguno, o algunos interesados que han estado en compañías, han proseguido después de disueltas, como si estuviesen subsistentes, se ordena y manda, para evitar semejantes fraudes, y perniciosos inconvenientes, que en adelante, siempre que se disolvieran semejantes compañías, estén obligados sus individuos a participarlo luego a todos aquellos, con quienes hayan tenido y tengan cuentas, y correspondencias de Comercio, para que así enterados, y sabidores de dicha finalización, y disolución de Compañía, se corra, y proceda en esta fe con todo conocimiento por unos, y otros" (91).

Podemos establecer tres fases en la liquidación que, si bien no están así definidas en la legislación, son práctica aceptada. La primera consiste en el pago de deudas y cobro de los créditos de la compañía, y es la plasmación de una de las reglas que citábamos más arriba: la conclusión de los negocios sociales pendientes. La realización de esta operación permite iniciar el segundo de los momentos del proceso, la restitución de los capitales aportados por los socios. En caso de que se hayan producido pérdidas que hayan mermado el capital, esta frase se transforma en la división del haber social y su entrega tal y como observamos bajo el epígrafe del reparto de pérdidas y ganancias; si el capital social se ha conservado íntegro, se devuelve a sus dueños la parte aportada y, en su caso, se realiza una tercera operación, consis-

(91) Ordenanzas del Consulado de Bilbao, 1.737, cap. X, núm. XVII.

tente en el reparto de beneficios, también según las reglas de proporcionalidad establecidas en cada compañía.

Este proceso puede ser tramitado por los socios o por un juez, sin que exista legislación al respecto aunque es razonable suponer, que en el transcurso del proceso de liquidación de una compañía surjan diferencias entre los socios (por ejemplo, a la hora de valorar las mercancías) que deben ser, de alguna forma, dirimidas.

Dichas diferencias pueden dar lugar a una reclamación, bien del mismo hecho de la división, cuya causa se encuentra injustificada, bien por la consideración de que la división se ha realizado sin guardar la proporcionalidad que se había pactado. las Partidas contemplan la posibilidad de tal reclamación y, sin arbitrar un método para la comprobación de su veracidad, estipula "que estonces deue ser tornado a la compañía aquello que de esta guisa tomaron e deue ser partido otra vez entre todos sus compañeros" (92). Asimismo, continúa la ley, la posibilidad de reclamación prescribe, si bien no se fija su plazo, cosa que por otra parte, tampoco aclara la doctrina (93).

Desde sus orígenes fueron los Consulados los encargados de entender en los conflictos mercantiles. Precisamente, como destaca Gacto, es esta atribución la que primero aparece en los textos que crean estos organismos. Los Consulados del li

(92) Part. 5, tít. X, ley XV.

(93) cfr. Martínez Gijón, la compañía, p. 278.

toral mediterráneo desde el siglo XIII y los castellanos desde finales del XV (Burgos), ejercen esta función.

La separación de la jurisdicción mercantil de la ordinaria, tuvo por objeto la simplificación y la rapidez de los procesos, sustituyendo a los abogados por hombres "prácticos del comercio". El incremento del negocio y la concentración de funciones en tres personas —prior y dos cónsules— hacía que los pleitos fueran más lentos de lo deseado. De ahí que las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737 intentaran, según el modelo francés, una nueva simplificación del proceso que sirviera a los casos sencillos de forma que sólo llegaran hasta el Consulado los más complejos. Las Ordenanzas obligan a las sociedades a fijar en su escritura su sometimiento, en caso de conflicto, al arbitraje de "dos o más personas prácticas" cuyo nombramiento puede correr a cargo de la misma sociedad:

"Y por que al fin de las Compañías, estándose ajustado sus cuentas se suelen suscitar entre los interesados de ellas muchas dudas, y diferencias de que proceden pleytos largos, y costosos, capaces de arruinar a todos, como la experiencia lo ha mostrado; para evitar semejantes daños, y para que las tales dudas, diferencias y pleytos sean decididos sumariamente, se ordena: que todos los que formaren compañía, hayan de capitular y poner cláusula en la Escritura que de ella otorgaren, en que digan y declaren, que por lo tocante a las dudas y diferencias, que durante ella, y a su fin se les pueden ofrecer, se obligan, y someten al juicio de dos, o más personas prácticas, que ellos o los jueces de oficio nombrasen, y que estarán y pasarán por lo que sumariamente juzgasen, sin otra apelación, ni pleyto alguno; cuya cláusula se les hará guardar, y observar, baxo la pena convencional, que también deberá imponerse,

o la arbitraria que los jueces les señalen (94).

Los árbitros podían desarrollar su actividad judicial muy libremente, sin más exigencia legal que la de realizarla "sumariamente", como señala el texto citado. La escasez de la documentación conservada al respecto, lo que se explica en parte por la propia naturaleza del acto, nos impide describir con precisión un procedimiento que parece muy rico en casuística. Como concluye Petit, "se trataba, en definitiva, de llegar a la verdad material por cualquier medio útil al efecto, siempre dentro de un "estilo de mercaderes" (Ordenanzas del Consulado de San Sebastián, 8, 16), concretado en un híbrido entre intervención pericial y juicio de equidad, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las normas y usos mercantiles" (95). Aunque el texto citado rechaza la posibilidad de apelación, algunas escrituras contienen una cláusula que contempla la "revisión" del litigio, ante el Consulado o ante unos nuevos árbitros. Tales contratos no fueron rechazados en el Consulado pero falta documentación para describir este tipo de proceso. La apelación estaba permitida por ley y, desde luego, se ejerció en los conflictos de envergadura.

En teoría, el esquema dibujado en la legislación es el siguiente: la primera instancia se resolvía en el Consulado por el Prior y los Cónsules. La apelación, ante el Juez de Alza-

(94) Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737, cap. X, núm. XVI.

(95) Petit, La compañía..., p. 255. En general sobre todo esto, pp. 245-256.

das, en el mismo organismo. La tercera instancia, ante el proprio Juez, auxiliado por dos comerciantes diferentes a los que dictaron la primera sentencia, los recolegas (96). Desde el siglo XVII, y también en teoría, la Junta de Comercio se convirtió, en su sala de justicia, en el máximo tribunal mercantil.

No obstante, la larga lista de disposiciones legales dictadas para reafirmar la autoridad de ambas instituciones (97) demuestra la ausencia de una normativa clara, precisa y efectiva.

El esfuerzo racionalizador iniciado, al menos, en 1.679 con la creación de la Junta de Comercio, vió disminuidos sus resultados al permanecer vigentes los problemas derivados de la propia e inalterada estructura socio-política del Antiguo Régimen. Enumeremos algunos sin ánimo de exhaustividad: la subsistencia del particularismo legislativo, el solapamiento de competencias entre Hacienda e Indias, la permanencia de los fueros personales, la incapacidad para dirimir conflictos jurisdiccionales locales entre la Audiencia y los Consu-

(96) Gacto, Historia..., pp. 89 a 157 lo describe con precisión

(97) Entre otras: DD. de 6 y 21 de enero de 1.683 (Larruga, Historia..., I, pp. 18-19); R.C. de 15 de marzo de 1.683, sobre la apelación ante la Junta de Comercio (Novísima Recopilación, libro IX, tit. I, ley I); sobre lo mismo, R.D. de 19 de enero de 1.692 (Larruga, Historia..., I, pp. 63-65); reafirmación de la competencia de la Junta de Comercio y disposición de que se le envíen todos los pleitos mercantiles pendientes de dictamen en apelación en R.C. de 15 de mayo de 1.707 (AHN, Consejos, lib. 1.475)... y, todavía, sobre lo mismo, R.D. de 16 de junio de 1.770 (AHN, Consejos, lib. 1.514, núm 67). Sobre los Consulados, también es largo el camino desde el Privilegio de 1.401 dado al de Barcelona o las Ordenanzas de Burgos de 1.492 hasta las homologadas para los nuevos Consulados de 1.784-1.786.

lados, etc. (98).

Hasta la configuración del Estado liberal en el siglo XIX que se inicia en este campo con el Código de Comercio de 1.829 no podemos hablar de claridad y homogeneidad en los procedimientos.

c) La quiebra.— Se entiende que un comerciante está quebrado cuando, con un pasivo superior a su activo, sobresee en el pago de sus obligaciones. Esta situación, dada la descalificación mercantil que produce, origina un proceso especial de liquidación que es llamado, asimismo, quiebra.

Dado el riesgo que supone cualquier operación mercantil, situaciones como la descrita son tan antiguas como la propia existencia de la figura del comerciante. Sin embargo, la tipificación del proceso no se produce hasta el siglo XVIII, siendo las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737 el primer texto que se ocupa de modo específico del proceso de la quiebra. Podemos afirmar que los cincuenta y seis párrafos que componen su capítulo XVIII constituyen, no sólo la primera, sino también la única normativa que regula dicho proceso, excepción hecha de las escasas disposiciones aisladas que responden a demandas concretas. Este texto no contempla las quiebras de las compañías, lo que significa una nueva confirma-

(98) Sobre la quiebra, el clásico estudio de J.A. Alejandro García, La quiebra en el derecho histórico español anterior a la codificación, Madrid, 1.970. Quiero destacar, como para el punto precedente, la abundancia de conflictos de jurisdicciones sobre esta materia, subsistentes aún a finales del siglo XVIII (v. R.O. de 7 de abril de 1.780, Larruga, Historia..., VI, f. 1v-3r.

ción de la ausencia de personalidad jurídica de las asociaciones mercantiles del Antiguo Régimen, La quiebra, en las compañías personalistas, se confunde con la de sus miembros colectivos, dado que grado de responsabilidad existente compromete sus fortunas. En esta situación de indefinición legal, las compañías privilegiadas por acciones, con personalidad jurídica, deben improvisar un método para la resolución de tal situación que, en realidad, se ajustará totalmente al vigente para los comerciantes individuales y las compañías personalistas. De hecho, como veremos, es rara la Privilegiada que no termina sus días con un largo y costoso proceso de quiebra.

Procedemos a continuación a resumir la legislación bilbaína, cuya clasificación de las quiebras y definición del proceso de su resolución tuvo una importante y doble influencia. En primer lugar, porque fueron adoptadas por el resto de los consulados a lo largo del siglo XVIII; en segunda, porque la tradición que fueron consolidando tuvo un reflejo indudable en nuestro primer Código de Comercio.

1.- Clases de quiebra: Existen causas por las que un comerciante llega a encontrarse en situación de insolvencia. El reconocimiento de este hecho lleva a que se tipifiquen tres clases de quiebra, cuyas diferencias comportan distintos efectos sobre los derechos del quebrado:

atraso (1ª clase): el comerciante tiene suficientes bienes como para pagar a sus acreedores, pero no se halla

en disposición de poderlo hacer con puntualidad. Es misión de los acreedores, convocados al efecto, la aceptación de un pacto ("convenio de acreedores") para la concesión de una moratoria en los pagos y la fijación del modo de realizarlos. Esta situación no comporta pérdida alguna de derechos (II) (99).

quiebra inculpable (2ª clase): se llama así a la imposibilidad del comerciante de realizar sus pagos, por causas ajenas a su buen hacer mercantil. Ante esta situación, el quebrado debe presentar una exacta cuenta y razón del estado de sus negocios a sus acreedores, "concluyendo en pagar parte de sus deudas con fiadores, o sin ellos, dentro de ciertos plazos". A esta clase de quebrados se les retendrá la voz activa y pasiva en el consulado (III).

quiebra culpable (3ª clase): incurre en ella aquel comerciante que arriesga los caudales ajenos con dolo y fraude, "perdiendo conocidamente muchos caudales, continuando en esto mucho tiempo, haciendo cada día de mayor entidad su quiebra, alzándose finalmente con las mercancías y dinero que pueden, huyendo de la justicia". Estos individuos son calificados por la ordenanza de "infames ladrones públicos, robadores de hacienda ajena" y, capturados, serán entregados por el Prior y Cónsules a la Justicia Ordinaria (IV).

2.- Procedimiento: En la definición de las clases de

(99) Estas páginas, como se ha dicho, resumen el capítulo XVIII de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737. Los romanos entre paréntesis se refieren al párrafo del mismo que se cita.

quiebras, se ha aludido someramente al trámite que se sigue en cada una de las situaciones. Podemos afirmar que éste, se reduce en el atraso, a la convocatoria de Junta de Acreedores por parte del propio comerciante y al pacto, entre ambas partes, de una moratoria. Caso de no lograrse el acuerdo, se abriría un proceso como si de una quiebra de segunda o tercera clase se tratara. La tramitación del proceso en los otros dos tipos de quiebra es idéntica, excepción hecha de que si, a lo largo del mismo, se demuestra la culpabilidad del quebrado, debe entrar en acción la justicia ordinaria. Describiremos brevemente, a continuación el desarrollo de dicho proceso:

Solicitud de la quiebra: el comerciante que, considerando su incapacidad de satisfacer sus deudas desee la apertura de un proceso de quiebra, ha de realizar un balance detallado de la situación de su negocio y entrarlo al Prior y Cónsules (número V) que, trasladándose con un Escribano a la casa pretendidamente quebrada, realizará un inventario de todos los bienes que en ella se contengan (VI a IX). Dichos bienes, así como la correspondencia mercantil, serán inmediatamente confiscados y puestos en manos de un(os) Depositario(s) interino(s) nombrado(s) por el Prior y Cónsules, hasta que la Junta de Acreedores realice una nueva elección o confirme ésta (XI y XII).

Primera Junta de Acreedores: que será reunida a convocatoria del Prior y Cónsules "lo antes que se pueda" (XIII). Este colectivo debe nombrar los síndicos - comisarios

que se hagan cargo de los libros y papeles del comerciante para el reconocimiento del número exacto de acreedores y de la cantidad de su reclamación, así como del crédito con que se puede responder a las mismas.

Período de reclamaciones: los acreedores deberán presentar documentación justificativa de su demanda en un plazo de ocho días a partir de su primera convocatoria para los que habitan en la propia ciudad y de quince para los domiciliados fuera de la misma (que habrán sido avisados por los comisarios) (XIII y XIV).

Segunda Junta de Acreedores: los comisarios, una vez realizado el análisis de los libros del comerciante y de la documentación presentada por sus acreedores, convocará una nueva Junta de Acreedores a la que informará de sus conclusiones. En esta Junta se votarán las propuestas de ajuste que se presenten que, en todo caso, deberán ser aprobadas por una mayoría cualificada que suponga las tres cuartas partes de acreedores con dos tercios de créditos o al contrario (XVIII a XX). La conversión en dinero de los géneros del comerciante quebrado y la conclusión de las negociaciones pendientes para dar cumplimiento al convenio de pago pactado será competencia de los síndicos comisarios.

La disconformidad con el acuerdo prolonga un procedimiento que se establece sea de corta duración e inicia la vía de apelación descrita en el punto anterior y que no está regulada por las Ordenanzas.

CAPITULO 2
LAS COMPAÑIAS PRIVILEGIADAS EN LA
ESPAÑA DEL ANTIGUO REGIMEN

En este punto se aborda el estudio de una forma peculiar de compañía, que no se ajusta a la legislación descrita. Se trata de la privilegiada, que se regía por una normativa particular, creada a lo largo de la vida de cada cuerpo mercantil. Al analizar el conjunto podemos ver, sin embargo, una cierta homologación de sus normas, que permite generalizar y obtener la imagen de un tipo con características comunes y que fue precedente —en la teoría y en la práctica— de la moderna sociedad anónima. En la teoría, porque en ella se encuentran las características constitutivas de la anónima, si bien distorsionadas por el privilegio; en la práctica, porque su desarrollo influyó en la peculiar evolución de las sociedades de capitales de la España de la primera mitad del siglo XIX.

Por las razones expuestas, en estas páginas se combinará el análisis de la normativa particular de estas compañías con su práctica, también singular, para diseñar la historia de la figura. Responden, sin embargo, al mismo esquema trazado en el punto anterior: cómo se constituyen estas compañías, cuáles son sus características y cómo funcionan.

2.1.- La justificación del privilegio en el marco del comercio exterior.

La utilidad de las compañías como forma de organización para emprender negocios lucrativos en los sectores financiero, comercial y manufacturero, ya era teóricamente conocida desde la Alta Edad Media, si no antes. Hemos reseñado que su evolución tuvo diferentes ritmos en los distintos sectores. El crecimiento del negocio motivó la evolución de las formas de asociación y requirió su regulación, que se fue perfeccionando entre el siglo XIII (Partidas) y el XVIII (Ordenanzas del Consulado de Bilbao). El propio desarrollo económico explica la aparición de las sociedades comanditarias por acciones, que, sin embargo, no serán contempladas en la legislación del Antiguo Régimen. Son sociedades que combinan el carácter de asociación de personas con el de ser asociación de capitales.

Esta evolución en las formas asociativas no explica, sin embargo, un nuevo tipo que tuvo un gran auge en el Antiguo Régimen: la compañía privilegiada. En ella, se daban las notas que caracterizan la moderna sociedad anónima junto a un elemento peculiar, cual es el privilegio. Así, por una parte, la compañía privilegiada fue el fruto de una experiencia mercantil de siglos, que encuentra en la responsabilidad limitada y en la personalidad jurídica la solución idónea para que los problemas de centralización de capital no sean un freno para la realización de empresas cada vez mayores;

por otra, escapa a la tradición de libertad e independencia que caracterizan a la compañía mercantil para caer en el ámbito del control estatal.

La razón fundamental que, a nuestro juicio, explica esta peculiar evolución de la sociedad mercantil entre los siglos XVI y XVIII, estriba en la estructura del comercio colonial en el marco político del Antiguo Régimen. La extensión del comercio a países situados fuera de la órbita de la cultura de la Europa Occidental, incrementó la demanda de capital para fines permanentes, como el establecimiento de factorías y la construcción de fortificaciones para el mantenimiento de fuerzas militares y representaciones diplomáticas o la organización de un aparato administrativo en unas tierras sin colonizar. De este modo, el comercio tomó un giro político esencialmente nuevo, pues llevaba aparejados problemas que el que se venía sosteniendo con otras naciones no planteaba y que en ningún país europeo corrían a cargo de entidades de carácter mercantil. Encontrar el tipo adecuado de organización para la realización de un comercio de estas características y cuya utilidad estaba fuera de duda, fue el primer problema que tuvieron que abordar los estados europeos ya desde el siglo XV. Como apuntaba Heckscher, y así lo intentaron en un primer momento España y Portugal, "la solución más asequible para resolver los problemas del nuevo comercio marítimo habría sido la de crear un comercio de Estado puro (100).

(100) E. Heckscher, La época mercantilista, México, 1.943, p. 323.

La imposibilidad práctica de esta solución es lo que justifica en estos siglos la aparición de la compañía privilegiada, que resultó indispensable para suplir la existencia de un poder público efectivo. Así se observa en los dos puntos fundamentales en que se basaban las cartas de concesión que el Estado otorgaba a las compañías privilegiadas y que reflejan los intereses de las partes:

1) La compañía se obligaba a realizar servicios al gobierno, tales como la construcción de barcos, la fundación y mantenimiento de establecimientos coloniales e incluso a organizar su defensa y la de la nación, en las posibles guerras en las que ésta se viera implicada.

2) A cambio, la nación garantizaba a los comerciantes ayuda y protección para los barcos de la compañía y, el monopolio del comercio en una región o para una mercancía determinada y, en ocasiones, otorgaba la soberanía en los territorios concedidos.

De esta forma, quedaba sancionada la doble utilidad de la compañía mercantil privilegiada. De una parte, los comerciantes obtenían garantías para la realización de un negocio lucrativo; de otra, el Estado veía extenderse sus dominios. La contradicción que supone que la conquista de libertades comerciales (con la expansión del comercio exterior y la abolición de barreras aduaneras) e industriales (con la libertad de producción frente a las limitaciones gremiales) se realice a través del privilegio, sólo será rota con el

triunfo de las ideas liberales en el terreno económico.

Lo expuesto obliga a realizar una somera descripción del papel que jugaba el comercio exterior en la Edad Moderna y del desarrollo de la compañía privilegiada en Europa, antes de adentrarnos en el análisis de este tipo de asociación en España.

En los siglos XV y XVI, las actividades comerciales encuentran una nueva dimensión con los descubrimientos —especialmente, de América— y la apertura de rutas marítimas intercontinentales. Los territorios recién conocidos, no ofrecen solamente la gloria del descubrimiento y, para las viejas monarquías cristianas, de la evangelización. También amplían de manera considerable el mercado para la producción manufacturera europea que se ve así potenciada y, sobre todo, son una fuente inapreciable de materias primas para el consumo (cacao, café, té especias...), la transformación (algodón, palo de campeche...) y de metales preciosos. La enumeración no quedaría completa si no aludiéramos a la gran aportación del continente africano: su propia población, convertida en mano de obra esclava, aplicada a la explotación de las nuevas tierras (agricultura, minería) y al cuidado de sus clases dominantes.

Las transformaciones que esta revolución comercial supusieron para la industria y la sociedad de la Edad Moderna estaban asociadas a políticas definidas como mercantilistas. En ellas, el comercio fue la preocupación fundamental, al ser considerado el medio idóneo para el enriquecimiento na-

cional. Esta preocupación se reflejó explícitamente en contratos como el de la Compañía General del Comercio de Suecia (1.525) o el de la Compañía del Mar Báltico (1.669), al que corresponden las siguientes palabras:

"Teniendo en cuenta que el comercio constituye el medio más adecuado para reconciliar a las diversas naciones y mantener una buena armonía mutua entre los espíritus más discordes (...), expande la abundancia (...) hace a los pueblos felices y a los Estados florecientes" (101).

De manera semejante se expresa Savary en su clásico tratado Le parfait négociant (1.675). Son, en definitiva, desarrollo de la idea que alcanzó su máxima expresión teórica en la obra de Mun, director, precisamente, de East India Company:

"El tráfico de mercancías no es sólo la encomiable práctica por la cual se realiza con tanto provecho el intercambio entre las naciones, sino también (como podría llamarlo) la verdadera piedra angular de la prosperidad de un reino, cuando en él se observan escrupulosamente algunas reglas concretas" (102).

"Considerad, pues, la verdadera forma y valor del comercio exterior, el cual es: la gran renta del rey, la honra del reino, la noble profesión del comerciante, la escuela de nuestros oficios, la satisfacción de nuestras necesidades, el empleo de nuestros pobres, el mejoramiento de nuestras tierras, la manutención de nuestros marineros, las murallas de los reinos, los recursos de nuestro tesoro, el nervio de nuestras guerras, el terror de nuestros enemigos. Por to-

(101) Cit. en ibidem, pp. 721 y 722.

(102) Thomas Mun, Discurso acerca del comercio de Inglaterra con las Indias Orientales (1.621), México, 1.954, p. 159. Subrayado mío.

das estas grandes y poderosas razones muchos estados bien gobernados fomentan grandemente esta profesión y cuidadosamente estimulan esta actividad, no solamente con una política que la aumente, sino también con poder para protegerla de daños externos, pues saben que entre las razones de estado es la principal el mantener y defender aquello que los sostiene a ellos y a sus haciendas" (103).

Estos textos escogidos de las obras del autor que es considerado como el teórico por excelencia del mercantilismo, designan al comercio como base fundamental de la riqueza de una nación y como motor de la prosperidad y el desarrollo económicos. Por ello —concluye Mun— su mantenimiento y defensa está "entre las razones de estado". El objetivo consistía en "siempre observar esta regla: vender más anualmente a los extranjeros en valor que lo que consumimos de ellos" (104). En definitiva, conseguir que la balanza general de comercio arrojara un saldo positivo.

La preocupación por la observación de la balanza pasaba a primer plano, por cuanto era considerada índice del progreso o retroceso del crecimiento. Desde 1.696, Inglaterra poseía un departamento presidido por el Inspector General de Importaciones y Exportaciones constituido a tal fin. En 1.726, Francia siguió sus huellas, pero hasta 1.756 no se dispusieron en tablas generales las cantidades que ofrecía el movimiento del comercio exterior, y únicamente en 1.781,

(103) I. Mun, La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior (o la balanza de nuestro comercio exterior es la norma de nuestra riqueza), (ed. póstuma 1.664), México. 1.954, p. 151.

(104) Ibidem, p. 58.

Necker creó un departamento semejante al inglés para inspeccionar la balanza general del comercio.

La importancia económica del Nuevo Mundo motiva que el comercio marítimo colonial sea la partida que ofrece más posibilidad de desarrollo dentro del comercio exterior; será esta actividad, en consecuencia, la que atraiga la mayor atención por parte de los estados mercantilistas, que luchan por incrementar su participación en este campo.

Las relaciones con el mundo colonial estaban marcadas por la aceptación del principio jurídico que determinaba que el comercio con los nuevos territorios debía ser monopolio de sus respectivas metrópolis. Algunos autores han denominado a este acuerdo "Pacto colonial" (105). Sin embargo, esta teoría, que ya produjo en el siglo XV una división ideal del mundo refrendada por el papado (especialmente la Bula Inter caetera de 1.493), no impedía que potencias marítimas como Francia, Inglaterra y Holanda, en cuanto la debilidad de las armadas portuguesa y española lo permitiera, intentaran modificar por la fuerza la situación pactada y buscaran convertirse a su vez en metrópolis de territorios cada vez más amplios. En otro frente, se intentaba romper el monopolio, teóricamente aceptado, mediante el contrabando. De ahí la necesidad de una armada fuerte y de una estructura comercial ágil para sostener el dominio sobre las colonias.

(105) v., por ejemplo, sobre esto, Haring, Comercio y Navegación entre España y las Indias, México, 1.979, (1ª reimpr.), pp. 121 y ss, y A. García-Baquero, Cádiz y el Atlántico (1.717-1.778), Sevilla, 1.976, cap. II, 1.

El papel jugado por España en el descubrimiento y colonización de América, provocó una actitud defensiva en su concepción del comercio internacional mientras, en el siglo XVII, alcanzaba desarrollo teórico el mercantilismo agresivo en Francia (Colbert) e Inglaterra (Mun) (106). Esto se combinaba con la tradición de una temprana —y ya mencionada— preocupación por la producción manufacturera. Fruto de ello fue la extensión de la compañía privilegiada a la industria y, en el aspecto que nos ocupa, la tardía recepción del clásico mercantilismo inglés. Por ello, en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando ya se ha desarrollado —y muerto— la fisiocracia en Francia y cuando ya se ha editado la Riqueza de las Naciones en Inglaterra, sigue siendo importante la concepción del comercio como primera causa de la riqueza, por lo que debe ser protegido por el Estado:

"el comercio no crea nada, pero es el alma de la industria y ésta lo es del Estado" (107).

"Hay que considerar al comercio como fundamento principal de todos los demás intereses de la Monarquía pues es vivificador de la agricultura, las artes, de las fábricas y de las manufacturas" (108).

(106) v. obras de Mun ya citadas y P. Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, París, 1.873, esp. vol. II.

(107) Bernardo Ward, Proyecto económico en que se proponen varias providencias dirigidas a promover los intereses de España, con los medios y fondos necesarios para su planificación, escrito en el año 1.762 por —, Joaquín Ibarra, imprs. Madrid, 1.779, p. 119.

(108) Campillo, Nuevo sistema económico para la América, con los males y daños que le causa el que hoy tiene, de los que participa copiosamente España y remedios universales para que la primera tarea tenga ventajas considerables y la segunda mayores intereses, Imp. de Benito Cano, Madrid, 1.789, p. 64.

La Secretaría de la Balanza no se creó, a propuesta de Gardoqui, sino hasta 1.786 y fue sustituida en 1.802 por el Departamento del Fomento General del Reino y la Balanza. Mientras, la fisiocracia se abría camino lentamente en España. Mientras, los últimos mercantilistas ingleses habían abierto paso a la teorización del libre comercio; mientras, Quesnay y Adam Smith, trasladaron definitivamente a la producción las esperanzas de obtención de riqueza y se criticaba la preocupación por la Balanza como uno de "los trastornos políticos que causó en Europa el descubrimiento de las Américas" (109).

En este marco se encuadra el debate sobre la creación de las compañías privilegiadas. En un escenario en el que los comerciantes, basándose en la utilidad que tiene para su país la actividad que desarrollan, reclaman la existencia de un Estado fuerte que proteja sus transacciones y en el que el Estado adoptó, sobre el mismo argumento, una posición protectora, propulsora y, en ocasiones, directora de determinadas empresas mercantiles. Así, durante mucho tiempo, la reglamentación estatal fue condición general en la expansión de los mercados más allá de sus límites medievales, si bien no fueron desconocidas las dudas acerca del beneficio universal de su intervención; no se les ocultaba a los mercantilistas las divergencias entre el interés de la comunidad (que no estaba sólo compuesta por la burguesía comer-

(109) Canga Argüelles, Diccionario de Hacienda, voz "Balanza de Comercio"; A. Smith, Investigación acerca de las causas de la riqueza de las Naciones, parte I, libro IV, cap. III.

cial que se beneficiaba de esta política) y el de los individuos (110).

2.2.- La compañía mercantil privilegiada en Europa (111).

2.2.1.- Holanda.

Con frecuencia se ha destacado el escaso desarrollo que en los Países Bajos tuvieron las sociedades de capital en el Antiguo Régimen y la capacidad de este país para realizar un próspero comercio exterior con organizaciones sencillas. El mantenimiento del poderío mercantil alcanzó, sin embargo, un replanteamiento a la hora de enfrentarse con el comercio transoceánico. En el nuevo tipo de empresa creado para tal objeto, el sello puramente estatal fué muy importante y se puso de manifiesto especialmente en la estructura y en la propia historia de la Compañía Holandesa de las Indias Orien-

(110) El reconocimiento del conflicto (entre personas, grupos y a nivel internacional) en el mercantilismo, como premisa que hacía necesaria la intervención del Estado frente a la solución dada por la escuela clásica, fue analizado brillantemente por William Grampp en 1.952. La versión española de este artículo: "Los elementos liberales en el mercantilismo inglés", en Spengler y Allen (drs.), El pensamiento económico de Aristóteles a Marshall, Madrid, 1.971, pp. 75-105.

(111) Los epígrafes sobre las Compañías holandesas, inglesas y francesas deben mucho en sus líneas generales, a una obra ya clásica, E. Heckscher, La época mercantilista y a las recopilaciones: L. Blussé y F. Gaastra (eds.), Companies and Trade (Essays on overseas trading companies during the Ancien Regime), Leiden University Press, Leiden, 1.981, y M. Mollat (ed.), Sociétés et compagnies de commerce en Orient et dans l'Océan Indien, S. E. V. E. P. E. N., París, 1.970.

tales.

El antecedente más antiguo de esta compañía —el primer intento de establecer un comercio con Indias— es la Compagnie Van Verre, entidad puramente privada, constituida en 1594. En los años siguientes se crearon una decena de compañías con el mismo objeto con sede, principalmente, en Holanda y Zelanda. Las vóór-compagnieën (nombre genérico con que se conoce a estas entidades) eran asociaciones de comerciantes sin carácter corporativo; es decir, en las que cada expedición mercantil constituía una empresa aparte, tras la que cada socio recibía la porción de capital aportada junto con el beneficio que le correspondía. En cuanto a su estructura, se daban en ella dos clases de copartícipes; los principales (*bewindhebbers* o directores) eran los responsables de la marcha de la expedición y debían aportar las sumas necesarias para completar el capital que ésta requería. Los socios secundarios no entraban en la compañía con su nombre, sino bajo el de uno de los principales, considerándoseles, en ocasiones, como acreedores con derecho a cobrar intereses fijos (equiparables a los modernos obligacionistas). En ocasiones se ha puesto de manifiesto la existencia de una tendencia hacia una organización más fuerte, que se derivaría, bien del gran número de participantes en cada expedición, bien de la coincidencia de las mismas personas en distintos viajes. Sin embargo, fue un factor externo el que realizó su unificación para el comercio ultramarino.

En efecto, las distintas autoridades de las Provincias

Unidas veían con gran inquietud la organización descrita; en primer lugar, porque la competencia que se derivaba de la existencia de diferentes compañías, era un peligro para la marcha general del comercio, no sólo por la emulación de las sociedades entre sí, sino porque la falta de continuidad de las empresas permitía que compañeros de una expedición fuesen rivales en otras; en segundo lugar, por razones políticas y militares, ya que dicho sistema impedía la formación de un frente único ante el Rey de España, Señor de los mares que bañaban las Indias Orientales.

Esta última razón fue, fundamentalmente, la que motivó que los Estados Generales impulsaran las negociaciones encaminadas a lograr la fusión de las vóór-compagnieën en una única organización para la realización del comercio ultramarino, lo que se logró en 1.602 con la constitución de la Compañía Unificada de las Indias Orientales. Con ella se pretendía lograr el monopolio del comercio en aquellas tierras, sin que se planteara una política sistemática de conquista y colonización, cosa que, en alguna medida, se produjo como consecuencia de la actividad mercantil continuada y para la que se facultó a la compañía en su carta de concesión (112).

(112) A partir del siglo XVIII, la Compañía holandesa emprendió actividades agrícolas con nuevo impulso y fomentó la especialización de algunas islas de Indonesia en la agricultura de exportación. No hay duda de la existencia de pactos con dirigentes locales, que ponían la mano de obra indígena al servicio de la Compañía, así como de la utilización de dicha mano de obra en servicios de carácter privado por parte de los empleados de la misma. Parece innegable, sin embargo, que si bien la dominación política fue muy importante, el impacto de las Compañías europeas en la situación política del conjunto asiático fue marginal, al contrario que en América del Sur (A. Gunder Frank, La acumulación mundial, 1.492-1.789, Siglo XXI, Madrid, 1.979, p. 123; Noels Steensgaard, "The companies as a specific institution in the History of European Expansion", en L. Blussé y F. Gaastra (eds.), Companies and Trade, p. 252, o L. Dermigny, "La organisation et le rôle des companies", en Motlat (ed), Sociétés et compagnies, p. 451).

Las prerrogativas concedidas a la compañía son similares a las de sus homónimas francesa e inglesa. El documento fundacional le otorgó el monopolio del comercio en todo el territorio comprendido entre el cabo de Buena Esperanza y el estrecho de Magallanes durante todo el tiempo que se mantuviera la concesión, sin especificar la duración de la misma (a. 34): se le concedieron, para la mejor realización de su actividad, una serie de derechos casi soberanos, como concertar tratados con príncipes extranjeros, construir fortalezas, equipar flotas, imponer tributos, dictar leyes locales y administrar justicia (a. 35). Todo ello la configuraba como "un Estado dentro de otro Estado", según una expresión clásica, aunque, como veremos, su autonomía fue muy relativa. Como contraprestación, una parte de sus beneficios y del valor de los buques capturados, pasaba al gobierno (113).

La compañía se constituyó como un cuerpo unificado, dotado de personalidad jurídica, bajo una dirección que representaba las diferentes instancias territoriales. Estaba formada por seis cámaras (Amsterdam, Zelanda, Rotterdam, Horn y Enkhuizen), formadas por todos los socios de las diferentes provincias. Estos organismos tenían las más altas atribuciones, ya que entre ellas se repartían los compromisos que asumía el cuerpo mercantil. Así, cada cámara debía desembolsar una parte proporcional del capital social, vender una parte alí-

(113) Femme Gastra, "The shifting of trade of de Dutch East India Company", en L. Blussé y F. Gastra (eds.), Companies and Trade, pp. 57-66.

cuota de la mercancía que se recibía de ultramar, nombrar parte de los funcionarios de la Compañía en las Indias, así como repartir el dividendo que fijaba la dirección central.

La dirección de estas cámaras coincidió en un principio con las de las viejas sociedades (aa. 18 a 23) y se dispuso que en lo sucesivo las vacantes se cubrieran "por las autoridades políticas de la provincia correspondiente" (a. 26). Pronto, la provincia de Holanda transfirió esta facultad a la ciudad y por extensión así lo hicieron el resto de las cámaras, con lo que se puede afirmar que en la práctica, los burgomaestres de las ciudades se convirtieron, automáticamente, en bewindhebbers (114). La nueva carta de concesión de 1.623 reforzó el órgano directivo con la participación —en igual número— de mayores accionistas (a. 3).

Las cámaras, a su vez, elegían la Asamblea General o el Colegio de la compañía, también llamado "los diecisiete señores" (a.2). Estaba formado por un comité de los bewindhebbers: ocho de Amsterdam, dos de Zelanda, y uno o dos (variando la proporción a lo largo de la historia de la compañía) del resto de las Cámaras. Se reunían sólo tres veces al año, pero tenían una enorme variedad de funciones, como fijar el número de barcos de cada expedición, la forma de equipamiento y la fiscalización de la administración de las cámaras. El modo de elección de los directores, junto a la particular estructura del organismo que constituyen, llevaba al absoluto dominio de Amsterdam sobre la compañía, ya que con el apo

(114) Cfr. E. Heckscher, La época mercantilista, p. 345.

yo de un sólo miembro ostentaba la mayoría (115).

A diferencia de sus precededoras —las vóór-compagniën— la Compañía de las Indias Orientales aparece como una institución de claro carácter corporativo, con nombre propio y personalidad jurídica, que se plasma en la facultad de negociar y pleitear. La venta de las mercancías ultramarinas, realizada por cada una de las organizaciones territoriales, se hacía siempre en nombre de la Compañía que, a su vez, respondía en su conjunto por las deudas de cada Cámara. No obstante, hay constancia de intentos, por parte de las cámaras con economía más saneada, de no cargar con las deudas de las más débiles (116).

El comportamiento de la compañía respecto al problema de la responsabilidad fue, sin embargo, similar al de sus antecedentes, ya que en ella se mantuvo la diferencia entre los accionistas ordinarios, con responsabilidad limitada, y los accionistas principales o bewindhebbers, cuya cuota de responsabilidad no está bien definida. En el artículo 42 de la cédula de concesión se dice "que los aludidos socios ni sus propiedades podrán ser perjudicados ni gravados a cuenta de su administración o de las remuneraciones de los empleados, si-

(115) El poder omnímodo de la dirección se manifiesta en la ausencia de obligación real de rendir cuentas de su administración, llegando, en una ocasión, "a amenazar públicamente a los accionistas con suspender todo pago por este concepto (dividendos), si no se mantenían sumisos a sus 'dueños y señores'" (ibidem, p. 348).

(116) La ausencia de reglas generales hace confusa la contabilidad de esta compañía; a pesar de los numerosos datos que ofrece la obra de Van Dam, su primer abogado en los años anteriores y posteriores a 1.700 "resulta difícil formarse una idea acerca del modo como funcionaba el sistema" (ibidem, p. 345). También *femme Gastra*, "The shifting balance of trade", pp. 54 y 58-59).

no que estas cuestiones deberán ventilarse ante los tribunales ordinarios". Sin embargo, todavía en el siglo XVIII había que eximir expresamente de responsabilidad a los bewinhebbers en cada caso concreto; en ellos, se explicitaba que las obligaciones de la compañía quedaban garantizadas exclusivamente por el patrimonio social. Tal comportamiento delata la inexistencia de una norma clara y generalmente aceptada.

Por otra parte, si bien se consideraba teóricamente a la compañía como un todo, en la práctica su existencia se veía amenazada por la inexistencia de un capital fijo. Según la carta de concesión, cada socio podía reclamar el capital aportado más los intereses correspondientes, en cada balance general que se debía publicar cada diez años. Esta norma, heredada de las vóór-compagnieën fue ya discutida en 1.611, en que la dirección se negó a tal posibilidad basándose en dos razones fundamentales. En primer lugar, por el trastorno que suponía a la compañía la conversión en dinero de un capital que se encontraba invertido en buques, fortalezas, géneros, etc.; en segundo lugar, señalando que los accionistas podían vender sus acciones separándose así de la empresa sin ocasionar a la misma una merma en su capital. Así, se proponía a los socios un trámite de separación de la compañía sin que, en cada caso, tuviera que ser sancionado por la dirección. La prepotencia de "los diecisiete señores" consiguió así dar estabilidad a la compañía mediante la imposición de una norma que estaba en contra de la concesión de 1.602 (que no se renovó hasta 1.623).

El documento funcional contenía una segunda limitación en el tema que comentamos. Su artículo 17, preveía el pago de dividendos, tan pronto hubiera en caja el 5 por 100 del importe de la venta de mercancías. Esto, al par que se derivaba de la confusión existente entre capital y beneficios impedía —caso de haberse cumplido— toda ampliación de capital. La dirección, sobre la marcha, cambió esta norma y ya no se incluyó en el documento de 1.623, que dejaba a la dirección en libertad de fijar la cuantía y el momento del pago de dividendos.

La Compañía Holandesa de las Indias Orientales se constituyó con un capital de seis millones de florines, la mitad de los cuales fueron aportados por Amsterdam y la cuarta parte por Zelanda. Este capital se empleó en la formación de una flota de catorce bajeles que partió para las Indias en febrero de 1.603 y otra de trece buques enviada en diciembre del mismo año. A su vuelta, en 1.605, las acciones rindieron el quince por 100. La compañía prosperó durante el siglo XVII, alcanzando su mejor momento entre los años 1.664 y 1.673. Se puede observar que el abandono de una conducta puramente mercantil y su sustitución por otra, fundamentalmente colonizadora, fue lo que, al incrementar los costos, la convirtió en una carga para las Cámaras; ello iba unido a una manifiesta incapacidad de la dirección para ejercer, desde Europa, un control efectivo sobre sus funcionarios en Asia. En 1.798, la República de Batavia suprimió lo que ya sólo eran restos de la antigua y poderosa organiza-

ción (117).

La Compañía de las Indias Occidentales (1.621) fue una creación del Estado en mucha mayor medida que la anterior. Su carta de concesión confería a los Estados Generales mayores atribuciones que la de su precedente y se hacía en ella mucho más hincapié en las funciones militares de la compañía. Este planteamiento motivó que —como en Francia— el Estado tuviera que aportar la mitad del capital y ejercer presión a los particulares para que suscribieran el resto. La escasa importancia que se daba en los Países Bajos a la caracterización de los cuerpos mercantiles y a la elaboración de normas generales, frente a la rigidez británica, se revela con claridad en 1.724. Dicho tribunal dudaba si la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales se hallaba o no en condiciones de comparecer como demandante, toda vez que los Estados Generales no la habían dotado siquiera de nombre (118).

En general, se puede afirmar que las compañías de capital tuvieron un escaso desarrollo en los Países Bajos hasta finales del siglo XVIII, frente a su mayor importancia en Inglaterra.

(117) Femme Gaastra, The shifting of trade, pp. 47-69.

(118) Cit. por Heckscher, La época mercantilista, p. 365.

2.2.2.- Inglaterra.

En el Antiguo Régimen se desarrolló en Inglaterra, antes de la aparición de compañías de capital, un tipo especial de compañías privilegiadas. Se trata de las compañías reglamentadas (regulated companies). En ellas, los comerciantes que las formaban obtenían el monopolio legal del tráfico en determinadas zonas, sumaban sus recursos para comprar o alquilar buques y elegían delegados que cuidaban de trazar las líneas generales de su actividad. En realidad, sin embargo, el grupo de mercaderes que las constituían actuaba individualmente, por su propio riesgo, aunque dentro del marco de unas condiciones comunes de actividad y sujetos a una disciplina colectiva.

Dentro de este tipo de compañía cabe destacar la English Merchant Adventurers, cuyo origen se remonta, por lo menos, al siglo XV. Por su privilegio de 1.564 se le concedió el monopolio del comercio de paño inglés con los Países Bajos y Hamburgo y a mediados del siglo XVII contaba con 7.200 miembros; la Eastland Company que se formó en 1.579 para el comercio con el Báltico; la Muscovy Company (1.555-1.566) para el comercio con Rusia y la Levant Company, que se transformó en sociedad por acciones en 1.581 volviendo a su antiguo status en 1.605 (119).

El espíritu gremial imperaba en estas asociaciones; se

(119) Kristoff Glamann, "El comercio europeo (1.500-1.750)", en Carlo M. Cipolla (ed.), Historia económica de Europa, II, Barcelona, 1.979, pp. 401-403.

accedía a ellas por herencia o por haber cursado un período de aprendizaje, y siempre dentro de unos límites en el número de asociados (120). Su carácter corporativo es otra de las notas que definen a estas compañías, en las que la personalidad jurídica les fue reconocida desde el principio. Su existencia no estaba supeditada a la vida de los socios y se les reconocía el derecho a comparecer ante los tribunales y a realizar operaciones en nombre de la compañía (121).

Los problemas que planteaba este tipo de asociación —que durante mucho tiempo satisfizo las necesidades del comercio europeo— eran la competencia entre los participantes y la determinación de la responsabilidad en el caso del fracaso de un viaje. Los intentos de solucionar dichos problemas condujeron, desde el siglo XVII, a la generalización de las asociaciones de capital, que emitían acciones de responsabilidad limitada.

Las compañías de capital (joint-stock companies) surgen en Inglaterra cuando la necesidad de realizar unas inversiones fijas así lo exigen. Dicha necesidad se plantea, en primer lugar, en la minería, donde de forma excepcional aparecen empresas privilegiadas de capital desde 1.568 (122).

(120) La independencia de estas compañías frente al poder real era tan grande que, en 1.638, Carlos I no consiguió el ingreso de un protegido suyo en la Eastland Company, Heckscher, La época mercantilista, p. 340.

(121) Ibidem, pp. 364 a 367.

(122) El privilegio de las Mines Royal y Mineral and Battery Works data de 1.568. Eran empresas dirigidas, en su mayor parte, por alemanes. Hemos consultado el documento que las autoriza (idéntico para las dos compañías) en A.E. Bland y otros, English Economic select document, G. Bell and Sons Ltd., London, 1.914, pp. 427 y 428.

Las primeras operaciones efectuadas bajo este sistema en el comercio de ultramar son las de la African Company y el viaje de Drake de 1.577, con participación real. Desde este momento, en que el Estado se preocupó por dicho comercio, las asociaciones de capital con las que se debe llevar a cabo, son dotadas del mismo aparato que las compañías reglamentadas; es decir, se les concede personalidad jurídica, además de ciertos privilegios. Así, una simple joint-stock company o compañía por acciones se ve convertida en una chartered company, tras obtener la carta real que autoriza su funcionamiento bajo las condiciones especiales aludidas (123). Sin embargo, esta forma comercial no quedó verdaderamente constituida hasta que se dió estado jurídico a la East India Company (31 de diciembre de 1.600), que actuaba ya con marcado éxito, promovida por hombres que habían operado en régimen de sociedad colectiva en la Levant Company. De este modo, si bien las chartered companies no fueron creación directa del Estado, como en los Países Bajos o Francia, su reconocida utilidad hizo que la Corona se reservara hasta el siglo XIX la facultad de otorgar la personalidad jurídica (incorporation) para la protección y el fomento de determinadas actividades mercantiles. El interés de la Corona en estas compañías no desapareció mientras el Estado no fue lo suficientemente fuerte como para hacerse cargo de las finanzas a ellas encomendadas y mientras no se asentaron las bases de un sólido

(123) Para una caracterización legal de estas compañías es de obligada consulta el capítulo IV, del volumen VIII de la monumental obra de Sir William Holdsworth, A history of English law, London, 1.966.

do sistema financiero para cuyo equilibrio fueron tan útiles.

El sello medieval estaba todavía presente en los primeros tiempos de estas compañías. En ellas se conservaba la "hermandad" entre los socios que existía en las regulated companies y se valoraba el previo conocimiento de los que pretendían entrar a formar parte de una de ellas. Los individuos relacionados con la East India Company están perfectamente tipificados en su carta de concesión, en la que se habla de los aprendices, de los socios, de los empleados y factores y, en último lugar, de "todos los demás". Del mismo modo, las reglas respecto a la conducta de los miembros de la compañía en las reuniones, estaban presididas por un espíritu gremial (124).

Otro aspecto en el que se revela la herencia medieval es la tardía conquista de un capital fijo de empresa. Al principio, si bien la corporación en sí era permanente, el capital era diferente en cada empresa y se suscribía para cada expedición. La East India Co. funcionó así entre 1.601 y 1.612. A partir de 1.613 la inversión de capital se hacía con vistas a una serie de viajes, con breves recaídas en el método antiguo. El 1.658 se produjo la transición definitiva a un régimen de capital fijo de empresa con reparto de ganancias, cesando el sistema de reembolsar el capital más los beneficios

(124) En la Compañía Africana, se regulaba la entrada como socios de los hijos de los miembros de la misma, cuando alcanzaban su mayoría de edad. Sobre el sello medieval, Heckscher, La época mercantilista, pp. 381 y ss., y E.L.J. Coornaert, "European Economic Institutions and the New World; the chartered companies", en E.E. Rich y C.H. Wilson, The Cambridge Economic History of Europe, IV, Cambridge University Press, 1.967, pp. 254 y ss.

al final de cada operación. En teoría, se conservaba el derecho del socio a retirar su capital en el momento de la rendición de cuentas que se efectuaba cada tres años; en la práctica, el mercado de acciones satisfacía todas las necesidades en este sentido.

La transición hacia un sistema de capital fijo obedeció, y no sólo en la East India Company, a un cambio en la política comercial inglesa, en la que fue adquiriendo importancia la colonización y, con ella, la disponibilidad de establecimientos permanentes y fortalezas. Las cifras de la propia compañía, si bien posiblemente sobreestimen el problema, nos dan una idea de su importancia. Así, en 1.654 declaraba que poseían factorías bajo la jurisdicción de catorce príncipes locales y que se estaban incrementando las cantidades dedicadas a sostener buques armados, encargados de defender el comercio por mar. En la década de 1.670, el capital inmovilizado se cifraba en 206.000 libras esterlinas y en 719.000 en décadas posteriores (125).

Por último, es necesario destacar las funciones políticas de las compañías privilegiadas, que se ponen de relieve desde el momento mismo de su creación. A cambio de la personalidad jurídica y de ciertos beneficios monopolísticos, el nuevo cuerpo mercantil se veía obligado a asumir tareas que,

(125) La Compañía del Sur de Virginia, así como su subcompañía de New Plymouth, reunían el capital para cada expedición mediante loterías. Heckscher explica la falta de interés en disponer de un capital fijo, en que no realizaban la labor colonizadora de forma directa. La época mercantilista, p. 380. La Compañía Africana o la de la Bahía de Hudson, por el contrario, en 1.690, incrementaron su nominal aludiendo al incremento de gastos fijos motivados por la colonización. Ibidem, p. 388.

en principio, deberían corresponder al Estado. La East India Company gozaba del derecho de gobernar los países descubiertos o conquistados, instituir en ellos tribunales, promulgar leyes locales, conceder títulos, construir fortificaciones y reclutar tropas, hacer la guerra y concertar la paz con príncipes y pueblos no cristianos, arrasar a mano armada cuanto se interpusiese a sus privilegios, detener y devolver a su país de origen a quienes ejerciesen el comercio en sus territorios sin estar autorizados para ello y emitir moneda de curso local. El monopolio, además, en el terreno económico y las donaciones de tierra, aguas y yacimientos minerales, otorgaba a la compañía una suma tal de poderes que explicaba que a veces, pudiese formularse contra los díscolos el reproche de desobediencia como olvido de sus deberes hacia "Dios y la Compañía" (126).

Este carácter político suponía que la compañía se viera comprometida en todos los conflictos bélicos de la época, en los que se identificaba con la Corona. Así, la batalla que libró la East India Company con su homónima holandesa, con el resultado final de verse expulsada de las islas de las especias y relegada al continente (1.682), implicó a ambos países. La consciencia de la importancia del papel político de la compañía se revela en el fracaso de la New East India Company. Esta compañía fue creada por los whigs para hacer la competencia a la anterior, en manos de los tories. Ante la necesi

(126) Ibidem, p. 435.

dad de formar un frente único contra Francia, ambas se fusionaron formando la United Company, que en realidad conservó el nombre de la primitiva East India Company y que dirigió la conquista del continente en el siglo XVIII. A mediados del mismo, el desarrollo de los acontecimientos llevó a que la compañía incrementara su papel político. Las conquistas de Clive sobre Francia (1.754) y sobre la resistencia bengalí (1.757), al par que lograban asentar el dominio británico, eran un exponente de cómo las conquistas militares y el poder político eran auxiliares y cómo llegaron a ser la base de la política comercial. Sin embargo, la actitud expoliadora de la compañía, que hacía peligrar incluso la reproducción simple de la economía hindú, llevó a la Corona inglesa, tras procesar a Clive y al gobernador Hastings a aprobar en el Parlamento la Indian Act de Pitt (1.784) que colocaba a la compañía bajo control directo de la Corona; con ello, al par que se pretendía acabar con la excesiva autonomía de un organismo comercial que cada vez más, era "un Estado dentro del Estado", se intentaba remediar la expoliación irracional de épocas anteriores. La destitución de Hastings y la administración de Cornwallis marcan el fin de la etapa de acumulación primitiva y el comienzo de otra, reflejo de la expansión de 1.790, la revolución industrial y la burguesía mercantil nacida de ella.

La carta de concesión de la East India Company prescribía que sus asuntos fueran regidos por un gobernador y veinticuatro directores, elegibles anualmente en una asamblea de

socios que se celebraría cada primero de julio. La ausencia de una norma restrictiva permite suponer la posibilidad de participación de todos los socios en la discusión del balance que la dirección debía presentar en dicha asamblea anual, con un régimen de votación proporcional al número de acciones poseídas (127).

Este ideal sistema de participación se ve distorsionado por la realidad, en la que, una vez conseguida la dirección por parte de los mayores propietarios y, con ella, el control de la compañía 364 días en el año, es sencillo sobrevivir a la discusión que se realiza en la jornada restante. Así, en 1.691, por ejemplo, la East India Company estaba efectivamente controlada por ocho hombres, cada uno de los cuales poseía más de 10.000 libras esterlinas en acciones y, entre todos, más del 25 por ciento del capital total de la compañía (128).

El origen mercantil de los primeros socios de las chartered companies provocó la formación de una casta empresarial que coincidía con los grandes propietarios de acciones. Podemos citar, como ejemplo, a Sir Thomas Smythe que, a comienzos del siglo XVII fue, en diferentes épocas, gobernador de las Levant, East India y Russian Companies y tesorero de la Virginia Company. Junto a ellos surgió un grupo de especia-

(127) Un amplio resumen de dicha carta en Wyndham Beaves, Lex mercatoria rediviva or Merchants Directory, being a complete guide to men in business, J. Rivington and Sons, London, 1.793, pp. 677 y ss.

(128) Barry Supple, "The nature of enterprise", en E.E. Rich y C.H. Wilson (eds.), The Cambridge Economic, V, p. 446.

listas, de directores ejecutivos, que formaba la burocracia mercantil al margen de los propietarios y que, sin llegar a tener la generalidad obtenida en el siglo XX, se puede considerar su precedente (129).

El funcionamiento adoptado por la East India Company para la suscripción de capital, no permite hablar de capital nominal inicial, sino de capital suscrito para el primer viaje y que a su término fue repartido entre los participantes. Así, en la Carta Real de 1.600 no se hacía ninguna referencia a su capital, pero la lista de suscriptores que avala su solicitud, contiene la suma de 30.133 libras esterlinas, seis chelines y ocho peniques, aportada por cincuenta y siete personas, de las que un tercio al menos, puede identificarse con la antigua Levant Company. Esta cantidad se reveló insuficiente y se logró duplicarla mediante el desembolso de un dividendo pasivo por parte de los iniciales accionistas y por la suscripción de nuevos títulos.

Tras éste primer viaje, de resultados económicos inciertos, se emprendió una segunda expedición de la que se obtuvo un 195 por ciento de beneficio. Después de un fructífero tercer viaje y de un cuarto que la pérdida de dos barcos hace deficitario, se sucedieron ocho entre 1.609 y 1.612 que rindieron beneficios superiores al 200 por ciento (334, 221, 318, 311, 260, 248, 320 y 233 por ciento, respectivamente). Estas ganancias exorbitantes de los primeros años de la compañía,

(129) Ibidem, passim.

fue remitiendo; entre 1.651 y 1.690 los dividendos variaron entre el 12,5 y el 60 por ciento, siendo el mejor período de la compañía, a nivel económico, el comprendido entre 1.687 y 1.736 (130).

Sin detenernos en estas páginas en la descripción de la historia de unas compañías que responden al modelo descrito para la East India Company, destacaremos la pujanza que las asociaciones de capital tuvieron en la Inglaterra del Antiguo Régimen. Una idea de su importancia así como del particular espectro que dibujaban, nos la ofrecen las siguientes cifras: a finales del siglo XVII operaban en aquel país, junto a seis grandes compañías con un patrimonio total de 3.232.000 libras, otras 130 de menor tamaño, que reunían un capital de 1.000.000 de libras esterlinas aproximadamente (131).

"Las seis grandes" eran la East India Company (1.600), la Royal Africa Company (1.631), la Hudson's Bays Company (1.670), la New River Company, el England Bank (1.694) y el Millium Bank. Junto a estas existían otras importantes compañías corporativas, como la Virginia Company o la Massachusetts Bay Company y, desde 1.711 la South Sea Company. La existencia de estas grandes compañías para el comercio ultramarino o

(130) William Foster, England's Quest of Eastern trade, London, 1.966, pp. 144 y ss; E.L.J. Coornaert, European economic institutions, p. 259, y K.N. Chaudhuri, "The English East India Co. in the 17th. and 18th. centuries. A Pre-modern multinational organization", en L. Blussé y F. Gaastra (eds.), Companies and Trade, pp. 32 a 46.

(131) Vicens Vives, Historia General moderna. Del Renacimiento a la crisis del siglo XX, Barcelona, 1.971, pp. 498-499.

las grandes finanzas, no impedía que el impulso mercantil e industrial inglés creara otras sociedades bajo el sistema de joints-stock, sin buscar especiales privilegios y sin necesitar, por tanto, a su juicio, carta real alguna para empezar a funcionar. Estas compañías se comportaban, sin embargo, como una corporación, con responsabilidad limitada. Este desarrollo libre de la sociedad por acciones, tan diferente al sistema holandés, se vió interrumpido por las medidas legales provocadas por el crack bolsístico de principios del siglo XVIII, del que a duras penas se salvaron la East India Company y el Banco de Inglaterra.

Las medidas aludidas se resumen en la promulgación de la Bubble-Act (1.720) que, tal y como expresa Holdsworth, olvida las más profundas causas del pánico financiero (la conexión de la fiebre especulativa con el sistema de la Compañía del Mar del Sur, la corrupción del ministro y de los miembros de la legislatura, las extravagantes concepciones del poder del crédito, las facilidades para el fraude y la negligencia derivada de la ausencia de cualquier clase de control legal sobre las actividades de directores y promotores) y concentraba su atención en una sola causa: la extensión del sistema de las sociedades por acciones y la usurpación que estas sociedades, sin carta real de privilegios, hacían de la personalidad jurídica reservada, en teoría, a las compañías autorizadas por la Corona (chartered companies). Este estado de cosas requería un Acta que regularizara la situación, facilitando a las sociedades por acciones la obtención legal de

personalidad jurídica y el ejercicio de la responsabilidad limitada junto al control de las actividades de promotores y directores como garantía al público y a los accionistas (132).

Sin embargo, la resultante fue una disposición legal que dificultó deliberadamente a las sociedades de capital la asunción de una forma corporativa. Bajo la amenaza de penas draconianas, se impedía la existencia de compañías con personalidad jurídica y la emisión de participaciones negociables con carácter transferible (§ 18). De hecho, estas medidas iban dirigidas, exclusivamente, contra las empresas de capital, no contra las personalistas (partner-ships) (§ 25) y, entre aquéllas, se exceptuaba a todas las creadas antes de 1.788 (133).

Parece razonable suponer que la Bubble Act no hubiera alcanzado los resultados deseados en un país en el que la vida económica tenía un gran desarrollo y, en el que la tendencia a hacer caso omiso de una legislación inadecuada, cuya ejecución corría a cargo de una administración inepta, estaba cada vez más arraigada. Sin embargo, tal legislación se cumplió, suponiendo un freno al desarrollo de la compañía por acciones hasta su derogación en 1.825. Heckscher apunta que "el factor decisivo para el giro que tomaron las cosas fue, probablemente, el hecho de que el Estado no necesitase ya de las compañías para sus fines financieros" (134). El Estado

(132) Holdsworth, A History of English Law, vol. VIII, pp. 219 - 221.

(133) Ibidem y Heckscher, La época mercantilista, pp. 429 y 430.

(134) Ibidem, p. 430.

renunció al monopolio de la concesión de la personalidad jurídica, dado que no necesitaba vender tal derecho a cambio de las contrapartidas que le ofrecían las Compañías. Así adoptó un comportamiento más acorde con el esquema liberal trazado por Adam Smith y desarrollado por David Ricardo, precisamente sobre el sector del comercio exterior.

2.2.3.- Francia.

Francia se incorporó con retraso al movimiento de creación de compañías privilegiadas para el comercio colonial, haciéndolo de forma definitiva en la época de Colbert, que les imprimió un marcado sello estatal. Sin embargo, Luis XI había ya patrocinado iniciativas de este tipo para el comercio mediterráneo, que pueden considerarse como precedente. Tales proyectos fracasaron por la eficaz resistencia de los mercaderes franceses, que se pronunciaron en contra del monopolio mercantil.

Por otra parte, Richelieu se propuso —e inició— una política similar a la de los Países Bajos e Inglaterra, que no fue la coronada por el éxito. Destacan entre sus creaciones, la Compañía de Morbihan o de los Cien Asociados (1.626) y la Compañía de la Nueva Francia (1.628) basadas en, e impulsadas por, la iniciativa privada (135).

(135) v., por ejemplo, para una detenida descripción del tema, Henry Hauser, La pensée et l'action économiques du Cardinal de Richelieu, París, 1.944.

Fue Colbert el que impulsó definitivamente la creación de compañías privilegiadas en Francia, entre las que sobresalen la Compañía de las Indias Orientales y la Compañía de las Indias Occidentales, ambas constituidas en 1.664. Sus creaciones —y no sólo en este campo— tenían una sumisión al Estado mucho mayor que en otros países. En Francia, las grandes compañías fueron de iniciativa estatal, hasta el punto que podemos afirmar, con Heckscher, que "no hubieran llegado a crearse jamás sin la ayuda pecuniaria de la Corona" (136). Efectivamente, su capital fue suministrado en buena parte por el Rey y la Casa Real y se forzó a los particulares a la suscripción del resto. En ocasiones, como en el caso de la tardía Compañía de la Guinea (1.684) el monarca declaró que estaría formada por "aquellos súbditos a quienes nosotros elijamos para esta misión" (137).

En la Compañía de las Indias Orientales la participación real llegó a suponer el 50% de su capital. En la de las Indias Occidentales ascendía a dos millones de libras, con la peculiaridad de que asumían la totalidad de las pérdidas ocasionadas en cuatro años. En la Compañía del Mar Báltico y en la de Levante, la proporción era del 25%.

La dirección de las compañías estaba bajo un estricto control, similar al aplicado a los intendentes de las provincias y a los gobernadores de las colonias. Por otra parte,

(136) La época mercantilista, p. 329. La misma conclusión en E.L.J. Coornaert, "European economic institutions...", p. 269.

(137) Heckscher, La época mercantilista, p. 329.

estaba generalmente al cuidado de personas ajenas a la profesión mercantil, aunque se detecten casos de transferencia de directores entre las grandes compañías de los diversos países (138).

El contraste, pues, entre estas compañías y las inglesas y holandesas era grande. Su control directo por el Estado las hacía más pobres y vulnerables a las prioridades oficiales del momento y a los cambios políticos, incluso en el caso de la más fuerte, la Compañía de las Indias Orientales. Fueron una carga para las finanzas de la nación, que no siempre cumplió sus compromisos; tuvieron un muy desigual desarrollo, siendo muy afectadas por la quiebra del sistema Law (1.720) y definitivamente desaparecieron por la aplicación de los principios liberales de 1.789.

Estas compañías de vida precaria, además, no consiguieron preparar el camino a las grandes sociedades corporativas de capital. En realidad, el comercio fue atendido —en la medida que lo fue— por sociedades personalistas, únicas reglamentadas en las Ordenanzas de 1.673 y hasta el Código de Comercio de 1.807 (139).

(138) La correspondencia entre Colbert y los directores de las Compañías, aunque sólo conservada parcialmente, es reveladora a este respecto (P. Clement, Lettres..., v. II).

(139) v. la clásica obra de Henri Lévy-Bruhl, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVII^e et XVIII^e siècles, París, 1.938, esp. pp. 42-53.

2.3.- La compañía privilegiada para el comercio colonial en España.

2.3.1.- La organización del sistema: la Casa de Contratación y el Consulado de Sevilla.

En un principio, la política española respecto a las colonias fue la de desarrollar al máximo su agricultura e industria. La perspectiva cambió con el descubrimiento de la importancia de las nuevas tierras como fuente de materias primas y potencial mercado de productos manufacturados. De ahí que desde mediado el siglo XVI corrieran paralelos la organización del dominio político y la explotación de las minas, con la del comercio y el interés por la producción manufacturera metropolitana. Naturalmente, no todos los aspectos se desarrollaron por igual entre los siglos XVI y XVIII. Es conocido el impacto que supuso la masiva llegada de metales preciosos, que hizo que, en un primer momento, la euforia relegara a un segundo plano la preocupación por la producción; ésta, sin embargo, seguía presente en los textos doctrinales (140).

(140) v., por ejemplo, Luis Ortiz, Memorial del Contador Luis Ortiz a Felipe II (1.558), Tomás Mercado, Tratos y contratos de mercaderes (1.571), Martín-González de Ceñorigo, Memorial de la política necesaria y útil restauración de la República de España (1.600), Sancho de Moncada, Riqueza firme y estable de España (1.618), Miguel Caxa de Luela, Restauración de la antigua abundancia de España (1.631), Diego Saavedra Fajardo, Empresas políticas o idea de un príncipe político cristiano (1.640)...

El comercio colonial era considerado como fuente de riqueza en tanto consagraba una división del trabajo que se estimaba adecuada: la colonia debía proporcionar materias primas a bajo precio y la metrópoli productos manufacturados a las nuevas tierras. El análisis de las razones por las que las colonias hispanas no cumplieron su objetivo de servir como fuente de acumulación de capital para el desarrollo de la agricultura y la industria metropolitanas, quedan fuera del propósito de estas páginas. A mi juicio, no se encuentran en un incorrecto análisis teórico, pues abundan los textos que formulan adecuadamente los problemas; tampoco en la inadecuación de la organización del comercio colonial, similar a la de las Compañías privilegiadas que tuvieron éxito en los Países Bajos o Inglaterra. La respuesta hay que buscarla, creo, en la multitud de factores socio-económicos que dificultaron el aprovechamiento de un privilegiado punto de partida; que impidieron la utilización racional del marco legal y retrasaron su ampliación; que motivaron el dispendio de los recursos. Aquí nos vamos a centrar en el análisis de la organización del comercio colonial en la España de los siglos XVI a XVIII. Una actividad que, en mayor o menor medida, todos los estados europeos acogieron bajo su protección.

Para la organización, control y protección del comercio colonial, la Corona española creó en 1503 la Casa de Contratación, con sede en Sevilla y dependiente del Consejo de Indias. Es posible que la idea inicial fuera la de monopolizar el comercio ultramarino, pero pronto se reveló imposible a un gobierno falto de los estímulos e iniciativas de las empre-

sas privadas (141). El cambio sufrido por las Ordenanzas de la Casa en siete años, son un exponente de la rápida culminación del proceso. Las de 1.503 son continuación de las normas que desde 1.495 hacían a la Corona un importante participante en este comercio. Las funciones de la Casa eran: centralizar, en sus almacenes, el tráfico con Indias, mantener correspondencia con los factores reales en las colonias para estudiar las necesidades de los nuevos establecimientos, observar la situación del mercado para que las transacciones se hicieran con mayor provecho para la Corona y llevar un registro sistemático y pormenorizado de todo el movimiento de mercancías (142).

Las Ordenanzas de 1.510 redujeron el papel de la Casa a: dar licencias a los comerciantes particulares que quisieran participar en la "carrera de Indias", registrar todos los navios, tripulaciones, equipo y mercancía con destino al nuevo continente y cobrar las contribuciones con que la Corona gravaba a los duques y cargamentos, con lo que aseguraba su participación en el negocio (143).

(141) Hasta 1.556 se encuentran voces que instaban a la Corona a realizar este comercio por sí sola, lo que podría hacerse con un capital de "un millón de ducados" (Nicolás Cardona, cit. en Clarence H. Haring, Comercio y navegación entre España e Indias en la época de los Habsburgos, México, 1.979, p. 31.

(142) Ordenanzas de 20 de enero de 1.503, en Martín Fernández de Navarrete, Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, con varios documentos inéditos concernientes a la historia de la marina castellana y de los establecimientos españoles en Indias, Impr. Nacional, Madrid, 1.858, vol. II, pp. 316-326; Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de ultramar, Suc. de Rivadeneira, Madrid, 1.885-1.931, vol. V, pp. 28-42.

(143) Ordenanza de 15 de junio de 1.510 y Declaración de 18 de mayo de 1.511 en M. Fernández de Navarrete, Colección..., Vol. II, pp. 375-388. También en Colección de documentos..., tomo V, pp. 211-225.

Sólo los españoles y extranjeros naturalizados podían comerciar con las colonias americanas (144). En la práctica se intentó restringir esta actividad a los castellanos, lo que originó diversos conflictos con los catalanes, aragoneses y vascos. En la base de la férrea organización de este comercio se hallaba una peculiar concepción de las relaciones de las colonias con sus metrópolis:

"Es propio de la naturaleza de toda colonia, establecida para la cultura o el comercio, no tener otro que el de la matriz que la fundó; y el derecho privativo de ésta para comerciar exclusivamente con aquélla ha sido mirado siempre como nacido del derecho de gentes. Por un tácito consentimiento de todas las naciones civilizadas se ha creído en todos tiempos, que pues la fundadora de la colonia había dado el ser a ésta, enviando a ella personas, y manteniéndolas de todo en su establecimiento, era justo que aquélla gozase el privilegio exclusivo de sus frutos, y de su comercio activo y pasivo..." (145).

La ruptura de este acuerdo fue, sin embargo, la norma y así, a un comercio, ya de por sí muy complejo debido a sus dimensiones y a la voluntad centralizadora, se añade la necesidad de su defensa armada. De ahí que la organización resultante se encareciera considerablemente.

Dentro del colectivo que tenía permitida la realización de este comercio existía teóricamente una libertad absoluta

(144) Salvo señaladas excepciones como la de la Real Cédula de 5 de marzo de 1505, que autorizó —por escaso tiempo— el comercio extranjero con la española y siempre que se realizara en compañía con los españoles, Colección de documentos inéditos..., tomo V. pp. 78-79.

(145) Rafael Antúñez y Acevedo, Memorias históricas sobre la legislación y gobierno del comercio de las Indias Occidentales, Madrid, 1.797, p. 267.

para realizarlo. No obstante, la inversión de capital requerida en una operación a largo plazo y la competencia que se derivaba de la existencia de una limitación en el número de barcos y tonelaje anual, hizo que el sistema beneficiara a los grandes comerciantes; que acabaron por organizarse, imponiéndose sobre los intentos de comercio libre (146).

La exclusión legal de los extranjeros de la práctica del comercio con las colonias españolas eliminaba una parte de la competencia; la limitación del tonelaje aseguraba, en teoría, la venta de todas las mercancías embarcadas y el mantenimiento de los precios; la Corona, por su parte, asumía la responsabilidad de la conquista y defensa de las nuevas tierras —a diferencia de otros países europeos— y garantizaba la organización de la protección de las flotas, (que era subrogada, mediante prorrateo, entre los cargadores). El problema estribaba, por tanto, en el control continuado de los embarques. Asegurarse tal control fué la intención que guió, en 1.543, a los comerciantes que tenían interés en el tráfico ultramarino, al solicitar la formación de un Consulado en Sevilla, a semejanza de los existentes en Burgos y Bilbao. Esta organización se convertiría en "el cuerpo de comerciantes", como en aquellas ciudades y su principal apelativo, derivado

(146) La Real Provisión de 15 de enero de 1.529 permitía el libre tráfico con Indias desde varios puertos de la península (Coruña, Bayona, Aviles, Laredo, Bilbao, San Sebastián, Cartagena, Málaga y Cádiz), con el único deber de registrarse previamente en estos mismos puertos y tocar en Sevilla a la vuelta. Se derogó en 1.573 a instancias del Consulado de Sevilla sin haber sido muy utilizada. Los españoles preferían, sin duda, la participación en un comercio organizado y defendido. Rafael Antúñez y Acevedo, Memorias históricas, p. 24, y apéndices 4 y 5; Colección de documentos..., tomo IX, p. 401.

de su peculiar situación y composición sería "la universidad de cargadores de Indias".

Sobre el papel, se justificaba la creación del Consulado en el aumento de la colonia de comerciantes en la ciudad y en la necesidad de dirimir sus conflictos en su propio tribunal a "estilo de mercaderes", tal y como se hacía en otros organismos similares preexistentes (Consulados de Burgos y Bilbao). En realidad, desde 1.511 se utilizaba dicho procedimiento procesal en la Casa de Contratación, en cuya sala de justicia se celebraban todos los procesos relativos a contratos o compañías de comercio americanas, seguros y fletes (147).

En la práctica, la creación del Consulado de Sevilla en 1.543 y su creciente desarrollo al amparo de (y sobre la) Casa de Contratación hace que la configuración del sistema que rige las actividades comerciales ultramarinas españolas se asemeje mucho al de una compañía privilegiada, constituida por los comerciantes matriculados. Este fenómeno, que a mi juicio, no ha sido suficientemente destacado por la historiografía, ya fue puesto de relieve por Adam Smith:

"Pero como todos los comerciantes que reunían sus capitales para el apresto de estas embarcaciones forzosamente tenían interés en

(147) Declaración de 26 de septiembre de 1.511, Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, tomo V, p. 299: "... sobre cualquier compañía que haya tenido e tenga entre sí dichas Yndias é sobre los fletes de los navíos... y hagan breve é sumariamente syn figura de juicio solamente la verdad sabida (...) (como) los cónsules de los mercaderes de Burgos...". Desde 1.543, la Casa se limitó a juzgar las causas criminales y desde 1.583 se convierte en tribunal de apelación en segunda y última instancia para todos los casos civiles que importen menos de 500.000 mrvs. (D. de 25 de septiembre de 1.583). Joseph de Veitia Linaje, Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, Sevilla 1.672.

obrar de concierto, el comercio que se desarrollaba en esta forma tenía, por necesidad, la misma pauta que la de una compañía exclusiva" (148).

El Consulado de Sevilla se comportó, desde un primer momento, como un cuerpo consultivo de la Casa de Contratación (149). El prestigio y la fuerza del Consulado se ponen de manifiesto en la consideración que tenían sus informes de las más diversas materias y en el logro del mantenimiento del control de la oferta. Como ejemplos, podemos citar el que elevó contra la pretensión de Málaga de querer embarcar directamente a Indias los frutos de su cosecha (1.667) o el que estima innecesaria la ampliación de la carga anual (1.629) (150).

El Consulado de Sevilla, desde su constitución, calculaba, junto a la Casa de Contratación, el importe del derecho de avería que, prorrateado entre los cargadores, debía subvenir a los costos de protección de las flotas. Su recaudación siguió distintos mecanismos hasta 1.660 (151). Desde el Real

(148) Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, parte II, cap. VII, libro IV. La cita corresponde a la p. 513 de la edición española de F.C.E., México, 1.958.

(149) Para la conexión entre el Consulado de Sevilla y la Casa de Contratación es especialmente revelador el opúsculo de Joseph Gutierrez de Rubalcava, Tratado histórico, político y legal del comercio de las Indias Occidentales, pertenecientes a los Reyes Católicos, conforme al tiempo de paz y guerras, en interpretación de las leyes de la Nueva Recopilación a ellas. Cádiz, 1.720.

(150) Rafael Antúñez de Acevedo, Memorias históricas. Los documentos citados, números V y IX del apéndice.

(151) Ver, para la evolución de tales contratos, Clarence H. Haring, Comercio y Navegación, pp. 99 y ss.; H. Chauvo, Seville et l'Atlantique (1.504-1.650), París, 1.960, esp. t. 6 y G. Céspedes del Castillo, La avería en el comercio de Indias, Sevilla, 1.945.

Decreto de 31 de marzo de dicho año, tal derecho fue sustituido por una cantidad global, aportada anualmente por las casas de comercio interesadas en este tráfico, auxiliadas por la Real Hacienda en casi un 20% del importe global. Unicamente sobre la base de unas organizaciones que aglutinaran a tales comerciantes —los Consulados— se pudo proponer el referido método de recaudación vigente hasta comienzos del siglo XVIII (152).

En un sistema así organizado es evidente que no cabían otras compañías privilegiadas para abastecer el territorio cubierto por el circuito de las flotas y de los galeones. En el resto de Europa, tales compañías se basaban en la concesión de enormes prerrogativas, a cambio de que éstas realizaran funciones de defensa y colonización de nuevas tierras en nombre del Estado. En España, la Corona garantizaba la conquista y la organización de la colonia y se encargaba de su defensa y la de las flotas que se organizaban a través de la Casa de Contratación. Es por ello que en nuestro país, la organización colonial sigue un camino inverso al de Holanda e Inglaterra, ya que en España los particulares aprovecharon una estructura oficial ya existente y no al revés.

Se puede objetar a esta valoración del sistema que el monopolio que ejercía la Casa impedía la participación de los individuos que quisieran hacerlo, ya que mediante aquél, ejercían —como hemos visto— un control del tonelaje anual, es

(152) Veitia Linaje, Norte, V. I, cap. 20, párr. 47-57; Rafael Antúñez y Acevedo, Memorias, parte III.

decir, del volumen comercializable. Tal objeción sería válida si nos propusiéramos comparar la organización española del comercio con Indias con un sistema de libertad mercantil absoluta; pero si se trata de analizar sus diferencias y sus posibles desventajas frente a la compañía privilegiada europea, encontramos que tales organismos funcionaban, asimismo, con un control de la oferta muy considerable.

Se puede objetar, también, que las características fundamentales de la compañía privilegiada por acciones —capital fijo, personalidad jurídica, responsabilidad limitada...— no se daban en el sistema presidido por la Casa de Contratación. De nuevo, en este tema, tenemos que fijar el término de la comparación ya que, como hemos visto, las compañías privilegiadas europeas del siglo XVII no tenían todas estas características, sino que las fueron adquiriendo a lo largo de su existencia. A medida que el volumen de su negociación crecía, fueron creando una organización más compleja. Los mercados de Sevilla y Cádiz, asimismo, conocieron una normal evolución en sus formas organizativas a lo largo de los tres siglos de existencia de la Casa. En su seno se desarrollaron formas de compañía personalista y, precisamente con su decadencia y desaparición a raíz de la implantación del libre comercio, fórmulas de limitación de responsabilidad como la compañía comanditaria por acciones (153).

(153) Sobre esto, Antonio García Baquero, Cádiz y el Atlántico 1.717-1.778, Sevilla, 1.976, I, pp. 395-532 e infra. cap. 3.

2.3.2.- Los proyectos alternativos.

El sistema descrito resultaba satisfactorio a la Corona y a los comerciantes matriculados en Sevilla. Aquélla, porque forzada, en la práctica, a renunciar a un sistema de monopolio, había constituido una organización adecuada que le permitía controlar y recaudar su parte de beneficio. Los cargadores de Indias, porque gozaban de unas posibilidades de control de oferta muy considerables que manipulaban a su favor. Los informes consulares citados más arriba muestran la actitud de este grupo. Ejemplo de la opinión Real puede ser la respuesta que se dió en 1.624 al proyecto de compañía presentado por Manuel López Pereira:

"El comercio de las Indias Occidentales está bien regulado. No es de desear la formulación de compañías privilegiadas para realizarlo, tal y como este papel dice" (154).

La existencia de grupos insatisfechos con el sistema y la inevitable presencia del proyectismo del Antiguo Régimen nos muestran diversos tipos de actuaciones y proposiciones en contra de la organización del comercio colonial español y formulaciones de soluciones alternativas. Entre los atentados contra el sistema se encuentra la solución armada. España debió defender el Pacto Colonial frente a otras naciones, sus escuadras y los piratas y corsarios. Es lógico que España adoptara —una actitud defensiva, dada— su posición envidiable

(154) A.G.S., Estado, leg. 1.102, De Oficio, Junta de Comercio, 16 de marzo de 1.624.

dentro del teórico Pacto. Es lógico, asimismo, que el resto de las potencias intentaran sustituirla en su puesto mejorando, así, su posición.

La capacidad defensiva de España era limitada —y de ello se aprovecharon, alternativamente, Francia, Inglaterra y Holanda—, lo mismo que su capacidad de oferta. Los mercaderes españoles no podían garantizar un regular abastecimiento a las colonias con productos nacionales y ni siquiera, al no contar con el dominio de los circuitos, con productos extranjeros. De ahí que éste fuera un segundo punto de ataque a una organización concebida teóricamente de una forma que, a mi juicio, puede considerarse correcta en un marco de Antiguo Régimen. Los comerciantes extranjeros se incluyeron en el Consulado y desde él podían cargar a Indias a través de testafierros o del algo más lento camino de la naturalización (155). La incapacidad real de abastecimiento llevaba asimismo a la imposibilidad de reprimir el contrabando, cosa que se intentaba fundamentalmente por la fuerza.

Incluso a mediados del siglo XVIII, los ingleses constituyeron una Compañía privilegiada que había conseguido el monopolio del comercio del vino canario. Esta Compañía de Canarias se constituyó en 1.665 y duró dos años, hasta que la Corona española logró su disolución mediante acuerdo diplomático

(155) "...porque las más de las veces no se uvieran despachado las armadas de V. M. ... si estos mercaderes [extranjeros] con su industria y diligencia no uvieran proveído los pertrechos necesarios de jarcia y municiones de guerra...", A.G.S., Estado, leg. 207 (año 1.607). Mucho se ha escrito sobre el tema que tratamos. Citaremos, como ejemplo, la correcta imagen que logra dibujar Michèle Moret en Aspects de la société marchande de Sévilla au debut du XVII^e siècle, París, 1.967,

co. (156).

Durante los siglos XVI y XVII la potencialidad mercantil de los comerciantes no castellanos organizados, se vió frenada por el sistema descrito. Hubo de esperar hasta el siglo XVIII, como veremos, para que obtuvieran un lugar definido en este comercio.

No es mi objetivo, en estas páginas, discutir estas fórmulas de ataque al sistema en sus partes más débiles. Sólo quiero destacar el hecho de que si éstas tuvieron éxito se debió a la incapacidad de la comunidad mercantil castellana para aprovechar un tipo de organización que en otros países se reveló fructífera; una organización que, incluso, era teóricamente más ventajosa puesto que tenía muchos menos gastos en el capítulo de conquista y colonización. Aquí, nos detendremos únicamente en la consideración de las alternativas formuladas en el campo del proyectismo (157).

Desde comienzos del siglo XVII —hemos mencionado una iniciativa de 1.624— se suceden los proyectos para la creación de Compañías de Comercio en España, a imitación de los existentes en Inglaterra y los Países Bajos. Se trataba de fomentar el comercio a toda costa, en la línea de lo que ya es

(156) A.G.S., Estado, leg. 1.539. Específicamente se ha ocupado de esta Compañía, de los conflictos derivados de su existencia y, fundamentalmente, de su responsabilidad en la desaparición del monocultivo del vino y en el desajuste de la economía canaria, Víctor Morales Lezcano, "La Compañía de Canarias: un capítulo sobre la historia económica del archipiélago", Anales de la Universidad Hispalense, 1.966, año XXVII, núm. 1, pp. 33-45.

(157) Un sugestivo análisis sobre el proyectismo es el de L. Muñoz Pérez, "Los proyectos sobre España e Indias en el siglo XVIII: el proyectismo como género", Revista de Estudios Políticos, núm. 81, mayo-junio del 1.955, pp. 169-195.

tableciera el Conde Duque de Olivares en su Instrucción de 1.625: "gobernar por compañías y consulados la mercancía de España, poniendo el hombro en reducir los españoles a mercados" (158). Tal afirmación fue realizada en el momento de creación de la fallida Junta de Población, Agricultura y Comercio. Fue un primer intento —que no pasó de tal— de promocionar las actividades productivas y mercantiles, frenado por la crisis económica generalizada.

Los proyectos de compañías que, desde mediado el siglo, se centraron en el comercio colonial, fueron sistemáticamente rechazadas por la propia Junta por su pretensión de destruir el régimen de flotas existente, por abrir el comercio a los extranjeros o por la oposición del propio Consulado de Sevilla, que veía en ellas un peligro para su monopolio:

"... y últimamente nunca se pudo conseguir que los cargadores y demás comerciantes de Sevilla y Cádiz conviniesen en la formación de estas compañías, y menos para poder precisarles a que se interesaran en ellas. Y tampoco se discurrió ni halló medio ni forma para poder unir y concordar los negocios de los cargadores y comerciantes que residen en las Indias con España" (159).

Los partidarios de tales proyectos no calibraban que su propuesta se reducía a sustituir una compañía privilegiada ya organizada por otra con ligeras variantes formales. Por ello

(158) Cit. por Vicente Palacio Atard, Derrota, agotamiento, decadencia en la España del siglo XVII, Madrid, 1.966, p. 77.

(159) Discurso e informe que el 13 de abril de 1.669, hizo D. Eugenio Carnero al Excmo. Sr. D. Cristobal Crespi sobre puntos de Estado, de navegación, guerra y comercio, en que se citan consultas de la Junta a él, tocantes al establecimiento de compañías, mandadas ajustar por S. Mgad., R.A.H., Colección Muñoz, tomo 34, núm. 2, fol. 6.

estaban condenadas al fracaso. No obstante, es interesante el análisis de tales proposiciones por cuanto encontramos en ellas algunos de los elementos que pervivirán en el siglo XVIII cuando se vuelvan a plantear como complemento y no como alternativa al sistema de flotas. Este planteamiento es el que me ha llevado a centrarme exclusivamente en los dos ejemplos que considero más significativos, por su mayor grado de elaboración y por el inicial apoyo de la Corona con que contaron (160).

En 1.668, Francisco Salas y Eugenio Carnero, en nombre de un indefinido "grupo de comerciantes" presentaron una planta para la formación de una Compañía española para el comercio armado, que fue aceptado "con gran interés", por Mariana de Austria, que nombró al Marqués de Aytona protector de la misma.

Para estudiar el modo de llevar a la práctica este proyecto se mantuvieron contactos con, al menos, comerciantes de Madrid, con el Consulado de Bilbao y con mercaderes de Cádiz (161). La fragmentaria documentación conservada sobre este tema no nos permite calibrar las razones de la falta de

(160) Ronald Denis Hussey en A study on the history of Spanish Monopolistic Trade The Caracas Company 1.728-1.784, Cambridge, Mass., 1.934, pp. 3-34, enumera y describe con algún detalle el conjunto de los proyectos elaborados en los siglos XVII y XVIII para la formación de compañías privilegiadas.

(161) Real Cédula de 25 de abril de 1.668 convocando a una junta de personas de caudal en Madrid, bajo la presidencia del Marqués de Aytona, para tratar de instituir una Compañía poderosa de comercio armado por mar. R.A.H., Vargas Ponce, mss., legajo, 7, número 142. Correspondencia reproducida por Teófilo Guiard Larrauri, Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y del Comercio de la Villa, Bilbao, 1.913, (ed. facsímil de la Gran Enciclopedia Vasca, 1.972), vol. I, pp. 246 a 255. Noticias del envío de órdenes a diversos comerciantes de Cádiz para que promovieran la fundación de la compañía, acompañan a la Real Resolución de 23 de enero de 1.669, A.H.N., Reales Cédulas, núm. 4.978.

apoyo a esta iniciativa por parte de los comerciantes consul^utados. Es fácil deducir, sin embargo, que la inicial ausen^u-cia de interés por la forma mercantil propuesta, no era capaz de ser despertada por un proyecto que se presentaba tan ambi^u-cioso como poco elaborado. En una coyuntura económica desfa^u-vorable, agudizada por la guerra con Francia, incluso los co^u-merciantes gaditanos prefirieron continuar con la organiza^u-ción vigente y con el desarrollo de sus compañías personalis^u-tas. Así, renunciaron a embarcarse en una empresa de estado que se desconfiaba pudiera ser sostenida eficazmente por una Corona que, sin embargo, reclamaba la beligerancia mercantil para efectuar un comercio armado. En carta a la reina, el Con^u-sulado de Bilbao comunicará las dificultades para la recauda^u-ción de caudales "debido a que las guerras y calamidades pa^u-sadas y la detención del trato por parte de Olanda e Ingla^u-terra cuestan mayores extorsiones y los ánimos se entibian" (162).

A pesar de la falta de respuesta por parte de los comer^u-ciantes de la periferia consultados, la Real Resolución de 23 de enero de 1.669 dictaminó se estableciera la compañía; es^u-ta disposición iba acompañada de unas Advertencias importan^u-tes a la total comprensión de la Real voluntad de la Reyna nuestra Señora en la formación de la Compañía Española, para

(162) 22 de septiembre de 1.668. Reproducida en I. Guiard, Historia del Consula^u-do..., V.I, p. 346. Sin apoyo documental, R.S. Smith, Historia de los Consulados de Mar (1.250-1.750), Barcelona, 1.978, p. 109, atribuye el fracaso de esta compañía exclusiva^u-mente a las intrigas de la Corte. No olvidamos el proverbial enfrentamiento de Vizcaya y su consulado con Madrid, pero estimamos que la razón del fracaso fue la ausencia de condi^u-ciones objetivas para sustituir el sistema sevillano, tal y como hemos afirmado.

el comercio armado, en las que se presentaba un modelo de organización y funcionamiento inspirado claramente en la Compañía de las Indias Orientales holandesa (163).

En dicho documento se declaraba la intención de que la Compañía fuera "un Asociamiento General, en que concurran to dos los Reynos, y Provincias de ella (España), los sujetos que se hallaren con algún caudal, y quisieran poner en la bolsa el dinero que les sobrase...". Para la formación de las Ordenanzas de la Compañía, que se formulaba como un gran proyecto de salvación nacional, los interesados, en cada uno de los reinos, nombrarían "dos o más de los que se hallaren en él más versados en este ejercicio, y les reputaren por más a propósito", a este fin. Para el gobierno de la Compañía, habría un director de nombramiento real que formaría, junto a los representantes de los territorios, la "Suprema Dirección". Seis celadores, también designados, tendrían la misión de "informarse en secreto del modo como proceden, así el director nombrado para aquel reino, como los factores, o correspondientes, que han de residir divididos en los puestos donde conviniere al Comercio, y recayeren en el distrito perteneciente a ls Zeladores de aquel Reyno" (§ IX). El mismo sistema se seguirá para la revisión de cuentas.

En cuanto a su objeto, se definiría como una "compañía de comercio universal" de cuantos géneros y frutos, y mercaderías contienen las quatro partes del Mundo". Podría comer-

(163) Advertencias..., firmadas por R. Serrano y Trillo, 24 pp., fol., impr., sin cubierta, A.H.N., Reales Cédulas, núm. 4.978.

ciar con todos los países, y organizar al efecto sus propios convoyes, con navíos armados que, cuando no desempeñaran la función de escolta tendrían patente de corso, "haciendo guerra legítima, ofensiva y defensiva a infieles, y a otros cualesquiera enemigos públicos de esta Corona". Los objetivos de extensión y protección del propio comercio y de defensa ante el contrabando, eran completados, en esta organización supramercantil y paraoficial con la "propagación de nuestra Santa Fe", tanto en los mares como en los nuevos establecimientos (§ 4). A cambio, la compañía gozaría de Real protección, jurisdicción privativa de la Cámara Suprema de la Compañía en todos sus negocios "independiente de cualquier Consejo Supremo" y todos aquellos privilegios, tales como la moderación de los tributos y derechos reales, que se soliciten en sus ordenanzas, a semejanza de otras compañías que ya existían "en algunos Estados". Sus interesados "como lo son de la primera y mayor Corona del Mundo, se verán favorecidos, y honrados con mayores mucho, y más amplias gracias, y privilegios que ellos" (§ VIII y VIII).

Para constituir el fondo de la compañía se invitaba a participar a todos los españoles y extranjeros domiciliados, sin excepción por razón de su adscripción social. Incluso se prometía la solicitud de Breve de Su Santidad para que pudieran invertir sus caudales los eclesiásticos. Las aportaciones —entregadas en tres plazos— serían admitidas en "dinero, mercaderías, frutos, manufacturas, joyas, navíos y todo lo que condujera a sus aprestos". Los interesados tendrían

derecho al voto en las asambleas territoriales y a la participación en el beneficio repartible, siempre a proporción del caudal impuesto (§ VI).

Las razones con las que este texto intenta justificar los privilegios de la Compañía, son materia de los epígrafes XIII y XIV. Entre la farragosa enumeración de las ventajas de este cuerpo de comercio, en la que se mezcla la vocación imperial con ideas religiosas o filantrópicas, destaca una preocupación: acabar con el contrabando que las potencias extrangeras realizan en territorio de la Corona española y hacerse con el control del propio comercio, cosa que sería posible sin privilegios. En línea con la doctrina del momento, esto se conectaba con un plan ambicioso de promoción económica y con la concepción del comercio como motor de la misma. El control del movimiento mercantil y su incremento, posibilitaría la disminución de la exportación del oro y la plata de las colonias y su inversión en el país, de forma que España dejaría de servir "sólo de puente, por donde se transfiere [la riqueza] de las demás naciones" (§ XIV).

Tras el fracaso de esta iniciativa, que nunca tuvo una plasmación práctica, don Francisto de Soto y Guzmán, miembro de la recientemente renovada Junta de Comercio presentó a este organismo, con fecha 8 de septiembre de 1.683, un proyecto de Compañía con el mismo objeto que la que se ha comentado. En la reunión de dicha Junta celebrada en 4 de octubre, se contempló y aprobó esta iniciativa, y se encargó a don Luis Cerdeño la elaboración del proyecto. La Planta resultan

te fue elevada a consulta el 26 de abril de 1.684.

El pretendido apoyo entusiasta de la Corona a este proyecto, del que hablan los textos, se tradujo en el inmediato nombramiento de una Junta que estudiara el tema, según una práctica muy repetida en los siglos que tratamos. Fue una "Junta de Ministros" de Estado, Guerra, Castilla, Indias y Hacienda, "a donde se vean y especulen estos papeles y me consulte lo que pareciera, y conviniendo que la materia se vea y discurra con toda brevedad posible, mando que estas Juntas se repitan sin intermisión hasta que se concluyan" (164).

La Planta elaborada, aprobada por la Junta de Comercio y elevada a consulta en 18 de mayo de 1.685, está dividida en cuatro puntos. El primero se refiere a la utilidad que se seguirá al estado público y común de la monarquía y aumento que tendrá el real erario; el segundo, al caudal de que se podrá formar la compañía; el tercero, a los privilegios que S.M. concederá, y el cuarto, a las condiciones para la conservación y administración de la compañía. El análisis jurídico de de tallado del texto ha sido realizado por Sánchez Apellániz. En lo que sigue me ceñiré a resaltar aquellos puntos relevantes para mi argumentación, que caracterizan al proyecto como una alternativa fallida pero en el que se encuentran características que merecen destacarse por cuanto revelan una concep-

(164) Real Decreto de 10 de junio de 1,684. En esta Junta no participaba Soto aun que sí lo hacía D. Luís Cerdeño.

ción muy avanzada de los contratos mercantiles (165).

El objeto del proyecto era la creación de una compañía privilegiada que realizara el comercio con América y "de todo lo adyacente a ella". Al efecto, se pretendía sustituir el sistema existente por un modelo similar al inglés y holandés, y así lo expresaba el propio autor:

"... por los principios y medios de establecer compañías se han exaltado en riquezas y poder en todos tiempos muchos reinos estados y provincias, casas y personas particulares. También se sabe que en todos tiempos se han conocido en España las importancias que se seguirían de formar algunas compañías de comercio a imitación de las de Holanda, In glaterra y otros países. Y en orden a ello es bien notorio lo mucho que se ha discurrido y trabajado en los Consejos y en varias Juntas que se han formado para este efecto en distintos tiempos y especialmente desde el del reinado del Señor Rey Don Felipe tercero, sin que se haya dado hasta ahora en punto esencial ni hallándose forma ni posibilidad para poder poner por efecto su formación ni discurrídose en orden a que compañía alguna desde su formación pudiere abrazar y ceñir todos los comercios de las Indias..." (166).

Las ventajas que ofrecía esta compañía frente a la organización existente se basaban, fundamentalmente, en sus dimensiones y en su capacidad integradora de grupos más amplios de personas. Se pretendía que entraran a formar parte en ella los comerciantes extranjeros, que tendrían privile-

(165) Miguel Sánchez Apellániz, "El proyecto de compañía de comercio en Indias aprobado por la Junta de Comercio en 1.683", Revista de Derecho Mercantil, núm. 82, pp. 95-116.

(166) El texto citado forma parte del escrito que, con sus ideas acerca de la compañía, entregó Soto a Medinaceli para que la remitiera a la Junta que debía discutir el proyecto y de la cual no formaba parte. Se encuentra en la Certificación de Servicios de Don Francisco de Soto, y es citado por Miguel Sánchez Apellániz en "El proyecto...", p. 97.

gios de naturaleza si invertían más de 20.000 pesos o la mitad de esta cantidad si aportaban, además, cuatro maestros y ocho oficiales de cualquier fábrica (núms. 72 y 73). Se intentaba, así, desanimar a la práctica del contrabando (167). Se invitaba, desde luego, a los comerciantes españoles que veían dificultada su participación en el comercio americano y se intentaba atraer al ahorro dormido por diversas causas institucionales:

"Podrían interesarse en esta compañía (que hoy no se interesan por falta de inteligencia, industria o no tener oportunidad para poderlo hacer) cualesquiera estado de personas, con las que las ganancias de ella se comunicarán a todo el Reyno y no serán privativos del corto número de comerciantes que hoy hay" (núm. 38).

Asimismo, se invitaba a los gremios de comerciantes y fabricantes para que participaran en la asociación como tales corporaciones así como a las ciudades. Como señala Sánchez Apellániz, es de lamentar la ausencia de normas respecto a su participación en las Juntas ya que señalarían un precedente de las cuestiones que se plantean en las sociedades de economía mixta (168).

De esta forma se esperaba que esta compañía pudiera cen-

(167) Las referencias que citamos en el análisis de este proyecto remiten al ms. 19.711² de la Biblioteca Nacional: "Planta, que de orden del rey nuestro Sr. ha formado D. Luis Cerdeño y Monzón, caballero de Santiago, de los Consejos de S.M. en el Real de Castilla y de las Indias, para la instrucción de una compañía de los Reynos de Castilla, por cuya dirección corra el comercio privativo de la América". Está íntegramente reproducido en Juan Antonio Alejandro García, "Un proyecto de compañía universal del comercio con las Indias en el siglo XVII", III Congreso del Instituto Internacional de Derecho Indiano, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1.973.

(168) M. Sánchez Apellániz, "El proyecto de compañía...", p. 107.

tralizar todo el comercio americano y abarcar incluso las áreas que no estaban atendidas por el sistema de flotas. Esta compañía se presentó, por tanto — y fue la última vez que se hizo así— como una alternativa a la Casa de Contratación. Su supresión se deduce de la solicitud de monopolio para el comercio con América "sin que persona alguna de cualquier estado o calidad que sea dentro o fuera de sus reinos pueda comerciar por mayor o menor si no fuere por mano de la compañía" (núm. 68). En el mismo sentido, se explicitaba "que llegando a tener efecto la institución de la compañía se extingue absolutamente el Tribunal de la Casa de Contratación ..." (núm. 69).

No obstante, se cuida de no presentar el nuevo organismo como destructor de los privilegios sevillanos, sino sólo como su ampliación. Por ello, la dirección de la Compañía sería compartida por dos Consulados, el de Sevilla y el de Madrid. Incluso se consagra el dominio de aquél al estipular que estaría formado por un prior, ocho directores y seis cónsules, frente a los cinco directores y tres cónsules del madrileño (núms. 144 y 145).

La relación de la compañía con el Rey se planteaba bajo un esquema contractual. Se le nombraba su protector y se reconocía que de su persona emanaban todos los privilegios que se solicitaban. Pero se estimaba que las concesiones, de obtenerse, se basarían en los enormes beneficios que aportarían al reino. Por ello, se afirmaba "que debajo de esta promesa (de privilegios) queda celebrado un contrato oneroso

con todos los interesados, para que mediante él, se pueda pedir la observancia de todo lo que se ofreciere" (números 54 y 67). El mismo sentido tienen los preceptos que intentan evitar el abuso que el poder real pueda realizar con el capital de la compañía. En este punto, el Rey estaba considerado como un accionista más, con tantos derechos como le otorgara la cantidad aportada pero sin ninguno más (números 80. 84 y 93).

La consideración de la compañía como sujeto, con patrimonio propio y capacidad de ostentar derechos y tener obligaciones, es decir, la personalidad jurídica, está también reflejada en el texto que comentamos, como en el núm. 93, que trata de los deudores del nuevo organismo:

"Que Su Magestad no ha de conceder moratoria a ningún deudor de la Compañía por contrato celebrado con ella y que dimane de negociación suya porque ha de poder cobrar de ellos en la forma que le pareciese".

Destacaremos, asimismo, que aunque no hay mención explícita, de los artículos del proyecto se deriva la responsabilidad limitada de las acciones (500 pesos) que pueden ser nominativas y al portador. La libre transmisión de las mismas es un principio general que se desvirtuó permitiendo el tanteo de los antiguos socios ante su venta (núms. 120 y 121).

El capital era limitado pero se buscaba su permanencia. De este modo, se concedían prvilegios a los que lo impusieran a perpetuidad y se prohibía su reclamación antes de ocho años (124 a 126). La duración de la Compañía, por tanto, en principio ilimitada, sería de hecho de 8 años, con posibilidades de renovación con los mismos o distintos socios. Esta

disposición seguía, también, el inicial modelo holandés.

Las razones del fracaso de este proyecto pueden deducirse de sus propias características. Era una alternativa demasiado ambiciosa y sus posibilidades de éxito se basaban en una descripción ideal más que en un análisis de la realidad. Era difícil que a finales del siglo XVII se asumiera el riesgo de la sustitución de un sistema por otro que, previsiblemente, no comenzaría a rendir sus frutos inmediatamente y que requería una inmovilización de capital muy considerable. No hemos encontrado documentación que revele la existencia de un conflicto abierto entre sus partidarios y los de la organización sevillana. Quizá la remodelación de personal que siguió a la caída de Medinaceli (ocurrida tan sólo tres meses después de la aprobación del proyecto por la Junta de Comercio) solucionara el tema, relegándolo al olvido.

La Planta volvió a ser presentada en 1.705 ante la entonces denominada Junta de Restablecimiento pero entonces fue rechazada. La explicación clásica para esta resolución es la oposición de los representantes franceses en la Junta (169). No eran sólo dos individuos frente a 21 de los diferentes Consejos que integraban este organismo. Era el cambio de política económica que impulsó la nueva dinastía y que estaba comenzando a desarrollar (170).

(169) Jaime Correa Pujol, Historia de la economía española, Barcelona, 1.945, tomo III, pp. 109-111.

(170) La planta del establecimiento, según R.D. de 5 de junio de 1.705, en Larruga, Historia..., tomo IV, fols. 207 y ss. Un ejemplar de la Planta de la Compañía, en letra del siglo XVIII, en B.N. mss. 1.322.

2.3.3.- Los proyectos complementarios.

a) Objetivos y medios. - El fracaso de los proyectos de creación de nuevas compañías privilegiadas para el comercio colonial en la España del siglo XVII estribaba fundamentalmente en que suponían la destrucción de la organización iniciada en 1.503 y consagrada con la creación del Consulado de Sevilla en 1.543. El sistema de flotas y galeones, además, obtuvo una nueva sanción con el Tratado de Utrecht ya que no se podía cambiar sin atentar contra este pacto internacional. El cumplimiento del acuerdo sobre el Asiento de Negros y el Navío de Permiso dependía de la continuación del régimen de flotas (171).

Por tanto, se revelaba imprescindible, en los comienzos del siglo XVIII, una nueva estrategia que no gastara energías inutilmente, golpeando contra el intocable sistema de la Casa de Contratación. Tal estrategia consistía en la organización del comercio en las áreas no monopolizadas por la Casa, mediante fórmulas mercantiles al margen de aquel organismo. La solución adoptada fue, finalmente, la constitución de compañías privilegiadas, mucho más parecidas formalmente a sus homónimas europeas que a su antecesora española. Los orígenes de esta política se encuentran en la propuesta catalana de Companya Nàutica Mercantil (1.701) y en la Compañía de Honduras (1.714); sin embargo, no alcanzó su consagración oficial hasta el ac-

(171) Sobre este aspecto del Tratado, Geoffrey J. Walker, Política española y comercio colonial, 1.700-1.789, Barcelona, 1.979, p. 125; Joan Mercader Riba, Felip V i Catalunya, Barcelona, 1.958, pp. 243-245.

ceso de Patiño al poder central, si bien es razonable suponer que sus anteriores cargos (especialmente el de Presidente de la Casa de Contratación desde 1.717), influyeran en su práctica posterior.

En 1.701, las Cortes de Cataluña solicitaron de Su Magestad, permiso para la "formación de una companya nàutica, mercantil en lo Principat de Cathalunya, a fi, y efecte de re-
tablir lo comers en dit Principat" (172). Tal cuerpo mercantil estaría formado únicamente por catalanes, ya que su propósito fundamental, ya enunciado, era el de restabelcer el comercio en el territorio; un comercio que había sufrido un retroceso, real desde la época de los Reyes Católicos, por la imposibilidad legal y, más tarde, por la dificultad práctica de participar en el tráfico colonial. Por ello, los catalanes pedían la formalización de su participación en el comercio americano mediante la posibilidad de enviar navíos que, partiendo de Cataluña, se incorporasen en Cádiz a la flota, en el marco organizativo de una compañía privilegiada. La idea no era nueva en el Principado, siendo el más destacado antecedente el proyecto de 1.681 de Narciso Feliu de la Peña, de indudables semejanzas con el de 1.669 (173).

(172) Cap. LXXXVI de las Constitutions, capitols y actes de Cort, fetes y otorgats per la S.C.R. Majestat el Rey Nostre Senyor Don Felip IV de Aragó y V de Castella, Comte de Barcelona, etc., Barcelona, 1.702, pp. 81 y ss.

(173) Narciso Feliu de la Peña, Político discurso. Conteniendo un memorial a la Nobilísima ciudad de Barcelona, suplicando mande y procure impedir el sobrado trato y uso de algunas tropas extranjeras que acaban el comercio y pierden las artes de Cataluña, Barcelona, 1.681, Biblioteca Central de Barcelona, folleto Bonsoms, núm. 2.799. Sobre el tema, Jaime Carrera Pujal, Historia política y económica de Cataluña (siglos XVI a XVIII), Barcelona, 1.946, p. 458.

Las Cortes formularon su propuesta hábilmente. Afirman pretender "restituirse per dit medi al estat florit, que antigament gosava, y vuy gosen Francia, Italia, Alemanyá, Olanda y Venecia". En sus palabras eluden con retórica el conflicto fundamental que les enfrentaba a Castilla y que era el que pretendían resolver mediante la ampliación de su participación en el comercio ultramarino. Así, obtuvieron una esperanzadora respuesta: "Plau à sa Magestat, seus perjudici del comers de las Indias, ni al comers de Sevilla" (174).

La Guerra de Sucesión, con el cariz peculiar que adquirió en territorio catalán y su resultado, hizo que se olvidara la satisfactoria solución dada en las Cortes de 1.701. El intendente Cavallero reinició el debate en 1.720 pero hasta 1.755, no se logró constituir la Real Compañía de Barcelona, cuerpo mercantil privilegiado catalán para el comercio directo con las islas de Santo Domingo, Puerto Rico y La Margarita (175).

Es interesante destacar que la iniciativa de la creación de la Compañía de Barcelona correspondió al mismo grupo de comerciantes que querían restablecer el Consulado de dicha ciudad, suprimido desde 1.714 (176). La compañía se creó,

(174) Cap. LXXXVI de la Constitutions...

(175) R.C. de 4 de mayo de 1.755, I, AGI, Contratación, 5005. Sobre el debate re-conducido sin éxito por los intendentes Cavallero y José Pedrajes, Mercader Riba, Felip V., pp. 243-245.

(176) Lo que se deduce de la confrontación de los nombres de la primera dirección de la Compañía (P. Vilar, La Catalogne dans L'Espagne moderne. Recherches sur les fondaments économiques des structures nationales, París, 1.962, V.III, p. 465, n. 2) y los de

precisamente, cuando los comerciantes catalanes ya habían conseguido integrarse en el tráfico colonial llegando, incluso a dominarlo, con lo que sólo se explica la iniciativa como una forma de ampliarlo, con ciertas prerrogativas (177).

La Compañía de Barcelona debía realizar el comercio con las colonias, enviando únicamente productos españoles (I). A la ida sus navios debían tocar Cádiz (II) y en el tornaviaje registrarse, asimismo, en dicho puerto, que centralizaba el comercio americano (III). Entre sus privilegios, destacan los fiscales (IV a IX) y, en general, la consideración de sus navíos y de la propia Compañía con "idénticos honores y privilegios que la de Caracas" (XIII). Podía fletar, además, 10 registros, sin privilegio, en un plazo de quince años, para comerciar con Honduras y Guatemala. Y, como otras compañías, enviar a los territorios monopolizados negros y otras familias para fomentar el cultivo de tierras (XI).

He seguido las iniciativas catalanas, abandonando el camino iniciado cronológicamente. Retomándolo ahora, vuelvo al año 1.714, en cuyo inicio se firmó un acuerdo entre la Corona y el Marqués de Montesacro para la formación de una compañía por acciones para realizar en exclusiva el comercio con Honduras y Caracas: la Compañía de Honduras. La Corona parti

la comisión que fue enviada a Madrid en marzo de 1.755 para conseguir el restablecimiento del Consulado (A. Ruiz y Pablo, Historia de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona (1758-1.847), 1.919, pp. 27-30)

(177) Para la evolución del comercio catalán, la obra citada de P. Vilar, La Catalogne, la clásica de F. Rahola y Tremols, Comercio de Cataluña con América en el siglo XVIII, Barcelona, 1.931. y, sobre todo, Carlos Martínez-Shaw, Cataluña en la Carrera de Indias, 1.680-1.756, Barcelona, 1.981.

cipaba en ella con una cuarta parte de las acciones. Una primera expedición partió de Cádiz el 1 de diciembre de 1.714, dos navíos para Honduras y uno para Caracas. La empresa fracasó totalmente desde el punto de vista financiero pues no se logró arrebatarse el mercado a los holandeses (178).

Junto a esta iniciativa, que perfila una política que pronto se extendió, hemos de destacar, en el primer cuarto del siglo XVIII, la formulación de planes de constitución de compañías privilegiadas. Estos, en su origen, estaban abocados al fracaso, bien porque conllevaban la destrucción del sistema tradicional del comercio colonial, bien por su carácter "proyectista". En aquella categoría incluimos el proyecto que Segarra presentó en 1.719 a la Junta Central de Comercio —y que fue rechazado por ésta— para la constitución de una Compañía de Comercio con América. Tal compañía, reivindicando para su funcionamiento la Planta de Cerdeño ya comentada, tenía intención de acabar con un sistema que permitía que el comercio con Indias estuviera en manos de "tres pobres hombres en caudales y experiencias elegidos cada año entre los comerciantes del lugar (Sevilla)" (179).

Si, con un testigo del siglo, llamamos proyectistas a aquellos "entes que sin patrimonio propio, pretenden enriquecer los países en que se hallan, ya como naturales o ya como advenedizos" (180), no encontramos apelativo mejor para el

(178) R.D. Hussey, The Caracas Company..., pp. 43-48.

(179) R.A.H., Colección Sempere, tomo 32.

(180) José Cadalso, Cartas Marruecas, carta XXXIV.

suizo Rognon.

Tal individuo pretendía la formación de una compañía privilegiada con una amplia red territorial y que tuviera como objeto la revitalización de la economía del país mediante la centralización de todas sus actividades ("agricultura, artes, ciencias, navegación, comercio, manufacturas, etc"). Dicho plan fue objeto de una primera consulta (15 de diciembre de 1.723) en la que el Rey, de acuerdo con el dictamen de la Junta General de Comercio, devolvió el proyecto a su autor, pidiendo una mayor especificación de lo que no era sino una serie de formulaciones generales. En una segunda consulta (24 de mayo de 1.724) y, asimismo, según el parecer de la Junta General de Comercio, se estimó inaceptable el proyecto presentado, debido a la "avaricia" que en él mostraba su autor, encontrándose su proceder "apartado de lo justo y cercano al indecoro" (181). No obstante, por Real Orden de 25 de agosto de 1.725, se nombró una comisión —Jerónimo de Ustariz, conde de Torrehermosa y Francisco de Vera y Valdés— para que, ante las repetidas instancias de Rognon, dictaminara la indemnización que mereciera por su trabajo. Para acallar las continuas quejas del proyectista suizo, se le concedieron 150 doblones para que pudiera regresar a su país. La propia comisión especificó que tal cantidad no era una retribución, ya que "si el trabajo y gastos que alega consiste en especular y formar el expresado proyecto, le habrá costado poco des

(181) E. Larruga, Historia..., fols 70 a 72. Para la tramitación del expediente, A.H.N., Estado, leg. 3.205.

velo y discusión racional, respecto a las fantásticas ideas y perjudicialísimos fines que incluye..." (182).

La tramitación y discusión del proyecto de Rognon y su resultado final pone de relieve, en mi opinión, la transformación sufrida en el planteamiento del tema de las compañías privilegiadas por parte de las instancias oficiales en medio siglo. En efecto, el proyecto presentado a la consideración del rey en 1.723 fue rotundamente rechazado, a pesar de que era muy similar a aquella Compañía de Comercio Armado que en 1.668, la Corona quería crear. Por otra parte, no era de extrañar esta actitud en una comisión de la que formaba parte Ustáriz, que sostenía que la prosperidad del comercio no dependía de que se hiciera por compañías privilegiadas o por particulares, sino de que se realizara con géneros españoles, y que la única justificación posible del privilegio aparece cuando hay que colonizar un país o hay que defender el comercio. En España, ambas funciones son realizadas por el rey con su armada; por consiguiente, el único caso a considerar sería Filipinas (183)

Mientras se estaba rechazando esta iniciativa, por vía diplomática se trataban de impedir las actividades de la Compañía de Ostende fundada por el emperador austriaco Carlos VI en 1.722. En octubre de 1.723 el Parlamento británico aprobó una ley en su contra y en abril de 1.724, España invitó a

(182) Larruga, Historia, ibidem.

(183) Jerónimo de Ustáriz, Teórica y práctica de Comercio y Marina, 1.724, caps. XXXIX y XLI.

Inglaterra a ejercer presión en el Congreso de Cambray para que suprimiera la Compañía. En 1.725, sin embargo, España y Austria establecieron negociaciones secretas que dieron como resultado la reconciliación temporal de las dos naciones. Cuando dos años después, sometido a presiones constantes, el emperador quiso trasladar la compañía a Trieste, Patiño ofreció España —Cádiz— para su instalación.

Esta fue la primera actuación del ministro Patiño en el terreno que analizamos, y con ella esperaba, aparte las ventajas económicas, que el contacto con la Compañía de Ostende proporcionara a los españoles una valiosa experiencia en el desarrollo de una figura mercantil que nunca se había logrado imitar con éxito. El proyecto se desbarató, por el curso de los acontecimientos europeos y los cambios de las alianzas diplomáticas, que condujeron a obligar al emperador en 1.727 a la suspensión temporal —siete años— de la compañía y a su abolición total en el año 1.731 (184).

Antes de que tal abolición se consumara, ya Patiño había promovido una nueva empresa, la Compañía Guipuzcoana de Caracas (1.728), cuyo éxito consolidó la posición de estos cuerpos de comercio en España. Su objeto fundamental era apropiarse del comercio del cacao, que monopolizaban los holandeses desde su base en Curaçao y que ocasionaba en España su escasez y su carestía, sin hablar del atentado que suponía al teórico monopolio comercial de la metrópoli en sus colonias. Se

(184) Toda la documentación mencionada se encuentra reproducida en Jean Rousset de Missy, Recueil historique d'actes, négociations, mémoires et traités, Henri Scheurber y otros, La Haya, 1.728, vol. II.

trataba de atender una zona marginal a la Carrera de Indias y remediar "la tibieza de mis Vasallos en aplicarse al tráfico de este género con las provincias americanas" (185). Efectivamente, los dos únicos navíos mercantiles españoles que a mediados del siglo XVII intentaron inmiscuirse en el comercio del cacao, se enfrentaron con las efectivas medidas boicoteadoras dispuestas por los comerciantes holandeses y a su regreso a la metrópoli habían perdido un 50% en la empresa (186). Después de esta experiencia, ningún otro mercante español osó aventurarse en un campo tan eficientemente organizado.

La idea de recuperar el comercio venezolano resurgió en la segunda década del siglo XVIII. Ya he aludido al fracaso financiero que supuso la empresa del Marqués de Montesacro, uno de cuyos navíos arribó a Caracas. Poco después, surgiría una nueva iniciativa, esta vez con éxito, entre los comerciantes vascos. Como ya hemos señalado, el comercio con Honduras se atendió en parte, desde 1.755, por la Compañía de Barcelona.

Un grupo de patricios vascongados, negociantes y marinos, reunidos en San Sebastián en 1.727, bajo la presidencia del conde de Peñaflorida, elevaron al rey una representación. En ella pedían autorización para crear una empresa naviera mercantil que comerciara directamente desde el Norte de España

(185) Preámbulo de la Real Cédula de fundación de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, 25 de septiembre de 1.728, AGI, Contratación, 5001.

(186) R.D. Hussey, The Caracas Company, p. 52.

con Venezuela (187). Como ha señalado Fernández Albadalejo, esta iniciativa no surgió de la nada y hay que pensar que los comerciantes vascongados se limitaban a responder a una acenuada demanda de coloniales, cuyos precios contrastaban con la tendencia a la baja de los productos agrícolas. Los comerciantes donostiarras rechazaron la especialización pesquera por la que optaron los pequeños puertos y ensayaron otra vía, la de la asociación, para monopolizar un sector "no exento de riesgos, aunque mucho más lucrativo sin duda" (188).

La Compañía de Caracas permitió una cierta recuperación donostiarra tras la crisis de 1.650-1.700 aunque su experiencia fue muy diferente de la que significó la compañía catalana. San Sebastián se lanzó como única esperanza hacia el comercio monopolístico americano, mientras que para Barcelona no fue sino un elemento más de una red mercantil que se estaba ampliando, con éxito, por otras rutas terrestres y marítimas (189).

La iniciativa vasca fue bien acogida en la Corte, sobre todo por Patiño, que era a la sazón ministro de Hacienda, Marina y Guerra. Mientras los comerciantes solicitaban patente de corso para combatir a los holandeses, no pedían ningún tipo de ayuda económica de la Corona y pretendían dotar a su

(187) La solicitud, en Ramón de Bastera, Una empresa del siglo XVIII. Los navíos de la Ilustración. La Real Compañía de Caracas y su influencia en los destinos de América, Caracas, 1.925, p. 40.

(188) Pablo Fernández Albadalejo, La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1.766-1.833: cambio económico e historia, Madrid, 1.975, p. 73.

(189) Cfr. ibidem., p. 229 y P. Vilar, La Catalogne..., t. III, pp. 139 y ss.

empresa de un carácter exclusivamente mercantil. Por contra, Patiño quería acentuar su vínculo estatal y ajustar los privilegios y obligaciones de la Compañía de un modo tal que el especial régimen tributario vasco no impidiera una cierta ventaja para las arcas reales. Tales fueron las posiciones mantenidas por Felipe Aguirre, secretario de la Junta Foral de Guipúzcoa y por el ministro en una serie de conversaciones que dieron como resultado la Real Cédula de creación de la Compañía. Una comisión —Los directores— redactaron las bases constitutivas de la misma, que funcionaron como su primer reglamento (190).

La utilidad de la Compañía para "mi Real Hacienda y [para] el común de mis vasallos" (191) se conseguiría gracias a la inauguración de una nueva ruta para el comercio español —desde los puertos del Cantábrico a Caracas— y por la particular organización de los viajes. A la ida, los navíos debían satisfacer el equivalente a los derechos que tendrían que abonar si salieran de Cádiz, lo que quedaba garantizado por el Juez de Arribadas de San Sebastián. A su regreso, debían registrarse en el citado puerto andaluz y sin necesidad de descargar enteramente, para evitar demoras que encarecie-

(190) José Estornés Lasa, La Compañía Guipuzcoana de Caracas, Buenos Aires, 1.948, contempla estos documentos en pp. 17 y ss. María Monserrat Gárate Ojanguren, "Las cuentas de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas", Moneda y Crédito, Revista de Economía, núm. 153, junio de 1.980, pp. 48-75 observa semejanzas —indudables— con las reglas de la fene-
cida Compañía de Ostende y de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales.

(191) Preámbulo de la R.C. de 25 de septiembre de 1.728. En lo que sigue se citan en el texto los artículos correspondientes a este documento, en romanos y entre paréntesis. Lo mismo reza para las restantes cédulas de creación.

sen el producto (II y III) y para evitar el fraude en la importación de metales preciosos.

La Compañía debía realizar su comercio entre frutos del reino y el cacao venezolano (I) en dos navíos anuales, de 40 a 50 cañones que, ayudados por las embarcaciones menores que estimara convenientes, deberían ejercer la vigilancia sobre las costas desde la desembocadura del río Orinoco hasta la del Hacha (VIII y X).

La protección a la Compañía se manifestaba en la obtención de los frutos del curso (VI, VIII, IX), y en diversos privilegios fiscales (II, IV, XII y XIII), en la explicitación de que su participación en ella no era deshonoroso sino que servía "de nuevo blasón y lustre de su nobleza, empleo, o carácter" (XVIII), en la "Real protección y amparo", en la consideración de sus navíos como "amigos empleados en utilidad de mi Real servicio y de la causa pública" (XV) y en la concesión a sus individuos de "todas las libertades, y exenciones, preeminencias y prerrogativas, que gozan los oficiales y gente de mi Real Armada" (XVIII).

A cambio —y contra la pretensión inicial— la Compañía se veía comprometida en los conflictos bélicos de la Corona que, sin embargo, se reservaba la libertad para conceder otros Asientos para este comercio (V). Precisamente fue en 1.742 cuando la Compañía obtuvo legalmente tal monopolio, como recompensa a su colaboración activa en la guerra con Gran Bretaña (192). De hecho, lo ostentaba desde su fundación, ya

(192) Mussey, The Caracas Company..., p. 147.

que era la única forma segura de comerciar con Venezuela.

A pesar de la suscripción de acciones por parte de la Fa milia Real y la Provincia de Guipúzcoa, no se llegó a recaudar sino la tercera parte del capital previsto (un millón y medio de reales), por lo que los directores tuvieron que utilizar su crédito personal para sufragar los gastos de organización de la primera expedición. Bastó este primer viaje para —1.730— demostrar la utilidad de la Compañía, que consiguió bajar sensiblemente el precio del cacao y repartir un di videndo del 20% en 1.735. Este éxito zanjó, en la práctica, el pleito planteado por los Estados Generales Holandeses en nombre de los comerciantes de aquel país, pretendiendo impedir la constitución de la Compañía (193).

Desde este momento, no dejó de ser rentable para sus accionistas hasta 1.781, en que su participación activa en la guerra contra Gran Bretaña, le costó buena parte de su flota (194). No obstante, diversos factores motivaron que este cuerpo privilegiado viviera, de hecho, una lenta agonía que fue consagrada con su disolución y la asunción de su liquidación por la Compañía de Filipinas en 1.785.

La Compañía superó con éxito diversos problemas que se sucedieron entre 1.728 y 1.752. En 1.739 la guerra de España con Gran Bretaña le costó cierto quebranto en su flota pero le proporcionó la ratificación de su monopolio; la rebelión

(193) Los documentos emanados de este pleito, en Rousset, Recueil historique..., tomos III y IV.

(194) Sobre la secuencia del reparto de dividendos, José Estornés Lasa, La Compañía..., pp. 27 y 28.

venezolana contra ésta fué reprimida por la fuerza y solucionada hábilmente mediante la integración de accionistas venezolanos (195).

A partir de 1.752 se trasladó la dirección desde San Sebastián a Madrid y fue el inicio de una nueva etapa en la que, si bien se mantuvo una cierta apariencia de prosperidad, comenzaron los síntomas evidentes de una crisis. La rigidez en la dirección de la Compañía se hizo la norma; los balances se dejaron de publicar entre 1.766 y 1.772 y los accionistas, que daban muestras de descontento, eran acallados con el regular reparto de dividendos. La dirección, sin embargo, se veía incapaz de adaptarse a la nueva etapa de progresiva liberalización del comercio, a la evolución a la baja de los precios de los coloniales, especialmente del cacao, y al descenso de la demanda del hierro vizcaíno ante la penetración del sueco (196). Era evidente la necesidad de responder ante la nueva situación con un cambio de política, tendente a reducir los costos. Como los precios del cacao venían determinados desde 1.752 por la llamada Asamblea de Caracas, la única posibilidad de actuación era sobre los costos de transporte, en la vía utilizada por las colonias norteamericanas (197).

(195) R.C. de 15 de septiembre de 1.749; Junta General de Accionistas de 1.751. Sobre la revuelta, Pierre Vilar, Movimientos nacionales de independencia y clases populares en América latina. Informe de síntesis, Barcelona, 1.976. Francisco Morales Padrón, Rebelión contra la Compañía de Caracas, Sevilla, 1.955.

(196) De nuevo, la posición catalana era diferente. Para la misma época, se observa un incremento en la demanda de tejidos catalanes.

(197) J. Shepherd y G.M. Walton, "Trade, Distribution and Economic Growth in Colonial America", Journal of Economic History, vol. XXXVI, núm. 1, pp. 128-146.

Sin embargo, "no se observa innovación técnica ni inquietud alguna dentro de la Compañía en lo que a este aspecto se refiere" (198).

La Compañía había aceptado su papel de perdedora ante los cambios operados en el comercio y se lanzó a la especulación, la reventa y el contrabando (199). Su caída vino provocada, finalmente, por dos causas externas: el R.D. de 12 de octubre de 1.778, de liberalización del comercio colonial desde un número importante de puertos peninsulares y la guerra hispano-inglesa (1.780-1.783).

La intervención del director Goyzueta ante la Junta General de Accionistas de 1.781 muestra claramente la actitud de la dirección ante el Real Decreto de 1.778. Lo valora positivamente, en tanto reducirá los costos en el mantenimiento de buques armados; pero —afirma— la consecuencia negativa es mayor: la caída del monopolio supone el alza de los precios de compra y el descenso de los de venta y la automática caída del volumen del tráfico de la compañía. La dirección presentó, pues, como inevitable, la inadaptación de la Compañía a las nuevas circunstancias.

La Compañía no pudo sobrevivir en un régimen de liberalización comercial. Para intentar resolver la crisis se convocó

(198) P. Fernández Albadalejo, La crisis..., p. 233. La evolución del comercio de la compañía en Hussey, The Caracas Company; en M. Gárate, "Las cuentas..." y en María Jesús Matilla Quiza, "Las compañías privilegiadas en la España del Antiguo Régimen", en La economía española al final del Antiguo Régimen, IV, ed. M. Artola, Madrid, 1.982, pp. 313-316.

(199) Sobre esto y su repercusión en la economía guipúzcoana, P. Fernández Albadalejo, La crisis..., pp. 234-239 y 375.

una Junta General de Accionistas en 1.784. En ella propuso Cabarrús su inserción en un nuevo cuerpo privilegiado: la Real Compañía de Filipinas.

Los planes de Cabarrús consistían en aplicar un esquema que había funcionado con éxito en el tráfico mercantil con Venezuela, a un comercio que nunca había sido resuelto, a pesar de las múltiples ideas que al respecto se formularon desde 1.730 (200); la organización privilegiada se intentaban justificar teóricamente, en una época de decadencia del monopolio, tanto por Cabarrús como por Foronda; este último estimaba que a las compañías privilegiadas se las "debe reputar como a un labrador hábil, que va a rozar una nueva tierra, a cultivarla y a plantar flores y frutos donde no hay sino zarzales" (201). De otra parte, los privilegios siempre deben ser provisionales, y sólo significan un premio al patriotismo de aquellos ciudadanos que arriesgan sus caudales en una empresa tan útil y necesaria al país como incierta por su novedad:

"... después de veinte años, en cuyo tiempo se habrá indemnizado de sus fatigas, industria y anticipaciones, repartirá como es justo a todos sus compatriotas el campo fecundo de las Filipinas; así como lo ha hecho con la provincia de Venezuela la cual no siendo sino un bosque que cuando se encargó de su cultivo la Compañía de Caracas, es en la

(200) Existen al menos, cinco proyectos entre 1.730 y 1.736 y cuatro entre 1.753 y 1.784, de los que da cumplida cuenta María Lourdes Díaz Trechuelo, La Compañía de Filipinas, Sevilla, 1.965, pp. 3-30.

(201) Valentín de Foronda, "Disertación sobre la nueva compañía de las Indias Orientales, leída en la Junta Pública que celebró la Sociedad Vascongada en 1.784, día de S. Carlos, en la villa de Bergara", en Miscelánea o colección de varios discursos, Imprenta de Benito Cano, 1.787, p. 31.

actualidad una provincia poblada, abundante de cacao, de tabaco y llena de riquezas" (202).

La nueva compañía rindió unos discretos beneficios hasta 1.803, fecha en que comenzó su decadencia (203). No cumplió su loable objetivo social respecto a las Filipinas, tal y como anunció Foronda, y tampoco, a pesar de lo anunciado por sus promotores, cedió gustosamente sus privilegios (204).

La Real Compañía de Filipinas se creó por Real Cédula de 10 de marzo de 1.785, con una duración de 25 años. La R.C. de 12 de julio de 1.803 la prorrogó hasta 1.825 (205). Incorporaba a la de Caracas (IV) y entre sus interesados se encontraban representadas institucionalmente las Compañías de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, de la Habana y de Sevilla y el Banco Nacional de San Carlos (III y LV).

Su objeto social quedaba definido como "la prosperidad de las Islas Filipinas y sus moradores" (XIII). Para lograrlo, el camino era la promoción del comercio hispano-filipino; y para ello, se concedía el privilegio exclusivo de su realización (y el de todo Asia) a los navíos de la Compañía que podían emplear cualquier ruta (XXIII). Aparte del efecto multi

(202) Ibidem, pp. 31 y 32.

(203) M.L. Díaz Irechuelo, La Compañía..., esp. caps. VII a IX.

(204) v. infra, parte II, cap. 1, 1.3.2.

(205) R.C. de 1.785 en AHN, RR.CC, núm. 717; R.C. de 1.803 en Aguirre, Prontuario alfabético y cronológico por orden de materias de las instrucciones, Ordenanzas, Reglamentos, Pragmáticas y demás Reales Resoluciones no recopiladas, que han de observarse para la administración de justicia y gobierno de los pueblos del Reino, Madrid, 1.799-1.805, t.VII, pp. 28-59.

plicador que se adjudicaba al comercio, en un razonamiento aún muy mercantilista, se obligaba a la compañía a separar un 4% para inversiones directas en las islas (L), a reservar una quinta parte del volumen de carga a sus moradores (XLI) y a transportar gratuitamente a las colonias a artesanos y profesores de matemáticas, química y botánica, fueran españoles o extranjeros católicos (LI y LII). La Real Cédula de 1.803 mantuvo estas condiciones, especificando que el mencionado 4% se podía dedicar, a la promoción de las actividades económicas en la propia metrópoli (XLIII).

Para realizar su comercio reservado, gozaba de privilegios fiscales (XXVII), de permiso para transportar plata amonedada (XXVIII) y de posibilidad de importar muselinas y textiles de algodón (XXXIX), lo que será su gran negocio.

Su actividad, sin embargo, no podía atentar contra el régimen establecido en 1.778 para el comercio hispano-americano y por ello, su actividad en este campo estaría regida por los principios comunes (XXIV y XLIII). Fruto de esta nueva situación es la introducción de normas para evitar posibles prácticas monopolísticas en la venta de sus géneros (XXXV). La experiencia de la Compañía de Caracas, por su parte, motivó la siguiente declaración de independencia política:

"Declaro que esta Compañía ha de ser solamente mercantil, sujeta a las leyes de la Monarquía, como cualquiera otro comerciante particular; a excepción de las gracias, privilegios y exenciones que le concedo para su fomento, sin que por ningún motivo ni pretexto pueda mezclarse ni introducirse en materias políticas, alianzas ni otros negocios de esta naturaleza, a menos de tener expresa orden o comi-

sión mía" (XXXIII).

En el mismo sentido, se estableció que los miembros de la Compañía:

"... no den ocasión de queja ni causen la menor desavenencia con ninguna de las naciones establecidas en la India Oriental" (XXXIV).

Para llenar el vacío creado por la desaparición de la Compañía Guipúzcoana de Caracas, Gálvez fomentó la creación de la Compañía Malagueña de Caracas, en la década de 1.780. El desconocimiento andaluz del mercado venezolano y —suponemos— la propia quiebra de la Compañía Guipúzcoana, condenaron al fracaso a esta compañía, a pesar del auxilio proporcionado por la Compañía de Filipinas. La sustitución de Gálvez por Antonio Valdés, como Secretario de Indias, terminó con estas ayudas y condenó a esta interesante Compañía que estaba dirigida por la de Navieros de Málaga (1.784) aunque tenía una contabilidad diferente, en un esquema que Sánchez Apellániz caracteriza como de agrupación horizontal (206).

El seguimiento de la evolución de la Compañía Guipúzcoana de Caracas nos ha hecho avanzar a lo largo del siglo XVIII. Volvamos a la cuarta década para encontrarnos con la efímera Compañía de Galicia, creada por Real Cédula de 20 de abril de 1.734 para el comercio del palo de campeche y a 1.740 por cuya R.C. de 18 de diciembre se creó la Compañía de

(206) Miguel Sánchez Apellániz Valderrama, La compañía mercantil de Málaga. Aportación al estudio de los antecedentes jurídico-mercantiles de la sociedad anónima, Málaga, 1.975 [resumen de tesis doctoral].

la Habana (207).

Un esquema similar al de las compañías anteriores lleva a justificar la aparición de ésta para garantizar el abastecimiento de la isla de Cuba y fomentar en ella otros cultivos, en sustitución del tabaco, demasiado extendido y en manos de extranjeros (208). Esta vez, los intereses cubanos, galditanos y sevillanos coincidieron en la promoción de esta compañía, que haría esta ruta desde Cádiz con un discreto resultado hasta entrado el siglo XIX. Este cuerpo de comercio, como los anteriores, estaba bajo la Protección Real y la posesión de sus acciones no significaba "desdoro sino nuevo blasón y lustre de nobleza" (III).

la Compañía tenía este comercio en exclusiva, para cuya realización gozaba de diferentes privilegios fiscales (IV, VI, XXXIV, XXXV a XXXVII), corso (XXII, XXXIII), etc., que se resumen en la frase del preámbulo, "iguales gracias y prerrogativas que a la de Caracas".

La constitución de la Compañía Guipuzcoana de Caracas hizo surgir iniciativas privilegiadas en Bilbao, por las que se intentaba ampliar las posibilidades de realizar comercio directo con América. Cabe destacar la Compañía de Navegación y Comercio para las tres provincias de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay, presentado en 1.737, 1.739 y 1.745 sin lograr pasar del campo del proyectismo (209) y la Compañía de la Lui-

(207) R.C. de 18 de diciembre de 1.740, AGI, Ultramar, 885.

(208) Ibidem., preámbulo.

(209) José Zavala y Miranda, Manifiesto, que al M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya,

siana, iniciativa de 1.764 que corrió pareja suerte (210).

Hemos visto cómo la Carrera de Indias se vió completada desde 1.728 por la ruta San Sebastián-Cáracas-Cádiz-San Sebastián; desde 1.740, por la establecida entre Cádiz y la Habana; desde 1.755, por la más cómoda y mayor incorporación catalana a la ruta tradicional. Además, el tráfico evolucionaba sobre unos principios liberalizadores que se iban imponiendo desde 1.720. la apertura de puertos y rutas culminó en el siglo XVIII con el Decreto de 12 de octubre de 1.778. Tal situación hizo mella en unos cuerpos privilegiados que, o se esforzaban en resultar competitivos o cada vez resultaban más gravosos para el Estado. No dejaron de crearse, sin embargo, nuevas compañías mercantiles privilegiadas. Ya hemos hablado de la Compañía de Filipinas, cuyos objetivos, en 1.785, eran comparables a los de su antecesora en 1.728 pero adaptada a una nueva situación internacional y mucho más elaborada en sus principios constitutivos, como veremos a continuación.

En Málaga también se crearon compañías privilegiadas, después de 1.778. Por Real Cédula de 3 de agosto de 1.784 se constituyó la Compañía de Navieros de Málaga. Bajo la protección de Gálvez, pretendía incrementar la participación española en un comercio americano monopolizado por la corpora-

en su junta de Guernica presenta su diputado en la Corte de Madrid, D.— sobre establecer en la villa de Bilbao, comercio y navegación por reglas de compañía para la carrera de Buenos Aires, y otros de América, Madrid, 29 de julio de 1.743.

(210) T. Guiard, Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y del comercio de la Villa, Bilbao, 1.930, vol. II, pp. 342-370.

ción "Comercio Marítimo", que aglutinaba 21 casas extranjeras. obtuvo el monopolio de dos productos: los naipes de la fábrica de Mocharevialla, únicos vendibles en Nueva España, y el papel para las fábricas de cigarros de México. Gracias a estas exclusivas, la Compañía mantuvo una existencia discreta, en la que incluso promocionó, como hemos visto, la Compañía Malagueña de Caracas. La muerte de Gálvez provocó la pérdida de las exclusivas mencionadas y la Compañía no pudo sobrevivir en un marco de libre competencia.

Para salvar su precaria situación, las Compañías malagueñas mencionadas se unieron para constituir la Compañía Merítima de Málaga (R.C. de 23 de marzo de 1.790). Tras una apariencia de prosperidad inicial, la Compañía no pudo resistir la competencia catalana y levantina, que completaban su carga en Málaga a cualquier precio y no fue capaz de despertar el interés de los capitalistas en ella. Así, después de 1.795 ya no había rastro de ella (211).

b) Reglas de funcionamiento.— hasta aquí hemos mostrado, en una descripción general, la evolución de la Compañía privilegiada en España en el tráfico colonial a lo largo del siglo XVIII. Lo que sigue, pretende mostrar las características de un grupo significativo de estas compañías, que sirvan de término de comparación para el análisis de las industriales privilegiadas.

(211) Sánchez Apellániz, la compañía marítima...

CUADRO II, 1

CAPITAL DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS MERCANTILES PRIVILEGIADAS

<u>Compañías</u>	<u>Capital nominal</u> (pesos)	<u>Valor de cada</u> <u>acción</u> (pesos)	<u>Participación</u> <u>Casa Real</u> (pesos)	<u>Participación</u> <u>Casa Real</u> (%)	<u>Censos</u>
Caracas (1.728)	1.500.000	500	100.000	6.66	-
Habana (1.740)	1.000.000	500	50.000	5	-
Barcelona (1.755)	1.000.000	250	-	-	sí
Filipinas (1.785)	8.000.000	250	1.000.000	12.5	no
Filipinas (1.803)	12.500.000	250	3.943.250	31.5	sí

FUENTE: Reales Cédulas de constitución de las compañías.

El cuadro adjunto nos muestra en su primera columna las dimensiones previstas para las compañías. En el conjunto destaca únicamente la de Filipinas, tanto por su tardía constitución como por lo ambicioso de su empresa comercial y colonizadora. El paso del tiempo ejerce un efecto inverso en el valor de las acciones (212), pues ésta que se inicia con 500 pesos —Caracas, Habana— pasa a ser, hasta final de siglo, de 250. Desciende el valor de la acción para lograr la extensión del espectro de los potenciales interesados. Por ello la compañía de La Habana en 1.789 redujo a la mitad el valor

(212) Guillermo Jesús Jiménez Sánchez y Francisco Javier Lasarte Álvarez, "La acción en las compañías privilegiadas (S. XVIII)", Anales de la Universidad Hispalense, v. XXIII, año 1.963.

nominal de las mismas. La Compañía de la Habana y la de Barcelona (XVIII), además, admiten géneros en pago de las acciones. En este caso, sin limitación; en aquél, sólo para los cosecheros (III) y hasta cuatro acciones. Para posibilitar su participación se permite, además, a este grupo, suscribir media acción (V). La de Filipinas —1.785— admite va les reales en pago de las acciones (XIV).

La participación Real en las empresas, pasa de cero, en la autosuficiente compañía catalana, a una importante pero simbólica contribución a los comercios cubano y venezolano, para desembocar en casi un tercio en la Compañía de Filipinas a comienzos del siglo XIX.

Las compañías no se plantearon —en este sector— la posibilidad de tomar dinero a préstamo, hasta la segunda mitad del siglo. Así la de Barcelona lo acepta (XXIII), lo niega la de Filipinas en 1.785 (XVIII), por temor al endeudamiento, para aceptarlo en 1.803 (XXIII).

En todas las compañías, como hemos mencionado, hay una llamada generalizada al conjunto de los españoles, sin distinción de estamentos, para que compren acciones. En la de la Habana, destaca el interés porque se interesen en ella los cosecheros cubanos, pero es la de Filipinas la que revela unas especiales características en este terreno. Se solicita la participación eclesiástica "en común o particular" (II), la de los propios con sus "fondos sobrantes" (XII), la de los moradores de las islas, a los que se reserva 3.000 acciones (XIII) y, sobre todo, la de los comerciantes parti

culares o en compañía, con especial énfasis en el Banco de San Carlos, los Cinco Gremios Mayores de Madrid, la de la Habana y de Sevilla, que participan, incluso, en la dirección (III).

La forma de realizar la transmisión de acciones es un último punto que debemos considerar en este repaso sobre las normas que rigen la obtención de capital en las Compañías privilegiadas. Es un tema en el que se revela cómo estas compañías crearon una organización superior a la analizada en las personalistas para abordar grandes empresas y cómo se fue creando —muy lentamente— un mercado de capitales en la España del Antiguo Régimen.

En las compañías analizadas se descubren dos comportamientos diferentes. Por una parte, Caracas, Habana y Barcelona; por otra, Filipinas. El avance que supone ésta sobre las demás se explica por su tardía creación, que incorpora experiencias anteriores, no sólo en este campo sino en ese específico grupo de compañías industriales privilegiadas, que analizamos más adelante, en el Banco de San Carlos y en la negociación de vales reales.

La Compañía de Barcelona aún manifiesta su temor ante el hecho de que los accionistas quieran reclamar su capital, separarse de la organización y así menguar su fondo. Es un temor conectado con el funcionamiento de los contratos de

(212) a. V de las Ordenanzas de la Compañía de Caracas; a. XXI de la R.C. de fundación de la Compañía de la Habana; a. XIII de la R.C. de fundación de la Compañía de Barcelona.

las colectivas y comanditarias, de tan alto desarrollo en la zona. Por ello explicitaban lo que es obvio en una compañía de capitales:

"... los interesados podrán venderlas [las acciones] o cederlas, pero en ninguna manera se extraerá su importe mientras durare la Compañía" (XVII).

La transmisión de acciones —nominativas— en ésta y en las Compañías de Caracas y la Habana se realizaba mediante formalización del acto ante escribano y con expresión en los libros de la compañía (213). El sistema era más simple en la de Filipinas:

"Todas las acciones podrán negociarse y venderse por medio de un simple endoso como se práctica en las del Banco Nacional, y con el mayor o menor valor que les diera la opinión pública, sin que por ésto se rebaje, ni aumente el efectivo de su origen, con respecto a la compañía" (XVII).

El tiempo y la experiencia adquirida fueron simplificando la forma de realizar la transmisión de acciones (R.C. de 31 de mayo de 1.771 para la Compañía de Barcelona) y generalizando las acciones al portador (Compañía de Filipinas, de Barcelona desde 1.793).

Es difícil encontrar la explicitación de la personalidad jurídica y de la responsabilidad limitada en las Cédulas y Ordenanzas que regulan estas compañías. No obstante, su fun-

(213) a. V de las Ordenanzas de la Compañía de Caracas; a. XXI de la R.C. de fundación de la Compañía de la Habana; a. XIII de la R.C. de fundación de la Compañía de Barcelona.

cionamiento indica la existencia de estas características. Las compañías se comportan —y está implícito en sus reglamentos— como entes independientes, distintos a sus componentes, sujetos de derechos y obligaciones y, como hemos visto, no comprometidos con la suerte personal de sus accionistas. En la Compañía de Barcelona se especifica la limitación de responsabilidad de los directores en las negociaciones emprendidas de buena fe:

"...en las cuales no han de quedar ellos obligados, sino el fondo de la compañía" (XXIII).

y, por ejemplo, la responsabilidad limitada de las acciones, queda reflejada en la forma de hacer frente a las deudas de la Compañía de Caracas en el momento de su integración en la de Filipinas.

El ejercicio del poder social en las compañías privilegiadas para el comercio colonial ha sido estudiado en detalle por R. Rico Linage, de la que transcribimos el siguiente esquema (v. fol. siguiente) (214).

La complejidad de las empresas, el volumen del capital social y el número de socios obligan a las privilegiadas a organizar una división de funciones entre la dirección y el común de los accionistas. El principio ya estaba establecido en las comanditarias, como vimos, pero en estas compañías —mucho más amplias— se regula con mayor precisión las fun-

(214) R. Rico Linage, Las Reales Compañías de Comercio con América. Los órganos de gobierno, Sevilla, 1.983, p. 28.

ciones de dirección y, sobre todo, el tipo de control que sobre ellas ejerce la Junta General de Accionistas. Todo ello es un claro precedente de la sociedad anónima enfrentada al mismo tipo de problemas; sobre ellas, las privilegiadas tienen un tipo de control especial: el del Estado.

CUADRO II, 2

	ORGANOS DE GESTION Y REPRESENTACION	ORGANOS DE ASESORAMIENTO Y CONTROL	ORGANOS DE DELIBERACION Y DECISION
COMPAÑIA GUIPUZCOANA	Directores	Revisores (1.728-1.739) Junta Particular (desde 1.758)	Presidentes (desde 1.752) Junta General
COMPAÑIA DE LA HABANA	Directores (hasta 1.752) Junta de Diputados (desde 1.758)		Presidente (desde 1.747) Junta General
COMPAÑIA DE BARCELONA	Directores	Junta Particular	Presidente de Junta General Junta General
COMPAÑIA DE FILIPINAS	Directores (representación) Junta de Diputados (gestión)		Presidente de Junta General Junta General

FUENTE: v. nota 214.

Tanto en la Compañía de Caracas como en la de Barcelona, afirma Rico Linaje, "su sistema de gobierno aparece diversificado en tres órganos: la dirección, encargada de la gestión, la junta particular, que deberá asesorar y controlar sus actuaciones, y una junta general deliberativa y decisio-

ria sobre determinados asuntos" (215). En la de la Habana la gestión fue encomendada a partir de 1.757 a una junta de ocho vocales nombrados por la general y que acabará imponiéndose sobre ella. Del mismo modo, en la de Filipinas, será potenciada la Junta de Diputados frente a la general.

La intervención del poder real queda establecido en el nombramiento de sus Presidentes cargo que, en la de Barcelona ostentaba el intendente de dicha ciudad y en la de Filipinas el secretario del despacho universal de Indias.

La lectura de las Reales Cédulas de constitución y ordenanzas de las compañías estudiadas, permite establecer el siguiente cuadro que muestra el grado de participación de los accionistas en unas Juntas que, cuanto menos, votaban periódicamente los dividendos, aprobaban los balances y removían la dirección:

CUADRO II, 3

NOMBRE COMPAÑIA	Nº DE ACCIONES QUE DAN DERE- CHO A 1 VOTO.	CAPITAL QUE REPRESENTAN	SIGNIFICACION SOBRE NOMINAL %	NUMERO MAXIMO DE VOTOS
Caracas	8	4.000	0.27	Ilimitado
Habana	8	4.000	0.4	Ilimitado
Barcelona	8	2.000	0.2	1
Filipinas (1.785)	20	5.000	0.06	1
Filipinas (1.803)	20	5.000	0.04	1

(215) R. Rico Linage, Las Reales Compañías..., p. 27. Seguimos a la misma autora en las consideraciones de este párrafo y el siguiente.

En todas las compañías está regulada la delegación del voto para aquéllos que no puedan —por su lejanía o estado— asistir. Sólo la de Barcelona se muestra más abierta y habla de los "que no quieran asistir a las Juntas" (XXI). Pero en alguna se pone límite a esta delegación: en la de Caracas, los que tengan menos de 12.000 pesos (24 acciones) sólo podrán hecerlo en los que por sí tengan voto; los que superen esta cantidad, en cualquiera (VIII). Lo mismo en la de la Habana (XIII) hasta 1.757, que la Junta General aprueba limitar el número de votos delegados a 12 (59). La de Barcelona limita el número de votos delegados a cinco (XVI) y tres desde 1.771. Pero, en este caso, los accionistas que sólo poseen 4 acciones, pueden aceptar hasta tres votos delegados (XVIII) y uno desde 1.771. Los cuerpos de comercio representados en la Compañía de Filipinas tenían mayor participación: cinco votos, la Provincia de Guipúzcoa —por la extinta Compañía de Caracas—; el Banco Nacional y los Gremios Mayores de Madrid, la Compañía de la Habana y la de Sevilla tendrían, cada una, tres representantes.

Los requisitos para poder ejercer la dirección merecen párrafo aparte. En la de Caracas se exigía poseer 16 acciones (2 votos) y ser "prácticas en el comercio" (XII). La de Barcelona, recomendaba que el cargo recayera en "personas" de inteligencia y habilidad" (XXIII) que deberían poseer, al menos 8 acciones y ejercer el comercio en Barcelona (XXIV). Sólo la de la Habana eximía a los directores de la calidad de socio si lo consideraba conveniente la Junta General (XI). No

obstante, recomendaba que para desempeñar el cargo de Presidente se poseyera, al menos, 20 acciones y 16 para el de director.

La Compañía de Filipinas tenía una peculiar estructura. Hemos resaltado las mayores atribuciones de la Junta de Gobierno sobre la General. Aquélla estaba formada por tres directores que en un principio eran los de la de Caracas (LVIII) y posteriormente, nombrados por la Junta General entre los poseedores de más de 20 acciones (LIX), "dos del Banco Nacional, dos de la de los Gremios, dos de la Habana, uno de la de Sevilla, nombrados por sus respectivos cuerpos si se interesan en competente número de acciones, y dos accionistas de ésta" (LV).

2.4.- La Compañía Industrial Privilegiada en España

En la segunda mitad del siglo XVIII fueron creadas en España una serie de compañías privilegiadas fuera del marco de actividad para el que fueron concebidas inicialmente. Dichos cuerpos mercantiles se constituyeron, en su mayor parte, durante el reinado de Fernando VI, con Ensenada en Hacienda e Indias (1.743-1.754) y Carvajal en Estado y en la presidencia de la Junta General de Comercio (1.746-1.754). Son las Reales Compañías de Comercio y Fábricas de Extremadura y Zaragoza (1.746), de Granada y de Sevilla (1.747) de Toledo y

de La Unión (1.748) y de Requena (1.753). Respondiendo a este mismo tipo se creó en 1.767 la Compañía de Burgos (Luis de Alvarado como Presidente de la Junta de Comercio y Miguel de Múzquiz en Hacienda). Su tardía creación, ya con un nuevo rey y sobre la experiencia anterior, le dió un cariz peculiar que será comentado más adelante (216). Tales asociaciones se presentaban como la organización de los comerciantes de una determinada región que, auxiliados por su propio capital, el de otros vecinos y, eventualmente, el de individuos del resto del país, pretendían restablecer las fábricas y el comercio del territorio, con una peculiar insistencia en la seda y el textil en general.

La extensión de los privilegios a la producción y al comercio interior generó conflictos de intereses, puesto que se atacaba el sistema gremial imperante y se multiplicaban los casos particulares en unos aranceles ya muy complejos. Por, ello, los adversarios de este tipo de compañía se encontraban, tanto entre las filas de los partidarios de la organización gremial como entre los defensores de la libertad de fabricación. Sin embargo, la actitud oficial, si bien reconocía los riesgos de la ampliación del grupo de privilegiados, optó por ella, como se refleja claramente en el informe que el Fiscal de la Junta de Comercio realizó sobre el proyecto

(216) Opto por nombrar a las compañías por su ciudad y no por su santo protector —lo cual es también frecuente en los textos— y, en lo sucesivo, prescindiré de su apelativo "Real Compañía de Comercio y fábricas" excepto cuando este carácter deba ser especialmente resaltado.

de la Compañía de Granada:

"Parece que por ahora no debemos intentar el exceder a los franceses, ingleses y holandeses en las reglas de Comercio y que podemos contentarnos con igualarlos. Observo que en aquellos reinos, sólo se han formado por dirección del Gobierno, Compañías para el comercio marítimo y exterior (...). Para el comercio interior y el de los países vecinos por mar y por tierra, solo forman sus compañías, o sociedades, los particulares entre sí, sin más intervención, ni noticia del gobierno, que cuando se ofrecen algunos pleitos entre ellos que siempre se deciden, con alivio de los comerciantes, por las reglas de la verdad sabida, y la buena fe guardada. No obstante, en España debemos salir alguna vez de estas reglas, porque el atraso del comercio y la poca aplicación de los naturales, a causa de lo gravados que están en todo lo que conduce a este intento, obliga a que por el Gobierno superior se procure fomentar, por cuantos medios se consideren posibles; pero, al mismo tiempo, se debe caminar con precaución porque los que acuden con semejantes proyectos suelen equivocarse por asistirles mas celo que inteligencia en este asunto todavía nuevo en España" (217).

Este párrafo expresa la política de la Junta General de Comercio en la década de 1.740, que estima necesaria la intervención del Estado como animador de las actividades económicas. Tal necesidad se justifica en la falta de iniciativa de los particulares en las tareas de comercio y de la producción. A pesar de reconocer lo complejo y gravoso de los aran

(217) Reflexiones sobre el memorial, o pliego presentado por D. Manuel de Argumosa para formación de Compañía de Comercio en Granada, 22 de febrero de 1.747, A.G.S. Hacienda, legajo, 857, exp. s/n. Dada la frecuencia con que son citadas en este capítulo las Reales Cédulas de creación de Compañías y sus Ordenanzas, se utilizará una notación abreviada. la primera vez que aparezcan, la referencia será completa; para las siguientes, se reseñará únicamente el tipo de norma (R.C. = Real Cédula; R.D. = Real Decreto; O = Ordenanzas) seguido de su fecha de publicación. En el apartado de Bibliografía y Fuentes, no obstante, se incluye una lista completa de estas disposiciones legales.

celes mercantiles, que pueden ser causa de la actitud que se critica, se opta por dispensar a ciertos cuerpos privilegiados de su cumplimiento, renunciando a una reforma general de los mismos. Las últimas frases aluden a un hecho que ya ha sido puesto de relieve en este trabajo y es la ligereza y la falta de realismo con la que se elaboraban algunos de los proyectos de compañías. El reconocimiento de la incapacidad de muchos autores no implicaba la renuncia al principio en que se basaban. El Estado, como gran promotor, agente económico y responsable del bienestar de sus súbditos, deben evitarles pruebas innecesarias. Por ello son las instituciones —y no ellos— las que deben realizar la primera labor de discernimientos entre los proyectos que deben ser apoyados y los que merecen caer en el olvido.

Todas las compañías creadas entre 1.746 y 1.748 tuvieron conflictos con los gremios de su región, al constituirse bajo unas reglas distintas de las tradicionales, fuera de la jurisdicción de estos antiguos cuerpos mercantiles. Algunos gremios, sin embargo, sustituyeron el enfrentamiento por la búsqueda de una integración en el sistema, mediante la promoción de compañías privilegiadas. Tal fue el caso de la Compañía de Requena, constituida en 1.753 por el Gremio y Arte Mayor de la seda de esta ciudad. Desde 1.744 se habían producido en esta zona diversos intentos de este tipo, de forma paralela a los de creación en Valencia de una Junta Particular de Comercio (218). En la solicitud de concesión se emplearon

(218) Para las fallidas iniciativas del Colegio del Arte Mayor de la Seda de la

los mismos argumentos que en otras regiones eran utilizados contra los Gremios. Ahora, una organización de esta naturaleza reconocía que las Compañías eran una fórmula de asociación económica más ventajosa que la suya, al afirmar que "teniendo éstas los suficientes fondos para hacer acopios en tiempo y moderados precios, pueden dar, y dan los tejidos de sus fábricas a precios tan cómodos para el público, como incomodados para los fabricantes" y por ello manifestaban la conveniencia de constituirse en una asociación de tal tipo.

El mayor capital era su única ventaja, pues los privilegios de las compañías sobre la comercialización de la seda habían sufrido un serio quebranto con el Decreto de 24 de junio de 1.752 que generalizaba la exención de alcabalas y cientos en la primera venta. Esto, como reconoció el Arte Mayor de la seda valenciano supuso un gran beneficio para los fabricantes. Sin embargo, en Requena se solicitó una compañía privilegiada. Para luchar contra la competencia que significaban el resto de las compañías del sector, en un momento de liberalización de las normas sobre la producción textil, exigieron los mismos privilegios que los obtenidos por las de Granada y Toledo (219).

ciudad de Valencia, en conexión con la evolución del sector y con la promoción de una Junta Particular de Comercio, Pere Molas Ribalta, "Sobre la burguesía valenciana en el siglo XVIII", Actes du Premier Colloque sur le Pays Valencien à l'époque moderne", Pau, 1.980. Incluido en La burguesía mercantil en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1.985, esp. pp. 214-218.

(219) Preámbulo de la Real Cédula de 2 de septiembre de 1.753, A.H.N., Hacienda, lib. 8019, núm. 1.337, v. V. Martínez Santos, "La sedería de Valencia, 1.750-1.800", Moneda y Crédito, 1.975, núms. 134.

Durante el siglo XVIII se crearon, asimismo, compañías privilegiadas para la explotación de las Fábricas Reales, de estructura similar a las aquí estudiadas, Quedan fuera de la muestra elegida. Su inclusión proporcionaría nuevos datos en el análisis de la evolución de la sociedad de capitales en España pero —estimamos— no variaría el curso de la argumentación ni las conclusiones derivadas de la misma. Es un aspecto esencial, sin embargo, en la política económica del siglo y merecen, todavía, un mayor número de investigaciones y monografías difíciles de realizar, salvo contadas excepciones por ello mejor conocidas, por lo disperso y fragmentario de la documentación.

La figura de la privilegiada en la industria no terminó con la crisis de las "Reales Compañías de Comercio y Fábricas" de la década de los cuarenta o con su utilización para la explotación de las Fábricas Reales. A finales del siglo se crearon otras, en distintos sectores: la pesca (Compañía de Pesca Marítima, 1.775; Compañía Marítima, 1.789; Compañía para la pesca del coral, 1.790); la hilatura (Compañía de Hilados, 1.773); o la imprenta (Compañía de Impresores y Libreros, 1.763). Y, en otro terreno, la Compañía General de los Cinco Gremios Mayores de Madrid (1.785-1.846), ambiciosa y próspera compañía de fábricas, comercio y finanzas, el Banco de San Carlos (1.782) o la Compañía de Seguros Marítimos (1.800). Algunas de ellas sólo adoptaron la forma privilegiada porque era la única que permitía existencia legal a la gran compañía de capitales hasta 1.829. Otras, como la de los

Gremios, llegaron a esa fórmula debido a su compromiso con el estado, aunque desde hacía medio siglo habían llevado una próspera existencia con una estructura de compañía común (220).

En la muestra aquí utilizada se incluyen las compañías para la pesca y el seguro, menos conocidas. De las restantes, se han tomado la Real Cédula de creación del Banco de San Carlos como modelo —y lo fue— de las normas que rigieron la vida de las Compañías creadas a partir de 1.782.

Asimismo, fueron numerosas las iniciativas y las pequeñas y efímeras compañías locales promovidas por agricultores, ganaderos y fabricantes. Su estadística es, al menos por ahora, imposible de establecer. Las que conocemos merecen cierta caracterización especial, pues se encuentran a medio camino entre el gremio y la moderna cooperativa. En estas páginas utilizare dos ejemplos, el de la citada Compañía de Requena y el de la tardía Compañía de Viñeros de Málaga (1.806)

2.4.1.- El proceso de constitución

a) Caracterización.— La constitución de las compañías privilegiadas se realiza, de acuerdo con su naturaleza excepcional, mediante una autorización singular en forma de Real Cédula. El procedimiento por el que se llega a su obtención, se ajusta al sistema general por el que la iniciativa legal per

(220) v. infra, cap. 3.º

tenece al Monarca y, por delegación, a los Consejos. El proyecto con que se iniciaba este proceso, sin embargo, podía ser elaborado por diversas instancias, ya que el derecho de petición, en principio, no estaba limitado.

En nuestro caso, el procedimiento se desarrollaba mediante los siguientes pasos. Se partía de la existencia de una solicitud para la creación de una compañía privilegiada, compuesta por una primera parte, en la que se intentaba demostrar la necesidad de este cuerpo mercantil, y una segunda en la que se detallaban las bases de su funcionamiento, que requerían la concesión de ciertos privilegios. Este proyecto era elaborado por un grupo de particulares, generalmente comerciantes, que actuaban como promotores de la idea y a los que se concedía el calificativo de "fundadores" de la compañía resultante. A continuación, se hacía llegar a la Junta de Comercio mediante una representación a través de uno de los organismos locales de la propia Junta —Consulados y Juntas particulares de Comercio— o avalada por una institución reconocida —Sociedad de Amigos del País y Gremio—. En algún caso la proposición emanaba del centro del Poder: Corona, Ministros o Junta General de Comercio.

Esta representación era debatida en el seno de la Junta de Comercio, cuyo fiscal realizaba un informe al respecto. El desconocimiento de los actos de las reuniones de dicha institución nos impide saber el modo en que se desarrollaba esta discusión que, por otra parte, no estaba reglamentada. Por la documentación analizada, puedo concluir que el informe fis

cal era decisivo a la hora de aceptar o rechazar el proyecto. Como ejemplo significativo puedo citar que la Real Cédula de 20 de agosto de 1.747, por la que se creó la Compañía de Granada, es el resultado de incorporar las observaciones del fiscal al proyecto primitivo (221). Aún más lo es el caso de la fracasada Compañía de Mallorca. En 1.758, la Sociedad de Amigos del País de la isla elevó el correspondiente proyecto, que fue retenido por dos veces debido al dictamen contrario del fiscal de la Junta de Comercio y a pesar de los informes favorables de los Directores Generales de Rentas (222).

Si el proyecto era aceptado, el Presidente de la Junta de Comercio, que era el Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, elevaba la correspondiente consulta. Si ésta era sancionada por el Monarca, se publicaba una Real Cédula que legalizaba la existencia de la compañía. Nuestra tradición jurídica suele emplear el vocablo otroí para referirse a este documento (223). La utilización de este galicismo es justificable, dada la inexistencia en nuestro idioma de una palabra que exprese la idea de "Real Cédula de Concesión".

Los promotores de la nueva compañía privilegiada se hacían cargo de su dirección hasta la celebración de la pri-

(221) A.G.S., Hacienda, leg. 857.

(222) Juan Antonio de los Heros, Varias respuestas fiscales, del fiscal de la Junta de Comercio D. —; apuntaciones de algunas especies y resoluciones en materias de Comercio, Moneda, Minas y Dependencias de extranjeros, 1.784-1.791, tomo I, fols. 17 y 50-51-

(223) Joaquín Garrigues, Tratado de Derecho Mercantil, tomo I, vol. II, pp. 612, y ss.

ra Junta General de Interesados y, en ocasiones, bastante más allá. A diferencia de lo que ocurrirá en buena parte de nuestro siglo XIX, ninguna disposición de carácter general exigía a estos fundadores la asunción de algún tipo de responsabilidad o el depósito de alguna fianza que les comprometiera en estos primeros momentos de la vida de estos cuerpos mercantiles.

La celebración de la primera Junta General de Interesados se realizaba mediante convocatoria de los promotores, cuando éstos habían conseguido colocar el número de acciones que se estimaba suficiente para el inicio de las operaciones. Esta cantidad no siempre estaba predeterminada por Real Cédula y, en los casos en que se hacía, oscilaba entre un veinte y un cincuenta por ciento del capital en acciones. El primer caso corresponde a la Compañía de Zaragoza (1.746) y el segundo a la de Granada (1.747).

La supervisión de los trámites de constitución corría a cargo del subdelegado de la Junta General de Comercio en la zona respectiva. Este presidía la primera Junta General de Interesados, en la que se elegía la dirección. La vigilancia sobre los asuntos de la compañía continuaba a lo largo de su desarrollo, en su calidad de representante del poder central.

La escasa eficacia de esta supervisión, que debía ser especialmente cuidadosa en estos primeros momentos de la vida del nuevo organismo, se revela en todas las Compañías. Este extremo será tratado más extensamente en próximas páginas. Baste ahora mencionar algunos ejemplos, como el de la Compañía

ñía de Burgos, cuyos accionistas descubrieron en la primera revisión de cuentas que sólo se habían vendido acciones por un total de 1.218.000 reales de vellón a pesar de que sus promotores habían asegurado, antes de su constitución, la existencia de un capital desembolsado de 1.470.000 reales de vellón (224). Por otra parte, la Real Cédula de 19 de septiembre de 1.789, por la que se legalizó la existencia de la Compañía Marítima, preveía en su artículo 24, que el fondo necesario para dar comienzo a sus operaciones era de 6.000.000 de reales de vellón; sin embargo, el balance a 13 de julio de 1.791, estimaba en 2.983.000 el valor nominal de las acciones vendidas (225). Solamente para la Compañía de Requena (a. 3) se contemplaba la obligación de los promotores de desembolsar el capital prometido, si bien ni siquiera en este caso se fijaban plazos para ello.

Las peculiares características de este tipo de compañías motiva que no esté regulado normativamente el contenido de sus Reales Cédulas de concesión. No obstante, como regla general, estos documentos contienen cuatro clases de información, con mayor o menor extensión: 1) definición, casi siempre vaga, del objeto de la Compañía. En la mayoría se solu-

(224) a. 5 de la R.C. de 29 de noviembre de 1.767; "... empezará a girar la compañía desde 1^o de enero de 1.768 aunque no haya más fondo que el que ya tiene de 1.470.000 reales...", la R.C. y el balance de 1.769 en Eugenio Larruga y Boneta, Memorias políticas y económicas de los frutos, comercio, fábricas y minas de España; con inclusión de los Reales Decretos, órdenes, cédulas, aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento, Madrid, 1.787-1.800, tomo XXX, pp. 5 y ss. La crítica a este balance, por parte de los revisores de cuentas, en A.G.S., Hacienda, leg. 855.

(225) A.H.N., Estado, legajo 3.222, exp. 31.

ciona este punto con la fórmula "Compañía General de Comercio y Fábricas", lo que configura un campo de operaciones muy amplio; 2) fondo que se estimaba necesario para cumplir tal objeto y de quién se esperaba conseguirlo; 3) privilegios concedidos para poder desempeñar el fin que se propone; 4) normas de funcionamiento.

Dentro del esquema descrito existen particulares variaciones que, si bien no modifican su esencia, lo completan con algunas peculiaridades que derivan de un distinto objeto o campo de actuación (una fábrica o una compañía general de comercio y fábricas), de la diferente naturaleza de sus promotores (comerciantes que parten de su propia realidad o políticos movidos por el deseo del fomento de su región) y del momento en que se crean, aumentando con el tiempo la concreción y especificación de la información que contienen proyectos y Reales Cédulas.

De esta manera, la compañía privilegiada iniciaba la formación de su propio corpus legislativo, que era continuado por unas ordenanzas (también de aprobación real) que regula-ba con mayor detalle su funcionamiento y que era completado con eventuales normas que modificaban sus privilegios, gene-ralmente para ampliarlos. Esta legislación propia era la que regía su existencia a diferencia de las compañías comunes, no privilegiadas, no protegidas especialmente, que debían ajustarse a una legislación general que no admitió la libre creación de sociedades de capital hasta 1.829.

b) La práctica..- En la descripción del modelo del proceso seguido para la constitución de una compañía privilegiada, observamos que la formulación del proyecto inicial podía partir de diversas instancias. Aquí analizaremos los grupos de promotoras de estas asociaciones, lo que nos permitirá obtener un cuadro de la aceptación de la figura entre los diferentes sectores económicos. El resultado de este análisis deberá ser incorporado como dato a la hora de estudiar el funcionamiento de las Compañías, ya que, en la totalidad de los casos, será el grupo fundador el que conserve su dirección y el que marque su política económica.

Teóricamente, existían tres formas de elaborar y tramitar un proyecto de compañía privilegiada: 1) directamente, un particular o grupo de particulares podía enviar su representación a la Junta General de Comercio; 2) los promotores de la idea podían buscar apoyo en una autoridad local o provincial para, con su aval, presentarlo con mejores expectativas de éxito al organismo central de la Junta de Comercio; 3) el proyecto era elaborado por deseo de la Corona o de la propia Junta de Comercio por algún ministro de la misma.

Sin embargo, en la práctica observamos que ningún proyecto fue presentado después de 1.725 por la primera vía; al menos ninguno obtuvo la trascendencia suficiente como para que nos hayan llegado noticias al respecto. En realidad, las iniciativas que adoptaron esta forma responden a lo que en otro lugar hemos encuadrado dentro del proyectismo y sus fantasías. Quizá debamos atribuir su fracaso, no sólo al carácter idealis-

ta del proyecto elaborado —cosa que no falta en alguno de los que se llevan a efecto—, sino, en alguna medida, a no estar apoyados por ningún grupo de intereses u organismo representativo.

La actuación directa de la Corona también está restringida a los primitivos proyectos y, en un primer momento, no pasaban, como hemos tenido ocasión de comprobar, de ser meros intentos de copia del sistema de compañías holandeses o ingleses, sin estar apoyados en una base o datos reales.

Así, desde la creación de la Compañía de Caracas en 1.728 —cuyo caso ya analizamos— hasta la constitución de la última compañía industrial privilegiada considerada— Compañía de Viñeros de Málaga, 1.806 —todas se formaron a través de una representación que —sin negar que pueda tener unos autores modestos— fue presentada con el aval de una institución reconocida. En las compañías estudiadas, estas instituciones eran las que integraban la organización territorial de la Junta de Comercio. En sus diversas instancias, —Consulados, Juntas Particulares, Visitadores de Fábricas— aprovechaban o seguían la política de promoción y favorecimiento de las compañías que primaba en su cúpula. Otros promotores fueron las Sociedades de Amigos del País y los Gremios y Hermandades. Estas últimas, jurisdiccionalmente adscritas a la Junta (226).

(226) Es múltiple y variada la normativa que hace depender a los Gremios de la Junta de Comercio y Moneda, para sus pleitos (R.O. de 20 de julio de 1.737), para la aprobación de sus ordenanzas (R.O. de 30 de julio de 1.779)... hasta, incluso, después de promulgado el Código de Comercio (R.O. de 15 de diciembre de 1.831). Esta abundancia es reflejo de los múltiples conflictos jurisdiccionales que existieron.

1.- La organización territorial de la Junta de comercio: No es de extrañar que los mayores comerciantes del país, aglutinados en torno a los Consulados y Juntas Particulares de Comercio sean los primeros receptores de los avances en la organización mercantil. Y no hemos de olvidar que la compañía privilegiada era uno de ellos. Es lógico, pues, su papel de protagonistas a la hora de proponer su creación, ya puesto de manifiesto cuando hablamos de las constituidas para el comercio colonial (227).

Consulados.- La Compañía de Sevilla fue solicitada a la Junta General de Comercio por un grupo de 84 vecinos de dicha ciudad andaluza en 11 de junio de 1.747. Era un intento de los comerciantes matriculados en el Consulado, de recuperar el protagonismo perdido en el comercio colonial al ser trasladada a Cádiz la Casa de Contratación. El carácter institucional que se quería dar a esta compañía se revela en que dos de sus diputados asistirían, como miembros de pleno derecho, a la Junta Particular de Comercio (a. 23 R.C.). Su objeto quedaba así determinado:

"Que se denominará Real Compañía de Fábricas y Comercio, por que igualmente ha de ser su cargo, e instituto, el fomento y nuevos establecimientos de aquéllas que la extensión y adelantamientos de ésta, así en la Europa como en la América y Asia (a.30) (228).

(227) Sobre la Junta de Comercio y los Consulados es inexcusable la obra de Pere Molas Ribalta. Destacaremos aquí "La Junta General de Comercio y Moneda. La Institución y los hombres", Cuadernos de Historia, IX, 1.978, pp. 1-38.

(228) La Real Cédula de 7 de agosto de 1.747 ha sido consultada en Noticia y extracto sucinto de los expedientes y papeles que se hallan en la Secretaría de la Junta de

La creación de la Real Compañía de Comercio de la ciudad de Burgos está vinculada a la reorganización del Consulado de esta ciudad en 1.766 y a la creación de la Junta Particular de Comercio (229). Todavía se esperaba, en esta fecha, que el gran medio de promoción económica de la zona fuera la constitución de una privilegiada. Pero el fracaso de las anteriores —Extremadura, Zaragoza, Granada, Toledo— y la reorganización de la política de promoción fabril de mediados del siglo, hizo que sus promotores introdujeran en su proyecto algunas modificaciones sobre aquéllas. Unas señalaban ciertas limitaciones y garantías que cristalizan en una estructura más arcaica que para las creadas años antes. Otra, que es la que ahora nos interesa, es la que afecta a su objeto. No abarcará por sí misma los dos ramos de las anteriores sino que será de "comercio y fomento de fábricas".

Su objeto fundamental era en realidad, la centralización del comercio lanero castellano para evitar los abusos de los extranjeros que dan "la ley al pobre ganadero" y realizar su exportación por Santander, cuyo acceso había sido facilitado por la finalización del camino de Reinosa (230). No se exclu

Comercio y Moneda, tocante a la Real Compañía de Comercio y Fábricas de San Fernando de la ciudad de Sevilla, desde su creación en el año de 1.747 hasta el presente de 1.786, B.O.G. 3.113. Se trata de la colección de expedientes que se envió al fiscal de la Junta General de Comercio, Juan Antonio de los Heros, que debía presidir la conflictiva Junta de Interesados de la Compañía de 1.786.

(229) v. Pere Molas Ribalta, "La restauración del Consulado de Burgos en el siglo XVIII", en La ciudad de Burgos, Actas del Primer Congreso de Historia de Burgos, Madrid, 1.985, pp. 429-440. En el mismo encuentro participé con una comunicación que discute la historia de la Real Compañía de Burgos, pp. 441-453.

(230) Vicente Palacio Atard, El comercio de Castilla y el puerto de Santander en

ye otro tipo de comercio (cacao, azafrán...) que se intentó con desigual éxito. Respecto al fomento de fábricas, cabe destacar que su Real Cédula sólo menciona explícitamente las del sector textil, aunque deja la puerta abierta a otros. Fueron aquéllas las efectivamente promocionadas.

Los promotores aseguraron —en falso, como vimos— la existencia de 1.470.000 reales desembolsados, de los seis millones de capital social que se estimaban necesarios para el giro de la nueva compañía. El intendente de Burgos, como subdelegado de la Junta de Comercio en esta ciudad, apoyó la iniciativa y la trasladó a su organismo central. Este, previo informe favorable del fiscal, consultó en 17 de octubre de 1.767. El resultado fue la Real Cédula de 29 de noviembre del mismo año, por la cual se autorizó la constitución de la compañía.

Juntas Particulares y Subdelegados de Comercio.— En las provincias que no existe Consulado, o en las que este organismo no tenía la tradición y fuerza que en las provincias reseñadas en el punto anterior, se utilizó, para tramitar los proyectos de las compañías privilegiadas, el organismo que con aquél formaba la organización territorial de la Junta de Comercio: Las Juntas Particulares y, en su defecto, el subdelegado de comercio.

La tramitación del proyecto de la Real Compañía de Co-

el siglo XVIII. Notas para su estudio, Madrid, 1.960, cap. III. Las frases citadas corresponden al preámbulo de la R.C. de 29 de noviembre de 1.767. E. Larruga. Memorias..., I. XXX p. 3.

comercio y Fábricas de Extremadura (el primero en tener éxito) se realizó siguiendo la organización de las Juntas de Comercio, desde su representante en la unidad territorial más pequeña —el regidor—, pasando por el Intendente de la provincia, hasta llegar, en la Corte, a la Junta General (231).

La representación que, con el proyecto de Compañía, se presentó al Intendente de Extremadura, estaba firmada por dos vecinos de la villa de La Zarza en nombre de otros siete, vecinos y comerciantes de dicho pueblo y del cercano Zaclavín. Entre estas firmas se encontraba la del regidor de La Zarza. El objeto que se proponía era la realización de cualquier tipo de comercio interior, así como el tráfico mercantil internacional, sobre todo con Portugal, país para el que disponía de privilegio exclusivo. La Compañía deseaba disponer de la posibilidad de establecer fábricas de todo género, especialmente del ramo del textil y dentro de él, de sedas, para obtener un comercio más ventajoso y de organización más fácil.

El Intendente tramitó esta solicitud, que llegó a la Junta General avalada por las autoridades locales y con la promesa de que los fundadores y sus convecinos "traen con ello (a la Compañía) sus caudales unidos (hasta ahora) en peque-

(231) Cuando en un territorio no existía Junta Particular de Comercio, actuaban en él como subdelegados los individuos de la propia organización de las Intendencias. Ver el a. 9 de la O. de 13 de octubre de 1.749, que sanciona una costumbre que, sin duda, ya era practicada tres años antes, en el momento en el que se tramitó la Compañía de Extremadura. De esta compañía se ha ocupado María Rodríguez González, en "La Real Compañía de Comercio y Fábricas de Extremadura", Cuadernos de Investigación histórica, núm. 6, 1.982, pp. 39-70. Su interés se centra en la descripción del funcionamiento de la fábrica de Zarza la Mayor (pp. 49-54) y del proceso de quiebra (pp. 54-62).

ñas sociedades" (232). Los comerciantes de la zona buscaban una solución a la crisis económica que les atenazaba en esos años. Creyeron encontrarla en este nuevo tipo de sociedad, que superaba sus pequeñas organizaciones personalistas. Su interés coincidió con el del Presidente de la Junta de Comercio del que no hemos encontrado indicaciones previas a este proyecto.

Efectivamente, D. José de Carvajal Lancaster, en su consulta de 27 de abril de 1.746, dedicó grandes elogios al proyecto, al que se refirió como el primero, desde su nombramiento, "que se ha puesto en sazón ser presentado A.L.P. de V.M." (233). Al no poseer la documentación completa del Archivo de la Junta de Comercio no podemos saber con seguridad si con esta frase alude a que había habido otras representaciones en el mismo sentido y que no juzgó interesantes o que, efectivamente, no le había sido presentada ninguna. El corto espacio de tiempo transcurrido entre el nombramiento de Carvajal como presidente de la Junta (enero de 1.746) y la fecha de la Consulta hace que nos inclinemos por lo segundo. Tampoco hemos encontrado documentación que nos indique que esta primera propuesta emanó —como pasaría con Zaragoza— de la política sugerida desde la propia Junta. En adelante, las Compañías privilegiadas para el comercio y la producción encon-

(232) preámbulo de la R.C. de 22 de mayo de 1.746, en Larruga, Historia..., tomo X, fols. 75 y ss.

(233) Consulta de 17 de abril de 1.746, en Larruga, Memorias..., tomo XXX, pp. 107 y ss.

traron en este ministro un gran defensor y eficiente promotor.

El resultado positivo de la Consulta, se reflejó en la promulgación de la Real Cédula de 22 de mayo de 1.746, por la que se autorizó la existencia de la Compañía de Extremadura. Las ordenanzas, por encargo de la Junta de Comercio, fueron elaboradas por Ventura de Argumosa, veedor de las reales Fábricas de Guadalajara y aprobadas por el monarca en 23 de septiembre de 1.746.

En la tramitación del proyecto de la Real Compañía de Comercio y Fábricas de Zaragoza jugó un papel muy importante el Marqués de Rafal, Intendente de Aragón. En su representación manifestaba que para restablecer el comercio y las manufacturas de Aragón, "había discurrido y tratado con algunas personas inteligentes" de la región (234). Quizá, en su actividad, no hizo sino seguir con especial celeridad las indicaciones de Carvajal. Como corresponde a la época, el medio que pareció idóneo para tal fin fue la creación de una compañía privilegiada que, como la anterior, tenía un objeto general mercantil e industrial. En ella, nos dice el prólogo de la Real Cédula de concesión de 27 de julio de 1.746, "entrarían los comerciantes con que se había conferido, y otras personas...". Su formación se realizó, asimismo, bajo la supervisión del Intendente, que nombró una comisión entre este núcleo inicial de comerciantes para recibir los caudales (para lo cual se

(234) Preámbulo de la R.C. de 27 de julio de 1.746, en A.G.S., Hacienda, leg. 856 exp. s/n.

abrió una sucursal en Madrid), "debiendo él intervenir en todo" hasta que, junto un cincuenta por ciento del fondo (que se prevé que sea de quinientos mil pesos) se celebrara la primera Junta General de Interesados, para elegir la dirección. Poco más de esta cantidad (2.064.000 rs. vn.) es la que aparece en el balance al 31 de diciembre de 1.748 que se presenta a la Junta General de 1.749. Seis meses antes la compañía estaba funcionando sin haber colocado más de 1.154.000 rs. de vn. en acciones (235).

El mismo proceso se siguió para la concesión de la Real Cédula de 10 de febrero de 1.748, por la que se erigió la Real Compañía de Fábricas y Comercio de la Ciudad de Toledo, en cuyo preámbulo se asegura tener firmas recogidas hasta la cantidad de treinta y dos mil pesos sencillos, equivalente a un doce por ciento del capital social. Esta suma, estaba ampliamente superada el 19 de enero de 1.748, fecha en la que comenzó su giro con 1.334 acciones (2.000 rs. vn. más que el capital fijado). La identidad que se observa entre el trámite que comentamos y el que se siguió para la concesión de la Compañía de Zaragoza nos exime de realizar su descrip

(235) Estado y resumen puntual del fondo que, por acciones, cargamientos y depósitos, ha usado la Real Compañía de Comercio y fábricas de Zaragoza, hasta fin de junio de 1.748, en especie o efectos propios, valores de éstos en el día, según sus clases, y manufacturas, en que existen utilidades divisibles a los accionistas, con proporción al tiempo que se interesaron, principios y establecimientos de fábricas, Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, caja 87-2.041. Ar. Estado y resumen... (id. ant.)... hasta fin de diciembre de 1.748, destino y paradero del total importe, así en efectos y fondos estimados por el legítimo coste y costas, que hasta el día han causado, como en caudales existentes, salarios y gastos ocurridos por dicho tiempo, según cuenta y recabdos de justificación, formada por la Contaduría, con fecha de 11 de agosto de 1.749 en consecuencia de los géneros respectivos a 1.747 y 1.748, examinadas por la Junta de Revisores, A.G.S., Hacienda leg. 856, exp. s/n.

ción (236).

La necesidad de la Compañía de Toledo se basaba en "el deplorable estado de las antiguas y numerosas [fábricas] de la misma ciudad" y su objetivo, por tanto, era "el restablecimiento de la antigua fábrica de Toledo, perfección y aumento de sus manufacturas, en todo género de tejidos de seda, sola, o con mezclas de oro o plata" (a. 4 R.C.).

Por último, destacaremos que la Sociedad de Hilados de Algodón se constituyó en 1.772-73 en Barcelona, promovida por la Junta Particular de Comercio de dicha ciudad. En este caso, ello equivale a decir que estaba promovida por los dueños de las veinticinco fábricas de indianas de la ciudad que buscaban, con su asociación, "establecer en estos reinos el hilado del algodón de América (237). En este caso nos encontramos con unos empresarios, núcleo de la primera burguesía industrial catalana, que pretendía incrementar sus posibilidades de intervención en el mercado mediante su asociación. En ella se manifiesta la tónica proteccionista que caracterizará durante mucho tiempo al textil catalán; pero, de hecho,

(236) Para la evolución del fondo de la Compañía de Toledo, ver Larruga, Memorias..., tomo VII, pp. 73 y ss.; reproducimos el preámbulo de la R.C. de 10 de febrero de 1.748, idéntico al de la Compañía de Zaragoza, salvadas las diferencias de lugares y personas: "Por quanto D. Bernardo de Rojas y Contreras Ministro Honorario de mi Junta General de Comercio y Moneda, y Superintendente de las Fábricas y Comercio de la ciudad de Toledo, como comisario, y subdelegado de la referida Junta General representó: Que habiendo tenido varias conferencias con distintos sujetos, inteligentes en fábricas y comercio..." (ibidem pp. 5 y ss.) Mariano García Rupérez ha estudiado los siete primeros años de vida de esta compañía en su Memoria de Licenciatura, defendida en 1.985, próxima a editarse cuando escribo estas líneas.

(237) R.C. de 30 de junio de 1.773, A.H.N., Consejos, lib. 1.514, núm. 78. Renovación de 13 de octubre de 1.778, A.C.A., Audiencia, Consulado, 3/2, fols. 26-28.

sus privilegios eran muy escasos y nunca exclusivos. Por ello, es ésta una peculiar privilegiada, que adopta esta fórmula porque era la única que legalmente les permitía la constitución de una asociación de capitales con personalidad jurídica y responsabilidad limitada de unas dimensiones adecuadas para cumplir su objetivo. Era, como ha resaltado Molas, un eslabón en la lucha de la burguesía industrial para establecer organismos propios de representación social y precedente de las posteriores Juntas de Comercio y Fábricas (238).

Visitadores de fábricas.— El visitador de fábricas de Granada, Don José Gabriel de Mora, representó a la Junta General de Comercio acerca del deterioro mercantil y de las fábricas de seda del territorio. Esta queja fue atendida cumplida y rápidamente por el mencionado organismo, según la política económica del momento. Se encargó a D. Manuel de Argumosa, administrador de Rentas Provinciales de Granada, que buscara los medios adecuados para el restablecimiento de la actividad fabril y mercantil de la zona.

El resultado de sus gestiones fue el proyecto que, con su firma, y en nombre de veintidós "individuos del comercio y fábricas de aquel reino" presentó a la Junta General de Comercio. El informe del fiscal del citado organismo, si bien favorable, retocó este proyecto que, finalmente, fue presentado a consulta y aprobado por Real Cédula de 20 de agosto de

(238) Pedro Molas Ribalta, Los gremios barceloneses del siglo XVIII, Madrid, 1.970 pp. 519-527. E. Larruga, Historia..., t. III, fols. 480-493.

1.747, por la que se creó la Real Compañía de Comercio y Fábricas de Granada. Esta tendría el objeto general citado para sus homónimos y, específicamente, el establecimiento y restablecimiento de fábricas de tejidos, especialmente de seda, para conseguir arrebatarse este ramo a los extranjeros (cosa que no creía poder hacer sin privilegios (239)).

2.- Las Sociedades de Amigos del País: Dentro de la serie de proyectos que para el desarrollo económico se formularon en el seno de estas instituciones, se encuentran algunos de la índole de los que aquí se estudian. El análisis de los archivos de estas sociedades nos revelaría el número exacto de iniciativas elaboradas en su seno. Sólo una de ellas —en el campo de las compañías industriales privilegiadas— fue coronada por el éxito: La Compañía General de Pesca Marítima en las costas del Cantábrico, cuya Real Cédula se concedió en 16 de febrero de 1.775. En ella se establecía la responsabilidad que la Sociedad Vascongada de Amigos del País tenía como promotora y que terminaría cuando el importe de las acciones vendidas alcanzaran la cantidad de 90.000 reales y convocara la primera Junta General de Interesados (240).

(239) La representación de Argumosa y el informe fiscal en A.G.S., Hacienda, leg. 857. La Real Cédula de concesión en A.G.I., Contratación, leg. 5.006. Está reproducida en Raquel Rico Linage, "La Real Compañía de Fábricas y Comercio de Granada: su cédula de creación", Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, Tomo III, Córdoba, 1.978, pp. 159-175.

(240) R. C. de 15 de febrero de 1.775, Larruga, Historia..., Tomo IX, fols. 413 y ss.

Sobre esta compañía cabe hacer consideraciones similares a las realizadas para la de Hilados. Si bien buscaban una protección por parte del Estado no pretendían más privilegios que los que obtuviera el sector. Una vez más nos encontramos con la adopción de esta fórmula porque era la única permitida para crear una sociedad anónima.

En 1.785, la Sociedad de Amigos del País de Mallorca solicitó la constitución de una compañía general privilegiada de comercio y fábricas en esta isla. Cuando presentó su proyecto, la Sociedad mallorquina contaba con el apoyo del Intendente del territorio y había logrado el informe favorable de los Directores Generales de Rentas. El fiscal de la Junta de Comercio —Juan Antonio de Los Heros—, sin embargo, basándose en el perjuicio que ocasionaría a la población balear la exención del impuesto del "taller" (sic) solicitado para la compañía, consideró negativamente el proyecto en dos ocasiones. Deducimos el triunfo de la tesis de Heros al no encontrar ninguna noticia de la constitución de la compañía proyectada (241).

El caso descrito nos revela la importancia del cargo de fiscal en la Junta de Comercio, cuyas opiniones se valoraban por encima de las de los directores generales de Rentas incluso en un asunto —los impuestos— en el que éstos son teóricamente más competentes. Es evidente, por otra parte, la influencia que tuvo en la resolución de este tema lo tardío de

(241) Juan Antonio de los Heros, Varias respuestas, tomo I, fols. 17 y 50v.-51.

la fecha, así como las propias características de la persona del fiscal, director de la Compañía General de los Cinco Gremios (242).

3.- Los Gremios y Hermandades: En este apartado se encuadran dos compañías de las estudiadas en estas páginas, que se salen del marco cronológico y temático de las que constituyen nuestro objetivo fundamental. Son la Compañía de Requena (1.753), ya citada, y la de Viñeros de Málaga (1.806).

Su consideración es interesante por cuanto la primera es un ejemplo de la adopción de la nueva figura mercantil por parte de unos gremios —en este caso textil— en decadencia. La creación de Compañías privilegiadas y el desarrollo del trabajo a domicilio fuera de las fronteras de su jurisdicción, estaban destruyendo su tradicional monopolio. Los Gremios intentaron recuperarlo, despreciando el camino de la transformación de la estructura productiva para enfrentarse a una situación de competencia que, inevitablemente, se estaba imponiendo (243).

La Compañía de Viñeros de Málaga es otro ejemplo característico de un momento de crisis de un sistema. Fue iniciativa de una antigua Hermandad, que dió a la compañía su nombre

(242) v. Juan Antonio de los Heros, Discurso sobre el comercio, las utilidades, beneficios, y opulencias que produce, los dignos objetos que ofrece para el bien de la patria, el que ejercían los Cinco Gremios Mayores de Madrid, participando todo el reino de sus ventajas y que es compatible el comercio con la primera nobleza, Madrid, 1.785, Seminarario Erudito de Valladares, Madrid, 1.790, tomo XXVI, pp. 145-281. En esta obra, Heros defiende las compañías de comercio y fábricas sin privilegios, basadas en las de los Cinco Gremios; y, para esta compañía, Antonio Matilla Tascón y Miguel Capella, Los Cinco Gremios Mayores de Madrid: Estudio crítico-histórico, Madrid, 1.957.

(243) R.C. de 2 de septiembre de 1.753, A.H.N., Hacienda, lib. 8.019, núm. 1.337.

y a la que transmitió su peculiar y arcaica estructura. La promovieron individuos agremiados que querían comercializar su propia producción y, para ello, se asociaron en una Compañía que será un mero apéndice de la Hermandad (244).

El carácter especial de las Compañías de los Cinco Gremios nos lleva a analizarlas en un posterior capítulo.

Como casos diferentes, mencionaremos la Compañía de la Unión y la de pesca, fábrica y comercio del coral. La primera fue constituida en 1.747 por las Compañías de Extremadura y Granada para realizar más efectivamente el comercio de la seda con Portugal, pues aisladas no podían acabar con el comercio extranjero. Era una sociedad independiente, con su propia estructura, contabilidad y capital, que fue aportado en partes iguales por los socios. La Compañía de Toledo desde el momento de su creación (febrero de 1.748) participó en la Unión. Su evolución estuvo marcada por la de sus accionistas y, tras unos iniciales y discretos beneficios, inició su decadencia en 1.752 para quebrar estrepitosamente cuatro años más tarde (245).

En 1.790 se creó con sede en Mahón la Compañía de pesca, fábrica y comercio del Coral a iniciativa de otras ya constituidas, como en el caso de la Unión o la de Filipinas. El proyecto fue obra de las Compañías de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, Longistas, Marítima y Filipinas. Su objeto estaba

(244) R.C. de 12 de septiembre de 1.806, A.G.S., Hacienda, leg. 337, núm. 20.

(245) R.C. de junio de 1.747 en Larruga, Memorias..., t. VII, pp. 68-74.

expresado en el título —norma de las anónimas— y lo realizaría bajo la protección real para —como es habitual— arrebatarselo a los extranjeros en breve plazo (246).

2.4.2.- Características.

a) Personalidad jurídica.— Las Reales Cédulas de creación de las compañías privilegiadas y sus ulteriores Ordenanzas no hablan textualmente de personalidad jurídica. Sin embargo, esta misma normativa y la jurisprudencia mercantil que generan sus conflictos, permiten detectar una serie de comportamientos que sólo pueden derivar de la existencia de la característica que comentamos, como tratamos de mostrar a continuación.

La compañía aparece como un sujeto independiente de los elementos que la constituyen. Tenía un capital fijo, igual a la suma de las acciones en que se interesan los socios, con el que podía realizar actos de comercio y, con el resultado de estas negociaciones, constituir un patrimonio social exclusivo.

Incluso en las raras ocasiones en las que el capital no está fijado, como en la Compañía de Pesca Marítima, se establecía que "los fondos de la compañía consistirán en acciones, que los particulares de las provincias del Reyno, quie-

(246) Reglamento de 23 de mayo de 1.790, A.H.N., Hacienda, lib. B.041, núm. 4.368

ran emplear en su comercio, las cuales, para mayor facilidad del público, serán de a mil y quinientos reales de vellón ca da una" (a. 8 R.C.). En el mismo caso se encontraba la Compañía de Viñeros de Málaga (a. 6 R.C.)

Se puede inferir del uso de la locución "su comercio", en éstas y las demás cédulas, el reconocimiento de una capacidad de negociación de las compañías, independiente de la de los sujetos que la integran. Así, por ejemplo, a los directores de la Compañía de Toledo, se les prohibía comerciar con los mismos géneros "en que comercia la compañía" y, si lo hacían, se les confiscarían dichos géneros "a favor de la compañía" (247). Esta capacidad de negociación, este reconocimiento de la compañía como sujeto comerciante, supone que puede realizar cualquier clase de operación mercantil, como vender, comprar, o contratar.

De la existencia de patrimonio social exclusivo se desprende una característica fundamental en la compañía privilegiada, que nos permitirá considerarla como anónima; nos referimos a la responsabilidad limitada de los socios, cuyo análisis merecerá un epígrafe especial. Baste aquí esta alusión.

La permanencia del fondo de la compañía con independencia de la identidad de sus asociados era todavía un problema que se planteaban, en ocasiones, estas primitivas sociedades de capital, como resaltamos en el caso de las grandes compañías para el comercio colonial en España y, en el siglo XVII,

(247) Núm. 6 de las Ordenanzas de la Compañía de Toledo, de 12 de mayo de 1.750, en Larruga, Memorias..., tomo VII, pp. 75 y ss.

en otros países europeos. Las que aquí analizamos ya no contemplan la posibilidad de que un accionista reclame sus acciones y, por contra, regula su transmisión. Sólo hay una y tardía excepción; precisamente la Compañía de Burgos, creada veinte años después del grueso del conjunto de las compañías de comercio y fábricas:

"De tres en tres años se ha de hacer repartimiento de utilidades, empezando éstas después de los tres de la formación de esta compañía, y entrada de acciones en ella; y si entonces quisiere algún individuo sacar sus acciones, se le han de entregar dentro de los primeros seis meses siguientes para dar lugar a expender sin precipitación los enseres en que es partícipe, quedando la compañía en libertad de admitir nuevos accionistas, con el fin de hacerla más opulenta" (248).

Por lo demás, la existencia de la compañía es, en todos los casos, independiente de la identidad de sus asociados, que pueden variar. Las acciones pueden venderse, cederse, testarse... con un trámite cuya complejidad fue disminuyendo con el tiempo. Efectivamente, las acciones de las primeras compañías eran nominativas y su transmisión debía ser formalizada en instrumento público y comunicada a los Directores. Incluso en este caso, el mayor problema era encontrar comprador. Reproducimos la norma que regulaba este extremo en la Compañía de Extremadura, como ejemplo para el resto de las creadas en la primera mitad del siglo:

"Siempre que ocurra venta, cesión o transpaso de alguna acción o acciones ha de ser judicialmente en virtud de escritura ante

(248) a. 7 R.C. de 29 de noviembre de 1.767, E. Larruga, Memorias..., t. 30, pp. 3-17. La cita corresponde a la p. 6.

Escribano Numerario; éste ha de sacar y dar un testimonio, en sucinta relación de ella, para que firmándola el comprador, y vendedor, la remita éste a la Dirección de la Real Compañía, en cuyo archivo se colocará anotación o anotaciones correspondientes, a continuación del asiento de la acción, o acciones que relaciona el referido testimonio, para que en todo tiempo conste el último legitimado acreedor, y para que a éste pueda despacharle el expresado Contador principal una certificación que le declare la propiedad, sin cuyas circunstancias quedarán sin corriente los intereses..." (249).

La R.C. de 2 de junio de 1.782 que creó el Banco de San Carlos supuso un gran avance, puesto que legalizaba la existencia de acciones al portador transmisibles por simple endoso, como se venía practicando con los vales reales. Se trataba así de impulsar el mercado de capitales y se reconocía la existencia de una cotización que oscilaba sobre el valor facial, que es fijo:

"Toda especie de personas de cualquier estado, calidad o condición que fuera, sin exceptuar las Ordenes Regulares, y sus individuos, podrán adquirir estas acciones, y cederlas, o endosarlas libremente como se practica con las letras de cambio, por más o menos valor según les acomodase, y el crédito del Banco subiere o bajare en la opinión pública" (250).

Esta norma será incorporada en las compañías creadas con posterioridad; ya citamos el caso de la de Filipinas, entre las establecidas para el comercio colonial. Lo mismo reza, en

(249) Núm. 98 de las Ordenanzas de la Compañía de Extremadura de 10 de octubre de 1.746. E. Larruga, Memorias..., to 29, p. 128. A. 37 de la R.C. de 6 de abril de 1.747 (C. de Granada), que admitía el tanteo de la dirección sobre las acciones en venta; a. XII de las O. de 12 de mayo de 1.748 (C. de Toledo).

(250) a. 6 de la R.C. de 2 de junio de 1.782, A.H.N., Real Cédula, núm. 589.

nuestro campo para, por ejemplo, la Compañía Marítima:

"Las mismas acciones se pasarán a la orden de los sujetos, sean españoles o extranjeros, que se interesaren en la Compañía; y es tos las podrán vender o traspasar a otros libremente todas las veces que les convenga, con un simple endoso, o de otra forma más solemne, y sin responsabilidad alguna de los endosantes ni de los primeros dueños de dichas acciones" (251).

Otro aspecto que nos revela la personalidad jurídica de estas compañías es que pueden demandar y ser demandadas. En los pleitos que entablaban, los directores no actuaban en nombre propio, sino en tanto representantes de una asociación de capitales. La compañía tenía, como sujeto activo, una serie de derechos y obligaciones; en consecuencia, podía exi gir aquellos y debía responder de éstas, como queda patente en la actuación de los cuerpos privilegiados en los dos campos de relaciones en que se mueven:

En las relaciones de trabajo puede, como empresario, exi gir a sus empleados el cumplimiento del contrato, al que ella está también obligada. Así se expresa en la Compañía de Toledo:

"Que la Compañía pueda obligar a los maestros, oficiales y aprendices empleados en sus fábricas, a que cumplan los contratos, y tiempo de ellos..." (a. 21 R.C.).

Y, en el mismo sentido la de Sevilla (a. 229 O.) o la de Burgos (a. 12 R.C.).

(251) a. 29 de la R.C. de 19 de septiembre de 1.789, A.H.N., Estado, leg. 3.222, exp. 31.

Sobre lo mismo, y en el terreno de la práctica, se puede citar el pleito entre la Compañía de Extremadura y su administrador de tornos, don Miguel Jerónimo Alemán de Sande, cuya sentencia condenó a éste, por incumplimiento de sus obligaciones, a la devolución de su salario, de los géneros que defraudó y al pago de las costas del juicio (252); o el pleito que siguió esta misma compañía contra uno de sus directores, acusado de fraude (253). Un ejemplo del mismo tipo de pleitos con las posiciones invertidas lo ofrece el que siguió contra la Compañía de Granada su agente en Madrid, don Pedro Ylundáin, por impago de sueldos (254).

También en las relaciones de las Compañías con los capitalistas se manifiesta la existencia de personalidad jurídica. Consideramos tales, las que la compañía mantenía con sus accionistas y prestamistas así como las obligaciones financieras adquiridas con sus proveedores y clientes, durante su actividad.

Es fácil encontrar ejemplos de pleitos derivados de estas relaciones, en el momento de quiebra de una compañía,

(252) El juicio comenzó en 1.757 y continuaba en 1.786, en cuyo 21 de noviembre Alemán solicitó una revisión del mismo, J.A. de los Heros, Varias respuestas fiscales, tomo V, fols. 412v-413.

(253) A este respecto, es reveladora la sentencia de la Junta de Comercio, en 28 de mayo de 1.760, "en los autos que sigue la Real C. de Extremadura y Francisco de la Fuente, en su nombre, y el Profiscal de la Junta contra D. Blas Rodríguez Caballero..." E. Laruga, Memorias..., tomo XXXIX; p.184, v. María del Carmen Rodríguez, "La Real Compañía..", pp. 59-60.

(254) Un informe fiscal de 15 de abril de 1.785 nos da noticia de la sentencia de la Junta de Comercio en este pleito (6 de marzo de 1.784) que obligó a la compañía a realizar este pago (J.A. de los Heros, Varias respuestas fiscales, tomo IV, fols. 203v-206).

cuando se ve demandada por sus censualistas y acreedores que no perciben intereses, no recobran su capital o ven insatisfechos sus créditos. Como muestra, podemos citar cómo la Casa de Misericordia de Zaragoza, demandó a la compañía de la misma ciudad por su negativa a devolver los 48.300 reales de plata que tenía impuestos a censo en la sociedad (255).

En otras ocasiones, era la compañía la que demandaba, bien reclamando su derecho preferente en el cobro a un acreedor quebrado, como en el caso de la Compañía de Granada en la quiebra de Larruy y Compañía (256), bien apremiando el pago pendiente de alguna negociación, como en el caso de la Compañía de Extremadura contra los herederos de un proveedor (257).

b) Responsabilidad limitada.— En un apartado anterior, discutimos la importancia que tiene la determinación de la responsabilidad en una compañía mercantil y realizamos su caracterización en los diferentes tipos de las mismas. En ausencia de una legislación general, el análisis de la normativa especial de las compañías privilegiadas del siglo XVIII, así como de la jurisprudencia que sus pleitos ocasionan, nos per

(255) Consulta de la Junta de Comercio de 16 de diciembre de 1.769, A.G.S., Hacienda, lib. 213, fol. 238v.

(256) A.H.N., Estado, leg. 4.571, caja 1, exp. s/n. Este derecho de preferencia lo tenían concedido la compañía de Toledo (a. 14 R.C.) y, como veremos, el resto por extensión.

(257) J.A. de los Heros, Varias Respuestas fiscales, tomo VIII, fol. 22. El pleito todavía estaba en apelación en 1.789.

mite delimitar en qué medida estas sociedades se pueden considerar anónimas en el aspecto que comentamos.

Sólo hemos encontrado formulada la limitación de la responsabilidad en dos ocasiones. La primera se trata de la Real Cédula de 19 de septiembre de 1.789, por la que se creó la Compañía Marítima, cuyo artículo 14 determina:

"Todas las empresas y negocios de la compañía se han de contar por años, de Resurrección a Resurrección, liquidando para fin de cada año sus cuentas, por cuenta y riesgo de las acciones, que entraron a su capital...";

la segunda pertenece a la Real Cédula de creación de una compañía tardía, la de Seguros Marítimos, y que por su fecha y objeto se aleja de las aquí analizadas:

"El fondo capital de esta compañía será de pesos setecientos cincuenta mil de 128 quartos cada uno, repartidos en 2.500 acciones de a 300 pesos en vales Reales, y sin más responsabilidad en los accionistas que la del número de acciones en que se halla interesado" (258).

A pesar sin embargo, de que en el resto de las compañías no está tan claramente definida, podemos deducir la existencia de la limitación de la responsabilidad a través de su comportamiento. Desde el momento de la formación del capital social, era la cantidad de dinero que representa, y no otra, la que se empleaba en la negociación. Las ganancias conseguidas a partir de la utilidad de este capital, eran las que permi-

(258) R.C. de 23 de febrero de 1.800 en Severo Aguirre, Prontuario..., tomo V, p. 26.

tían realizar el pago de los intereses a los censualistas y, en su caso, el abono de dividendos a los accionistas. Es decir, en el desarrollo normal de la vida de la compañía, era su patrimonio el que respondía de las obligaciones financieras, y en ningún momento la fortuna personal de cualquiera de sus socios, aún del más cualificado.

Asimismo, en ninguna quiebra de compañía, incluídas las acontecidas antes de la formulación explícita de la responsabilidad limitada (Compañías de Granada, Toledo, Extremadura, Burgos,...), se formuló una demanda a ningún individuo para hacer frente a las deudas de la compañía, sino que ésta debía responder de ellas mediante la liquidación de su propio patrimonio.

La responsabilidad de los directores era limitada, como para el resto de los socios, lo que distingue a estas compañías de las comanditarias. Como consideraremos más adelante, la exigencia de un cierto número de acciones para poder acceder a los puestos ejecutivos, era una cláusula generalizada en estas compañías. Era la fórmula que consideraban idónea para lograr un compromiso mayor de los directores con la sociedad. Es uno de los rasgos arcaizantes de estas compañías que aún identificaban el hecho de la posesión de acciones con la idoneidad para la gestión. A pesar de la indefinición de la mayoría de los textos, el comportamiento de estos cuerpos mercantiles, revela la existencia de limitación de responsabilidad de los directores que, sólo en el caso de que en el transcurso de su mandato transgredan alguna norma, serán res

ponsables, como individuos, con la totalidad de sus fondos.-

Por ejemplo, en la quiebra de la Compañía de Extremadura se distingue el pleito seguido contra el antiguo director, D. Blas Rodríguez Caballero, al que se acusaba de malversación de fondos, y sólo por el importe de lo defraudado, y el proceso de liquidación de la sociedad (259). Para citar un texto que trata el problema acudimos, de nuevo, a la Real Cédula de la tardía Compañía Marítima, que resulta representativo del comportamiento general:

"Los directores (...) obrando con arreglo a lo prevenido y mandado en los artículos de esta Real Cédula, no serán responsables de ningún daño ni perjuicio que resultase de sus disposiciones; así como lo serán, y tendrán que contestar y, satisfacer a la censura y cargos de la Junta General que recaigan sobre la contravención de cualquiera de dichos artículos..." (a. 35 R.C.).

c) Privilegios.— Estas páginas se plantean el análisis de los privilegios que inicialmente consiguieron estas compañías. En su totalidad, sólo los disfrutaron durante seis años, hasta el R.D. de 24 de junio de 1.752. La quiebra que supuso esta norma, que es la primera de un nuevo ordenamiento, será discutida posteriormente.

La personalidad jurídica y la responsabilidad limitada son dos características que convierten a estas compañías en antecedente de la moderna sociedad anónima y que estaban perfectamente definidas en los textos, en la penúltima década

(259) A.G.S., Hacienda, leg. 853, exp. año 1.756.

del siglo XVIII. Un tercer rasgo les devuelve su carácter arcaizante: el privilegio. Es, sin embargo, lo que les otorga su peculiaridad y lo que justifica la intervención del Estado en el momento de la creación y a lo largo de la vida de la compañía. La dispensa de ciertas normas generales sólo se puede conseguir a través de una disposición del más alto rango.

La solicitud de privilegio se justifica en base a la utilidad reconocida que la nueva compañía tendrá para la nación, Utilidad que, a su vez, se apoya en algunos puntos fundamentales: en primer lugar, la compañía restablecerá el comercio y dará trabajo a los habitantes de una zona deprimida; en segundo, abaratará los precios porque, dadas sus dimensiones, podrá comprar al contado y en grandes cantidades la materia prima (que así no se exportará) y, a su vez, tendrá un gran volumen de producción; de ello se derivará la expulsión de los géneros extranjeros, un gran beneficio para la población consumidora en general y también para el Real Erario, por cuanto elevará el nivel de vida de sus súbditos y se supone ejercerá un efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía.

De esta forma se parte de una situación de depresión que se supone que únicamente remediará la creación de una compañía. La decadencia aludida suele referirse al textil y, más concretamente al ramo de la seda (Extremadura, Granada, Toledo, Unión, Requena).

En todas las compañías de comercio y fábricas analizadas

se sigue esta argumentación de forma más o menos explícita. Como ejemplo, extraemos dos textos que pueden completarse. El primero, corresponde al preámbulo de la Real Cédula de creación de la Compañía de Requena; el segundo, a la de Granada:

"... a causa de sus pocos medios se ven precisados a comprar al fiado las sedas para el surtimiento de las fábricas, de lo que se les seguían los graves perjuicios y quiebras de quedarse con las telas sin vender por el excesivo precio a que la necesidad del fiado le obligan a pagar la seda cara, y a dar baratas las ropas, (...) Se podrá esperar en pocos años como se fomentase [la compañía], el total exterminio de los tejidos extranjeros de esta clase con utilidad de mi Real Erario, y de aquel pueblo, evitando la próxima ruina que amenaza con la ausencia de familias que abandonando su domicilio por falta de trabajo, se van a establecer a otras partes, o se echan a mendigar..."

"... estos beneficios, el remedio de aquellos daños y la recuperación y establecimiento de las fábricas de seda, lino, cáñamo y lana referido, no es fácil conseguir, sin formar una Compañía que sujeta a precisas leyes lo hagan causa propia y común".

Una vez demostrada la utilidad de la Compañía, se pasaba a afirmar que no podría vivir sin privilegios. Su argumentación es sobre ello menos evidente, aunque como sustrato se encuentra la concepción de que un sector no puede triunfar en un mundo privilegiado sin serlo también y de que no logrará combatir los bajos precios de la manufactura extranjera sin privilegios aduaneros. Sobre ello, una argumentación positiva: los privilegios no resultarán gravosos al Real Erario, que ~~al~~ ^{al} larga se beneficiará de su resultado.

La Compañía de Extremadura basó, como argumento adicio-

nal, la necesidad del privilegio, en la conveniencia de realizar una política de dumping que, sin embargo no siguió después:

"... tienen formada su idea de perder algún caudal de la Compañía, para dar los tejidos de seda a tales precios en Portugal, que destierran de aquel Reino el comercio que hacen todas las demás naciones con géneros semejantes, si V.M. les concede tales, que la pérdida que se proponen hacer sea tolerable al fondo" (260).

Una primera distinción a tener en cuenta es la que existe entre las compañías que gozaban de algún monopolio —privilegio exclusivo— y los que sólo contaban con privilegios parciales. Aquel caso se daba con frecuencia en las compañías para el comercio colonial, pero también en las que ahora nos ocupan. Así, las Compañías de Extremadura, Toledo y Granada que, en conjunto forman la de La Unión, tenían concedido en exclusiva el comercio con Portugal por diez años. El R.D. de 30 de marzo de 1.753 lo suprimiría (261).

Otras compañías consiguieron privilegio exclusivo para un sector de actividad, como la Compañía Marítima, para la pesca de peces para su salazón en las costas de Africa y América; la Compañía para la Fábrica del Coral, que logró la prohibición por diez años de la instalación de este tipo de fábricas en la isla de Menorca, donde tenía la suya o la Compañía de Seguros Marítimos, que consiguió el monopolio por dos años

(260) Consulta de 27 de abril de 1.746, en Larruga, Memorias..., t. XXXIX, p.108.

(261) R.C. de junio de 1.747 en Larruga, Memorias..., t. XXXIX, pp. 162-165; R.D. de 30 de marzo de 1.753 en Larruga, Historia..., t. IX, fols. 309r-311r.

en su ramo "con el fin de que se consolide la compañía"(262). Sin entrar por ahora en el fondo de la cuestión, quiero resaltar la gravedad de esta disposición en un ramo que venía funcionando brillantemente durante siglos y en el que aparecieron, en torno a 1.765, las primeras compañías comanditarias por acciones.

El resto no solicitaron este tipo de privilegios y algunas como la de Hilados o Pesca Marítima no pretendieron ninguno más que para el resto de sus respectivos sectores. Por ello apuntamos la idea de que eran compañías privilegiadas por ser la única vía legal de crear una gran asociación de capitales. Pero sólo esta última hizo una explícita declaración contra el monopolio, como contrario al desarrollo del sector que, teóricamente, quería promocionar:

"Siendo el fin de la Compañía el aumento de la pesca, no tendrá privilegio exclusivo, sino que todo particular podrá hacerlo como ella por sí solo, o unido en sociedad, a fin de que todos puedan participar de su ejemplo, siguiendo sus ideas particulares, si no quisiesen adherirse a la compañía..." (a. 16 R.C.).

Hecha esta inicial distinción, agruparemos los privilegios en tres grupos principales, a efectos de su estudio:

1) Privilegios fiscales: Son los más importantes, ya que la rebaja de derechos arancelarios permitía una disminución en los precios de los géneros traficados o fabricados por

(262) a. 10 de la R.C. de 19 de septiembre de 1.789 y a. 6 de la R.C. de 2 de junio de 1.792, para la Compañía Marítima (A.H.N., Estado, leg. 3.222-2: exps. núms. 90 y 60) a. 12 de la R.C. de 23 de mayo de 1.790 para la de Fábrica de Coral, A.H.N., Hacienda, lib. 8.041, núm. 4.368) a. 20 de la R.C. de 23 de febrero de 1.800 para la de Seguros Marítimos (S. Aguirre, Prontuario, t. V., pp. 28-34).

la compañía, única vía por la que ésta se consideraba capaz de competir con los productos extranjeros. Como norma general, se reducían a:

—Exención de derechos en la introducción de materias primas que, no existiendo en el país, fueran necesarias para el abastecimiento de las fábricas de la compañía. Así se concedió a las Compañías de Extremadura (a. 7 R.C.), Granada (a. 20 R.C.), Toledo (aa. 8 y 9 R.C.), Sevilla (a. 12 R.C.), Zaragoza (a. 7 R.C.), Reguena (a. 8 R.C.) y Burgos (a. 28 R.C.).

Esta medida que comentamos está formulada de una manera similar en casi todas las disposiciones aludidas; la cita que insertamos, como representativa, corresponde a la Compañía de Zaragoza:

"... los géneros y simples que fuese preciso traer de fuera del reino para las fábricas de la Compañía los podrá introducir sin pagar de rechos algunos de entrada; pero en el caso de haberlos en el Reino, deberá pagar todos los derechos correspondientes si los introdujese de fuera".

—Otra prerrogativas en la compra de materias primas, generalmente la libertad de derechos en las aduanas interiores, la antelación en las compras y el tanteo de las mismas, concedido a las Compañías de Extremadura (a. 7 R.C.), Granada (aa. 21 y 22 R.C.), Pesca Marítima (aa. 26 y 28 R.C.) o Marítima (a. 5 R.C. de 1.789 y a. 3 R.C. de 1.792).

"En las compras de géneros simples y fabricados ha de ser preferida la compañía por el tanto a todo extranjero y las sedas y demás

drogas o ingredientes necesarios para el surtimiento y curso de sus fábricas propias, sean libres de todos derechos reales y municipales, como Puentes, Puertos y Aduanas, haciendo constar las reglas y método que tenga por conveniente el presidente de mi Junta General de Comercio..." (a. 7 R.C. de la Compañía de Extremadura).

La Compañía de Extremadura solicitó sin éxito la explícita renovación de este privilegio en 27 de marzo de 1.750 ya que frecuentemente era transgredido. La Junta de Comercio contestó negativamente aludiendo que la mencionada compañía no podría cumplir su fin principal —la comercialización de los tejidos que le proporcionaban la de Toledo y Granada— si se tenía que ocupar de la colocación de su propia producción. Con esta medida se retiró el apoyo oficial a uno de los fines de la Compañía de Extremadura que, de este modo, no podrá cumplirlo aún a riesgo de hacerlo en favor de los comerciantes extranjeros. La división del trabajo ahora formulada no se encontraba en ninguno de los textos fundacionales (263).

En ocasiones, este privilegio llevaba consigo la autorización para el aprovechamiento de montes baldíos y realengos (aa. 216 y 218 O. Sevilla) o la inclusión de géneros alimenticios para los trabajadores entre las mercancías libres de los derechos de aduanas (a. 10 R.C., Toledo):

"...que esta compañía haya de gozar al año, para cada uno de los telares de tejidos Anchos, que mantenga corriente, la franquicia de la entrada libre de todos los Derechos Reales y Municipales por las puertas de Toledo, de veinte arrobas de vino, ocho de aceite, ocho de tocino, cuatro de jabón y tres de vinagre y la mitad de cada una de es-

(263) A.G.S., Hacienda, leg. 852, exp. año 1.750.

tas especies, para cada telar de pasamanería que, asimismo, tuviera corrientes y en ejercicio".

—Exenciones arancelarias en la comercialización de productos elaborados: El campo de actuación de las compañías industriales y mercantiles privilegiadas superaba, en todos los casos, los límites de la provincia en la que tenía su sede e, incluso, el propio territorio peninsular. Por ello, les preocupaba la existencia de aduanas interiores que hacían costoso y lento un tráfico que debía ser fluído para su rentabilidad económica. En este sentido se expresan las cédulas de diversas compañías, que establecen la libertad de derechos aduaneros para sus productos en el tráfico interior (a. 11 R. C. Toledo, a. 6 R.C. Zaragoza y a. 12 R.C. Sevilla...). De esta forma, la existencia de plomos, marcas y guías en los productos fabricados por las Compañías se justificaba tanto en el control de la producción y el tráfico como en hacer reconocibles los géneros de las privilegiadas y permitir su rápido paso por la aduana:

"Que todos los tejidos de las fábricas de la Compañía se hayan de sellar, emplomar o marcar para que se distingan de otros, y en esta forma gozarán las franquicias que se prevendrán".

"(...) por los administradores de aduanas se le han de dar a la Compañía los despachos correspondientes (...) para que no se le ponga embarazo ni impedimento alguno..." (264).

Asimismo, solía existir una rebaja en el arancel que re-

(264) aa. 232 y 239 O. Sevilla; también en a. 8 R.C. Extremadura y resto de las privilegiadas.

gularaba el comercio exterior, lo que pretendía hacer competitivos en el extranjero a los géneros de las compañías. Se puede citar, como ejemplo, la rebaja de derechos —idéntica— que tenía la exportación de textiles por parte de las Compañías de Extremadura (a. 3 R.C.), Zaragoza (a. 6 R.C.), Granada (a. 16 R.C.) y Sevilla (aa. 13 R.C. y 241 O.). Consistía en reducir el pago a 50 mrs/libra en los géneros de seda; a 25 mrs/libra en los de lana y, en los de lino, al 1% de su valor. En estos mismos artículos se incluían, asimismo, rebajas en los derechos de alcabalas.

2) Privilegios fabriles: Todas aquellas compañías que tenían como objeto principal la fabricación y, también todas aquellas en las que esta actividad era secundaria, siendo el objeto de su creación el comercio al por mayor, gozaban de una serie de prerrogativas para realizar la actividad manufacturera que se pueden clasificar en tres grupos:

—Sobre la contratación de personal: Dado que el objeto para el que se constituían estas compañías era la promoción general de un territorio, en las escrituras fundacionales se suelen encontrar declaraciones sobre la mano de obra que ocuparán, disminuyendo así la ociosidad y sus correlatos de mendicidad y delincuencia. Un claro ejemplo es la Compañía de Requena, de la que reproducimos las líneas que trataban esta materia (v. supra, p. 205). No obstante, las compañías se enfrentaban a la contradicción que existe entre este loable deseo y otro fin para el que se les otorgaba existencia privi-

legiada, que era la superior calidad que debían tener todas las producciones protegidas por la Corona.

por esta razón, si bien se les concedía a las compañías la posibilidad de contratar personal extranjero, se exigía que sólo se realizara cuando este personal tuviera una cualificación imposible de conseguir entre los maestros y oficiales del país. Esta contratación —que buscaba hacer del especialista extranjero un vecino estable— pretendía, además, que la mano de obra importada ejerciera una función educadora hacia los operarios españoles destinados, en el plazo de unos años, a mantener y superar el nivel de calidad alcanzado gracias a este privilegio.

Así lo tenían concedido las Compañías de Sevilla (a. 212 O.), Granada (a. 5 R.C.), Toledo (a. 4 R.C.), Requena (a. 5 R.C.) y, como a continuación reproducimos, Burgos (a. 3 R.C.):

"Siendo uno de los fines de ella restablecer en la ciudad de Burgos y en su provincia las antiguas y extenuadas fábricas (...) con provecho de sus naturales, ha de poder practicarla y traer maestros y operarios extranjeros, no hallándose aptos del país, bajo las reglas y gracias concedidas a la Compañía de Granada en el capítulo quinto de su Real Cédula, reducido a que los maestros extranjeros y familias de profesión católica, que hiciera venir la Compañía, serán tratados, desde luego como naturales (...) para que se vayan estableciendo y avecindando en estos dominios".

Sólo en dos cédulas tardías (correspondientes ambas a la Compañía Marítima) se admitía la libertad de religión a los extranjeros contratados.

—Sobre la compra e instalación de los instrumentos de

trabajo: Las "fábricas" de las compañías, unidades de producción creadas al margen de la estructura gremial, no estaban sujetas a las ordenanzas de estas corporaciones, sino que poseían una reglamentación propia. Esta independencia frente a la organización tradicional generó frecuentes conflictos, entre los que destacan los provocados por la posibilidad que tenían algunas compañías de instalar telares sin más limitación que la que marcaban sus propias necesidades de producción (a. 4 de la R.C. de la Compañía de Extremadura; a. 5 de la R.C. de la C. de Toledo y aa. 6 y 7 de la C. de Requena):

"Que mantenga esta Compañía de su cuenta los telares de tejidos anchos, que tenga por conveniente; y los pueda aumentar sin límite, a proporción de los progresos que tuviera" (a. 5 R.C. Toledo)

Como ejemplo, podemos citar el pleito plantado en 1.747 por el Gremio de la Seda de Zaragoza contra la compañía de esta ciudad. Aquél argumentó que las ordenanzas del ramo de la seda estipulaban un máximo de cinco telares por maestro, mientras que la compañía tenía en cada fábrica, dos o tres individuos así cualificados para más de treinta telares, estando, por tanto, algunos oficiales al cargo de estas máquinas. La respuesta de los directores de la compañía no pretendió rebatir la falsedad de estas afirmaciones —correctas, por otra parte—, sino que hizo hincapié en la diferente normativa a que estaba sujeta; pues —afirma— mientras ella cuenta con una Real Cédula y con unas Ordenanzas aprobadas por la Junta General de Comercio,

"... las ordenanzas que cita (el gremio) son un reglamento que le con
cedió la ciudad para su manejo sin otra autoridad que la que le permi
tían sus fueros" (265).

Desde la postura de fuerza que le confería ser un cuerpo privilegiado, se permitió añadir algunas observaciones acerca del incumplimiento de las normas por parte del propio gre
mio, y sobre la poca calidad de su producción, que era la úni
ca causa de la escasa venta de sus productos. El pleito, lle
vado en apelación ante el Intendente, concluyó con un fallo a favor de la compañía por improcedencia de la demanda y con un apercibimiento al gremio, a causa de las acusaciones realizadas por la compañía.

Un privilegio importante dentro de este grupo es el que obtuvo la Compañía y Fábrica de Coral, a la que se le otorgó la libre importación de las máquinas que necesitaba para su producción (a. 9 R.C.). La falta de este privilegio en otras compañías se debe, probablemente, a la escasa tecnología uti
lizada para la construcción de los instrumentos de trabajo de sus fábricas, generalmente telares.

—Libertad de fabricación: Es este un privilegio que, co
mo el anterior, entraba de lleno en conflicto con la producción gremial. Las compañías necesitaban para introducir sus géneros en los mercados extranjeros, libertad para fabricarlos de acuerdo con las características (marca, peso, ancho de los tejidos) acostumbradas y solicitadas al otro lado de la

(265) A.G.S., Hacienda, leg. 856, exp. año 1.747.

frontera. Así se contempla, por ejemplo en la Compañía de Toledo (a. 6 R.C.), Extremadura (a. 4 R.C.) y Granada, cuyo artículo 19 de la Real Cédula de creación reproducimos:

"... podrá fabricar la Compañía todos los géneros que sean para extraer a países extranjeros, con el peso, cuantales y Marca que le sea conveniente, y acostumbren dar a sus tejidos y manufacturas, poniéndole los plomos, y señales respectivos a su destino".

La extensión de esta prerrogativa a los productos destinados al mercado interior se irá consiguiendo, paulatinamente, a lo largo del siglo, a la vez que los gremios y las fábricas particulares, con lo cual desaparecerá la situación privilegiada de las compañías en este terreno.

3) Privilegios mercantiles: Si exceptuamos algunas compañías fabriles muy concretas (como la Compañía y Fábricas del Coral o la de Hilados) o las pertenecientes al sector servicios (Banco de San Carlos, Compañías de Seguros Marítimos...), el resto de las privilegiadas estaban capacitadas para realizar el comercio al por mayor en todos los dominios españoles y en todos los países extranjeros que no fueran enemigos de la Corona (a. 2 R.C. Extremadura, a. 6 R.C. Zaragoza, a. 8 R.C. Granada, a. 19 R.C. Burgos...), salvo con aquéllos territorios concedidos en exclusiva a alguna Compañía (Caracas, Cuba, Portugal o Filipinas). Esta actividad estaba fundamentalmente, en los privilegios fiscales, ya comentados, que la facilitan y protegen.

Asimismo, las compañías mostraban especial interés en la

ruta que, dentro del comercio interior, ofrecía más posibilidades, la de las Indias. Solicitaban, bien un trato preferente sobre los extranjeros y comerciantes particulares en el embarque de géneros (a. 30 R.C. Granada, a. 234 O. Sevilla), bien que sus embarcaciones no fueran embargadas, para uso de la Corona (a. 247 O. Sevilla). Estos intentos débiles, dispersos y poco formulados, de introducirse en una ruta muy reglamentada y canalizada a través de Cádiz, es mayor en el caso de la Compañía de Burgos, que por el artículo 19 de su Real Cédula de constitución tiene concedido:

"Si la Compañía llegare a la opulencia que desea y se promete ha de poder remitir a los puertos de Indias por los de la provincia de Burgos los géneros y efectos que tuviere, en los tiempos oportunos que yo le señale, pagando los derechos del Real Proyecto, y ejecutando la expedición con los de Cádiz, para no interrumpir aquél ni éste comercio; con la prevención de que la Compañía ha de dar cuenta a mi Junta General de Comercio de las expediciones que intentare hacer".

La quiebra de la compañía antes de alcanzar la opulencia deseada (nunca cuantificada) impidió la realización de un proyecto de comercio con Indias, desde los puertos del norte de España, al margen de la organización de la Casa de Contratación, si bien al amparo de su protección en el mar.

La Real Cédula de creación de la Compañía de Zaragoza establecía la colaboración comercial de ésta con las de Caracas y La Habana ("los directores (...) se darán la mano", a. 10). Se pretendía así integrar las rutas atendidas por estas compañías con la adjudicada a la zaragozana, que tenía como

eje el río Ebro hasta su desembocadura. A efectos mercantiles, Tortosa y sus aledaños, quedaban sujetos a la jurisdicción de la Compañía y del Intendente de Aragón (a. 11 R.C.).

No parece se diera esta colaboración, pues, en 1.750, la Compañía de Zaragoza elevó una representación a Carvajal, en la que se afirmaba:

"... necesitan la protección de V.E. para que la Rl. Comp^a Guipúzcoa na compre a ésta los [géneros] que necesita para su tráfico a Caracas".

Como alternativa a esta colaboración solicitaban la posibilidad de incluir un buque en los viajes de la Guipúzcoana. La respuesta a esta demanda fue negativa, separando claramente las rutas de las mencionadas compañías. La de Zaragoza debía especializarse en el comercio interior y europeo y no inmiscuirse en las rutas monopolizadas por otras compañías cuyo estado no les permitía prestar esta clase de ayudas (266).

De esta forma se consumaba una cierta división ideal de las rutas comerciales atendidas por estas compañías que hay que superponer al mapa diseñado para las creadas exclusivamente para el comercio ultramarino y la colonización. Portugal, en exclusiva, para la Compañía de la Unión, es decir, para las de Granada y Toledo, especializadas en la producción y la de Extremadura, en la comercialización. La ruta del Ebro, se suponía sería bien explotada por la de Zaragoza, gracias a sus privilegios fiscales y fabriles. La Castilla Norte se-

(266) A.G.S., Hacienda, leg. 856.

ría abastecida por la Compañía de Burgos. La Compañía de Sevilla tendría, finalmente, cierta participación privilegiada en la ruta de Indias. Las compañías, sin embargo, no cubrieron eficazmente esas rutas, ni siquiera en el sector textil y, en especial, sedero.

El análisis de los privilegios obtenidos por las compañías industriales creadas en España en el siglo XVIII (Reales Compañías de Comercio y Fábricas) nos revela un proceso de unificación de los mismos basado en que, si bien tienen un objeto particular, que las diferencia del resto, estaban capacitadas para realizar cualquier tipo de comercio y para instalar toda clase de fábricas que no estuvieran, precisamente, sujetas a monopolios.

La primera asociación de estas características, la Real Compañía de Comercio y Fábricas de la provincia de Extremadura, tenía concedido por el artículo 5 de su Real Cédula de creación (22 de mayo de 1.746), la automática adquisición de cualquier franquicia mayor de las solicitadas, que fuera otorgada, en adelante, a cualquier otra. En el mismo sentido, la Compañía de Zaragoza gozaba de los mismos privilegios que los otorgados a las de Extremadura, Sevilla y Granada, constituidas antes de ella (a. 13 R.C.) y lo mismo reclamó y obtuvo la de Requena (a. 8 R.C.).

En este proceso se destaca la Compañía de Sevilla que, si bien por su pertenencia al grupo se vió beneficiada de todos los privilegios comunes, tenía reservadas ciertas prerrogati

vas particulares; por el artículo 13 de su Real Cédula de creación y 237 de sus Ordenanzas, se le aseguraba una exención superior al más privilegiado en todos los géneros, frutos y efectos que se introdujeran en el reino para su comercio. En la extracción de géneros para su venta en el extranjero, gozaba de una bonificación en los derechos reales y municipales de "una tercera parte más de ganancia que el más privilegiado", excepto en la lana (a. 242 O.). Quizá fuera una compensación ante el traslado del comercio americano a Cádiz.

Podemos concluir, pues, considerando que sobre el sistema general de fabricación —textil sobre todo— y de comercio de la España del Antiguo Régimen se configuró, entre los años 1.746 y 1.767, un nuevo sistema privilegiado respecto a aquél, . constituido por media docena de cuerpos mercantiles, a los que su estructuración y organización interna, similar, les señala como los antecedentes de la moderna sociedad anónima.

La existencia de privilegios parece que obliga a matizar la anterior afirmación. Hay que considerar que, si bien en estas compañías se llevó a su máxima expresión el sistema de privilegios, éste no era una excepción en la España del Antiguo Régimen, tanto en el comercio colonial en unos aranceles llenos de casos particulares como en un sistema fabril en el que la norma, en las manufacturas de ciertas dimensiones, era la obtención de diversas franquicias con la consiguiente dependencia organizativa de la Junta de Comercio y la abundan-

cia, entre ellas, de Reales Fábricas (267).

Asimismo, destacaremos que el personal de las compañías estaba sujeto al fuero de la Junta General de Comercio, lo que tampoco resultaba extraño dentro de la multitud de jurisdicciones a las que se veía sometida la vida de los individuos en el Antiguo Régimen (268).

Quizá estas razones expliquen en parte el fracaso de estas compañías. Eran hijas de su tiempo y murieron con él, con la extensión del libre mercado y de la libertad de fabricación. Sobre ello, su avanzada organización corporativa no se correspondía con la rutina e ineficacia de su gestión y de su estructura productiva y mercantil. No fueron una alternativa a los gremios ni a la oferta extranjera. También en este terreno el Despotismo Ilustrado fracasó en su intento de dirigir la transición. A partir de 1.752 intentaría una nueva política y los privilegios de las compañías se vieron sensiblemente disminuidos.

(267) Dentro de este interesantísimo aspecto que, por ahora, queda fuera de nuestra investigación, mencionaremos que en 1.746 existían 83 fábricas privilegiadas en España según una relación que se confiesa incompleta: "Estado Gral. de las Fábricas que hay en España sujetas a la R. Junta Gral. de Comercio y Moneda... según lo que consta en la Secretaría de la citada Junta Gral.", A.H.N., Estado, leg. 3.515, exp. s/n. Asimismo, y por citar una fecha tardía, es interesante la relación de solicitudes de privilegios fabriles y de denominaciones de "Real Fábrica" que se contiene en los legajos de consultas de la Junta General de Comercio de 1.800 a 1.833 que se conservan en el A.G.S. y que tienen un excelente índice que hace más fácil su consulta. A.G.S., Consejo Supremo de Hacienda, legajos 254 a 391. Sería superfluo citar aquí la bibliografía que es muy variada, interesante y todavía escasa sobre el tema.

(268) Cfr. a. 190 C. Sevilla, a. 19 R.C. de la C. Toledo, aa. 17 y 26 de la R.C. de la C. Burgos.

2.4.3.- El Patrimonio Social

a) La obtención del capital social. Acciones y accionistas..- La compañía privilegiada solía tener determinada en su cédula fundacional la cantidad de capital que se estimaba necesaria para su funcionamiento (capital social). Dicho capital, en las industriales, oscilaba entre los 4 millones de reales de vellón de la Compañía de Toledo (a. 2 R.C.) y los 15 de la de Sevilla (a. 7 R.C.). Estos datos quedan expresados en el cuadro II,4; en él se observa que esta Compañía tenía casi el doble del capital social que su más próxima seguidora (Requena). Esta situación es debida a que la de Sevilla era la única compañía que se preveía tuviera un comercio regular con América. Si comparamos el cuadro II,4 con el II,1 (p. 159) (1 peso sencillo = 15 reales) observamos que esta última compañía tenía un capital social idéntico a las menores de las creadas para el comercio colonial, Habana y Barcelona.

En tres ocasiones, el capital social no estaba determinado; la Compañía de Viñeros de Málaga dispone que "el fondo de esta compañía ha de ser de ilimitada cantidad" (a. 6 R.C.). Las de Extremadura (preámbulo R.C.) y Pesca Marítima (a. 8 R.C.) fijan una cifra de partida (dos millones y noventa mil reales de vellón respectivamente) a partir de la cual podían empezar a funcionar, manteniendo abierta sin limite la suscripción de acciones.

Sin embargo, este capital social, en los casos en que se

fija, no tiene por qué estar suscrito enteramente en el momento de iniciarse la vida activa de la compañía. Existe, en la mayoría de las cédulas de creación de las mismas, una cláusula que determina la porción de capital social con el que el nuevo cuerpo mercantil debía contar para dar comienzo a sus operaciones (capital inicial).

En un caso —Compañía de Burgos— no se estipula el momento del comienzo de las actividades en aquél que se consiga un determinado capital, sino que se realiza la proposición contraria: se fija una fecha para tal acto (1 de enero de 1.768), sea cual fuere el dinero existente en las arcas de la sociedad. Esta cantidad era, en tal momento, 1.103.000 reales de vellón (269), a pesar de que los fundadores, en su solicitud, habían asegurado la existencia de suscripciones por valor de 1.470.000.

Una situación especial se produce, también, en la Compañía Marítima. El artículo 24 de su Real Cédula de constitución (19 de septiembre de 1.789) estipula que "el fondo que para el primer año necesita la compañía y que sus fundadores me han propuesto como suficiente para empezar sus operaciones, es el de seis millones de reales de vellón: en cuya inteligencia les ha concedido facultad, desde luego, y antes de la publicación de esta Cédula, para que los junten entre ellos mismos por medio de suscripción reservada, en acciones, o de otra manera que mejor les conviniera". El artículo 25

(269) "Estado de la Rl. Compañía de S. Carlos... perteneciente al giro del año de 1.769", Larruga, Memorias..., tomo XXX, p. 21 y A.G.S., Hacienda, leg. 855.

autoriza la apertura de una pública suscripción de acciones para el segundo año (catorce millones) y el artículo 26 prevé una nueva emisión, para el tercer año, por valor de treinta millones. Sin embargo, el artículo 1 establece que la compañía podía iniciar sus operaciones desde el 1º de enero de 1.790. Acogiéndose a esta última disposición, y sin respetar el cumplimiento de la totalidad de la suscripción de acciones prevista, la compañía comenzó a funcionar con dos millones y medio de reales en acciones, a los que se añadieron, en el transcurso de 1.790 otros 300.000 de participación real. La importancia del desajuste producido entre el plan inicial y el capital efectivo hizo necesaria la petición de un préstamo a la Corona en diciembre de 1.790 por valor de ochocientos mil, para hacer frente a las cuantiosas deudas contraídas en su primer año de vida. A lo largo de su azarosa existencia, la Compañía Marítima nunca consiguió superar los tres millones de capital (270).

En el resto, la proporción teórica del capital inicial sobre el social, varía desde un 18,75% en la Compañía de Toledo (a. 15 R.C.) hasta un 50% en la de Zaragoza (a. 20 R.C.). Ya mencionamos cómo la Compañía de Burgos y la Marítima comenzaron sus operaciones con una cantidad de capital inferior a la que sus Reales Cédulas de concesión preveían. Lo mismo cabe decir para la de Zaragoza, que sólo consiguió un tercio de su capital previsto (271). Sin embargo, la de Gra-

(270) A.H.N., Estado, leg. 3.222, caja 1, exp. 6.

(271) "Estado... hasta fin de junio de 1.748". BUZ, caja núm. 87-2.041 Ar.

nada comenzó su giro con más de un millón de reales de vellón por encima del mínimo que se había establecido y la de Toledo lo hizo con su capital social totalmente suscrito (272). Podemos concluir, pues, que la suscripción de un cierto monto de acciones como requisito previo al inicio de las operaciones no se exige en las compañías industriales privilegiadas, que ya, a esta altura de nuestro análisis, y debido a la ausencia de una normativa general previa y contrastada, se nos aparecen como unas agrupaciones protegidas a la vez que escasamente fiscalizadas y con un gran nivel de autonomía.

Para reunir el capital social, demasiado cuantioso para ser aportado por un pequeño grupo de compañeros, los promotores de una privilegiada ponían a la venta un número determinado de títulos o acciones. Estas al convertir a su poseedor en copropietario de la sociedad constituida, le otorgan una serie de derechos respecto a la misma, el más importante de los cuales es la percepción de una parte proporcional de sus beneficios. Tanto este derecho como el control que los accionistas pueden ejercer sobre la dirección, serán objeto de un próximo apartado.

La acción representaba, como hoy día, una parte alícuota del capital social, en todos los casos estudiados. Sorpren-

(272) La Compañía de Granada inició sus operaciones con 2.844.000 rs. vn. frente a los 120.000 pesos antiguos que su R.C. estimaba necesarios (a. 10 R.C.). "Estado del giro, negociaciones, utilidades y fábricas, y establecimientos que ha hecho, tenido y reparado la R.C. C. de Granada hasta fin de dñbre. 1.748 según cuenta presentada por la Dñ. Gral. con fecha 25 de enero presenta en la Junta de Interesados aprobada en 29 del mismo", A.G.S., Hacienda, leg. 857. Para la C. de Toledo, Larruga, Memorias..., tomo VII, p.73, donde se reproduce el estado de cuentas del año 1.748.

dentemente, la única excepción era la tardía Compañía de Burgos, en la que cada socio poseía sólo un título que representaba el valor de su aportación, fuera cual fuere (a. 5 R.C.).

CUADRO II, 4

FECHA DE CREACION, CAPITAL Y DIVISION DEL MISMO
EN LAS COMPAÑIAS INDUSTRIALES PRIVILEGIADAS

NOMBRE DE LA COMPAÑIA	FECHA R.C. CONCESION	CAPITAL SOCIAL (miles	CAPITAL INICIAL de reales	VALOR 1 ACCION de vellón	PARTICIPACION CORONA (1))
Extremadura	22.05.1.746	-	2.000	3,00	60
Zaragoza	27.07.1.746	7.500 (+)	3.750	3,75	750
Sevilla	07.08.1.747	15.000 (+)	4.500	3,75	450
Granada	20.08.1.747	7.500 (#)	1.800	3,00	300
Toledo	10.02.1.748	4.000 (&)	750	3,00	60
Requena	02.09.1.753	9.000 (+)	1.800	3,00	- (2)
Burgos	29.11.1.767	6.000 (+)	-	Desigual	220
Pesca Marítima	16.02.1.775	-	90	1,50	- (2)
Marítima	19.09.1.789	-	6.000	1,00	300
Viñeros de Málaga	12.09.1.806	-	-	2,00	- (2)

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Reales Cédulas de concesión de las Compañías citadas.

NOTAS : (1) Hemos reducido todos los datos referentes al capital, a reales de vellón, con el siguiente criterio: 1 peso sencillo = 1 peso antiguo = 8 reales de plata = 15 reales de vellón. Los datos señalados (&) se han encontrado expresados en pesos fuertes; los señalados (+), se han encontrado en pesos sencillos; los señalados (#) se han encontrado en pesos antiguos.

(2) No se solicita, no se alude a ello en su Real Cédula ni hay rastro de ninguna aportación de la Corona a lo largo de la vida de la Compañía.

Las acciones eran nominativas y de libre transmisión. La

diferencia entre su valor nominal y el de mercado no estaba clara en los años de funcionamiento de estos cuerpos mercantiles, y sólo fue reconocida explícitamente, años más tarde, en el Banco Nacional de San Carlos (1.782) y en la Compañía de Filipinas, como ya ha sido considerado (273).

Con la creación del Banco de San Carlos se intentó la organización del mercado de valores en España (274). La escasez del mismo, en la crítica coyuntura de finales del siglo XVIII y principios del XIX llevó a su fracaso incluso para aquellos títulos de mayor movilidad: los Vales Reales. La Bolsa de Madrid creada en 1.831 no vino tampoco a resolver un problema que necesitaba algo más que soluciones legales, como veremos más adelante. La compraventa de acciones era un fenómeno esporádico en las Compañías industriales privilegiadas, tanto por una concepción arcaica de las relaciones mercantiles como por la escasa rentabilidad que pronto demostraron.

La inexistencia de un mercado de acciones y la dificultad de su venta se traduce en que el mejor foro para esta actividad eran las propias compañías. Como muestra de ello, podemos citar una carta al Director de la Compañía Marítima en que se hace la siguiente oferta:

"... propongo a V. la venta de mis 100 acciones, que cederé a V. por los 100.000 rs. que han tenido de primitivo coste, haciéndole cesión

(273) v. supra, pp. 166.

(274) a. 36 R.C. de 2 de junio de 1.782. v. infra, parte II, cap. 3, punto 3.4

de cerca de dos años de intereses que tienen devengados" (275).

La permanencia de una concepción de las relaciones mercantiles se muestra en la presencia del derecho de tanteo de la Dirección sobre las acciones en venta en alguna de las Compañías, como la de Granada (a. 37 R.C.).

No obstante, en los últimos quince años del siglo, encontramos cotizadas en París acciones del Banco de San Carlos y de la Compañía de Filipinas (276).

El valor facial de las acciones oscila, en las privilegiadas industriales, entre 1.000 y 3.750 rs. vn., excepción hecha de la Compañía de Burgos que, como ya indicamos, tiene indeterminada esta cantidad. Si comparamos estas cifras (cuadro II,4) con las que ofrece el cuadro II,1 para las compañías de comercio colonial, observamos que el valor de las acciones en éstas es sensiblemente superior al de aquéllas, con la excepción de la Compañía de Barcelona (2.000 rs. vn.) (lo que implica una avanzada visión del mercado, por su parte).

Dentro de las industriales privilegiadas, se observa que las acciones de todas las compañías creadas entre 1.746 y 1.753 tienen un valor nominal igual o superior a 3.000 rs. vn. descendiendo a la mitad, como promedio, en las posteriores.

Eran valores muy elevados. Más, incluso, que un siglo después y, sin embargo, habían descendido para atraer a nuevos

(275) Pero desde luego no cobrados. A.H.N., Estado, leg 3.222 caja 1, exp. 39 (14 de junio de 1.791).

(276) Guillermo Jesús Jimenez Sánchez y Francisco Javier Lasarte Alvarez, "La acción en las compañías privilegiadas", Anales de la Universidad Hispalense, vol. XXIII, año 1.963, p. 8. Sobre esto, v. infra, parte II, cap. 3, punto 4.

inversores, sobre los tradicionales que arriesgaban todo su caudal en sus propias empresas. Se consideraba que:

"...sin unir muchos comerciantes y otros que no lo son, es incapaz : que se vea un fondo considerable y expresado que para lograr favora**bles** progresos era preciso recurrir a compañías en las que no puede haber reparo que todo género de personas ponga su caudal en acciones para un comercio, en que por sí no se mezcla el que no le corresponde..." (277).

No hemos encontrado para esta compañía la posibilidad de efectuar la compra de una porción de acción como se daba en el caso de la de La Habana (a. 5 R.C.). Existen otras medidas para facilitar su compra. Una es la que permite el pago de las mismas en dinero o en géneros. Se encuentra en todas las compañías excepto en la de Burgos y en la Marítima. La de Granada (a. 4 R.C.) es la que mejor expresa la intención de la norma:

"Se admitirán por acciones, tejidos y seda evaluados por su costo y costas para que así puedan interesarse todo género de personas y criadores de seda en atención a sus cortos caudales, y que por este medio, aunque no tenga dinero pronto, puedan ser partícipes del beneficio de la compañía".

En la Compañía de Zaragoza, un total de 1.193 acciones pertenecía a 154 accionistas. Como media, pues, poseían 7,75 aunque el 19% tenía sólo una. De estos 154, un 36,36% tenía voto, es decir más de 8 acciones, Entre ellos poseían el 74,43% de los títulos. Por tanto, más del 60% de los accio

(277) Preámbulo de la R.C. de 27 de julio de 1.746, de creación de la Compañía de Zaragoza.

nistas no asistía a las Juntas Generales, en las cuales, sin embargo, podía estar representado casi las tres cuartas partes del capital. En ellas, casi la cuarta parte de los votos pertenecían a "Sus Majestades católicas" (200 acciones) y el resto estaba muy repartido. Sólo un accionista poseía 10 votos (el "Cabildo de la Santa Iglesia de Huesca") y sólo uno, 4 (el "Cabildo de la Santa Iglesia de Teruel"). El resto tenía menos.

Son datos ofrecidos como muestra del efecto de esta llamada a la inversión, que serán completados posteriormente. La Compañía de Zaragoza —adelantamos— contaba entre sus miembros con 30 accionistas privilegiados que totalizaban 396 acciones (33,19%). Mientras la participación eclesiástica está muy por encima de la media del conjunto de las compañías, la nobiliaria está algo por debajo, con 7 nobles y 40 acciones (278).

Estas compañías realizan enfáticamente un llamamiento al capital de los privilegiados, lo que resulta una actitud coherente por parte de un cuerpo privilegiado en una sociedad privilegiada y, asimismo, con todo el discurso político del momento:

"... Y que se puedan interesar en ella toda suerte de personas, naturales de estos reinos, de cualquier clase, empleados y estados, sin exceptuar el Estado eclesiástico, ni caudales de Obras Pías; y sin que por motivo alguno sirva de obstáculo a la Nobleza; antes sí, de nuevo lustre a ella, según lo tengo concedido a las demás Compañías, esta-

(278) "Nota de las acciones interesadas en esta Rl. Compañía desde su establecimiento, con expresión de sujetos, número de acciones y votos". A.G.S., Hacienda, leg. 856, exp. s/n. (1.749).

blecidas en estos Reinos" (279).

Sobre esta declaración, la participación activa del rey significaba una invitación a la nobleza para que imitara el ejemplo de su representante más cualificado. En el cuadro II,4 se observa que la Familia Real poseía acciones en el núcleo de las Compañías industriales, en una porción que, siendo significativa, nunca supera el 10% del nominal y el 20% del efectivo.

Las Compañías de Zaragoza y Extremadura no incluyen en sus Reales Cédulas llamamientos a la nobleza. Incluso en ellas hay una cierta representación del estamento. Ya anotamos su participación en aquélla.

En ésta, 1.200 acciones estaban muy repartidas entre 208 interesados, en su gran mayoría no privilegiados (94,24% de socios, que poseían el 93,75% del capital). Los nobles accionistas eran seis y poseían 35 acciones, que significaban un 3% de capital (280).

Otro aspecto a destacar en este punto, es la posibilidad que tienen los "cuerpos" o "comunidades", tanto civiles como eclesiásticas, de comprar acciones. Tal posibilidad, está claramente explicitada en lo que se refiere a los eclesiásticos, en los mismos artículos, ya citados, en los que se regula su participación; y se deduce, para colectivos de otra

(279) a. 3 R.C. 10 de febrero de 1.748 (C. Toledo). También en aa. 3 de las RR. CC. de 7 de agosto de 1.747 (C. Sevilla) y 6 de abril de 1.747 (C. Granada) y a. 2 de la R.C. de 29 de noviembre de 1.767 (C. Burgos).

(280) Relación de accionistas inserta en Larruga, Memorias..., t. XXXIX, pp.228-236.

naturaleza, a partir de alusiones del tipo de "... las Comunidades como tales, ya sean seglares o eclesiásticas..." (281). No podemos evaluar en una forma exacta las participaciones de iglesias, cabildos, conventos o pueblos en las compañías analizadas, debido a que no contamos las listas completas de accionistas para todas ellas. En la de Zaragoza, y para un total de 1.193 acciones, la participación de entidades colectivas es de 356 acciones, cuyo desglose se refleja en el cuadro II,5, que se debe contemplar considerando que esta compañía es la única que en su Real Cédula de constitución apela explícitamente a los "capitales muertos":

"Podrán entrar en esta compañía como los seglares, los cabildos, eclesiásticos y comunidades de religiosos y de religiosas para emplear sus capitales muertos..." (a. 7 R.C.).

En el otro extremo, la Compañía de Burgos negó explícitamente esta posibilidad (a. 2 R.C.).

No era raro que estas compañías pusieran alguna acción bajo la titularidad de alguna advocación religiosa, destinando sus dividendos al culto. Este era el caso de la de Toledo con la Virgen del Sagrario o de la de Extremadura con las Ánimas Benditas.

La llamada explícita a los pueblos para que se interesaran en las Compañías privilegiadas se produjo por primera vez como ya fue comentado, en el proyecto de 1.683. Habrá de transcurrir un siglo para que ésta se repita, en el caso del

(281) A. 27 de las Ordenanzas de 26 de agosto de 1.749 (C. Sevilla).

Banco de San Carlos (282) y, posteriormente, en la Compañía de Filipinas (283). En las aquí comentadas está ausente esta indicación.

CUADRO II,5

ACCIONISTAS COLECTIVOS EN LA COMPAÑÍA DE ZARAGOZA

	Número de Entidades	Número de Acciones
Capítulos	3	28
Capellanías	1	3
Conventos Religiosos	1	13
Conventos Religiosas	4	28
Cabildos	2	122
Colegios Mayores	1	6
Cofradías	2	6
Exe. del Sr. Arzobispo ..	1	20
Legados	5	110
Testamentarias	2	10
Universidades (de Huesca)	1	10

FUENTE: "Nota de las acciones interesadas en esta Rl. Compañía desde su establecimiento, con expresión de sujetos, número de acciones y votos", A.G.S., Hacienda, leg. 856, exp. s/n 1.749).

Estas compañías, por tanto, querían incorporar el ahorro dormido a las actividades productivas, con los argumentos ci

(282) a. 23 de la R.C. de constitución y, para regular el proceso, R.C. de 27 de agosto de 1.782, en Santos Sánchez, Colección de Pragmáticas, cédulas, provisiones, autos acordados y otras providencias generales expedidas por el Consejo Real en el reinado del Sr. D. Carlos III, Viuda e Hijos de Marín, Madrid, 1.803, vol. II, p. 106.

(283) A solicitud de la Compañía, en 1.786 Floridablanca dictó una orden instando a los pueblos a emplear sus sobrantes de los ramos de pósitos y propios en ella. No bastó para cubrir su capital (M^a L. Díaz-Trechuelo, La Compañía de Filipinas, pp. 48 y 49).

tados sobre el bien del Reino. Pero sobre todo —y así expresó claramente— animar a la población a que se interesara en ellas:

"... considerando lo conveniente que es la formación de semejantes compañías para que los naturales de mis Reinos se inclinen al comercio por las utilidades que conseguirán" (284).

Como venimos sosteniendo, el efecto demostración que debían ejercer estas organizaciones generó consecuencias opuestas debido, precisamente, a que los interesados en ellas, los productores y los consumidores en general, no obtuvieron el resultado previsto. Las consecuencias se pagarían durante mucho tiempo.

Los accionistas de estas compañías tenían su domicilio, en su mayoría, en la zona que les daba nombre y en la Corte. No fueron extraños los conflictos entre los dos grupos, especialmente en las Compañías de Extremadura, Granada y Toledo. El estado actual de nuestros conocimientos no nos permite afirmar con seguridad si las alternativas que, en cada uno de los casos, propusieron los "accionistas de la Corte" hubieran cambiado algo más que los nombres de los directores. No lo parece. Tampoco tuvieron nunca oportunidad de demostrarlo.

En la tardía Compañía de Burgos encontramos, por primera vez, la participación de compañías personalistas como accio-

(284) Preámbulo de la R.C. Zaragoza. Subrayado mío.

nistas. Su importancia es escasa (dos compañía) pero anuncia un fenómeno que no será extraño en las comanditarias por acciones y en las privilegiadas del último cuarto de siglo (285).

La nacionalidad de los accionistas es otro punto interesante a tratar. De nuevo, desde 1.683 habría que esperar un siglo hasta que se permita la entrada a los extranjeros en las Privilegiadas. En la mayor parte de las aquí estudiadas, se llama únicamente a los españoles o extranjeros naturalizados y, cuando no se especificó este extremo, las listas de accionistas nos indican que así fue. Sólo la tardía Compañía Marítima (1.791) —fuera del núcleo de las Reales Compañías de Comercio y Fábricas— abrió sus puertas al capital foráneo y se lamentaba de que no acudiese (286). Sólo la de Seguros Marítimos (1.800) especificó este derecho en su Real Cédula de constitución (a. 6 R.C.). El Banco de San Carlos (aa. 7 y 30 R.C.) ya lo había hecho.

Por último, destacaremos que según las costumbres mercantiles de la época, las mujeres podían poseer acciones pero tenían limitado su derecho a la participación, que debían ejercer por delegación, lo mismo que los eclesiásticos y los menores.

La posibilidad que tenían los accionistas de la Compañía

(285) "Acuerdos de las Juntas Generales de Interesados de 16 y 20 de julio y 26 de agosto de 1.771", Larruga, Memorias..., t. XXX, pp. 56 y ss.

(286) "Acta de la Junta General de Accionistas de 31 de enero de 1.791", A.H.N., Estado, leg. 3.222, caja 1, exp. 71.

de Seguros Marítimos de obtener préstamos de la misma con garantía de los propios títulos, merece ahora siquiera una acotación marginal. Esta operación no estaba contemplada en el resto de las privilegiadas (aunque sí en el Banco de San Carlos, ocho años antes; a. 39 R.C.); aunque no tenemos datos para afirmar que no se practicó, al menos no estaba sancionada por la norma. El fenómeno, pues, no tuvo transcendencia en el Antiguo Régimen. Si lo mencionamos aquí es porque será práctica seguida en las primeras anónimas del XIX y, mediado el siglo, tema de agrio debate parlamentario.

b) La modificación del capital social.— La modificación del capital social está contemplada en las normas de todas las privilegiadas, con distintos grados de concreción. Pero, en su optimismo, sólo regularon su aumento. Se estimaba que la evolución normal era el éxito, que llevaría inevitablemente al crecimiento, tanto de las empresas como del capital necesario para resolverlas.

Sentado este rasgo común, las cédulas y ordenanzas adoptan diversas posturas sobre el tema. Extremadura, Zaragoza y Requena no especifican quién debe tomar la decisión de aumentar el capital social que, en todo caso, se considera beneficiosa. Así se estipula en la de Zaragoza:

"Las acciones serán de a doscientos y cincuenta pesos que parece es correspondiente al fondo de los quinientos mil pesos, que se proponen, y si la experiencia manifestare necesitarle mayor, se discutirá entonces el modo de aumentarles pero si desde luego se proporcionare fondo de un millón de pesos, se admitirá, porque tales negocios,

son más sólidos, y más útiles mientras más crecidos son sus fondos, y porque cuando son tan grandes, por no tener muerta parte de ellos se intentan nuevas negociaciones, convenientes al Rl. Erario y al público" (a. 20 R.C.).

Toledo, Sevilla y Burgos, abandonan esta fórmula impersonal y estipulan que "la compañía" debe tomar tal decisión, lo que equivale a decir su Junta General. En Toledo, sin limitación: "siempre y en cualquier tiempo que la compañía lo tuviese por conveniente" (a. 2 R.C.); en Sevilla, previa Sanción Real y con derecho a tanteo de los accionistas (a. 8 O.); en Burgos, únicamente hasta su duplicación (12.000.000 rs. vn.) y a propuesta de la dirección (a. 5 R.C.).

La Compañía de Granada tiene un mayor grado de concreción y estipula que tal decisión será tomada por los directores, que darán cuenta de su decisión a la Junta General. Para ello se realizará entre los mismos accionistas, empleando hasta el 50% del dividendo (a. 36 R.C.).

La Compañía Marítima (1.789) ofrece una muestra del idealismo generalizado en estos organismos. Ya mencionamos cómo en su R.C. de fundación se preveía la formación de un capital social de 6 millones de rs. vn. que en el tercer año ya se habrían convertido en 50, como mínimo, mediante la conversión del dividendo en nuevas acciones para los primitivos interesados tras el reparto de un 6% anual y la venta del resto de la emisión fuera de la misma (aa. 25 y 26 R.C. 1.789).

Hasta 1.792 se había conseguido vender hasta tres millo-

nes de reales en acciones (287). Por ello la nueva cédula, en 1.792, rebajó los presupuestos y sometió el incremento de capital a la aprobación real. Pero mantuvo una gran dosis de idealismo:

"El fondo de la Compañía podrá ser de treinta millones de reales: y si completada esta cantidad se hallare por necesario aumentarle, se me representará, para que determine lo que tuviere por conveniente" (a. 18).

Como la Marítima, el resto de las compañías vieron prácticamente reducidos sus problemas en este campo a la colocación de sus primitivas acciones, tarea que resulta imposible a partir del cuarto año de vida de las mismas. Las Compañías de Extremadura, Granada y Burgos alcanzaron su máximo capital social realizado en su segundo año de vida y la de Zaragoza en el cuarto. Ya era difícil la situación incluso antes de los decretos liberalizadores de 1.752.

La Compañía de Toledo inició su vida con un capital social de 4.002.000 rs. vn. y lo terminó en 1.783 con 6.192.000 rs. vn. Este aparente aumento no significa que llevara una vida próspera durante más de treinta años. Desde 1752 no se conoció un balance positivo. El capital social aumentó hasta duplicarse en cuatro años, pues llegó a 7.920.000 rs. vn. Desde este momento comenzó una lenta agonía con disminución de capital social y problemas con el pago de los intereses

(287) A.H.N., Estado, leg. 3.222, caja 1, exps. 31 y 32.

de los préstamos y con la colocación del género. No fue, pues, una larga vida, sino una prolongada y costosa subsistencia (288).

Desde 1.752 la Compañía practicó la compra de sus propias acciones. Tal actividad, que en buena lógica jurídica es contradictoria, no se hallaba regulada para el siglo XVIII; si acaso se contemplaba, era para admitirlo. Por ejemplo, en la Compañía de Granada, que tiene derecho de tanteo en cualquier nueva emisión de acciones; en la Compañía de Burgos, que prevé que cada tres años se pueden devolver los títulos (coincidiendo con el reparto de utilidades); o en la Compañía de Pesca Marítima, que permite la retirada de una acción por acuerdo unánime de la Junta General de Accionistas. La Compañía de Sevilla, sin embargo, estipula claramente, que sólo podrá comprar sus propias acciones, en el caso extremo de que una de ellas correspondiera en herencia a dos o más personas. Tal excepción se consideraba necesaria para que fuera respetado el artículo 30 de sus Ordenanzas, que dictaba que la acción no era divisible (289).

Es muy probable que esta práctica venga motivada por la ausencia de un mercado financiero en el siglo XVIII. Ello obligaba a la compañía a realizar una compra inmediata de cualquier título que saliera a la venta para mantener su crédito

(288) Sobre esta interesante compañía que demanda un estudio más profundo que se deberá hacer en el futuro, Larruga, Memorias..., tomo VII.

(289) a. 37 de la R.C. de 6 de abril de 1.747 (C. Granada); a. 7 de la R.C. de 29 de noviembre de 1.767 (C. Burgos); a. 10 de la R.C. de 16 de febrero de 1.775 (C. Pesca Marítima); a. 35 de la Ordenanza de 26 de agosto de 1.749 (C. Sevilla).

dito (290). De este modo, su primitiva intención sería la de volver a enajenarlos tan pronto fuera posible. Sin embargo, como en el ejemplo de Toledo, las compañías utilizaron su propio capital para realizar estas compras, resultando de ellos una reducción del mismo. Esta compañía adquirió 511 acciones; 77 por todo su nominal, el resto por la mitad (291).

Por el contrario, la Compañía de Zaragoza defendió una política contraria, mucho más acorde con las nuevas formas de sociedad. En 1.754, ante el embargo de los bienes de un accionista, sus acreedores solicitaron a la Compañía que comprara 10 acciones que aquél poseía. Los directores se negaron:

"... y nunca puede serlo a la Real Compañía respecto a que el caudal de acciones debe siempre permanecer sin separación del cuerpo que todos componen [...] no dudamos que [...] se procederá en Justicia a la venta de dichas diez acciones, y que no faltarán compradores" (292).

La actitud de la Compañía fue correcta, dado que no tenía utilidades para correr siquiera con este mínimo gasto que, de hacerse, supondría una merma en su capital social. Por otra parte, éste ya estaba muy comprometido en un momento de crisis de la Compañía que, como veremos, adoptó una política censualista a gran escala como solución a la misma. De ahí que la última frase citada deba ser calificada, al menos, de

(290) sobre este aspecto, Jiménez Sánchez y Lasarte Alvarez, "La acción...", pp. 15 y ss.

(291) E. Larruga, Memorias..., t. VII, pp. 133 y ss.

(292) Carta de los directores de la Compañía de Zaragoza a Carvajal, de 12 de febrero de 1.754, A.G.S., Hacienda, leg. 856, exp. s/n. Subrayado mío.

presuntuosa y enmarcada dentro de la lógica de forzado optimismo que mantenían estas compañías.

c) Capitales a censo. Los préstamos.— La mayoría de las compañías tienen una activa política censualista creando así, en su seno, la figura del moderno obligacionista. Sólo tres (Extremadura, Toledo y Marítima) no contemplan esta cuestión en sus cédulas fundacionales. De ellas, sólo una —Extremadura— no emprende una acción de este tipo.

En origen, las compañías idean tomar capital a censo para ayudar a obtener un interés a los ahorros de los colectivos más desprotegidos. Así lo expresaba la cédula fundacional de la Compañía de Zaragoza:

"Podrán entrar en esta compañía como los seglares, los cabildos, eclesiásticos y comunidades de Religiosos y Religiosas para emplear sus capitales muertos, y si no quisieren por acciones, sino es por un tres por ciento seguro, se le dará la compañía...".

"Para practicar lo mismo con los caudales de Viudas y pupilos, y por la preferencia que estos deben tener, mando se puedan admitir, en cualquier tiempo que los lleven aunque esté completo el número de acciones y sacarlos cuando quieran pagándoles un tres por ciento" (293).

Pronto, sin embargo, en ésta y las demás compañías —con las excepciones mencionadas— la política censualista sirve a completar un capital no suscrito enteramente, para arriesgarse en empresas superiores a sus disponibilidades o para

encubrir pérdidas con la esperanza de una pronta recuperación ante la imposibilidad —por falta de crédito— de emitir nuevas acciones.

El censualista acudía a la Compañía para colocar su dinero con menos riesgo, pues recibiría un módico interés fijo anual, estimado en un 3% (excepto en la Compañía Marítima, que ofrece un 4%). Podía en teoría recuperar su capital con mayor facilidad que la que proporcionaba a los accionistas el escaso mercado de capitales, en un plazo que —legalmente— oscilaba entre tres y seis meses. A cambio, renunciaba a los altos dividendos de unas asociaciones que se prometían prósperas.

Ninguna de las compañías estudiadas respondió al pago de sus colectivos de censualistas más allá de su primer trienio de vida y éstos se vieron envueltos en la decadencia general de los cuerpos privilegiados.

La Compañía de Zaragoza, por ejemplo, tras la piadosa declaración inicial, emprendió en 1.749 una política censualista desesperada para hacer frente a su deficitaria situación, llegando a pedir autorización para pagar un 5 ó 6% de interés a los préstamos a corto plazo (294). No sólo no pudo hacer frente a estos intereses sino que en 1.752 perdió un contrato frente a la Compañía de Caracas porque ésta ofrecía un 3,5%; un 0,5% más que la aragonesa. La reacción de esta

(294) Carta del director de la Compañía a Carvajal, 16 de septiembre de 1.749, A.G.S., Hacienda, leg. 856. Una primera aproximación a esta privilegiada en Angel Canellas López, "La Real Compañía de Comercio y fábricas de Zaragoza: Historia de su primer trienio" Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, C.S.I.C., Zaragoza, 1.954, pp. 79-102.

compañía está dentro de la lógica del momento: solicitar que se prohíba a la de Caracas ofrecer más de un 3% y la promulgación de una norma que unifique el interés de los censos obtenidos por cualquier privilegiada (295).

La Compañía de Zaragoza es un ejemplo claro de cómo se intenta resolver una crisis estructural mediante soluciones a corto plazo que no hacen sino profundizarla. No se emprendieron efectivas reformas de organización de la producción; y cuando se incidió en el análisis de los canales de comercialización de los productos, la única solución adoptada fue la de intentar vender los géneros en el mercado americano. A ésto se opusieron de forma efectiva la Compañía de Sevilla y el Consulado de Cádiz (296). Cabe pensar, sin embargo, que la zaragozana tenía un mercado interior sin promocionar, con privilegios para hacerlo y que no explotó, a diferencia de los catalanes que, por aquél entonces, comenzaban a instalar sus tiendas para surtir a esta región y a la castellana.

La consecuencia fue que censualistas y accionistas perdieron su capital con la quiebra de la compañía zaragozana. Desde 1.749 no se pagó ningún interés a unos individuos que habían aportado a la compañía dos millones de reales de vellón, que representaba un 80% frente al capital social. Desde la Junta General de Accionistas de 1.752, las moratorias se sucedieron. En 1.774 el colectivo de censualistas aceptó

(295) A.G.S., Hacienda, leg. 856, año 1.752.

(296) Ibidem.

una rebaja de su interés en un 50% (297). En 1.787 seguían sin cobrar (298).

El mismo esquema se puede seguir en la Compañía de Granada. El pronto fracaso se intentó subsanar en 1.752 con la promesa de un 6% a los censualistas, ya que se calificó el problema como de crisis de confianza provocada por una fracción de accionistas. En 1.753 se habla, por parte de la dirección, de cinco millones de reales de vellón "a premio cortísimo" (75% respecto al capital social). Se intenta explotar el mercado americano y la expedición terminó en desfalco. El 1.755 comenzó la etapa de las moratorias. En 1.767, los censualistas todavía no habían empezado a cobrar (299).

Entre las compañías que no hablan de la posibilidad de contraer estas obligaciones, se detecta que la Marítima ejerció esta actividad desde 1.791 (300), por lo que quedó sancionada en su nueva R.C. de 2 de junio de 1.792 (a. 37).

La Compañía de Toledo, por su parte, llegó a obtener en 1.752 censos por valor de la mitad de su capital. A partir de este año —año de la crisis— la compañía arrastró a los censualistas en una caída que no culminó hasta 1.783 (301).

(297) Resolución de la Junta General de Accionistas de 1.752 (*ibidem*); R.R. de 17 de marzo de 1.763, por la que se prorroga "por otros seis años" la moratoria de los pagos pendientes de esta compañía (A.G.S., Hacienda, lib. 213, fol. 176v.); R.R. de 31 de enero de 1.770, por la que se establece nueva moratoria de seis años "para cumplir con esa especie de acreedores" (A.G.S., Hacienda, leg. 856; Real Resolución de 23 de febrero de 1.774, A.G.S., Hacienda, lib. 213, fol. 287v).

(298) Juan Antonio de los Heros, Varias Respuestas Fiscales, tomo VIII, fol. 42v.

(299) Para la Compañía de Granada, A.G.S., Hacienda, leg. 857.

(300) A.H.N., Estado, leg. 3.222. caja 1, exp. 31, balance de 1.791.

(301) E. Larruga, Memorias..., tomo VII. Mariano García Ruipérez, "La Real Compañía," ha encontrado un contrato de censo por la que ésta se reservaba la capacidad de decidir la fecha de su devolución.

Cabe destacar la conducta resignada de unos censualistas que vieron perder su capital con resignación y sin protestas efectivas. Su conducta puede explicarse por su carácter poco mercantil, pero creo tuvo una terrible consecuencia. Es muy probable que estos centenares de obligacionistas decepcionados contribuyeran junto a otros tantos accionistas, todos ellos dispersos por la península, a la creación del ambiente de desconfianza hacia la anónima que primará en la primera mitad de nuestro siglo XIX. Desconfianza acrecentada por unos largos años de crisis que hacen al dinero temeroso. En 1.840 todos los problemas parecían superados. Pero se generó una euforia especulativa de efectos desastrosos. La reacción del poder moderado entre 1.845 y 1.848 fue, por ello, desmedida, aunque no tanto como se ha solido afirmar. Pero eso será materia de otro capítulo.

d) La aplicación del capital: sus límites.— Como premisa general, queda establecido que las Compañías no pueden emplear su patrimonio más que en el objeto que les señalan sus escrituras sociales. En el caso de las Privilegiadas, sus actividades aparecen muy poco definidas en su corpus legislativo, como tuvimos ocasión de señalar (v. supra, pp. 179-194). Haremos ahora unas consideraciones adicionales al tema, bajo la perspectiva de los límites de la Compañía —su dirección— para utilizar el patrimonio social.

La atribución del fondo —independiente del patrimonio de cada uno de los socios— a los fines sociales, se halla

expresada de forma similar en las compañías analizadas, desde el bienio 1.746-48:

"Que el fondo de la Compañía sea de doscientos mil pesos fuertes, que al presente se considera suficiente a los fines que se solicitan" (302).

La prohibición de que los directores y otros empleados lo utilicen para operaciones particulares o que no estén contempladas en las cédulas de las compañías, está también estipulada:

"Que los directores ni otro algún dependiente no puedan disponer de los caudales, ni efectos de la Real Compañía privadamente, ni en pertrecho, ni en asunto que no sea del servicio e intereses de ella..." (303).

Tras estas definiciones generales, el problema se plantea a la hora de discernir cuáles son los objetos sociales y cuáles quedan fuera en unas compañías que abarcan el conjunto de las actividades "de comercio y fábricas". Ya fue citada la que es máximo ejemplo de amplitud de objetivos; la Compañía de Sevilla (p. 181); el resto de sus coetáneas, a pesar de no contar en sus textos legales con una formulación tan clara, se comportan de acuerdo con ella; de hecho, si bien optan por realizar una descripción pormenorizada de las actividades que pueden emprender, siempre las coronan con una

(302) a. 2 R.C. de constitución de la Compañía de Toledo. También, aa. 2 de las RR.CC. de las Compañías de Granada o Sevilla.

(303) a. 35 de las Ordenanzas de la Compañía de Extremadura (Larruga, Memorias..., t. XXX, pp. 128-161); a. 3 de las O. de la C. de Zaragoza (A.G.S., Hacienda, leg. 856); a. 46 de la O. de la C. de Toledo (Larruga, Memorias..., t. VII, pp. 75-110).

locución permisiva ("y además que convenga", "y otros", "etc") (304). Este planteamiento se perpetúa en la Compañía de Burgos (1.767), que para evitar los problemas de las anteriores, tenía estrictamente prohibida la instalación de fábricas, para dedicarse exclusivamente a su promoción y comercio de sus productos:

"Siendo uno de los fines de ella restablecer en la ciudad de Burgos y su Provincia las antiguas y extenuadas fábricas, telares, tintes de paños, bayetas, estameñas, sombreros, medias, mantas y demás que convenga para el surtimiento general de las Castillas..." (a. 3 R.C.).

De ahí que, con la excepción señalada, el capítulo de las prohibiciones expresadas no exista para el ramo fabril y en el campo mercantil se reduce a recordar que no se puede comerciar en géneros prohibidos ni con enemigos de la Corona:

"No sólo podrán hacer el comercio de sedas, sino también el de lanas, corambres y frutos granados, y todo aquello cuya extracción del Reino no esté prohibida, y podrán extraerla a otros dominios que no sean de enemigos de mi Corona" (305).

El caso de la Compañía de Extremadura debe ser recordado dada su peculiaridad. Ya observamos cómo a pesar de tener concedido, la implantación de fábricas "de toda especie" (a.4) y la realización de todo tipo de comercio con los países que

(304) Compañías de Extremadura (aa. 2 y 4 R.C.), Zaragoza (a. 8 R.C.), Granada (aa. 5 a 8 y 12 R.C.), Toledo (aa. 4, 6, 7 y 20 R.C.) y Requena (aa. 3, 11, 19 y 20 R.C.).

(305) a. 2 R.C. de la C. de Extremadura. También a. 8 R.C. Zaragoza, a. 235 O. C. Sevilla; a. 18 R.C. Burgos.

no fueran "enemigos de mi Corona" (a. 2), en 1.750, la Junta de Comercio denegó su apoyo a la instalación de fábricas de tejidos por parte de esta compañía (306).

Salvo estas correcciones de facto, este planteamiento permite una variedad de negociación que no se aprovecha totalmente debido al pronto fracaso de las compañías, cuya actividad fundamental era la producción textil y su comercialización. La de Burgos fue una excepción, que añadió regularmente a su práctica mercantil productos como el bacalao, el cacao y el azafrán. Por ello no se produjeron críticas a la dirección por haberse inmiscuido en negociaciones para las que las Compañías no estuviesen autorizadas.

Lo relatado para las Reales Compañías de Comercio y Fábricas creadas entre 1.746 y 1.767 puede aplicarse a esas dos tardías asociaciones que hemos incorporado a nuestro análisis, la de Pesca Marítima y la Marítima. El objeto de aquélla, según su Real Cédula, era "el aumento de la pesca". Pero a esta actividad se añade la posibilidad de establecer una industria de salazón de pescado para su posterior comercialización, así como la instalación de fábricas de elaboración de lino y cáñamo para dar ocupación a los pescadores (en sus momentos de inactividad) y a sus familiares (aa. 16 a 19, 28, 29 R.C.).

La Compañía Marítima era una empresa que, en cierto modo, vino a reemplazar a aquélla aunque sus planteamientos eran

(306) v. supra, p. 209.

más ambiciosos. Su objeto principal era realizar la pesca en cualquier mar, de cualquier género de peces, su salazón y la utilización de la grasa de las ballenas para la obtención de aceite y para la fabricación de velas. Estas actividades, consideradas principales, estaban en una formulación de objetivos más amplia: "el fomento de la industria y navegación nacional" y en la posibilidad de adoptar cualquier ramo de comercio, previa representación de Su Majestad (aa. 2 y 3, R. C., 1.789). Destacaremos que esta compañía abordó la pesca y las industrias descritas, desde el momento de su creación. Además, se planteó una empresa colonizadora en la Costa patagónica. Su propósito era el establecimiento de unas bases territoriales que permitieran realizar con mayor seguridad y comodidad la pesca de la ballena en la zona así como abrir una ruta comercial con la metrópoli. Tal actividad no ofreció más que pérdidas a una compañía que no podía cubrir los gastos crecidos de organización y defensa con una tercera parte de su capital inicial cubierto (307).

2.4.4.- Dirección, participación y control.

Las dimensiones de las compañías planteaban la necesidad de formalizar la existencia de un pequeño núcleo de dirección ejecutiva y de arbitrar un sistema de control de la

(307) A.H.N., leg. 3.222, caja 1, esp. exp. 86.

misma. Este punto ya fue tratado anteriormente para las Compañías de comercio colonial (v. supra, pp. 158-167) por lo que pasamos directamente a hablar de la regulación de este aspecto en las industriales privilegiadas.

a) La Dirección.— Los directores son elegidos por mayoría simple en la Junta General de Accionistas cada cierto tiempo, regulado por las normas internas, votadas también en asambleas de esta índole.

Hay tres excepciones a esta norma general: la Compañía de Sevilla, que exige mayoría de dos tercios en una primera votación y simple en segunda (a. 45. O.); la de Granada, cuya primera dirección estaba formada por los fundadores (O. R.C.) y que no debía rendir cuentas hasta la primera Junta General, a celebrar cinco años después. La Compañía Marítima, cuyos directores eran perpetuos y de nombramiento regio. La dirección de esta última compañía se planteó en su cédula fundacional (1.789) según un complejo sistema, acorde con sus pretensiones y el volumen de capital previsto. Según la misma, habría una dirección general en Madrid y una particular en 20 puertos, distribuidos por toda la geografía española (aa. 30 y 46). Aquélla estaría constituida por un Director General Perpetuo, elegido por el Rey de una terna presentada por la Junta General de Accionistas (a. 33) y dos directores consiliarios, un director del giro y un contador, elegidos por la propia Junta (a. 34) que también nombraría las direcciones particulares (a. 35), a la cabeza de cada una de

las cuales habría un director perpetuo.

Fue imposible montar una organización tan ambiciosa. Sólo estos cargos suponían una suscripción de acciones de dos millones y medio, con lo que todos los interesados en la Compañía a lo largo de su existencia hubieran debido desempeñar un cargo. La primera Junta General, celebrada en 1.791, solicitó su modificación "según un modo de gobierno más sencillo y análogo en su constitución" (308).

Según esta petición, la renovación de la Real Cédula de la Compañía, en 1.792, simplificó el sistema. Habría tres directores perpetuos (a. 21) y cuatro consiliarios renovables cada dos años (a. 22). Todos ellos, elegidos por la Junta General de Accionistas. Esta dirección nombraría los "corresponsales o comisionados" que necesitara en los diferentes puertos (a. 29).

La Compañía Marítima fue un nuevo ejemplo de proyectismo. No respecto a su actividad, interesante y potencialmente lucrativa, sino respecto a su organización. Se planteó un gran edificio, de costoso mantenimiento, mucho antes de que hubiera esperanzas fundadas de ocupar sus dependencias. No fue, desgraciadamente, el único ejemplo de la época que estudiamos, tanto en éste como en otros aspectos de la organización económica, social o política.

El carácter peculiar de las Compañías de Seguros Marítimos Reina María Luisa y de Viñeros de Málaga requiere una

(308) A.H.N., Estado, leg. 3.222.

breve consideración, que justifique que, en este aspecto, no sean incluidas en el conjunto. En éstas, los Directores eran perpetuos (a. 3 R.C.) y elegidos por la Hermandad de Viñeros de Málaga entre las "personas beneméritas y capaces del desempeño [del cargo]" (a. 1 R.C.). El mismo organismo tenía a su cargo la designación del resto de los empleados de la Compañía.

La Compañía de Seguros Marítimos Reina María Luisa (1.800) es, en realidad, una comanditaria convertida en anónima, lo que se percibe en el artículo 2 de su Real Cédula de constitución:

"Serán directores del establecimiento Iznardy y Compañía, los que no podrán ser mudados sino por muerte o crimen que se les pruebe"

Como en las anónimas, su responsabilidad era limitada; como era costumbre entre las personalistas, su remuneración consistía en un porcentaje de las ganancias (¡25%!) (a. 17 R.C.).

Los directores podían ser dos (Burgos, Pesca Marítima), tres (Zaragoza, Marítima) o cinco (Extremadura, Granada, Toledo). En todas las compañías debían tener, además, la calidad de accionista; sólo en el caso de la Compañía de Zaragoza, la Junta General podía eximir de este requisito si desea contratar a individuos de fuera de la misma "por su notoria aptitud en el comercio y manejo de la Compañía" (a. 10 O.). Por su parte, la de Burgos y la de Pesca Marítima no tratan este punto.

El cuadro adjunto muestra el número necesario de acciones para poder acceder a la dirección y lo pone en relación

con el derecho de participación en la Junta General de Accionistas, con el capital social y son el suscrito.

La conducta descrita responde a un estadio primitivo en el desarrollo de la sociedad por acciones, en el cual se piensa que el capital será mejor administrado por quien tenga mayor participación en él. La Compañía de Sevilla expresó claramente el espíritu general al afirmar que en caso de empate en cualquier elección se preferiría al que poseyera más acciones (a. 61 0.) Ya Larruga, en 1.787, destacó como esta actitud fue causa de muchos de los fracasos de las compañías:

"En la elección de directores solo se ha mirado hasta aquí, las más de las veces, por los vocales interesados en la Compañía, a que sean precisamente accionistas, arraigados y conocidos en el pueblo donde se eligen, aunque en todo su vida no hayan salido de detrás de un mostrador y mirado únicamente a la riqueza, como si a ésta acompañara la ciencia del gobierno mercantil " (309).

Unicamente las Compañías de Zaragoza (a.30 RC) de P. Marítima (a.2), Marítima (a. 40 R.C. 1.789 y a. 21 R.C. 1.792) incluyeron entre sus recomendaciones que los directores fueran personas "inteligentes y prácticas en el comercio".

Durante el tiempo que duraba su mandato, los directores debían tener en depósito una fianza consistente en las acciones que les dan derecho al puesto. Asimismo, queda prohibido que ejerzan comercio o industria similares a las de la asociación destacando, como caso extremo, el de la Compañía de

(309) Larruga, Memorias..., tomo VII, p. 203.

Sevilla, que les prohíbe la compra de más acciones que las que poseían en el momento de su elección (a. 37 O.).

CUADRO II, 6

CAPITAL EN ACCIONES NECESARIO PARA PODER ACCEDER A LA DIRECCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS INDUSTRIALES PRIVILEGIADAS

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA	AÑO DE LA REAL CEDULA	NUMERO DE ACCIONES NECESARIAS	VOTOS QUE SUPONEN	% DEL CAPITAL SOCIAL	% DEL CAPITAL SUSCRITO EN LA 1ª JUNTA GENERAL
Extremadura	1.746	5	1,0	-	0,41
Zaragoza ..	1.746	16 +	2,0	0,80	5,18
Granada ...	1.747	1 ++	0,2	0,04	0,13
Sevilla ...	1.747	30	5,0	0,75	-
Toledo	1.748	10	2,0	0,75	0,75
Marítima ..	1.789	100	2,0	1,66	4,00
Marítima ..	1.792	100	2,0	0,32	3,32

FUENTES: Reales Cédulas de concesión, Ordenanzas y referencias de las primeras Juntas de Accionistas de las Compañías analizadas, documentos todos ellos citados en el texto.

NOTAS : (+) La Junta General de Accionistas puede eximir de esta condición.

(++) La primera dirección (5 años) está compuesta por los fundadores de la Compañía. De ahí que no se haga hincapié en otros requisitos.

Las atribuciones de la dirección tienen el mismo contenido en todas las compañías estudiadas variando únicamente en detalles o en el grado de precisión de las definiciones.

Como primera idea, resalta que los directores ostentan la representación de la Compañía entre las Juntas Generales. Así se explicita en las tempranas ordenanzas de la Compañía de Sevilla:

"... que en la Dirección residan con propiedad las facultades y autoridad de la Compañía" (O. 70).

y alcanza una formulación más completa en la Real Cédula de fundación del Banco de San Carlos (a. 13), siendo recogida por la Compañía Marítima:

"... de modo que sus firmas, y las órdenes y providencias que dieran en calidad de tales directores tendrán la misma fuerza y valor que si fuesen de todos y cada uno de los socios en Junta General" (a. 35 R. C. 1.792).

Aparte la representación, la Dirección tiene a su cargo la gestión social. Así lo expresa la Compañía de Extremadura y de forma similar las demás:

"Elegidos que sean por la Junta General de la Real compañía el Presidente y Directores, ordeno y mando den principio por sí al gobierno de todo el giro y comercio en ella, disponiendo y determinando cuanto tengan por más conveniente" (a. 21 O.).

Para realizar dicha gestión tendrán la facultad de nombrar los empleados que necesiten, dentro de una plantilla general que disponen las respectivas ordenanzas.

Los directores deben presentar periódicamente al resto de los accionistas unidos en Junta General un balance o estado de cuentas de sus gestión. No serán responsables dentro de los límites —amplios— señalados (310).

(310) a. 9 de las OO, de 10 de octubre de 1.746 (C. Extremadura); aa. 12 y 14 de la R.C. de 27 de junio de 1.746 (C. Zaragoza); a. 35 de la R.C. de 6 de abril de 1.747 (C. Granada); a. 21 de las OO. de 12 de mayo de 1.750 (C. Toledo);

b) La Junta de Dirección.— Con la única excepción de la Compañía de Pesca Marítima, los directores contaban con el auxilio —o estaban sometidos al control— de una serie de diputados o consiliarios elegidos por la Junta General entre sus miembros. Dichos diputados, con los propios directores y los empleos principales (Secretario, Contador y Tesorero) constituían la Junta de Dirección que en la Compañía de Sevilla se denominaba Junta Mayor y en la Marítima, Junta de Consiliarios.

La frecuencia de sus reuniones no estaba determinada, salvo en el caso de la Compañía de Extremadura, en la que se preveía un encuentro semanal. Lo normal era una formulación general que señalaba la necesidad de su convocatoria cuando hubiera "asuntos particulares o dudas de importancia" (a. 39 R.C. Granada). Sus componentes debían ser, en todo caso, accionistas cualificados de las Compañías; es decir, con voto en la Junta General.

El número de diputados variaba de una compañía a otra: dos en Burgos, cuatro en la Marítima, cinco en las de Extremadura y Toledo (uno destacado en la Corte), seis en la de Sevilla.

Este primitivo Consejo de Administración tenía sus funciones poco definidas. A veces parece que se trata de ofrecer a los directores un cuadro de expertos más amplio que les auxilien en su misión; a veces aparecen como un órgano de control que debe fiscalizar la labor del núcleo ejecutivo en representación de una Junta General que no puede ni

debe reunirse frecuentemente, "para evitar la confusión y disputas que suelen causar las Juntas Generales de Interesados" (a. 24 R.C. Burgos). Lo más probable es que se creara para estas dos funciones. Así lo expresaba la Compañía de Sevi-
lla:

"Que en esta Junta, precedido juramento de fidelidad y secreto, den cuenta los directores del estado individual de la Compañía, sus fondos y enseres, utilidades, y adelantamiento de las fábricas, ex tensión de sus comercios y expediciones, negocios de las factorías, embarques, cambios, préstamos y demás especialidades que a la Junta se hubieren reservado, por utilidad de la misma compañía" (a. 120 O.).

"... y se guarde, siga y observe, todo lo que en ella se resolviera, y acordare, como en quien residen vivamente las autoridades y facultades todas de la Junta General" (a. 122 O.).

El análisis de la evolución de las compañías revela que las Juntas de Dirección fracasaron en estos dos aspectos. El asesoramiento sobre las cuestiones más importantes no impidió ninguna quiebra. El control fue muy escaso y siempre tuvo que partir de las Juntas Generales de Accionistas; los revisores de cuentas elegidos en las mismas, frecuentemente encontraron sorpresas.

Para evitar los problemas de las Compañías anteriores, la de Burgos (1.767) contaba con una Junta de Dirección, que se debía reunir con una frecuencia mensual y que se concebía como la representación de diferentes intereses sociales. Dicha Junta estaba compuesta por los Directores, los dos caballeros hacendados de la Junta Particular de Gobierno del Consulado, dos "sujetos comerciantes e interesados en la Compañía

ña", elegidos anualmente en la Junta General y el Intendente, que la presidía (a. 24 R.C.). Ni siquiera así se pudo evitar su quiebra, en un proceso en el que este organismo no resultó inocente (311).

c) La Junta General de Interesados.— La Junta General de Interesados es el medio por el que se regula la participación de los accionistas en la gestión de la Compañía. Su frecuencia estaba regulada, en las privilegiadas, en sus Reales Cédulas de concesión y Ordenanzas y suele ser de un año.

Como excepciones a esta norma general aparecen tres compañías. La de Granada, que las celebra cada dos años (a. 35 R.C.); la de Viñeros de Málaga, cada semestre (una para la votación del balance y otra para el acopio de frutos para las expediciones que se hagan) (a. 36 R.C.); la de Sevilla, cuya convocatoria queda al juicio de su dirección y del Protector, dentro de un plazo máximo de cinco años (aa. 41-43 O.). La razón, como en las antiguas coloniales europeas, era conectar esta reunión y el balance con el fin de cada una de las expediciones marítimas. Así, excepto en el caso citado de la Compañía de Sevilla y en la Marítima, en la que la Junta será convocada por el secretario de Estado y del Despacho de Marina cada agosto (a. 49 de la R.C. de 1.792), los directores estaban obligados a convocar esta reunión en los plazos fijados por las normas de sus respectivas compañías.

Para la celebración de tales reuniones, sólo se requería

(311) v. A.G.S., Hacienda, leg 855 y Larruga, Memorias..., t. XXXI, Memoria CXXX.

un quorum en las Compañías de Extremadura (a. 8 R.C.) y Toledo (a. 320) y sólo en la primera convocatoria. En ambas era de veinte asistentes, lo que significaba un mínimo de un 15% del capital inicial para la primera y un 7,5 para la segunda.

Estas reuniones se realizaron con regularidad y, sobre este punto, no hemos encontrado formulada ninguna queja por parte de los accionistas.

Para formar parte, con voto, de la Junta General de Interesados, se requería la posesión de cierto número de acciones. Ya en las compañías privilegiadas se observan tres métodos utilizados para la regulación de este derecho a la participación, que pueden generalizarse a las anónimas del siguiente siglo:

1.- Cada accionista sólo puede disponer de un voto, - Su expresión sería, para x = mínimo de acciones:

$x = 1$ voto, $2x = 1$ voto, $3x = 3$ votos... $nx = 1$ voto

Esta fórmula suele ser empleada por las privilegiadas más tardías (Banco de San Carlos, 1.782; Compañías de Filipinas, 1.785; Seguros Marítimos, 1.800), con un precedente: la de Barcelona (1.755). Entre las compañías aquí analizadas, sólo la Marítima a partir de su Real Cédula de 1792 sigue este procedimiento. En este caso "se trataba de incrementar la "cuota de participación" para, a partir de ese elevado nivel, considerar en igual medida la opinión de los accionistas (v. cuadro II, 7)

2.- Participación proporcional al capital, sin límite

de votos. A partir de un número de acciones que proporcionan el derecho a un voto, su multiplicación supone un incremento equivalente de votos. Su expresión sería:

$x = 1$ voto, $2x = 2$ votos, $3x = 3$ votos... $nx = n$ votos.

Todas las compañías analizadas creadas hasta 1.753 excepto una, siguieron esta fórmula (v. cuadro II,7). Entre ellas había una diversidad de situaciones. El "valor" mínimo absoluto de un voto era de 12.000 rs. (Pesca Marítima, 1.775), de 15.000 rs. en cuatro de las compañías y sólo la de Zaragoza duplicaba este valor. Lo mismo cabe decir de su valor relativo, de su significación dentro del conjunto del capital social, que oscila entre un 0.16 —Requena— y 0.41 (Extremadura). No son significativos ninguno de estos datos para separar a estas compañías del siguiente grupo, pues son similares en ambos casos.

3.- Participación proporcional al capital, con límite de votos. Como en los modelos anteriores, hay un mínimo de acciones que proporcionan el derecho a un voto. Este mínimo, al irse multiplicando, aumenta proporcionalmente al número de votos, hasta un límite, por encima del cual, nuevas porciones de acciones no proporcionan nuevos votos. Su expresión sería (para x = número de acciones; arbitrariamente tomamos cinco como número máximo de votos):

$x = 1$ voto, $2x = 2$ votos, ... $5x = 5$ votos... $nx = 5$ votos.

Este límite sólo se determina en dos ocasiones. El primer lugar, en la Compañía de Burgos, en la que, dado que el nominal de las acciones no está fijado, se regula la partici

pación de un modo peculiar: una participación comprendida entre 10.000 y 19.999 rs. vn. da derecho a un voto; entre 20.000 y 49.999 rs. vn, a dos votos; y de 50.000 en adelante, a tres votos (a. 9 R.C.). En segundo lugar, la Compañía Marítima en su Real Cédula de 1.789, que otorga derecho a un voto a toda aportación comprendida entre 50 y 100 acciones; dos a las que se encuentran entre 101 y 150 acciones y tres para las que supongan más de esta última cantidad (a. 66 R.C.). De hecho existe también esta limitación en la Compañía de Sevilla, en la que se prohíbe que alguien posea más de 1/10 de las acciones (a. 90 D.). Esta curiosa limitación tenía la pretensión —no explícita—de evitar la posible monopolización de la compañía por un individuo.

Hay mecanismos que interfieren en esta participación, tan linealmente descrita. Uno de ellos es la posibilidad de delegar el voto. Tal posibilidad se reconoce, en un principio para aquellas personas que, siendo accionistas tienen prohibida su asistencia a las Juntas (eclesiásticos, mujeres y menores de edad), y así se manifiesta en las disposiciones fundamentales de todas las compañías, excepto las de Granada y Viñeros de Málaga. Esta prohibición se extiende en la de Sevilla a los extranjeros naturalizados (a. 280).

Con la excepción de las dos compañías citadas, este privilegio se extiende a las personas que, por causa justificada, no pueden acudir a las Asambleas. Unicamente, las tardías compañías de Burgos, Pesca Marítima y Marítima se abstienen de calificar a las ausencias que pueden motivar la de

legación de voto como "legítimas" o "justificadas", cosa en la que había sido precursora, como vimos, la de Barcelona. Este hecho es una muestra más de las peculiares relaciones que existen entre accionistas y compañía en estos primeros tanteos de sociedades de capital, que permite que se den situaciones como la de la Compañía de Extremadura, que en una ocasión pudo aplicar una multa de cincuenta ducados a todo el que no asistiera a la Junta General (312).

Sea para un colectivo más o menos amplio, la delegación del voto se podía hacer en cualquier individuo, en un accionista de la propia compañía o en uno que, por sí, tenga derecho a voto. En el primer caso está la Compañía de Burgos (a. 10 R.C.), la de Pesca Marítima (a. 11 R.C.) y la Marítima (a. 68 R.C.); en el segundo, la de Requena (a. 9 R.C.); en el tercero, las de Extremadura (a. 4 O.), Zaragoza (a. 7 R.C.) y Sevilla (a. 62 O.). La Compañía de Toledo seguía una práctica peculiar, siguiendo la inaugurada por la de Caracas (1.740). En ella, todo el que poseyera más de 24 acciones podía delegar en un accionista de la compañía; si tenían menos, había de hacerlo en uno con voto (a. 17 O.). En estas compañías no se contempla la posibilidad (que reguló el Banco) de la unión de varios accionistas para componer un voto. Cuando se hizo (Extremadura (a. 1 O.) y Sevilla (a. 31 O.)) fue para denegarla.

Las actas y referencias de las Juntas Generales de Interesados nos indican que la delegación de voto se practicó

(312) "Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Extremadura", celebrada en los días 23, 24 y 26 de marzo de 1.752, A.G.S., Hacienda, leg. 853, exp. s/n."

con cierta regularidad e incluso exceso. Así, Larruga comenta cómo desde la fundación de la Compañía de Toledo era práctica común hacerlo en los directores que, de este modo, contaban con mayoría en las Juntas. En 1.758, alarmados por la ausencia de dividendos, los accionistas de Madrid, que nunca asistían a las Asambleas anuales, comenzaron a interesarse en ella (313).

CUADRO II,7

MEDIDA DEL DERECHO DE PARTICIPACION EN LAS JUNTAS GENERALES
DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS INDUSTRIALES PRIVILEGIADAS

NOMBRE DE LA COMPAÑIA	AÑO	ACCIONES POR UN VOTO	VALOR EN RS. VN. DE 1 VOTO	% DEL VALOR SOBRE EL CAPITAL SOCIAL	DE UN VOTO SUSCRITO (++)	LIMITE DE VOTOS
Extremadura ..	1.746	5	15.000	-	0,41	Ninguno
Zaragoza	1.746	8	30.000	0,40	1,45	Ninguno
Granada	1.747	5	15.000	0,20	0,52	Ninguno
Sevilla	1.747	6	22.500	0,15	-	66 (= 1.500.000 rs.)
Toledo	1.748	5	15.000	0,37	0,37	Ninguno
Requena	1.753	5	15.000	0,16	-	Ninguno
Burgos	1.767	-	10.000	0,16	0,90	3 (= 50.000 rs.)
Pesca Marítima	1.775	8	12.000	-	-	Ninguno
Marítima (+) ..	1.789	50	50.000	0,83	2,00	3 (=150.000 rs.)
Marítima (+) ..	1.792	50	50.000	0,16	1,66	1

FUENTES: Ver el cuadro anterior.

NOTAS : (+) El capital social de esta Compañía se calcula en la emisión de acciones del primer año.

(++) En la primera Junta General de Accionistas.

(313) Larruga, Memorias..., t. VII, p. 127.

Estas compañías no regularon, en origen, la limitación de la concurrencia en una persona de votos delegados. Cuando se hizo fue a raíz del funcionamiento viciado de las Juntas, como la orden de 27 de mayo de 1.771 para la Compañía de Burgos (314).

Otra de las causas que distorsionan el esquema inicialmente descrito y reflejado en el cuadro II,7 es la existencia de votos especiales. En la Compañía de Granada se daba un trato especial a los fundadores, que disponían de un voto, aunque no tuvieran las acciones necesarias para ello (a. 13, R.O.); además, tenían voto de calidad junto con el presidente de la Junta y los directores (a. 12 R.C.). En las Compañías de Extremadura (a. 7) y Toledo (a. 28 de la O.), tal voto de calidad estaba reservado únicamente al presidente. Un último caso es el de la Compañía Marítima en la que los directores tenían un voto más del que les correspondía como accionistas (a. 68 de la R.C. de 1.789, suprimido por el a. 52 de la R.C. de 1.792).

Las atribuciones de las Juntas Generales eran similares en todas las compañías. Con la frecuencia y las limitaciones analizadas, nombraban a los directores y fijaban sus sueldos. Aprobaban o rechazaban las propuestas de aquéllos y, eventualmente, las de los propios vocales. Aprobaban o, en su caso, rechazaban el estado de cuentas que los directores pre-

(314) A.G.S., Hacienda, leg. 855.

sentaban y votaban el dividendo repartible.

La Junta General, por tanto, es el modo que tienen los accionistas para informarse sobre la marcha de la Compañía, ejercer un control sobre la dirección y participar en las de cisiones acerca de la política general de la asociación.

El mecanismo que regulaba la elección y revocación de los directores estaba distorsionado por las situaciones de poder ~~y~~ ^{que} que posibilitaban al círculo ejecutivo una eficaz resistencia ante las quejas de los accionistas. Creo poder afirmar a la luz de la documentación consultada, que la sus titución de la dirección nunca funcionó normalmente en estas compañías. Se intentó en la de Zaragoza (1.749), Granada (1.752) Toledo (1.759)... y siempre fracasó. Las razones eran la cons titución de un grupo eficazmente resistente en la Junta Gene ral de Accionistas y el cambio en la política económica. En la segunda mitad del siglo se redujeron paulatinamente las prerrogativas de estas compañías y el afán de su mantenimiento protegido. Dejadadas a sus solas fuerzas, se fueron extinguiendo, víctimas de sus propias contradicciones internas, es pecialmente las provocadas por su gestión inadecuada y la resistencia por parte de los directores de cualquier tipo de renovación interna y de reorganización del negocio.

Las Reales Cédulas de constitución de estas compañías or denaban que el balance o tanteo anual estuviera expuesto a la consideración de los vocales durante los días de la celebración de la Junta General de Interesados, para que su discusión fuera más ágil y fructífera. La Compañía de Burgos, en

su tardía cédula (1.767) intentó extremar las garantías para evitar los conflictos que llevaron a la ruina a las anteriores; en este aspecto, se traduce en que se exigía a los directores el envío de "copia firmada [del balance] a cada interesado para que se imponga radicalmente en cuanto le convenga" (a. 8 R.C.).

La dificultad que ofrece el estudio de un balance en una asamblea numerosa hace que, a este efecto, se nombren revisores para que lo realizaran pormenorizadamente e informaran al conjunto de interesados. Si bien este procedimiento está contemplado únicamente en las Ordenanzas de la Compañía de Extremadura (a. 11) y Toledo (O. 21) fue práctica común en todas ellas y resultó eficaz para desenmascarar las falsas imágenes optimistas que los directores —sin excepción— pretendían transmitir a las Juntas. Ya hemos mencionado, sin embargo, que ello no se pudo traducir nunca en la remoción de unas direcciones que revelaban "ningún conocimiento sólido de las fábricas y comercio" (315).

En ~~dos de las~~ compañías analizadas —Zaragoza y Granada— la dirección debía presentar al finalizar el período ordinario de su mandato (cuatro y cinco años respectivamente) un estado general de su administración, sujeto al mismo procedimiento de discusión que el tanteo anual.

Otra importante atribución de la Junta era la votación del dividendo. Únicamente dos Reales Cédulas de concesión,

(315) Son palabras de los accionistas madrileños en la Compañía de Toledo (1.759) reproducidas en Larruga, Memorias..., t. VII, p. 132.

comparativamente muy poco elaboradas, no se pronuncian sobre ella. Tres de las compañías resaltan la necesidad de que la Dirección sea la que haga una propuesta acerca del volumen del dividendo. Son las de Zaragoza (a. 19 R.C.), Granada (a. 36 R.C.) y Marítima (a. 62 R.C. 1.789 y a. 40 R.C. 1.792). En la práctica siempre fue así.

Como muestra de especial precaución, en algunas compañías se resalta la idea de que el reparto de utilidades no afecte a la marcha del negocio: Extremadura, Sevilla (a. 42 O.) y Toledo (a. 21 O.). No resultó infrecuente, sin embargo, que se realizaran repartos con cargo al capital social, para contentar en los años iniciales a unos accionistas que todavía aceptaban como buenas las cuentas de los directores.

La frecuencia de la decisión acerca de este punto estaba estipulada en un año, coincidiendo con la celebración de la Junta. Destacan dos excepciones: la Compañía de Burgos, en la que era trienal (a. 7 R.C.) y la de Sevilla, en la que dependía de la convocatoria —variable— de la Junta General de Accionistas (aa. 41 y 420.).

La importancia del tratamiento de este punto en la orden del día de las Asambleas sociales fue disminuyendo. Ninguna compañía de comercio y fábricas, produjo utilidades a sus accionistas a partir del tercer balance, antes incluso de las normas de 1.752. La de Burgos, creada en 1.767 entró, asimismo, en una crisis irreversible desde 1.771. Los Directores de ésta, que habían prometido ganancias sustanciosas en 1.769 y discretas en 1.770, presentaron un balance deficitario cuan-

do, en 1.771, el dividendo debía hacerse efectivo. Además, no habían rendido el estado general correspondiente al trienio, como era preceptivo. Por ello, la Junta General de Comercio dictó una Orden para que procedieran a convocar nueva reunión (316).

Esta es un ejemplo de cómo la Junta de Comercio tenía posibilidad de ejercer un control sobre los directores para el cumplimiento de las normas. Los accionistas tuvieron siempre un éxito más limitado y no tenemos noticia de que hayan logrado nunca una convocatoria en reunión extraordinaria, cuya regulación no se encontraba en la legislación. Cuando la mayoría de los accionistas de Madrid de la Compañía de Granada quisieron convocar una, denunciando el incumplimiento de los acuerdos de la anterior, acudieron a la Junta de Comercio. Esta denegó el permiso, optando por una simple llamada de atención a los directores (317).

En la Compañía de Toledo se produjo una situación similar. Los accionistas de Madrid acudieron a la Junta General de Comercio en 1.759 pidiendo una intervención en las cuentas de los directores en una nueva Junta. Aquel organismo se limitó a dar por buenos los informes del superintendente de Toledo, cuyos intereses en la sociedad parece estaban fuera de toda duda. Es un ejemplo más de la inhibición ministerial

(316) O. de 27 de mayo de 1.771 y el resto del proceso en A.G.S., Hacienda, leg. 855.

(317) Representación a Carvajal, de 30 de mayo de 1.753 en A.G.S., Hacienda, leg. 857.

sobre estas compañías en la segunda mitad del siglo. Efectivamente, cuando en 1.775 intervino, tras quince años de deterioro de la Compañía, fue para regular la quiebra. Tres lustros, al menos, de subsistencia de una extraña compañía privilegiada desatendida, de funcionamiento viciado, tanto en el negocio como interno, que tenía, durante todo este tiempo, la oposición de la ciudad y de un grupo significativo de accionistas que, finalmente, demostraron la exactitud de sus quejas (318).

d) La Junta de Comercio.— La intervención de la Corona, a través de la Junta General de Comercio, no se agotaba en el proceso de creación de una compañía privilegiada, con la firma de una Real Cédula. Continuaba en la formación de su otro gran documento, las ordenanzas, que debían ser aprobadas en la mencionada Junta y consultadas por ella al Rey.

El poder central debía continuar unas labores de asesoramiento, protección y control sobre unas asociaciones que en la mayoría de las ocasiones habían sido proyectadas en el seno de la organización de la Junta de Comercio y, siempre, constituidas con su beneplácito. Esta aprobación, vimos se sancionaba con la participación del monarca y su familia como accionistas; asimismo, con la concesión de fuero especial a las compañías. Todas las aquí analizadas, creadas entre 1.746 y 1.767, tienen concedido el siguiente derecho:

(318) Sobre el proceso, v. los documentos reproducidos por Larruga, Memorias..., t. VII, pp. 72-203.

"la Compañía y todos los empleados en ella de continuo han de gozar el fuero de mi Real Junta General de Comercio y de Moneda con inhibición de todos los tribunales en todas las causas civiles, y criminales que puedan tocar en el giro, manejo y gobierno de ellas" (a. 11 R.C. Extremadura).

Por sus peculiares características, la Compañía Marítima gozaba de fuero militar, pues sus empleados se consideraban de la Real Armada (a. 21 R.C.).

El carácter privilegiado de las compañías estudiadas hace que se pongan bajo el amparo de este poder central que, sobrepasando la genérica protección del rey (y de la etérea del santo patrón) se concretaba en el nombramiento de un protector. Su misión era velar por el cumplimiento de las normas de funcionamiento a la vez que garantizar el respeto a los privilegios que tenía concedidos. En él recaía, asimismo, la presidencia de las Juntas Generales de Interesados. Esta figura recuerda la presencia activa cerca de las anónimas de los jefes políticos de las provincias y los gobernadores civiles en el período comprendido entre 1.848 y 1.868 (319).

El papel de protector recayó en el Presidente de la Junta de Comercio y Moneda en todas las compañías privilegiadas aquí analizadas excepto en el caso de la de Zaragoza, que lo hizo en un miembro de su organización, el Intendente. La Compañía Marítima, por sus peculiaridades descritas, se apartaba de este esquema y su protector era el Secretario de Estado y del despacho de Marina.

(319) R.D. de 17 de febrero de 1.848 y R.O. de 12 de diciembre de 1.857, v. parte II, cap. 3, apartado 3.5.

De forma semejante quedaba explicitado en todas las compañías. Como ejemplo, utilizamos la de Toledo:

"Primeramente: la facultad de formar en la ciudad de Toledo una Compañía Real de Comercio y Fábricas, bajo la protección de Dios nuestro Señor, y de María Santísima del Sagrario; la Mía y la del Presidente, que ahora es, y en adelante fuera de mi Junta General de Comercio, y Moneda" (a. 1 R.C.).

Hemos venido sosteniendo en estas páginas que la Junta General de Comercio fue, paulatinamente, inhibiéndose de estas compañías que habían demostrado su incapacidad de supervivencia incluso en un marco privilegiado. La ineficacia del sistema protector ideado se puso pronto de manifiesto. Cuando se comprobó esta situación, se ensayaron otras vías menos costosas.

2.4.5.- El fin de las Reales Compañías de Comercio y Fábricas.

El Real Decreto de 24 de junio de 1.752 marcó el inicio de una nueva política respecto a los privilegios fabriles y mercantiles que, hasta el momento, ostentaban en exclusiva las Compañías creadas entre 1.746 y 1.748. Por él se anulaban "todas las gracias de tanteos, exclusivas, exenciones de derechos y libertades de cargas reales y concejiles a todas las fábricas de las Compañías y particulares de todas clase de tejidos, o manufacturas... como perjudicial al Estado, y

a la causa pública" (320).

¿Cuál es la causa de esta anulación? ¿Por qué se retira a las Compañías, sólo seis años después de su creación, este apoyo tan señalado y alabado poco antes?. La causa ,próxima, confesada en el mencionado decreto, es la protesta de gremios y particulares de Valencia, Toledo y "otras provincias". Pero esta protesta no parece justificar un cambio tan rápido y radical en la política del mismo grupo de dirigentes.

Creo que puede considerarse que la causa fundamental estriba en la conciencia del fracaso de las Compañías. Estas no se mostraron capaces de cumplir los objetivos que se les señalaron y que han sido ya discutidos. No tuvieron el efecto multiplicador que se esperaba, no fueron punta de lanza de las actividades mercantiles y manufactureras y no fueron una alternativa a la organización gremial.

El Decreto de 1.752 incidió sobre unas compañías que ya eran muy débiles, de las que no se había sabido extraer una rentabilidad discreta salvo, quizá, en el caso de Toledo. Unas compañías cuya mala gestión había desaprovechado una importante cantidad de capital acumulado que sumó, entre 1.746 y 1.748, alrededor de trece millones rs. vn. y que llegó a veinte, sumados los censos. Se optó, por tanto, por otra vía para fomentar la industria nacional. Se abandonó el de conceder todos los privilegios a seis grandes compañías sobre las que recaía toda la responsabilidad de elevar el nivel de la

(320) A.H.N., Consejos, lib. 1.513, núm. 65.

economía española. A partir de este momento se decidió extender los privilegios a un conjunto cada vez más amplio de grupos y actividades; era, formulado de una forma negativa, la progresiva liberalización del comercio y la industria. El proceso abarcó todo lo que restaba de siglo y, en su nueva vertiente, a partir de 1.808, será analizado en el capítulo siguiente.

El decreto de 1.752 concedía la libertad de derechos de alcabalas y cientos de las primeras ventas que se celebraran al por mayor. Nueve meses más tarde, ante las protestas de las compañías que justificaron en él sus pérdidas, se reiteró aquél: "por lo que he deseado fomentar las Compañías, no descaezcan [sic] las Fábricas particulares" (321). Los privilegios de aquéllas —se afirma— no deben perjudicar a éstas. La intención en 1.746, insisto, no era crear unas organizaciones monopolísticas que sólo sirvieran al lucro de un grupo de interesados en la innovación sino, el acicate a la centralización de capital y el fomento de las iniciativas económicas.

La compañía, como fórmula de asociación de capitales no fue por ello desacreditada, ni en la legislación ni en la doctrina. Pero a partir de estos fracasos se desestimó la conveniencia del fomento de la fórmula privilegiada para realizar el grueso de las actividades fabriles o mercantiles que

(321) R.D. de 30 de marzo de 1.753, en Larruga, Historia..., t. IX, fols. 309r - 311r. sobre lo mismo, R.D. de 18 de junio de 1.756, en A.H.N., Hacienda, lib. 6.098, fols. 249r-252r.

podían ser emprendidas por la iniciativa privada y, sobre todo, que querían serlo.

De ahí que, en la segunda mitad del siglo sólo lograran ser patrocinadas las compañías que no realizaran por sí mismas una industria o comercio común. La Compañía de Burgos (1.767) fue protegida porque no iba a crear fábricas sino que pretendía ser un acicate a su formación mediante la concesión de préstamos y la seguridad de la comercialización de sus productos (322). Su fracaso fue un nuevo golpe para esta fórmula.

La década de los ochenta fue la culminación de todo este proceso. En 1.782 se creó el Banco de San Carlos. La Memoria con la que Cabarrús presentó el proyecto, resume la nueva política:

1.- La Compañía es el mejor método para centralizar el ahorro y dirigir el capital hacia las actividades productivas:

"Apenas se han formado algunas Compañías, y se ha pensado fomentar con ellas el comercio y la industria, cuando el dinero, que se hallaba ocioso, ha salido de estos depósitos; y sin duda hubiera sido ventajoso al trabajo y manufacturas nacionales, si en vez de tener tales Compañías por objeto el bien de algunos particulares, hubieran sido dirigidas al bien público" (323).

(322) v. la representación al rey de la Junta de Comercio, de 17 de octubre de 1.767 en Simancas, Hacienda, elg. 855.

(323) "Memoria que Don Francisco Cabarrús presentó a Su Majestad para la formación de un Banco Nacional, por mano del Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca, su primer secretario de Estado, en 22 de octubre de 1.781", Madrid, 1.782, A.H.N., Consejos, lib. 1.515, núm. 72.

2.- Como tal, debe ser utilizada y protegida por el Estado, cuando se dirige a explotar una ruta o actividad que de otra forma los particulares no emprenderían. Debe, por el contrario, ser rechazada cuando pretenda conseguir un monopolio que perjudica a la iniciativa privada:

"Las Compañías de Comercio suelen compararse a los andadores con que se ayuda y sostiene en los primeros pasos a los niños. En tales casos estos medios, no sólo son cómodos, sino necesarios; pero cuando con el uso de ellos la industria se halla fortificada y adulta, no son semejantes compañías más que unos lazos, que estorban e impiden la libertad de su carrera" (324).

Bajo esta óptica se entiende la creación del propio Banco en 1.782, de la Compañía de Filipinas en 1.785 (325) o de la Marítima en 1.789. Aquél "no debe por ningún motivo emprender operaciones de comercio, para no embarazar la actividad de los particulares" (326). Estas, abrirán nuevas rutas y, gracias a su volumen, sostendrán su explotación regular.

En torno a esta fecha, asimismo, se autorizó la creación de otras Compañías, ya citadas, en el sector de la imprenta (Compañía de Impresores y Libreros), los Hilados (1.773), el comercio y la industria (Compañía de los Cinco Gremios Mayores, 1.785), los seguros (1.800)... Algunas —impresores, gremios— por la necesidad que el Estado tenía de ellas; otras,

(324) Ibidem.

(325) "Papel que escribió D. Francisco Cabarrús al excelentísimo Sr. D. Pedro de Lerena, Ministro de Hacienda, en el mes de marzo del año pasado de 1.785", reproducido por M^a L. Díaz-Trechuelo, La Compañía..., pp. 283-290. Defiende su autor las mismas tesis que el Memorial. v., sobre todo, p. 284.

(326) Memorial...

porque la única fórmula legal de constitución de una compañía de capitales era la Real autorización.

La Compañía privilegiada, pues, fue, restringiéndose a unos específicos campos de actuación. Pero la Corona siguió reservándose la concesión de personalidad jurídica hasta 1.829. De ahí que, hasta esta fecha, no tenga existencia legal la sociedad anónima, cuyas características estaban anunciadas —hemos visto— en las privilegiadas del XVIII. De ahí que, la iniciativa privada desarrollara, en el último tercio del siglo, una peculiar forma de sociedad, a medio camino entre la comanditaria simple y la anónima: la comanditaria por acciones. Su desarrollo será analizado en el próximo capítulo.

CAPITULO 3
LA COMPAÑIA POR ACCIONES NO PRIVILEGIADA
EN LA ESPAÑA DEL ANTIGUO REGIMEN

En un capítulo anterior hemos analizado la legislación general sobre sociedades en la España del Antiguo Régimen. Observamos cómo sólo se ocupó de las colectivas y las comanditarias simples. El desarrollo económico exigía, sin embargo, la aparición de nuevos tipos de sociedad que rompieran la barrera personalista. Sociedades que permitieran abordar, con carácter de continuidad, empresas cada vez mayores. Sociedades que fueran verdaderas compañías de capitales, con responsabilidad limitada y en las que los interesados no se vieran atados con la totalidad de sus fortunas durante todo el tiempo que durara la asociación.

Las sociedades de capitales tuvieron una fórmula peculiar de desarrollo, la Real Compañía, privilegiada. Se ha discutido esta figura en el capítulo anterior. Hemos considerado cómo surgieron en el comercio colonial para extenderse después a otros sectores. Estas compañías, verdadero precedente de las anónimas, debían ser autorizadas mediante Real Cédula debido a dos razones fundamentales. En primer lugar, que la sociedad de capitales renunciaba^a las garantías sobre las que tradicionalmente se basaba la personalista: la solvencia y la fama de sus componentes y su responsabilidad ilimitada. Por ello, en el Antiguo Régimen —y no sólo en España—, el Estado

do se erigió en garante y se reservó un cierto control sobre la concesión de personalidad jurídica.

Un segundo aspecto que se debe considerar es que las compañías de capitales nacieron asociadas a la gran empresa y al privilegio. El Estado creía su deber intervenir en la organización de unas compañías que creía necesitar y que sólo con ciertas prerrogativas se mostraban dispuestas a impulsar unas empresas consideradas de utilidad social. La Real Cédula de concesión simbolizaba este pacto: las compañías se crean porque son necesarias para el bien común y el Estado las protegía, porque sin su intervención no podrían sostenerse en un primer momento.

Por ello, buscando los precedentes de la anónima analizamos, en primer lugar este tipo peculiar de asociación de capitales. Observamos que desarrollaron unas formas de organización muy elaboradas pero que tenían todos los defectos achacables al proteccionismo y al sistema privilegiado sin, al tiempo, haber sabido aprovechar sus ventajas. La estrepitosa caída de las privilegiadas industriales hace que terminemos el siglo con esta figura reclusa, de nuevo, en grandes empresas estatales.

Pero la fórmula era válida para cualquier empresa de índole privada de unas ciertas dimensiones. Para aquéllas en las que la exigencia de capital excediera de las capacidades de unos pocos promotores. El ahorro estaba pronto —lo había demostrado—; faltaban iniciativas que lo demandaran y fueran capaces de absorberlo.

Un nuevo tipo de sociedad se desarrolló, en primer lugar, en el seguro marítimo. Este sector poseía una doble característica: ser eminentemente capitalista y de alto riesgo. De ahí que se necesitaran unas compañías de mayor volumen y que permitieran dividir la responsabilidad entre un número elevado de participantes. Por ello, desde 1.763, al menos, encontramos compañías comanditarias por acciones en este campo (327).

Estas sociedades tenían todo su capital dividido en acciones, repartidas entre un número de socios que superaba la veintena. Fueron el desarrollo natural de la compañía mercantil. Las diferentes características de los distintos sectores económicos y su peculiar evolución son las razones que explican que las nuevas sociedades se encuentren primero en el seguro, las finanzas y el comercio. El sector fabril, cuya capitalización fue posibilitada por la evolución industrial y las nuevas técnicas productivas, incorporó con retraso este tipo de asociación.

Son estas las compañías que aquí nos van a ocupar. Unas compañías que se constituyeron mediante simple acuerdo privado, formalizado en escritura pública y sin privilegios. Que a lo largo del último tercio del siglo XVIII incorporaron a su organización ciertas características propias de la sociedad de capitales —responsabilidad limitada— aunque conservaron

(327) De esta fecha datan las dos primeras compañías por acciones que García-Baquero ha localizado en Cádiz. Cádiz y el Atlántico (1.717-1.778), Sevilla, 1.976, t. I, p. 413.

un fuerte tono personalista —no existía la libre transmisión de sus acciones— que por sus características fueron una excelente fórmula de centralización de capital en los inicios de la industrialización en países como Inglaterra o Francia, que aquí estaban siguiendo una evolución similar, destacando, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XIX, en las ferrerías y en el textil y cuyo desarrollo se vió interrumpido bruscamente en 1.848.

Este último aspecto será discutido en un próximo capítulo. En estas páginas pretendemos analizar la organización interna de las primeras compañías por acciones no privilegiadas en España, como fórmula de transición entre las colectivas y comanditarias simples, de un lado, y la anónima de otro; entre las sociedades personalistas y las de capitales. Su importancia crucial en esta evolución no debe ocultar su escaso significado económico frente a las tradicionales compañías personalistas, que con su abrumadora mayoría, como ha destacado Pierre Vilar, son las que mejor caracterizan el capitalismo en sus orígenes (328).

Las compañías que constituyeron los Cinco Gremios Mayores de Madrid merecen una consideración aparte, Son, de hecho, sociedades personalistas por su estructura. Sus dimensiones, sus actividades, y su protección por parte del Estado les otorgan, sin embargo, una importancia crucial en el proceso de acumulación de capital comercial en la España del Antiguo

(328) Pierre Vilar, La Catalogne..., t. II, p. 384.

Régimen.

3.1.- La muestra analizada.

Para nuestro estudio interesan, por los argumentos expuestos, las sociedades por acciones que no están autorizadas por Real Cédula y que se constituyen mediante escritura pública.

Los centros mercantiles en los que primero se desarrollan este tipo de sociedades y, para los que hemos encontrado referencia documental, son Cádiz, Barcelona y Bilbao.

La escasez de fondos de las propias compañías y el desigual estado de conservación de los Archivos consulares convierten a los Archivos de Protocolos en una fuente esencial y casi exclusiva para el estudio de estas sociedades. Sólo un vaciado sistemático de los mismos nos pueden ofrecer una imagen completa de las mismas, labor que excede, con mucho, las posibilidades de un investigador.

Para nuestro estudio hemos realizado una serie de calas en el Archivo de Protocolos de Barcelona, en las escribanías que —según las referencias consulares— aparecían especializadas en la materia. El año que tomamos como inicial fue 1.760. El resultado puede estimarse satisfactorio, pues se han podido utilizar las escrituras de constitución de seis compañías de seguros, una de Fondos Perdidos y una de Comer-

cio en General, así como varias de las actas de sus Juntas Generales de Accionistas (329).

Las escrituras fundacionales de las compañías de seguros marítimos se encuentran, mayoritariamente, entre los años 1.771 y 1.777, que es una época de auge del comercio catalán. A partir de este año nos hemos encontrado nuevas fundaciones, lo que indica el fuerte impacto de la crisis del tráfico mercantil, a consecuencia de las guerras de fin de siglo. La invasión francesa les daría el golpe de gracia pues tuvo como consecuencia, como ha resaltado Vilar, la reducción del tráfico marítimo por el puerto de Barcelona prácticamente a cero (330).

El análisis de las escrituras de las siete compañías que constituyen la muestra, revela la rápida evolución de este tipo de asociación en Barcelona. Una región en la que, para esta fecha, se estaba produciendo la transformación del capital comercial en capital industrial en las fábricas de indias. En 1.772 las veinticinco que se encontraban en funcionamiento, unieron sus capitales en la Compañía de Hilados de Algodón. Su carácter privilegiado y su aprobación mediante Real Cédula la excluyen de estas páginas aunque será tenida

(329) Su relación completa en "bibliografía". Destaquemos que, en 1.789 sólo había 7 sociedades de seguros de estas características en Barcelona (Jovellanos, "Dictamen acerca de una solicitud de las compañías de Seguros de Barcelona", 6 de julio de 1.789, en Biblioteca de Autores Españoles, Obras publicadas e inéditas de Gaspar Melchor de Jovellanos, colección hecha e ilustrada por Cándido Nocedal, Madrid, 1.952, tomo II, Madrid, 1.952, p. 525

(330) P. Vilar, La Catalogne..., t. III, pp. 82-138.

en cuenta a efectos de comparación (331).

El estudio de las escrituras notariales gaditanas realizado por García-Baquero le reveló la existencia de, al menos, siete compañías por acciones en esta ciudad, creadas entre 1.763 y 1.777. Son todas de seguros marítimos. El análisis de sus escrituras, realizado por este autor, nos permite establecer una comparación del desarrollo de esta figura en los dos centros mercantiles en que primero se ensayó (332).

El Archivo del Consulado de Bilbao, que ha sido recientemente estudiado por Petit (333) nos ofrece un registro completo de las sociedades existentes en 1.740 y de las inscripciones realizadas en los años posteriores. Fijando nuestro límite en 1.829, observamos que son un total de 264 (334). Sólo una estaba constituida como sociedad por acciones. Es la compañía de seguros "Nuestra Señora de Begoña y San Carlos", fundada en 1.783 (335). Sólo ella, pues, será aquí considerada.

(331) R.C. de 30 de junio de 1.773, Larruga, Historia..., t. VIII, fols. 247 y ss. Una aproximación a esta compañía en Pere Molas, "Las primeras etapas de la burguesía catalana. Los empresarios algodonereros del siglo XVIII", en La burguesía mercantil en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1.985, pp. 238-246. Entre los múltiples estudios que recientemente ha provocado el tema, Carlos Martínez-Shaw, "Los orígenes de la industria algodonerá catalana y el comercio colonial", Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea, Actas del Primer Congreso de Historia económica de España, Barcelona, 1.974, pp. 243-267; Ramón Grau y Marina López, "Empresari i capitalista a la manufactura catalana del segle XVIII. Introducció a l'estudi de les fàbriques d'indianes", Recerques, 4, 1.974, pp. 19-57.

(332) Antonio García-Baquero González, Cádiz..., t. I, cap. IX y, en especial, pp. 412-425 y 438-453.

(333) C. Petit, La compañía...

(334) Su relación completa, ibidem, apéndice documental núm. 1

(335) A.C.B., caja 15, reg. 3, núm. 110. I. Guiard Larrauri, Historia del Consulado..., V. III, pp. 534-537, reproduce su escritura.

La Compañía General de pesca marítima en las costas del Cantábrico fué constituida por acciones y sin privilegios exclusivos en 1.775. Fue autorizada por Real Cédula como compañía de fomento. Por su medio se concedían una serie de prerrogativas, especialmente aduaneras, a un sector que se quería impulsar. Estas razones la excluyen de nuestra muestra y la incluyen en las analizadas en el capítulo anterior(336).

La búsqueda en el Archivo de Protocolo de Madrid no ha revelado la existencia de ninguna sociedad comanditaria por acciones, del tipo de las aquí analizadas. Quizá existieron y un vaciado sistemático de las escrituras notariales pueda mostrárnoslas. La ausencia de otras noticias al respecto nos permite afirmar, al menos, que estas sociedades no tuvieron en Madrid una importancia similar a las gaditanas o barcelonesas. Es muy probable que la razón estribe en el fuerte desarrollo, desde 1.752, de las Compañías Generales de los Cinco Gremios Mayores. La única referencia que hemos hallado para la Corte es un proyecto (que se reveló muy conflictivo) para la creación de una compañía de seguros terrestres y marítimos. Su planteamiento es muy similar al de las Compañías privilegiadas aunque ahora —1.786— la posición oficial es otra:

"Apruebo el establecimiento de esta compañía; pero no vengo en interesarme en ella, aunque la dispensaré mi Real protección. Tome ella por sí misma las Ordenanzas que tenga por conveniente para

(336) R. R. de 16 de febrero de 1.775, Larruga, Historia..., t. IX, fols. 413-418.

su gobierno, y páseselas a la Junta" (337).

3.2.- Las compañías por acciones en Barcelona, Cádiz y Bilbao.

a) La escritura social.— Es indudable que existen contratos privados de compañías (sociedades anónimas o secretas), pero cabe deducir que cuanto más complejas sean éstas, por el número de participantes o por el volumen de capital, menos frecuente será este tipo de acuerdos.

La escritura social, formalizada ante escribano, es un elemento esencial para estas asociaciones y lo que les da existencia legal, especialmente cuando se extiende el régimen de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737.

La escritura pública formaliza el pacto social y constituye la garantía de su cumplimiento, entre los socios y frente a terceros. En todas las compañías estudiadas, la incorporación de un nuevo socio, sea por herencia o —raramente— por compra de acciones, suponía la previa aceptación y firma —también ante escribano— de este documento.

La escritura es, además, el acto por el que se constituye un nuevo organismo, dotado de personalidad jurídica:

(337) Respuesta a la consulta de 27 de abril de 1.786. Incluida, junto con el proyecto, en A.H.N., Osuna, Cartas, 427 bis, tomo 50, v. sobre esta posición, el "Informe sobre establecimiento de una compañía de seguros" de Jovellanos, fechado en 13 de octubre de 1.789, Obras..., t. II, pp. 526-527.

"Es verdad que éstos serán probablemente los que ahora se llaman suscriptores; pero entonces (cuando se constituyan en Compañía) tendrán otra personalidad" (338).

Son palabras de Jovellanos en 1.789. Nuestras compañías, como se verá, funcionaban según esta distinción entre los individuos y el colectivo. Sin embargo, la personalidad jurídica no alcanzó su plena formulación más que con el desarrollo alcanzado ya en este tipo de asociaciones, de la responsabilidad limitada.

Una escritura-tipo de las sociedades de esta clase contiene los siguientes puntos:

- 1) Justificación de la existencia de la compañía.
- 2) Denominación y advocación a la que se acoje.
- 3) Ramo de actividad a la que se dedica.
- 4) Duración.
- 5) Capital y modo de desembolso del mismo.
- 6) Número de acciones y valor facial de cada una.
- 7) Eventual transmisibilidad de las acciones y modo de incrementar el capital.
- 8) Procedimiento, caso de ocurrir muerte natural o civil de un compañero.
- 9) Responsabilidad de los socios.
- 10) Organos de gobierno: nombre, atribuciones y modo de elección de cada uno de ellos.

(338) Jovellanos, "Informe sobre una compañía de seguros, dirigido desde Asturias al secretario de la Junta de Comercio y Moneda", en Obras..., t. II, p. 75. Subrayado mío.

- 11) Renuncia a fueros particulares para someter la compañía a la jurisdicción del Consulado y Junta General de Comercio.
- 12) Firma de la totalidad de los socios, con expresión del número de sus acciones.

Frecuentemente se incluye una lista de accionistas y de la cuantía de su participación.

A estos puntos se añade, en las mayoritarias compañías de seguros, el modelo de póliza que debería ser utilizado así como otros extremos sobre la negociación, tales como la cuantía de las primas y el límite en la extensión y volumen de contratación.

En las escrituras de estas compañías se observa un mayor detalle que en las colectivas y comanditarias simples. La mayor especificación se encuentra, sobre todo, en lo concerniente al capital y órganos de gobierno. Ello se deriva del mayor tamaño de estas asociaciones, de lo que se sigue un modo peculiar de constituir su capital —acciones— y una mayor complejidad en las tareas de dirección.

Al contrario que en Cádiz (339), en Barcelona se observa una cierta diversidad en la redacción de los contratos. Su evolución es también superior en esta plaza, dentro de los mismos.

b) Objeto y duración.— el título de las sociedades anali

(339) A. García-Baquero, Cádiz..., I, p. 421.

zadas no incluye ninguna referencia al nombre de sus componentes, excepto en un caso. Es éste un rasgo que caracteriza a las sociedades de capitales, en las que los socios no son valorados personalmente sino por su aportación. La denominación de las sociedades analizadas incluye su objeto social y la advocación a la que se acogen.

En este aspecto, pues, pueden ser consideradas como sociedades de capitales (carácter apersonal); pero el modelo que siguen es, todavía, el de las privilegiadas. A efectos de comparación, citamos la R.C. de 10 de febrero de 1.748, que creaba una privilegiada en Toledo:

"... una Compañía Real de Comercio y Fábricas, bajo la protección de Dios nuestro Señor, y de María Santísima del Sagrario" (a. 1 R.C.).

Las compañías aquí analizadas siguen la misma pauta, tanto para los seguros como para otros ramos y para las tres zonas analizadas:

"La primera es que dicha compañía de Seguros Marítimos la establecen bajo el patrocinio y denominación de Nuestra Señora de Begoña y San Carlos" (340).

La única excepción sobre este punto se encuentra en la Compañía de Banco de Cambios de Barcelona, creada en 1.777 bajo el "patrocinio de la Santísima Virgen María de los Dolores Madre, y Señora Nuestra, y del Glorioso San Juan Evangelista". La inclusión de la palabra "banco" en su título, gene

(340) I. Guiard, Historia..., V. III, p. 534, v., para Cádiz, García Baquero, Cádiz..., I, p. 417. Para Barcelona, v. la lista de compañías en el apartado de Bibliografía.

ró variadas protestas en la comunidad comercial barcelonesa, por lo que la mencionada compañía se disolvió en 5 de enero de 1.778 y se constituyó en una nueva asociación para el comercio general. La novedad es que se estableció bajo una razón social, "Durán, Larrad, Gibert y Compañía". Así se produce la paradoja de que una compañía con responsabilidad limitada adopta una denominación propia de una sociedad personalista. Los nombres incluídos en la razón social son efectivamente las directorés; pero no tienen distinta responsabilidad por ello (341).

La mayoría de las sociedades por acciones inician su escritura social con una justificación de su objeto y de su necesidad, sobre la base de que reportará beneficios al comercio en particular y al país en general.

Las compañías de seguros de Barcelona siguen todas el mismo hilo argumentativo. La primera, ("Sagrada Familia Jesús, María y José), en 1.771, se refiere a la necesidad de poner este ramo en manos de españoles "para mayor comodidad y utilidad del comercio" (342). Las siguientes sostienen que el sector necesita de nuevas compañías para estar bien atendido. Es frecuente que se anteponga el interés de la comunidad a los socios y que, a veces, éste ni siquiera aparezca explícitamente, sino como derivado de las disposiciones sobre el

(341) Angel Ruiz y Pablo, Historia de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona (1.758 a 1.747), Barcelona, 1.919, pp. 113-116. A.H.P.B., notario Ramón Font y Aliet, Manual de 1.778, fols. 27r-28v, para la disolución. Las nuevas escrituras, ibidem, fols. 29r. y ss. y Manual de 1.782, fols. 219r-224v.

(342) Ibidem, Manual de 1.771, fol. 474.

reparto de las ganancias.

En una ocasión (compañía de la "Inmaculada Concepción de María Santísima Nuestra Señora, y de la Gloriosa Santa Eulalia"), la necesidad de legitimación se manifiesta en la búsqueda de explícito apoyo institucional. Se pensaba que así se obtendría para esta nueva fórmula asociativa, una garantía suplementaria, tanto ante los accionistas como ante los asegurados. Por ello se invitó al presidente de la Junta Particular de Comercio a la reunión previa a la constitución de la compañía:

"Y juntos y congregados los nominados señores, por su Señoría presente Yo el escribano abajo escrito, se les hizo presente; Que por el expresado Dn. Francisco de Milans y de Benages se le había dado alguna inteligencia, de que había algunos hombres de comercio capaces de mantener una sociedad y compañía de seguros, de cuyo establecimiento resultaría conocida utilidad a la Rl. Hacienda, al Bien Público de esta ciudad, provincia de Cataluña y aún a todo el Reino, y el comercio en general, pues que con este medio podrían cualesquiera asegurar sus caudales, sin haber de acudir a comerciantes de Reinos extranjeros, para su seguridad, facilitándose con este medio mucho más el comercio; que por tanto esperaba que sería de la aprobación de su Sría. el establecimiento de la mencionada Compañía de Seguros. Y reconociendo su Sría. la referida utilidad, propuso a la mencionada Junta, que deliberase sobre el asunto, lo que hallase más conveniente" (343).

Por su parte, la escritura de Compañía de la "Virgen Nuestra Señora de la Merced y de los gloriosos San Antonio de Padua y San Ramón de Peñafort" afirma, "siendo el único objeto

(343) Ibidem, Manual de 1.772, fol. 58v. Milans figuraba en la matrícula de comerciantes desde 1.761, reseñado como noble. Jaime Vicens Vives, Coyuntura económica y reformismo burgués, Barcelona, 1.968, p. 29.

el bien general, y particularmente el de experimentar mayores progresos en el comercio" (344) y en su escritura de renovación, 1.776, habla de "utilidad pública" (345).

Ese mismo año, se creó en Barcelona la sociedad de Fondos perdidos o Banco Vitalicio, que se conecta con "las máximas que inspira el soberano, promueve el Consejo y va haciendo familiares el celo ilustrado de algunos ministros fomentando la industria popular con el adelantamiento de las Artes y comercio de que es inseparable el bien general del Estado". Será ésta una peculiar asociación, que, como la de la "Inmaculada Concepción" busca el apoyo institucional. Ambas tuvieron el mismo director, Francisco Miláns (346). Pero será esta compañía, por medio de su director, la que forme una de seguros en 1.777, en la que, por primera vez, se cambian las tornas y se pasa a primer término el lucro de los interesados del que se deriva la utilidad pública:

"... podrá hacer los mayores progresos, con satisfacción y utilidad de todos los interesados, y con las otras ventajas que siendo propicia la suerte podrán transcender al comercio, y a la causa pública" (347).

A partir de esta fecha se abandonó la práctica que comentamos, lo que puede inducir a pensar que esta fórmula asocia

(344) Ibidem, Manual de 1.774, fol. 329r.

(345) Ibidem, Manual de 1.776, fol. 325r.

(346) A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.776, fol. 291v.

(347) Ibidem, fol. 41r.

tiva ya estaba asentada.

El seguro marítimo es el sector mayoritario dentro de las compañías por acciones del siglo XVIII. Catorce de las dieciséis analizadas pertenecen al mismo. Una vez más, esta actividad, netamente capitalista, fue punta de lanza de las nuevas formas asociativas.

Unicamente hemos encontrado dos excepciones, ambas en Barcelona. La primera, en 1.776, es la Sociedad de Fondos Perdidos, cuyo objeto era recibir "fondos perdidos y pagar a sus impondores las dotes y Rentas Vitalicias en los términos y bajo las condiciones que más abajo se expresan" (348). Esta compañía se planteó como una fórmula de canalización del ahorro. Absorbería el de "las familias que poseyendo algún caudal no pueden sin muchas contingencias utilizarse de su producto regular por falta de oportunidad y conocimiento" (349). Y así:

"Estos fondos, sin necesidad de multiplicar con ellos las fábricas establecidas, ni gravar de otro modo el comercio que en el día hacen particularmente las nacionales podrán utilizarse empleándose en algunas empresas de magnitud, como en el comercio del Levante; Navíos o cargazones en flota; Registros y permisos a Indias; en fábricas Nuevas; en facilitar riesgos; abrir canales y hacer ríos navegables, con otros negocios marítimos y terrestres de consideración que la Compañía se proporcionará con sus especulaciones y desvelos" (350).

(348) Ibidem, fol. 291v.

(349) Ibidem.

(350) Ibidem, fol. 292r.

Esta compañía, sin estar constituida mediante Real Cédula, destaca en todos sus documentos que su establecimiento se realizó con "Real permiso". Como ya señalamos, era la necesaria búsqueda de apoyo institucional en un momento de transición, lo que era aún más necesario en una organización que podía ser acusada de intentar realizar una inadmisibles competencia a la manufactura o comercio particulares y gremiales. Entre sus actividades destacan los registros de La Habana —no siempre lucrativos— una Compañía de seguros, que rindió beneficios hasta que fue afectada por la crisis del sector, y una Real Fábrica de Cristales cuya instalación le fue concedida en 1.779 (351).

La segunda compañía que mencionábamos, se constituyó en 1.778 "para comerciar en los ramos que juntos los directores y consiliarios tengan por conveniente" (352). Era la de Banco en Cambios, que giraba bajo la razón social de "Durán, Larrad, Gibert y cía."

Se observa que las compañías por acciones iniciaron su andadura en sectores que requirieron, desde el origen, asociaciones que facilitaran la acumulación y centralización del capital. El paso siguiente era la extensión de la fórmula a la producción fabril no privilegiada. No hemos encontrado asociaciones de este tipo. El único sector en el que se podía plantear era en el textil, que formó esa peculiar

(351) Para la concesión de la Real Fábrica, ibidem., Manual, de 1.779, fol. 310r. Las juntas generales de accionistas se celebran cotidianamente. Un balance que comprende sus quince primeros años, ibidem., Manual de 1.791, fols. 60v-66r.

(352) A.H.P.B. notario Ramón Font y Alier, Manual de 1.778, fol. 29 r.

privilegiada, la Compañía de Hilados (353). El estado de la manufactura no era el más idóneo para fomentar la aparición de estas compañías. La larga crisis bélica de 1.793-1.814 frenará la industrialización del país. Más tarde, el absolutismo fernandino no favorecerá precisamente un proceso que, sin embargo, era imparable. Pero eso queda fuera del período ahora considerado y nos ocupará en un próximo capítulo.

La duración de estas sociedades es un punto interesante a tratar porque, una vez más, en él, se revelan como una fórmula de transición. la compañía bilbaína se estableció por cuatro años (354). Todas las que se han encontrado para Cádiz, tenían una duración entre tres y seis años (355). En Barcelona, sólo una compañía se mantiene fiel a esta práctica tradicional, constituyéndose por tres años y renovándose periódicamente (356). La mayoría, se constituirán por un tiempo indeterminado, según el "beneplácito de los interesados".

Una de las necesidades básicas del desarrollo económico es la permanencia de la inversión en unas sociedades que, así, puedan plantearse empresas cada vez más ambiciosas. En

(353) En la minería tampoco hemos observado la utilización de este tipo de sociedades. Un intento frustrado de adopción de las técnicas inglesas para la extracción del carbón piedra fue el de la compañía por acciones, con responsabilidad ilimitada de sus socios, en Cádiz, 1.793. El fracaso de este proyecto, en medio de la incomprensión de los dueños de las explotaciones tradicionales, impidió la formación de esta compañía. El expediente en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, leg. 1.578, exp. 23.

(354) I. Guiard, Historia del Consulado..., V. III, p. 534.

(355) García-Baquero, Cádiz..., t. I, p. 447

(356) Compañía de la "Inmaculada Concepción de María Santísima Señora Nuestra y de la Gloriosa Santa Eulalia", A.H.P.B., notario Ramón Font y Alier, Manual de 1.772, fol. 37v.

las sociedades personalistas todos sus componentes, como fue analizado, se veían atados a ellas durante la vida de la sociedad. Este seguirá siendo el caso de las sociedades por acciones del siglo XVIII, que no regulan la libre transmisión de los títulos. Estas sociedades, por ello, suelen fijar una muy corta duración de sus empresas, única forma de permitir a los participantes recuperar su inversión. Pero, como hemos mencionado, el grupo mayoritario de las compañías barcelonesas aquí tratadas no limitan su duración. Es un indicador del deseo de proyectar la sociedad a largo plazo. Pero, insisto, al no tener establecida la libre transmisión de las acciones ni regulada la emisión de sucesivas series de títulos, cada vez que algún socio deseaba separarse o alguien estaba interesado en participar en la sociedad, había de esperar a la reunión periódica de la Junta General de Accionistas. Entonces, en el mejor de los casos, se podían satisfacer estos deseos. Pero, inevitablemente, ello requería la formalización de una nueva escritura social y su constitución como "nueva compañía".

La única excepción a este comportamiento es la sociedad de Fondos Perdidos, cuya duración, determinada por su objeto, se establece "hasta haber repartido todas las dotes y la vida de los renteros vitalicios" (357). Incluso en ella, que acepta las nuevas suscripciones —se constituyó sin la totalidad de sus fondos cubiertos— y la transmisión de acciones,

(357) A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.776, fol. 292v.

los nuevos participantes debían ser aceptados por la Dirección, que examinaría su solvencia.

c) Responsabilidad.— El hecho de que la sociedad tenga todo su capital dividido en acciones no significa que su responsabilidad sea limitada. La compañía bilbaína de "Nuestra Señora de Begoña y San Carlos", aunque tardía (1.783), disponía para sus socios una responsabilidad solidaria e infinita:

"La quinta, que para dar a este establecimiento la mayor solidez y asegurarle la confianza pública se obligan bajo de dicha insolidación con sus personas y bienes presentes y futuros a todos y a cada uno de los asegurados" (358).

El artículo décimo-quinto, asimismo, establecía que los socios debían responder, a prorrata, de la totalidad de las pérdidas. la permanencia de esta compañía se basaba en la solvencia de sus componentes, que no la podían abandonar. Como en las colectivas y comanditarias simples, la ilimitación de la responsabilidad era la única garantía que se estimaba posible en una compañía de riesgo, que no estaba avalada o sostenida por el poder público.

Las sociedades por acciones en Cádiz, al menos hasta 1.777, "se rigieron todavía en materia de responsabilidad por los mismos principios y reglas que informaban a las sociedades de personas, es decir, respondiendo los socios por las deudas sociales de un modo solidario e infinito" (359). En el

(358) I. Guiard Larrauri, Historia del Consulado..., v. III, p. 534.

(359) García Baquero, Cádiz..., v. I, pp. 422-423.

modelo de escritura que se siguió hasta el mencionado año, se establecía el principio de solidaridad: en caso de un socio moroso, los demás debían responder "por el todo insolidum" (a.2); en caso de pérdidas, su importe sería cubierto a prorrata, "sin que por ésto queden relevados de la responsabilidad de unos por otros" (a. 9); se confiaba en que los socios pagaran con prontitud "a fin de mantener el honor" de la compañía (a. 11) y para ello, "obligan sus bienes y rentas presentes y futuras" (360).

De la muestra estudiada por García - Baquero, únicamente la sociedad titulada de "Nuestra Señora de las Mercedes" (1.777) establece limitación de responsabilidad. Existe solidaridad, para cubrir las deudas sociales pero:

"... entendiéndose esta responsabilidad y obligación mancomunada hasta en la concurrente cantidad del fondo en que debe cada cual contribuir para dichos quebrantos con los diez mil o veinte mil pesos, importe de la una o dos acciones en que se ha interesado, y no más: de forma que si sucediese que las pérdidas y quebrantos de los seguros y quiebras de los compañeros excediesen del valor del fondo, no quedarán en semejante caso obligados los otorgantes, ni sus contribuyentes a satisfacer el exceso sino solamente a cubrir y pagar las tales pérdidas y quebrantos hasta en la cantidad de la acción o acciones de su cargo" (361).

(360) Cláusula final de la escritura de la compañía "María Santísima Nuestra Señora en el misterio de su Purísima Concepción y el Patriarca señor San Joseph", A.H.P.C., Escribanía núm. 9, prot. núm. 1.067, fols. 338v. y ss. En el texto, se ha hecho referencia a los artículos de la misma, entre paréntesis. Todas la gaditanas, excepto una, se ajustaron exactamente a este modelo.

(361) "Compañía de Nuestra Señora de las Mercedes", ibidem., núm. 1.639, fols. 123-124v.

En Barcelona, por el contrario, encontramos una temprana generalización de la responsabilidad limitada que contrasta, incluso con la práctica mercantil de fuera de nuestras fronteras. En Francia, sostiene Lévy-Bruhl, "los accionistas son responsables in infinitum, e in solidum, como los hombres de las sociedades generales (...). Las cláusulas limitativas no se multiplican verdaderamente más que a partir del año 1.780" (362).

En Barcelona, la primera compañía de seguros por acciones se constituyó, en 1.771, con un capital de "ciento y sesenta mil pesos de ciento veinte y ocho cuartos... para la responsabilidad y demás efectos que hubiere" (a. 3). El socio moroso estaba cubierto por los demás (a. 12) y, por su parte, la cláusula final afirmaba:

"Y con los susodichos y arriba insertados pactos y condiciones y no sin ellos nos prometemos los unos a los otros cada uno por su parte y respectivo interés... y para su cumplimiento obligamos to dos nuestros respectivos bienes y derechos muebles y sitios presentes y venideros..." (363).

Esta escritura, quizá por pertenecer a una fórmula nueva que se estaba tanteando, tiene una redacción particularmente poco clara. No obstante, su lectura, de la que hemos entresacado sus citas más significativas, creo permite concluir que

(362) Lévy-Bruhl, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVII^e et XVIII^e siècles, Paris, 1.938, p. 50. Traducción mía.

(363) A.H.P.B., notario Ramón Font y Aliet, Manual de 1.771, fol. 57r. En el texto se indican entre paréntesis los artículos de la misma escritura.

los socios tienen limitada su responsabilidad hasta el importe de su parte alícuota del fondo social. La ausencia de desembolso inicial, obligaba al socio a realizarlo a medida que fuera necesario; de ahí que, para ello, hubieran de comprometer la totalidad de sus bienes. Pero los directores nunca podían comprometer a la compañía más allá del importe de su fondo social, y, previo acuerdo de la Junta de Diputados, hasta un veinte por ciento más. Se intentó establecer, por tanto, un límite a la negociación. No obstante, dentro de él, los socios tenían una responsabilidad solidaria.

Hay que destacar que esta fórmula de limitación de la responsabilidad, que se mantenía solidaria, no es nueva, habiéndola encontrado Levy-Bruhl para 1.722 en una sociedad colectiva de Lyon (364).

La formulación de la limitación de las responsabilidades estaba ya claramente expresada en 1.775, en la escritura de renovación de la compañía de la "Inmaculada Concepción de María Santísima Señora Nuestra y de la Gloriosa Santa Eulalia" (en adelante, "Inmaculada Concepción"), constituida inicialmente en 1.772. En ella se afirmaba: "nuestras obligaciones no serán por más de los 5.000 pesos por cada acción de sus respectivos intereses" (a. 2), se mantenía el principio de solidaridad con los socios morosos y, a estos efectos, obligaban todos sus bienes (365). A partir de este momento, todas las

(364) Levy-Bruhl, Histoire..., p. 33.

(365) A.H.P.B., notario Ramón Font y Aliet, Manual de 1.775, fols. 37r-45v.

compañías analizadas tienen establecida la responsabilidad limitada de los socios, tanto las de nueva creación como las renovadas. Así, la "Compañía de la Sagrada Familia, Jesús, María y Joseph" (en adelante "Sagrada Familia") en 1.776 afirmaba: "... el constituirnos responsables cada uno por su respectivo interés en los diez mil pesos de cada acción" (366). Lo mismo reza para renovación de la escritura de la compañía de "La Merced" (1.777), de "Durán, Larrad, Gibert y cía." (1.778, 1.782)... y alcanza su máxima formulación en la década de los ochenta.

El escaso número de estas compañías y la costumbre, que consideraba la responsabilidad ilimitada como el principio que garantizaban las mismas, explican la aparición de la siguiente cláusula en la escritura de renovación de la Compañía de Hilados, (1.788) que insertamos por su interés aunque, por ser autorizada por Real Cédula caiga fuera de nuestro ámbito actual de análisis:

"... Y por la responsabilidad de las cantidades que se tomaren solamente podrán obligarse los fondos y capital de la Compañía o la viril parte en que interese en ella cada uno de sus socios, pero no los demás bienes de cada uno de ellos en particular; previniendo que en todas y cualesquier escrituras y documentos de obligación que se firmaren relativos a las dependencias de esta Compañía deberá usarse una expresión que manifieste con claridad aquella sola responsabilidad y la entera exclusión de los demás bienes de los particulares interesados" (367).

(366) Ibidem, Manual de 1.776, fols. 43r (a. 3).

(367) A.H.P.B., notario Juan Pamiés, Manual de 1.786-87-88, fol. 45v. (4 de diciembre de 1.788). Subrayado mío.

A falta de datos más completos, se puede afirmar que existía una cierta resistencia social a asumir el riesgo en las compañías por acciones, sin la garantía de la protección real. Resistencia que se encontraba, incluso, en los promotores, que conciben unas sociedades en las que esta carencia se suple con el control sobre la personalidad y solvencia de sus participantes y, en su caso, la aceptación —que no participación— institucional, como hemos observado para alguna compañía.

En Madrid, el proyecyo de sociedad de seguros terrestres y marítimos (1.786), tuvo grandes dificultades en la colocación de sus acciones. No sólo —presumiblemente— era mirado con desconfianza por los potenciales asegurados sino también por los potenciales accionistas. En consecuencia, los promotores solicitaron Real aprobación, pues se supone "atraerá suscriptores" (368). Sin detenerme en los detalles del desarrollo de esta iniciativa, que escapa a las intenciones de este capítulo, quiero señalarla como exponente de la mencionada resistencia a las sociedades por acciones de responsabilidad limitada y como ejemplo de que, todavía en 1.786, la idea más extendida era la de considerar la aprobación Real como garantía indispensable para las mismas.

Esta situación se daba incluso en el ramo del seguro, que la iniciativa privada había abordado hacía tiempo. A ello se puede contraponer que esta compañía iba a inaugurar un campo

(368) Cit. por Jovellanos en su "Informe sobre el establecimiento de una compañía de seguros", en Obras..., t. II, p. 526.

nuevo, el seguro terrestre. En todo el proceso, sólo Jovellanos se mantuvo contrario a que el Estado sustituyera la iniciativa privada; ni siquiera contó con el apoyo de Juan Antonio de los Heros, fiscal de la Junta de Comercio, cuyas posiciones críticas sobre el privilegio nos son conocidas. Su posición quizá se explique por su papel dentro de la Compañía de los Cinco Gremios Mayores, cuya actividad se extendía a este sector. El resultado fue, como ya vimos, una posición ambigua, por la que se protegía el proyecto sin concederle apoyo financiero (369).

En la misma línea, pero sin las justificaciones antedichas nos aparece la "Compañía de Seguros Marítimos Reina María Luisa", creada por Real Cédula de 23 de febrero de 1.800. En su artículo 20 se le concedía la "exclusiva por dos años", para este sector y para todo el país (370). Ahora no existía el argumento de la novedad del objeto —seguros marítimos— ni el de su sede —Cádiz—. La única justificación posible para el privilegio era la existencia de una fuerte crisis en el sector, debido a la coyuntura bélica. No parece que la concentración del seguro en una única compañía fuera la mejor solución.

De hecho, el mencionado privilegio no se respetó y en

(369) Para ambas posiciones, Jovellanos, Informes..., de 20 de septiembre y de 13 de octubre de 1.789. Obras..., t. II, p. 75 y 526-27, J. A. de los Heros, Varias Respuestas Fiscales..., tomo VIII, fols. 282-284v (7 de agosto de 1.789) y, en el mismo tomo, fol. s/n., respuesta de 6 de diciembre de 1.789. El proyecto, en A.H.N., Osuna, Cartas, 427 bía, tomo 59. v. supra. pp. 284-285.

(370) R.C. de 23 de febrero de 1.800. en A.H.N., Consejos, lib. 1.500, núm. 2.

1.801 se constituyó la Compañía de Seguros de la Sagrada Familia, San Joaquín y Santa Ana de Barcelona. No fue una simple prórroga de la que con nombre similar existía desde 1.771. Las características personalistas de estas sociedades obligan a formar nueva compañía cada vez que varían sus socios:

"... en virtud de esta pública escritura formamos la presente sociedad y nueva compañía de seguros marítimos" (371).

Para esta fecha, la fórmula empleada para la delimitación de la responsabilidad social es la siguiente. En primer lugar, anuncia que su fondo social:

"... es el capital que estará sujeto a la responsabilidad de los seguros que por cuenta de esta compañía firmaren los Directores" (372).

aunque, por no estar su capital desembolsado, quedan responsables solidariamente de los impagos de los socios morosos (a. 11). Por la misma razón, aunque se comprometen sólo hasta el importe de su acción (a. 20), para su desembolso deben obligar "todos nuestros respectivos bienes" (cláusula final).

Para comocimiento de los asegurados, la póliza debe concluir obligatoriamente con la siguiente cláusula:

"Para el cumplimiento de las obligaciones en que queda constituida la Compañía por la presente póliza, obliga su entero fondo" (a. 18).

(371) A.C.A., Audiencia, Consulado, 3/6, fols. 285r-295r. Reproduce la escritura de 20 de diciembre de 1.801, formalizada ante Francisco Roquer y Simón.

(372) Ibidem, fol. 285v. La cita corresponde al preámbulo.

Por lo tanto, podemos resumir lo que hasta aquí se ha dicho en las siguientes conclusiones: las sociedades por acciones del siglo XVIII podían adoptar tanto las fórmulas de responsabilidad de las personalistas como las de las anónimas; que la muestra analizada nos indica que la responsabilidad limitada fue introducida en estas sociedades en Barcelona a partir de 1.775, en Cádiz en 1.777 y que hasta 1.829 fue desconocida en Bilbao; que la limitación de la responsabilidad seguía siendo considerada como un riesgo extraordinario que debía ser compensado con un cierto apoyo institucional y que, en algunos casos se prefería, incluso, la aprobación Real. Por ello la formulación de este principio tuvo un desarrollo desigual hasta 1.829, en que fue legitimado con carácter de generalidad en el Código de Comercio. Ello no quiere decir que desde ese momento no sufriera ningún altibajo en la ley y en la práctica, cosa que será tratada en el próximo capítulo.

d) Capital.-- Estas sociedades se constituyen con un alto volumen de capital prometido dividido en unas acciones de valor también muy elevado, estando su transmisión sujeta a normas muy estrictas. Todo ello las vuelve a presentar como unas sociedades de transición, en las que por su denominación y volumen aparecen como compañías de capitales, pero en las que los lazos de los accionistas con la entidad son similares a los de las compañías personalistas.

Las compañías analizadas tienen un volumen de capital que varía entre los 150.000 y el millón de pesos. El mayor

número está comprendido entre los 400.000 y los 500.000 pesos. Su tamaño es, por tanto, similar al de las Reales Compañías de Comercio y Fábricas y entre dos o tres veces menor que el de las primeras creadas para el comercio colonial (Caracas, Habana, Barcelona)

La sociedad de Fondos Perdidos (1.776) es la única de la muestra analizada, que supera los 565.000 pesos, para fijar su capital en un millón (como las compañías de Sevilla, Habana o Barcelona). Su alto volumen se explica en su peculiar objeto, que ya fue discutido.

Las compañías por acciones —de seguros fundamentalmente— se constituyen con un alto capital, aunque hay que considerar que la lenta introducción de nuevas formas de sociedad hace que sea posible en estos años, encontrar colectivos que casi alcanzaban los doscientos mil pesos (373).

Es evidente que las necesidades de concentración capitalista dió lugar a estas nuevas sociedades, que tenían todo su capital dividido en acciones, de forma que, el número de participantes en las empresas es sensiblemente superior al de las tradicionales. Pero no tanto como en las privilegiadas, puesto que el valor de las acciones era muy elevado.

En todas las compañías analizadas, el valor facial de los títulos era de 5.000 ó 10.000 pesos. Sólo hay una excepción, "La compañía de Nuestra Señora de Begoña y San Car-

(373) v. la relación de las sociedades bilbainas incluída en I. Guiard, Historia..., t. III, pp. 526-534. Es una excepción, aunque es frecuente para los años estudiados, un capital de 60-70.000 pesos.

los", que establece una cantidad media entre estas cantidades (374). En Cádiz, la uniformidad era absoluta, siendo para todas las sociedades de 10.000 pesos (375). En Barcelona, por en contrario, esta cantidad es una excepción ("Sagrada Familia" y "Durán, Larrad, Gibert y cía"), siendo, en el resto, de 5.000.

Estos valores eran, en el mejor de los casos, veinte veces superiores al de las acciones de las Reales Compañías de Comercio y Fábricas y de las creadas para el comercio colonial. En aquéllas, el nominal era de 200-250 pesos y en éstas, desde 1.755, se fijó en esta última cantidad.

Estas compañías, por tanto, tenían un escaso número de acciones y la cantidad mínima de riesgo que se podía asumir era muy elevada (376). Era lógico, por tanto, que las participaciones estuvieran muy repartidas. En las sociedades gaditanas la proporción entre el número de acciones y el de socios oscila entre el 1.17 y el 2.81. El primer caso es el de la sociedad titulada "María Stma. Ntra. Sra. de las Mercedes", con 40 acciones y 34 accionistas; seis de ellos tenían dos títulos; el resto, uno. La segunda, es la titulada "Glorioso Patriarca Sr. S. Joseph", con 16 participantes que se reparten 45 títulos. Los 7 máximos accionistas poseían 4 acciones

(374) Ibidem, p. 534.

(375) García Baquero, Cádiz..., t. I, p. 441.

(376) Sin que tal práctica estuviera descrita en la escritura, hemos encontrado la compra de una acción de la Sociedad de Fondos Perdidos por parte de dos hermanos que no tenían formada sociedad. Se trata de compartir el riesgo individual mediante la compra de media acción (A.H.P.B., notario, J.M. Avelló, 1.776, fol. 325.).

cada uno (377),

En Barcelona, el reparto era aún mayor, oscilando la ratio mencionada entre un 1.47 y 1.63. El primer caso es el de la "Sociedad de Fondos Perdidos". Sus 71 títulos iniciales fueron suscritos por 48 individuos, Uno poseía cuatro, otros tres, 17 dos y el resto una (378). El segundo es el de la sociedad de la "Inmaculada Concepción", en su escritura de renovación de 1.775. Sesenta y nueve socios se repartieron 113 acciones. Uno de ellos tenía la titularidad de cuatro, siete de tres y veintisiete de dos. El resto poseía una (379). Una sociedad, "Sagrada Familia", a lo largo de su vida, se mantuvo fiel al principio de una acción por socio (380). En otra, "Nuestra Señora de la Esperanza", se prohibía poseer más de dos acciones (381).

En esta región se da también un caso especial. Es la sociedad de seguros de la "Purísima e Inmaculada Concepción de María Santísima Señora Nuestra, San Francisco de Paula y Santa Eulalia" (en adelante, "San Francisco de Paula", fundada en 1.777 por la de Fondos Perdidos. Por ello, sus cien acciones estaban repartidas entre cuatro socios; aquélla sociedad, que poseía 84 y otros tres, que pertenecían a su dirección (382).

(377) Ibidem, pp. 441-442.

(378) A.H.P.B. notario José Mariano Avellá, Manual de 1.776, fol. 310.

(379) A.H.P.B., notario Ramón Font y Alier, Manual de 1.775, fol. 43.

(380) Ibidem, Manual de 1.771, fol. 478; Manual de 1.776, fol 43v.

(381) Ibidem, Manual de 1.777, fol. 77v.

(382) A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.777, fol. 41v.

En la sociedad bilbaína, catorce socios se repartían 60 acciones, siendo el lote mínimo de dos y el máximo de cuatro (383).

Las sociedades consideradas tienen, por tanto, un elevado número de participantes si las comparamos con las colectivas y comanditarias simples y bajo si lo hacemos con las privilegiadas. Su número oscilaba entre los catorce de la compañía bilbaina en 1.783 y los 69 de la "Inmaculada Concepción" en 1.775. Fuera de ello, dos excepciones; la mencionada de "San Francisco de Paula" y la de "Fondos Perdidos", cuyas 200 acciones se repartían en 1.785 entre los 148 socios (384).

Estos socios solían ser "hombres de comercio" (385). No existía, en estas compañías, la conciencia de la necesidad de atraer hacia la compra de acciones el ahorro de los individuos ajenos a la matrícula de comerciantes. Ello se plasmaba en el elevado precio de la participación mínima y en los requisitos para poder acceder a la cualidad de accionista. La política de incorporación del ahorro improductivo y su utilización como capital en las tareas productivas se planteó enfáticamente en la "Sociedad de Fondos Perdidos", en la que

(383) I. Guiard, Historia del Consulado..., v. III, p. 534.

(384) A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.785, fol. 289.

(385) A.H.P.B., notario Ramón Font y Alier, Manual de 1.772, fol. 58v (Compañía de la "Inmaculada Concepción"); también en la de la "Sagrada Familia", ibidem, Manual de 1.771, fol. 474r. La comparación entre la matrícula de comerciantes y los accionistas de estas compañías nos revela muchas conexiones que son plenas si reducimos nuestra comparación a los directores. Nuestros protagonistas pertenecen a la que Vicens Vives denominó segunda generación burguesa de Cataluña ("Coyuntura económica...", pp. 24-33).

como mencionamos, tendrían el carácter de rentas vitalicias. La compañía creada inicialmente como "Banco de cambios" pretendía, asimismo, conseguir que los ahorradores les confiaran sus fondos y su utilización, al menos parcial, en los diversos sectores económicos. Son las únicas, además, que se plantean la práctica de tomar dinero en préstamo para aplicarlo a sus fines. Ninguna compañía, sin embargo, se planteó abrir sus puertas a nuevos tipos de accionistas.

El análisis de los accionistas nos revela una importante participación de compañías colectivas y una cierta presencia del estamento nobiliario. Sólo hemos encontrado un caso de participación femenina de forma inicial. Aunque las mujeres podían comprar acciones, su participación se produjo, en la mayoría de los casos, por herencia. La única excepción se encuentra en la denominada "Durán, Larrad, Gibert y compañía", cuya cajera era Doña Josefa Casas, que ejercía su cargo por medio de su apoderado. Un testigo tuvo que firmar la escritura "por dicha Josefa Casas y Clavell por no saber escribir" (386). Curiosamente, la misma señora aparece como accionista un año antes, en la compañía de la "Virgen Nuestra Señora invocada con el nombre de la Merced y el de los gloriosos San Antonio de Padua y San Ramón de Peñafort" (en adelante, "de la Merced") (387).

El capital de estas sociedades no representaba necesaria

(386) Ibidem., Manual de 1.778, fol. 35r.

(387) Ibidem., Manual de 1.777, fol. 328v.

mente un patrimonio social efectivo sino que, las más de las veces, era un capital prometido en su totalidad. De forma general puede afirmarse que las acciones no estaban desembolsadas, siendo "de mera responsabilidad" (388); es decir, indicativos de la cuota de responsabilidad que correspondía a su poseedor y muestra del compromiso que éste adquiriría para responder a los dividendos pasivos reclamados.

Las sociedades analizadas nos revelan tres comportamientos a la hora de regular el desembolso de las acciones que se efectuaba siempre en dinero, a diferencia de lo que ocurría en colectivas, comanditarias simples y privilegiadas. En primer lugar, ausencia de desembolso. Los socios únicamente se comprometen a realizar, cuando les sea exigido, las entregas necesarias. Es el caso de todas las sociedades gaditanas (389) y el de tres barcelonesas, de las que es muestra la de "San Francisco de Paula":

"Los socios que somos de la presente compañía seremos tenidos a satisfacer de pronto las cantidades que por el Director a, proporción de nuestras acciones nos fueren señaladas, cuando por el pago de alguna pérdida o avería no hubiese bastantes fondos ganados y existentes en caja, a fin de que por falta de puntualidad no se menoscabe el crédito y honor de la compañía..."

"Sin embargo de las obligaciones que por la presente escritu-

(388) Jovellanos, "Informe..." de 13 de octubre de 1.789, en Obras..., t. II, p. 526. La misma distinción en la escritura de "Durán, Larrad, Gibert y cía": "que el capital de esta compañía deberá consistir en cuatrocientos mil pesos de a ocho reales plata cada uno, a saber ochenta mil pesos efectivos al respecto de dos mil pesos por acción, y los trescientos veinte mil pesos en responsabilidad" (A.H.P.B., notario Ramón Font y Alier, Manual de 1.778, f. 29v.

(389) A. García-Baquero, Cádiz..., t. I, p. 440.

ra contraemos, las que quedan anteriormente estipuladas, no juzgamos necesario por ahora poner existente en caja el importe de nuestras acciones, pues bastará nuestro crédito y la responsabilidad que en virtud de este instrumento contraemos" (390).

En estas sociedades, el capital se basa enteramente en el crédito personal de los socios. Esta conducta sólo es posible en un tipo de empresa que no necesita desembolsos previos y a costa de limitar sus operaciones.

Otro tipo de conductas es el de aquellas sociedades que, sin exigir desembolso inicial, consideraban conveniente que se realizara con los beneficios que rindiera la empresa. Es el caso de la "Compañía de la Sagrada Familia" en su escritura de renovación de 1.776 (en 1.771 seguía la conducta anterior), hasta alcanzar un desembolso de 3.000 pesos, y el de la "compañía de Nuestra Señora de la Esperanza y las Almas del Purgatorio" (en adelante, "Nuestra Señora de la Esperanza"), hasta 1.500, lo que equivalía, en ambos casos a un 30%:

"Tercio: Aunque no sea necesario poner en caja el fondo señalado en el proemio de esta escritura, se conforman no obstante los interesados de la presente compañía a dejar en ella de los beneficios, que Dios les dispensare hasta la cantidad de mil y quinientos pesos sencillos por cada acción..." (391).

Estas sociedades consideran conveniente la disponibilidad de un dinero en caja para la pronta satisfacción de las

(390) A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.776, fols. 41v y 42r.

(391) A.H.P.B., notario Ramón Font y Alier, Manual de 1.777, fol. 77v.

pérdidas aunque no abordan la inversión de una parte del mismo en otras actividades.

En tercer lugar, se pueden citar las compañías que exigían un desembolso inicial. Son aquéllas cuyo objeto social requiere el empleo del capital en algunas empresas: "Durán, Larrad, Gibert y cía" y la "Sociedad de Fondos Perdidos". En aquélla, un 20%; en ésta, un 10%:

"A fin de poder la compañía emprender desde luego algunos negocios deba cada uno de nosotros por todo el mes de setiembre entregar algunos efectivos como así lo prometemos, en la tesorería de esta sociedad quinientos pesos por cada una de nuestras acciones..." (392).

Este planteamiento general hace que, como resaltamos, los socios sean en su mayor parte comerciantes; es decir, que estas sociedades no atraen ahorros de nuevos colectivos excepto en el caso de la de Fondos Perdidos; motiva que estén basadas en el crédito personal de sus componentes, que ven dificultada su separación de la sociedad a no ser por muerte civil (en cuyo caso es expulsado) o natural.

Esta situación está claramente expuesta por la sociedad bilbaina, cuyos componentes no se pueden separar de ella "para no interrumpir las operaciones de la compañía" (393). En las gaditanas, señala Baquero, la transmisión se admite "con reparos" (394). Generalmente, a la muerte de un socio, las acciones pasaban a sus herederos, aunque su capacidad y solven

(392) A.H.P.B., notario Ramón Font y Alier, Manual de 1.777, fol. 77v.

(393) I. Guiard, Historia..., t. III, p. 535.

(394) García Baquero, Cádiz..., t. I, p. 418.

cia debía ser examinada por los Directores y su ingreso aprobado por la Junta General de Accionsitas; pero si ésta prefiriera suprimir dichas acciones, lo podría hacer. Sólo una, entre las sociedades gaditanas, estipula simplemente que la acción, a la muerte de su poseedor, pasará a su heredero; precisamente la misma que poseía limitación de responsabilidad. Nada se dice de la enajenación (395).

Las compañías barcelonesas se comportan de forma similar. El único aspecto que está contemplado en todas las escrituras es la transmisión, por muerte civil o natural. En aquél caso, el socio es inmediatamente expulsado. En ésta, las acciones pasan a sus herederos, que deben decidir en un plazo determinado si les interesa continuar en la sociedad. Si es así, deben formalizar en escritura pública su aceptación de los pactos sociales. Incluso en este caso, en alguna compañía se estipula que el heredero debe tener "las debidas circunstancias de respeto" (396). Cabe destacar que en ocasiones se explicitó que si el heredero fuese mujer o menor, debería desembolsar el importe de la acción, cosa que, como vimos, no se exigía a los varones mayores de edad mercantil:

"Undécimo. Si alguno de los socios, e interesados muriese durante la presente sociedad, y Compañía queda a cargo del principal, o segundo Director de pedir a sus herederos, o albaceas si quieren, o no continuar en ella, y para resolverlo tendrán dos meses de tiempo y tanto que quieran continuar como no, deberán notificarlo por escrito al Principal o Segundo Director y mientras no se haga serán reputados por

(395) Ibidem, pp. 418-420.

(396) A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.777, fol. 43r.

interesados en los seguros que se firmaren, y demás y faltando a declarar su ánimo dentro de los referidos dos meses, quedarán separados de dicha Compañía. Y si lo hicieren de querer continuar el interés en ella habrán de otorgar escritura pública y aceptar todos los capítulos de la presente sociedad, interviniendo si fuesen menores las solemnidades de derecho necesarias para su válida obligación, y si fuese señora o menor para obviar disputas, o litigios exhibirá de pronto el importe de sus acciones, de que se hará cargo el Principal o segundo director, dando recibo de él o en su defecto bastará que los albaceas, siendo de nuestra satisfacción, se obliguen por escritura a aceptar todos estos capítulos" (397).

Se regulaba también el hecho de que, por renuncia de los herederos, o por no tener todas las acciones suscritas, quedarán algunas vacantes. En este último caso se encontraba únicamente la "Sociedad de Fondos Perdidos" (a. 2):

"No siendo posible recoger de una sola vez las suscripciones de todos los accionistas, y muy conveniente, que se reserven algunas acciones para distribuir las a su tiempo entre sujetos, que puedan ser útiles a la sociedad, es condición que ésta desde ahora se entienda formada por nuestras respectivas acciones pudiendo recibir de los imponentes las cantidades que estos entregaren hasta igualar el capital de nuestras acciones..." (398).

La admisión de socios, en todos los casos, estaba controlada por la Junta General de Accionistas, excepto en la "Compañía de la Merced" desde 1.776 (a. 16) y en la de "Fondos Perdidos" (a. 11), que quedaba reservada a la Junta de

(397) A.H.P.B., notario Ramón Font y Alier, Manual de 1.774, fol. 333r ("Compañía de la Merced"); sobre el desembolso por parte de mujeres y menores, ibidem, Manual de 1.772 fol. 71 r. ("Compañía de la Inmaculada Concepción").

(398) A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.776, fol. 293r.

Dirección. Un ejemplo-tipo es el siguiente:

"Décimo nono. Siendo como es cierto, que la vida, y bienes de fortuna no son estables, siempre que acaeciese vacar alguna de las acciones, sea por muerte natural (que Dios no permita), o por muerte cicil de alguno de los socios, las que resultaren vacantes se podrán ceder a otros, que entren en su lugar, mediante la aprobación de la Junta General de Interesados, y en este caso el que entrare de nuevo deberá obligarse con Escritura pública y aceptar todos los cargos y capítulos de la presente sociedad y Compañía" (399).

En todos los casos, era posible resolver el reparto de dichas acciones en el seno de la sociedad:

"... Y quedando algunas (acciones) vacantes, deberán repartirse a los otros socios que las quisieren, y sólo en caso de no haber alguno de ellos que las quiera, podrá distribuirse fuera de la sociedad, y entre personas cuyos bienes y caudales sean capaces para fundar una competente seguridad" (400).

La enajenación de acciones no está regulada más que en una ocasión, de nuevo en la "Sociedad de Fondos Perdidos". En las demás se consideraba como una separación con devolución de la acción a la Compañía. Esta separación estaba prohibida durante un cierto tiempo en algunas sociedades, como en "La Merced", que estipulaba:

"Segundo. Que el término de la compañía será durante el beneplácito del mayor número de los interesados, los cuales podrán hacerla terminar siempre que gusten, pero no podrá ningún particular o par

(399) A.H.P.B., notario Ramón Font y Alier, Manual de 1.774, fol. 333r.

(400) A.H.P.b., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.776, fol. 299v.

ticulares, que no lleguen a dicho mayor número apartarse de ella hasta el término de tres años a contar desde el día de la fecha por motivo de los transtornos que causaría para arreglar las cuentas y seguros pendientes..." (401).

En lo sucesivo, esta separación debería avisarse con una antelación de seis meses. En la mayoría de las compañías, no se estipula nada al respecto, pero la imposibilidad de enajenación limita este acto a los momentos de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas que, en su caso, renovarían la escritura social. Sobre la atadura de los socios al colectivo cabe destacar también que, en ocasiones, incluso se les prohibía interesarse en otras del mismo ramo (402). Si un socio residía fuera de la ciudad debía dejar apoderado —a satisfacción de la Compañía— que le representara.

Sólo la Sociedad de Fondos Perdidos regula la enajenación de acciones. Incluso en este caso, los directores deben examinar la idoneidad del comprador:

"(6) Si alguno de nosotros, o de los que de nuestro Derecho sucedieren quisieren salirse de esta sociedad y de las obligaciones que en ella tendrá contraídas, podrá hacerlo enagenando o vendiendo la acción, o acciones, con que se interese a favor de algún otro sujeto natural de estos Reinos, en quien concurren las debidas circunstancias a satisfacción de los Directores, Contador, tesoreros y Consultores: Y habilitado, y admitido que sea dicho nuevo socio, después de haber prestado su correspondiente caución fidejusroria, quedará repues

(401) A.H.P.B., notario Ramón Font y Aliet, Manual de 1.774, fol. 329r.

(402) "Sociedad de Fondos Perdidos", A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.776, fol. 294v. e "Inmaculada Concepción", notario Ramón Font y Aliet, Manual de 1.775, fol. 42r.

to en lugar del actual, y éste exonerado de su primitiva obligación" (403).

Observamos que en estas sociedades es esencial el examen de la solvencia de los nuevos socios, debido al escaso desembolso de las acciones y a la responsabilidad solidaria. Su carácter personalista se magnifica también en esta situación. El Código de Comercio de 1.829 eximió a las Compañías anónimas de esta carga de responsabilidad sobre las acciones nominativas que no estaban desembolsadas en su totalidad, estipulando que el impago de los dividendos pasivos por parte del comprador recaía sobre la fortuna del vendedor (a. 283).

En estas compañías sólo se regula, cuando se hace, el aumento de capital y no su reducción. Es el mismo caso que veíamos en las privilegiadas. La decisión de aumentar el capital compete a la Junta General de Interesados y se piensa en dos posibilidades; una, idónea para no aumentar la "gran familia" que siguen siendo estas asociaciones, que es aumentar el valor de las acciones; una segunda, más incómoda por cuanto significa indagar en la vida y costumbres de otras personas, es la de admitir nuevos socios.

Por ello, la práctica habitualmente seguida es la siguiente:

"(14) Décimocuarto: Cuando el Director y Junta Particular tuviesen por conveniente el acrecer las acciones o aumentar el número de ellas admitiendo nuevos socios, en este caso, se convocará la Jun-

(403) A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.776, fol. 292v.

ta General de Interesados para determinar lo que se crea más conveniente, como asimismo si podrán o no aumentarse las partidas de seguros".

" (...) Con facultad de aumentar el fondo, siempre que se tenga por conveniente, repartidos igualmente entre los mismos, o agregando más acciones de sujetos de satisfacción y aprobación de los Interesados" (404).

De forma excepcional, una compañía, constituida con 390.000 pesos autoriza a sus directores a admitir nuevos socios hasta alcanzar los 500.000 y sólo durante los dos primeros meses (405).

La práctica lleva a algunas compañías a reducir sus acciones, lo que realizan al no sacar a la venta las devueltas por muerte natural y civil (406).

e) Organos de dirección y gestión.— Las dimensiones de estas compañías impiden que la totalidad de los socios desempeñen tareas de dirección. Por esta razón, esta función se delega en un núcleo ejecutivo que ostenta la representación de la sociedad, que realiza las tareas de gestión y que está sometido al control del conjunto de accionistas a los que tiene que rendir cuentas periódicamente.

Las tres zonas analizadas muestran tres modelos diferentes sobre los órganos de gobierno de las sociedades, desde el más sencillo y cercano a las compañías tradicionales, que

(404) A.H.P.B., notario Ramón Font y Aliet, Manual de 1.771, fols. 333r y 335v.

(405) Ibidem, Manual de 1.772, fol. 59r.

(406) Ibidem, Manual de 1.776, fols. 178v-180r. Junta de Accionistas de la compañía de la "Inmaculada Concepción".

se da en Bilbao al más sofisticado, en Barcelona.

La Compañía de "Nuestra Señora de Begoña y San Carlos", de Bilbao, tiene un director y un vicepresidente, nombrados en Junta de Interesados entre sus miembros (a. 7). Aquél ser virá el cargo un año y, al siguiente, será sustituido por el vicedirector, cuya vacante será cubierta por la Junta, a plu ralidad de votos (a. 9). Los directores tienen la obligación de realizar el giro de la compañía, contratando seguros y pa gando las pérdidas (para lo cual exigirá desembolsos pasivos de los acionistas) (aa. 14 y 15) y, al terminar su mandato, presentar un balance a la Junta de Interesados (a. 9) que decidirá la cuantía de las ganancias que se ha de repartir como beneficio (a. 6). La Junta de Interesados debía ser con vocada por los directores "en todos los casos difíciles o se rios" (a. 8) y, de forma obligatoria, una vez al mes, para acordar "todos los medios capaces de producir el adelanta- miento de la Compañía" (a. 12) (407).

En esta compañía se observa, por tanto, un sencillo es- quema de dirección en el que la participación activa de to- dos los interesados es muy destacada.

García Baquero nos ha mostrado que en Cádiz todas las compañías conocidas seguían un esquema similar en el punto que nos ocupa. En todas ellas se da una clara separación en- tre propiedad y dirección y se nombra un Director, con una retribución que siempre es de un medio por ciento sobre el va

(407) I. Guiard Larrauri, Historia..., v. III, p. 536.

lor de todas las pólizas de seguros que suscribiera por cuenta de la compañía. Las funciones de este director son de tres tipos. En primer lugar, debe llevar los libros de la compañía y realizar^d balance que, junto a aquéllos, será presentado a la consideración del conjunto de accionistas en una Junta General anual. En segundo, es de su cargo el cobro de los premios de los seguros que contrate así como el pago de las pérdidas que ocurran, sin que por ello tenga una responsabilidad extraordinaria. En tercer lugar, ostenta la representación de la compañía en la formalización de los contratos de seguros, en los posibles pleitos y en la negociación de los caudales o efectos que hubieran pasado a engrosar el patrimonio social. Por último, se establece que, a su juicio, puedan reasegurar con cualquier otra compañía, española o extranjera (408).

En Barcelona encontramos que, en todos los casos, la organización interna de las compañías se articula en tres niveles: a) un órgano máximo de decisión, que ejerce funciones de control y supervisión del ejecutivo, y que está formado por la totalidad de los socios. Es la Junta General de Interesados o Accionistas; b) una Junta de Diputados o Consiliarios, que es un órgano consultivo del núcleo directivo; c) una Dirección, que puede ser unipersonal o colegiada.

Son muy escasas las diferencias observadas en las normas de funcionamiento de estas compañías; cuando existen, son fr

(408) A. García Baquero, Cádiz..., t. I, pp. 443-446.

to de la novedad de la figura y de un momento de tanteos, más que derivadas de unas verdaderas diferencias de planteamiento.

En la Junta General (409) tienen derecho a participar todos los socios, cada uno de los cuales dispone de un voto (410). Esta es una primera diferencia, que les separa tanto de la antigua privilegiada como la de la moderna anónima. Todos participan con voto, ya que estas sociedades todavía no son muy numerosas. En ninguna compañía se establece que el número de votos esté en función de las acciones suscritas. Quizá porque ello hubiera implicado que se considerara al "interesado" como mero capitalista cuando, por el contrario, hemos estado viendo que se le estimaba fundamentalmente, como persona poseedora de crédito. Sólo una compañía, la de "Fondos Perdidos", se ocupa de este extremo, y sostiene las anteriores conclusiones:

"...Y es condición que en las Juntas Generales, a que concurren los socios, o apoderados, no puedan tener más que cuatro votos, contado el que ya les compete, como tales accionistas, y que cada uno de estos sólo tenga un voto por sí, aunque interese por dos o más acciones". "

"La Junta General. Se compondrá de todos los accionistas, que concurren personalmente, pudiendo cada uno a más de su voto tener otros tres de los socios que se hallaren ausentes o impedidos" (411).

(409) Se denomina frecuentemente "de Interesados" aunque se va introduciendo la palabra "Accionista".

(410) Se admite la representación para aquéllos que vivan fuera de la ciudad, para las mujeres y los menores.

(411) A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.776, fols. 294v y 298v.

Las Juntas Generales ordinarias se celebran con una frecuencia anual, excepto en la "Sociedad de Fondos Perdidos", en la que se reúne cada tres años. Es, como veremos, una sociedad en la que el poder está particularmente concentrado.

Sus atribuciones son, fundamentalmente, de control y supervisión de los directores, a los que nombra y depone. La mayor parte de las escrituras le otorgan explícitamente la capacidad de decidir sobre la gratificación extraordinaria que debía indemnizarles en los años de poco negocio, ya que la retribución de los Directores consistía en un tanto por ciento de las utilidades.

La Junta revisa el balance social y decide el modo de realizar el reparto de los beneficios, a propuesta de la dirección, así como si continuar o no con la compañía en aquéllas que se constituyeron "durante el beneplácito de los interesados". Como ejemplo, se pueden citar las disposiciones de la "Compañía de la Sagrada Familia", reproducidas en las demás de forma similar:

"Sexto. En las Juntas Generales de Interesados, que se han de tener anualmente para el examen de su estado, y en todas las demás que se consideren precisas para su buen régimen..."

"Undécimo...; y de lo que resulte de beneficios líquidos asignamos a los referidos Directores respectivamente a lo que cada uno administrare, cuatro y medio por ciento; y para el caso de alguna desgracia (que Dios no permita) de ser mayores las pérdidas que las ganancias, o que éstas sean de corta entidad, deliberaría la Junta General de Interesados la gratificación que tenga a bien concederles, atendido como es justo a sus aplicaciones y trabajo".

"Duodécimo... [Deberán los directores] formar al fin de cada

año el Balance, y presentarle firmado a la propia Junta General, la que en vista de lo que resulte determinará si debe o no hacerse reparto de beneficios..." (412).

Ya observamos cómo, en la mayoría de las compañías, es la Junta General la que decide sobre la admisión de nuevos socios, facultad que, en ocasiones, comparte con la de Diputados.

En las compañías de seguros, y por su peculiar objeto, el estallido de una guerra obliga a los Directores a suspender la celebración de contratos y convocar de forma inmediata una Junta General de Interesados. Este organismo, ante la nueva situación, decidirá si continuar la negociación o no y, en caso afirmativo, en qué rutas, con qué banderas y hasta qué límite. En este momento, los accionistas disconformes con la decisión mayoritaria pueden separarse de la compañía:

"... bajo la precisa obligación que cuando se verifiquen o se prevean desavenencias entre algunas potencias haya de convocar desde luego la Junta de Consiliarios a fin de que con toda aquella reflexión y pulso que se requiere, determine la misma qué cantidad podrá asegurarse en cada buque de los que se teman mayores riesgos de los actuales, y sobre qué premios, siendo prevención que en el caso de rompimiento de guerra contra nuestra España que antes de su publicación se cometiesen hostilidades o represalias, o que con algún fundamento se teman discordias, el Director ha de suspender, y suspenderá la firma convocando inmediatamente a la Junta General de Interesados, para que en ella se trate y determine lo que deba practicarse, con advertencia de que si a pluralidad de votos se resolviese la continuación de la Compañía podrá cualquiera interesado separarse en aquel mismo día decla-

rando su ánimo y después de verificada la paz tampoco será reputado por socio a menos de proceder nueva admisión" (413).

Precisamente fue la prolongada situación bélica de finales de siglo y principios del XIX la que provocó la caída de estas compañías en el marco de una crisis económica generalizada.

La Junta de Consiliarios o Diputados es llamada en ocasiones, Particular, por contraposición a la General de Interesados. Está compuesta por los directores, el contador y un número variable (entre dos y siete), de diputados, Consiliarios o Consultores, que son elegidos por la Junta General, entre sus miembros.

Es, como en las Privilegiadas, una dirección ampliada. Se reúne con una frecuencia mensual y, de forma extraordinaria, cada vez que los directores lo estimen necesario, "a fin de atender y dar curso a cualquier asunto de importancia" (414). Las únicas excepciones son la "Sociedad de Fondos Perdidos", cuya Junta de Diputados se reúne cada cuatro meses y la de la Inmaculada Concepción que lo hace cada tres (415).

Sus atribuciones, poco definidas en las primeras escrituras, fueron concretándose y ampliándose con el tiempo. Deci-

(413) A.G.A., Audiencia, Consulado, 3/6, fol. 288v. Se trata de la escritura de la "Compañía de la Sagrada Familia", de 1.801.

(414) A.H.P.B., notario Ramón Font y Alier, Manual de 1.771, fol. 477r.

(415) Respectivamente, A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.776, fol. 307 y Ramón Font y Alier, Manual de 1.775, fol. 41v.

dían el incremento del límite de la negociación permitido en las escrituras, el destino de los caudales ingresados en Caja, la extensión de la Compañía mediante el nombramiento de factores en los puntos que consideraran necesario y acerca de cualquier asunto que no pudiera esperar a la asamblea anual y no fuera tan grave como para convocarla de forma extraordinaria. A partir de 1.775 es frecuente encontrar en estas Juntas particulares ciertas atribuciones que, al principio, residían en la General, como la decisión a tomar en caso de guerra, la modificación de la redacción y límites de las pólizas o la resolución sobre el reparto de beneficios. Esta concentración de funciones en un núcleo de accionistas nos va separando cada vez más de la organización de la pequeña sociedad tradicional.

De forma general, se puede decir que la misión de esta Junta era auxiliar y fiscalizar a los directores:

"Para el mejor gobierno de la sociedad establecemos una Junta de Consiliarios...".

"... en ellas se tratarán los negocios de la compañía en la conformidad indicada en los artículos antecedentes; y podrán celebrarse extraordinariamente cuando así lo pida algún asunto grave de la sociedad, no pudiendo los Directores sin su preciso acuerdo emprender algún negocio nuevo, o de magnitud; pues que en estos casos queremos que se hallen obligados los Directores a conformarse con las resoluciones de dicha junta". (416).

(416) A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.776, fols. 307r y v, ("Sociedad de Fondos Perdidos").

En todas las compañías hay una dirección dotada de amplias atribuciones. En sus escrituras se incluyen frases generales que así lo indican, como, por ejemplo, en la de la compañía de "San Francisco de Paula y Santa Eulalia" que estipula que "pueden emplear sus caudales según les dicte su prudencia" (417).

Cuando esta dirección es unipersonal —el caso más frecuente— está auxiliada por un vicedirector o segundo director que le ayuda, sustituye en caso de enfermedad o ausencia y está llamado a reemplazarle cuando cumpla su mandato. La duración del cargo no se ajusta a una regla fija, siendo lo más frecuente que no se estipule, considerando que cada Junta General tiene capacidad para retirarles o renovarles su confianza.

Sólo hay una excepción, de nuevo la "Sociedad de Fondos Perdidos". Sus cinco directores eran perpétuos "para evitar el perjuicio que causa su frecuente mutación" (418). Si, por alguna causa mayor, un director debía abandonar el cargo, la Junta de Diputados más el protector y cuatro accionistas elegirían el que le debía sustituir (419). La dirección llega a ser en esta compañía incluso hereditaria, para que "en la misma dirección se conserve el nombre de Miláns" (a. 42). Francisco Miláns, fue director de la Compañía de seguros de la

(417) Ibidem, Manual de 1.777, fol. 44r.

(418) A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.776, fol. 299v.

(419) Ibidem, fols. 299v-300r. La figura del Protector sólo existe en la escritura de esta Compañía. No está definida y puede suponerse que se pretende adoptar el esquema de las privilegiadas. No sabemos si fue nombrado, pero en las Juntas Generales de Accionistas celebradas, por esta sociedad, y que hemos seguido hasta 1.785, no se realiza ninguna alusión a este tema.

Inmaculada Concepción (1.772) pertenecía a la matrícula de comerciantes y su padre, D. Buenaventura, había participado en la Junta Particular de la Compañía de Barcelona.

Los directores siempre eran socios —y a menudo los que poseían más acciones— aunque nunca estuvo así explicitado en las escrituras. Se sigue estableciendo una fuerte conexión entre eficacia y posesión de acciones, como en las privilegiadas. La gran diferencia es que los directores de estas compañías solían ser comerciantes que habían probado su capacidad antes de ingresar en ellas. Indirectamente, puede apoyarse esta idea en las prescripciones sobre los directores signatarios de la compañía de "La Merced":

"Sexto. En atención a que convendría, que el Director signatario en la ciudad de Cádiz, y los otros en otras plazas interesen en la presente compañía igualmente que otros señores de dichas plazas para que ayuden al fomento de ella..." (420).

o en las de la Compañía de "Nuestra Señora de la Esperanza", que preveía el interés de incorporar a los factores como accionistas:

"Vigesimo primero... y si para el establecimiento de este objeto fuese necesario interesar a los factores en una acción indemnizándoles de la efectiva entrega (...) se concede facultad a la expresada Junta de Diputados para que en esta parte lo dispensare, si lo estimare oportuno" (421).

(420) A.H.P.B., notario Ramón Font y Aliet, Manual de 1.777, fol. 303 r y v. Subrayado mío.

(421) Ibidem, fol. 85v.

La renumeración de los Directores se ajustaba a tres modelos. El más extendido era aquél que les atribuía un porcentaje sobre los beneficios líquidos, que oscilaba entre un 3% ("Sagrada Familia", 1.774) y un 10% ("Durán, Larrad, Gibert y cía" y "San Francisco de Paula"):

"Undécimo: De las partidas que importaren los premios de los seguros, que firmaren dichos directores, negociación de albaranes, y cambios terrestres, deberán ante todo rebajarse las pérdidas, averías, gastos judiciales, escrituras auténticas, y demás causados a utilidad y beneficio de la presente Compañía, debiéndose estar a las cuentas que sobre este asunto diere el Director; y de lo que resulte de beneficios líquidos, asignamos a los referidos Directores respectivamente a lo que cada uno administrare, y cuatro y medio por ciento" (422).

El segundo tipo de comportamiento era el que les señalaba una retribución fija más un porcentaje sobre los beneficios. Es el caso de la "Sociedad de Fondos Perdidos" y el de la "Sagrada Familia" (1.801). Respectivamente, 500 y 400 pesos anuales y 1.25 y 6% de los beneficios líquidos.

Un tercer tipo de comportamiento se da en la Compañía de la "Inmaculada Concepción", cuyos directores no tenían señalada ninguna remuneración que dependía, exclusivamente, de lo estipulado cada año por la propia Junta de Directores y aprobado por la de Accionistas (423).

La participación en los beneficios estaba destinada a incrementar el interés de los directores en la marcha de las Compañías. Pero, como ya señalamos, si bien se les recompen-

(422) A.H.P.B., notario Ramón Font y Alier, Manual de 1.771, fol. 46v (Compañía de la Sagrada Familia).

(423) A.H.P.B., notario Ramón Font y Alier, Manuales de 1.772 (fol.82v) y 1.775, (fol. 38r).

saba por las ganancias sociales no se hacían recaer las pérdidas sobre sus hombros. No eran, desde luego, responsables de ellas sino la "masa común" (424); tampoco los años de crisis suponían una disminución de su remuneración del mismo ca libre que la pérdida social. La mayor parte de estas compañías preveían, para estos casos, la concesión de una gratifica ción extraordinaria.

Las atribuciones de los Directores están contempladas de forma similar a lo descrito para las compañías gaditanas. Han de llevar los libros de la compañía, que han de reflejar una negociación para la que tienen gran libertad. Cobrarán las primas, pagarán las pérdidas, exigirán los dividendos pasivos y representarán a la compañía en los pleitos:

"Dirigirán la admisión de los fondos y todos los negocios, que emprendan con el giro y circulación de los caudales de la Compañía, con libre y general administración; de modo que sus firmas y las providencias que así dieren en calidad de tales Directores tendrán tanta fuerza, y valor, como si fuesen de todos y de cada uno de los socios en Junta general".

"... cuidaran de todo lo gubernativo y económico de la compañía" (425).

Las compañías de seguros barcelonesas son más explícitas que las gaditanas respecto al uso que los directores deben dar a los caudales de la compañía y designan, en todos los casos:

(424) Punto que fue muy debatido a raíz de las pérdidas ocasionadas por la crisis bélica. v., por ejemplo, A.G.A., Audiencia, Consualdo, 5/6, fols. 131 + 148.

(425) A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual, de 1.776, f. 300v.

"Octavo: Siempre que haya en caja alguna partida de productos o premios de seguros, los directores en sus respective casos, con acuerdos de los Diputados, podrán emplearles en la negociación de albaranes que tanto abundan en esta plaza, poniendo a este fin todo aquel cuidado que corresponde, en inteligencia de que solamente en los casos de no proporcionarse ocasiones de buenas firmas, para invertir el dinero en el sobredicho ramo, tendrán facultad de prestarle por seis meses a cambio terrestre" (426).

De otro lado, la compañía de "Fondos Perdidos" y la dedicada al Comercio en General permiten a sus directores tomar dinero a préstamo a un interés del 3%, para aumentar su negociación. En este caso está limitada a un 25% del capital (427).

3.3.- Las Compañías de los Cinco Gremios Mayores de Madrid.

La importancia de los Cinco Gremios Mayores de Madrid dentro de la economía española del siglo XVIII impone una reflexión sobre el tipo de asociación mercantil que utilizaron en su actividad.

La capital del reino era, en la segunda mitad del setecientos un importante centro de capitales que no hallaban donde invertirse, tras el fracaso de las Reales Compañías privi-

(426) A.H.P.B., notario Ramón Font y Alier, Manual de 1.776, fols. 45v-46r.

(427) A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.776, fol. 302r, para la "Sociedad de Fondos Perdidos"; para "Durán, Larrad, Gibert y cía", Ramón Font Alier, Manual de 1.778, fol. 30r.

legiadas de Comercio y Fábricas. Se trataba del ahorro procedente del diezmo y de las rentas de un alto clero y una nobleza que, en un elevado porcentaje, se hallaban en Madrid. Estos grupos y el alto funcionariado eran fuente de crédito abundante y barato, a disposición del grupo mercantil que supiera aprovechar sus posibilidades. Eran, también un fuerte grupo de demandantes de productos de lujo, que podía sostener un saneado tráfico. Madrid, además, era la sede de la monarquía y de una Real Hacienda con escasa capacidad de organización, lo que ofrecía la oportunidad de realizar lucrativos negocios (428).

En este marco, no es extraño que los gremios madrileños adquirieran un importante desarrollo, al beneficiarse de la incapacidad financiera de la Corona. Dichas corporaciones obtuvieron en 1.679 el encabezamiento de alcabalas, cientos y tercias. Los importantes beneficios derivados del monopolio del abastecimiento de Madrid y de la utilización de un capital al que tenían acceso dada la inexistente organización recaudatoria de la Hacienda Real, les permitieron incrementar el volumen y la extensión de sus negocios.

Pronto surgieron diferencias entre las distintas corporaciones a raíz del reparto de las obligaciones y los beneficios de los contratos con la Corona y, en 1.733, los que desde entonces se llamaron Cinco Gremios Mayores, lograron la

(428) Sobre este planteamiento, v. Emiliano Fernández de Pinedo, "Coyuntura y política económicas", en Manuel Tuñón de Lara (dir.), Historia de España, VII, Centralismo, Ilustración y agonía del Antiguo Régimen (1.715-1.833). Barcelona, 1.980, pp. 145-148.

exclusiva de la administración de las Rentas. Los Cinco Gremios, los mayores contribuyentes, eran el de sedas, el de mercería, especiería y droguería, el de joyería, el de paños y el de lencería. Desde este momento, actuando en conjunto, fueron incrementando sus actividades y actuaron como promotores de la industria, como banqueros y como grandes comerciantes, en Europa y América. Tuvieron a su cargo la recaudación de rentas reales, el abastecimiento de Madrid y del ejército, financiaron la Hacienda, con sus préstamos y con el sostenimiento de los vales reales... En general, fueron una gran potencia económica y, como han resaltado Capella y Matilla, "sostuvieron el crédito durante las últimas décadas del siglo XVIII" (429).

En estas páginas no vamos a analizar el desarrollo de las actividades de estas corporaciones; el objeto de nuestro estudio es la estructura asociativa que les permitió realizar con éxito sus lucrativos negocios y que posibilitó que concentraran un volumen de capital que supera, con mucho, el representado en los centros mercantiles de mayor importancia, como Cádiz y Barcelona. Son las Compañías Generales de los Cinco Gremios Mayores, cuyo éxito hasta 1.785 tiene unas consecuencias que, en el estado actual de la investigación, son todavía difíciles de calibrar. Quizá la mayor crítica que se les pueda hacer es que atrajeran un capital —rentas y diezmos— que, gastándose en Madrid, no se rein-

(429) Miguel Capella y Antonio Matilla Iascón, Los Cinco Gremios Mayores de Madrid. Estudio crítico-histórico, Madrid, 1.957, p. 377.

vertía en las regiones de origen (430). No parece, sin embargo, que dada la estructura socio-política hubiera más que posibilidades teóricas de hacerlo. Estimo justificado afirmar, sin embargo, que su espectacular desarrollo en la segunda mitad del siglo XVIII, frenó la aparición de otras fórmulas de asociación de capital y de centralización del ahorro en la vía seguida por Cádiz o Barcelona.

Los Gremios, en sus compañías —particulares hasta 1.785— se limitaron a aprovechar la situación que les brindaba el Madrid dieciochesco sin plantearse programáticamente una política acorde con los deseos de un Estado mercantilista, bajo cuyos presupuestos se podía afirmar:

"... sus negociaciones particulares se reducen de suyo a comprar los frutos y artefactos a los que los criaron e hicieron sin respeto a su origen... sin más objeto ni mira que su particular interés, y no el de aumentar, como no sea por acaso, el fondo o masa de los bienes de la Nación..."(431).

Con su libre actividad, es cierto, buscaron el mayor beneficio allí donde lo hubiere, sin esforzarse en realizar como programa un fomento de la industria nacional, comprando géneros extranjeros si eran más baratos y de mejor calidad. Fue —quizá— una política poco adecuada y contradictoria para una Compañía que, sin tener estructura de privilegiada, manejaba caudales públicos y se aprovechaba del pri-

(430) E. Fernández de Pinedo, "Cuyuntura...", p. 148.

(431) E. Larruga, Historia..., tomo IV, parte II, fol. 74v.

vilegio de su monopolio gremial y del apoyo de la Corona (432). Describiremos brevemente su historia y su organización y observaremos cómo fue, precisamente, cuando el Estado quiso capitalizar su éxito en 1.785, multiplicando sus privilegios y su compromiso con la política real, cuando comenzó su decadencia.

Dentro de los cuerpos de comercio que nos ocupan, cabe distinguir tres formas de asociación mercantil. Los agremiados, desde el origen, formaron multitud de pequeñas empresas personalistas, que no constituyen novedad dentro de la compleja red del capital comercial en el Antiguo Régimen. Un segundo escalón en la asociación, son las compañías que crearon algunos de los gremios por separado: Compañía de Paños (1.748), Compañía del gremio de especiería, mercería y droguería (1.748) y Compañía de los Lienzos, vulgo de Los Mozos (1.755). El tercero lo integran las Compañías Generales de los Cinco Gremios, que aglutinaban a los mencionados cuerpos de comercio en diversas formaciones desde 1.734.

Las compañías que constituyeron cada corporación por separado eran una manifestación de defensa de los agremiados, que se concentran para la mejor aplicación de sus fines. La Compañía general es un movimiento de clara expansión, apro-

(432) Juan Antonio de los Heros, director de la Compañía —y fiscal de la Junta de Comercio— desarrolla en defensa de los Gremios una curiosa teoría de la libertad limitada. Para él, todos pueden asociarse libremente y hacer la negociación que les plazca, incluida la Compañía de los Cinco Gremios Mayores; respetando la demarcación territorial del comercio de los productos monopolizados por los Gremios. "Discurso sobre el comercio, las utilidades, beneficios y opulencia que producen y los dignos objetos que ofrece para el bien de la patria: el que ejercitan los Cinco Gremios Mayores de Madrid participando todo el Reino de sus ventajas, y que es comparable el comercio con la primera nobleza", Seminario Erudito de Valladares, t. XXVI, Madrid, 1.790, pp. 228-239.

bado y sancionado por el Estado, en el que se apoya, teniendo como base el Asiento de las Rentas Reales (433).

Estas compañías son un tipo peculiar, porque se formalizan mediante escritura pública, tienen una estructura personalista y están sujetas a las Ordenanzas del Consulado de Bilbao. Al tiempo, tienen unas dimensiones excepcionales, realizan contratos privilegiados, rinden un servicio al Estado y consiguen unos buenos resultados económicos, al menos hasta 1.783. Desde esta fecha fue modificada su estructura e incrementadas sus responsabilidades públicas. Esta fue una de las razones de su decadencia, que estuvo unida a la de las finanzas estatales (434). No fue la única, pues hay que considerar su inadaptación a la nueva situación de libre mercado (435). Cabe pensar, sin embargo, que quizá la —impuesta— atadura con el Estado y sus proyectos privilegiados impidió una evolución de la que hay que creer capaces a los herederos de aquéllos que desarrollaron una brillante actividad en la parte central del siglo XVIII.

Han resaltado los autores mencionados que frente a la vida lánguida que caracteriza a las grandes compañías privi

(433) M. Capella y A. Matilla, Los Cinco..., p. 109.

(434) R.C. de 19 de septiembre de 1.783, aprobando las ordenanzas con que se han de gobernar los cinco Gremios Mayores de Madrid en su giro y comercio, A.H.N., Consejos, lib. 1.515, núm. 122. La Ordenanza núm. XII se refiere a las Compañías de los Gremios (pp. 94-104). "Real Resolución en forma de reglamento que se ha de observar en la casa principal de la Diputación y Dirección de los Cinco Gremios Mayores, sus comunidades y Compañía General de Comercio en esta corte, dispuesto, prescrito y aprobado por S.M. con arreglo a la nueva forma de asociación que se ha dignado dar a este establecimiento, ampliándose su Real Confianza y especial soberano patrocinio", A.H.N., Consejos, lib. 1.526, núm. 91.

(435) Sobre este punto, M. Capella y A. Matilla, Los Cinco..., lib. V, y especialmente, pp. 311-321.

legiadas del siglo XVIII, las de los Cinco Gremios consiguieron —para la misma época— un importante desenvolvimiento (de cada asociación por separado) cuando no un completo triunfo (de los Gremios en su conjunto). Las razones fundamentales fueron su elevada capitalización y su necesidad para el Estado, que suplía en ellas su carencia de organización propia para asegurar su base financiera (436).

En la evolución de la estructura de las Compañía generales de los Cinco Gremios distinguimos tres etapas. La primera, de tanteos, con la creada en 1.734 para la mejor administración de las Rentas Reales. La segunda se inicia en 1.752, fecha en la que se creó una compañía que sería renovada en 1.759 y 1.763, mediante unas escrituras que describían una organización muy similar. La tercera, viene marcada por la "forma nueva" que se dió a la sociedad en 1.785, a iniciativa de Cabarrús y que tuvo por objeto controlar esta organización. La nueva situación fue aceptada por los Gremios porque significaba un respaldo legal a su monopolio en una época ya muy avanzada y porque venía acompañada de nuevas concesiones y mayores privilegios.

Para nuestro análisis nos hemos basado en las escrituras de 1.752, 1.763 y en las Reales Cédulas de 1.783 y 1.785. Aquéllas nos muestran el tipo de organización escogida para realizar un comercio de envergadura y éstas, la fórmula ideada por el fundador del Banco de San Carlos y la Compañía de

(436) Ibidem, p. 108.

Filipinas para que no escaparan al control del Estado. Unas son símbolo de la utilización de una organización tradicional para grandes empresas; otras, de una peculiar privilegia da que no se ajusta a los modelos descritos para el comercio colonial y para la promoción industrial, aunque realizara ambas actividades.

El 12 de julio de 1.752, el Gremio de sedas tomó la iniciativa para la constitución de una Compañía General, nombrando un apoderado para que realizara las gestiones oportunas. Pronto cuajó la idea y, en diciembre del mismo año, los cinco representantes se reunían para formalizar la escritura correspondiente, que fue completada con las normas establecidas en 27 de marzo de 1.753 (437).

La compañía se estableció por seis años para realizar las negociaciones que se estimaran "útiles" tanto en Europa como en Indias (a. 4). Su capital quedaba fijado en un millón de reales dividido en cinco partes iguales, correspondientes a cada uno de los gremios. Estos, debían repartir la cantidad asignada entre aquellos agremiados que, libremente, desearan participar en la empresa (a. 1).

El capital debía estar desembolsado en su totalidad (a.2), lo que contrasta con otras compañías por acciones estudiadas en este capítulo. Sin embargo, y también a diferencia de és-

(437) A.H.P.M., Protocolo 15.865, fol. 152. Las normas definitivas que desarrollan el acuerdo anterior, en Protocolo 17.866, fols. 14-20. En el texto, se citan entre paréntesis los números de los artículos de esta última escritura.

tas, las aportaciones podían ser de diferente cuantía (a. 1). El número total de interesados fueron inicialmente 245 (individuos o compañías), lo que representa una media de 4.082 reales por socio.

Esta compañía estaba dirigida por los cinco apoderados nombrados por los gremios y que tenían muy amplias atribuciones. Ellos decidieron qué negociaciones emprender y la cuantía de los capitales tomados a préstamo. El ejercicio de esta actividad convirtió a ésta y las posteriores compañías en verdaderos bancos, que lograron atraer un volumen importante de ahorro, premiado con un bajo interés. La razón, como resaltó Heros, era el prestigio y la seguridad de esta asociación (438).

Se concibió, pues, como una compañía con un considerable número de socios, que aportaban importantes cantidades para constituir un capital muy elevado, gestionado por un reducido y profesionalizado núcleo directivo. Sus características personalistas se encuentran en la delimitación de la responsabilidad y en la transmisión de las acciones.

La responsabilidad recaía, proporcionalmente, en todos los asociados (a. 1) y era insolidum sobre todas las obligaciones de la compañía para lo cual sus miembros obligaban todos sus bienes (a. 5).

Las acciones no se podían enajenar ni vender (a. 11). En caso de muerte de un socio, se destacaba que el contrato se

(438) J.A. de los Heros, Discursos..., p. 58.

deshacía, según la tónica descrita para las compañías comunes. No obstante, para evitar el quebranto que ello podía causar en una asociación de esta envergadura, los herederos tenían la obligación de continuar con la responsabilidad adquirida (a. 7).

Los socios, pues, permanecían atados a la compañía durante los seis años de su duración. Se establecían, sin embargo, ciertas reglas que permitían, en casos límites, la separación. Si un individuo se daba de baja en el gremio al traspasar su tienda, cesaba en sus derechos como accionista; en esta circunstancia, el que se hacía cargo del negocio podía recoger la acción correspondiente (a. 9). El segundo caso previsto se producía cuando un individuo tenía dificultades financieras y quería darse de baja en la Compañía sin hacerlo en el gremio. En este caso, si su corporación consideraba justificada su petición, recogería su acción y le devolvería su importe.

Había también una oportunidad para que se incorporaran nuevos miembros —siempre agremiados—, establecida a los tres años de la celebración del contrato (a. 4). En este momento, los herederos de los fallecidos podían desprenderse de su participación (a. 7).

Simultánea a esta compañía general se formó otra con los hermanos Ustáriz para el comercio con América, bajo la razón social de "Ustáriz y Compañía". Era, como destacan Capella y Matilla, un ensayo para, al término de la misma —seis años— desarrollar su propia organización (439). Su capital quedó fi

(439) M. Capella y A. Matilla, Los Cinco..., p. 117.

jado en quince millones de reales, dos tercios aportados por los Cinco Gremios y el resto por los Ustáriz.

Efectivamente, en 1.763, los Gremios habían incrementado de forma considerable su experiencia y su capacidad financiera; habían demostrado su utilidad y gozaban del apoyo del Estado. En esta fecha, con todo este bagage, crearon la más importante y fructífera de sus asociaciones.

La nueva Compañía se concibió como "general y absoluta" para realizar el comercio en Europa, América "y demás partes del mundo donde tenga por conveniente" (440). Según una práctica que ya hemos analizado en las compañías por acciones, se aludía a que su constitución se encaminaba al "beneficio público" y se ponía "bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario y San Francisco de Asís" (441). Nacía así una nueva compañía con un alto capital —quince millones de reales— dividido en participaciones desiguales, con responsabilidad ilimitada y que correría bajo la "razón distintiva de los Cinco Gremios Mayores de Madrid" (442).

Esta Compañía buscaba una mayor permanencia, lo que se refleja en su duración ilimitada, quedando fijada, como mínimo, en 12 años, durante los cuales no se podría separar ninguna comunidad (a. 1)

(440) A.H.P.M., Protocolo 19.103. fols. 368-381. La cita corresponde al preámbulo, f. 369r.

(441) Ibidem.

(442) Ibidem. En adelante las referencias a los artículos de esta escritura se incluirán entre paréntesis, en el texto.

Esta escritura es mucho más completa que la de 1.752, con la que comparte el mismo tipo de responsabilidad (aa. 2 y 3) y el modo de dividir su capital que, en esta ocasión, era tres veces superior (a. 2).

La situación de los gremios había mejorado sensiblemente en los últimos doce años y por ello se plantean la realización del comercio en Europa y América así como de cualquier otro ramo que los Directores consideraran convenientes como el seguro, las rentas vitalicias y el bancario (a. 16). Abordaron todos ellos, e incluso se adentraron en el fabril, invirtiendo en la fábrica (textil) de Valencia, once millones de reales. Su éxito queda demostrado en el hecho de que sólo realizaron un desembolso inicial de cinco millones de reales, que ya en 1.777 se habían convertido en 210, lo que no impidió, según Larruga, el periódico reparto de utilidades (443).

El carácter personalista de esta compañía se revela en el tipo de responsabilidad de sus socios, del que se deriva un rígido control de entrada. No bastaba que los accionistas pertenecieran a alguna de las cinco comunidades, sino que no se admitía a ninguno que hubiera "perdido su crédito en el comercio" porque sólo han de tener intereses en ella, personas de notorio abono y conocida buena fe" (a. 28).

Como en la anterior compañía, se regulaba la transmisión por herencia (a. 25) y la incorporación de nuevos miembros

(443) E. Larruga, *Historia...*, t. IV, p. 2, fols. 51v-54v. El reparto de las ganancias se hacía cada cuatro años; un tercio se reservaba para el aumento del fondo y el resto, se repartía por quintas partes (a. 9). En realidad, en su mayor parte se reinvertieron en el marco de la propia compañía.

al final de cada cuatrienio (a. 23). Había más facilidad, sin embargo, para la suscripción de acciones, que se podía hacer por fracciones (a. 24) y para su venta, que se podía realizar en otro individuo del mismo gremio que no tuviera otra (a. 27).

Las reglas sobre la dirección de esta compañía son muy pormenorizadas reseñándose en esta escritura y en unas posteriores reglas elaboradas por los cinco apoderados de los gremios (444). Son ellos los que nombran a dos directores, renovables cada cuatro años (a. 6). Sus facultades son muy amplias, aunque las decisiones sobre la gestión son siempre tomadas en la Junta de Gobierno que se debía reunir semanalmente y que forman, juntos, directores y apoderados (aa. 6, 11, 12, 14, 17). Este organismo será el que dirija la marcha de la Compañía, el que la represente en los pleitos (a. 29) y el que reforme las reglas sociales cuando sea necesario, siempre que no afecte a los puntos esenciales de la escritura (a. 30).

Los miembros de esta compañía —más de trescientos— no tenían regulada su participación en la gestión, más que a través de su corporación, que tenía un representante en la Junta de Gobierno. Estaba, de hecho, regida por un pequeño núcleo directivo profesionalizado que gozaba de altos sueldos y cuya actuación se reveló muy eficaz (445).

(444) A.H.P.M., Protocolo, 19.103, fols. 505-524.

(445) Los directores y el contador tenían una asignación de 15.000 reales al año, con posibilidad de ser aumentada por los apoderados. En tesorero, 18.000 reales al año, Ibidem, aa. 31, 44 y 51.

No hubo reforma orgánica de importancia hasta 1.785. Dos años antes, se dictaron unas nuevas ordenanzas, a solicitud de los Gremios, que se aprobaron a consulta de la Junta de Comercio y Moneda de 28 de julio de 1.781. En ellas se destacaba la "utilidad pública" de los Cinco Gremios Mayores de Madrid y que sus progresos se traducían en beneficios para el Estado. Podemos considerar que se trataba de un movimiento de defensa de estas corporaciones en un momento en el que la libertad de industria y comercio se vislumbraba como amenaza para la organización corporativa (446).

En consecuencia, en estas extensas ordenanzas gremiales se incluye una que, en dieciseis artículos o números trata de las Compañías generales, dado que:

"... son un objeto de público interés por el que tienen los que los forman, y por el que redunda en los que tratan y comercian con ellas" (447).

Esta ordenanza manda se constituyan mediante escritura pública (núm. 4), que se ajusten al capítulo 10 de las del Consulado de Bilbao de 1.737 y que se registren en la Casa de los Cinco Gremios (núm. 1) que debía suplir a un Consulado inexistente en la Corte.

Este texto consideraba estas compañías como comanditarias comunes, con un señalado carácter personalista: que se

(446) Afirmación que se deduce de las tesis mantenidas por Juan Antonio de los Heros, de la Junta de Dirección de la Compañía General, en su obra, ya citada, Discursos...

(447) O. XII de la R.C. de 19 de septiembre de 1.783. A.H.N., Consejos, lib. 1515, núm. 122.

refleja en el tratamiento de los compromisos de los socios con la organización (núm. 8), en la transmisión de las acciones por herencia (núm. 10) y, sobre todo, en la delimitación de la responsabilidad, ilimitada para los directores y limitada para el resto, considerados socios comanditarios:

"... saneando cada uno las pérdidas que puedan suceder hasta en la cantidad de capital, y ganancias en que fuera interesado, y resultaren del total de la Compañía: entendiéndose que aquél o aquéllos, bajo de cuya firma corriera la compañía, estarán obligados, demás del fondo, y ganancias que en ella les pertenezcan, con todo el resto de sus bienes, habidos y por haber, al saneamiento de todas las pérdidas, aunque estos tales, o alguno de ellos entrare sin poner caudal en dicha compañía" (núm. 13).

No podía satisfacer esta regulación a los Gremios ni, sobre todo, a los directores de la Compañía General. Estas normas no reflejaban el carácter peculiar de la misma, cuyas amplias actividades y obligaciones estaban sostenidas por una responsabilidad insolidum, compartida por una dirección que, en ningún caso, podía aceptar por sí sola la inmensa responsabilidad de una compañía de estas dimensiones. Tampoco satisfacía al Estado, que optó por una mejor forma de control a la compañía, dándole status de privilegiada por Real Resolución de 15 de diciembre de 1.785 (448).

Por ella se le otorgaba "soberana" protección y confianza", y se le obligaba a adoptar una "nueva forma que haciendo más permanente las ideas, facilitase y asegurase la me-

(448) A.H.N., Consejos, lib. 1.526, núm. 91.

jor inteligencia y dirección práctica de todos los importantes ramos y negocios". Estos consistían en "la continuación de su antiguo comercio en la forma más útil a sus intereses, combinados con los del público y la real Hacienda: la dirección, consolidación y aumento de las Reales Fábricas" (a. 1).

Cabarrús consideraba que el éxito de estos cuerpos de comercio podría ser capitalizado, haciéndoles asumir la tarea de promoción de la economía nacional en la que habían fracasado las privilegiadas creadas durante el reinado de Fernando VI, tarea que compartirían con sus otras dos creaciones, el Banco de San Carlos y la Real Compañía de Filipinas. De ahí que se pensara que la Compañía de los Cinco Gremios pudiera convertirse en una "General de Comercio de Mar y Tierra" (a. 37).

Inicialmente, se le asignaba un considerable número de obligaciones, premiadas con los privilegios que llevaban incorporados, así como con el incremento de la demarcación de los territorios cubiertos por las tiendas agremiadas, estipulado en las Ordenanzas de 1.783.

Los ramos que se encomendaban a la Compañía serían gestionados por sus cuatro directores, que serían elegidos por los cinco apoderados de los gremios (a. 14), y quedaban agrupados en dos secciones así configuradas:

1) Recaudación de Rentas Reales de Madrid y provincia; arriendo del excusado; tesorería del fondo vitalicio; negociación de vales reales, obras de la acequia del Canal Imperial de Aragón; Reales Fábricas de Talavera y Valencia; obras

del Jardín Botánico.

2) Reales Fábricas de Paños de la Villa de Ezcaray; las Cajas y factorías subalternas de Cádiz, Barcelona, Londres y México; comercio general de frutos y efectos; giros de letras, seguros marítimos (a. 23).

La nueva Compañía se establecía con un fondo inicial de treinta millones de reales, que se podría incrementar pero en ningún caso disminuir (a. 2). Sería aportado por todos los miembros de los Cinco Gremios, en acciones de valor desigual, cuyo límite máximo era de doscientos mil reales de vellón (a. 4).

A diferencia de las anteriores Compañías, por tanto, la pertenencia a ésta era obligatoria para todos los individuos agremiados, cuya participación era individual y no colectiva, como en las asociaciones precedentes. La responsabilidad era proporcional a la aportación pero mancomunada e insolidum del conjunto de los Gremios (aa. 6 y 36).

La cualidad de agremiado llevaba implícita la de accionista y, por tanto, la retirada de la acción suponía el cierre de la tienda y la expulsión del gremio (a. 10). Caso de que un individuo quisiera traspasar su tienda, debía hacer lo mismo con su acción, que debía cederse, por su nominal, a un miembro de la misma corporación (a. 9).

La Junta de Gobierno de la Compañía, que se debía reunir todas las semanas al menos, estaba formada por los cuatro diputados-directores y los cinco apoderados de los Gremios, que seguían siendo —como en las anteriores— la única forma que

los accionistas tenían de intervenir en los asuntos sociales. Este organismo era el verdadero núcleo gestor, y así se explicitaba al afirmar que "los acuerdos y direcciones de la Junta sirven de norte al plan de operaciones de la Diputación y Dirección" (a. 17). En ella se debía aprobar el balance anual, el estado general de cuentas cuatrienal y el reparto de dividendos, todo lo cual se debía presentar a la aprobación real (aa. 18, 19, 24 a 35).

Esta Compañía, por tanto, quedaba vinculada estrechamente al poder político, quedando sujeta tanto a sus beneficios como a sus pérdidas. Dejaba de ser una asociación voluntaria para aquellos agremiados que quisieran utilizar sus caudales en nuevos y más amplios negocios, para convertirse en una asociación obligatoria que debía cumplir los fines que le asignara la Corona.

La garantía de la responsabilidad ilimitada llevó a que se impusieran en la compañía depósitos por valor de 330 millones de reales. Sin embargo, la organización ofrecía, treinta años después de su reorganización, una calamitosa situación. La asociación se vió afectada por los conflictos bélicos de fin de siglo y la Guerra de la Independencia terminó de sumir en la ruina sus fábricas y comercio. A esto se añade lo que los propios gremios, en su Memoria de 1.824 calificaron de "tolerancia al comercio libre" (449). Sobre todo

(449) "Memoria histórica de la Compañía General y de comercio de los Cinco Gremios Mayores de Madrid y los medios de su restauración, presentada al Ministerio de Fomento", Madrid, 1.824.

ello, incide la crisis hacendística del Antiguo Régimen que hace que, en la fecha mencionada, el crédito contra el Estado se estime en más de 320 millones de reales.

Todo ello concurre a que en 1.824, los Gremios se lamenten de que "al ser llevada la Compañía a la clase de establecimiento público, nació a un tiempo su aparente esplendor y su efectivo abatimiento" (450). Para esta fecha, los socios eran cincuenta, y muchos no eran comerciantes o estaban en situación de fallidos.

La Compañía solicitó del Estado apoyo para su continuación, mediante la concesión de la administración de una nueva renta perpetua que incrementara su crédito y con la incorporación a la dirección de los "mayores capitalistas" de la ciudad (451). Estas demandas no fueron escuchadas, y la Real Orden de 16 de julio de 1.829 dispuso "que la Compañía se colocara inmediatamente en estado de liquidación"

En 3 de noviembre de 1.846 se transformó esta Compañía en la "fabril de los Cinco Gremios". Esta operación, según Capella y Matilla fue un "golpe financiero de los más audaces y valientes" que consumó la liquidación de la antigua Compañía. Efectivamente, en 1.846 se dió una nueva estructuración legal que reducía sus actividades monopolísticas y sancionaba la desposesión de los capitales a través de la reducción de los créditos contra los Cinco Gremios. Se reconocían

(450) Ibidem, p. 10.

(451) Ibidem, pp. 25 a 28.

únicamente veinte millones de reales que eran convertidos en acciones de 2.000. Otros cinco mil títulos quedaban en caja para lanzarlos al mercado en el momento que se considerara conveniente. Esta Compañía fabril, de acuerdo con los nuevos presupuestos del mercado libre y con la ley de sociedades de 1.848, no podía monopolizar el comercio, quedando éste reducido al que realizaran con sus productos y al por mayor. En realidad se limitó a continuar la liquidación y compensación de cuentas con el Estado, operación que se prolongó hasta 1.873 (452).

(452) El proceso de liquidación de la Compañía en Capella y Matilla, Los cinco..., pp. 323-365. la compañía fue disuelta definitivamente por R.O. de 30 de marzo de 1.864, (CLE, t. 91, pp. 391-397).

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

Facultad de Filosofía y Letras

EL SISTEMA CAPITALISTA ESPAÑOL
EN LA EPOCA LIBERAL

Tesis Doctoral que presenta la
Licenciada María Jesús Matilla
Quiza bajo la dirección del Dr.
D. Miguel Artola Gallego, Categ
drático de Historia Contemporán
nea de la Universidad Autónoma
de Madrid.

Madrid, 1986

PARTE II

LAS NORMAS Y EL DESARROLLO
DEL SISTEMA CAPITALISTA

ÍNDICE

PARTE II

LAS NORMAS Y EL DESARROLLO DEL SISTEMA CAPITALISTA

INTRODUCCION	350
CAPITULO I.- EL MERCADO LIBRE	362
1.1.- La propiedad libre de la tierra; 365	
1.2.- La libertad de industria, 371	
1.3.- La libertad de comercio; 377	
CAPITULO 2.- LA CODIFICACION MERCANTIL	397
2.1.- Solicitudes de una codificación mercantil antes de 1.790: su impreciso significado, 397	
2.2.- Las iniciativas del poder central hasta 1.848, 405	
2.3.- El Código de Comercio de 1.829, 416	
2.4.- La reforma del Código de Comercio: primeros proyectos y comisiones (1.834-1.869), 427	
2.5.- La reforma del Código de Comercio: la recta final (1.869-1.885). 436	
2.6.- El Código de Comercio de 1.885, 469	
CAPITULO 3.- LA REGULACION DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES	473
3.1.- Introducción, 473	
3.2.- La constitución de las sociedades; 485	
3.2.1.- El régimen del Código de Comercio: enero de 1.830 a febrero de 1.847; 485	

3.2.2.- La legislación general moderada y las leyes progresistas: 1.847-1.868,	489
3.2.3.- Libertad de constitución	1.868-1.923, 561
3.3.- La centralización del capital,	576
3.3.1.- La legislación general,	576
3.3.2.- Las regulaciones especiales,	595
3.4.- La negociación del capital. La Bolsa,	654
3.4.1.- Introducción,	654
3.4.2.- La legislación bursátil (1.831-1.923),	663
3.4.3.- La creación de las Bolsas,	696
3.4.4.- Los efectos negociables,	707
3.4.5.- La negociación de valores,	716
3.5.- El control sobre las sociedades anónimas,	744
3.5.1.- Las Juntas Generales de Accionistas,	748
3.5.2.- La publicidad,	759
3.5.3.- Control gubernativo vs. control administrativo,	772
CAPITULO 4.- LA CREACION DE SOCIEDADES (1840-1923).	794
4.1.- Las fuentes utilizadas,	794
4.2.- Las sociedades anónimas hasta 1.848,	816
4.3.- 1.848-1.868,	829
4.4.- 1.868-1.923,	875
CONCLUSION	903
FUENTES Y BIBLIOGRAFIA	916

PARTE II

INDICE DE CUADROS

II,1: Discusión del proyecto de Código de Comercio (Congreso). Enmiendas retiradas	458
II,2: Discusión del proyecto de Código de Comercio (Congreso). Enmiendas derrotadas	459
II,3: Discusión del proyecto de Código de Comercio (Congreso). Enmiendas aceptadas	460
III,1: Disposiciones acerca del capital de las sociedades anónimas, 1.- Legislación general	651
III,2: Disposiciones acerca del capital de las sociedades anónimas, 2.- Comparación entre la ley general de 1.848 y la ley de sociedades de crédito de 1.856	652
III,3: Disposiciones acerca del capital de las sociedades anónimas. 3.- Sociedades de ferrocarriles y obras públicas	653
III,4: La legislación bursátil en España (1.831-1.923). Normas generales y proyectos: cronología	697
III,5: Regulación del plazo en los efectos públicos: leyes y proyectos	740-742
IV,1: Número y capital de las sociedades por acciones creadas en España hasta 1.848 (exceptuados los Bancos de emisión)	819-820
IV,2: Número de sociedades creadas en España hasta 1.848, por sectores	824-825
IV,3: Bancos de emisión creados en España antes de 1.848	826
IV,4: Sociedades por acciones constituidas con anterioridad a la ley de 28 de enero de 1.848 y autorizadas según la nueva normativa	830
IV,5: Número de sociedades por acciones autorizadas según la ley de 28 de enero de 1.848, con expresión de las que permanecían en 1.858 y 1.862	831
IV,6: Número de capital de las sociedades autorizadas	834
IV,7: Sociedades por acciones constituidas con anterioridad a la ley de 28 de enero de 1.848 y disueltas en virtud de la nueva normativa.	841
IV,8: Sociedades por acciones existentes en 1.848 y que no llegaron a tramitar su autorización.	847

IV,9 :	Sociedades por acciones: constitución, disolución y modificaciones de capital (1.847-1.868)	857
IV,10:	Número de sociedades por acciones existentes en cada año (1.847-1.868): totales	858
IV,11:	Número de sociedades por acciones existentes en cada año (1.847-1.868): Sectores (I)	861
IV,12:	Número de sociedades por acciones existentes cada año (1.847-1.868): Sectores (II)	862-863
IV,13:	Compañías por acciones bancarias e industriales: capital desembolsado y medio (1.847-1.868).	872
IV,14:	Capital nominal de las sociedades por acciones, en 1.859, 1.861 y 1.864	873
IV,15:	Sociedades anónimas en España, 1.884	876
IV,16:	Número de sociedades mercantiles en España (1.886-1.923)	879-880
IV,17:	Número de disoluciones y rescisiones de Sociedades (1.886-1.923)	881-882
IV,18:	Número de sociedades anónimas creadas en Madrid y Barcelona (1.901-1.905 y 1.906-1.923).	887
IV,19:	Capital de las sociedades mercantiles en España (1.886-1.923)	890-891
IV,20:	Número, capital de las sociedades anónimas, emisión de acciones y obligaciones (1.886-1.923)	892-893
IV,21:	Capital medio de las sociedades de nueva creación, 1.886-1.923 (por quinquenios, en miles de pesetas)	894
IV,22:	Sociedades anónimas existentes en España en 1.923: número, capital nominal y desembolsado	901

INDICE DE GRAFICOS

IV,1: Evolución del número de sociedades por acciones (1.847-1.868)	864
IV,2: Porcentaje de los diferentes sectores sobre el número total de sociedades por acciones (1.847-1.868)	870-871

INTRODUCCION

Los próximos capítulos tienen por objeto el estudio de la legislación mercantil española del siglo XIX como un paso previo al análisis de la práctica económica de dicho período. Pienso, con Tomás y Valiente, que "un estudio del origen y de las principales etapas del capitalismo español del siglo XIX no puede ni debe realizarse sin tener en cuenta los textos legislativos" (1), sin contemplar lo que North o Hartwell han llamado "las reglas del juego" al referirse a "las reglas que gobernaban la organización económica, el intercambio y otras actividades económicas" (2).

En estas páginas se realiza el análisis de la legislación mercantil española, supuesto su interés para la historia económica de nuestro país. Quizá por ello podrían ser encuadradas en una tendencia que, sin ser nueva, viene desarrollándose con fuerza a nivel internacional en los últimos veinte años, y que reconoce la importancia del estudio del derecho y de las instituciones jurídicas para la comprensión de la historia económica. Se ha hablado, por ello, de una "nueva historia institucional de la economía" o de una

(1) Francisco Tomás y Valiente, Manual de historia del derecho español, Madrid, 1.979, p. 548.

(2) R.M. Hartwell, "Cambio jurídico, reforma jurídica y crecimiento económico en Inglaterra antes de la revolución industrial y durante ella", en VV.AA., Historia económica: nuevos enfoques y nuevos problemas, Comunicaciones al Séptimo Congreso Internacional de Historia Económica, Barcelona, 1.981, p. 194.

continuación de la "novísima escuela histórica".

No creo, sin embargo, como la rama más radical de esta corriente, que el derecho sea determinante de la conducta económica. La legislación mercantil no aparece en estas páginas como un sujeto con vida propia e independiente de las tensiones sociales y los avances de la técnica, de las teorías y de las doctrinas económicas y políticas. Se considera cada disposición y el conjunto de ellas como fruto y causa de la evolución peculiar de nuestro país. Cuánto de lo primero y cuánto de lo segundo hay en el desarrollo legislativo es algo difícil de establecer y que, en cualquier caso, es diferente en cada una de las disposiciones. Este es un problema que subyace en estas páginas. Con un clásico, afirmaremos que "el derecho, obra de los hombres, es fruto de sus luchas y de sus contrastes, de sus esperanzas y de sus tradiciones, está en la historia, y no puede ser comprendido o entendido fuera de su fluir en la historia y de la unidad de esta" (3).

Queda fuera del objeto de este trabajo la consideración en detalle de la polémica acerca de la conexión de Derecho Mercantil y capitalismo, que en nuestro país ha tenido un temprano y amplio desarrollo por parte de mercantilistas e historiadores del Derecho. Debo, sin embargo, mencionarla en estas líneas preliminares, para mostrar mi acuerdo con lo afirmado por Ascarelli y que en España formulan Garrigues

(3) Julio Ascarelli, Iniciación al estudio del Derecho Mercantil, introducción y traducción de Evelio Verdura y Tuells, Barcelona, 1964, p. 93.

(1.936), Conde (1.947), Rubio o Bercovitz (4). De acuerdo con este grupo de autores, creo que el origen del Derecho Mercantil se encuentra en los núcleos capitalistas de la Edad Media y Moderna, aunque éstos se desarrollaran todavía en un mundo en el que la organización capitalista no era dominante. Hemos observado anteriormente cómo estos núcleos fueron desarrollando las normas que necesitaban para la regulación de sus actividades y la resolución de los conflictos que se derivaban de ellas. La organización del Estado en las Edades Media y Moderna explica la ausencia de una legislación centralizada; ésta emanaba de las propias organizaciones de mercaderes, los Consulados, y su sanción por parte del Monarca era sólo la aceptación de una situación consolidada. Sólo en el siglo XVIII se asiste a un movimiento de unificación de las normas, como evolución natural, exigida por el crecimiento de las relaciones económicas, y como política de una monarquía de evidente opción centralizadora.

La revolución burguesa, con su nuevo modelo político-económico, supuso el desarrollo de un Derecho Mercantil distinto. Pienso —con Tomás y Valiente que así lo ha expresado— que "a un mercado libre correspondió históricamente un Derecho Mercantil liberal" y que a un

(4) Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, Madrid, 1.955, tomo I, p. 33; J. Conde, "La transformación del Derecho patrimonial en la época del capitalismo", Revista de Derecho Mercantil, núm. 10, 1.947, pp. 167-191; J. Rubio, en sus diversas obras, especialmente Introducción..., en la que contesta a los críticos de esta tesis (pp. 197 y ss); A. Bercovitz Rodríguez-Cano, "Notas sobre el origen histórico del Derecho Mercantil" en Estudios homenaje a Garrigues, Madrid, 1.971, I, donde hace un buen resumen de esta polémica, especialmente en pp. 38 a 44. Contrarios a esta tesis mantenida por estos autores son, entre otros, José Girón Tena, El concepto de derecho mercantil, Valladolid, 1.966; Federico Castro y Bravo, Compendio de Derecho Civil, Madrid, 1.964; Fernando Sánchez Calero, Instituciones de Derecho Mercantil, Valladolid, 1.967; o E. Langle, "El inquietante problema de la homogeneidad y unidad interna del Derecho mercantil", Revista de Derecho Mercantil, núm. 80, 1.961.

modelo de relaciones económicas doctrinalmente libres que tenían como marco un mercado nacional y abierto "tenía que corresponder un único Derecho Mercantil de vigencia también nacional" (5).

Pero la revolución burguesa no se gestó, triunfó e implantó en un día en ningún país aunque en algunos —y no es el caso español— el primer acto fuera rápido y violento. En España la generalización de las críticas al Antiguo Régimen, la elaboración de una alternativa al mismo y su destrucción definitiva exigieron, al menos, más de medio siglo, desde finales del XVIII hasta comienzos de la década de los cuarenta de la siguiente centuria.

Si no sólo hablamos de la destrucción del Antiguo Régimen y de la implantación de un marco legal político-económico liberal sino que consideramos la fecha de la industrialización de España, el período de transición aún se prolonga más. Una primera explicación se encuentra en el hecho de que las decisiones de política económica —dentro de la gama que el modelo permite— no son siempre las que a posteriori calificamos de más acertadas. Entendemos por tales las que conducen con más rapidez y economía a su objetivo: el desarrollo económico. Según North, "el hecho de que el estancamiento haya sido más frecuente que el crecimiento a lo largo de la historia, deja entender que puede haber razones poderosas por las que los gobernantes a menudo escogieran no

(5) F. Tomás y Valiente, Manual..., p. 542.

mas ineficaces" (6). No creo se deba suponer que las normas son fruto de una adecuada reflexión teórica, realizada por individuos sin intereses propios que defender y situados al margen de las tensiones socio-políticas de cada momento histórico. Estimo que las normas que regulan las relaciones económicas deben ser consideradas dentro del programa gubernamental completo y del conjunto de relaciones que integran el sistema político.

Una segunda —y más relevante— razón es que la ley, en sí misma, no es determinante del desarrollo económico. Pienso que la afirmación de North y Hartwell, que considera que el entramado legal "determina el funcionamiento de todo el sistema económico" (7) simplifica excesivamente el análisis histórico y, sobre todo, limita el campo de la investigación de las causas del desarrollo (8). No se puede hablar de inevitabilidad en la promulgación de las normas y en su permanencia.

Es indudable que una adecuada organización del marco facilita el crecimiento, pero sólo cuando el mercado está a un nivel tal que permita su aprovechamiento. Si el ámbito diseñado es muy amplio pero faltan las condiciones socio-económicas precisas, se revela tan inútil como cuando es muy

(6) Douglas North y R.M. Hartwell, "Ley, derechos de propiedad, instituciones legales y el funcionamiento de las economías", en VV.AA., Historia económica..., p. 177.

(7) Ibidem, p. 175.

(8) Francisco Bustelo-García del Real, "La "Nueva Historia Económica": revisión crítica", Moneda y Crédito, núm. 125, junio de 1.973, pp. 37-63, esp., pp. 45-49.

rígido e impide su libre desarrollo. Ejemplo del primer caso es el del Código de Comercio, infrautilizado entre 1.829 y 1.840; muestra del segundo tipo de situaciones es la ley de sociedades por acciones de 1.848 que inaugura una política intervencionista en la creación de sociedades anónimas que no concluirá definitivamente hasta 1.868. Hay, sin embargo, una diferencia sustancial entre ambas situaciones. En la primera, el juego económico puede desarrollarse —teóricamente— en libertad, en la medida que la sociedad esté capacitada para hacerlo. En el segundo, está constreñido por un corsé más o menos rígido; en el mejor de los casos, está encauzado.

En definitiva, creo que el análisis de la legislación es muy importante para la comprensión global de una época, por cuanto nos indica el programa de los grupos que detentan el poder. Las transformaciones legislativas se explican sólo dentro de las complejas relaciones socio-políticas de cada período histórico. Ahora bien, un cambio en la organización del sistema político y del sistema del poder no siempre se traduce en una inmediata revolución legislativa del mismo signo e intensidad. Por otra parte, la renovación de las normas no implica, necesariamente, una transformación de la economía del país, dado que, como tendremos ocasión de observar con casos concretos, no son su única causa.

En las páginas que siguen, por tanto, no me limito a realizar un análisis de resultados, sino que intento recorrer —con los protagonistas— el camino, que es a veces recto, a

veces sinuoso; en ocasiones de pendiente suave, otras abrupta. Es decir, no enumero únicamente las disposiciones promulgadas sino que pretendo seguir las iniciativas —quiénes querían cambiar "las reglas del juego", por qué y qué alternativa ofrecían— y los debates —quiénes se oponían al cambio y por qué; qué argumentos lograron nuevos partidarios— para, en ello, intentar hallar una explicación a la evolución de nuestra historia económica. Las medidas promulgadas, la mayoría de las cuales nos son muy conocidas por la bibliografía especializada, son solamente la ruta finalmente tomada pero no la única propuesta ni —quizá— la más deseada o conveniente.

La legislación debe ser sometida, por último, a la prueba de los hechos, lo que lleva a juzgarla según el éxito alcanzado. Los riesgos que corre el historiador al realizar esta operación son, principalmente: confundir el objetivo que nosotros, a posteriori consideramos es el que debían perseguir, con las intenciones del legislador; no tener en cuenta los condicionantes socio-políticos y suponer que las normas se elaboraban de una forma autónoma, sin tener en cuenta el nivel económico y el ideológico, en general, así como la relación de fuerzas —intra e internacionales— existente en cada momento. De ahí que, frecuentemente, se lancen juicios negativos contra los autores materiales de una ley, dejando fuera de toda culpa a la oposición, aún en los momentos en que fue incapaz de elaborar una alternativa. O que se critique determinada norma de control gubernamental sin tener en

cuenta que otros países, con la misma regulación, consiguieron altas cotas en su desarrollo económico. Frecuentemente, las causas del subdesarrollo no se encuentran en un incorrecto marco legislativo, sino que éste es un exponente de aquél. Una vez dadas las condiciones para el crecimiento, una correcta formulación de las normas lo impulsa de forma decidida, pero sin aquéllas —y sólo por decreto— no se puede lograr.

El objetivo que persigue esta segunda parte de nuestro estudio es el análisis de las reglas del juego que configuran el ámbito mercantil entre 1.829 y 1.923 en España. La Europa de finales del siglo XVIII estaba asistiendo a una revolución que afectaba a todos los niveles y a todos los estamentos, pues se extendía sobre la política, la economía y la ideología. Se trata de las revoluciones industrial y liberal que alcanzaron distintas formulaciones y ritmos en los diferentes países. En España, la vuelta de Fernando VII en 1.814 interrumpió el proceso hacia el liberalismo y la configuración de unas relaciones económicas basadas en el libre mercado y lo pospondría hasta 1.835-1.837, con el bienio menizabalista. No obstante, en España se asiste a una temprana recepción de las normas que el capitalismo requiere (9). De ahí que en pleno reinado de Fernando VII se promulgue el primer Código de Comercio (1.829), que tendrá una vigencia de

(9) Miguel Artola, Antiguo Régimen y revolución liberal, Barcelona, 1.978, p. 307.

más de medio siglo. Este texto simboliza un cambio de orientación en la legislación mercantil: el fin del Antiguo Régimen y el comienzo de la época liberal. A nivel político, sin embargo, todavía imperaba el absolutismo. A nivel económico, el grado de exigencia de los diferentes sectores era, todavía, muy escaso. El propio inicio de esta parte de nuestro estudio ya exige una reflexión sobre las relaciones entre los niveles político, jurídico y económico que, como vemos, no corren paralelos. Esta reflexión será una constante, sobre todo en los momentos cruciales del siglo: 1.848, 1.854-56, 1.868 y 1.885.

Las Cortes de Cádiz intentaron regular el mercado libre y elaborar un Código de Comercio. Su labor no fue terminada y tuvo una escasa repercusión práctica. Fue, como hemos dicho, en época absolutista, cuando se promulgó el primer Código; antes, incluso, de que el camino de la revolución industrial se hubiera emprendido con decisión (10), antes de que el modelo liberal estuviera vigente. El Código debía definir el ámbito de desenvolvimiento de las relaciones mercantiles y marcar las pautas para resolver los conflictos surgidos de ellas.

La revolución industrial dió paso a un nuevo modo de producción: el capitalismo. La aparición del maquinismo modificó la relación de capital y trabajo en el sector fabril. Co-

(10) El punto de partida —si es posible fijar uno— sería "1.832, año de la adopción de la energía del vapor por la industria de consumo más representativa, así como de los procedimientos siderúrgicos modernos", Jordi Nadal, El fracaso de la Revolución industrial en España, 1.814-1.913", Barcelona, 1.975, p. 24.

mo ha señalado Artola, la acumulación de capitales que la industrialización exige no tiene, por su volumen, comparación posible con ningún fenómeno de atesoramiento de las épocas precedentes' (11).

La acumulación de capital es posible gracias a la figura de la compañía que ya se vino desarrollando, como hemos analizado, desde la Edad Media. y, sobre todo, a la anónima, con responsabilidad limitada, considerada por la legislación desde 1.829. Era necesario, asimismo, regular el mercado de capitales, la Bolsa. Su creación data de 1.831, también durante el reinado de Fernando VII.

Estas leyes —Código de Comercio y Bolsa— permanecen vigentes tras la muerte de Fernando VII, no sin cuestionamiento. La regulación de la libertad mercantil se vió completada en una secuencia que termina en 1.841, con la supresión definitiva de las aduanas interiores.

Pero el Estado liberal no cumplió sus objetivos doctrinales; no limitó sus actividades a las tareas de defensa, a la administración de justicia y al mantenimiento de ciertas obras y establecimientos públicos que necesarios, no interesan a la iniciativa privada (12).. En nuestro país fue un estado tutelar, un estado intervencionista, lo que se plasma en nuestro estudio entre los años 1.848 y 1.868, con las leyes de sociedades anónimas. Leyes que implican control del

(11) Miguel Artola, Antiguo Régimen..., p. 306.

(12) Adam Smith, Investigación..., lib. IV, cap. IX, pp. 612-613 de la ed. de México, 1.958.

conjunto y el fomento de ciertas actividades interesantes a un modelo de desarrollo capitalista intervenido por el Estado: minería, ferrocarriles, banca. El Estado se empeñó en esa tarea "cuya prosecución forzosamente habrá de acarrearle numerosas desilusiones, y cuyo cumplimiento acertado no puede garantizar la sabiduría humana ni asegurar ningún orden de conocimiento, y es, a saber, la obligación de supervisar la actividad privada, dirigiéndola hacia las ocupaciones más ventajosas a la sociedad" (13). A partir de 1.868 se procedió a la formulación programática del liberalismo económico realizada, precisamente, por los demócratas. Respecto a las sociedades anónimas, este planteamiento cristalizó en el reconocimiento de la libertad de creación, sin controles estatales. Entre 1.874 y 1.923 asistimos a una última etapa; se trata de la culminación, durante la Restauración, del proceso de codificación —y no sólo mercantil— en el seno de un Estado liberal, basado en el pacto político y en el turno pacífico de los partidos conservador y liberal.

En estas páginas analizaremos la configuración del mercado libre, la codificación mercantil, las leyes de sociedades anónimas y de Bolsa. En definitiva, la definición del ámbito mercantil y la regulación de la concentración, acumulación y negociación del capital, instrumento básico de todo el modelo económico.

La fecha que marca el fin del período escogido es 1.923,

(13) Ibidem.

Como todos los límites señalados para una investigación histórica, es artificial aunque justificable. En los años sucesivos —hasta hoy— siguió vigente el Código de Comercio que se promulgó en 1.885. Esta hubiera sido otra fecha posible para cerrar nuestro análisis. Pero hemos considerado interesante el estudio de la aplicación de esta magna obra legislativa. La Dictadura de Primo de Rivera —creo poder afirmar— cambió su concepción del papel del Estado como agente económico y como redistribuidor del producto social. Cambió, pues, la aplicación de una ley fundamental que sigue siendo la misma y que se ve rodeada de nueva legislación suplementaria.

En el análisis, las fuentes utilizadas son, fundamentalmente, las Colecciones de Decretos y la Colección Legislativa de España que nos muestran los resultados, así como los Diarios de Sesiones de Cortes, que nos señalan las posiciones de las fuerzas parlamentarias. El resultado es parcial, como corresponde a todo trabajo unipersonal y forzosamente limitado a un volumen determinado de información primaria. Nos hemos tenido que ceñir al análisis de la labor legislativa del gobierno y del parlamento, pero existen focos de discusión que no se han podido aprovechar de forma exhaustiva, como son la prensa o la documentación dispersa de grupos políticos y asociaciones sindicales intra o extraparlamentarias. De ahí que los resultados aquí ofrecidos sólo puedan alcanzar su verdadera dimensión cuando sean integrados, aprovechados, discutidos y completados por otras monografías y estudios en ese trabajo que, poco a poco, forma el acervo —permanentemente renovado— de la comunidad científica.

CAPITULO 1
EL MERCADO LIBRE

El programa de definición de un sistema de economía de mercado y de configuración de las bases del desarrollo de un mercado nacional de las Cortes de Cádiz, se planteó como la alternativa liberal al antiguo Régimen. La importancia de su labor constituyente, como ha señalado Artola, no debe ocultar la de la labor reformista de los gobiernos ilustrados y el hecho de que fuera elaborada en el marco de una economía de predominancia agraria que no había adquirido conciencia del fenómeno conocido como revolución industrial (14).

La legislación gaditana quedó inconclusa, en este terreno más que en otros, debido al sistema de prioridades que volcó las energías de la Cámara en la definición de un nuevo modelo político antes de la autodisolución de las Cortes. A esto se añade que la situación bélica impidió su puesta en marcha generalizada en el momento en que la coyuntura política era favorable a las reformas. En 1.814, la restauración del absolutismo hizo que éstas cayeran en el olvido.

Hasta 1.868 no volvemos a encontrar en la legislación una declaración amplia, completa, y —sobre todo— efectiva de los principios económicos liberales, que se incluyen en tres textos

(14) Miguel Artola, Antiguo Régimen..., pp. 179 y 180.

fundamentales: el Decreto que derogó la ley de sociedades de 1.848 (20 de octubre de 1.868), el que dictó las bases para la redacción del nuevo Código de Comercio (20 de septiembre de 1.869) y la ley sobre sociedades anónimas (19 de octubre de 1.869).

Los demócratas, encabezados por Orense, aún en marzo de 1.869 se lamentaban de la ausencia de lo que hemos llamado declaración de principios del liberalismo económico. Esto les llevó a proponer una que, en su artículo primero, dijera:

"Se declarara libre el comercio interior, la industria y el ejercicio de toda ocupación, arte u oficio, sin que ninguna autoridad pueda oponer ningún impedimento, ni exigir un aviso previo" (15).

Puede extrañar esta proposición cuando, para esta fecha, ya se había liberalizado la propiedad de la tierra y existía la libertad mercantil, de contratación, de movimientos y de industria. En definitiva, cuando ya se había realizado lo que Artola ha llamado la "ordenación liberal de la economía" (16); cuando ya se habían marcado las reglas del juego que posibilitaban el desarrollo de un nuevo sistema económico. Las declaraciones eran, pues, innecesarias, por más que los demócratas de 1.868 creyeran fervientemente en su utilidad a juzgar por los grandilocuentes preámbulos de sus disposicio-

(15) Proposición firmada por Orense, Cabello de la Vega, Caymó y Bascós, Serracía, Palanca, del Castillo y de Ameller; fechada en 18 de marzo de 1.869, fue incluida en D.S.C., apéndice 2º al núm. 36.

(16) M. Artola, Antiguo Régimen..., p. 295 y Los orígenes de la España Contemporánea, Madrid, 1.975, I, p. 567.

nes legales (17).

Frente a este planteamiento, fue otro el camino seguido entre 1.814 y 1.868. Frustado el intento de codificación gaitano, el proceso de liberalización económica se realizó a un ritmo desigual, a base de medidas parciales. Fernando VII inició el camino, obligado por las circunstancias y de esta forma marcó el procedimiento: no tanto una declaración de principios global —lo que más se acerca es el Código de Comercio de 1.829— cuanto una paulatina abolición de privilegios.

Entre 1.833 y 1.837 se produjo una importante renovación legislativa que sentó las bases fundamentales del nuevo orden. En ella pueden distinguirse dos períodos; el primero, marcado por el moderantismo de los gobiernos presididos por Cea Bermúdez y Ríos Rosas y, el segundo, por el radicalismo de Mendizábal (18).

El marco legislativo liberal no fue cuestionado a partir de esa fecha; no obstante, faltaba por regular —en esta sociedad agrícola— la figura fundamental que sirve de base al sistema capitalista: la sociedad anónima. Progresistas y moderados debatieron el tema manteniendo entre 1.848 y 1.868 una postura intervencionista hasta que el triunfo de los demócratas en 1.868 dirimió definitivamente el conflicto, y se

(17) Insistiremos sobre este punto más adelante, cuando analicemos la legislación del sexenio revolucionario. Los demócratas se vieron sobrepasados por la realidad y pronto redujeron sus presupuestos sin por ello renunciar a su peculiar estilo literario en la presentación de sus disposiciones legislativas.

(18) Ibidem, pp. 295-305.

generalizó el principio de la responsabilidad limitada. El Código mercantil, elaborado en 1.829, también se reveló insuficiente para regular las modernas relaciones capitalistas; Pronto aparecieron sus críticos pero, de nuevo, fueron los revolucionarios del 68 los que pusieron las bases definitivas del que se promulgó en 1.885.

Antes de analizar la Codificación mercantil como el ordenamiento jurídico necesario para regular un nuevo modelo de relaciones económicas, es necesario realizar algunas reflexiones sobre la lenta instauración de la liberalización económica en nuestro país. Sin ella es impensable, no ya la regulación, sino la formación del sistema capitalista. De ellos nos ocupamos en el presente capítulo.

1.1.- La propiedad libre de la tierra

La revolución liberal exige una transformación del régimen jurídico de la propiedad de la tierra y, en general, una redefinición del concepto de propiedad que permita asentar las bases de la nueva sociedad burguesa (19). Las medidas liberalizadoras de los gobiernos reformistas de la segunda mi-

(19) v., sobre el tema de la redefinición de la propiedad, M. Artola, Los orígenes..., I, p. 16 y, sobre la conciencia de su importancia entre los revolucionarios del momento, Francisco Tomás y Valiente, "La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen", en José Mª Jover Zamora (dir.), "La era Isabelina y el sexenio democrático (1834-1874)", vol. XXXIV de la Historia de España Menéndez Pidal (fund.), Madrid, 1.981, pp.143-150).

tad del siglo XVIII habían roto el monopolio de la organización gremial y su práctica había quebrantado el intervencionismo —directo o indirecto— del Estado en el mercado de bienes y servicios. La existencia de relaciones capitalistas de producción ha sido puesta de relieve por Artola para el Antiguo Régimen español. A comienzos del siglo XIX, por tanto, para completar el tránsito a la economía de mercado, no queda sino consumir el camino iniciado y poner fin a la propiedad vinculada (20).

La redefinición de la propiedad de la tierra era necesaria para lanzar al mercado la fuerza productiva que generaba la mayor parte de la renta y posibilitar que los labradores acomodados reinviertieran sus ganancias en la compra de tierras. Era necesaria, asimismo, para que el explotador directo pudiera obtener las compensaciones correspondientes a las mejoras que realizara y, así, potenciar éstas. Tal consideración había sido realizada por Quesnay y recogida por la fisiocracia española (21).

Un tercer argumento justificativo se basaba en la conveniencia de la concentración de ganancias y renta en el explotador directo, al que se suponía una mayor capacidad para aprovechar el excedente. Esta proposición era una alternativa al Antiguo Régimen, en el que el sistema de propiedad lle

(20) M. Artola, Antiguo Régimen..., p. 174.

(21) François Quesnay, Máximas generales de la política económica en un país agrícola, 1.758, núm. IV, En — "Le Tableau économique" y otros estudios económicos, sel. y pról. de Valentín Andrés Álvarez, Madrid, 1.974, pp. 200-201. Luis Argemí y d'Abadal y Ernest Lluch, "La fisiocràcia a Espanya", Estudis i Notes, I, 1.982.

vaba a la división del excedente entre arrendatarios y terratenientes (Cantillon). En la rígida interpretación fisiocrática, incluso, se suponía que el producto neto revertía en su totalidad en el terrateniente, que se lo apropiaba de forma de renta (22).

Los intentos reformistas basados en la doctrina fisiocrática habían fracasado en Francia y en España. En ambos países, en la segunda mitad del siglo XVIII, los gobiernos ilustrados mostraron su incapacidad para organizar un nuevo modelo de explotación agraria sin hacer saltar el tipo de propiedad existente y, consiguientemente, el modelo de organización sociopolítica. En Francia, el símbolo de esta ruptura se encuentra en 1.789. En España, en la labor legislativa de las Cortes de Cádiz.

Los revolucionarios gaditanos, en su intento de ordenar su nuevo modelo social se vieron, pues, obligados a redefinir el concepto de propiedad en un sentido que determinara un estado de cosas conforme a sus intereses. La propiedad, sagrada e inviolable, debía combinar la personalidad individual del titular y la libertad ilimitada de la capacidad de disponer (23). La plasmación legal de estos principios se en

(22) Richard Cantillon, Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, México, 1.950, p. 37. Como considera su primer estudioso, Jevons, es difícil datar el Ensayo..., pero sabemos que fue traducido al francés en 1.755, que Quesnay lo conocía y que tomó de él su análisis de la renta de la tierra, que reprodujo en el artículo "fermiers" que escribió para la Enciclopedia francesa. Su propia elaboración le llevó a sostener, en el Tableau économique que el arrendatario no tenía ninguna participación en los beneficios (v. R.L. Meek. "El concepto fisiocrático de beneficio", en La fisiocracia, Barcelona, 1.975, pp. 94-120).

(23) M. Artola, Antiguo Régimen..., p. 175.

cuentra en el decreto de 8 de junio de 1.813, que postula la libertad de explotación y cerramientos (24).

Esta definición debía ser completada con medidas que lanzaran al mercado las tierras —desvinculación y desamortización— y que acabaran con el régimen señorial y las limitaciones de uso derivadas de los privilegios jurisdiccionales.

La conversión del dominio señorial en propiedad particular, iniciada con el Decreto de 6 de agosto de 1.811 fue consumada por el de 26 de agosto de 1.837, que resucitó definitivamente lo que fue abolido por el absolutismo y el Trienio Liberal no pudo consolidar (25).

La abolición de los mayorazgos, figura sobre la que se generalizó la crítica desde mediado el siglo XVIII, no se consumó hasta la promulgación de la ley de 19 de agosto de 1.841, tras el intento fallido del Trienio (ley de 11 de octubre de 1.820) resucitada en el Decreto de 30 de agosto de 1.836 (26).

La desamortización, cuya necesidad fue planteada, asimismo, a finales del siglo XVIII, tuvo una escasa articulación en las legislaciones gaditana y del Trienio. Fue Mendizábal el que elaboró la normativa básica sobre este aspecto (DD.

(24) DD.CC., t. 4, pp. 80-82.

(25) DD.CC., t. 1, pp. 193-196, C.DD., t. 23, pp. 150-154. No entramos aquí en los conflictos derivados de su aplicación. Sobre ello, especialmente, Salvador de Moxó, La disolución del régimen señorial en España, Madrid, 1.965 y Rafael García Ormaechea, Supervivencias feudales en España. Estudio de legislación y jurisprudencia sobre señorios, Madrid, 1.932.

(26) La ley de 19 de agosto de 1.841 en C.DD., t. 27, pp. 545-549; R.D. de 30 de agosto de 1.836 en C.DD., t. 21, pp. 363 y 364. Sobre este punto en su desarrollo, Bartolomé Clavero, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1.369-1.836), Madrid, 1.974.

de 19 de febrero de 1.836 y la ley de 29 de julio de 1.837). A partir de este momento, el proceso sería imparable aunque las relaciones con la Iglesia lograron frenarlo en épocas moderadas hasta que el Concordato de 1.851 fijó, definitivamente, la incorporación de esta institución al nuevo modelo de sociedad y creó unas nuevas bases de poder para la Iglesia (27). La desamortización transformó el régimen jurídico de un volumen considerable de fincas y posibilitó la transferencia de las mismas. Como ha afirmado Tomás y Valiente, "la operación desamortizadora fue por ello un requisito imprescindible para la realización de la revolución burguesa, esto es, para la consolidación de un cambio en la estructura de la propiedad y para la aparición de nuevos propietarios" (28).

Esta situación, unida a la libre contratación del trabajo y a la libre comercialización de los productos de la tierra, configuraron una situación de mercado libre agrícola. Estaban puestas las bases para el desarrollo de la agricultura. La acumulación de capital, no sólo podía incrementarse gracias al nuevo derecho establecido, sino que pasaba a manos de aquéllos que, teóricamente, mejor podían utilizarla para

(27) Francisco Tomás y Valiente, El marco político de la desamortización en España, Barcelona, 1.971, María Dolores Sáinz ha resaltado la actitud posibilista de la iglesia española ante el hecho inevitable de la desamortización. La opinión pública y la desamortización (1.834-1.845), tesis doctoral inédita, dirigida por Miguel Artola y leída en la U.A.M., en 1.978, I, p. 473.

(28) Francisco Tomás y Valiente "La obra legislativa...", p. 167. Sobre esto, también del mismo autor, "El proceso de desamortización de la tierra en España", Agricultura y sociedad, núm. 7, abril de 1.980, pp. 11-33, José Acosta Sánchez, El desarrollo capitalista y la democracia en España, Barcelona, 1.975, pp. 24-80.

su reinversión o el traspaso a otras actividades productivas.

El proceso no se cumplió según las intenciones de los nuevos legisladores. No todos los propietarios de tierras se plantearon la explotación agraria con un criterio capitalista y no todo el excedente fue invertido en actividades productivas. Las causas son múltiples y todavía poco estudiadas.

Se ha afirmado que la desamortización desvió buena parte del ahorro hacia la compra de tierras, lo que retrasó su empleo en la industrialización. Sin duda es exacta la primera parte de la afirmación; respecto a la segunda, debemos considerar si la cantidad absorbida —500 millones de reales— era la totalidad de las disponibilidades financieras del país. La respuesta es negativa y quizá, como afirma Fontana, debamos prestar más atención a los 30.000 millones de reales en que puede cifrarse el aumento de la deuda pública entre 1.835 y 1.874 (29). Sobre ello, debemos analizar cómo se realizó la inversión del capital disponible en los inicios de la industrialización en España.

La desamortización era un requisito indispensable para la puesta en marcha del nuevo modelo socioeconómico. Su contribución al desarrollo económico está aún poco clara y no se puede derivar, linealmente, de la legislación. Los estudios sobre este fenómeno deben responder documentalmente a estas cuestiones en una línea que ya ha ofrecido algunos resultados

(29) J. Fontana, "La desamortización de Mendizábal y sus antecedentes", en Angel García Sanz y Ramón Garrabou (eds.). Historia agraria de la España contemporánea, Barcelona, 1.985, t. I, pp. 235-237.

tados (30).

1.2.- La libertad de industria.

En el Antiguo Régimen, la fabricación de los diferentes productos que debían servir al abastecimiento del mercado interior, colonial y, en su caso, exterior, estaba monopolizada por la estructura gremial. Los gremios, de hecho, habían comenzado a compartir su actividad con los fabricantes libres establecidos fuera de los márgenes de su jurisdicción, con las Reales Compañías Privilegiadas de Comercio y Fábricas y con las Fábricas Reales. En la segunda mitad del siglo XVIII se asiste, como ya fue reseñado, a la promulgación de una legislación que permitía la libre fabricación, especialmente en el sector más importante del momento: el textil.

Las Cortes de Cádiz pretendieron consumir el proceso que tendía a instaurar la libertad de industria. No fue otra la intención del Decreto de 8 de junio de 1.813, que proclamó el libre establecimiento de fábricas de cualquier clase y el

(30) Sobre lo ya mencionado, por no citar sino algunas relevantes contribuciones recientes, reseñaremos las de Francisco Simón Segura, "La desamortización española del siglo XIX", en Papeles de Economía Española, núm. 20, 1.984, pp. 74-107, Germán Rueda Hernanz, "La desamortización de Mendizábal y Espartero", en Información Comercial Española, núm. 623, julio de 1.985, pp. 53-68 y Javier M. Donézar Díez de Ulzurum, "Los bienes de los pueblos y la desamortización", ibidem, pp. 69-81. Sobre la agricultura, en su conjunto, Gabriel Tortella Casares, "La agricultura en la economía de la España contemporánea: 1.830-1.930", en Papeles de Economía Española, núm. 20, 1.984, pp. 62-73 y el conjunto de estudios reunidos en Angel García Sanz y Ramón Garrabou (eds.), Historia agraria de la España contemporánea, Barcelona, 1.985 (2 vols.).

libre ejercicio de oficios "útiles" sin necesidad de sujetar se a las ordenanzas gremiales (31). Se trata de una expresión general de la libertad de industria que no suprime explícitamente los gremios pero que les priva de sus bases (32).

El mencionado decreto tuvo su origen en una proposición del Conde de Toreno, dictaminada y votada favorablemente por las Cortes en sus sesiones de 31 de mayo y 3 de junio de 1.813, no sin debate, en el que el proponente citó con veneración a Adam Smith mientras se alzaron voces a favor de la subsistencia de las corporaciones para controlar la calidad de las produccciones (33). Esta disposición, derogada por el régimen fernandino, con el paréntesis del Trienio Liberal, fue definitivamente restaurado en 1.836 (34).

Tras la muerte de Fernando VII, y hasta llegar a la renovación de la disposición gaditana, se produjeron diversas medidas particulares que fueron, paulatinamente, derogando privilegios e instaurando la libertad de industria.

El decreto de 21 de octubre de 1.833 declaró libre la fabricación de cristal en Madrid y sus alrededores, como ya lo

(31) D.CC., t. 4, p. 86.

(32) Al proceso de extinción de los gremios se refiere Pedro Molas Ribalta, Los gremios barceloneses..., en las pp. 547-554.

(33) D.S.C., 31 de mayo de 1.813, pp. 5.389 y 5.390; 3 de junio, pp. 5.409-5.414. En p. 5.415, se incluyen los nombres de los 15 votantes en contra de la proposición.

(34) D. de 6 de diciembre de 1.836, en CC.DD., t. 21, p. 563. Tuvo su origen en una propuesta de Caballero presentada en el parlamento en 5 de noviembre de 1.836, discutida el 30 del mismo mes (D.S.C., p. 438) y aprobada en 2 de diciembre (p. 450).

era en las demás provincias. Su preámbulo es característico de estos años de transición, en los que el establecimiento de la libertad industrial se considera una concesión de la Corona que debe fijar un calendario encaminado a tal objetivo. De ahí que, a pesar de que se afirme que "ningún Estado puede hoy prosperar sin industria" y de que ésto "no puede lograrse habiendo fábricas privilegiadas", se limite a la disposición mencionada, concebida como "una muestra del favor que me propongo ir dispensando a la industria nacional" (35).

El Real Decreto de 20 de enero de 1.834, incidió directamente sobre las asociaciones gremiales. No se pretendía su abolición explícita, a pesar de que la reina se mostraba "convencida de que las reglas contenidas en los estatutos y ordenanzas que dirigen las asociaciones gremiales formadas para protegerlas (las industrias) han servido tal vez para acelerar su decadencia". Pero, como el Decreto de 1.813, suprimía las bases de su sostenimiento con la proclamación de la libertad de movimientos de los artesanos (a. 7) y de la posibilidad de que ejercieran cuantas industrias quisieran (a. 8). Tales disposiciones respondían a los planes anunciados de "remover cuantos obstáculos se opusieran hasta ahora al fomento y prosperidad de las diferentes industrias".

No se suprimían los gremios sino que se les lanzaba a competir en el mercado libre. Por ello, no podrían crearse

(35) DD.CC., t. 18, pp. 258-259.

aquellos que pretendieran monopolizar el tráfico de artículos de comer, beber y arder (a. 4) o cuyas ordenanzas contuvieran disposiciones contrarias a la "libertad de fabricación", de circulación interior o a la "conconcurrencia indefinida del trabajo y de los capitales" (a. 6).

Con esta disposición, por tanto, quedaban los gremios privados de una de sus características esenciales: la organización para influir en los mecanismos de mercado mediante el monopolio de oferta y el control de los precios. Ni siquiera —según los supuestos liberales— eran admisibles en cuanto asociación de trabajadores de un sector; sí se contemplaba, sin embargo, su existencia como "reuniones de hombres animados por un interés común para estimular los progresos de las respectivas industrias" (36).

La libertad de contratación fue proclamada como principio general en el Decreto de 6 de agosto de 1.811 y, tras la época absolutista, de nuevo en el precitado R.D. de 20 de enero de 1.834.

Aunque era un derivado del liberalismo económico, como ha señalado Artola, el proceso de liberalización del mercado de trabajo había comenzado en el reinado de Carlos III (37).

El Bienio progresista conoció un interesante proyecto de ley, firmado por Alonso Martínez, en el que se intentaba regular el derecho de asociación reclamado por un movimiento obrero de fuerza creciente, que habían enviado una represen-

(36) CC.DD., t. 18, pp. 26-28.

(37) M. Artola, El Antiguo Régimen..., p. 52

tación a las Cortes avalada por 22.000 firmas (38). Este proyecto, presentado en octubre de 1.855, no se llegó a discutir, debido a los problemas políticos del momento, pero su consideración es interesante, por cuanto expresa el pensamiento oficial del momento que pretendía incorporar al movimiento obrero sin reconocer su capacidad negociadora. La decepción de los trabajadores fue grande. El contenido no satisfacía sus aspiraciones y la comisión dictaminadora contaba con la presencia de Madoz y Figuerola, hostiles al sindicalismo. Como ha afirmado J. Maluquer de Motes, "el proyecto de ley de Alonso Martínez culminó el descrédito del progresismo liberal entre los obreros... (y) propició la definitiva desafección proletaria hacia el liberalismo progresista y la búsqueda de nuevas alianzas" (39). Prescindo de buena parte de las proposiciones de este proyecto, que exceden las intenciones de estas líneas, para destacar aquellas dos que nos interesan directamente.

El proyecto acepta la conveniencia de regular la asociación obrera, por cuanto el capital puede verificarla legalmente en las "sociedades anónimas, comanditarias y colectivas". Es curioso observar cómo la enumeración se realiza según la importancia de los capitales de cada compañía, dentro de cada tipo, y no según los criterios clásicos, que realiza una descripción inversa, según su aparición en la historia.

(38) Joaquín Molar y Juan Alsina, Observaciones acerca del proyecto de ley sobre la industria manufacturera, Madrid, 1.855.

(39) Jorge Maluquer de Motes Bernet, "Los orígenes del movimiento obrero español 1.834-1.874", en Historia de España, Menéndez Pidal, v. XXXIV, "La era isabelina..", p.791.

La segunda idea que deseo resaltar es la reafirmación del principio de la libertad de contratación, acto que se es tima debe ser realizado mediante pacto libre entre hombres libres, sin que ninguno de ellos esté sujeto a tasa alguna sino sólo a las leyes del mercado (a.2) (40).

El modelo de sociedad liberal, que se venía configurando desde hacía un cuarto de siglo, mantenía el principio que co mentamos y admitía la asociación de capitales pero todavía no había sabido integrar el movimiento sindical. El análisis de su legalización en España queda, obviamente, fuera de nuestro objeto; sobre todo si tenemos en cuenta que aquí no nos interesan en cuanto asociaciones de socorros mutuos sino como participantes colectivos en la toma de decisiones económicas. Este papel nunca fue aceptado por la economía clásica y su vertiente neoclásica y no quedó incorporado a la doctrina hasta el siglo XX, con el pensamiento keynesiano. Buena parte de su formulación y, desde luego, su aceptación, en España, queda fuera del límite cronológico de estas páginas, así como el peculiar corporativismo primorriverista.

(40) Este proyecto, de 8 de octubre de 1.855, en D.S.C., leg. 1.854-56, apéndice 1º al núm. 214.

1.3.- La libertad de comercio.

a) La construcción de un mercado nacional.— La formación de un mercado de ámbito nacional es un requisito indispensable para que se pueda completar la revolución industrial en cualquier país (41). La producción de mercancías a gran escala sólo puede desarrollarse si se garantiza la posibilidad de su colocación en un mercado amplio —la nación—. No se trata únicamente de una modificación de las dimensiones —de lo comarcal a lo regional y a lo nacional— sino, ante todo, de la organización de un ámbito comercial cualitativamente diferente. El nuevo espacio debe estar integrado —supresión de las aduanas interiores—, debe ser libre —abolición de tasas y privilegios— y debe estar organizado según los principios de la división del trabajo, que permita superar los niveles de autoconsumo.

La España del Antiguo Régimen ofrece una imagen muy pobre en cuanto al tráfico de mercancías. La economía se desarrollaba a un nivel de autoconsumo en el que el comercio era escaso, y cubría áreas reducidas. La existencia de mercados y ferias ocasionales nos muestra la naturaleza del intercambio. Sólo ciertos núcleos escapan a esta caracterización; la periferia, especialmente Barcelona, que desarrolló su indus-

(41) Josep Fontana, "Formación del mercado nacional y toma de conciencia de la burguesía", en Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, 1.973, p. 14. Nicolás Sánchez Albornoz, "La integración del mercado nacional. España e Italia", en J. Nadal y G. Tortella, eds., Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España Contemporánea, Madrid, 1.975.

tria textil en la segunda mitad del siglo XVIII gracias, fundamentalmente, al mercado colonial, y el centro, Madrid, que ofrecía un importante mercado surtido por una organización monopolística, los Cinco Gremios Mayores.

El gran vacío interior estaba intensificado por la escasez de relaciones comerciales entre el centro y la periferia, lo que adquiriría caracteres dramáticos en el caso del trigo. La organización de la propiedad de la tierra dificultaba el crecimiento de la producción de este producto básico. Sobre ello, la política comercial —tasa— y la ausencia de una adecuada red mercantil, agravaban el problema. La periferia importaba lo que el centro —natural productor— sólo le podía ofrecer escasamente y sin regularidad.

Los catalanes, al pretender extender su red comercial —tiendas o botigas— a Castilla se encontraban con el triple obstáculo de la escasez de la demanda, la dificultad de transporte y la existencia de trabas al comercio, tanto por los organismos privilegiados como por la red de aduanas interiores.

La formación del mercado libre, como necesidad para el crecimiento económico, era sentida por la burguesía revolucionaria y con mayor intensidad por la catalana, a la que las guerras de fin de siglo habían originado una importante crisis en la colocación de sus productos. El programa pasaba por la abolición de las antiguas instituciones privilegiadas, por la supresión de las tasas y por la eliminación de los obstáculos que retrasaban el desarrollo de la producción agrícola y manufacturera. En páginas anteriores nos

hemos referido a este último punto, con las disposiciones sobre la propiedad libre de la tierra —transmisión y uso— y sobre la libertad de industria. Consideremos ahora las medidas sobre libertad de comercio y sobre la supresión de las aduanas interiores.

La Constitución de Cádiz en su artículo 354 afirmó:

"No habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las fronteras; bien que esta disposición no tendrá efecto hasta que las Cortes lo determinen"

La implantación de la disposición constitucional chocaba con los intereses de las antiguas "provincias exentas" que venían aprovechando con éxito su peculiar posición. Esta les permitía realizar un lucrativo comercio libre, por estar situadas al otro lado de las aduanas, situadas en el Ebro. De ahí que el traslado de éstas no se pudiera consumir hasta la resolución de la guerra carlista (42).

Las Cortes gaditanas abordaron el problema del comercio de granos en el Decreto de 8 de junio de 1.813 (43). Por él quedaba "enteramente libre y expedito el tráfico y comercio interior de granos, y demás producciones de unas a otras provincias de la Monarquía" (a. 9) y se proclamaba la libertad de almacenamiento. A simple vista, esto pone al labrador en una situación similar a la que siguió a la formulación de la

(42) a. 16 de la llamada "ley paccionada" de 16 de agosto de 1.841, que afectaba a Navarra (C.DD., t. 27, pp. 538-539) y a. 9 del Real Decreto de 29 de octubre de 1.841, para Guipúzcoa, Alava y Vizcaya (C.DD., t. 27, p. 763).

(43) DD.CC., t. 4, pp. 80-82.

pragmática de libre comercio de granos en 1.765 a la que, en esta ocasión, se añade la libertad de arrendamientos (aa. 2 a 7). A raíz de la misma, fueron beneficiados los especuladores, lo que equivale a decir, los propietarios —perceptores de rentas—, sus administradores —arrendadores de diezmos— y los labradores con grandes recursos. De ahí que motivara una fuerte oposición y provocara su revisión. La crisis de 1.804 terminó con lo que aún quedaba de ella (44).

¿Por qué los liberales gaditanos quisieron renovar una disposición muy contestada y que había tenido efectos negativos?. La razón estriba en que la Pragmática de 1.765 fomentó la especulación debido a la ausencia de un mercado libre y transparente sujeto al juego de oferta y demanda. El ideal gaditano incluía este supuesto y se producía en un nuevo marco de propiedad. De ahí que se esperaran efectos contrarios: incremento de la producción, abaratamiento del grano y mejor abastecimiento.

El proceso, una vez más, se cerró en la década de los treinta. El Decreto de 20 de enero de 1.834 liberalizó el comercio de los productos de comer, beber y arder, con la excepción del pan (45). Esta disposición suponía la extinción de los monopolios mercantiles locales y, por ello, provocó una redefinición de las cargas fiscales. Nueve días después, un nuevo decreto completó aquél, declarando libre el comercio de cereales y sus harinas (46).

(44) M. Artola, Antiguo Régimen..., pp. 135-144 y 178.

(45) C.DD., t. 19, pp. 28-30.

(46) Ibidem, pp. 40-43. Hay que considerar que para el comercio internacional de cereales se conservaba un precio regulador (aa. 10 a 13).

Se cerraba así la discusión mantenida desde 1.765 sobre la conveniencia de la liberalización del comercio de estos productos básicos para la población española y cuyo cultivo era la actividad económica más importante de la época. Se abría paso a la competencia, se introducía en el mercado un sector económico básico. Se pretendía así estimular la producción y abaratar los precios a la vez que productores y comerciantes veían incrementadas sus posibilidades de acumulación.

Otros productos estancados son incluidos en el marco del libre comercio mediante una casuística que abarca tanto los períodos revolucionarios como los absolutistas (47).

La desaparición de los mercados y las ferias privilegiadas quedó sin una ordenación precisa y se produjo a raíz de la generalización de los principios del libre comercio. La lenta formación de un mercado nacional, imposible sin una red de transportes adecuada que sólo podía ofrecer en el siglo XIX el ferrocarril, provoca que si bien estas instituciones perdieron sus privilegios, se mantuvieron como centro de contratación en tanto se consolidaban fórmulas cotidianas de abastecimiento (mercado diario, tiendas).

Las alternativas liberales, aun lamentándose de ello, optaron por el mantenimiento del status quo, hasta tanto no legislaran sobre la materia, lo que sería una actividad nunca

(47) v. Francisco Tomás y Valiente, "La obra legislativa...", p. 182.

emprendida. El propio desarrollo de la economía será el que acabe, por una vía de hecho, con estas instituciones privilegiadas.

Este fue el sentido de la Orden de 22 de febrero de 1.812, restablecida en 24 de mayo de 1.837, que facultaba al gobierno para permitir "la celebración de ferias y mercados a todos los pueblos que lo soliciten, siempre que lo estime oportuno, oyendo antes a las Diputaciones Provinciales"(48). Como estimaron los liberales de 1.822, la extensión y generalización del privilegio es una forma indirecta de acercarse a la libertad de comercio (49).

b) Las compañías privilegiadas en el nuevo marco de las relaciones económicas.- La liberalización del comercio colonial, cuyos hitos fundamentales son 1.720, 1.765 y 1.778, había suprimido la razón principal de la constitución de Compañías privilegiadas para esta actividad. A principios del siglo XIX sólo subsistía, como tal, la Real Compañía de Filipinas, cuya Real Cédula se renovó en 1.803.

Al margen de este comercio, la figura se mantenía para el cumplimiento de ciertos fines considerados como de interés público, como era el caso del Banco de San Carlos (1.782), la Compañía de los Cinco Gremios Mayores (1.785) o la de Impresores y Libreros (1.763). Asimismo, se mantenía la conce-

(48) D.S.C.C., 1 de marzo de 1.837, apéndice al núm. 129.

(49) D.S.C., 6 de noviembre de 1.820, pp. 2.116 y 2.117.

si3n de privilegios para la realizaci3n de obras p3blicas, fundamentalmente canales.

La Constituci3n de 1.812 traspas3 al legislativo la facultad de conceder privilegios y as3, en su a. 172, entre las "restricciones de la autoridad del Rey" incluye:

"Novena: No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporaci3n alguna"

El breve per3odo de vigencia de las Cortes gaditanas y la enormidad de su labor legislativa impidieron un tratamiento separado de este problema, y un posicionamiento ante las privilegiadas existentes. las Cortes del Trienio, sostuvieron un debate sobre dos de estas instituciones, la Real Compa1a de Filipinas y la Compa1a de Guadalquivir, que hab3a sido autorizada por el monarca en 1.815.

Durante el Trienio no se adopt3 una disposici3n general para disolver las Compa1as. Como en el caso de los gremios, se suprimi3 su caracter3stica fundamental, el privilegio, y se las sometió a las reglas del mercado libre. El Decreto sobre aranceles que regulaba el comercio exterior, reafirmaba la idea de que todos los espa1oles pod3an realizar el comercio a todos los puntos del territorio de la monarqu3a (50) y, seg3n hemos mencionado, el rey no pod3a dispensar ning3n privilegio exclusivo sin la autorizaci3n de las Cortes. Estos dos principios chocaban con la actividad de las dos compa1as mencionadas y originaron un debate parlamentario, que pasa-

(50) D. de 5 de octubre de 1.820, DD.CC., t. 6, pp. 170-178,

mos a analizar, en tanto refleja las opiniones manifestadas en este momento de transición.

La Real Compañía de Filipinas.

Esta compañía tuvo una importante contribución en la Guerra de la Independencia, por sus donativos, por la negociación de empréstitos en Londres y por la entrega de préstamos forzosos, cosa que hizo particularmente y en colaboración con los comerciantes de Cádiz. Según el Balance de 31 de marzo de 1.814, la deuda de la Real Hacienda con la Compañía ascendía a 5.645.531 rs.vn. 29 mrs. (51). A pesar de ello, la reclamación de sus privilegios ante el liberalismo gaditano resultó inútil.

El Real Decreto de 4 de mayo de 1.814, que anuló toda la obra gaditana, restableció en sus privilegios a la Compañía, cosa que explicitó la Real Orden de 27 de julio de 1.814. Poco después, se le permitió el comercio directo entre Asia y América, tantas veces solicitado.

La Compañía ya tenía pérdidas importantes en 1.806-07. A raíz del bloqueo continental, Inglaterra había buscado introducir los productos de su industria en los países no sometidos a Napoleón. Si consideramos, además la imposibilidad de que la Cataluña ocupada surtiera el mercado de productos textiles y la necesidad de mantener la amistad inglesa, comprenderemos las razones de que, con una cierta tolerancia, Inglaterra realizara con éxito la competencia a la Compañía que

(51) M.L. Díaz Trechuelo, La Real Compañía..., p. 127.

vió, de hecho, suprimidos sus privilegios.

Esta situación llevó a Fernando VII a dictar, a partir de 1.814, una serie de medidas que pretendían acabar con el tráfico particular que se venía realizando en los géneros que, teóricamente, monopolizada la compañía (RR.OO. de 29 de julio de 1.814 y de 29 de enero de 1.815).

Esta positiva actitud de la Corona y la vuelta a una paz general tiñó de optimismo la Junta General de Accionistas de 1.815, hasta el punto de que, con una pérdida estimada en ca si 36 millones de reales a final de año, se repartió en 1.815 un dividendo del 3% a costa del capital (52).

Los años siguientes fueron de pérdidas sólo compensadas, en parte, por nuevos privilegios. La Compañía era incapaz de recuperar el comercio que habían realizado los ingleses entre 1.805 y 1.814. A pesar de ello, se votó el reparto de un nuevo dividendo.

El liberalismo del Trienio actuó, por tanto, sobre una compañía en crisis. La Orden de 19 de octubre de 1.820 anuló todos los privilegios que le estaban concedidos. El Decreto de 9 de noviembre reguló el tráfico con Filipinas, destacando que podrían "concurrir a este comercio los buques españoles indistintamente" (53).

Estas disposiciones fueron promulgadas tras una dura dis cusión en el Parlamento, en la que los privilegios de la Com pañía fueron atacados utilizando una muy precisa argumenta-

(52) M.L. Díaz Trechuelo, La Real Compañía..., p. 132. Subrayado mío.

(53) O. de 19 de octubre de 1.820 en DD.CC., t. 6, pp. 226 y 227; D. de 9 de noviembre, ibidem, pp. 378-380.

ción liberal, sobre dos puntos:

1) Si el comercio puede realizarse por particulares "¿a qué estancarlo en manos de una corporación, con daño conocido al consumidor y de la industria que pudiera emplearse en él?"

2) Si no puede hacerse por particulares, ¿para qué necesita los privilegios?, "¿no tendría siempre en la superioridad de sus nuevos fondos una exclusiva, de hecho, más efectiva que la que le aseguran los reglamentos?" (54).

Estas proposiciones y la defensa del artículo 172 de la Constitución, que negaba al rey la facultad de conceder privilegios, resumen la argumentación de la propuesta de la Comisión de Cortes sobre la que recayó la tarea de dictaminar. Recoge las tesis liberales que se reprodujeron en el Decreto citado. Por él, se abandona a la Compañía a sus propias fuerzas, y, sin privilegios, debía competir en un marco de comercio libre. El texto no disuelve, por tanto, la Compañía sino que esta decisión —se recalca— sólo compete a los accionistas.

La Compañía tuvo dos defensores en la Cámara: Uno de los miembros de la comisión citada, Manuel Sánchez Toscano, que había sido vocal en la Junta de Gobierno de la discutida organización mercantil y el Secretario de Despacho de Gobernación de Ultramar, que intervino como particular y no en ra-

(54) Dictamen de la Comisión formada por Zubia, Desprat, Istúriz, Flórez, Oliver y Maule, D.S.C., 17 de octubre de 1.820, pp. 1.699 a 1.702.

zón de su cargo.

Manuél Sánchez Toscano realizó una ardiente intervención, cuyo argumento central era que la Real Cédula de 1.803, por la que se prorrogaron los privilegios de la Compañía durante veinticinco años, era un contrato, celebrado entre la misma y el Rey como representante de la nación. El voto particular estimaba que este pacto, sagrado, no se podía romper hasta el momento de su extinción en 1.825. Según esta teoría, "no son privilegios aislados los que disfruta este cuerpo; son puramente ciertos derechos adquiridos por ciertas obligaciones". De ahí que puedan ser considerados como una "patente de invención", como las aplicadas a otras materias (55). Es, en definitiva, la repetición de la doctrina que se había gestado en torno a la justificación de las compañías privilegiadas en la Edad Moderna y la reiteración de las ideas que Foronda expresó en 1.785, en el momento de creación de la de Filipinas, (56).

La intervención del secretario de Despacho de la gobernación de Ultramar añadió a este argumento doctrinal, otro basado en la fuerza de los hechos. Se trataba de la existencia de una Compañía de Indias Orientales, con grandes privilegios y atribuciones, en Inglaterra, "país de Europa donde se halla más arraigada la libertad" (57). No tuvo en cuenta el orador las críticas de los teóricos liberales a la East India

(55) Ibidem, pp. 1.702 y 1.703.

(56) Foronda, Discurso..., p. 31.

(57) D.S.C., 17 de octubre de 1.820, p. 1.705.

Company, en tanto privilegiada (58).

En estas intervenciones, subsistía la identificación de la Compañía con personalidad jurídica y responsabilidad limitada con la figura de la Privilegiada. La existencia de estas asociaciones y de los privilegios a ellas inherentes, se justificaba en que la iniciativa privada era incapaz de emprender ciertas actividades necesarias a la nación. Sobre ello, el último orador citado mantenía que en 1.825, fecha de caducidad del "contrato" "se verá si se halla la Nación en estado de que se haga por particulares lo que en mi concepto no puede hacerse por ahora sino por Compañías" (59). Como tendremos ocasión de destacar, el Estado liberal se planteará la realización de obras públicas con una peculiar fórmula de compañía con privilegios, si bien sobre otras bases y en otro marco.

Los partidarios de la Compañía lograron situar el debate en su terreno, de la misma forma que el problema del régimen señorial se guió por la dificultosa senda del estudio del carácter de los contratos. En la discusión parlamentaria que estamos considerando, destaca la intervención de Flórez Estrada, la curiosa exposición de la teoría del pacto social realizada por Oliver que, como el anterior, había firmado el dictamen de la Comisión y la intervención mediadora de Martínez de la Ro

(58) "En cualquier aspecto que se miren, tales compañías exclusivas son siempre nocivas y perjudiciales al país en que se establecen", A. Smith, Investigación..., lib. IV, cap. VIII; p. 570 de la ed. de México, 1.958. Sobre la East..., pp. 660-668 (lib. V, cap. I, parte III).

(59) D.S.C., 17 de octubre de 1.820, p. 1.705.

sa que recomendaba dejar extinguir la Compañía hasta 1.825, fecha en la que bastaba con no renovarle el contrato (60). Pero sobre todo, cabe señalar que este planteamiento del debate, interiorizado a la hora de reformar el sistema económico de la época, está reflejado en la resolución final:

"... y con arreglo al artículo 172 de la Constitución, y en conformidad a las bases de Comercio y Aranceles aprobadas por el Congreso, cesen como diametralmente opuestos a las leyes, a la conveniencia general y a la justicia por falta de cumplimiento de contrato, todos los demás privilegios exclusivos de que goza la Compañía de Filipinas, incluso en ellos el de la Real Cédula de 12 de julio de 1.803" (61).

La Compañía reclamó contra esta resolución en una exposición que elevó a las Cortes el 27 de octubre de 1.820. Ante la falta de respuesta, reiteró su posición en otra, fechada ocho meses después. En ellas ya se reconocía el derecho del legislativo a suprimir los privilegios de la Compañía, por razones de utilidad pública pero se negaba que hubiera habido, por su parte, incumplimiento de contrato (62). La inclusión de este término en el Decreto de las Cortes marcó a la Compañía el camino por el que guiar sus reclamaciones (63).

La confusa situación política dilató la resolución de este asunto y la restauración del régimen absoluto resucitó los privilegios de la Compañía que, sin embargo sólo sobrevi

(60) D.S.C., 18 de octubre de 1.820, pp. 1.732-1.739.

(61) CC.DD., t. 6, p. 227. Subrayado mío.

(62) M.L. Díaz Trechuelo, La Real Compañía..., pp. 143-144.

(63) C.DD., t. 8, pp. 129-131.

vía a un nivel de negociación muy escaso.

Los Decretos de 4 de enero y 9 de febrero de 1.824 declararon libre y abierto el comercio ultramarino. En consecuencia, los buques extranjeros entraban al puerto de Manila y realizaban su comercio libremente. No obstante, se invitó a la Compañía de Filipinas a exponer su situación al Rey, con todas las peticiones que considerara necesarias para su subsistencia, con tal de que fueran encaminadas al fomento de Filipinas. Cabe destacar que en la misma fecha, y también a instancias del monarca, la Compañía de los Cinco Gremios Mayores estaba elaborando una Memoria sobre su utilidad. Tales peticiones fueron analizadas por una Comisión que dictaminó en contra de esta institución, por siete votos contra cinco. Esta Comisión, cuya resolución mayoritaria confirmaba el deseo ya expresado por la Dirección General de Rentas, el Comisionado Regio en Cádiz y el Consulado de esta ciudad, no fue escuchada. La Real Orden de 22 de junio de 1.825 prorrogó los privilegios de la Compañía (64).

El Rey impuso su opinión, pero los dictámenes citados y la propia debilidad financiera de la asociación muestran que la suerte estaba echada para la Compañía de Filipinas y para la organización del comercio privilegiado. Aún dentro de la etapa absolutista, la Real Orden de 28 de septiembre de 1.828 ratificó el libre comercio de las islas Filipinas. La Compañía creada por y para el privilegio, no supo competir en el marco de unas nuevas relaciones mercantiles aunque todavía

(64) C.DD., t. 10, p. 199.

conservaba una fuerte rebaja en los derechos de importación.

El Código de Comercio de 1.829 contempló la libre creación de sociedades anónimas (a. 293) pero cuando éstas gozaran de algún privilegio, se someterían a "Soberana aprobación" (a. 294). Los de la Compañía de Filipinas todavía se estaban discutiendo en el seno del Consejo de Indias cuando éste se suprimió definitivamente por Real Decreto de 24 de marzo de 1.834. El asunto pasó a la sección correspondiente del Consejo Real que dictaminó en contra. Su posición era idéntica a la del decreto de 1.820: anulación de privilegios y que los accionistas decidieran si continuar o no la Compañía. Pero el Estado era el principal interesado, ya que poseía cerca de un tercio de las acciones. Por ello, este tema se resolvió por Real Decreto; el de 6 de septiembre de 1.834 declaró extinguida la Compañía, cuya liquidación se prolongó durante la siguiente década (65).

La Compañía del Guadalquivir.

El Real Decreto de 27 de noviembre de 1.814 autorizó a Alejandro Brially y a Gregorio González Azaola para formar una compañía privilegiada, con objeto de promover y fomentar el comercio, la navegación, la población y la producción de la zona surcada por el Guadalquivir, desde Córdoba hasta Sevilla. Los privilegios para facilitar esta loable actividad, considerada de utilidad pública, y que suponía un desembolso de envergadura en obras de infraestructura, les fueron conce

(65) C.OO., t. 19, pp. 374-376.

didos por Real Orden de 13 de agosto de 1.815. Entre ellos destaca el que, desde el principio, fue la manzana de la discordia: "la introducción por el río de 800 toneladas de paños y acolchados en cada uno de los cuatro años, por los cuales se concede el privilegio de derechos" (66).

Desde el momento de su concesión, los fabricantes de Cataluña protestaron contra tal exención. Esta polémica compañía, nacida bajo el absolutismo por concesión real, y contra el artículo 172,9 de la Constitución de Cádiz, sufrirá una dura crítica en el segundo período de vigencia de ésta, en el Trienio Liberal. Fue la Compañía, precisamente la que provocó el debate, pues quería conocer su situación bajo el nuevo sistema (67).

En su defensa, argumentaba la compañía que el privilegio de importación citado fue lo único que "pudo hacer franquear a los capitalistas las gruesas sumas indispensables, y que sólo la propuesta de este medio abrió los corazones y las arcas de varias personas opulentas de dentro y fuera del reino (68). De hecho, se suscribieron 8.015 acciones de 2.500 reales, la mayoría de las cuales estaban sostenidas en capital extranjero, fundamentalmente inglés.

Desoyendo las quejas formuladas por los fabricantes catalanes de tejidos, en 1.819, el rey ofreció a la Compañía la ampliación de sus privilegios de importación a todos los

(66) D.S.C., 20 de octubre de 1.820, p. 1.840. Ninguna de las disposiciones citadas fue reproducida en las publicaciones oficiales.

(67) El debate de D.S.C., 20 de octubre de 1.820, pp. 1.839-1.845.

(68) Ibidem, p. 1.840.

tejidos de algodón, a cambio de un préstamo de dos millones de reales (69). Nos encontramos, por tanto, con un nuevo ejemplo de cómo la monarquía absoluta otorgó un privilegio a cambio de un servicio que venía a ser un empréstito inglés. Ante la penuria de la Hacienda Real, el objeto de la promoción del valle del Guadalquivir pasaba a segundo término y el interés por el fomento de la industria nacional quedaba eclipsado.

Parece bastante demostrado a la luz de los prolijos expedientes desempolvados por la Comisión parlamentaria encargada de informar sobre el asunto y de los elaborados por personas y organismos cualificados en 1.820 (70), que la Compañía no fomentó la agricultura y el comercio interior ni, desde luego, construyó las obras prometidas (canal de navegación). Se limitó, por contra, a enriquecer a sus accionistas —comerciantes extranjeros— al amparo de la oportunidad legal que le ofreció la monarquía absoluta, abusando de sus privilegios para comerciar con tejidos extranjeros. La pobre defensa de la Compañía, firmada por el presidente de su Junta Conservadora, Francisco Saavedra, no desmiente estas afirmaciones.

La aduana de Sevilla, en una rápida aplicación de los principios liberales restablecidos en marzo de 1.820, mante-

(69) R.O. de 28 de septiembre de 1.819, cit. ibidem.

(70) Entre otros informes, cabe citar el de Alcalá Galiano, el de los intendentes de la zona afectada, el de la Dirección General de Rentas y el de la Junta de Comercio de Cataluña.

nía retenidos los géneros de la Compañía, en espera de que fueran abonados los derechos que correspondían, sin reconocer ningún privilegio. Este fue el motivo que impulsó a la mencionada asociación a solicitar de las Cortes una ratificación de sus privilegios.

Como en el caso de la Compañía de Filipinas, el argumento central era la existencia de un contrato con el monarca, por el que los privilegios eran simples pagos recibidos a cuenta de los servicios prestados a la Corona. La Comisión informante —la misma en ambos casos—, aparte de opinar sobre lo fraudulento del negocio y sobre la irrealidad de las obras prometidas, argumentó que, caso de ser correcta la apreciación de la Compañía del Guadalquivir, los beneficios obtenidos habían cubierto, con creces, la cantidad prestada. Por ello, propuso un proyecto de Decreto en el que se declaraban abolidos los privilegios de la Compañía, se le exigían cuentas y se transfería a la Diputación y Ayuntamiento de Sevilla las obras públicas asignadas a aquélla (71).

Este proyecto no se llegó a discutir, pospuesto siempre ante tareas más urgentes y globales, como el Decreto de Aranceles; tampoco hemos encontrado reseñada la promulgación del decreto. La Cámara acababa de discutir el dictamen de la Compañía de Filipinas. la opinión sobre los privilegios comerciales no había cambiado en el plazo de cinco días. Sólo podemos afirmar que se optó por una solución de hecho y que,

(71) D.S.C., 22 de octubre de 1.820, p. 1.845. Los firmantes de este proyecto fueron Oliver, Istúriz, Desprat, Zubia, Flórez, Toscano, Romero Alpuente y Maule.

con sujeción a la legislación general vigente, la Compañía del Guadalquivir perdió sus privilegios comerciales, que había explotado durante cuatro años (72).

Restablecido Fernando VII como monarca absoluto, la Compañía pretendió obtener, al menos, el privilegio de explotar en exclusiva la navegación del Guadalquivir mediante buques de vapor. Su pretensión fue rechazada en 1.824 "mandando entonces expresamente que nadie se opusiese a la libre navegación de los barcos de vapor" (73). La Compañía debía desenvolverse en un marco de libre competencia.

Como ejemplo final del cambio en la concepción de la vigencia de las grandes compañías privilegiadas, cabe citar la resolución de 9 de junio de 1.827. En esta fecha, el Consejo de Ministros consideró un proyecto promovido por algunos españoles residentes en París, para la creación de una Compañía de fomento industrial de la península española. Se trata probablemente de un intento de un sector de los expulsados del 23 para reconciliarse con el régimen, a través de una propuesta de fomento de la economía del país. La idea correspondía a los presupuestos del viejo proyectismo, con sus iniciativas de grandes compañías universales, que, sin embargo, ya no encontraba eco en las esferas gubernamentales. Así se muestra en la resolución del Consejo, ratificada por el monarca:

(72) v. resolución de 8 de noviembre de 1.820, D.S.C., p. 2.192.

(73) Real Resolución de 28 de abril de 1.824, reproducida en 7 de febrero de 1.827 y 22 de enero de 1.828. Actas del Consejo de Ministros, año de 1.827, p. 155 y año de 1.828, pp. 31 y 32. Subrayado mío.

"S.M. mirará siempre con el mayor interés y concederá toda clase de protección a cualquier Junta que se ocupe de fomentar la industria y el comercio de sus Estados: pero que celebrará que tanto ésta como cualquier otra que pueda establecerse se dedique al fomento particular del ramo o ramos que les parezca más ventajoso, por ser el medio de que sucesivamente se vayan perfeccionando todos y que la industria y comercio lleguen a su mayor prosperidad" (74).

Esta preocupación gubernamental porque las Compañías respondieran a un objeto determinado, fue una constante a partir de este momento, motivada por el fracaso de las grandes compañías universales y privilegiadas. Tras la crisis de 1.845-47 reapareció con fuerza y, entre 1.848 y 1.868 no se autorizó ninguna que tuviera un objeto poco concreto y que pretendiera dedicarse al fomento en general.

(74) Actas del consejo de Ministros, años 1.826-27, p. 291 (sesión de nueve de junio de 1.827). Subrayado mío.

CAPITULO 2
LA CODIFICACION MERCANTIL

2.1.- Solicitudes de una codificación mercantil antes de 1.790: su impreciso significado.

El carácter del negocio mercantil provocó en este sector el temprano desarrollo de la asociación, en una doble dimensión. Por una parte, las compañías permitían aunar esfuerzos para la mejor realización del negocio; por otra, surgieron los Consulados como centro de representación de los intereses del colectivo de mercaderes y como tribunal mercantil. La necesidad de contar con una regulación específica fue cubierta por estos Consulados hasta 1.829, en que se dictó un Código de Comercio para toda la Nación.

Hasta esta fecha, el derecho mercantil era un derecho de los mercaderes y estaba simbolizado por las diversas ordenanzas consulares que regían en ámbitos territoriales concretos. Estas adquirieron un diferente grado de aceptación a lo largo del tiempo, destacando, como modélicas, para Cataluña el Llibre del Consolat (s. XIV) y para Castilla, las Ordenanzas del Consulado de Burgos (1.494) y de Bilbao (1.511). Era un derecho emanado de la experiencia, cuya principal función era la definición del ámbito mercantil y de sus contratos, especialmente dentro del comercio marítimo, y la articulación de un sistema para la rápida solución de los confic-

tos, en un procedimiento que obstruyera lo menos posible el normal funcionamiento del negocio.

En el siglo XVIII asistimos a una tendencia hacia la unificación de las reglas mercantiles de los distintos núcleos, cosa que se realiza en torno a las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737. Sobre sus precedesoras, son unas normas más completas, más adaptadas a la realidad económica y a la complejidad creciente del negocio y más precisas, sobre todo, como hemos visto, en su regulación de las compañías (cap. X) y de los pleitos mercantiles (cap. XVIII). Sus autores no fueron juristas, sino seis comerciantes bilbaínos, conscientes de sus necesidades e inspirados en las anteriores ordenanzas bilbaínas, para la regulación de las materias de jurisdicción y organización del propio consulado (caps. I a VIII), letra de cambio (cap. XIII) y seguro marítimo (en cap. XII). Conocedores, también, de las Ordenanzas de Colbert de 1.673 y 1.681, lo que se refleja en el tratamiento de las compañías mercantiles (cap. X) y de las cuestiones referentes a los navíos, fletes y naufragios (caps. XVIII y XIX). Receptores por último, de otras ordenanzas consulares en su brillante tratamiento de la quiebra (cap. XVII) y de los contratos mercantiles (caps. XI y XII).

El siglo XVIII, especialmente en su segunda mitad, conoció en el ámbito mercantil como en otros, intentos cada vez más importantes de centralización y unificación. Ejemplo de ello es, tanto la organización central de los Consulados, que ya no serán fruto de la asociación mercantil espontánea sino

parte de un plan de política económica, como la creación de Juntas Particulares de Comercio, a las que se dotó de un estatuto cuasi-uniforme. Ambos tipos de instituciones dependían de la Junta General de Comercio y formaban su organización territorial. En la década de 1.760, diversas ciudades de la antigua Corona de Aragón adoptaron un modelo similar al de Barcelona, que reorganizó su Consulado y Junta Particular de Comercio de 1.758 (75); fuera de estos límites, San Sebastián y Burgos se renovaron en 1.766 (76). El proceso fue frenado por Campomanes y se reanudó en 1.784-86, bajo la iniciativa del ministro de Indias, José de Gálvez, a raíz de la liberalización del comercio con América y afectó fundamentalmente a Castilla (Santander, Coruña, Málaga, Sevilla, Canarias, Alicante). En 1.800, logró Mallorca su propio establecimiento y tras la Guerra de Independencia se crearon los de Tortosa, Reus, Tarragona, Granada y Vigo, que se emanciparon de otros más antiguos.

Las Ordenanzas de estos Nuevos Consulados, como ya mencionamos, tienen un alto grado de semejanza entre ellas, lo que tiene su explicación en el hecho de que formaban parte de un plan centralizado, que les asignaba un papel preciso

(75) Pedro Molas Ribalta, "Los cuerpos generales de comercio. La pequeña burguesía a finales del Antiguo Régimen", Cuadernos de Historia de Cataluña, noviembre, 1.978, . núm. XIX; del mismo autor, "Instituciones administrativas y grupos sociales en la España del siglo XVIII, 'Las Juntas de Comercio'", I Jornadas de Metodología aplicada a las ciencias históricas, Universidad de Santiago de Compostela, 1.973, tema 4-4, pp. 1-7. Ernest Lluch, El pensament econòmic a Catalunya 1.760-1.840, Barcelona, 1.973, p. 335.

(76) Pedro Molas Ribalta, "La restauración del Consulado de Burgos en el siglo XVIII", La ciudad de Burgos. Actas del I Congreso de Historia de Burgos, Madrid, 1.985, pp. 429-440.

dentro de la estructura territorial de la Junta de Comercio. Incorporan, asimismo, partes importantes de las ordenanzas bilbaínas, sobre todo en lo referente a compañías y quiebras.

Un segundo aspecto que muestra la tendencia centralizadora y unificadora del siglo y que interesa más a estas páginas, consiste en que los núcleos más próximos al poder (en los diversos escalones de la organización borbónica) y en los círculos "ilustrados", se comenzó a hablar de la conveniencia de disponer de una legislación única en materia mercantil que se adaptara o, al menos, que no impidiera el crecimiento económico.

En una etapa inicial, cuando se reclamaba un Código Mercantil se estaba pidiendo —y así se expresa a veces— un "Supremo Tribunal de Comercio". No se sugería tanto la elaboración de un código sobre nuevas bases cuanto la centralización por parte de un máximo tribunal de la legislación y de la jurisprudencia antiguas y que, sobre ellas, dictara unas normas claras a las que se pudieran atener todos los negociantes y el comercio de una nación en proceso de centralización institucional y económica. Es decir, todavía en este siglo, el deseo de elaboración de normas centralizadas tenía un carácter compilador. De los múltiples escritos y representaciones, en este sentido, destacaré los que creo más representativos, algunos de los cuales hasta ahora no habían sido estudiados.

En una representación firmada por Antonio Sartine y fechada en 1.721, se recomendaba una reorganización de la Junta General de Comercio por la que quedaba constituida como

institución representativa de "todas las provincias". Sería reformada en sus atribuciones y entre ellas^{se} encontraría la elaboración de unas "ordenanzas de comercio" que sirvieran "de regla a los pleitos que se podrán ocasionar" (77). Esta proposición era exponente de la temprana preocupación por la uniformidad legislativa, tanto por el propio desarrollo del negocio, como por los deseos de integración territorial a ni vel político y económico e, incluso, por el ejemplo de países vecinos, como Francia, con sus Ordenanzas de 1.673. La representación, por tanto, fue bien acogida, pero la Junta General fue incapaz de darle forma. La efectiva centralización jurisdiccional tendría un lento desarrollo a lo largo del siglo. La formación de las Ordenanzas de Comercio nunca se realizaría en el siglo XVIII. Dieciséis años después, los comerciantes bilbaínos publicaron, con autorización real, sus nuevas normas. Fue, pues, la iniciativa privada la que prime ro dió a luz un texto que fue modelo para todo el comercio, ante la ausencia de una normativa centralizada.. No obstante, la actuación del Estado como protagonista de la tarea legislativa seguía siendo reclamada.

Mediado el siglo, la preocupación fundamental sigue siendo la jurisdicción mercantil. Una respuesta fiscal de 1.766, que calificaba el comercio de "máquina de innumerables resor tes que deben moverse por un solo impulso...", consideraba que éste debía emanar de la Junta, en "Supremo Tribunal de Co

(77) Antonio Sartine, "Papel dirigido al establecimiento de la Junta de Comercio", 1.721, Mss., 13 fols., A.H.N., Estado, leg. 3.205, exp. s/n.

mercio", según se practicaba en Inglaterra (78).

Esta posición era la misma que la de Larruga, que aún en la década de los ochenta se lamentaba de que la Junta de Comercio fuera un tribunal entre tantos —así en la Corte como en los diferentes territorios— y pensaba debía ser "con independencia absoluta de todos los Magistrados de Justicia un autorizado congreso de ministros..." (79).

En 1.766, el Consulado de Barcelona elaboró sus propias ordenanzas que, junto a las de Bilbao, podían haber servido de modelo —si no de texto— para la elaboración de la demandada normativa general. No gozaron de la aprobación de la Junta de Comercio, por lo que cayeron en el olvido hasta que pasaron a engrosar la documentación entregada a la Comisión de Códigos de 1.828. Sólo conocemos este proyecto por referencias que indican que "abarcaba todas las materias del Consolat de Mar y llenaba 381 folios" y que las fuentes para su elaboración había sido el propio Llibre y las ordenanzas consulares de los distintos territorios de la monarquía. Sabemos que este trabajo pasó a informe de los Consejos de Castilla, Hacienda e Indias. Quizá en sus archivos hallaremos un día este documento, que hasta el día solo conocemos de forma fragmentaria (80)

(78) Respuesta del fiscal Pedro Pérez Valiente, 1.766, cit. en E. Larruga, Historia..., t. I, p. 288.

(79) Ibidem, pp. 223-224.

(80) Robert Sidney Smith, Historia de los Consulados de Mar (1.250-1.700), Barcelona, 1.978, p. 152. E. Lluch. El pensament..., p. 351, n.3, Jaime Carrera Pujal, Historia política y económica de Cataluña, ss. XVI a XVIII, Barcelona, 1.947, t. II, p. 590, nota.

Campomanes, en su Discurso sobre la educación popular de los artesanos (1.775), también argumentaba a favor de "establecer una ordenanza general de comercio", "para evitar la incertidumbre de las leyes mercantiles". Con un enfoque práctico, proponía la extensión de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao a todo el territorio:

"Felipe V las prescribió al Consulado de Bilbao, después de un maduro examen; y deberían extenderse sus ordenanzas a todos los Consulados y Tribunales ordinarios del Reino, para su observancia. Porque están acomodadas a la práctica moderna de las plazas mercantiles de Europa, y tienen una general aceptación de los verdaderos conocedores del comercio. Esto no quita que si en la práctica de Bilbao padecen algún defecto, se remedie; y aún mejore según las nuevas exigencias del tráfico general" (81).

Se detecta también en Campomanes la confianza en que la uniformidad legal tendrá como consecuencia la prosperidad material. La seguridad de que unos nuevos y buenos textos se traducen inevitablemente en mejoras reales es una tendencia que hemos seguido en páginas anteriores en el aspecto de las Compañías mercantiles y que encontramos ahora en un enemigo de los privilegios; será una opinión latente también en el siglo XIX, como analizaremos en este capítulo:

"... De esta uniformidad de ideas debe prometerse la España el recobro de la industria, que ha perdido en los oficios. Reducido a sistema este asunto, se formarán con más luces las nuevas ordenanzas ..." (82).

(81) Campomanes, Discurso sobre la educación popular de los artesanos, Antonio de Sancha, Madrid, 1.775, pp. 261-262.

(82) Ibidem, pp. 283-284.

El problema de la uniformización de la legislación mercantil encontró también eco en las sociedades económicas. De los discursos pronunciados en ellas destacamos, como ejemplo, el de Sáenz de Tejada, leído en la sociedad matritense en marzo de 1.776. El autor ocupa una parte central de su complejo discurso en la enumeración de los medios necesarios para el fomento de la economía. Entre ellos, señalamos los que interesan al punto que tratamos.

En primer lugar, reclamaba un "código" que, en realidad, está concebido como mera compilación:

"Necesitamos un código de leyes mercantiles, donde se recopilen las ya hechas, y se unan las que se tuviera por conveniente aumentar".

En segundo lugar, proponía una reorganización del sector y que se erigiera en todos los puertos un Consulado, una organización mercantil fuerte, autónoma y capaz de ofrecer una rápida y barata solución a los pleitos comerciales, según el modelo francés (83).

En los ejemplos citados se observa cómo se fue gestando la idea de la necesidad de la codificación mercantil en diversas instancias, desde los hombres prácticos de los Consulados a los políticos y oradores ilustrados; sin embargo, todavía era una idea imprecisa que podía muy bien confundirse

(83) "Memoria del Sr. D. Policarpo Sáenz de Tejada Hermoso, sobre el comercio, leída en la Junta General del sábado 16 de marzo de 1.776", Memorias de la Sociedad Económica matritense, 1.780, v. 2, pp. 21-50. En el mismo sentido, "Suplemento por notas al discurso sobre la Agricultura, la Industria y el Comercio", por Bernabé Portillo, Cádiz, 1 de mayo de 1.794, esp. § 74, A.H.N., Estado, leg. 3-208, caja 2, núms. 344-345.

con la petición de una compilación de leyes, similar a lo que sería más tarde la Novísima Recopilación.

Las ideas-matrices de las iniciativas mencionadas y otras similares de la misma época son dos fundamentales y que no aparecen necesariamente juntas aunque sea lo más frecuente: la primera, la necesidad de un Código cuyo objetivo fundamental era la rápida y uniforme sustanciación de los pleitos; la segunda, la urgencia de la construcción de un adecuado plan para el fomento de la economía del país. La creación de nuevos consulados fue el primer paso para esto pero, en 1.790, todavía no se había dado solución a aquéllo. Debemos examinar una segunda etapa —1.790/1.829— para ver culminado el proceso que consistía en la elaboración de un Código mercantil que fuese algo más que un tratado sobre conflictos y quiebras.

2.2.- Las iniciativas del poder central hasta 1.828.

El 15 de mayo de 1.791, una Real Orden al Conde de Lereña, mandó que dispusiese inmediatamente un nuevo examen de los papeles que en diversas ocasiones se habían reunido para la remodelación de la Junta de Comercio y que se elaborara un plan al respecto. Esta Orden motivó, al menos, dos respuestas iniciales, que incidían en los aspectos que venimos comentando: la Junta de Comercio se concebía como el organis

mo director de la promoción económica, como el más alto tribunal mercantil y como centro encargado de la elaboración de unas ordenanzas de comercio.

Así se manifestaba en la Consulta firmada por Campomanes y el fiscal del Consejo de Hacienda, Ibarrola, que proponía una nueva planta para la Junta de Comercio. Esta quedaría convertida en un "Tribunal Supremo de Comercio", que sería un centro de promoción de la agricultura, el comercio y las fábricas por ser la cabeza de una organización que tendría como tentáculos los consulados y las juntas particualres de comercio. Quizá choque el pragmatismo de Campomanes, al aceptar ahora, al final de su carrera política, la red de nuevos consulados, pero hay que destacar que conserva su tesis fundamental:

"Debe también ser uno de sus principales encargos el arreglo de una ordenanza General de Comercio adaptada a nuestra constitución, para que con la uniformidad de leyes se estrechen más las relaciones del tráfico mercantil de todas las provincias de la monarquía, observándose entre tanto las del Consulado de Bilbao por la universal aceptación que han merecido" (84).

La segunda respuesta a la Orden de 1.791 es el proyecto presentado por Josef Francisco Vila en 1.793. Este sujeto era accionista de la Compañía de Seguros Marítimos de María Santísima y Santa Eulalia, en 1.775 (85). Un año después, par

(84) "Consulta hecha a S.M. por el gobernador del Consejo Conde de Campomanes y el fiscal del Consejo de Hacienda D. Josef Ibarrola sobre el establecimiento de un Tribunal Superior de Comercio", A.H.N., Estado, leg. 4.570 (2).

(85) A.H.p.B., notario Ramón Font y Alier, Manual de 1.775, fol. 46r.

ticipó en la creación de la Sociedad de Fondos Perdidos que, como la anterior, dirigía Francisco Miláns. El artículo 74 de la escritura de fundación de esta última se refiere a él como "sujeto muy hábil, expedito y versado en materias de comercio", por lo que se le nombró secretario, con el mismo sueldo que los Directores (86). Quince años después lo encontramos como un accionista destacado de la Compañía Marítima (87).

Vila, por tanto, unía a sus preocupaciones políticas una experiencia mercantil, adquirida tanto en las compañías comunes catalanas como en ese magno cuerpo privilegiado que fue la Compañía Marítima. Su escrito de 1.793 incidía en varios temas de política económica; en lo que aquí interesa, responde a la línea que venimos comentando.

Critica los desastrosos efectos de la dispersión de la jurisdicción mercantil, que provoca la prolongación indefinida de unos pleitos que se podían ver en apelación en los "cuatro Tribunales Supremos", que eran los Consejos de Castilla, Indias y Guerra y la Junta General de Comercio. Por ello, manifiesta la necesidad de la constitución de esta última en único tribunal mercantil. La lectura de estos escritos no nos debe hacer olvidar que desde 1.683 y, sobre todo, desde 1.705, son múltiples las normas que insisten en esta cuestión (88).

(86) A.H.P.B., notario José Mariano Avellá, Manual de 1.776, fol. 305v.

(87) A.H.N., Estado, leg. 3.222, exp. núm. 18.

(88) v. E. Larruga, Historia..., t. I, Novísima Recopilación, libro IX. Un índice completo, en "Inventario de los papeles que se entregan hoy 28 de septiembre de 1.802 al S^{or} Agente Fiscal Dn. Manuel Quintana relativos a la creación y facultades de la Junta; de sus oficinas, y órdenes generales comunicadas en materia de Artes y Oficios", A.G.S., Hacienda, leg. 393.

Tal abundancia legislativa fue inútil, lo que se revela en el hecho de que en la década de 1.790 todavía se esté discutiendo este problema.

La Junta de Comercio, además —en la tónica de propuestas anteriores—, se consideraba que debía redactar el deseado Código Mercantil:

"... podía encargarse a la misma Junta General la redacción del Código Mercantil, que tanta falta hace a los Tribunales de una nación que fue la primera legisladora del comercio de Europa, pudiendo valerse para este efecto los que tienen presentados para la aprobación los Consulados de Cádiz y de Barcelona; de las Ordenanzas de Bilbao y con especialidad de las de Marina de Francia; y de otros Códigos extranjeros cuya obra haría inmortal el nombre Augusto de V.M., como hicieron el de Luis XIV las ordenanzas dichas de la Marina" (89).

A diferencia de lo ocurrido en 1.721, este proyecto fue considerado de forma efectiva en la Junta General de Comercio que —si bien con cierto retraso— lo envió a los cuatro consulados más importantes del momento, Barcelona, Bilbao, Cádiz y Valencia. Estos remitieron sus informes entre noviembre de 1.794 (Cádiz) y febrero de 1.796 (Valencia).

La posición de estos Consulados fue diferente en los distintos puntos que tocaba el proyecto, pero sobre la necesidad de una legislación unificada, todos mostraron acuerdo. El de Cádiz destacó que la elaboración del Código Mercantil debía ser una tarea propia del organismo central que se creara y no de los Consulados particulares, que no harían sino in-

(89) "Plan de un Consulado y Junta General de Comercio presentado al Excmo. Sor. Príncipe de la Paz en 23 de mayo de 1.793", A.H.N., Estado, leg. 4.570 (2).

tentar imponer sus propios usos y costumbres (90). Efectivamente, ése era el tono de la lacónica respuesta del Consulado de Barcelona, que se limitó a reconocer la necesidad de la formación del Código y a recordar el proyecto de las Ordenanzas que había elaborado en 1.766. Estimaba que el nuevo texto legal debía reducirse al mencionado proyecto, ampliado con la jurisprudencia emanada desde entonces en el tribunal catalán (91). Recordemos que, desde 1.771, se habían desarrollado en Barcelona una serie de compañías mercantiles por acciones, cuyas especiales características escapaban a la regulación existente. Cádiz había tenido una experiencia similar aunque, como hemos reseñado, no reivindicó, como Barcelona, la primacía de sus normas.

El Consulado de Bilbao, se mostró más enfático en la idea de que la ley general no debería "perder de vista todas las posibles precauciones para evitar las quiebras" (92). Esta afirmación responde tanto a la cuidadosa regulación que las Ordenanzas de 1.737 realizaron sobre este aspecto, como a la difícil coyuntura mercantil de fin de siglo, que lo hacía pasar a primer plano.

El Consulado de Valencia fue el más lento en responder y el más explícito en el tema que nos ocupa. Como Bilbao, señalaba que la primera tarea que se debía abordar era la sim-

(90) Ibidem, exp. 11 de noviembre de 1.794.

(91) Ibidem, exp. de 22 de abril de 1.795. También en A.C.A., Audiencia. Consolat, 5/4, fols. 32r-37v.

(92) A.H.N., Estado, leg. 4.570 (2), exp. de 27 de diciembre de 1.794.

plificación del procedimiento que, aparte de agilizar el comercio, atajaría el problema de la abundancia de quiebras fraudulentas. Señalaba "el dolor de ver" que España, cuyos habitantes "han sido de los primeros navegantes de Europa" carecía de Código habiendo servido sus normas, sin embargo, de modelo a legislaciones unificadas de otros países como Francia. Por último, sugería un método para la elaboración del Código, en línea con lo propuesto por Cádiz. Se trataba de que todos los Consulados enviaran sus ordenanzas al organismo central que el proyecto de Vila indica. Sobre este material, trabajaría una Junta formada por cinco comerciantes ex-cónsules, elegidos por los consulados más importantes (los cuatro que nombraba eran, por este orden, Bilbao, Cádiz, Barcelona y Valencia) y por dos asesores letrados; éstos aportarían los conocimientos teóricos y aquéllos los prácticos(93).

El acuerdo mostrado en la necesidad de la formación de un Código de Comercio no era tan completo —ni, sobre todo, tan coincidente con los deseos del poder central— en otro de los puntos de que trataba el plan de Vila, la configuración de una institución que centralizara y coordinara la actividad de los Consulados y las Juntas Particulares de Comercio. Chocaban los intereses de las autoridades locales, de los partidarios de la conservación de la antigua Junta General de Comercio y de los que preferían una organización sobre nuevas bases. Se discutían, asimismo, diferentes planes

(93) Ibidem, exp. de 27 de febrero de 1.796.

de política económica. Todo ello provocó que proyecto y respuestas vieran frenada su tramitación (94).

Quizá sea esta la razón que explica que una Real Orden de 1.794 encargara a Josef Antonio Ortiz la redacción de un proyecto de "Código Mercantil". Como tendremos ocasión de reseñar, la existencia de dos procedimientos simultáneos para elaborar la ley mercantil se verá reproducido en 1.828. El resultado en ambas ocasiones fue distinto.

En 1.800, Ortiz presentó el primer tomo de su Código, con la pretensión de que fuera aumentada su asignación económica. De la lectura de la respuesta en que se le niega tal premio, se desprende que el autor todavía trabajaba sobre un esquema recopilador más que codificador y que, incluso, había fracasado en esta vía. Tal fue la razón por la que se frustró también la iniciativa real de ordenación de la legislación mercantil:

"El Rey ha advertido en este trabajo que no se ponen las Leyes de todas las naciones comerciantes, ni aún las de España según se ofrece; tiene por no necesaria la Historia del Comercio con que empieza el tomo: y persuadido S.M. a que no es una obra capaz de desempeñarse dignamente por un sólo individuo, es su Real voluntad que la Junta General de Comercio y Minas después de hacer examinar el tomo presentado, por los sujetos que entienda más a propósito, informe sobre lo que se le ofrezca, proponiendo el Plan que convendrá adoptarse (siempre que no se halle digno de atención el tomo referido) para for

(94) En dos cartas (1 de junio de 1.796 y 12 de mayo de 1.797), Vila se lamentaba del retraso en la tramitación del proyecto y las respuestas en la Junta General de Comercio; ésta, en 16 de mayo de 1.799, afirmaba que tenía su informe evacuado hacía meses según el dictamen fiscal (que desconocemos) pero que no lo había enviado por no tener aún el voto particular de José Cistué (Ibidem).

mar bajo un sistema sabio, y bien convenido una obra útil, y que puede interesar a el Comercio" (95).

La Novísima Recopilación de las leyes de España fue promulgada en 1.805, "un año después que el influyente Código de Napoleón y cuando otros modernos códigos europeos llevaban años de vigencia" (96). Su estructura, sin embargo, respondía a la de los "códigos" del Antiguo Régimen, ya que recoge normas que habían surgido anteriormente de forma aislada y se encontraban dispersas, ordenánlas por materias en títulos y libros.

Este texto recoge las normas mercantiles en sus libros VIII y IX. En el primero de los mencionados, se trata "de las fábricas del Reyno" (tit. 24), "de los privilegios y exenciones de los fabricantes" (tit. 25) y "de los menestrales y jornaleros" (tit. 26). El libro IX se ocupa "de la Junta General de Comercio, Moneda y Minas" (tit. 1), "de los Consulados marítimos y terrestres" (tit. 2) y, en general, de las actividades mercantiles en sus títulos 3 a 9 y 18 a 20.

Este libro, como hemos afirmado para el conjunto de las materias, se limita a recopilar normas dispersas e incorpora, incluso, las que estaban en desuso. Por ejemplo, en el título 2 del libro IX se incluyen fragmentos de las Ordenanzas consulares de Burgos de 1.494 y de 1.766 y de Bilbao de 1.511

(95) R.O. de 6 de mayo de 1.800, A.H.N., Estado, lib. 226, fol. 4r y v.

(96) Juan A. Alejandro García, Temas de Historia del Derecho: Derecho del Constitucionalismo y de la Codificación, I, Sevilla, 1.980, p. 119.

y de 1.737. Las normas sobre la jurisdicción incluyen tanto las de Bilbao de 1.737 como las de Barcelona de 1.756, San Sebastián o Burgos de 1.766. Podemos afirmar que, en el aspecto que tratamos, la Novísima Recopilación se limitaba a dar a conocer las normas históricamente importantes y significaba un avance en el camino hacia la unificación nacional del derecho mercantil.

Durante la Guerra de la Independencia, los dos sistemas políticos que coexistieron en suelo español abordaron la tarea codificadora, según un nuevo criterio, que correspondía al nuevo sistema socio-económico que el liberalismo quería construir, frente a la sociedad estamental del Antiguo Régimen. El Código moderno, frente a la compilación, "ofrece una ordenación sistemática y completa de las instituciones del Derecho en alguna de sus ramas como nueva ley para lo venidero" (97), que cubre todo el territorio nacional.

El Estatuto de Bayona, en su artículo 113, estipula: "habrá un sólo Código de Comercio para España e Indias". La Constitución de Cádiz, en su artículo 258, afirma: "el Código Civil y Criminal y el de Comercio, serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes". Ninguno de los dos sistemas que representaban culminó la tarea de elaborar e implantar el Código Mercantil. En el lado afrance

(97) Ibidem, p. 120. Renuncio, en estas páginas, a un análisis más completo del problema de la Codificación, para lo que cabe remitirse, en una primera aproximación, a la breve y excelente exposición de J.A. Alexandre García en la obra citada, pp. 118-122.

sado, se realizó un proyecto que era calco del Código napoleónico de 1.807 (98). Las Cortes de Cádiz sólo emprendieron esta tarea en la primera sesión de la legislación ordinaria (1 de octubre de 1.813), con el nombramiento de una comisión que apenas tuvo ocasión de hacerse cargo de la labor encomendada (99).

La restauración del absolutismo no impidió, sin embargo, que continuara la preocupación sobre la codificación (100) y, especialmente, sobre la mercantil. En el segundo reinado de Fernando VII —1.815— se abrió una encuesta cuyo carácter la enlaza con el método de trabajo seguido hasta 1.808, lo que permite afirmar que este interrogatorio más que abrir una etapa, cerró otra. La encuesta se cursó a los Consulados y en ella se preguntaba sobre "la necesidad o utilidad de la formación de un Código de Comercio" y se solicitaba a aquellos organismos que señalén los "defectos que hayan advertido en las leyes y ordenanzas mercantiles por que se gobiernan en el día" y la "reforma o aumento que pueda hacerse de ellas" (101). No conocemos el resultado de esta iniciativa, que nun

(98) Cfr. R.S. Smith, Historia de los Consulados..., p. 152.

(99) Hubo una primera comisión de doce miembros, cuya única misión era la de proponer a las Cortes candidatos para la formación de una Junta que debía elaborar el Código (D.S.C. extraordinarias, 23 de septiembre de 1.811, p. 1.902); los individuos de esta comisión eran miembros del Consejo de Indias, Secretaría de Hacienda, Consulado de Cádiz y su comercio y Consulado de Cataluña (sic). En ella se encontraba Bruno Vallarino, que pertenecerá a la Comisión de 1.828. Era asesor del Consulado de Cádiz. La elección de los miembros de la Comisión definitiva recaería en Tomás Isturiz, José Antonio Sambiela, José Martínez, Manuel López Cepero y José Domingo Rus (D.D.C. 1 de octubre de 1.813, p. 9).

(100) El Juicio crítico a la Novísima Recopilación de Martínez Marina, vió la luz en 1.819.

(101) A.C.A., Audiencia, Consolat, 5/11, f. 78. Se trata del oficio remitido al Consulado de Barcelona con este motivo.

ca produjo recopilación ni fue tomada en cuenta en trabajos posteriores.

Las Cortes del Trienio Liberal se proclamaron, en este sentido, herederas de las gaditanas pero, como ellas, no pasaron del nombramiento de una comisión (102). Fue en 1.829, bajo el absolutismo fernandino, cuando se culminó el proceso codificador en materia mercantil, cuyo principal artífice fue ese "intrigante cortesano y excelente jurista" llamado Pedro Sáinz de Andino (103).

Este doctor en Derecho fue un exiliado de 1.814 y 1.823; sin embargo, tuvo su época más fructífera entre 1.827 y 1.833, años en los que elaboró o contribuyó a hacer el Código de Comercio, las Leyes de Enjuiciamiento mercantil, de Bolsa y sobre el impuesto del Timbre y documentos de giro y el reglamento del Banco Español de San Fernando, entre otros trabajos legislativos. Cayó en desgracia con María Cristina debido a su vinculación con el sistema anterior y con el gobierno moderado volvió a salir a la luz para no eclipsarse hasta que la enfermedad (1.854) y la muerte (1.863) acabaron con su vida. Desde febrero de 1.844 fue incorporado de forma permanente al Ministerio de Hacienda con González Pacheco y encargado de la revisión de la legislación de montes. En 1.845 fue nom

(102) "Propuesta del nombramiento de una comisión que continúe los trabajos de las Cortes gaditanas", en D.S.C., 16 de julio de 1.820, p. 168; dictamen de la Comisión de legislación en D.S.C., 11 de agosto de 1.820, p. 205; aprobación en D.S.C., 15 de agosto de 1.820, p. 530. El 20 de marzo de 1.822 (p. 446) pasó a la Comisión de Agricultura y Comercio un plan sobre "igualdad de contribuciones y formación de los Códigos rural, fabril e industrial". El del Código mercantil no se llega a formar ni, desde luego, a discutir.

(103) El calificativo está tomado de F. Tomás y Valiente, Historia..., p. 544. Los datos sobre la vida de Sáinz de Andino, de F. Suárez, Documentos del reinado de Fernando VII, Pamplona, 1.968, tomo V y Jesús Rubio, Sáinz de Andino y la Codificación mercantil, Madrid, 1.950, pp. 25-73.

brado Consejero Real y Director General de los Archivos de España y Ultramar, en 1.847, Académico de la Historia y Senador Real. Este mismo año, actuó como presidente de la Comisión del Senado para la Ley de Sociedades por acciones; como analizaremos en páginas siguientes, el cambio en la concepción de dichas sociedades en España entre 1.829 y 1.848 queda reflejado de forma paradigmática en dos textos debidos a este adaptable autor: los artículos 265 y 293 del Código de Comercio y el discurso de diciembre de 1.847 en el Senado.

2.3.- El Código de Comercio de 1.829.

Por Real Orden de 9 de enero de 1.828, se encargó a Pedro Sáinz de Andino la redacción de un proyecto de Código de Comercio. Se accedía así al propio ofrecimiento del jurista, encauzado a través de López Ballesteros. Es probable que Andino pensara que el modo de reconciliarse con el régimen que le había exiliado era ofrecer un servicio a la monarquía. Este debía situarse en el campo jurídico, que era su especialidad, por sus estudios en España y por su experiencia en Francia. Este afrancesado se ofreció para elaborar un Código de Comercio; quizá porque la reforma de la legislación mercantil no sólo era una demanda expuesta con reiteración desde hacía un siglo, sino que había sido promovida por Carlos IV

y por el propio Fernando VII. La reforma mercantil era la que más fácilmente se podía realizar a pesar de la naturaleza del sistema de poder. De ahí que corriera el riesgo de proponer una codificación al monarca que había derogado el Código Penal del Trienio.

Al tiempo que aceptó el encargo, Sáinz de Andino —de compleja, interesante y eficaz personalidad— propuso la formación de una Junta que elaborase otro proyecto de Código de Comercio, con objeto de que el rey pudiera elegir entre ambos resultados. Dicha Junta estaba formada por dos miembros del Consejo de Indias, un abogado de los Reales Consejos, el director en funciones de la Real Compañía de Filipinas y Sáinz de Andino, como secretario con voto (104).

Se produjo, pues, la articulación de una doble vía para la elaboración del Código de Comercio. Esta práctica no era nueva, ya la detectamos en 1.794. En esta ocasión fue promovida por el propio Andino y su interés puede estar justificado —aunque nunca lo explicita— en el deseo de poder comparar el fruto de dos métodos de trabajo diferente. Por un lado, la Comisión, con las antiguas leyes españolas y la jurisprudencia consular. Por otro, Pedro Sáinz de Andino, que deseaba aplicar a España el Código francés. La novedad es—

(104) Don Bruno Vallarino, presidente del Consejo de Indias; D. Antonio Poncél, ministro jubilado del Consejo de Indias; D. Manuel María Cambonero abogado de los Reales Consejos, D. Cesáreo María Sáenz, director en funciones de la Real Compañía de Filipinas. Libro de Actas de la Comisión Real del Código de Comercio desde su instalación hasta que terminó sus trabajos, un libro en 4ª, manuscrito, encuadernado, conservado en el Archivo Histórico de Guadalajara; debo agradecer a su directora, Blanca Calvo Alonso Cortés, haberlo podido consultar pues se encuentra entre los papeles sin catalogar aún de D. Pedro Gómez de la Serna.

triba en que este jurista tuviera el encargo personal de elaborar el Código y al tiempo actuara como secretario de la Comisión nombrada con el mismo objeto.

La documentación conocida no proporciona una respuesta satisfactoria a este hecho y sólo nos permite movernos en el campo de las hipótesis. Una primera explicación podría encontrarse en el deseo de Andino de incrementar el grado de aceptación del texto resultante. Nuestro autor tenía el apoyo de López Ballesteros y todo indica que poseía también la garantía de que su proyecto sería el aceptado finalmente. La existencia de la Comisión, por tanto, sólo se justifica en el hecho de que Andino arbitrara un mecanismo por el cual quedara manifestada la supremacía técnica de su proyecto frente a cualquier sospecha de imposición regia que despertara las protestas consulares y que le hiciera sospechoso de corrupción. Además su pertenencia a la Comisión Regia proporcionaba a Sáinz de Andino un material de trabajo de primera mano que podía incorporar a su proyecto en aquellos puntos en los que éste resultara más débil.

La existencia de la Comisión Regia sólo está explicada en los textos en la conveniencia de la existencia de más de un proyecto, para poder realizar la elección más adecuada. Quizá sea, en realidad sólo una nueva muestra de la gran habilidad de Pedro Sáinz de Andino.

Esta llamada "Comisión Real del Código de Comercio" se constituyó en Madrid, en la Sala de Juntas del Consulado, el 25 de enero de 1.828; entre esta fecha y el 27 de mayo de

1.829 tuvo 164 sesiones cuyo fruto fue un proyecto de Código mercantil, de 887 artículos, de valor desigual y —en todo caso— inferior al presentado por Sáinz de Andino (105).

Hasta finales de julio de 1.828 (28 sesiones), la Comisión se dedicó a reunir información, a organizar un plan de trabajo y a leer los proyectos que sus diferentes miembros iban presentando.

La Comisión solicitó del Gobierno y de los Consulados la información pertinente: los proyectos de finales del siglo XVIII, los diversos trabajos que se pudieran encontrar en los diferentes archivos, los datos exactos sobre el ámbito jurisdiccional de los Consulados y, en general, cualquier información que sirviera a la mejor realización del proyecto (106). La lectura de los acuses de recibo de esta documentación nos permite constatar:

a) El mal estado de los archivos centrales (Indias y Hacienda), que envían escasísima información.

b) La falta de precisión en las competencias, que provoca que la Comisión —supuestamente experta y conocedora del

(105) El proyecto está reproducido íntegramente en J. Rubio, Sáinz de Andino ..., ap. 1.

(106) Libro de Actas..., acta de instalación, 25 de enero de 1.828. La dispersión de la documentación —de lo que es muestra este Libro de Actas— se debe, fundamentalmente, a la ausencia de control sobre la misma, tanto en el Antiguo Régimen como en el siglo XIX. El 13 de febrero de 1.828 la Comisión recibió autorización para que "se saquen" (no "se copien") los documentos pedidos de los archivos correspondientes. Esta documentación, en el mejor de los casos, salía de su lugar de origen para pasar a engrosar, con otra dispersa, un nuevo legajo, archivado en un nuevo lugar. No era raro que los miembros de las diversas comisiones estimaran que el documento era de su propiedad y quedaba disperso o definitivamente perdido. Así, Pedro Gómez de la Serna, miembro de la Comisión de codificación mercantil de 1.855, "poseía" el Libro de Actas de la Comisión de 1.828 y, a su muerte pasó, con el resto de su biblioteca, al instituto de Guadalajara.

funcionamiento del Estado— vaya, paulatinamente, escribiendo a diferentes instituciones "por si en su archivo se encuentran antecedentes..." (107).

c) El bajo nivel de las respuestas de los Consulados. Contestaron catorce de ellos —la gran mayoría—. Todos enviaron su Real Cédula de erección y sus ordenanzas; casi todos proporcionaron datos de su jurisdicción y la mitad, informes complementarios sobre la navegación y el comercio marítimo y sobre el procedimiento mercantil. La colaboración consular resulta, pues, satisfactoria, aunque la calidad y la cantidad de la información recibida no lo sea tanto. La premura con la que se debían enviar las respuestas no permitía la elaboración por parte de los Consulados de trabajos originales. Quizá ésto provocó que las respuestas fueran de mero trámite. Pero hay que considerar también que los Consulados estaban muy debilitados por el escaso nivel de las actividades mercantiles bajo el absolutismo. Ya no eran esas organizaciones capaces de tomar la iniciativa en este terreno.

d) La práctica simultaneidad de la recepción de la información, que terminó el 21 de mayo de 1.828 y de la presentación de los proyectos de las diversas partes del Código, efectuada desde el 26 de marzo. Este hecho indica que los trabajos no se subordinaron a la información consular; suponemos que tanto por la urgencia con que se quería presentar el proyecto como por la esperada y evidente falta de originali-

(107) Ibidem, sesión núm. 12, 11 de abril de 1.828. Subrayado mío.

dad de la documentación recibida (108).

Ya desde las primeras sesiones destacó la actuación del secretario, Sáinz de Andino, que fue el encargado de presentar el "cuadro de las materias que podrá abrazar el proyecto de Código de Comercio". Dicho índice fue aprobado el 14 de marzo de 1.828, y tiene una alta semejanza con el del Código de Comercio finalmente aprobado. Ambos guiones fueron realizados por la misma pluma.

El proyecto de la Comisión quedó articulado de la siguientes forma:

Libro I, "Del comercio en general". Fue realizado por Ramón López Pelegrín, en 7 títulos y 136 artículos. Trataba de las definiciones mercantiles, de las personas y los negocios y de las compañías de comercio. Se incluyó en él, el que iba a ser libro VI, que trataba de los corredores de comercio.

Libro II, "De los libros de comercio", realizado por Cesáreo María Sáenz, en 1 título y 30 artículos.

Libro III, "De los contratos de comercio", realizado por Manuel María Cambronero, en 8 títulos y 173 artículos.

Libro IV, "Del comercio Marítimo", 10 títulos y 259 artículos y libro V, "De las quiebras", 12 títulos y 171 artículos. Ambos realizados por Pedro Sáinz de Andino. Nuestro autor se reservó los dos libros que eran cruciales en un código mercantil en esta época, pues el mayor volumen de nego-

(108) Sobre la documentación recibida, ibidem, especialmente las sesiones núms. 1 (25 de enero de 1.828), 8 (14 de marzo) y 12 (11 de abril).

cio seguía siendo el marítimo y la regulación de la quiebra era, como vimos, la preocupación fundamental de los núcleos de comerciantes a finales del siglo XVIII.

Libro VI, "De los Tribunales de Comercio", realizado por Antonio Porcel en 3 títulos y 24 artículos.

Libro VII, "Del modo de proceder en las causas de comercio", realizado por Bruno Vallarino, presidente de la Comisión, en 9 títulos y 94 artículos.

El Código de Sáinz de Andino consta de 1.219 artículos agrupados en cinco libros, que abordan la misma temática descrita. El libro primero incluye el contenido de los dos primeros de la Comisión; el tercero de ésta pasa a ser segundo en el de Sáinz de Andino; el cuarto, se convierte en tercero; el quinto, en cuarto y el sexto y el séptimo en quinto.

Desde el 4 de junio de 1.828 la Comisión fue conociendo los proyectos de los diferentes libros y comenzó a discutirlos el 31 de julio. Sáinz de Andino solicitó que en las Actas se expresaran todos los votos particulares de los vocales. La derrota de su proposición nos ha privado de una fuente fundamental para el estudio de las diferentes posiciones que se barajaron sobre los temas en discusión; sin embargo, podemos identificar los puntos más controvertidos a través del ritmo más o menos rápido con el que se fueron aprobando los artículos así como mediante la comparación de la redacción propuesta con la final. Prescindo de ello en estas páginas, a las que interesa fundamentalmente lo que se refiere a la regulación de la compañía mercantil, punto que será abor-

dado en un próximo capítulo. Aquí me limitaré a reseñar los preámbulos de ambos proyectos y a realizar un juicio crítico sobre los mismos.

El ritmo de la discusión fue relativamente rápido, aprobándose los 887 artículos del proyecto en 112 sesiones, celebradas en 1.829, lo que significa una media de ocho artículos por sesión y una reunión cada dos días. Sabe señalar que tanto la frecuencia de las reuniones como el número de artículos aprobados en cada una se incrementó desde enero de 1.829.

En 21 sesiones celebradas entre el 5 y el 23 de mayo de 1.829 se procedió a la revisión del proyecto y a su definitiva aprobación. En la siguiente reunión se discutió el preámbulo que debía acompañar al proyecto cuando fuera presentado al monarca y que fue redactado por Pelegrín y Cambroneró. Quizá lo más significativo de sus breves líneas sean las reflexiones sobre aquellos puntos que diferencian el proyecto de la situación legal anterior, y que pueden ser agrupados en tres ideas fundamentales:

a) El proyecto que se presenta pretende poseer las cualidades de brevedad, sencillez y modernidad. El comercio, se afirma, es ya muy complejo y ha de ser contemplado en toda su extensión, pero las normas que lo regulan deben ser exactas y simples, para que sean de fácil aplicación.

b) El Código debe estar presidido por "una moral severa y severamente sostenida como el único medio de precaver las

arterías y fraudes que lo desacreditan y destruyen" (109).

c) La gran ventaja de que la nación posea un Código mercantil es la uniformidad. La codificación es presentada como un elemento de centralización de la vida nacional:

"En efecto, en la ciencia del gobierno todo es menos que dar una legislación conveniente y uniforme que aboliendo por sí misma tantas Ordenanzas particulares y sus anomalías y diferencias determina para todos unos mismos derechos y obligaciones, y una misma administración de justicia. Esta unidad, principio del bien, lo es también de la fuerza del gobierno que con leyes o fueros distintos se divide y aniquila en términos que algunas de nuestras provincias más bien parecen separadas y aún rivales, que partes integrantes de una misma Monarquía. Una legislación común a todas, que haga unos mismos sus intereses y relaciones, es el camino más seguro y legítimo de unir las entre sí con un lazo indisoluble y es también el medio más justo y el más indicado por la naturaleza y la política. Entonces desaparecerá el funesto espíritu provincial, que es espíritu de división y de cismas, cesarán los celos de unas prerrogativas disonantes realmente más perjudiciales que útiles, recobrará la justicia desnivelada ahora con la diferencia misma de legislación su verdadero equilibrio y vigor y los españoles formarán una sola familia muy fácil de conducir a su bienestar y prosperidad" (110).

Por su parte, el preámbulo del proyecto de Sáinz de Andino incide también sobre la importancia de la legislación, como elemento centralizador y como impulsor de las actividades mercantiles, todo ello con una fraseología que recuerda antiguos discursos mercantilistas y que resalta el papel de la Corona. Una vez más, se observa la habilidad de este jurista,

(109) Ibidem, sesión núm. 163, 25 de mayo de 1.829. Subrayado mío.

(110) Ibidem, El proyecto de la Comisión Real, también en Archivo del Palacio Real, Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 84. No incluye el preámbulo, que tampoco reproduce J. Rubio, Sáinz de Andino..., en su apéndice I en el que se incluye el articulado

que presenta un texto muy avanzado con un preámbulo pensado para agradar al monarca absoluto. Así, cuando pone de relieve la idea de que una adecuada legislación es el resorte que impulsará la actividad mercantil:

"Asegurándose la inviolabilidad de las propiedades mercantiles, dándose estabilidad a los efectos de las negociaciones y sus pactos y facilitándose la administración de justicia, renacerá la confianza, se extenderá prodigiosamente el crédito y se pondrán en circulación muchos y cuantiosos capitales que hoy son estériles para el Estado y para los mismos que los poseen; por cuyos medios el comercio que es la fuente viva y perenne de la riqueza pública y una de las bases cimentales de la fortaleza de los Imperios se recobrará de su presente languidez y llegará al alto grado de prosperidad a que están convidando las ventajas naturales con que la Divina Providencia favoreció esta posición escogida del globo" (111).

Expone Sáinz de Andino la razón que le ha impulsado a mantener el fuero especial para el Comercio y, para ello emplea una fraseología adecuada al sujeto al que se dirige:

"El nombramiento de los jueces vuelve a la autoridad soberana de V.M., que es fuente de toda jurisdicción, cesando las elecciones en Juntas populares, que son ilegales, antipolíticas y peligrosas, según tengo expuesto a V.M. en otras ocasiones" (112).

Como el preámbulo de la Comisión, el de Sáinz de Andino insiste en que las cualidades buscadas en su redacción son claridad, precisión, propiedad, sencillez y exactitud. Sobre

(111) A.P.R., Papeles reservados de Fernando VII, tomo 83, fols. 2v y 3r.

(112) Ibidem.

aquella, explícita los modelos que se han utilizado, el Código de comercio francés y la jurisprudencia mercantil española.

Los preámbulos no nos revelan las diferencias entre ambos proyectos. Ambos reclaman el mismo tipo de cualidades. Sáinz de Andino, sin embargo, supo presentar mejor su texto ante el monarca. No tuvo rubor en extenderse en consideraciones laudatorias a la monarquía absoluta. Este antiguo afrancesado buscaba que se olvidara su pasado político alabando "la restauración de esta gran monarquía, después de tantas borrascas, calamidades y turbaciones" (113). Es natural que esta exposición de motivos, oportunista y arcaica, no haya sido incluida en las múltiples ediciones que ha conocido este Código a lo largo de sus cincuenta y cinco años de vigencia (1.830-1.885).

El texto de Sáinz de Andino es superior técnicamente al de la Comisión. Está mejor sistematizado en sus diferentes títulos y asume la terminología moderna frente al arcaísmo del rechazado. Es más preciso y suprime la jurisprudencia complementaria del articulado, así como las múltiples e innecesarias definiciones globales que incluía el proyecto de la Comisión. La regulación de los tipos de compañías incluye la anónima y liberaliza su constitución, separándose así, tanto de la legislación española como de la francesa; mientras, el proyecto rechazado se limitaba a perpetuar las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1.737. Por último, y como ha seña

(113) Ibidem, fol. 3v.

lado Rubio, "la comisión real propone un código de tendencia subjetiva que concibe el acto de comercio llevado exclusivamente a cabo por personas dedicadas a esa pública profesión (...) frente al sistema Andino, eminentemente objetivo" (114).

El Código de Comercio de Sáinz de Andino fue muy bien acogido en los diferentes núcleos mercantiles; una muestra de ello es la actitud positiva que sobre esta ley revela la correspondencia entre los consulados de Burgos y Barcelona. En ella, ni siquiera aparece alguna reticencia sobre el reajuste de funciones que, forzosamente, debieron sufrir las Juntas de Comercio y los Consulados, a los que se retiró las atribuciones administrativas (115). Hay que considerar, no obstante, el peculiar período absolutista por el que atravesaba el país y la consiguiente falta de libertad de expresión.

2.4.- La reforma del Código de Comercio: primeros proyectos y comisiones (1.834-1.869).

El Código de Comercio, como era de rigor en la época de su promulgación, se presentó como una concesión Real, otorgada para responder a una necesidad evidente de la nación:

(114) J. Rubio, Sáinz de Andino..., pp. 116 y 117.

(115) A.C.A., Audiencia, Consolat, 5/14, fol. 38.

"Y queriendo Yo poner término a males de tanta gravedad e interés, y dar al Comercio un sistema de legislación uniforme, completo, y fundado sobre los principios inalterables de la justicia y las reglas seguras de la conveniencia del mismo comercio..." (116).

El texto que se presentaba con estas palabras se gestó en una etapa absolutista y se promulgó en un momento poco propicio a la modernización económica. Estuvo vigente hasta 1.885 y debió haber servido de telón de fondo en el proceso de desarrollo capitalista y de la industrialización en España. Sin embargo, fue testigo de lo que Nadal ha llamado "el fracaso de la revolución industrial" (117). Los factores del atraso económico en la España del siglo XIX son muchos y no todos han sido suficientemente explicados todavía (118). Creo que el institucional es uno de los más importantes (119) aunque estimo que la larga vigencia del Código de comercio de 1.829 no fue una causa sino un exponente del atraso. Es, también, una muestra de la torpeza política de la clase dirigente y de su incapacidad para el pacto político.

Este Código, que fue concebido en una etapa pre-industrial y que tiene lagunas notables, pervivió hasta el último tercio del siglo XIX. No porque fuera aceptado por todos e

(116) Código de Comercio, ed. oficial, Madrid, 1.829.

(117) Jordi Nadal, El fracaso de la revolución industrial en España, 1.814-1.913, Barcelona, 1.975.

(118) Afortunadamente, contamos con una producción creciente y de gran valor en el campo de la historia económica. Sería inútil citarla aquí, por lo que me limito a reseñar la más reciente puesta a punto, VV.AA., "El fracaso de la revolución industrial en España", Información Comercial Española, núm. 623, julio 1.985.

(119) v. Gabriel Tortella Casares, Los orígenes del Capitalismo en España. Banca, Industria y Ferrocarriles en el siglo XIX, Madrid, 1.975, cap. I.

incuestionado por la clase mercantil sino, como en tantos otros aspectos, por la imposibilidad de mantener un debate técnico profundo que no fuera estorbado por el aparental vai vén en las esferas gubernamentales.

A continuación, analizaremos cómo se desarrolló la dinámica de la reforma del Código de Comercio y por qué tardó tan to en resolverse (1.837-1.885). El impulso de los progresistas (y de sus comisiones) fue frenado en las etapas moderadas. En este tema, más que en otros, resalta el hecho de que la insistencia en las diferencias de matiz evita el acuerdo que podía establecerse sobre la identidad de las propuestas de fondo. La victoria sobre el absolutismo en política supuso también la de la opción del capitalismo y la industrialización como vías de desarrollo. Este era el acuerdo de fondo. Las divergencias se encontraban en las diferentes respuestas acerca del modo de emprender el camino y del papel del Estado en la esfera económica. ¿Debía ser el tutor de la población, el garante de la legitimidad de los contratos y ejercer un control previo sobre los mismos? ¿Debía ser un eficaz interventor que mediante una política diferencial de apoyos fomentara la inversión de capital en determinados sectores? ¿Debía ser un mero árbitro, encargado de la administración de justicia en los pleitos que se ocasionaron en el libre desen volvimiento de las actividades económicas?.

Fueron tres alternativas defendidas, respectivamente, por moderados, progresistas y demócratas. La alternancia de los dos primeros provocó, hasta 1.868, que los intentos de refo r

ma progresistas se vieran frenados por los moderados. La ausencia de pacto tuvo consecuencias negativas para la economía y para el desarrollo político del país. En el momento y en el futuro. El triunfo demócrata supuso la continuación de la tarea emprendida por los progresistas, y en 1.869 se resucitó la comisión de reforma de 1.855 y se proclamaron los principios del liberalismo económico como sus bases de trabajo. Los problemas políticos del Sexenio impidieron una rápida resolución del problema pero la Restauración continuó los trabajos sin solución de continuidad, al ser conscientes sus dirigentes de la necesidad de un pacto político para la resolución de los temas cruciales, entre los que se encontraba la articulación de un nuevo Código de Comercio que satisficiera plenamente las necesidades del nuevo sistema económico.

a) El impulso inicial: 1.834-1.837.- El Código de Comercio fue el primero que se promulgó en España, por el mismo monarca que había derogado el Código penal elaborado por las Cortes en 1.822. No se repudiaba la codificación sino la labor del Trienio Liberal. De hecho, en 1.829, se constituyó una Junta, de la que también era secretario Pedro Sáinz de Andino, para la formación de un Código criminal.

Con la promulgación del Código de Comercio de 1.829 se consolidó la vía de regulación separada del derecho mercantil. Las razones de que se eligiera esta vía (cuya conveniencia técnica no es objeto de discusión en estas páginas), tan

to por las Cortes de Cádiz como por el absolutismo fernandiano, cabe atribuir las, tanto al precedente español de una jurisdicción especial como a la influencia francesa y —en 1.829— a la facilidad de su implantación desde el punto de vista político.

La promulgación del Código de Comercio con anterioridad al Civil motivó que aquél incluyera en su articulado algunas normas correspondientes a éste, como son las referentes a las obligaciones de comercio. En Francia, sin embargo, tal problema no se planteaba, pues se contaba desde 1.804 con un Código Civil.

La conciencia de este problema motivó que en enero de 1.834 se constituyera una Comisión para elaborar el Código Civil, a la que siguió otra para la reforma del Mercantil, en coordinación con la anterior. Fue disuelta en 1.836, cuando había redactado solamente las bases del nuevo texto (120). El discurso de apertura de las Cortes de 1.837 anunció solemnemente la intención de proceder a una completa revisión legislativa, plasmada en la elaboración de los códigos Civil, Penal y de Comercio:

"El Ministro de este ramo [Marina] os presentará un proyecto de ley para dar mayor perfección al gobierno directivo de la armada, y asimismo el de un nuevo Código de Comercio" (121).

(120) Pedro Gómez de La Serna y José Reus y García, Código de Comercio, arreglado a la reforma decretada en 6 de diciembre de 1.868, anotado y concordado, precedido de una introducción histórico-comparada, Madrid, 1.869, p. 37.

(121) D.S.C.C., 19 de noviembre de 1.837, p. 29.

El nuevo régimen planteaba la necesidad de un nuevo Código mercantil, no tanto por la caducidad de éste sino para ponerlo en armonía con el nuevo Código civil que se pretendía elaborar y, así, disponer de la tan necesaria legislación integrada. Ambos procesos tendrían, sin embargo, una lenta y accidentada evolución que no culminaría hasta la Restauración, con la promulgación de un nuevo Código de Comercio en 1.885 y del Código Civil en 1.888.

Por Real Orden de 1 de diciembre de 1.837, se nombró una comisión de revisión del proyecto anunciado, que en el plazo de cinco meses evacuó su dictamen. El trabajo resultante fue publicado en 1.839. Tenía idéntica organización que el Código de 1.829, aunque era mucho más corto (429 artículos). Como aquél, carecía de disposiciones sobre Bolsa, aunque esta institución ya contaba con ocho años de vida. Las disposiciones sobre compañías eran muy breves y se liberalizaba la constitución de anónimas, a las que bastaba su formalización en escritura pública sin necesidad de ser autorizadas por el Tribunal de Comercio, como estaba prescrito en el Código vigente (122).

Antes de la publicación de este proyecto, fue nombrada una nueva comisión, por R.D. de 24 de octubre de 1.838, firmado por Ponzoa. Su intención era que este nuevo grupo de trabajo propusiera las reformas que considerara más urgentes,

(122) Proyecto de Código Mercantil de España, formado por la Comisión nombrada en Real Decreto de 1 de diciembre de 1.837, Madrid, Imp. de Ferrer y cía, 1.839.

para su aplicación inmediata. Al tiempo, debía elaborar un proyecto que pasaría a su discusión en Cortes. Así pretendía aunar "rapidez y reflexión" (123). El proceso no se desarrolló en ninguno de los dos aspectos. Aún en 1.839 hubo otra comisión y un esquema de proyecto en 24 artículos. pero tras la urgencia inicial de los progresistas y los frecuentes nombramientos de comisiones entre 1.837 y 1.839, sin que se llegara a discutir en el legislativo ninguno de sus proyectos, los gobiernos moderados optaron por la reforma parcial del Código. El ejemplo más claro lo proporciona la ley de sociedades por acciones de 1.848, que sustituyó el régimen de libertad —y de indefinición— del Código, por un estricto control gubernamental de las mismas.

b) La comisión de 1.855.— De nuevo fueron los progresistas los que relanzaron el movimiento codificador. En el bienio 1.854-56, que fue clave en la organización del marco jurídico para la organización del capitalismo en España, se creó la primera comisión efectiva para la reforma del Código de Comercio. Aunque no produjo resultados inmediatos, comenzó los trabajos que se desarrollarían en los veinte años siguientes, con cambios de ritmo pero sin solución de continuidad en su composición y en los principios jurídico-políticos que la inspiraron.

El Real Decreto de 8 de agosto de 1.855, por el que se nombró la comisión, estaba firmado por el Ministro de Fomen-

(123) C.DD., t. 24, pp. 550-553.

to Manuel Alonso Martínez, que fue también el que en 1.882 llevó el proyecto definitivo a las Cortes. El preámbulo de esta disposición expresaba la necesidad de reformar el Código de Comercio sobre dos argumentos principales. En primer lugar, recordaba la decisión anunciada en el discurso de la Corona de 1.837 y que, desde entonces, las circunstancias que aconsejaban la reforma se habían visto incrementadas por el desarrollo mercantil. En segundo, aludía a que la revisión de esta legislación se había consumado en diversos países mientras que en España "sólo hay medidas aisladas e inconexas" (124).

Uno de los problemas clave, planteados a los progresistas, era la regulación de las sociedades mercantiles. Frente a la rigidez de la ley de 1.848 se reclamaba la liberalización de su constitución. Frente a la indefinición del Código de 1.829, el nuevo debía contemplar los tipos especiales que requería el desarrollo de la acumulación de capital, como eran las sociedades de crédito, los bancos de emisión, las compañías de obras públicas, mineras y de seguros, etc.

La comisión que fue nombrada por la elaboración del nuevo Código estaba formada por nueve miembros: Pedro Gómez de la Serna, diputado y fiscal del Tribunal Supremo; Laureano Figuerola, diputado y catedrático de administración; Ramón Martín de Eixalá, catedrático de Derecho Mercantil y ex-diputado, un banquero, un miembro de la Junta de Comercio de Madrid, otros dos diputados y dos abogados madrileños. Se trató de

(124) C.L.E., t. 65, pp. 622-623.

que fuera un grupo con alta capacidad técnica y que aglutinara las diferentes tendencias políticas en juego.

El bienio progresista terminó con este problema sin resolver. Entre 1.854 y 1.856 no se sustituyó el Código de Comercio de 1.829 ni se derogó la ley de sociedades por acciones de 1.848. Quizá ésta remitiera a la reforma de aquél. El hecho es que las medidas de este período siguieron siendo parciales —leyes de obras públicas, de ferrocarriles, de sociedades de crédito— aunque no inconexas ni aisladas, ya que eran el exponente de un programa de desarrollo económico que promovía y señalaba el camino a las inversiones capitalistas en España. El análisis de esta legislación será abordado más adelante.

Cirilo Alvarez era el ministro de Gracia y Justicia en el ministerio O'Donnell que actuó entre julio y octubre de 1.856. Bajo su mandato se procedió a la reorganización de la Comisión general de codificación, con criterios de eficacia. En el R.D. de 1 de octubre de dicho año, redujo el número de sus vocales al tiempo que defendía la idea de que la elaboración de los códigos era una cuestión que permitía —y casi exigía— el pacto político (125).

La Comisión para la reforma del Código mercantil, nombrada en 1.855 y a la que pertenecía Alvarez, permaneció inalterada en este gobierno de transición. Las ideas de tolerancia

(125) C.L.E., t. 70, pp. 4-6.

de este ministro no fueron compartidas por sus sucesores, so
bre todo en la última etapa moderada, en la que la crisis de
la Unión Liberal dió paso a un conservadurismo más rígido y
en la que, la propia configuración del sistema y el retrai-
miento progresista restaban representatividad al régimen.

En este marco se explica que la labor de la comisión ape-
nas avanzara hasta 1.868. El único trabajo que pudo lograr
se presentara a las Cortes como proyecto de ley, el de regu-
lación de los Tribunales de Comercio, fue retirado en un cam-
bio de gobierno (126).

2.5.- La reforma del Código de Comercio: la recta final (1.869-1.885).

a) La comisión de 1.869.- El tema que nos ocupa cuenta
con uno de los más ambiciosos y grandilocuentes textos con
los que los primeros ministros de "la Gloriosa" presentaron
los principios revolucionarios y su programa de transforma-
ción de la sociedad mediante el diseño de un adecuado marco
legal. Se trata del Decreto de 20 de septiembre de 1.869,
firmado por Echegaray, titular de la cartera de Fomen-

(126) La razón que expuso el ministro Ulloa para justificar esta retirada, fue la
que, de forma protocolaria siempre se usaba: que el nuevo gobierno debía estudiar con más
detenimiento éste —y otros— proyectos presentados por el anterior gabinete. D.S.C.C., 9
de abril de 1.864, pp. 1.419 y 1.420. Aurelio Menéndez ha descubierto un Proyecto de Cód-
igo de Comercio fechado a 1 de octubre de 1.858, escrito por el notable jurista Pablo Gonzá-
lez Huebra. Está incompleto, pues sólo abarca al libro I, sobre los comerciantes y actos
de comercio.

to (127).

Es el primer y único texto legislativo de los que se ocupan de la reforma del Código de Comercio, que plantea unas bases de trabajo para la Comisión, que fueron establecidas según los principios demo-liberales.

El preámbulo de este decreto resalta la idea de que una revolución política debe ir acompañada de una transformación legislativa. La soberanía nacional —afirma— "es el único origen de donde legítimamente emana la ley positiva". Esta afirmación adquiere su pleno sentido si consideramos el modo de promulgación del Código de 1.829.

El texto que comentamos, instaba a la Comisión a reformar el Código según los nuevos principios revolucionarios y a incorporar para aquellos elementos que no fueron contemplados en el antiguo, por imprevisión o por su temprana promulgación. Entre los primeros, se encontraban la libertad de contratación, de ejercicio de la profesión mercantil y de la asociación (bases 1ª, 2ª, 4ª y 5ª-1) y la igualdad frente a los privilegios o monopolios (base 3ª). Estos dos principios debían ser completados por aquéllos que ofrecieran una suficiente garantía frente a terceros, y que ya no podían ser el control estatal, Ahora, son la publicidad de los contratos (base 5ª-2) y la adecuada regulación de los conflictos y quiebras mediante un procedimiento que permita su rápida sustanciación (bases 6ª y 7ª).

Los temas en los que se apuntaba que el Código de Comer-

(127) C.L.E., t. 102, pp. 537-550.

cio no respondía a los principios expuestos o en los que había quedado obsoleto eran los siguientes:

1) la regulación de las compañías mercantiles, que en el Código vigente resultaba escasa. Se proponía incorporar los nuevos tipos desarrollados desde 1.829, como los "bancos de emisión y descuento, bancos de crédito territorial y agrícola, sociedades con responsabilidad más o menos limitada, cooperativas...". Sobre ello, se debía dejar la puerta abierta a cualquier otra fórmula que pudiera establecerse (bases 2ª y 5ª-5).

2) las normas relativas al seguro, que debían incorporar los ramos de vida e incendio (base 5ª-6) al de transporte, único considerado en el texto de 1.829.

3) la legalidad de los títulos al portador debía ser establecida (base 7ª), frente al a. 571 del Código de 1.829, que les negaba fuerza civil de obligar:

"... cuando casi toda nuestra Deuda pública se halla en títulos de esta clase; cuando en igual forma están representados los inmensos capitales de las compañías de ferrocarriles; cuando se concede a los Bancos el derecho a emitir billetes; cuando, en fin, esta clase de papel es el gran instrumento económico, la poderosísima palanca que moviliza los capitales, que hace posible el crédito, que da fuerza a la industria".

4) la regulación del comercio marítimo, que en el antiguo Código ni siquiera contemplaba la existencia del vapor (base 6ª-8).

En general, se reclama la adecuación a los avances técnicos, frente a un Código que "ni aún supone la existencia del telégrafo eléctrico" y a los económicos. Que sirva para regular las actividades mercantiles del "siglo del vapor, de la electricidad, de las grandes asociaciones industriales, del crédito, del billete de Banco y del seguro".

En este Decreto se subraya la idea de que si la comisión de 1.855 no culminó sus trabajos fue por acontecimientos externos a ella —cambios políticos— más que por su competencia. Se culpaba así a los gobiernos moderados del retraso del movimiento codificador. Ya reseñamos cómo bajo su mandato sólo se produjo un texto que fue convertido en proyecto de ley —tribunales de comercio— que fue retirado sin que llegara a discutirse; y cómo, ciertamente, en las etapas progresistas se emprende el movimiento de codificación mercantil y en etapas moderadas se abandona.

Esta consideración hace que, si bien el a.2 disuelve la comisión de 1.855, de hecho no se produce sino una remodelación, que se limita ahora, y hasta 1.875, a cubrir las ausencias ocasionadas por la muerte (Gómez de la Serna y Luis María Pastor) o el acceso al gobierno (Laureano Figuerola, nuevo ministro de Hacienda) o la presidencia del Tribunal Supremo (Cirilo Alvarez). El presidente de la comisión reorganizada fue Alonso Martínez que continúa una participación en el proceso que inició en 1.855.

En mayo de 1.872, la Comisión había terminado —y entregado al ministro de Gracia y Justicia— un proyecto de ley

de Enjuiciamiento mercantil y tenía elaborado el del Código de Comercio, a excepción de la parte referente a Derecho marítimo (128). Finalizó la legislatura de 1.872-1.873 sin que se llegara a tramitar ninguno de los dos textos y el tema quedó relegado durante la breve Primera República, ante cuestiones más urgentes (129).

El proyecto del Código quedó completado en febrero de 1.875 fecha en la que, al inicio de la Restauración, pasó a la Comisión General de Codificación. Durante cinco años permaneció en ella hasta que, con un gobierno canovista, se reavivó el proceso. La ley de 7 de mayo de 1.880 dispuso que el proyecto pasara a informe de diversos organismos competentes, como Audiencias, Colegios de Abogados, Universidades, Academias de Derecho, etc. (130). Al tiempo, se autorizaba al gobierno para que nombrara una Comisión especial, que debía realizar la revisión final del proyecto, antes de su presentación en Cortes.

El Real Decreto de 1 de marzo de 1.881 (131), nombró la

(128) Según la respuesta de Alonso Martínez, como presidente de la Comisión, a la pregunta sobre el estado de sus trabajos, formulada por Gil Bergés en el Congreso, en la sesión del 17 de mayo de 1.872 (D.S.C.C., pp. 357 y 406). Este parlamentario había formulado su pregunta en 17 de octubre de 1.871 sin obtener respuesta satisfactoria por parte de un ministerio recién constituido.

(129) El tema no quedó olvidado en el Parlamento, como muestran las preguntas citadas en nota anterior, repetidas en 4 y 21 de diciembre de 1.872 (D.S.C.C., pp. 2.022-23 y 1.519). La respuesta de Echegaray en ambos casos fue la misma: los trabajos ya están terminados.

(130) Emilio Langle, "Mercantilistas españoles de finales de siglo XIX y comienzos del XX", Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 34, 1.964, p. 508, afirma que "fue luego sometido al estudio de la Comisión General de Codificación y en ella murió, estancado definitivamente". Como desarrollamos en el texto, el estancamiento fue real pero no indefinido. La ley de 7 de mayo de 1.880 en C.L.E., t. 124, 2ª parte, pp. 800-801.

(131) C.L.E., t. 126, 1ª parte, pp. 643-645.

mencionada comisión, que estaba presidida por el Ministro de Gracia y Justicia, Alonso Martínez. Recordemos que éste, como ministro de Fomento, en 1.855 había nombrado la junta que, reorganizada en 1.869, había redactado el proyecto que ahora se consideraba. En esta ocasión, como ministro del primer gobierno Sagasta, abría la última etapa del proceso que estudiamos.

La Comisión revisora de 1.881 estaba compuesta por individuos de diferentes tendencias políticas, reunidos tanto por esta característica como, principalmente, por su competencia jurídica. Se trataba de Laureano Figuerola, Segismundo Moret, Manuel Colmeiro, Rodríguez de San Pedro, Isasa, Montejo y Robledo, G. Rodríguez, B. Gutiérrez y J. Pelayo. Su encargo era muy preciso: revisar tan sólo aquellos títulos del proyecto en los que se debieran ajustar "los principios de libertad absoluta del 69" a la nueva legislación, como la referente al Banco Hipotecario (1.872) y de España (1.874). De**́**bían considerar asimismo las opiniones expresadas por los organismos competentes, cuya colaboración solicitó la ley de 1.880. El 5 de diciembre de 1.881, la Comisión elevó el proyecto revisado al gobierno.

b) El debate en Cortes (1.882-1.884).— El 20 de marzo de 1.882, Alonso Martínez presentó en el Congreso el proyecto de ley del Código de Comercio (132). Lo hizo con una larga y

(132) D.S.C., apéndice 380 al núm. 85 (20 de marzo de 1.882).

brillante exposición de motivos redactada por el jurista valenciano Bienvenido Oliver y Esteller; el orador, por su parte, tenía un gran conocimiento del tema, proporcionado por su trayectoria profesional y, sobre todo, por su seguimiento constante desde 1.855. El Código, finalmente, no fue aprobado bajo su gestión, sino con Romero Girón, en el segundo ministerio Sagasta y, definitivamente, con Silvela, encargado de la cartera de Gracia y Justicia en el último gobierno del reinado de Alfonso XII, presidido por Cánovas.

En este apartado me limitaré al análisis de las grandes líneas de la exposición de Alonso Martínez y de los discursos —a favor y en contra— sobre el carácter del Código de Comercio. Intentaré, asimismo, realizar una caracterización del contenido y del tono del debate a través del número de enmiendas presentadas, de los puntos que recusaban, de las reformas que proponían y de la propia virulencia de los discursos. El siguiente apartado se ocupa de reseñar el resultado y de realizar su comparación con el Código de 1.829. El estudio de los diversos artículos que interesan al tema de la Bolsa y de la regulación de las sociedades anónimas queda integrado en los puntos correspondientes del próximo capítulo.

El ministro comenzó su discurso poniendo de relieve la necesidad de la reforma, revelada por la abundancia de la legislación promulgada entre 1.830 y 1.882. El Código de Comercio estaba derogado en buena parte, debido a todas las disposiciones que se habían ido formulando en el medio siglo lar-

go de su vigencia. Era necesario un nuevo texto legal que las integrara y que se adaptara a las nuevas circunstancias económicas que hicieron necesarias las leyes parciales para completar un código obsoleto —bolsa, sociedades de crédito, obras públicas...—. Sobre estas ideas, desarrolló una exposición que tiende a mostrar la influencia del desarrollo político y legislativo en el económico. Quizá de una forma demasiado lineal, expone que el primero lleva inevitablemente al segundo, sin analizar la relación contraria; es decir, sin observar que la evolución económica demanda y fuerza la realización de cambios políticos y, por ende, del marco legislativo, que debe ajustarse a la nueva realidad social. Esta interpretación "política" de la transformación histórica que realizó en esta ocasión Alonso Martínez merece reseñarse, sin embargo, como exponente de una corriente de pensamiento muy extendido entre los participantes en el sistema político a finales del siglo XIX. Su intervención puede ser así resumida:

—Es lógico —aunque lamentable— que los trabajos de las comisiones de 1.834, 1.837 y 1.838 se perdieran en los archivos, ya que sólo el final de la guerra civil, en cuanto solución del problema dinástico, podía dar paso a un desarrollo económico continuado.

—La revolución política —afirma— lleva a la revolución económica. Por ello, aunque positivas, son tímidas las leyes de Bolsa y de sociedades por acciones anteriores a 1.854. En este año, "merced a un cambio político favorable a la libertad en todas sus manifestaciones, los intereses materiales

adquirieron extraordinario desarrollo" (133). La brevedad de este período progresista impidió que la riqueza de su legislación fuera completada por un Código mercantil.

—Hubo de llegar otro "acontecimiento político" que influyera en todas las esferas del Derecho; tal fue la revolución de 1.868 con sus principios de libertad en todos los terrenos y, cómo no, en el mercantil.

—En 1.868 se consumó él camino. El proyecto que ahora se presenta respondía a los principios demo-liberales que fueron las bases de trabajo de la comisión de 1.869 si bien matizados, pues como destacó en su día el Real Decreto de 1 de marzo de 1.881 —que firmaba Alonso Martínez— algunas normas habían templado aquellos principios de "libertad absoluta".

Las páginas que presentan las líneas fundamentales del proyecto y las modificaciones más importantes respecto al Código anterior consideran una gama amplia de temas, que abarca desde el "Concepto de Derecho Mercantil" hasta los "buques". Quiero destacar que las dos materias de las que el preámbulo se ocupa con más extensión son las "sociedades mercantiles" (pp. 10 a 16) y la "suspensión de pagos y quiebra" (pp. 47 a 52). Son los dos asuntos que —junto a la Bolsa— más se habían discutido entre 1.830 y 1.882.

Los artículos sobre las sociedades mercantiles y la Bolsa serán tratados con más extensión en los apartados que se

(133) Ibidem, p. 1.

refieren a la regulación específica de estos temas. Destaquemos aquí únicamente las bases de los mismos.

Respecto a las sociedades, se consagra la libertad de constitución aún al margen de los tres tipos contemplados en 1.829, en lo que se sigue el espíritu del Decreto de 1.869. Entre ellas se destaca la anónima, "que ofrece tantos recursos al comercio y a la industria y merced a la cual han podido acometerse en nuestro siglo las más atrevidas y colosales obras, que serán el asombro de las futuras generaciones" (134). El proyecto rechaza la intervención gubernativa y estima como máxima garantía la publicidad de los actos sociales que puedan interesar a terceros.

Sobre estos principios, incluye determinadas normas sobre "sociedades especiales anónimas" que no habían sido consideradas en el Código anterior y que habían tenido que ser reguladas durante el período de su vigencia. Son las de crédito, los Bancos de emisión y descuento, las de ferrocarriles y obras públicas, las de crédito territorial, los Bancos agrícolas y los almacenes generales de depósito.

La Bolsa era una institución que no existía como tal en 1.829 y cuya regulación no fue incorporada al Código. Ahora se hace, dando libertad a su constitución, si bien el gobierno se reserva la concesión del carácter oficial a sus cotizaciones. Se admite, asimismo, la realización de operaciones a plazo, tanto por una posición doctrinal a favor de la libertad de los contratos como por la comprobación histórica de

(134) Ibidem, p. 13.

la ineficacia de tal prohibición.

De forma inmediata, el Congreso nombró la Comisión que había de dictaminar este proyecto, en la que actuó Moret como presidente y Alonso Castrillo como secretario. (135). A mediados de junio presentó su Dictamen, con muy pocas modificaciones —ninguna sustancial— sobre el texto presentado (136).

Aunque terminó la legislatura sin que se debatiera dicho texto, pues se estaba discutiendo la ley sobre organización provincial, destacan dos hechos que muestran las características del debate posterior. En primer lugar, la escasez de exposiciones de colectivos o particulares, a pesar de la encuesta abierta en 1.880; ésto no significa tanto un desinterés en el tema cuanto, como se verá en el desarrollo del debate parlamentario, un alto grado de consenso en los puntos esenciales (137). En segundo lugar, que incluso antes de ser presentado el dictamen, se solicitaron cinco intervenciones en contra del mismo, lo que preludiaba la tónica del debate, que fue más importante a la hora de la discusión de ciertos

(135) Los otros miembros de la comisión eran Laá y Rute, Pisa Pajares, Atard, Isa-sa y Valle y Cárdenas. D.S.C.C., 24 de marzo de 1.882, p. 2.337 y 30 de marzo, p. 2.468.

(136) El Dictamen en D.S.C., 17 de junio de 1.882, apéndice 10.

(137) Sólo se mencionan en esta legislatura tres exposiciones: del Banco Vitalicio de Cataluña, de la Academia científica y mercantil de Barcelona y de la Asociación de Madrid de Profesores mercantiles. Aún contando con la participación anterior de algunas Cámaras de Comercio, se puede decir, con Pisa Pajares, que "fueron contadas las corporaciones y mucho más los particulares que han respondido a este llamamiento" (D.S.C., 27 de febrero de 1.883, p. 1.117). Sobre la ausencia de diputados en los escaños durante el debate, por ejemplo, D.S.C., 12 de enero de 1.883, p. 443; también en 18 de enero o 26 de febrero del mismo año.

principios políticos que en la reforma del articulado (138).

En el siguiente período legislativo se reprodujo el Dictamen, que fue debatido en el Congreso en un tiempo relativamente breve: trece sesiones repartidas entre los meses de diciembre de 1.882 y febrero de 1.883. El debate fue interrumpido durante diez sesiones para dar paso a dos interpelaciones —de Becerra y Romero Robledo— sobre política general, respondiendo a los intereses de los liberales que procedían, por entonces, a una recomposición de su gobierno (139). Resultado del mismo fue que Alonso Martínez, sustituido por Romero Girón, no viera como ministro la aprobación en el Congreso de un proyecto que le era tan caro.

Otra razón fundamental de la brevedad de este debate es que el proyecto fue presentado como una autorización; es decir, con una fórmula de ley de artículo único por el que se autorizaba al gobierno a promulgar el Código de Comercio. Este procedimiento —usado con frecuencia— evitaba la discusión de cada uno de los artículos en los proyectos largos —como éste, de más de mil— o considerados urgentes; pero al tiempo suponía un importante voto de confianza al Gobierno y una mayor dificultad para la presentación y defensa de enmiendas. Por ello y aunque —insistimos— no era éste un asunto que despertara encendida polémica, la oposición más

(138) D.S.C., 23 de abril de 1.882, pp. 4.716-4.717. Los solicitantes fueron Esteban Collantes, Bugallal, Alonso Pesquera, Batanero y Alberto Bosch. Ninguno consumió su turno cuando, al fin, se debatió el proyecto. Sólo el último presentó enmiendas.

(139) D.S.C., sesiones 7ª a 19ª.

activa intervino, por boca del republicano Carvajal, en contra del procedimiento; lo hizo quizá más movida por una cuestión de principios que por la existencia de un rechazo a este proyecto, tomado en su conjunto.

Carvajal propuso que, al menos, se discutiera por libros, para evitar lo que él consideraba "corruptela" utilizada por el gobierno con demasiada frecuencia para acelerar asuntos de importancia y que era:

"Un falseamiento del Poder legislativo reducido a sancionar lo que el Poder ejecutivo ha ideado o propuesto, limitándose a considerar lo bueno del conjunto, lo cual casi siempre sucede con todas las leyes, y no descendiendo a aquellos detalles en que está ciertamente el nervio, toda la vida y la sustancia de un proyecto de Código, ya sea civil, ya penal, ya mercantil" (140).

Pero la mayoría gubernamental era demasiado holgada para que esta enmienda prosperara, lo que fue reconocido por el orador, que la retiró "para no molestar al Congreso con una votación", después de haber oído la negativa "formal" aunque "cortés y atenta" de Alonso Castrillo por la Comisión y de Alonso Martínez por el gobierno. Los argumentos de éstos se basaban en el cuidado y lentitud con los que se había preparado el proyecto, en la representatividad de todas sus comisiones desde 1.855 (141) y en la urgencia de una materia con

(140) Los firmantes de la enmienda eran Bosch y Labrús, Carvajal, Esteban Collantes, Alvarez Mariño, Juan de Montilla, Pedro Diz Romero y el Conde de Sallent. Reproducida en D.S.C., 11 de diciembre de 1.882, apéndice 119. La discusión en pp. 61 a 66. La cita p. 62.

(141) Alonso Martínez insistió en la presencia en las comisiones de reforma del "elemento fabril" y de "todas las escuelas jurídicas y políticas en que está dividido el país", destacando la presencia, desde 1.869, de Luis M^a Pastor, "jefe de la escuela economista", ibidem, p. 64.

siderada más técnica que política.

Tras el fracaso de la propuesta de reforma del procedi
miento de discusión, comenzó el debate del Dictamen, del que
sólo nos interesa inicialmente considerar su carácter. Por
ello, no realizo una enumeración cronológica de enmiendas y
de los argumentos y contraargumentos expuestos, sino una agru-
pación de aquéllas, según sus temas y sus proponentes.

Cinco grupos de diputados presentaron 35 enmiendas, de
las que sólo se debatieron 29, al ser retiradas las otras 6.

El primer grupo de enmendantes —orador, Reig— (142) pre
sentó catorce proposiciones sobre un tema único, la Bolsa. La
mayoría de ellas incidían en cuestiones de detalle. Una de
las seis que retiró este grupo —todas las retiradas— pre
tendía que la negociación a plazo estuviera reservada a los
efectos públicos y sólo se efectuaran a corto tiempo, que se
ría determinado por la ley. Se pretendía así volver al viejo
criterio restrictivo superado, en la legislación y en la
práctica, desde hacía tiempo. El contenido y el resultado de
las que finalmente fueron presentadas, puede verse en los cua
dros adjuntos; de forma general, reseñaremos su éxito, pues
seis de ellas fueron aceptadas sin debate y las otras dos re
tiradas, pues los enmendantes se declararon satisfechos con
la respuesta de la comisión.

Un segundo grupo, tenía como portavoz a Bosch y La-

(142) Los miembros de este grupo eran Rafael Reig, Luis Aparicio, Ezequiel Ordo-
ñez, Juan Fabra y Floreta, Manuel Ibarra, Alberto Bosch y Carlos Espinosa de los Mon-
teros.

brús (143) y presentó nueve enmiendas. Una de ellas —la única defendida por Carvajal que formaba parte de los firmantes— era la que criticaba el procedimiento y que ya hemos reseñado. Las otras —como se pueden observar en detalle en los cuadros— trataban de materias varias: una —aceptada por la Comisión— sobre la ampliación de competencias a peritos y profesores mercantiles; tres sobre seguros (marítimos y de incendios), de las que ninguna prosperó; una, solicitando la rápida proposición de una ley de enjuiciamiento; y tres, sobre sociedades mercantiles. De estas últimas, sólo fue aceptada una —previamente negociada— sobre rebaja en el porcentaje de capital que debían tener suscrito las sociedades de ferrocarriles y obras públicas a la hora de su constitución.

Ocho enmiendas sobre los contratos de transporte fueron presentadas por un tercer grupo que encabezaba Alonso Morales de Setién. Todas ellas fueron derrotadas (144).

Fabra y Floreta y Maciá y Bonaplata, del comercio catalán, actuaron como oradores en tres enmiendas presentadas por un cuarto grupo (145). El primero defendió la conveniencia de que el gobierno se comprometiera a presentar a las Cortes una ley de procedimientos, en la que se hiciera especial hincapié en las quiebras y las suspensiones de pago. Es-

(143) Sus otros componentes: Carvajal, Alvarez Mariño, Pedro Diz Romero, Alvarez Bugallal, Sagredo y Orozco. El Conde de Ioreno apoyó la que solicitaba una ley de enjuiciamiento mercantil y Balparda la referente a peritos y profesores mercantiles.

(144) Los demás firmantes eran Díez de Ulzúrum, Alcalde, Rodrigáñez, Codes y el conde de Villapadierna.

(145) El resto del grupo estaba formado por Quintana, Azcárraga, Castellet, Ledesma y Marcet.

tas eran cuestiones que, como hemos visto, venían preocupando a los comerciantes desde hacía siglos y lo siguieron haciendo durante el XIX. Ante la promesa ministerial de la pronta resolución de esta solicitud, la enmienda fue retirada.

La defensa de una segunda enmienda estuvo también a cargo de Fabra. Trataba de la modificación de dos artículos sobre bancos y sociedades agrícolas (214 y 215) y sobre la liquidación de las sociedades (a. 233). Se presentaban unidos pues en ambos casos se referían a un mismo problema: los plazos. Para aquellas sociedades, el proyecto establecía un máximo de 90 días en sus operaciones de descuento y de tres años en las de préstamo. Estimaban los enmendantes que estos períodos de tiempo resultaban cortos para la agricultura, que era el sector usuario de estos bancos. Para no entrar en una discusión acerca del ciclo agrícola se proponía que el futuro Código no fijara ninguna fecha, sino que ésta se dejara al libre albedrío de los contratantes.

El artículo 233 del proyecto, por el contrario, no determinaba ningún plazo para la tramitación de la liquidación de las sociedades mercantiles. Para esta situación, los enmendantes proponían un límite de una año, que evitara su alargamiento fraudulento por parte de los directores. El organismo que, en su caso, debía decidir acerca de la necesidad de alargarlo, sería la Junta General de Accionistas.

Los enmendantes, por tanto, proponían para el primer caso la libertad de los contratantes para establecer la fecha

del vencimiento de descuentos y préstamos. Para el segundo, señalaban un estrecho límite y, subsidiariamente, la posibilidad de su renovación. A este grupo, representante de los intereses mercantiles, le interesaba la más amplia libertad de negociación unida a una muy precisa regulación de pleitos, liquidaciones y quiebras. Su planteamiento era exactamente contrario al de la Comisión, que no aceptó la enmienda basándose en que los plazos fijados eran suficientes:

"En efecto, en tres años es muy probable que haya por lo menos una cosecha buena y abundante, y si no abundante, por lo menos suficiente para que el agricultor salga de sus apuros y pueda satisfacer el crédito" (146).

Por el contrario, estimaba que la diversidad de las sociedades imposibilitaba el establecimiento de plazos para la liquidación, ni siquiera con carácter indicativo. Esta enmienda no fue tomada en consideración por el Congreso.

Maciá y Bonaplata defendió una enmienda en la que se solicitaba la supresión del artículo 179, que impedía a los bancos realizar operaciones de descuento sin la garantía de tres firmas. Tras un pequeño debate, se llegó a un acuerdo por el que la comisión aceptó rebajar a dos el número de firmas requeridas.

Las proposiciones de este grupo, por tanto, alcanzaron un resultado desigual. Un triunfo a corto plazo, la primera, que a la larga fue una derrota. Fracaso en la segunda y un

(146) D.S.C., 13 de enero de 1.883, p. 438.

pacto en la tercera, en la que se consiguió una cierta rebaja en lo que se consideraba criterio restrictivo.

Por último, un quinto grupo, encabezado por Balparda (147) presentó una enmienda en el sentido de que se reconociera personalidad jurídica a las sociedades extranjeras que actuaran en España.

Señalados los oradores enmendantes y los asuntos sobre los que intervinieron, mencionaremos que por parte de la Comisión tomaron la palabra cinco de sus miembros que, ordenados por el número de veces que lo hicieron, son: Castrillo, Valle, Isasa, Atard y Pisa Pajares. Fueron apoyados de forma importante por Alonso Martínez mientras fue ministro; su sucesor, Romero Girón, no tuvo sino intervenciones de trámite.

En los tres cuadros adjuntos hemos agrupado las enmiendas según su resultado. Un primer grupo (cuadro II,1) está formado por aquellas que fueron retiradas después de haber sido expuestas ante el Congreso. Son ocho en total; cuatro de ellas (1, 2, 7 y 8), para no forzar una votación que se sabía perdida de antemano; otras tres (3, 5 y 6), por quedar el ponente satisfecho con las explicaciones recibidas por parte de la Comisión y del gobierno; por último, una (nº 4), fue derrotada en su objetivo pero es retirada al conseguir de la Comisión una nueva redacción del artículo 168.

El segundo grupo está formado por las 12 enmiendas que fueron derrotadas en su integridad (cuadro II,2), tanto en vo

(147) Los otros miembros eran Allende Salazar, Sales, de la Puerta, de Rute, Hermida e Ibarra.

tación nominal (nº 12) como porque el Congreso, después del debate, no las tomó en consideración.

En un tercer grupo de enmiendas hemos incluido las nueve que fueron aceptadas por la comisión (cuadro II,3). La mayoría versaban sobre cuestiones de detalle que fueron asumidas sin debate: son las referentes al tema bursátil, casi todas introducidas por Reig. Otras dos lograron una transacción: eran las que trataban de reducir la cantidad de capital social de obligada suscripción de las compañías de ferrocarriles y obras públicas y el número de firmas necesarias para que los bancos pudieran realizar el descuento de letras.

Como se puede observar con más detalle en los cuadros, hay cinco cuestiones, entre las discutidas, que interesan particularmente a estas páginas:

1) Tribunales de Comercio: ante las demandas sobre su restauración (Bosch y Labrús), el Gobierno y su mayoría defienden la unidad de fueros establecida en 1.868.

2) Quiebras y suspensiones de pagos: los grupos encabezados por Fabra y Bosch, integrados fundamentalmente por personalidades unidas a la clase mercantil catalana, mostraron una preocupación especial por la ley de enjuiciamiento mercantil y, dentro de ella, por los asuntos mencionados (enmiendas 2 y 3, cuadro II,1). Alonso Martínez frenó esta demanda, al asegurar que tras la aprobación del Código se prepararía de forma inmediata una nueva ley de enjuiciamiento mer-

cantil (148). Las enmiendas se retiraron y el Código de Comercio no incluyó una regulación de los aspectos procesales de la quiebra. Pero la Ley de Enjuiciamiento mercantil nunca se realizó y, por ello, aún en nuestros días, se continúan aplicando los preceptos del libro IV, títulos II a XI del Código de Comercio de 1.829.

3) Compra de acciones propias por parte de las socieda-
des (enmienda 4, cuadro II,1). Tanto Bosch como Maciá, pidie-
ron la retirada de los artículos 166 y 167 del proyecto, que
permitían a las sociedades anónimas comprar sus propias accione
nes, aunque sólo cuando tuvieron todo su capital desembolsa-
do. Bosch insistió en que se debía prohibir esta operación y
la de prestar sobre las propias acciones, para que no se re-
pitieran "aquellos escandalosos hechos de que ya en tiempos
de las Cortes Constituyentes tuvo que ocuparse el Congreso"
y que crearon fortunas que "aún perviven en la Corte". El
hecho denunciado era real y fue uno de los mecanismos especu-
lativos que incidieron directamente en las crisis de las so-
ciedades anónimas en momentos como 1.845-47 y 1.864-66. Sin
negarlo, Maciá utilizó una argumentación más pragmática, y se
limitó a señalar que todas las escrituras de sociedades por
acciones constituidas el año anterior impedían tal opera-
ción. De ahí que solicitara que se hiciera ley lo que las so-
ciedades habían ya adoptado como práctica que respondía a

(148) D.S.C., 12 de diciembre de 1.882, pp. 72 a 76 y 78.

sus intereses. Sobre ello se apoyó Alonso Martínez, que consideró, en una profesión de fe en el liberalismo económico, que el Estado no podía coartar a las sociedades que, en cualquier caso, eran los mejores jueces de sus intereses (149).

La enmienda fue retirada, pero reintroducida en el Senado que, considerando la "triste y repetida experiencia", abandonó el liberalismo manifestado en los discursos de Alonso Martínez en el Congreso, y señaló "la necesidad de que la ley ampare ciertos derechos con garantías eficaces que hagan muy difícil la defraudación de derechos e intereses respetables" (150). Esta es una de las modificaciones introducidas por la Cámara Alta, que no fueron muy numerosas, pero que tendían a incrementar el papel del Estado en la vigilancia y control de las operaciones de las sociedades mercantiles. No sólo lo habían pasado casi tres años entre el debate en el Congreso y en el Senado sino que el gobierno —y la mayoría— eran ahora, verano de 1.885, liberal-conservadores, aparte la incidencia de la crisis económica.

4) Compañías de obras públicas y ferrocarriles. El grupo que encabezaba Bosch y Labrús, que había defendido la enmienda que acabamos de reseñar, solicitó la reducción del porcentaje de capital que estas compañías debían tener suscrito a la hora de su constitución (enmienda 3, cuadro II,3). El proyecto requería un tercio. Ellos proponían una reducción a una

(149) El debate en D.S.C., 12 de diciembre de 1.882, pp. 80-83.

(150) Preámbulo del Dictamen de la Comisión del Senado, de 15 de junio de 1.885 (D.S.S., apéndice 5º al núm. 149).

quinta parte. Se consiguió una transacción entre las dos posturas, que dejó fijado el porcentaje en un 25% (151). Esta cifra quedó así en el Código, pues no fue enmendada en el Senado.

5) Sociedades extranjeras. El grupo encabezado por Balparda solicitaba se incluyera la concesión de personalidad jurídica a las sociedades extranjeras que operaran en España (enmienda 8, cuadro II,1). La razón expuesta por el ponente era que no se podía llevar a juicio a estas sociedades, si carecían de esta cualidad. La Comisión no aceptó la enmienda, basándose en que el Código de Comercio no podía regular una materia que era competencia del Código civil y, sobre todo, objeto de legislación recíproca con los diversos países (152).

Algunas de estas cuestiones deberán ser retomadas más adelante. Baste aquí su mención para obtener una imagen global de los puntos debatidos y de las opiniones acerca de los mismos, que se completa con la consideración del debate a la totalidad, que se desarrolló en siete sesiones, y que ocupó alrededor de 75 páginas del Diario de Sesiones (153). Esto significa, además de un escaso nivel de discusión, por las razones ya expuestas, un tercio más de lo que ocupó el debate del articulado.

Hubo tres turnos en contra, que dieron pie a otras cua-

(151) D.S.C., 12 y 13 de enero de 1.883, pp. 433 y 437.

(152) D.S.C., 18 de enero de 1.883, pp. 522 a 525.

(153) D.S.C., 24 de enero a 27 de febrero de 1.883.

CUADRO II,1: DISCUSION DEL PROYECTO DEL CODIGO DE COMERCIO (CONGRESO)

ENMIENDAS RETIRADAS

<u>OBJETO DE LA ENMIENDA</u>	<u>ORADOR ENMENDANTE</u>	<u>COMISION/MINISTRO</u>	<u>FECHAS DISCUSION</u>
1) El procedimiento de discusión: que sea por títulos.	Carvajal	Alonso Martínez Castrillo	11 diciembre 1.881 (pp. 61 a 66)
2) Que el Gobierno se comprometa a presentar en breve un Proyecto de Ley sobre Enjuiciamiento Mercantil y otro sobre Tribunales especiales de Comercio.	Bosch y Labrús	Valle Alonso Martínez	12 diciembre 1.882 (pp. 72 a 76)
3) Que el Gobierno se comprometa a presentar una ley de procedimientos, en la que se preste especial atención a las quiebras y las suspensiones de pagos.	Fabra y Floreta	Alonso Martínez	12 diciembre 1.882 (pp. 78)
4) Desaparición artículos 166, 167 y 168: que las compañías por acciones nunca puedan comprar sus propias acciones ni prestar sobre ellas (1).	Bosch y Labrús	Atard Alonso Martínez	12 diciembre 1.882 (pp. 80 a 83)
5) Contra el a. 96, si quiere decir que los agentes de bolsa no pueden ejercer actos de comercio (2).	Reig	Valle Romero Giron	13 enero 1.883 (pp. 450 y 451)
6) Contra el a. 894, que reputa fraudulenta cualquier quiebra de los agentes mediadores de comercio (2).	Reig	Castrillo	13 enero 1.883 (pp. 451 y 452)
7) Que se añadan algunos artículos sobre salvamento de buques y sus cargamentos.	Bosch y Labrús	(no se debatió)	18 enero 1.883 (pp. 521 y 522)
8) Que se conceda personalidad jurídica en España a las sociedades extranjeras que operen en ella.	Balparda	Castrillo	18 enero 1.883 (pp. 522 a 525)

NOTAS: (1) Enmienda retirada sin haber sido aceptada por la Comisión, pero ésta redactará de forma más dura el a. 168. Curiosamente, la enmienda será aceptada por el Senado.

(2) Las dos enmiendas de Reig son en realidad preguntas que buscan una aclaración por parte de la Comisión. Obtenida ésta la enmienda se retira.

CUADRO 12.2: DISCUSION DEL PROYECTO DE CODIGO DE COMERCIO (CONGRESO)

ENMIENDAS DERROTADAS

<u>OBJETO DE LA ENMIENDA</u>	<u>ORADOR ENMENDANTE</u>	<u>COMISION/MINISTRO</u>	<u>FECHAS DISCUSION</u>
1) a. 140: explicitar que en las compañías colectivas, si no se dice nada en contrario en sus escrituras, las ganancias de los socios industriales sea el 20%.	Bosch y Labrús	Isasa	12 diciembre 1.882 (pp. 79 y 80)
2) Incremento plazo descuentos y préstamos Bancos y sociedades agrícolas (a. 214, 215). Reducción plazo liquidación.	Fabra y Floreta	Pisa Pajares	13 enero 1.883 (pp. 437 a 439)
3 a 10) 8 enmiendas sobre contrato de transporte, que afectan a diversos artículos del título 7, libro 2º.	Morales de Setién	Alonso Castrillo Valle	13 enero 1.883 (pp. 439 a 449)
11) Supresión del artículo 393. (seguros contra incendios).	Bosch y Labrús	Castrillo	15 enero 1.883 (pp. 470 a 472)
12) Modificación del a. 758, sobre "barrete de patrón" (seguros marítimos) (2).	Bosch y Labrús	Atard	15 enero 1.883 (pp. 472 a 476)

NOTAS: (1) Se acepta una ligera modificación del a. 215 a efectos de concordancia con el 179 (reformado).

(2) Bosch y Labrús exige votación nominal, perdiéndola por 96 votos frente a 34.

CUADRO II,3: DISCUSION DEL PROYECTO DE CODIGO DE COMERCIO (CONGRESO)

ENMIENDAS ACEPTADAS CON DEBATE (D) O SIN EL (-)

<u>OBJETO DE LA ENMIENDA</u>	<u>ORADOR ENMENDANTE</u>	<u>COMISION/MINISTRO</u>	<u>FECHAS DISCUSION</u>
1) (-) Añadir al a. 94 la preferencia de los peritos o profesores mercantiles para actuar como corredores de comercio.	Bosch y Labrús	Atard	12 diciembre 1.882 (p. 78)
2) (D) Supresión a. 179 que impide a los Bancos el descuento sin la garantía de 3 firmas. (Se acepta rebaja a 2).	Maciá y Bonaplata	Alonso Martínez Isasa	12 diciembre 1.882 (pp. 84 y 85)
3) (D) Reducción del porcentaje de capital social que deben tener suscrito las compañías de obras públicas y ferrocarriles para constituirse (proyecto = 33% enmienda = 20%), a. 186 (1).	Bosch y Labrús	Valle Castrillo	12 enero 1.883 (p. 433) 13 enero 1.883 (p. 437)
4) (-) Supresión párrafo 3 a. 77 (sobre intervención de la Junta Sindical en las operaciones a plazo)	Reig	Pisa Pajares	13 enero 1.883 (p. 452)
5) (-) Supresión frase a. 80 (sobre acta cotización bolsa).	Reig	Castrillo	13 enero 1.883 (p. 452)
6) (-) Modificación a. 93 (sobre los libros de los agentes colegiados de Bolsa).	Reig	Castrillo	13 enero 1.883 (p. 452)
7) (-) Modificación a. 74: que el Gobierno pueda estipular condiciones para ingresar en un colegio de agentes de Bolsa.	Reig	Castrillo	13 enero 1.883 (p. 452)
8) (-) Modificación redacción a. 111 (a efectos coherencia), s/bolsa.	Reig	Castrillo	13 enero 1.883 (p. 452)
9) (-) Modificación redacción a. 947.	Reig	Castrillo	13 enero 1.883 (p. 452)

NOTA: (1) Estaba negociada pero Valle, de la Comisión, no lo sabía, por lo que se deja en suspenso el debate hasta el día siguiente en que se confirma la previa transacción (25%).

tro intervenciones, gracias a la utilización del recurso de la alusión. Los diputados que tomaron la palabra y las materias que trataron fueron las siguientes:

Maciá y Bonaplata utilizó el primer turno en contra para criticar el carácter del Código de Comercio; la dificultad que se establecía para poder reformar los estatutos de las sociedades mercantiles (154); la ausencia de mención explícita a las sociedades especiales mineras y a las de responsabilidad limitada y, por último, la escasa y rígida regulación de la quiebra (155).

Fabra y Floreta pudo intervenir gracias a las alusiones del anterior y desarrolló su discurso en torno a una idea central: las lagunas del proyecto. En primer lugar, expuso la necesidad de regular la existencia de "sociedades colectivas de responsabilidad limitada", que no considera el proyecto de forma explícita; a continuación, reseñó algunas ausencias en los artículos sobre las letras de cambio y las limitaciones en los referentes al acepto (156).

Bosch y Labrús, consumió el segundo turno en contra y trató acerca del carácter del Código de Comercio, de la necesidad de establecer Tribunales especiales de comercio, de la utilidad de la regulación de la contribución de las socieda-

(154) El proyecto del Congreso, señala la unanimidad para esta operación, si bien, como resaltó la comisión, sólo reza para aquellas que no hayan dispuesto otra cosa en sus estatutos (D.S.C., 24 de enero de 1.883, p. 610).

(155) Ibidem, pp. 602-606.

(156) Ibidem, pp. 606-607.

des extranjeras, de la conveniencia del establecimiento de normas para las sociedades de responsabilidad limitada y de algunas cuestiones de detalle sobre las letras de cambio y los avales (157).

Su intervención dió pie a las de García Lomas y Nava y Caveda. El primero hizo diversas observaciones sobre las sociedades mercantiles, reclamando mayores restricciones, aún dentro del marco de la libertad de constitución. Su formulación general se concreta, en su discurso, únicamente en las compañías de obras públicas y, especialmente, ferroviarias, y en el control del volumen de su capital social y de sus obligaciones, para evitar su ruina. El motivo de su preocupación era, evidentemente, que "casi todas las empresas de ferrocarriles es pañolas, con muy poca diferencia, han venido al estado de quiebra" (158). Este orador suponía que una legislación permisiva facilitaba la caída en una crisis económica. Una restrictiva, por contra, al preverla, la evitaba.

Nava y Caveda se ocupó de realizar la crítica a la regulación del comercio marítimo lo que hizo presentando un proyecto alternativo, que fue aceptado por la comisión (159).

Carvajal consumió el tercer turno en contra. Su verbo fo goso provocó un virulento enfrentamiento con la Comisión y, sobre todo, con Alonso Martínez al exponer sus críticas al

(157) D.S.C., 26 de enero de 1.883, pp. 640-646.

(158) D.S.C., 1 de febrero de 1.883, p. 737.

(159) D.S.C., 10 de febrero de 1.883, pp. 849-859 y 15 de febrero de 1.883, pp. 932-944.

carácter del Código y al lamentar sus inconcreciones (160).

Reseñados los puntos criticados en el debate a la totalidad, que, en esencia, no pusieron en cuestión el proyecto, me ceñiré ahora únicamente a la parte que versó sobre el carácter del Código.

En sus discursos Maciá, Fabra y Bosch, resaltaron su acuerdo con la globalidad del proyecto y que sus críticas no eran políticas sino técnicas —Maciá—, que sólo pretendían denunciar sus "lunares" —Fabra— y que la intervención en un turno en contra se debía al planteamiento del debate, que había impedido fuera "amplio y solemne" —Bosch—.

Maciá y Fabra acusan al proyecto de incompleto, lo que se revela en la ausencia de normas sobre las sociedades mineras y las de responsabilidad limitada. Aquél le critica, además, su incongruencia, pues resulta a veces demasiado restrictivo, como en el control gubernamental del número de agentes de cambio y bolsa, en la posibilidad de reformar los estatutos de las sociedades o en las limitaciones a la contratación de seguros de vida. Por el contrario, resulta a veces demasiado liberal, como en el aspecto de la resolución de las quiebras (161).

Bosch y Labrús, por su parte, a las críticas mencionadas añade la de falta de homogeneidad del texto y señala las ca-

(160) D.S.C., 26 de febrero de 1.883, pp. 1.094-1.099 y 27 de febrero de 1.883, pp. 1.108-1.115.

(161) D.S.C., 24 de enero de 1.883, pp. 602-607; 26 de enero de 1.883, p. 640.

rencias en lo referente al procedimiento mercantil, a la regulación de los tribunales especiales y al comercio marítimo. Sobre esta última cuestión, ya mencionamos que dió pie a una intervención de Nava y Cqveda que fue asumida por la Comisión (162).

Carvajal fue el que realizó una intervención más radical, claramente partidista y en ocasiones, al dejarse llevar por la demagogia, injusta. Lo más llamativo de su discurso, como es natural, estaba en esta última característica que fue la que proporcionó abundante materia prima a la prensa. Por ejemplo, la consideración de que el Código de 1.829 fijó la mayoría de edad para ejercer el comercio en 20 años mientras que el proyecto propone 21, le lleva a decir:

"Pues no; viene a España el partido constitucional, después de haber echado sapos y culebras por su boca sobre el partido conservador porque decía que era reaccionario, y después de todo ésto, resulta que en cuestión tan fundamental como la que atañe a la persona, resulta menos liberal el señor Alonso Martínez que fernando VII, y el señor Sagasta menos liberal que Calomarde" (163).

Estas palabras, en realidad, le sirvieron para desarrollar una idea expresada al inicio de su discurso sobre la conexión entre el programa político y la buena legislación económica y que se oponía radicalmente a la que tenía la corriente liberal-progresista y que hemos visto en boca de

(162) D.S.C., 26 de febrero de 1.883, pp. 640-645.

(163) D.S.C., 26 de febrero de 1.883, p. 1.098. Alonso Martínez justificó este aumento en la mayoría de edad mercantil en la necesidad de que ésta no estuviera muy alejada de la civil, que se preveía fuera fijada en 23, por el Código civil en proyecto.

Alonso Martínez. Carvajal, contra lo que había expresado aquél en marzo de 1.882, haciéndose eco de los decretos formulados en épocas de liberalismo, afirmó que ser liberal no era suficiente garantía para elaborar una buena ley mercantil. El apellido de una ley, consideró acertadamente, no es garantía de justeza ni de su eficacia. Nuestro orador —en su amplia crítica— llegó a decir que las Partidas resultaban un mejor texto legal puesto que definían correctamente las cualidades del comercio —lucro, especulación y repetición—, cosa que no hacía el actual proyecto, al seguir la idea de que concreción era igual a encorsetamiento e indefinición idéntico a libertad. Por el contrario, estima Carvajal que es necesaria mayor concreción y mayor definición.

Esta ardiente crítica provocó una emotiva respuesta del ofendido Alonso Martínez, cuyo discurso de autodefensa política fue, a su vez, mordazmente contestado por Carvajal; éste no tuvo reparo en rectificar, y afirmar ante la Cámara que el ex-ministro "es más liberal que Fernando VII" en la mayoría de las cuestiones, aunque no en ésta y se extraña de que se pueda sentir ofendido por ser comparado "con el augusto abuelo del Rey" (164).

En conjunto —como se ha visto—no se presentó un proyecto alternativo ni hubo un cuestionamiento profundo del contenido del Código. Sólo en el caso del comercio marítimo se enmendó una parte importante del articulado. Debido a la

(164) La polémica en D.S.C., 27 de febrero de 1.883, pp. 1.122 a 1.125.

la superior calidad técnica de la enmienda frente al proyecto y aunque se presentó en un turno en contra de la totalidad fue aceptada por la comisión e integrada en el nuevo Código.

Los discursos en contra de la totalidad, excepto el de Carvajal, se presentaron como lo que eran: una exposición de críticas parciales, en demanda de más libertad en algunos puntos o de más control en otros, dentro de un modelo común que integraba a los dos partidos mayoritarios. La comisión y el gobierno, amparados en su mayoría, se limitaron a responder con llamados a la unidad de los partidos para votar el proyecto y con la petición de que se le juzgara técnica y no políticamente (165).

El Congreso aprobó el dictamen de forma definitiva el 2 de abril de 1.883 y el texto pasó al Senado para su tramitación. Transcurrió la legislatura de 1.882-83 sin que esta Cámara iniciara el debate de modo que, en la siguiente, el Congreso volvió a reproducir el proyecto y lo envió a la Alta Cámara en junio de 1.884, con Francisco Silvela como ministro de Gracia y Justicia en un gabinete presidido por Cánovas.

El proyecto sufrió un nuevo retraso en el Senado, que no sólo dejó una legislatura sin incluirlo en su orden del día sino que, elegida la Comisión dictaminadora en junio de 1.884, no presentó su informe hasta un año después. Las razones de

(165) La posición de la Comisión y del gobierno, en D.S.C., 24 de enero de 1.883, p. 608; 15 de febrero, p. 945; 26 de febrero, p. 1.088 y 27 de febrero, p. 1.118.

estos retrasos no aparecen claramente dibujados; ni lo justifican las divergencias entre los partidos, ni la importancia de los trabajos legislativos que, aunque grande, no explican el retraso en la solución final a un problema tan grave y para el que existía ya una respuesta. ¿Hubo un intento de elaboración de una alternativa al texto aprobado en la medida en que lo permitían los reglamentos y la composición de las Cámaras? ¿Se pretendía tantear la acogida del proyecto en los sectores interesados y obrar en consecuencia?. Esta es la intención que anunció la Comisión aunque en su dictamen no se atuvo necesariamente a las quejas formuladas (166).

El hecho es que el dictamen, presentado en junio de 1.885 no incluyó sino correcciones de estilo y algunas reformas. Estas eran de cierta importancia, y el texto del preámbulo —ya citado— revelaba su carácter. En él se manifestaba la creencia en la necesidad de un control más estricto por parte del gobierno (167). De este modo, se incorporó en el Senado —y luego en el Código— la enmienda que prohibía a las sociedades comprar sus propias acciones si no era con los beneficios y para amortizarlos. Asimismo, la reserva al Gobierno —y no a la Junta Sindical— de la autorización para la coti

(166) En necesario, a este respecto, realizar un análisis de las representaciones enviadas al Senado sobre este proyecto. Al menos, se pronunciaron el Colegio de Corredores e intérpretes de navío de Barcelona, el colegio de abogados de la misma ciudad, una compañía de seguros —La Urbana— con críticas parciales y el Círculo de la Unión Mercantil con su apoyo total.

(167) El dictamen fue incluido como apéndice 50 del núm. 149, correspondiente al 17 de junio de 1.885. La Comisión había sido elegida el 19 de junio del año anterior (D.S.C. pp. 377 y 387) y estaba formada por Fernández de la Hoz como presidente, el Marqués de Retortillo como secretario, Benito Gutiérrez (que había estado en la Comisión de 1.869), Mena y Zorrilla, Montejo y Robledo, Bayo y Albacete.

zación de valores extranjeros.

Las aportaciones hechas ostensiblemente en un sentido "más liberal" se reducían a la incorporación de un párrafo (al a. 51) por el que se permitían las comunicaciones telegráficas en la negociación y a la reducción de la mayoría precisa para la reforma de los estatutos sociales. Muy importante la primera, que no hacía sino responder a la demanda de incorporación de los nuevos adelantos de la técnica para facilitar la realización de operaciones mercantiles. Quizá simbólica la segunda, pues si bien el proyecto inicial exigía la unanimidad para la reforma de los estatutos de una sociedad, la norma rezaba exclusivamente para aquéllos que no hubieran consignado otra cosa en las escrituras fundacionales. Ahora, sin embargo, se obligaba a las compañías a contemplar este extremo, con la prohibición expresa de que esta decisión se pudiera tomar por menos de dos tercios de los socios. (v. cap. 3, punto 3.5).

El dictamen se aprobó sin discusión, al cabo de un mes de haber sido presentado. El mismo resultado obtuvo el de la Comisión mixta, en ambas Cámaras. El 7 de julio de 1.885 se realizó la votación definitiva. El Código de Comercio fue promulgado por la ley de 22 de agosto y entró en vigor el 1 de enero de 1.886. De este modo entró a formar parte de ese amplio corpus legislativo de la década de los ochenta, cuyo análisis hace afirmar a Jover que supuso "la consolidación del Estado liberal en España" (168).

(168) José María Jover Zamora, "La época de la Restauración. panorama político-social, 1.875-1.902", en M. Tuñón de Lara (dir.), Historia de España, VIII, p. 343.

2.6.- El Código de Comercio de 1.885.

El Código de Comercio de 1.885 tiene ~~sesusar~~ mil artículos divididos en cuatro libros que tratan, respectivamente, de los comerciantes y actos de comercio; de los contratos es peciales de comercio (compañías, préstamos, seguros, letras de cambio...); del comercio marítimo y de la suspensión de pagos y las quiebras.

Tiene, por tanto, al misma estructura que el de 1.829, que recoge y reformula excepto en lo referente a los Tribunales de Comercio, suprimidos en 1.868 y en los aspectos procesales, para los que remite a una futura e inmediata Ley de Enjuiciamiento Mercantil.

Sobre el Código anterior, incorpora la regulación de la Bolsa, institución que en aquél no estaba contemplada, con criterios de libertad para la constitución y el funcionamiento. Trata con mayor extensión las normas referentes a las so ciedades anónimas, incorporando la legislación que se había ido desarrollando desde 1.855 sobre las de crédito, los Bancos de emisión y descuento, las de ferrocarriles y demás obras públicas, así como las de almacenes generales de depósitos y los Bancos de crédito agrícola.

Sobre las sociedades, y de acuerdo con los principios ya expuestos en 1.869, en armonía con las exigencias del desarrollo económico, se pretendía establecer "los principios de libertad de asociación y de comercio, armonizándolos con la protección más eficaz para los derechos de terce-

ro" (169), simbolizados en la exigencia de la inscripción en el Registro Mercantil y de una abundante publicidad de los balances y de los actos sociales. Como excepciones a la norma general, las sociedades mencionadas tenían una regulación especial que, sin negar la libre concurrencia, la limitaban, como en el caso de los Bancos de emisión, o incrementaban las garantías exigidas, como en las de crédito y obras públicas.

La exposición de motivos del proyecto resaltó, quizá en exceso, su carácter objetivo en contraposición con el subjetivismo del Código de 1.829. Es cierto que el nuevo texto responde a la concepción del Derecho Mercantil como regulador de los actos objetivos de comercio, prescindiendo de quién los realice. No obstante, y como ya resaltó Rubio, el código de 1.829 responde también a este objetivo, que el nuevo no hace sino profundizar (170). Del mismo modo, termina de consolidar la idea de la sustantividad del Derecho Mercantil, independientemente del Civil. Ambos aspectos son discutidos actualmente, pero tal discusión desborda el límite de estas páginas, tanto temática como cronológicamente.

La doctrina ha elogiado esta ley que, indudablemente, se adapta mejor que la anterior a un sistema económico evolucionado y que incorpora la regulación de aquellos aspectos que,

(169) Vicente Romero y Girón, El nuevo Código de Comercio para la península y las Antillas, profusamente anotado y concordado con nuestra legislación anterior y con la jurisprudencia nacional y extraneja y exposición de motivos del proyecto del Ar. Alonso Martínez, precedido de una introducción por —, Madrid, 1.886 (2ª ed., corr. y aum.), p. 147.

(170) Jesús Rubio, Sáinz de Andino..., p. 117.

en el campo mercantil, más se habían desarrollado en el transcurso del siglo. De ello se deriva la larga vigencia de este Código que rige aún en nuestros días, aunque ha debido ser completado por leyes esepciales en aquellos aspectos ignorados por el legislador en el momento de su promulgación o en los que se han desarrollado tanto que la norma quedaba obsoleta —ley de sociedades anónimas de 1.951—.

En los años que abarca nuestro estudio, quizá el único momento en el que se sugirió —sin mayores consecuencias—la necesidad de una revisión completa del Código, fuera en 1.899. El R.D. de 17 de abril, reorganizó la Comisión General de Codificación. Estaba firmado por Durán y Bas como ministro de Gracia y Justicia que, siendo diputado, había mostrado su inquietud por los problemas de la codificación mercantil. Quizá por ello, y llevado de su afán reformista, afirmaba: "necesaria es igualmente la revisión completa del Código de Comercio", para incluir en él las nuevas instituciones e incorporar la experiencia aportada por la nueva legislación internacional. En el preámbulo de esta disposición se formulaba el deseo de que "la ley, en vez de coartar, favorezca el espíritu de especulación". Eran quizá muchos los aspectos que, técnicamente, aconsejaban la revisión pero, en el aspecto que nos ocupa, se estaba refiriendo, con seguridad, a la regulación de la sociedad de responsabilidad limitada, pedida en 1.882 y que no se realizó, en nuestro país, hasta 1.953 (171).

(171) Este R.D. incorporó la comisión de revisión del Código de Comercio como sección segunda "de derecho mercantil" de la comisión General de Legislación, C.L.E., t. 3 (N.S.), pp. 365-372.

Indudablemente, este Código de Comercio tenía algunas lagunas, que el tiempo acrecentó, como la mencionada de las sociedades de responsabilidad limitada. Quizá la más importante fuera la ausencia de disposiciones procedimentales, que fue denunciada en el debate de 1.882 y sobre la que dijo Alonso Martínez:

"La aprobación de este Código lleva consigo necesariamente una reforma de ley de enjuiciamiento mercantil (172).

Ya fue reseñado cómo tal afirmación no pasó a ser una promesa verbal que no tuvo cumplimiento.

Las solicitudes de reforma del Código en el período considerado, y atendiendo a las materias que aquí interesan, tratan de los dos temas ya reseñados, de los tribunales de comercio, de las suspensiones de pagos y de cuestiones parciales sobre las sociedades mercantiles. Sobre el primero, prevaleció la unidad de fueros y las solicitudes acerca del establecimiento de la jurisdicción mercantil fueron haciéndose menos virulentas y más esporádicas. Sobre el segundo aspecto, cabe destacar la recurrencia del debate en el que la ley de suspensiones de pagos del 10 de junio de 1.897 no es sino un hito. El último asunto mencionado conocerá reformas puntuales en aspectos que pronto se revelaron regulados con excesivo rigor, cual es el de la frecuencia de la publicación de los balances de las sociedades mercantiles. (v. cap. 3, punto 3.5).

(172) D.S.C., 12 de diciembre de 1.882, p. 78.

CAPITULO 3

LA REGULACION DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES

3.1.- Introducción.

La aparición y extensión del maquinismo a raíz de la Revolución industrial requiere inversiones crecientes y subvierte la tradicional relación trabajo/capital. La revolución en el sistema productivo exige cambios profundos en la organización del sistema económico —capitalismo— y determina la modificación de toda la estructura socio-política, transformando los países en los cuales se pretendía desarrollar.

La demanda de capital adquiere unos niveles que no admiten comparación con épocas anteriores y se multiplica con el crecimiento económico. Capital para la industrialización, para construir y comprar las máquinas, para el establecimiento de fábricas y plantas industriales. Capital, también, para la constitución de una red de transportes y servicios que el nuevo modo de producción necesitaba para la colocación y la venta de los productos.

De ahí que la organización societaria más adecuada para abordar estas grandes empresas, en el campo de la producción y los servicios sea la sociedad anónima, la gran compañía de capitales por acciones. La sociedad anónima es la fórmula asociativa que permite la centralización de las grandes cantidades de capital que el nuevo sistema requiere. Esta organiza-

ción satisface las necesidades de los demandantes de capital, pues permite —frente a la colectiva y la comanditaria— la continuidad de la inversión. Satisface, al tiempo, las exigencias de los oferentes, al garantizar la seguridad de su patrimonio, ya que la responsabilidad limitada reduce el riesgo a lo invertido. Otra ventaja para los accionistas es el mantenimiento de la disponibilidad de su capital, pues éste puede ser recuperado mediante la venta de los títulos en el mercado.

El punto de encuentro entre demanda y oferta de capital es la Bolsa. La existencia de un mercado de capitales es necesaria para los demandantes, que necesitan vender sus títulos. Es necesario, para los oferentes, ya que es el lugar en el que pueden adquirir acciones y obligaciones, recuperar su inversión o transformarla en unos valores distintos.

La oferta, es un primer momento, por encima de su escasez relativa, podemos afirmar que es ignorante de las posibilidades que el nuevo sistema proporciona. Este requiere la movilización del ahorro de capas más amplias de la población que en el Antiguo Régimen. En el siglo XVIII, como vimos, los inversores se reducían, en la práctica, a los comerciantes y un número reducido de nobles. La quiebra de las compañías privilegiadas, tanto en el sector manufacturero como en el gran comercio, había, además, retraído la oferta, que mira con desconfianza este nuevo tipo de asociación, cosa que tendremos ocasión de analizar en este capítulo.

¿Cómo conseguir movilizar el ahorro y vencer la descon-

fianza hacia el nuevo tipo de sociedad? ¿Cómo es posible simplificar las relaciones entre oferta y demanda, cuando su encuentro directo es difícil, cuando no imposible? La respuesta estriba, en un primer momento, en la organización de un marco legal adecuado y, sobre todo, en la articulación de un sector financiero que sirva de puente entre oferta y demanda. De ahí que los Bancos —organizados, a su vez, en sociedades anónimas— ocupen el lugar central del mercado, acumulando ahorros y volviéndolos a poner en circulación en forma de capital.

El nuevo sistema económico, por tanto, requiere la existencia de un ámbito de relaciones que permitan el desenvolvimiento libre del capital y del trabajo, la construcción de un mercado nacional y la organización de sociedades anónimas.

¿Cuál es el papel del Estado en la organización del nuevo modo de producción? El primero es precisamente el de la definición del ámbito de relaciones, radicalmente distinto al que imperaba en el Antiguo Régimen; una definición que pasa por la eliminación de obstáculos tales como las aduanas interiores, las tasas, la ausencia de libertad para la contratación, la fabricación y el comercio y la diversidad de legislación mercantil. Una definición que consite en el establecimiento de un nuevo marco en el que la iniciativa privada pueda iniciar el camino de la modernización económica. Hemos considerado este aspecto en capítulos anteriores pasando en éste, al análisis de la legislación sobre la sociedad

anónima y sobre el mercado de capitales.

Pero el estado, no se limitó a esta función de definición del mercado libre en su más alta extensión. Y ello, ni siquiera en Inglaterra, que es donde, en un primer momento, se ajusta al modelo del Estado liberal (173). En la mayoría de los países —y para la época estudiada— se desarrolla un considerable grado de intervención estatal, que suele ser explicado por la existencia de un nivel variable de atraso frente al modelo inglés (174) y a que, por tanto, la industrialización adquiere carácter de objetivo de política económica. Tal sucede en España, en el período considerado.

En este capítulo nos limitamos a considerar la actuación del estado en un punto concreto: la regulación de las sociedades anónimas y el mercado de capitales. Una intervención que no se limitó a configurar un marco de laissez-faire sino que abarcó la protección y la promoción de ciertos sectores e, incluso, la inversión directa. Una actuación que no se establecía al margen de influencias. Realizada por el gobierno y el parlamento, refleja los intereses de determinadas clases y grupos sociales, lo que no quiere decir que represente la exacta distribución del poder efectivo de la sociedad. En

(173) Una discusión del alcance del laissez-faire en Gran Bretaña, en R.L. Grouch, "Laissez-faire in nineteenth-century Britain", The Manchester School of Economic and Studies, XXXV, núm. 3, septiembre 1.967. Un planteamiento que considera el conjunto de los países europeos —aunque las referencias a España son prácticamente inexistentes— en Barry Supple, "El Estado y la Revolución Industrial, 1.700-1.914", en Carlo M. Cipolla, ed., Historia económica de Europa (3), La Revolución industrial, Barcelona. 1.979, pp. 312-370.

(174) Alexander Gerschenkron, Atraso económico e industrialización, Barcelona, 1.973.

cualquier caso, la legislación emana, desde 1.834 en España, de instituciones representativas, elegidas según un sistema censitario durante la mayor parte del período, y que no es del caso analizar aquí.

El interés del Estado en la promoción económica no es una idea nueva, pero en el siglo XIX se produjo de una forma específica que, sobre el punto aquí tratado permite establecer tres etapas:

1) 1.829-1.848: Es la etapa presidida por el Código de Comercio, que permite la creación de sociedades anónimas por simple inscripción. En 1.829 el Banco de San Fernando sustituyó al Banco de San Carlos. En 1.831 se creó la Bolsa. En la década de los treinta se culminó la eliminación de las trabas que el Antiguo Régimen imponía al libre desenvolvimiento de las relaciones económicas. Es la etapa en la que se configuró el mercado libre.

Entre estas fechas se crearon pocas sociedades anónimas y, entre ellas, las industriales forman un grupo muy reducido. La legislación liberal no surtió el efecto deseado en un país de economía atrasada que, quizá, necesitara de un mayor apoyo institucional para emprender el camino de la industrialización. Hasta 1.840 no se resolvió de forma definitiva la lucha entre los partidarios del Antiguo Régimen y del liberalismo. Era notable la carencia de capitales y la existencia de un cierto ambiente de desconfianza hacia las sociedades anónimas. No existía una red bancaria adecuada y la articulación del mercado interior no era sino una norma legal. La in

dustrialización, en sus inicios, se realizó en torno a la pequeña empresa y a la sociedad comanditaria que utilizaba la vía de la autofinanciación.

A partir de 1.841 comenzó un movimiento de creación de sociedades anónimas, cuyas dimensiones excedían las posibilidades reales del momento, tanto por su número como por el capital nominal que se pretendía conseguir. Se produjo un auge especulativo cuyo resultado fue la quiebra de buena parte de las compañías en torno a 1.845-47, años de crisis internacional.

La consecuencia, en lo que aquí interesa, fue un nuevo incremento de la desconfianza hacia este tipo de sociedad y la implantación por parte de los moderados de una ley de sociedades por acciones que incrementaba el control gubernamental sobre las mismas.

2) 1.848-1.868: En esta etapa rige la ley moderada sobre sociedades por acciones, que se presenta como el medio para superar la crisis e impedir otra similar. Con razón se ha criticado esta ley, tanto en su momento como en la actualidad, por cuanto representa un retroceso sobre la etapa anterior y una dificultad adicional al ya problemático proceso de centralización del capital. De ahí que se pueda afirmar, con Tortella, "que la legislación restrictiva del principio de la responsabilidad limitada fue un poderoso freno a la industrialización en España" (175).

(175) Gabriel Tortella Casares, "El principio de responsabilidad limitada y el de

No se debe perder de vista, sin embargo, la existencia de otros factores explicativos del atraso y que, en esta parcela, los moderados no hicieron sino asimilarse a la legislación de otros países europeos, en los que el ritmo de desarrollo fue muy distinto. Si bien aprovecharon la crítica coyuntura de 1.847, creo que la voluntad de modificación legislativa es anterior a la crisis. En España, la liberalización plena del principio de la responsabilidad limitada quedó interrumpida durante veinte años. En Inglaterra, se efectuó entre 1.856 y 1.862. En Francia, entre 1.863-67 (176). Hasta 1.870, para constituir una sociedad anónima en Prusia, hacía falta una autorización gubernamental. El diferente resultado obtenido por un mismo tipo de legislación es obvio y, para este último territorio se ha podido considerar que "tal vez la cooperación de los gobiernos en la promulgación de estas concesiones debe considerarse como un tipo de garantía de fiabilidad que aseguraba a esta nueva clase de asociación una difusión más rápida que la que hubiera tenido sin mediar la participación pública" (177).

desarrollo industrial de España: 1.829-1.869", Moneda y Crédito, marzo de 1.968, núm. 104, p. 83.

(176) Claude Fohlen. "La revolución industrial en Francia, 1.700-1.914", en Carlo M. Cipolla. ed., Historia económica de Europa (4). El nacimiento de las sociedades industriales, 1, pp. 32-33. Un detallado análisis sobre la evolución de la figura, por parte del mismo autor, en "Sociétés anonymes et développement capitaliste sous la monarchie censitaire", Histoire des Entreprises, noviembre 1.960, núm. 6, pp. 65-77 y en "Sociétés anonymes et développement capitaliste sous le Second Empire", Histoire des Entreprises, noviembre, 1.961, núm. 8, pp. 65-79. Rondó Cameron, Francia y el desarrollo económico de Europa, 1.800-1.914, Madrid, 1.971, pp. 47-50.

(177) Knut Borchardt, "La revolución industrial en Alemania. 1.700-1.914", en Carlo M. Cipolla, ed., Historia..., v. 4 (1), p. 105.

De mayores consecuencias en los primeros años de la industrialización parece el hecho de que la legislación moderada sobre sociedades anónimas se extendiera a la comanditaria por acciones que quedó sometida a los mismos trámites para su autorización (Real Decreto). De esta forma quedó afectada esta pequeña sociedad, de la que observamos sus inicios en la España de finales del siglo XVIII, que fue en otros países un poderoso instrumento en las primeras fases de la industrialización y que cumplieron "una función vital al captar el capital que necesitaban la industria y el comercio durante el período de transición precedente a la libertad de asociación" (178). Así se vedó la posibilidad legal de incluir la cláusula de limitación de responsabilidad en las comanditarias, como era práctica en España desde el último tercio del siglo XVIII y como se realizaba en Gran Bretaña, para evitar el lento proceso de la tramitación parlamentaria vigente para las anónimas hasta 1.856 (179). Asimismo, el caso francés refleja cómo a finales de la década de los cuarenta el número de comanditarias por acciones era casi de veinte veces mayor que el de las anónimas (180).

La ley sobre sociedades por acciones de 1.848 no fue derogada durante el Bienio progresista. En este período, sin embargo, sufrió matizaciones importantes, al liberalizarse la

(178) R. Cameron, Francia..., p. 49.

(179) Phillis Deane, "La revolución industrial en Gran Bretaña", en Carlo M. Cipolla, ed., Historia económica... 4(1), p. 211.

(180) Claude Fohlen, "La revolución...", p. 33.

creación de sociedades de obras públicas, de crédito y de bancos de emisión (frente a la ley de 1.849). No se plantearon la liberalización plena del principio de responsabilidad limitada, norma que, en esos momentos, no estaba comenzando a implantarse sino en Inglaterra. Se optó por un programa de reforma parcial que favorecía a los sectores mencionados, a los que se adjudicaba un papel esencial como promotores del desarrollo económico, amparados por un Estado "tutelar" que dirigía el proceso. El camino quedaba perfectamente expresado por un demócrata, Orense:

"Las precauciones que se toman en esta ley son prudentes y propias de la tutela que se quiere ejercer, alta tutela que va desapareciendo poco a poco en los pueblos libres (...) así es que el gobierno puede considerarse como un tutor, pero de los países libres va desapareciendo lo más posible esa tutoría" (181).

Con la legislación progresista (que no fue derogada por los moderados) se abrió la puerta al capital extranjero y se asistió, entre 1.856 y 1.868 a lo que ha sido calificado como el más importante esfuerzo de movilización del capital disperso operado en el siglo XIX español (182). Un capital que, insisto, fue reconducido hacia el ferrocarril. Acerca de los beneficios de esta política existe una polémica que aún no se ha cerrado.

No voy a entrar aquí en ella, cuyas dos posiciones quedan

(181) D.S.C., 16 de enero de 1.856, p. 6.208.

(182) J. Nadal, El fracaso..., p. 36.

reflejadas en los siguientes textos:

"Los ferrocarriles se construyen a costa del sector industrial al que en principio debieron haber prestado ayuda".

"... la mayor responsabilidad por la manera en que se construyó el ferrocarril y en que se distorsionó la distribución de los recursos recae sobre el gobierno. Fueron los gabinetes de la "década moderada" los que retrasaron la construcción ferroviaria, y fueron los gobiernos unionistas y moderados diez años más tarde los que, por acción y omisión, relegaron la industria a un papel secundario y favorecieron la excesiva inversión en ferrocarriles que tuvo lugar a partir de 1.856" (183).

"No creo que pueda inculparse al ferrocarril del fracaso de la revolución industrial en España. Por el contrario, el abultado ahorro social de nuestros ferrocarriles permite afirmar que cualquier retraso en la construcción habría producido daños graves en la economía. La inexistencia de un medio de transporte barato y rápido representaba en la España de mediados del siglo XIX un obstáculo que era necesario salvar para modernizar el país" (184).

No se puede medir la inversión del sector ferroviario que se hubiera dedicado a la industria, de no mediar una legislación protectora respecto a aquél. De ahí que el debate quede reducido, en la práctica, a los beneficios que reportó el ferrocarril al desarrollo económico español.

En el aspecto aquí considerado, se constata la debilidad

(183) G. Tortella, Los orígenes..., p. 16 y p. 38. El desarrollo de la tesis en pp. 177-183. (Subrayado mío).

(184) Antonio Gómez Mendoza, Ferrocarriles y cambio económico (1.855-1.913). Un enfoque de nueva Historia Económica, Madrid, 1.982. la cita corresponde a "Los efectos del ferrocarril sobre la economía española. 1.855-1.913", Papeles de Economía Española, 1.984, núm. 20, p. 168, del mismo autor. En pp. 161-165 incluye un resumen de esta polémica (subrayado mío).

de las demandas para la abolición de la ley de 1.848, que de
jara en pie de igualdad sociedades de ferrocarriles e indus-
 triales, que, en el Parlamento se redujeron a una referencia
 de pasada en una intervención de Figuerola durante el debate
 de la ley sobre sociedades de crédito (185). Volveremos so-
 bre ello. Baste aquí esta indicación y la intervención de
 Orense mencionada más arriba, para indicar el grado de acuer
do de todas las fuerzas políticas parlamentarias en 1.856, so
bre la conveniencia de primar la inversión ferroviaria. En
 ello no se separaron de la práctica seguida en la mayoría de
 los países.

3) 1.868-1.923: En 1.869 se proclamó la libertad de crea-
 ción de sociedades por acciones, principio que ya no fue re-
 vocado. Constituida la red de ferrocarriles en sus líneas
 esenciales y definida la estructura del sistema bancario,
 tras de la crisis de 1.866 (que afectó a ambos sectores) los
 revolucionarios de la Gloriosa proclamaron —con toda la am-
 pulosidad de su verbo— sus principios liberales, temporal-
 mente autolimitados durante el bienio 1.854-56. La situación
 económica y la relación de fuerzas existente tras la revolu-
 ción hizo que matizaran un tanto su profesión de fe en lo re
ferente, precisamente, a ferrocarriles y demás obras públi-
 cas. Cabe destacar, asimismo, que cuando se discutió el Códi
go de Comercio se mantuvieron los principios del 69 sobre es
te punto, que se completó con ciertas precisiones acerca de las "es

(185) D.S.C.C., 18 de enero de 1.856, p. 6.261.

peciales anónimas" (bancos, sociedades de crédito, de obras públicas y de ferrocarriles).

A nivel internacional, se había entrado en una etapa de mayor intervencionismo, que España conoció con cierto retraso. Las consecuencias de la revolución industrial motivaron la ampliación del ámbito de la actuación económica del Estado. Retrocedían los principios del laissez-faire mientras se incrementaban la legislación y las reformas sociales para controlar los problemas del crecimiento. La situación, en España como en otros países era:

"...salvar la red de ferrocarriles, prestar apoyo a los sectores débiles de la economía y superar las crecientes tensiones sociales y la problemática derivada del desarrollo urbano e industrial" (186).

Este capítulo tiene por objeto presentar el debate sobre sociedades anónimas y el mercado de capitales y la legislación resultante, para caracterizar con detenimiento las etapas que aquí han sido presentadas. Analizaremos las posiciones en juego (moderados, progresistas, demócratas), lo que servirá para completar y matizar la imagen que poseemos a través de las disposiciones promulgadas. Este análisis será completado en un último capítulo mediante la utilización de un elemento real de contrastación: la propia constitución de las sociedades anónimas.

(186) Barry Supple, "El Estado...", p. 350.

3.2.- La constitución de las sociedades.

3.2.1.- El régimen del Código de Comercio: enero de 1.830 a febrero de 1.847.

Las compañías mercantiles estuvieron reguladas en este período por las disposiciones del Código de Comercio, que entró en vigor el primer día del año 1.830. En él se reconocía la existencia de los tres tipos clásicos de compañía, cuya clasificación se hacía según la responsabilidad de los socios: colectivas, comanditarias y anónimas (a. 265).

Frente a la etapa anterior, se reconocía la legalidad de la anónima no privilegiada y su libre constitución, emancipando a este tipo de compañía del régimen de concesión real. El artículo 293 determinaba que toda nueva anónima debía someter sus escrituras y reglamentos a la aprobación del Tribunal de Comercio de su territorio. De hecho, los Tribunales no realizaron ningún control y se limitaron a registrar los documentos que se les presentaban.

El artículo 286 enumera los puntos que toda compañía debía incluir de forma obligatoria en su escritura social. Se resumen en: el nombre de los socios, de la compañía y de los administradores, el capital, la duración y el objeto de la asociación. El tratamiento de extremos tales como la administración, el uso de la firma social o las aportaciones de capital, reflejan que el legislador estaba pensando fundamen-

talmente en las colectivas.

El Código mantenía la figura de la Compañía con privilegios, cuya autorización recaía en en la Corona (a. 294).

El proyecto de la Comisión Real de 1.828 reflejaba una opinión distinta. Sólo reconocía un tipo de compañía regular, la colectiva (aa. 38 a 53). Aceptaba, que, junto a ella "hay además dos sociedades que son irregulares, a saber: la comanditaria y la anónima" (a. 54). Junto a estas tres clases:

"No son, ni se podrán entender como compañías de comercio las que se formen con el fin de introducir, extender o mejorar cualquiera género de industria ni tampoco las empresas de obras de utilidad pública" (a. 51).

Estas últimas estarán sujetas a régimen privilegiado y, para su constitución, a Real autorización (a. 68) mientras que la anónima "no puede establecerse sino por instrumento público, previo conocimiento del Tribunal Consular del territorio" (a. 63). Es decir, para esa sociedad anómala e irregular, basta la simple inscripción. Esta contradicción formal en el articulado, sin duda se explica por el triunfo del criterio de Sáinz de Andino frente al del ponente López Pelegrín reticente hacia la figura y partidario de un régimen de autorización, como estaba previsto en el Código francés según el cual, "la société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du gouvernement, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue" (a. 37).

A pesar del triunfo de la posición de Sainz de Andino, la concepción de que la sociedad anónima es "anómala" o "irregu

lar pervivió en el ánimo del grupo gobernante hasta el Bienio progresista siendo defendido por el propio Sáinz de Andino en 1.847. El prejuicio social respecto a esta forma asociativa, expresado en estos años de forma más o menos larvada, cristalizó en las Cortes en enero de 1.846. En esta fecha, el primer ministerio Narváez presentó en el Senado un proyecto de ley de sociedades anónimas firmado por Armero, como ministro de Marina. En este texto de cinco artículos, que fue presentado sin preámbulo, se proponía que una sociedad anónima no pudiera constituirse "sino en virtud de un Real Decreto que autorice su formación" (a. 1). Previamente, la Reina debía considerar la conveniencia de la aprobación de estatutos y reglamentos, oído el informe del Consejo Real (a. 2). Se proponía que las compañías en funcionamiento sometieran a la Corona sus documentos fundacionales, para ajustarse a la nueva norma (187).

Este proyecto pretendía introducir una reforma en el Código de Comercio que lo asimilara al sistema francés. La propuesta —incluida en el programa moderado— se presentó aprovechando una ocasión propicia, la crisis bursátil de 1.845. La especulación y las quiebras creaban un clima de rechazo hacia la sociedad anónima que favoreció la formulación de un proyecto que significaba un retroceso sobre la norma tradicional, implantada bajo el reinado de Fernando VII.

El proyecto de Armero no inició su tramitación ya que,

(187) El proyecto en D.S.S., apéndice 20 al núm. 14, de 26 de enero de 1.846.

apenas quince días después de su presentación, se produjo un cambio de gabinete. El nuevo, presidido por Miraflores y con Topete en Marina, retiró el texto anterior con objeto de reformarlo (188). La corta duración de su mandato impidió se presentara un texto alternativo. Ni el segundo ministerio Narváez —que apenas duró quince días— ni el de Istúriz, con Armero de nuevo en Marina, volvieron a llevar el tema a las Cámaras.

No era, sin embargo, un asunto olvidado. La crisis económica se agudizaba y el control gubernamental de la sociedad anónima era parte de un programa de saneamiento económico que se relanzó en febrero de 1.847.

En esta etapa de gran libertad para la formación de sociedades anónimas fueron escasas las creadas y muy pocas las dedicadas a la industria (v. cap. 4). La legislación liberal no se tradujo en inmediato desarrollo económico. Aquélla, para ser fructífera, debía estar acompañada de unas condiciones objetivas propicias, entre las que destacan la estabilidad y seguridad socio-políticas, que en España no se consiguieron hasta 1.840. El análisis de las sociedades constituidas desde esta fecha, realizado en un próximo capítulo, nos permite detectar el carácter de las mismas y el grado de aceptación de esta figura en la industria.

(188) D.S.S., 21 de febrero de 1.846.

3.2.2.- La legislación general moderada y las leyes especiales progresistas: 1.847-1.868.

La Real Orden de 9 de febrero de 1.847 (firmada por el ministro de Fomento Roca de Togores) fue una muy temprana respuesta a la crisis económica y, sobre todo, el remedio que los moderados estimaron adecuado para evitar la especulación bursátil de títulos pertenecientes a sociedades fraudulentas. En efecto, con cierta exageración, esta Real Orden se refiere a "la creación de las compañías anónimas con distintos nombres y aplicaciones [que] se multiplican en nuestro suelo" (189). Así se justifica la intervención estatal en el mercado, pues "el espíritu de asociación y de empresa" es "un germen de prosperidad pública" sólo cuando es protegido por las leyes; pero "puede producir muy graves daños si [es] abandonado a sí mismo". El Estado, pues, se convierte en garante de las sociedades para evitar el descrédito de la figura. Como tendremos ocasión de precisar, no era un argumento disparatado dada la naturaleza de las asociaciones creadas y dado el momento económico.

Con estos argumentos, el gobierno ordenó a los Tribunales de Comercio que frenaran la autorización de nuevas sociedades anónimas hasta que se promulgara una ley. El proyecto sobre la misma llegó pronto a un Congreso que el sistema político imperante había configurado con una práctica ausen-

(189) C.L.E., t. 40, pp. 194-195.

cia de la oposición en sus bancos. Su presentación corrió a cargo del mencionado ministro, Roca de Togores, y tuvo lugar el 27 de febrero de 1.847 (190). Transcurrirían 11 meses hasta que se convirtiera en ley.

Este proyecto elogiaba las "compañías anónimas" y sus posibilidades; pero concluía que, precisamente por ser éstas tan grandes, debían ser controladas por el ejecutivo y el legislativo y creadas únicamente para objetos de "utilidad general" (191).

El 15 de abril, un día antes de que el Dictamen de la Comisión fuera presentado, se promulgó un Real Decreto que regulaba interinamente el sector (192). Esta intromisión del ejecutivo en un tema que estaba siendo considerado en el legislativo no fue la primera ni la última. Por la misma época, la ley de cereales había sido igualmente mediatizada por el gobierno. La Comisión expresó una tímida queja por esta intervención en sus atribuciones, que pudo ser ignorada por el gobierno debido a la composición de la Cámara y al peculiar sistema de poder establecido (193). De esta forma, el Real Decreto de 15 de abril sustituyó al Código de Comercio en la regulación de las compañías por acciones entre esta fecha y

(190) D.S.C., 27 de febrero de 1.847, apéndice 2º al núm. 46.

(191) Ibidem.

(192) C.L.E., t. 40, pp. 370-372. La disposición fue promulgada por ^{el} gabinete presidido por Pacheco y firmada por Pastor Díaz como ministro de Comercio.

(193) La queja fue expresada en una de las intervenciones de Ríos Rosas a lo largo del debate. D.S.C., 21 de abril de 1.847, p. 1.469.

enero de 1.848.

El Real Decreto citado vino a sustituir a la norma que en febrero había prohibido la constitución de nuevas compañías y dispuso que éstas, en lo sucesivo, deberían ser autorizadas por Real Decreto (a. 1). El gobierno se erigía, así, en árbitro de la situación. Respetando formalmente el trámite parlamentario, interinamente se adjudicaba el papel de tutor del mercado, de evaluador de la licitud de los fines sociales y de protector del pequeño comercio frente al presumible monopolio que pudiera ejercer la gran sociedad anónima. Efectivamente, sólo se autorizarían aquellas compañías que tuvieran como objeto la realización de obras de utilidad pública, el fomento de la agricultura, comercio o industria y aquellas otras que "a juicio del gobierno" tuvieran un objeto claramente determinado (a. 7) y que fuera de conveniencia general o común, siempre que no tendieran a monopolizar artículos de primera necesidad (a. 2).

La obsesión por la determinación del objeto social tiene su origen en la convicción de que la crisis económica fue causada por la aparición de sociedades especulativas, cuyo objeto era imaginario y que, por tanto, no se asentaban en una base real. Pastor Díaz, firmante de este Real Decreto, en una de sus intervenciones en el debate del proyecto de ley como ministro de Comercio, habló de 7.000 millones de reales de capital nominal en las sociedades anónimas madrileñas, "cifra que basta por sí sola para escandalizar a la Europa y al mundo" para presentar a la nación española como una nación de

jugadores, como una nación inmoral" (194). Es indudable que en esta afirmación había una base real. Las sociedades anónimas crecieron a una velocidad asombrosa entre los años 1.841 y 1.846 por el simple hecho de que antes apenas existía alguna. Es cierto, también, el carácter especulativo de buena parte de ellas. En tercer lugar, cabe destacar que mientras en 1.847 existían en España 85 sociedades anónimas, en Francia había 14. Por último, que España era el único país de la órbita europea que disponía de una legislación tan liberal. Era muy fácil, por tanto, achacar la culpa de la crisis económica a esta situación legal. Lo que no consideraron los legisladores era que en Francia —por seguir utilizando el mismo ejemplo— por entonces existían 239 comanditarias por acciones (195). Los legisladores españoles radicalizaron su postura y sujetaron a la misma norma a todas las sociedades cuyo capital, en todo o en parte se dividiera en acciones. Tampoco consideró el gobierno el hecho de que, con otro tipo de legislación, otros países europeos se vieron también inmersos en una crisis económica. Los moderados se apartaron del antiguo modelo de estado liberal, simple árbitro entre las fuerzas del mercado para pasar a intervenir, según el esquema de lo que, en estos mismos años, se denominaría "estado tutelar"

Este proyecto, en resumen, disponía que la autorización de las sociedades por acciones se debía realizar por Real

(194) D.S.C., 21 de abril de 1.847, p. 1.472.

(195) Claude Fohlen, "La revolución...", p. 33. Para España, v. cap. 4 de esta tesis.

Decreto, en cuya elaboración tendría un carácter consultivo el Consejo Real (a. 5) y pretendía que las sociedades existentes se ajustaran a la nueva legislación en el plazo de un mes (a. 12). El artículo 13 anunciaba que la minería, la fundición de minerales y los bancos de emisión se regularían por leyes especiales.

El Dictamen presentado en el Congreso mostraba su acuerdo con el proyecto, al aludir a la "situación especial" que hacía necesaria una ley. En sintonía con el gobierno se estimaba que la nueva norma debía combinar "aquella severa y eficaz restricción que tanto se necesita para evitar la reproducción del mal, con el desembarazo y soltura que ha de menester el desarrollo de uno de los primeros elementos de prosperidad de las naciones modernas". Este último reconocimiento no le impedía considerar que la sociedad anónima era "una excepción del derecho común" pues "su responsabilidad limitada le da por sí sola el carácter de una especie de privilegio" (196). Son afirmaciones que muestran la mencionada pervivencia de una concepción arcaica de la sociedad anónima y que pretenden justificar que el gobierno, e inevitablemente en una época constitucional el parlamento, se sigan reservando la concesión de personalidad jurídica sólo a aquellas compañías que tuvieran un objeto de "utilidad pública" que fuera imposible de abordar con otro tipo de asociación.

(196) D.S.C., 16 de abril de 1.847, apéndice 5º al núm. 76. La Comisión firmante estaba formada por Ríos Rosas como presidente, Rodríguez Rivas como secretario, García Carrasco, Beltrán de Lis, Miota y Marco.

El dictamen de la Comisión se mostraba partidario de llevar con todo rigor la tramitación para la constitución de las sociedades pero, una vez cumplida ésta, no entorpecer "contrabas innecesarias la libre acción de las compañías" (197). Sin embargo, la vida de éstas fue también fiscalizada, pues el reglamento para la ejecución de esta ley introdujo la inspección de sociedades y el control cotidiano por parte del jefe político. (v. cap. 3, punto 3.5).

Por rigor entendió este grupo de hombres la participación de las Cortes en la autorización de ciertas sociedades, como eran los Bancos, las de Obras Públicas y cualquier empresa que solicitara un privilegio (aa. 1 y 2). Suponía, pues, la Comisión, que no se podían llevar adelante las sociedades bancarias o de obras públicas sin privilegios que sólo podía conceder el legislativo. Justificaron esta reforma en "el ejemplo de otras naciones" (Inglaterra) y en la necesidad de fiscalizar a la Administración en algunas materias delicadas para evitar "ciertos extravíos y abusos... en el actual estado de nuestras prácticas administrativas" (198). De este modo, la autorización legislativa de cierto tipo de sociedades es introducida, por la Comisión, como un método de moralización administrativa y en evitación de la posible corrupción gubernamental que ya era denunciada en el caso de los ferrocarriles.

(197) Ibidem, p. 1.392.

(198) Ibidem.

El dictamen se presentó en el Congreso el 16 de abril de 1.847. Se debatió los días 18, 19 y 21 del mismo mes. El Senado se ocupó del tema en la siguiente legislatura, ocho meses más tarde (22 y 24 de diciembre). No hubo una gran oposición al proyecto en su conjunto, que se convirtió en la ley de 28 de enero de 1.848, completada por el reglamento de 17 de febrero.

El temor hacia la sociedad anónima quedó reflejado en el único discurso pronunciado contra la totalidad en el Congreso. El orador, Gonzalo Morón, solicitó la explícita prohibición de las que se dedicaran a las operaciones ordinarias del comercio de compra y venta de los artículos de primera necesidad, a fin de evitar el hundimiento del pequeño comerciante (199). El ministro de Gracia y Justicia —Vaamonde— en el Congreso y el de instrucción pública —Bravo Murillo— en el Senado, intentaron tranquilizar el ánimo de los que expresaban la inquietud mencionada afirmando que no sería tramitada ninguna solicitud "en perjuicio de las condiciones naturales del comercio y contra estas condiciones sería una sociedad anónima que se pusiera a traficar en las cosas que trafica todo el mundo", o que desnivelara los precios "de manera violenta y artificial". En definitiva, se afirmó que el gobierno no perjudicaría a la "clase media" entregando el comercio "a manos de personas arrojadas" (200).

(199) D.S.C., 18 de abril de 1.847, pp. 1.419-1.421. En el mismo sentido, D.S.S., 22 de diciembre, p. 265.

(200) D.S.C., 18 de abril de 1.847, pp. 1.422-1.423. D.S.S., 22 de diciembre de 1.847, p. 265.

No podemos dejar de mencionar cómo Sáinz de Andino había variado su opinión desde 1.829; cómo sus discursos en el Senado siendo presidente de la Comisión que entendía en el tema, estaban impregnados de esta concepción que venimos reseñando; en 1.847, el autor del Código de Comercio sostenía que las sociedades anónimas "constituyen un sistema que está fuera de la ley, que repugna a los principios estrictos de la justicia universal y primitiva, y que es un sistema de contratación privilegiada" (201).

En el Dictamen de la Comisión del Senado se insertó un párrafo que, a mi juicio, revela con especial claridad el es píritu de los legisladores moderados, su voluntad de reforzamiento del ejecutivo y la utilización de los reglamentos al efecto. Argumentan que no han variado el proyecto recibido del Congreso ya que las conversaciones con el gobierno —de nuevo ahora, diciembre de 1.847, presidido por Narváez y con Bravo Murillo como ministro de Fomento— les han convencido:

"de que en el reglamento que habrá de expedirse para la ejecución de la ley se dictarán las disposiciones que estén en las facultades constitucionales del poder ejecutivo para que la acción tutelar y la inspección que le compete ejercer para la creación y régimen de las compañías por acciones sea tan eficaz y directa como requiere un género de contratación que estando fuera de las condiciones ordinarias que se observan en las sociedades mercantiles, se debe considerar ligado íntimamente con el orden público del Estado" (202).

(201) D.S.S., 22 de diciembre de 1.847., p. 271.

(202) D.S.S., 18 de diciembre de 1.847, apéndice 20. Una primera comisión fue elegida el 28 de abril de 1.847 y estaba formada por el marqués de Vallgornera como presidente, Acebal y Arratia como secretario, Armendáriz, J.A. Pérez y el marqués de Falces. Termini

La discusión del articulado se centró en cinco puntos, que sistematizamos a continuación, a partir de las prolijas intervenciones de diputados y senadores:

1.- La inclusión de las sociedades comanditarias por acciones en la ley: Este dictamen —y la ley posterior— introducía en sus artículos 1º y 2º la exigencia de la misma tramitación (ley o Real Decreto) para la constitución de sociedades anónimas y comanditarias por acciones. A ésto se opondría una voz autorizada del progresismo, Ordax Avecilla. Su intervención, a la vez que supone una oda a la comanditaria fue una feroz crítica a la anónima, en la tónica de la concepción dominante en estos momentos y que estudiamos más arriba. Quizá fuera un mero recurso dialéctico para conseguir una modificación de la ley que permitiera un tipo de sociedades por acciones, que era precisamente muy adecuado para los primeros momentos de la industrialización; como fuera, la alabanza a las comanditarias por acciones estuvo combinada con la condena a las anónimas:

"El privilegio es inherente a las sociedades anónimas; es de su naturaleza y organización íntima; no se puede comprender la sociedad anónima sin la idea de privilegio [...] Las sociedades comanditarias son del resorte común del comercio, y confundirlas con las anónimas, que son del resorte del privilegio, equivale a suprimirlas, suprimiendo con ellas un agente poderoso del comercio y ahogando en su consecuencia una cosa legítima y el desarrollo de un sentimiento natu-

nó la legislatura sin que presentaran su dictamen. En la siguiente (3 de diciembre), fue elegida otra que tenía como presidente a Sáinz de Andino, como secretario al mismo que la anterior y cuyos otros tres miembros eran el Conde de Santa Olalla, José María Pérez y J.A. Pérez.

ral" (203).

La respuesta de la Comisión, que estuvo a cargo de Miota, se basó en el argumento de que si se permitía la libre constitución de las comanditarias por acciones se estaría ofreciendo una solución legal para constituir anónimas encubiertas:

"¿No sería muy fácil que se eluda la ley formando compañías que lleven este nombre, con un capital de cien o doscientos millones, y eligiendo para gestor cualquier persona que no pueda responder de dos mil reales? (204).

Por ello —sigue Miota— no debe haber distinción entre las compañías por acciones: la responsabilidad limitada es, de hecho, una excepción al derecho común. De esta forma, con la ausencia de consideración por parte del Congreso de la objeción progresista, se cerró en España el camino legal a la comanditaria por acciones como vía de asociación capital; como fue mencionado anteriormente, ésta fue la vía utilizada por otros países, como Francia e Inglaterra, en la primera mitad del siglo XIX, mientras el derecho a la responsabilidad limitada estuvo sometido a la autorización de gobiernos y parlamentos.

2.- La autorización de sociedades por acciones debe ser competencia exclusiva de las Cortes: El proyecto del go-

(203) D.S.C., 18 de abril de 1.847, p. 1.429.

(204) Ibidem, p. 1.432.

bierno estimaba que todas las sociedades deberían ser autorizadas por Real Decreto. El dictamen de la Comisión —y así fue aprobado— introdujo la participación del poder legislativo para los Bancos, las sociedades de obras públicas y todas las que solicitaran algún privilegio. El progresista Ordax Avecilla fue el defensor de una enmienda que pretendía que la autorización de todas las sociedades por acciones fuera objeto de una ley. Expuso la idea de que en un asunto de tanta importancia debía entender un colectivo mayor que el gobierno, menos sujeto que éste a variación, a parcialidad, y menos susceptible de ceder a la "seducción de una o dos personas" (205). Este diputado, en este tema, se situaba del lado de la práctica inglesa o estadounidense mientras que en su contestación, la Comisión, en su defensa de las atribuciones del ejecutivo, seguiría el ejemplo de Francia, Holanda y Portugal.

La Comisión —y el gobierno— por boca de Miota se situó, en una posición teórica más abierta que el diputado progresista; afirmó que obligar a todas las compañías a realizar una larga tramitación en Cortes ahogaría o, al menos, coartaría el espíritu de asociación; los planes del gobierno, sin embargo, pasan por su fomento "vulgarizándolo" (206). La posición triunfante, pues, mantuvo una distinción entre las anónimas para la industria y el comercio, que debían seguir

(205) Ibidem, p. 1.430. Hay que tener en cuenta que ésto fue defendido antes de que se perdiera definitivamente la posibilidad de constitución libre para las comanditarias por acciones.

(206) Ibidem, p. 1.433

una tramitación sencilla, si bien estricta y controlada (Real Decreto) y las de mayor envergadura o privilegiadas (conceptos que aún se estiman coincidentes), que deben pasar por las Cortes dado que —en esta época constitucional— sólo el legislativo puede conceder las gracias que antes libremente y sin control podía dispensar el monarca. Así se pretendía poner fin al otorgamiento de diversos privilegios por parte de la Corona, cosa que permitía el artículo 294 del Código de Comercio.

Este hábil recurso dialéctico que situaba a la Comisión y al gobierno como firmes puntales del progreso económico y de la legalidad constitucional y como meros observadores de la iniciativa individual que sólo en casos extremos debería ser limitada, no tuvo el éxito esperado. El número de sociedades por acciones industriales y comerciales constituidas a partir de 1.848 fue, a todas luces, escaso (v. capítulo 4).

3.- La autorización de sociedades por acciones debe ser competencia exclusiva del Gobierno. Frente a la posición magnificadora del poder legislativo del diputado Ordax Avecilla, Martínez Almagro optó por la defensa del ejecutivo, haciendo suya la inicial posición del gobierno que en el proyecto de ley propuso que todas las sociedades por acciones fueran aprobadas por Real Decreto.

Este diputado fue el que realizó una crítica más dura al dictamen. En su discurso se pronunció positivamente por la regulación de la sociedad por acciones, dada la existencia

de abusos administrativos, desorden, anarquía, confusión por las disposiciones contradictorias de 9 de febrero y 15 de abril...; dada, asimismo, la falta de competencia de los Tribunales de Comercio para la autorización de las sociedades, cosa que han convertido "en una mera fórmula". A pesar de ello, consideraba inadecuada la proposición de la Comisión al exigir "una ley para lo que en mi entender debe ser objeto sólo de un decreto". Acusó por ello a la Comisión de "reac-cionaria", ya que la exigencia de una ley "ahoga el espíritu de asociación" y porque "sujeta a ciertas sociedades anóni-mas a formalidades y trámites innecesarios, y acaso poco con-venientes".

Martínez Almagro puso de relieve en su discurso una distinción muy adecuada —a nuestro juicio— y que esta ley y otras posteriores no tendrán en cuenta. Se trata de la distinción entre compañía y empresa. Una cosa —dijo— es la autorización de la sociedad, que es un trámite administrativo, para el que debe bastar un Real Decreto y otra es la concesión a sociedades constituidas para el establecimiento, con más o menos privilegios, de Bancos y la construcción de obras públicas. De ahí que considere necesaria la simplifica-ción de los trámites para la constitución de sociedades a la vez que urgente la elaboración de leyes particulares sobre Bancos, obras públicas y ferrocarriles, que regulen los aspectos particulares de la concesión (207).

Beltrán de Lis, progresista y hombre de negocios madrile

(207) D.S.C., 20 de abril de 1.847, pp. 1.434 a 1.437.

ño, fue el encargado de responder, como miembro de la Comisión, al anterior discurso. Y lo hizo con una intervención muy crítica hacia el ejecutivo:

"El principal objeto que la Comisión ha tenido al presentar este artículo ha sido buscar los medios indirectos para poner un dique a las facultades abusivas que han estado ejerciendo los gobiernos respecto a la formación de compañías y concesión de obras que llevan consigo un privilegio" (208).

Las intervenciones anteriores, así como la de Ordax Avella, provocaron una respuesta por parte del ministro de comercio, Pastor Díaz. Fue un discurso demagógico en el que, sin detenerse a rebatir las acusaciones de corrupción gubernamental, intentó poner de relieve la buena voluntad del gabinete al despojarse —como pide la Comisión— en los casos más importantes, de la prerrogativa de la autorización de las sociedades por acciones:

"El gobierno [...] tenía que moralizar, no ahogar el espíritu [de asociación] ; tenía que exigir garantías, no establecer fórmulas, no poner trabas. Por eso, señores, el proyecto que presentó el gobierno no hacía mención de la legislación, de la parte legislativa del Parlamento. El gobierno creyó que las sociedades anónimas necesitaban una sanción de autoridad y de confianza delante del país (...) es necesario un estímulo vivo para que despertemos de nuestra inercia" (209)

El debate acerca de estos dos últimos puntos planteó una

(208) Ibidem, p. 1.440.

(209) Ibidem, pp. 1.441 y 1.443. Subrayado mío.

nueva divergencia entre moderantismo y progresismo. Aquél pretendía el reforzamiento del ejecutivo, dejando en sus manos la autorización para la constitución de las sociedades por acciones. Este, deseaba despojar al gobierno moderado de las atribuciones que poseía para la concesión de privilegios, tanto por el artículo 294 del Código de Comercio como por la Real Orden de 31 de diciembre de 1.844, que regulaba la creación de compañías de ferrocarriles. En teoría, era más sencilla la tramitación de un Real Decreto que de una Ley. Aquél procedimiento, por tanto, debía ser el deseado por los sectores sociales más avanzados, siempre que las alternativas ofrecidas fueran sólo las mencionadas. ¿Por qué, pues, se produjo la inclusión del legislativo en la tramitación de las autorizaciones, por encima de los iniciales deseos de los moderados? La respuesta, tal y como se ha podido ver en las intervenciones citadas, estriba en que el progresismo desconfiaba de los gobiernos moderados y en su forma de asignar privilegios y no podía prever un cambio de situación a corto plazo. Aún con todas las limitaciones del sistema electoral, la oposición podía, al menos, dejar oír su voz en el Parlamento. El peso del moderantismo, sin embargo, quedó patente en la Ley de Bancos de 1.849 y en la actuación sobre el tema ferroviario.

4.- No se deben autorizar sociedades anónimas para objetos que puedan ser desempeñados individualmente o mediante una sociedad personalista: El artículo 4º (del proyecto, del Dictamen y de la ley) se refería a las compañías que debían

ser autorizadas por Real Decreto. Textualmente afirmaba: "... esta autorización sólo se concederá a las compañías cuyo objeto sea de utilidad pública. El gobierno denegará la autorización a las compañías que se dirijan a monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad".

La exigencia de un objeto de utilidad pública no fue motivo de crítica en este debate. Habrá que esperar hasta 1.868 para que desaparezca: "como si no fuera legítima la asociación para empresas de utilidad privada" (210). La segunda parte, a pesar de su claridad, originó reservas. Se temía que las sociedades anónimas, con grandes capitales, acabaran monopolizando el comercio y la industria tradicionales arruinando, al paso, a individuos y organizaciones menores. Es el mismo tipo de objeción que hemos visto planteado respecto a las privilegiadas del Antiguo Régimen.

La primera intervención en este sentido se produjo, como ya vimos, en el Congreso, en el debate a la totalidad y estuvo a cargo de Gonzalo Morón; en el Senado, Armendáriz realizó un discurso similar. A la hora del debate del articulado, tomó la palabra el diputado Illa, que sólo justificaba la existencia de sociedades anónimas para las industrias nuevas (como en el Antiguo Régimen) y no "para asuntos que perjudicasen, ya sea al comercio común u ordinario, ya sea a la industria, destruyendo a la medianía, que es causa eficiente y efectiva de la riqueza y poder de las Naciones" (211). En el

(210) D. de 28 de octubre de 1.868, C.L.E., t. 100, p. 518.

(211) D.S.C., 21 de abril de 1.847, p. 1.461.

mismo sentido, en el Senado, el Marqués de Fuentes de Duero (212).

Entre las respuestas que se dieron a esta objeción, resalta la tranquilizadora del ministro de Gracia y Justicia, Vaamonde, en el Congreso y la de Bravo Murillo (Instrucción Pública) en el Senado. Este, al argumento de Vaamonde —yaci-
tado— añadió cierta cuantificación. Existían —afirma— 74 sociedades anónimas en toda España, de las que 66 están en Madrid; en conjunto, tienen un nominal de 5.786 millones de reales. Sólo cuatro de ellas tienen por objeto la negociación de subsistencias, lo que podría justificar, en parte, el temor de los oponentes. Pero éstas son tres sociedades que no han llegado a constituirse y una que, habiéndolo hecho, no ha comenzado su negociación; se trata, respectivamente, de la Sociedad de Fomento Mutuo (coloniales, 45 millones de capital); la sociedad Mercurio (objetos de comer y beber, 50 millones); la Previsora (subsistencias y reemplazos militares, 140 millones); Sociedad de Fuego (carbón y combustibles, 45 millones) (213). No había que temer, por tanto, a que las sociedades anónimas acabaran con el pequeño comercio; y menos con una ley que impedía el monopolio.

Pero quizá la intervención más destacable sea aquélla en la que Sáinz de Andino contestó al Marqués de Fuente de Duero y en la que se observa, como ya mencionamos, cómo ha cam-

(212) D.S.S., 22 de diciembre de 1.847, p. 271.

(213) Ibidem, p. 265.

biado, al compás de los tiempos, su concepción de la sociedad anónima. Según el presidente de la Comisión del Senado, la anónima no es para objetos comunes de comercio, que ya es tán realizados "por otros particulares, o sociedades colectivas, o comanditarias, que son las vías regulares de la buena contratación", y más adelante, afirma "toda contratación que se dirija al interés individual, y que pueda hacerse por los medios comunes del comercio, no puede ser objeto de sociedad anónima, sino que ha de sujetarse a las reglas comunes de sus contratos" (214).

En otro discurso del mismo debate, Sáinz de Andino explicaba su posición: la sociedad anónima tiene un carácter privilegiado. Tal carácter sólo se le puede otorgar a cambio de un beneficio, que es la posibilidad de emprender grandes empresas de utilidad pública a las que se adscriben medianas fortunas. Su gran peligro es que se pueden convertir en foco de fraudes cuando la Compañía se compromete en más negocios de los que puede garantizar, lo que causa su quiebra y la de los pequeños inversores que han comprometido en ella su capital. Para ilustrar este peligro no acude a ejemplos españoles sino a la Francia e Inglaterra del siglo XVIII.

Tanto en Francia como en Inglaterra —prosigue— es el poder público el que autoriza estas asociaciones. La pregunta a la que intenta responder —para justificarse— a continuación es: ¿por qué en el Código de Comercio no se reservó

(214) Ibidem.

al poder real la autorización para su creación? Y da una cuá
druple respuesta:

1) Había que reanimar el espíritu mercantil e industrial que estaba muerto.

2) Las sociedades que adoptaban forma privilegiada eran las que realizaban el comercio con América; perdidas casi to
das las colonias, no cabía esperar un resurgimiento de la Compañía Privilegiada.

3) Había que reducir el poder de una monarquía que reflejaba "cierta intolerancia que tenía intimidados los ánimos".

4) El legislador no esperaba que los Tribunales de Comercio aprobaran las asociaciones anónimas sin más requisitos que los del derecho común. Insiste Sáinz de Andino en que "el mal no procede de la falta de leyes sino de la inobser
vancia de sus disposiciones" ya que el Código de Comercio establecía ciertas garantías sobre la emisión y transmisión de acciones (a. 281 y 283) así como existía la ley 11 tít. 7º de la Novísima Recopilación (!) que prohibía formar compañías para la compraventa de géneros de primera necesidad.

Así pues, el legislador de 1.829 exculpa su Código y a sí mismo, basado en la diferente circunstancia histórica así como en la laxitud con que actuaron los ejecutores de las le
yes (Tribunales de Comercio) (215).

Los argumentos que Sáinz de Andino expuso en el Senado no fueron respondidos. Cabe considerar, sin embargo, que el

(215) D.S.S., 22 de diciembre de 1.847, pp. 283 y 284.

espíritu mercantil e industrial todavía necesitaba, en 1.848, ser reanimado, Parece que, para ello, era más adecuado el régimen de libertad establecido en el Código que el control que ahora se proponía. Sobre la segunda razón expuesta, no se comprende cómo el mencionado jurista identifica la Privilegiada con la anónima, cosa que, precisamente, el Código dejó de hacer. Respecto al tercero, como consideró el progresismo, tampoco los gobiernos moderados ofrecían garantías de tolerancia general hacia las nuevas formas sociales. Por último, la gestión de los Tribunales de Comercio fue quizá poco escrupulosa debido, precisamente, a la ausencia de normas precisas sobre sociedades anónimas en el Código de 1.829. Basta ba pues, con el establecimiento de algunas reglas detalladas respecto a las escrituras sociales y sobre el capital y la negociación de acciones, que no necesariamente afectaban al modo de autorización de las compañías. Hay que insistir en que si bien la reforma en este último punto contaba con un fuerte argumento de autoridad en la práctica de otras naciones, éste también existía en 1.829.

Sobre este tema, por tanto, existía un acuerdo absoluto entre las Cámaras y el gobierno: la anónima es una sociedad anómala, privilegiada, y por ello sólo puede constituirse para objetos de utilidad pública (cuya calificación debe correr a cargo del gobierno) y nunca para objetos de exclusivo interés individual; para éstos bastan las asociaciones comunes, que son las colectivas y las comanditarias.

5.- La situación de las compañías ya constituidas: El artículo 12 del proyecto —18 de la ley— exigía a las compañías por acciones existentes la renovación de su solicitud según la nueva ley. Para ello se establecía un plazo de un mes, que fue ampliado por la Comisión a dos. Una corrección introducida en el Senado hizo que el artículo considerara la obligatoriedad de que se convocaran Juntas de Accionistas en todas las sociedades, dentro de los 50 días siguientes a la promulgación de la norma. Bravo Murillo asumió —en su nombre y el de sus sucesores— la responsabilidad de convocar asambleas en aquellas compañías en las que la dirección no lo hiciera (216). Como se observa más adelante (cap. 4) el proceso se llevó adelante con escrupulosidad, si bien con lentitud.

El artículo 19 del Dictamen consideraba que se autorizarían las compañías "que hubieren cumplido las condiciones con que fueron aprobadas por los Tribunales de Comercio". El Senado introdujo dos matices a esta afirmación: en primer lugar, quedó explicitado que no se aprobaría ninguna de las sociedades que se dirigieran a monopolizar artículos de primera necesidad (Armendáriz); en segundo, una corrección de estilo dejaba patente la libertad del gobierno para autorizar o no la continuación de las sociedades, aún cuando hubieran cumplido escrupulosamente las disposiciones de los estatutos aprobados por el Tribunal de Comercio (Marqués de Vallgorne-

(216) D.S.S., 24 de diciembre de 1.847, p. 296.

ra (217).

En el Congreso se desarrolló una pequeña discusión acerca de si esta ley afectaba a los Bancos ya constituidos y a sus cajas subalternas. Mientras el gobierno —Pastor Díaz— sostuvo que no, la Comisión —Pérez Rivas— afirmaba lo contrario (218). Quedó la disputa sin resolver, planteándose también respecto a las sociedades mineras que no tuvieran su capital dividido en acciones; sobre éstas había acuerdo: su carácter especial las eximía de las limitaciones de la ley (219). De hecho, el artículo 13 de la ley en discusión prometía una regulación especial, tanto para el sector minero como para el bancario. Así se hará.

En resumen, la reforma de la legislación de las sociedades por acciones fue discutida en el Congreso en abril de 1.847 y en diciembre en el Senado; así se continuó bajo gobiernos de Pacheco y Narváez lo que el primer gabinete de éste había iniciado en 1.846. Fue obra, pues, de los moderados, que aprovechando el estado de ánimo subsiguiente a la crisis económica se presentaron como gobiernos responsables y tutores de un sector que —decían— no debía ser reprimido sino animado y vigilado. Siguieron, así, el modelo de otros países sobre las anónimas pero —a pesar de la débil voz pro

(217) Ibidem, pp. 300-301. A pesar de la queja de Fuentes que consideraba que no se podía poner en duda la legalidad de las compañías existentes. Sólo el Tribunal que las aprobó —en buena lógica jurídica— podría hacerlo.

(218) D.S.C., 21 de abril de 1.847, p. 1.475.

(219) D.S.C., 21 de abril de 1.847, p. 1.480.

gresista— extendieron las restricciones a las comanditarias por acciones, haciendo compleja la organización de unas sociedades que en principio, podían ser ágiles y sencillas. Asimismo, los moderados en el poder aprovecharon la débil, parcial y poco compacta oposición que exigió tanto el protagonismo absoluto del ejecutivo como el del legislativo, para aparecer en una posición mediadora entre dichos extremos. Un gobierno que —afirmaba— potenciaría la asociación mercantil ordenada para las grandes empresas a la vez que protegería a la pequeña burguesía para que no se viera afectada en sus negocios por el gran capital.

La opción progresista fracasó en sus dos pretensiones: libertad para las comanditarias por acciones y exclusiva competencia del legislativo para autorizar las anónimas —modelo inglés—. Lo primero, consideramos, hubiera permitido un mejor desarrollo de la acumulación de capital en la industria en estos inicios del capitalismo en España; lo segundo estaba motivado por el rechazo a unos gobiernos moderados acusados de corrupción. Conscientes de su debilidad, los progresistas hablaron poco y suavemente —Mendizábal— y, sin embargo, criticaron acervamente la sociedad anónima —Ordax Avecilla—; quizá fue un simple acto de realismo político; sin embargo, creo que es más acertado pensar que respondía fielmente a su pensamiento reformista. No hay que olvidar —como veremos más adelante— que esta ley no fue derogada por los revolucionarios de 1.854 sino por los demócratas de 1.868. Hasta esta fecha, rigieron con carácter general estas dispo-

siciones de la ley de 17 de enero de 1.848:

"a. 1ª. No se podrá constituir ninguna compañía mercantil cuyo capital, en todo o en parte, se divide en acciones, sino en virtud de una ley o de un Real decreto.

a. 2ª. Será necesaria una ley para la formación de toda compañía que tenga por objeto:

1ª. El establecimiento de Bancos de emisión y cajas subalternas de éstos, o la construcción de carreteras generales, canales de navegación y caminos de hierro.

2ª. Cualquiera empresa que siendo de interés público, pida algún privilegio exclusivo.

En este párrafo no se comprenden las compañías que se propongan beneficiar algunos de los privilegios industriales de invención o introducción, que el gobierno puede conceder con arreglo a las disposiciones vigentes en esta materia.

a. 4ª. Para la formación de toda compañía que no se halle comprendida en el a. 2 de esta ley, será necesaria la autorización del gobierno, expedida en forma de Real decreto.

El gobierno denegará la autorización a las compañías que se dirijan a monopolizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad" (220).

El Reglamento que acompaña a la ley que acabamos de comentar (R.D. de 17 de febrero de 1.848), fue firmado por Bravo Murillo, como ministro de Fomento. En él se contienen las especificaciones necesarias para tramitar la constitución de una sociedad por acciones (221).

El artículo primero vino a llenar un vacío del Código de Comercio, que no se ocupaba específicamente de las escritu-

(220) C.L.E., t.43, pp. 51-54.

(221) C.L.E., t. 43, pp. 100-109.

ras de las sociedades por acciones y contiene una regulación muy precisa de las mismas. Los extremos que obligatoriamente debía contemplar tal documento eran los siguientes: nombre de los fundadores, domicilio social, objeto preciso, nombre de la compañía (que refleje su campo de actividad), duración, capital social, número de acciones nominativas en que está dividido, forma y plazos en que se realizarán los desembolsos de las mismas, composición y atribuciones de los órganos de dirección, facultades de la Junta General de Accionistas, modo de constitución del fondo de reserva que debe llegar a significar el 10% del capital social, frecuencia de presentación de los balances (que debía ser, al menos, anual), forma de relizar la distribución de los dividendos y modo de realizar la disolución.

Esta precisa escritura, el reglamento y las cartas de pedidos de acciones que debían importar, al menos, la mitad del capital social, tenían que ser presentados al Jefe Político de la provincia en la que se deseara establecer el domicilio social. Si el objeto de la compañía cubría más de una provincia, se debía enviar copias del expediente a los Jefes Polítics de todas las afectadas. Otra copia era enviada al Ministerio de Fomento (aa. 12 y 14).

El Jefe Político debía examinar cuidadosamente el expediente para informar acerca de la adecuación de la solicitud a lo prescrito en la ley (a. 13), para lo que debía pedir informes a diversos organismos e instituciones de la zona afectada, como la Diputación, el Tribunal de Comercio, la Socie-

dad Económica de Amigos del País y el Ayuntamiento (aa. 14 y 15).

Con todo ello, el Jefe Político debía remitir el expediente al Gobierno que, a su vez, lo trasladaba al Consejo Real "para que eleve consulta sobre la aprobación de la compañía y de sus estatutos y reglamentos" (a. 16). En caso de que el informe fuera favorable, este organismo dictaminaría la parte de capital que debería hacerse efectiva antes de ponerse en ejecución el Real Decreto de autorización (a. 21). En caso de que la compañía deba ser autorizada por ley, el Consejo Real acompañaría a su consulta el proyecto de ley que sería, finalmente, presentado a las Cortes (a. 19).

Por último, se estipulaba que el Tribunal de Comercio correspondiente tomara asiento en sus registros de los estatutos, reglamentos y Real Decreto de autorización (a. 26).

En síntesis, se observa que el proyecto de compañía debía estar muy elaborado y la mitad de su capital comprometido, antes de iniciar una compleja tramitación para su constitución. En dicho proceso participaban los Jefes Políticos el Consejo Real y el Gobierno así como, en su caso, las Cortes, amén de otras instancias a efecto consultivo (Ayuntamientos, Diputaciones...) o estadístico y de publicidad (T. de Comercio).

El artículo 44 del Real Decreto que comentamos afirmaba que serían declaradas disueltas aquellas sociedades por acciones que no solicitaran su continuación a los dos meses de publicada la ley. La Real Orden de 19 de junio de 1.848 prueba que ésto no se hizo. Con esta fecha, se ordenaba a los Je

fes Políticos que, valiéndose de los registros abiertos en sus oficinas, en los Tribunales de Comercio y en los juzgados de primera instancia "o por cualquier otro medio proceda V.S. a averiguar las sociedades por acciones que existan en la actualidad sin Real autorización o sin haberla solicitado dentro del término legal, declarándolas inmediatamente disueltas" (222). El proceso no se realizó con la deseada rapidez y aún en 1.853 se encuentran expedientes sin resolver (v. cap. 4).

Esta legislación permaneció vigente hasta la revolución de 1.868, con tres excepciones fundamentales, que afectaban a sectores básicos: el minero, el financiero y las obras públicas, sobre todo el ferrocarril. La legislación moderada se vió completada con la regulación especial de los dos primeros sectores en 1.848-49; pero fue durante el bienio progresista cuando se realizaron reformas radicales en los tres campos mencionados.

3.2.2.1.- Las regulaciones especiales.

a) Las sociedades especiales mineras.- El sector minero mereció una atención particular por parte de los legisladores desde el Antiguo Régimen. Esta actitud permaneció duran-

(222) C.L.E., t. 44, pp. 135-136.

te el siglo XIX, tanto bajo el régimen liberal (DD. de las Cortes de 26 de enero de 1.811 y de 25 de octubre de 1.820) como bajo el absolutismo (D. de 4 de julio de 1.825).

Las sociedades mineras eran generalmente calificadas de especiales, debido a la dificultad que tenían para constituirse con un capital determinado, al desconocer de antemano las reales dimensiones y posibilidades del yacimiento que se pretendía explotar. De ahí que, ante la demanda de las propias sociedades, a los cuatro meses de promulgada la ley de 1.848, se dictara una Real Orden que las declaraba excluidas de la misma. Se les permitiría constituirse por acciones y sin capital determinado (223). La regulación del sector se estableció en la ley de 11 de abril de 1.849 y reglamento de 31 de julio.

Hasta el Bienio progresista no se produjo un intento de regulación separada de las especiales mineras. Con relativa celeridad, el ministro de Fomento, Luján, presentó un proyecto de ley de minas y otro de sociedades mineras. No se promulgó sino aquél, en 11 de julio de 1.856 y ello con carácter de autorización al gobierno para la puesta en marcha del dictamen, que aún no había sido discutido. En él se establecía que "las sociedades mineras se sujetarán a las reglas, condiciones y requisitos que se establezcan en una ley especial que habrá de darse; y hasta entonces se regirán por las leyes y reglamentos vigentes en la materia" (224).

(223) R.O. de 8 de mayo de 1.848. C.L.E., t. 44, pp. 29-30.

(224) a. 113 del dictamen convertido en ley (D.S.C.C., apéndice 4º del núm. 304, correspondiente al 1º de febrero de 1.856). El proyecto había sido presentado el 2 de diciembre de 1.854 (D.S.C.C., apéndice 1º al núm. 25).

El proyecto de ley de sociedades mineras, sin embargo, no fue siquiera dictaminado en el período constituyente y se carecerá de la mencionada regulación hasta 1.859. Cinco años antes, Luján había destacado el hecho de que para la minería no resultaban adecuados los tres tipos clásicos de sociedades. Por un lado, la indefinición de su capital no permite que éste sea la única garantía frente a los acreedores, como en las anónimas; por otro, el riesgo de estas empresas es de demasiado elevado como para que los socios acepten una responsabilidad ilimitada como en las colectivas o comanditarias. El segundo gran problema presentado por Luján era que la ausencia de una reglamentación adecuada había provocado el fraude y la corrupción en el sector, cuya manifestación es la especulación de acciones de compañías inexistentes. Para solucionar ambos extremos, los progresistas propusieron "que sin coartación del interés individual, antes bien dispensándole una justa protección, determine la ley de una manera precisa la organización de aquellas sociedades" (225).

El proyecto establecía dos clases de sociedades, las de explotación y las de explotación y beneficio. Las primeras serían autorizadas por el gobernador de la provincia (a. 2) y adoptarían forzosamente la forma de sociedad de cuentas en participación (a. 3). Las segundas quedarían sujetas a la autorización real, tanto si adoptaban forma de especiales mineras como de anónimas (aa. 6 a 8). En este caso, deberían

(225) D.S.C.C., 9 de diciembre de 1.854, apéndice 2º al núm. 30.

ajustarse a la ley de 1.848 excepto en un punto: si las acciones estaban totalmente desembolsadas, podían ser al portador (a. 13). Se preveía que estas normas fueran aplicadas también a las metalúrgicas (a. 17).

El progresismo, por tanto, intentó dotar al sector de mayores facilidades para su organización aunque sin llegar a liberar a las sociedades anónimas mineras del trámite de su autorización gubernamental. La ley de 1.848, insistimos, no fue puesta en cuestión, sino reformada, para el caso de las anónimas mineras y metalúrgicas.

En mayo de 1.855, Esteban Collantes, de gran experiencia en el sector minero, propuso un texto alternativo al proyecto de ley de minas de Luján. Contenía en su articulado las disposiciones sobre sociedades mineras. Solicitaba que la constitución se redujera a la simple inscripción ante la inspección del distrito. En su proposición queda manifiesta su vinculación al sector y su deseo de promocionarlo, más que su ideología política. No consiguió imponer su opinión frente a los proyectos del gobierno (226).

La ley de sociedades mineras de 6 de julio de 1.859, vigente durante diez años, fue el único texto legal que otorgó un status especial a las compañías formadas para la investigación, explotación y beneficio de las minas, durante el periodo estudiado (227). El proyecto fue presentado por el Mar

(226) D.S.C.C., 4 de mayo de 1.885, apéndice 12 al núm. 145.

(227) C.L.E., t. 81, pp. 56-60.

qués de Corvera, ministro de Fomento en un gabinete presidido por O'Donnell (228). El preámbulo reprodujo la argumentación del texto presentado en el Bienio. En su articulado se disponía que las sociedades mineras podrían adoptar cualquiera de los tres tipos clásicos, en cuyo caso deberían ajustarse al Código de Comercio y a la ley de 1.848 (a. 1). Podrían también constituirse como sociedades especiales mineras (a. 2). Las características de estas últimas era la ausencia de determinación de la cuantía de su capital y su constitución por acciones que simbolizaban partes iguales en gastos, ganancias, créditos y pérdidas (a. 3). Esta última forma social debía ajustarse, para su constitución, a ciertas normas específicas, que consistían en que debería estar formalizada en escritura pública (a. 8) y aprobada por el gobernador de la provincia (a. 9). Si éste denegaba la autorización o no respondía a los cuarenta días de ser presentada la solicitud existía la posibilidad de apelar ante el Ministro de Fomento (a. 10).

Estos artículos —y en general todo el proyecto— no mereció un debate digno de ser reseñado. La breve discusión se redujo, fundamentalmente a la realización de algunas precisiones menores y demuestra el grado de aceptación de un proyecto largo tiempo esperado (229).

La ley fue promulgada el 1 de octubre de 1.859, el mismo

(228) D.S.S., 30 de diciembre de 1.858, apéndice 3º al núm. 14.

(229) El debate, en D.S.S., 26 de enero de 1.859, pp. 402-410 y D.S.C., 1 de junio de 1.859, pp. 2.544-2.553.

día que la de minas. En ella se simplificaban los trámites para la constitución de las sociedades mineras y se abría una vía para facilitar la asociación de capital en este sector. Las ventajas de la ley no alcanzaba a las metalúrgicas, aunque permitía que las especiales mineras beneficiaran su propio mineral (230).

Esta ley tuvo una vigencia de diez años, hasta que el régimen de 1.869 acabó con el privilegio en este sector, al declarar libre y lícito cualquier contrato de sociedad (231).

b.- Las compañías de ferrocarriles y obras públicas: El carácter de "necesidad o conveniencia general" (232) es lo que significa a la obra pública, al margen de su rentabilidad económica inmediata. De ahí que este sector sea considerado dentro de las atribuciones del Estado, incluso para los liberales más radicales, lo que lo convierte en un ámbito intervenido y protegido.

La Instrucción de 10 de octubre de 1.845 reconoció la imposibilidad material del Estado para realizar directamente todas las obras públicas, por lo que se vió obligado a acudir al sistema de empresa, por el que "la Administración contrata con particulares la ejecución de las obras..." (a. 5).

(230) Esta precisión fue recogida tras un pequeño debate en el Congreso (D.S.C., 1 de junio de 1.859, pp. 2.549-2.551).

(231) La Real Orden de 29 de julio de 1.871 (C.L.E., t. 107, pp. 208-209) aclaró que en éste —como en cualquier otro sector— se podía establecer libremente cualquier pacto social aunque la legislación privilegiada hubiese sido abolida.

(232) "Instrucción de 10 de octubre de 1.845 para promover y ejecutar las obras públicas" { a. 1) C.L.E., t. 35, p. 358.

(Los otros procedimientos establecidos para cubrir este campo eran la contrata y la administración). Esta necesidad —reconocida por el gobierno— de acudir a particulares para la realización de obras públicas imprescindibles, obliga a configurar lo que Artola ha caracterizado como "sistema híbrido", al margen del programa liberal; en él, el Estado acepta situar fuera del mercado sectores económicos clave en el desarrollo económico y premiar con privilegios una inversión capitalista que resulta imprescindible. Como contrapartida, el Estado exige un mayor control sobre esta inversión (233).

Según esta lógica, la Instrucción de 1.845 consideró un deber del Estado "animar a los especuladores que las tomen a su cargo" así como señalar a "los caminos y los canales (...) como un medio de promover a la vez los intereses de los pueblos y de los particulares". Estas frases nos muestran cómo desde esta fecha se renueva por parte del Estado la llamada a los capitalistas para que realicen inversiones en este sector y cómo sus preferencias, como promotor, están orientadas hacia las vías de comunicación, lo que no cambiará durante buena parte de la época estudiada. Los canales pronto perderán su consideración como tales vectores y las carreteras, sin un vehículo adecuado, serán —parcial y temporalmente— abandonadas ante ese medio nuevo, brillante y portador de todas las esperanzas, que es el ferrocarril.

(233) Miguel Artola, "La acción del Estado", en M. Artola y otros, Los ferrocarriles en España, 1.844-1.943, Madrid, 1.978, I, pp. 341-342. Sobre el problema jurídico de la concesión, José Bermejo Vera, Régimen jurídico del ferrocarril en España (1.844-1.974). Madrid, 1.975, pp. 28-44.

De este sector vamos a tratar en las páginas siguientes, ya que provocó un primer debate sobre el tema de las compañías y su organización, cosa que no sucedió en el sector carretil. "La compañía ferroviaria quedará configurada como el primer caso de empresa de servicios públicos que combina la inversión y gestión privadas con el control estatal" (234).

El ferrocarril fue considerado como el motor del desarrollo económico. Ha sido destacado que fue esta concepción la que llevó a los progresistas a promulgar una legislación especial para estas compañías. El objetivo era canalizar hacia ellos una inversión que centralizaban, a su vez, unas sociedades de crédito que conocieron también en este período una legislación que facilitaba su constitución. Fue la opción del "desarrollo vía exceso de capacidad", es decir, mediante el estímulo de la inversión en capital social fijo, que se estimaba actuaría como motor para el desarrollo de las actividades directamente productivas. Una segunda posibilidad —desechada— es la vía "por escasez de capacidad", que consiste en el fomento de las inversiones industriales. En este caso, el desarrollo industrial sería el que crearía una demanda suficiente como para hacer rentable la inversión en infraestructura (235).

El análisis de la legislación promulgada, de los proyectos de ley y de los debates parlamentarios lleva a confirmar

(234) M. Artola y otros, Los ferrocarriles..., II, p. 519.

(235) Gabriel Tortella, Los orígenes..., pp. 11-17.

estas afirmaciones, a la vez que muestra que esta opción ya estaba presente en los círculos gobernantes anteriores al bie nio y que era apoyada por todas las fuerzas que participaban en el sistema político. Desde 1.844 existía la conciencia de la conveniencia de canalizar la inversión hacia el ferrocarril. Desde entonces, las propuestas de política económica te nían tal objetivo.

La ley de sociedades por acciones de 1.848 condicionaba la constitución de las compañías de ferrocarriles a su aprobación por ley. Hasta este momento, estas sociedades estaban sometidas al artículo 294 del Código de Comercio, pues se consideraba que no podrían cumplir su objeto sin obtener algún tipo de privilegio. Es decir, su autorización correspondía al monarca.

La Real Orden de 31 de diciembre de 1.844 (Pidal) se dic tó para regular las concesiones de ferrocarriles, ante "las propuestas que se han hecho a nombre de varias compañías nacionales y extranjeras", que "han llamado la atención del go bierno hacia este género de empresas" (236). Esta disposición hacia recaer en el gobierno la capacidad para otorgar concesiones provisionales a "sujetos de conocido arraigo y [que] ofrezcan, además, las garantías que el gobierno estime suficientes" (a. 3). A partir de este momento, los concesionarios disponían de dieciocho meses para formalizar una compa nia

(236) La Real Orden está reproducida en Aníbal Casares Alonso, Estudio histórico-económico de las construcciones ferroviarias españolas en el siglo XIX, Madrid, 1.973, anexo 8 (pp. 470-489).

ña con las tres cuartas partes del capital suscrito y un dé cimo depositado (a. 1). Esta facultad del ejecutivo, lo amplio del plazo de la concesión provisional y, en definitiva, las posibilidades de corrupción que permitía el sistema así dibujado, encontró pronto críticas, que hemos visto subyacían en el debate sobre la ley de sociedades por acciones en 1.847.

Una semana después de promulgado el Reglamento a la ley de sociedades, Bravo Murillo presentó al Congreso un proyecto de ley sobre caminos de hierro. No obstante, habrá que es perar a junio de 1.855 para alcanzar la promulgación de una ley de ferrocarriles. Ni el proyecto de 1.848, ni el de 1.850 (Seijas Lozano), ni el de Reinoso (1.851) alcanzaron su culminación.

En el preámbulo del proyecto de 1.848, se consideraba a las vías de comunicación como "el más eficaz y poderoso de los elementos que promueven el desarrollo" y a "la industria de los transportes, la más vasta, la primordial de todas las industrias, de la que dependen todos los demás, como que a ella le deben en gran parte a lo menos sus primeras materias, sus artefactos, y en la actualidad hasta la fuerza motriz más generalizada". De esta forma, se estimaba que mejorar la industria de los transportes "es mejorar todas las industrias a la vez" (237). Aparte de este papel de promotor de la economía y de su contribución al incremento del bienestar so-

(237) D.S.C., 24 de febrero de 1.848, apéndice 30 al núm. 70.

cial, se destacaba la utilidad política del ferrocarril, ya que se estimaba que la mejora de las comunicaciones cohesionaba políticamente al país y ayudaba a mantener el orden público a un gobierno centralizado. Bravo Murillo no manifestó, sin embargo, la otra cara de la moneda: las vías de comunicación facilitan también la conexión entre los adversarios al sistema.

Por encima de estas consideraciones, lo que aquí interesa resaltar es que el moderantismo presentaba al ferrocarril como el motor económico, desarrollando una idea que no era nueva y que tiene precedentes destacados en el Antiguo Régimen. Sus términos son similares a los utilizados más tarde por el progresismo. De ahí que pretenda potenciar el sector, suavizando de alguna manera la ley de 1.848. Proponía, por ello, que estas compañías, si bien deberían ajustarse a dicha disposición, tendrían unas normas especiales —nunca explicitadas— y el derecho a ciertos privilegios (a. 13). Respecto a las concesiones, se proponía la necesidad de su autorización por ley para las de la red principal y un Real Decreto para los de la secundaria, distinción que se mantenía en proyectos posteriores.

En 1.850, Seijas Lozano presentó un nuevo proyecto, cuando se estaban discutiendo los de carreteras y de puertos (238). Poco antes se había presentado una proposición, con Orense como primer firmante, que demandaba se acelerase la

(238) D.S.C., 10 de enero de 1.850, apéndice 12 al núm. 34.

construcción de los ferrocarriles (239). El interés por el ferrocarril se expuso, de nuevo, con frases similares a las que contenía el proyecto anterior y se explicitó que el propósito del gobierno con esta ley era:

"... facilitar la formación o redacción de las leyes particulares que el gobierno piensa someter a las Cortes respecto a la construcción de líneas determinadas y para dirigir por esta nueva senda a los capitalistas (...) señalando a los capitalistas las esperanzas que pueden concebir en la formación de empresas para este objeto" (240).

Con estas frases no se estaba indicando una reforma de la ley de 1.848 sino, como en el anterior proyecto, la posibilidad de obtener ciertos privilegios y exenciones para la mejor explotación de la empresa.

La Comisión que dictaminó el proyecto cuatro días después, consideró conveniente pronunciarse única y favorablemente sobre las disposiciones que trataban precisamente acerca de las subvenciones para estas empresas dejando el plan general de ferrocarriles para realizar un trabajo más lento y coincienzudo. Mientras éste se realizaba y se votaba una ley definitiva, proponía conceder al gobierno la capacidad de hacer o ratificar las concesiones provisionales. Ello no dió lugar a debate y quedó convertido en la ley de 20 de febrero de 1.850 (241).

(239) D.S.C., 7 de enero de 1.850, p. 705.

(240) D.S.C., 10 de enero de 1.850, apéndice 1º al núm. 34, p. 792. Subrayado mío.

(241) C.L.E., t. 49, pp. 416-417. La comisión dictaminadora estaba formada por Olózaga como presidente, Pastor como secretario y Escosura, las Heras, Areitio, Murga y Vahey. El dictamen en D.S.C., 14 de enero de 1.850, apéndice 3º al núm. 37.

Todavía en época moderada, en un nuevo gabinete presidido por Bravo Murillo, se presentó un proyecto de ley de ferrocarriles, cuyo espíritu interesa destacar. Se trata del expuesto por Reinoso a finales de 1.851 (242). Aparte de las ya mantenidas consideraciones sobre la importancia y necesidad de fomentar el ferrocarril, en este proyecto se consideró, por primera vez, la conveniencia de modificar la ley de 1.848 al "no ser bastante... con relación a las empresas de ferrocarriles". Bien es cierto que dicha reforma sería para incrementar el control gubernamental sobre las mismas, dado su carácter privilegiado. Se trataba de la exigencia de un depósito previo que, como garantía, permanecería en las arcas del Estado hasta la terminación de las obras a que estuviese comprometida la sociedad. La cuantía de dicho depósito sería determinada por el gobierno. La conveniencia de esta norma ya fue sugerida por la comisión parlamentaria que informó sobre el proyecto de 1.850. Cabe señalar que la concienzuda labor y la pulcritud intachable de esta comisión no fue seguida, en la práctica, por el ministro moderado (243).

Tampoco el plan de Reinoso llegó a cristalizar. Cuando se estaba discutiendo en el Senado una proposición de ley progresista sobre ferrocarriles, se produjo el conocido incidente entre el ejecutivo y la Alta Cámara por el que ésta se resistió al control de aquél a la vez que lanzaba acusaciones

(242) D.S.C., 6 de diciembre de 1.851, apéndice al núm. 72.

(243) Diego Mateo del Peral, "Los orígenes de la política ferroviaria en España (1844-1.877)", en M. Artola y otros, Los ferrocarriles..., I, pp. 56 y 57.

de utilización corrupta de la todavía vigente ley de febrero de 1.850 (244). Fue el inicio de un conflicto abierto que, ante la imposibilidad de una solución política, culminaría en la Vicalvarada y se cerraría con una reorganización en las esferas del poder que daría paso a lo que se ha dado en llamar el Bienio progresista.

La nueva etapa política abordó con energía el problema ferroviario y le dió una solución en lo que fue la primera ley general de ferrocarriles (3 de junio de 1.855). El proyecto fue presentado con prontitud y entusiasmo por el ministro de Fomento, Luján. El nuevo gobierno —y así lo explicitó en más de una ocasión— se consideraba llamado a organizar un marco legal que evitara la corrupción y la especulación con las concesiones, que habían caracterizado a los gobiernos moderados amparados en la ley de 1.850.

Tanto el gobierno como la comisión dictaminadora reconocían que los ferrocarriles eran "el móvil poderoso de todas las empresas industriales" (245). Continuando con un tipo de razonamiento utilizado desde el Antiguo Régimen, se trataba de buscar un factor que explicara el atraso de la industrialización en España; los hombres del 54 estaban convencidos de que se trataba de la ausencia de una red ferroviaria. Sentado este hecho, el remedio era fácil: su construcción. Con una

(244) Un relato de los acontecimientos, *ibidem*, pp. 82-87.

(245) Preámbulo al proyecto de ley firmado por Luján, de fecha 23 de setiembre de 1.854 (D.S.C.C., apéndice 3º al núm. 25). La comisión que lo dictaminó estaba compuesta por M. de la Concha, F. Infante, C.S. Montesino, A. Castro, J. Alfonso, A. Ríos Rosas y R. Navarro Zamorano.

fe propia de los arbitristas y proyectistas de antaño, se suponía a esta solución un efecto multiplicador cuasi milagroso. No encontramos en los discursos del momento un apoyo cuantitativo a sus afirmaciones sino, sobre todo, un optimismo desmesurado acerca del nivel de la demanda efectiva del país

"lo que interesa a la nación es que se construyan cuanto antes las líneas de ferrocarril que están reclamando con urgencia las necesidades de la industria, de la agricultura y del comercio" (246).

Todo ello lleva a justificar que "para traer los capitales a estas vastas empresas" se les concedan privilegios, exenciones, subvenciones o condiciones ventajosas en sus créditos. Hasta aquí no hay, en el fondo, nada que no estuviera en los proyectos moderados anteriores. La innovación se produce cuando afirma que se considera "indispensable moderar el rigor de la ley de 28 de enero de 1.848 sobre sociedades anónimas". Las condiciones ventajosas que se ofrecieron a las compañías de ferrocarriles sobre el resto se refieren fundamentalmente al capital y sus posibilidades de negociación, por lo que serán comentadas más adelante. Baste aquí indicar que no hubo ni una sola voz en el —por otra parte— pequeño debate que originó este proyecto que se alzara para reclamar para todas las compañías lo que se solicitaba para las de ferrrocarriles para que fuera el mercado —y no el dirigismo indicativo estatal— el que condujera la inversión. Quizá pudiera considerarse que la intervención de Sagasta, al propo-

(246) Preámbulo al dictamen de fecha 20 de marzo de 1.855, D.S.C.C., apéndice 20 al núm. 110.

ner que se suprimieran de esta ley los artículos que se referían a sociedades, lo que pretendía era que se debatiera, en un futuro próximo, una ley general de compañías; pero tal conclusión no sería sino un juicio de intenciones, ya que ni lo afirmó explícitamente ni, en el año y medio restante de la legislatura, propuso un proyecto alternativo. Creo, por ello, que es más adecuado pensar que solicitaba —como se hizo en el sector minero y en el financiero— una ley de sociedades de ferrocarriles (247).

Algo similar se puede decir de la intervención de Orense en el debate sobre el proyecto de ley de sociedades de crédito, en cuya comisión dictaminadora estaba, lo que revela la existencia de un acuerdo entre progresistas y demócratas para modificar la ley del 48 de forma paulatina, de manera que se favoreciera a sectores determinados. La única defección, manifestada en el último momento, fue la de Figuerola (248).

Si bien no se aportaron razones económicas suficientes que justificaran la permanencia de la tan criticada ley de 1.848, se enunció repetidamente el claro propósito de los nuevos gobernantes; esta dualidad queda exactamente reflejada en las palabras de Navarro Zamorano —de la Comisión—:

"como ya he manifestado que lo que la comisión quiere es que haya caminos de hierro lo antes posible, ha querido reformar las compañías anónimas, porque no desapareciendo los inconvenientes de la ley de 1.848, las sociedades anónimas para ferrocarriles son imposibles" (249).

(247) D.S.C.C., 17 de abril de 1.855, p. 2592.

(248) v. pp. 603-604.

(249) D.S.C.C., 17 de abril de 1.855. Subrayado mío.

La ley de junio de 1.855 separó la tramitación de la concesión y la de la compañía, aunque mantenía su vinculación, ya que ésta sólo tenía sentido en tanto concesionaria de una obra pública. El proceso se configuró así:

1) El gobierno podía conceder una autorización provisional para la constitución de una compañía ferroviaria (a. 46) ajustándose a la ley de 1.848 y con algún requisito más duro, como era la exigencia de una mayor suscripción inicial de capital. Esta autorización tenía por objeto facilitar a los promotores la formación de una mínima organización para solicitar la línea, hacer los estudios necesarios e iniciar los trámites de captación de capital.

2) Conseguida la autorización provisional, los promotores de la compañía podrán elaborar un proyecto para la construcción y explotación de una línea férrea. La concesión definitiva sería objeto de una ley (250).

3) Una vez aprobada la ley que otorgaba la concesión, los beneficiarios debían solicitar la tramitación de una segunda, que autorizara la constitución definitiva de la sociedad (aa. 6 y 47).

Por tanto, ya no sería una sino dos las leyes que necesitaba obtener una compañía de ferrocarriles para poder comenzar a funcionar, incluso después de haber superado con

(250) El gobierno y la Comisión propusieron, inicialmente, que si no se solicitaban privilegios se autorizaría la concesión por Real Decreto. Aceptaron inmediatamente, sin embargo, la enmienda de Labrador, que pretendía que todas las concesiones fueran autorizadas por ley. D.S.C.C. 21 de mayo de 1.855, pp. 3.325-3.327.

creces los requisitos de la ley de 1.848 para conseguir la autorización provisional. Esta complejidad innecesaria de los trámites provocó la promulgación de la ley de 11 de julio de 1.856 que afirma en su artículo 1º:

"Obtenida que sea, en virtud de una ley, la concesión de un camino de hierro, canal u otras obras públicas, podrá el gobierno autorizar, por medio de Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, la formación y constitución definitiva de la compañía que las haya de llevar a efecto" (251).

Ese mismo día se publicaron las leyes de concesión de cinco líneas (252).

Es decir, que la separación de la tramitación de la concesión y la compañía hace que ^{para} ésta se vuelva a la autorización por Real Decreto, que era lo que propusieron —sin éxito— los moderados de 1.847. No se debe ver en ello —como a veces se ha dicho— una simplificación en la constitución de las compañías que es lo que —supuestamente— provocó un aluvión de éstas en los años sucesivos. De hecho, el trámite era más complejo que para las sociedades industriales. A mi juicio, la eclosión de compañías y construcciones a raíz de esta ley se debió a las mayores posibilidades que la legislación, a partir de este momento, dió al sector para obtener privilegios, exenciones y una rentabilidad segura.

Ello hizo rentable la tramitación de las concesiones y

(251) C.L.E., t. 69, p. 201.

(252) Ibidem, pp. 170-200.

de la autorización de estas compañías. Esta reforma y la organización de las sociedades de crédito resultaron un buen acicate para la atracción de capitales, nacionales y extranjeros.

No es sólo —repetimos— el modo de autorización lo que determina el número de sociedades creadas. Si así fuera, y considerando —con los progresistas y los demócratas de 1.856— que era más fácil la constitución por Real Decreto que por ley, entre 1.848 y 1.856 el número de compañías por acciones industriales y mercantiles hubiera sido mucho mayor que el que reflejan las estadísticas. Pero para ellas faltaba el apoyo del Estado o, al menos, una inhibición de éste que no supusiera una diferencia de riesgo y rentabilidad tan evidente entre ambos tipos de inversiones. Hasta dónde resultó negativa para la industria esta opción de desarrollo "vía exceso de capacidad" es algo que no está calculado y posiblemente nunca se pueda establecer con exactitud. Lo que resalta es que se eligió un modelo y que se optó decididamente por él, dejando la industria a sus propias fuerzas (v. cap. 4).

c) Bancos y sociedades de crédito.— Menos de dos meses después de que se aprobara por Real Cédula el Código de Comercio se disolvió el Banco de San Carlos y se creó el de San Fernando, como una de las "providencias de fomento que estoy meditando y preparando para sacar las clases productivas del Reino de la languidez y pos

tración..." (253).

El Banco se creaba como una sociedad anónima (a. 1) con 60 millones de reales de capital divididos en 30.000 acciones nominativas de 2.000 reales cada una (aa. 14 y 15). Sus operaciones serían el descuento de letras, aceptar cuentas corrientes y depósitos, realizar préstamos a particulares y "hacer con el Real Tesoro, Real Giro y Real Caja de Amortización las negociaciones en que convengan sus agentes y la Administración del Banco (a. 3). Además, se configuraba como banco de emisión, actividad que realizaría en exclusiva pues ni siquiera podrían ejercerla las cajas subalternas de las provincias (a. 5).

De hecho el Banco quedó reducido a ser un mero apéndice de un Estado en constantes apuros financieros, que no pudo ejercer un papel de banco de fomento.

Se puede afirmar que en la década de los treinta del siglo XIX faltaban en Madrid instituciones crediticias que llenaran el vacío existente entre el Banco de San Fernando —oficial— y los prestamistas usuarios, pues este hueco no era cubierto por los escasos "comerciantes capitalistas". Ante una situación similar, en Francia se crearon sociedades de crédito destinadas, fundamentalmente, a fomentar la industria y el comercio. Los proyectos se iniciaron en este país en la década de 1.820 aunque su florecimiento no se conoció hasta los años cincuenta, superada la crisis de 1.848, en una Euro

(253) C.D D., t. 14, pp. 215-229. La cita corresponde a la p. 215.

pa que iniciaba una nueva coyuntura alcista. La necesidad de este tipo de sociedades fue sentida en todos los países cuyo desarrollo industrial exigía algo más que la autofinanciación típica de los primeros momentos. Como ha señalado N. Sánchez-Albornoz "el sistema bancario requirió una adecuación a su nueva función movilizadora del ahorro para la promoción de las grandes empresas de servicios públicos e industriales" (254). En España, las sociedades de crédito no conocieron una regulación hasta 1.856, como fórmula de captación del ahorro disperso —nacional y extranjero— y como modo de reconducirlo hacia el gran sector protegido, el ferrocarril.

Antes de centrarnos en esta figura, volvamos a la década de los cuarenta, para considerar la evolución del sector financiero en España. Finalizada la guerra carlista, hubo un auge bancario, concretado en la creación de los Bancos de Isabel II, de la Unión, de Fomento y Ultramar, de Barcelona, de Cádiz, Caja de Descuentos Zaragozana, Sociedad Valenciana de Fomento... La crisis de 1.848 afectó duramente al sector, lo que provocó la promulgación de una ley de bancos en 1.849 (255).

El Banco de Isabel II fue proyectado en 1.843 por un serie de comerciantes y capitalistas madrileños entre los que destaca José de Salamanca. Quizá, como ha sugerido Tortella,

(254) Nicolás Sánchez-Albornoz, "De los orígenes del capital financiero: La Sociedad General del Crédito Mobiliario español, 1.856-1.902", Moneda y Crédito, núm. 97, junio de 1.966, p. 29.

(255) Sobre la estructura bancaria española, fundamentalmente G. Tortella, Los orígenes..., caps. II a IV y VII. Sobre estas sociedades v. el cap. siguiente de esta Tesis.

se pretendía seguir el ejemplo de Laffitte en Francia, que había constituido la Caisse Générale du Commerce et de l'industrie en 1.837 (256).

El Real Decreto de 25 de enero de 1.844 autorizó la constitución de una sociedad anónima (según el a. 294 del Código de Comercio) que tendría como objeto erigir "en Madrid un Banco de descuentos, préstamos, giros y depósitos, bajo la denominación de Banco de Isabel II" (257). El preámbulo de esta disposición resaltaba la importancia de las instituciones de crédito para el fomento del comercio y la industria así como la escasez de las mismas en España que, en el momento, estaban reducidas al monopolio del Banco de San Fernando:

"Una época nueva ha reclamado nuevas instituciones; una nueva organización económica, por decirlo así, reclama por igual razón nuevos instrumentos, nuevas condiciones de crédito. El Banco de 1.829 no puede ser ya suficiente en 1.844" (258).

La nueva sociedad tenía un capital de 100 millones de reales, divididos en 20.000 acciones de 5.000 reales cada una. Es decir, su nominal era casi el doble que el del Banco oficial. El artículo 6 de sus estatutos incluyó la capacidad de emitir "cédulas al portador pagaderas en el acto de su presentación en la caja de Madrid", hasta el doble del capital efectivo. De hecho, esta disposición equivalía a la posi

(256) G. Tortella, Los orígenes..., p. 31.

(257) C.D. D., t. 32, pp. 129-138.

(258) Ibidem, p. 130.

bilidad de emitir billetes aunque se les denominara "cédulas" para evitar la transgresión formal del monopolio del banco oficial. En realidad, el de Isabel II utilizó este derecho con abundancia, lo que estimuló a su competidor a realizar la misma práctica.

No cabe duda de que el Banco de Isabel II fue innovador en el sector bancario español y su competencia forzó a su rival a salir de su política conservadora. No obstante, la crisis afectó duramente a ambos y la solución fue realizar su fusión. Fue propuesta en enero de 1.847 por Santillán, ministro de Hacienda, y consumada por Salamanca, que ocupó tal cargo en el gabinete de Pacheco. La fusión, por tanto, fue realizada a favor del Banco de Isabel II, cuya situación era mucho peor que la de su competidor. El Real Decreto que regulaba el proceso fue promulgado dos semanas después de que se hubiera suspendido la constitución de compañías anónimas. Ambas medidas formaban parte de la política anticrisis de los moderados (259).

El nuevo Banco español de San Fernando se constituyó con un capital de 400 millones de reales en acciones de 2.000, considerándose desembolsadas en un 50%, al ser canjeadas por las de las antiguas instituciones. La otra mitad sería aportada por los accionistas "a medida que las operaciones del Banco lo exijan" (a. 3). El artículo 4 limitaba la emisión de billetes a una cantidad igual a la de su capital efectivo,

(259) R.D. de 25 de febrero de 1.847, C.L.E., t. 40, pp. 230-232.

siendo posible su aumento mediante Real Decreto. Estos billetes serían canjeables sólo en Madrid, aunque el nuevo banco tenía la posibilidad de establecer cajas subalternas (siempre mediando Real Decreto) con capacidad de emisión en la ciudad donde se establecieren (a. 5).

En julio de 1.847 se aprobaron definitivamente los estatutos del Banco de Cádiz, que se iba a formar en dicha plaza (260). Su objeto era ser un "banco de descuentos, préstamos, giros y depósitos" (a. 1). Su capital era de 100 millones de reales, en acciones nominativas de 2.000 (aa. 2 y 3), aunque había posibilidad de que un tercio fuera al portador, las cuales no otorgarían derecho a participar en la Junta General de Accionistas (a. 6). Podía también en banco emitir billetes al portador en una cantidad igual a la de su capital efectivo (a. 29).

El Banco de Barcelona fue fundado por Manuel Girona en 1.844, como banco de emisión y descuento. El tope de emisión se estipuló en el capital nominal y el triple de su capital efectivo. Gracias a su política de incremento del encaje metálico y al apoyo de sus accionistas, el Banco de Barcelona superó la crisis de 1.848 (261).

En 1.846, por tanto, había cuatro bancos de emisión: San Fernando, Isabel II, Barcelona y Cádiz. En febrero de 1.847 se promulgaron dos medidas para hacer frente a la crisis eco

(260) C.L.E., t. 41, pp. 362-375.

(261) Francesc Cabana, La Banca a Catalunya. Apuntes per a una historia, Barcelona, 1.966, cap. III, G. Tortella, Los orígenes..., pp. 19-22.

nómica. La primera fue la supresión de la creación de sociedades anónimas. La segunda, la fusión de los dos bancos madrileños y la reducción de su capacidad emisora. La ley general de sociedades de 1.848 dispuso que los bancos de emisión y sus cajas subalternas se autorizaran por ley (a. 2). Al año justo de promulgarse tal disposición, los moderados presentaron en Cortes un proyecto para la "reorganización del Banco de San Fernando" (262) que contó con el apoyo de gran parte de los progresistas.

Este proyecto, concebido tras una importante crisis económica manifestaba por parte del ministro firmante —Mon— un criterio restrictivo que, ciertamente, no sostenía tres años antes. Mientras entonces se mostraba partidario de la multiplicidad de bancos de emisión, ahora defendía la tesis del Banco único, con sede en Madrid, que sería el de San Fernando reorganizado, en el que deberían integrarse el de Barcelona y el de Cádiz, que pasarían a ser meras cajas de descuentos (a. 6). El proyecto reducía a la mitad el capital del Banco (a. 1) y le otorgaba el monopolio de la emisión, que podría hacer hasta una cantidad equivalente a la mitad de su capital efectivo, cosa que podría ampliarse por ley (a. 2) y hasta un tercio de su encaje metálico (a. 3).

La comisión dictaminadora resaltó su acuerdo con el "espíritu severamente restrictivo" del proyecto y se apoyaba, como argumento de autoridad, en la Peel Act de 1-844, de un país que

(262) D.S.C., 20 de enero de 1.849, apéndice 40 al núm. 17.

no sufría "convulsiones políticas" (263). Como esta ley, la española consignó la división del Banco en dos departamentos, uno de emisión y otro de operaciones. Tal división no tuvo efecto en España, ya que en los poco más de dos años que esta organización estuvo en vigor, las únicas preocupaciones del Banco fueron liquidar su activo y disminuir su pasivo (264).

La centralización del crédito era considerada por la Comisión como una labor de "orden público". Era, pues, necesaria la actuación legislativa para evitar una crisis como la de 1.847, que tuvo por causa el "desenfreno especulativo" y que los bancos se crearan con "demasiada latitud". Esta interpretación de la crisis, que ya fue contemplada en el debate de la ley de 1.848, se plasmó, en este tema, en la proposición de un solo Banco que fuera, como en Francia, una organización más mercantil que política y que ejerciera dos funciones: centralizar el ahorro y determinar el tipo de interés:

"Primero, atraer a sus cajas por medio de los depósitos y las cuentas corrientes para lanzarla a la circulación y hacerla productiva esa gran masa de capitales que en todos los países, pero especialmente en el nuestro, existen en porciones más o menos pequeñas en las cajas y gavetas de cuantos no se dedican a la profesión mercantil; y segundo, determinar como lo he dicho ya, cuál ha de ser el precio del

(263) D.S.C. , 27 de febrero de 1.849, apéndice³⁰ al núm. 43, p. 924.

(264) G. Tortella, Los orígenes..., p. 41. La división en dos departamentos fue derogada por la ley de 4 de mayo de 1.851 (C.L.E., t.54, pp. 537-543).

dinero o del crédito" (265).

La única modificación de importancia que propuso la comisión a instancias de sus miembros progresistas, fue la de que no se obligara a los Bancos de Cádiz y Barcelona a unirse al de San Fernando, aunque se resaltaba que debían reformar sus estatutos según lo dispuesto en esta ley, lo que equivalía a reducir su capacidad emisora, a prohibirles realizar préstamos sobre sus propias acciones y a incrementar su control por parte del gobierno.

La oposición a la totalidad fue realizada por diputados de la mayoría que reclamaban contra el monopolio que se quería instaurar y a favor de que se establecieran "en todos los puntos que convengan" (266). Incluso, se argumentaba, si fuera conveniente el establecimiento de un Banco único, su se de nunca debería ser Madrid, que no es el centro de la industria y el comercio (267). En la Corte, el Banco no hará sino ser un "instrumento en manos del gobierno" (268) y atraer un capital a Madrid que podría ser empleado productivamente en otras provincias (269).

(265) Dictamen de la Comisión, en D.S.C., 27 de febrero de 1.849, apéndice 3º al núm. 43. La cita corresponde a la p. 926. La Comisión estaba formada por Cantero, Marqués de Villagarcía, F. Vahey, R.G. Carrasco, J. de Latoja, M. de Gaviria y A. Amblard.

(266) Son palabras de Bermúdez de Castro, D.S.C., 14 de marzo de 1.849, p. 1.220.

(267) D.S.C., 14 de marzo de 1.849, p. 1.220 (Bermúdez de Castro); 15 de marzo, p. 1.257 (Polo); 16 de marzo, p. 1.276 (Gonzalo Morón).

(268) D.S.C., 15 de marzo de 1.849, p. 1.258 (Polo).

(269) D.S.C., 16 de marzo de 1.849, p. 1.280 (Gonzalo Morón).

Todo ello estaba mezclado con lo que ocupó la mayor parte del debate: la crítica al Banco de San Fernando y a su excesiva unión con la Hacienda. Las intervenciones de Mon como ministro de Hacienda y de la Comisión, estuvieron plagadas de exculpaciones al Banco y los anteriores gabinetes. Destaca en este sentido la intervención del progresista Cantero que, aparte de manifestar su apoyo a la política moderada, resaltó su convicción de que si se dejara libre la creación de bancos no se utilizaría esta posibilidad, pues no había demanda para ello (270).

Las acertadas críticas al antiguo banco oficial y a su atadura con el gobierno, la justa previsión de que ésta proseguiría y de que la concentración bancaria en Madrid era una decisión incorrecta si lo que se pretendía era estimular la actividad económica, no fueron escuchadas por la peculiar alianza de los moderados con gran parte del progresismo. Era un paso más en la organización de un sistema bancario que a lo largo del siglo XIX consolidaría una estructura precaria y desequilibrada. Como ha afirmado Tortella para el conjunto del siglo:

"Estando la mayor parte de las instituciones y de los recursos bancarios localizada en Madrid, lejos de las zonas industriales y comerciales y cerca de la sede del Estado, no es de sorprender que el papel del sistema bancario haya sido más político que económico" (271)

(270) Ibidem, pp. 1.281-1.287.

(271) G. Tortella, Los orígenes..., p. 329.

Del breve debate del articulado, interesa destacar aquí el artículo 6 que, como fue mencionado, la comisión reformó, sobre el proyecto, en el sentido de que la integración de los Bancos de Barcelona y Cádiz en el de San Fernando fuera de jada al arbitrio de aquéllos. Fue objeto de una enmienda, firmada por los progresistas, que pretendía suprimir la norma que obligaba a los citados Bancos a ajustarse a los térmi nos de la ley. Los enmendantes argumentaron que debían respe tar los derechos adquiridos y no podía obligarse a un Banco preexistente —Barcelona— a reducir su emisión, desde el do ble de su capital social a la mitad del mismo. La comisión aceptó una negociación de la enmienda y el artículo que finalmente fue aprobado permitía que los bancos de Barcelona y Cádiz pudieran llegar a emitir un 100% de su capital efecti vo; es decir, el doble que el de San Fernando (272).

De esta forma se aprobó la ley de 4 de mayo de 1.849, ba sada en el acuerdo con los progresistas, partidarios de forma mayoritaria del Banco de emisión único, dados los intereses de algunos de sus representantes en el de San Fernando. El progresismo, a cambio, introdujo la posibilidad de permanencia de los dos bancos provinciales —Barcelona y Cádiz— que mantuvieron su capacidad emisora (273).

La legislación bancaria resultaba enormemente restrictiva cuando la recuperación económica conocida a partir de 1.850 y, especialmente, a raíz de la guerra de Crimea, comen

(272) El debate de este artículo en D.S.C., 23 de marzo de 1.849, pp. 1.372-1.380.

(273) C.L.E., t. 47, pp. 19-22.

zó a exigir nuevas instituciones financieras. En respuesta a esta demanda, los moderados se limitaron a proponer una nueva reorganización del Banco de San Fernando que se convirtió en la ley de 15 de diciembre de 1.851 (274). Por ella, se incrementaba su capacidad emisora hasta una cantidad igual a la de su capital efectivo (a.7) pero se reducía su nominal hasta 120 millones de reales (a. 1). Se abría la puerta a la creación de sucursales, al establecer que si las necesidades de una plaza lo aconsejaban y el propio Banco no recogía la iniciativa, el gobierno la propondría como proyecto de ley (a. 9). Mediando acuerdo del Banco, bastaría un Real Decreto (275). Por lo demás, se mantenía la ley de 1.849 y la organización del Banco, excepto en lo referente a su división en dos secciones, de emisión y de operaciones.

Los moderados, en los tres años siguientes, siguieron negando la constitución de nuevos Bancos y desoyendo las demandas de creación de sucursales del de San Fernando (276).

Durante el bienio progresista hubo una importante renovación legislativa que tendía a responder a la demanda de billetes y crédito que el sistema establecido no podía satisfacer. la insuficiencia del mismo era tan evidente que, según Santillán, incluso el Banco de San Fernando tomó la iniciativa en el movimiento de renovación (277).

(274) C.L.E., t. 54, pp. 537-543.

(275) R.D. de 18 de febrero de 1.852, C.L.E., t. 55, pp. 202-213 (a. 56).

(276) Banco Hipotecario, Bancos de Jerez de la Frontera, Málaga, Santander... (v. cap. 4).

(277) Ramón de Santillán, Memorias (1.815-1.856), ed. y notas de Ana M^a Berazaluze, Pamplona, 1.960, p. 247.

La legislación del período se resume en las leyes de Bancos de emisión y de sociedades de crédito, ambas de 28 de enero de 1.856 (278).

En noviembre de 1.855, el ministro de Hacienda, Bruil, presentó el proyecto de ley de Bancos. En las Cortes se enfrentaron dos posturas. De un lado, los banqueros madrileños, agrupados en torno al Banco de San Fernando y cuyo objetivo era conseguir para éste el privilegio de emisión a nivel nacional y la posibilidad de establecer sucursales (diputados Sevillano, Collado y Santa Cruz). De otro, una alianza heterogénea de hombres de negocios de provincias y del extranjero unidos a —y representados por— políticos progresistas y demócratas (diputados Labrador, Orense...). Sus objetivos no eran muy coherentes y sólo coincidieron en restringir la situación monopolística del Banco de San Fernando, pretendiendo beneficiarse de las perspectivas del negocio bancario. Tortella ha descrito cómo las vacilaciones de este último grupo (el más numeroso) y las del propio gobierno, provocaron "unas leyes bancarias imperfectas y un afianzamiento de la posición privilegiada del Banco de San Fernando (aunque no lograra éste todo lo que se proponía)" (279). El resultado fue que se estableció la pluralidad de emisión (un solo Banco en cada localidad) con ciertas ventajas para el Banco de España como se llamó desde este momento (280).

(278) C.L.E., t. 67, pp. 93-95 (Bancos) y 96-99 (sociedades de crédito).

(279) G. Tortella, Los orígenes..., p. 53

(280) Ley de 28 de enero de 1.856, C.L.E., t. 67, pp. 93-103.

El debate del proyecto presentado por Bruil fue aprovechado (como, en general todos los debates económicos de la época) para exponer diferentes visiones acerca de la crisis de 1.848 y para criticar la solución dada por el moderantismo a la misma (281). Los argumentos se repiten y ya han sido reseñados al analizar la ley de ferrocarriles. Ciñámonos ahora a la consideración del modo de autorización de las sociedades bancarias.

El proyecto de ley autorizaba al gobierno para conceder a compañías o particulares la facultad de establecer bancos de circulación (a. 7), lo que se haría por Real Decreto (a. 9). Había, no obstante, dos limitaciones a la autonomía gubernamental: la primera era la que suponía el derecho de prelación que el Banco de España tenía para establecer sucursales en nueve ciudades (282); la segunda era que sólo se podía establecer un banco en cada localidad (a. 8). Los tres artículos que estipulaban el modo de autorización de los Bancos, fueron mantenidos en el dictamen de la Comisión y, objeto de discusión en las Cortes, quedaron convertidos en los artículos 49 y 89 de la ley de 28 de enero de 1.856:

"En cada localidad sólo podrá crearse un establecimiento de emisión, bien sea Banco particular, bien sucursal del de España.

Transcurridos tres meses desde la publicación de esta ley sin que se haya solicitado autorización para crear Banco particular en al

(281) D.S.C.C., 4 de enero de 1.856, pp. 5.989 (Orense) y 5.991 (Udaeta).

(282) Alicante, Bilbao, La Coruña, Málaga, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Tras una enconada discusión, resumida con extensión en Tortella, Los orígenes..., pp. 53-57, quedó redactado de una forma confusa que permitía su interpretación a favor de la prelación del Banco de España o, por el contrario, de la iniciativa individual.

guna o algunas de las capitales mencionadas en el art. 3º, el Banco de España optará por establecer o no sucursal.

Art. 8: Las concesiones para la creación de Bancos se harán por Reales Decretos, acordados en Consejo de Ministros, previa la oportuna información y después de oído el Tribunal Contencioso-administrativo o el que hiciera sus veces, publicando los estatutos y reglamentos, después de aprobados, en la Gaceta del Gobierno" (283).

Durante el debate de estos extremos se plantearon algunas opiniones en contra del dictamen, expresadas desde las filas demócratas y también progresistas. El diputado demócrata Orense, se mostró partidario de la libertad completa para el establecimiento de los bancos de emisión. En el mismo sentido, reclamó el respeto hacia la autonomía del legislativo, en el sentido de que las Cortes pudieran autorizar --si así se solicitaba y convenía al país-- más de un banco de emisión en cada localidad (284). El oponente argumentó que, dada la imposibilidad de hacer prosperar tales opiniones, se abstenía de su defensa. Esta posición por parte de un diputado que no se caracterizaba por el abandono de la defensa parlamentaria de sus principios ideológicos, hace suponer que la base que sustentaba la ley de bancos estaba pactada entre progresistas y demócratas. Orense se redujo a salvar su imagen pública, enunciando un deseo, de acuerdo con su ideología.

Por su parte, Collado solicitó que la autorización de

(283) C.L.E., t. 67, pp. 93 y 94.

(284) D.S.C.C., 4 de enero de 1.856, pp. 5.988-5.989.

Bancos se hiciera siempre por ley, dada la importancia del asunto. A pesar de que su enmienda fue admitida por parte de la Comisión, el ministro de Hacienda consideró que la autorización por Real Decreto tenía la ventaja de la rapidez. El gobierno —argumentó— no podía cometer arbitrariedades en las concesiones, pues tendría que ajustarse a una ley. Esta enmienda no fue tomada en consideración por la Cámara (285). Sobre este punto insistió una enmienda presentada por un grupo de diputados progresistas encabezado por Labrador. Consideraba que los promotores de un establecimiento bancario debían tener libertad para solicitar, si lo deseaban, la aprobación del mismo por ley. El ministro de Hacienda repuso que tal cosa estaba regulada por el vigente derecho de petición y no hacía falta explicitarlo en la norma (286).

A la aprobación de la ley de Bancos de emisión siguió de forma inmediata el debate del proyecto de ley de sociedades de crédito. Se trataba de dar un marco general para la creación de Bancos de inversión y sin capacidad emisora. La comisión dictaminadora las definió así:

"Del seno mismo de esta institución mercantil [sociedad anónima] ha nacido la idea fecundante de la creación de una especie de sociedades anónimas, por naturaleza auxiliaadoras de las otras, consagradas a objetos especiales, y a semejanza de los Bancos de circulación y emisión. Si éstos sirven al alto comercio y tienen por objeto regular el curso metálico del mercado, las sociedades de crédito, puestas al servicio de las de ferrocarriles, canales, empresas marítimas

(285) D.S.C.C., 15 de enero de 1.856, pp. 6.196-6.197.

(286) Ibidem, p. 6.197.

transatlánticas, minas, puertos y otras de magnitud análoga, hacen posible su coexistencia gigantesca, colocándose como intermediarios entre el capital tímido y receloso y el espíritu aventurero e innovador, que demanda recursos" (287).

El progresismo trataba de articular estas sociedades de promoción industrial, que se estaban desarrollando con éxito en Europa, en especial en Francia, donde los hermanos Péreire habían fundado la Société Générale de Crédit Mobilier en 1.854, que era un banco de depósito y descuento y, sobre todo, una compañía financiera industrial. Pero el plan de los Péreire no se limitaba a Francia sino que pretendía extenderse por Europa. Deseaban crear establecimientos parecidos en otros países industrialmente atrasados, para ayudar a su desarrollo. El objetivo era que todos ellos mantuvieran estrechos vínculos.

"Mientras aseguramos que estos establecimientos disfrutan de libertad de acción, según las necesidades específicas de la industria de cada nación, debemos evitar cuidadosamente los peligros del aislamiento. Debemos esforzarnos por desarrollar sus capacidades de expansión y asociación; es necesario que se establezcan vínculos entre ellos. Por ello, nosotros vamos a emplear capital de la forma más eficaz y a darle, una vez alcanzado cierto nivel, el más amplio e influyente radio de acción" (288).

(287) D.S.C.C., 7 de enero de 1.856, apéndice 10 al núm. 282. Obsérvese la diferencia con la posición oficial de 1.847, que consideraba un deber del gobierno proteger al comercio de las "personas arrojadas" asociadas en sociedades anónimas. Nótese, asimismo, la enumeración de los objetivos financieros de las de crédito.

(288) Cit. por Bertrand Gille, "La Banca y la industrialización europea, 1.730-1.914", en Carlo M. Cipolla, ed., Historia económica... (3), p. 282.

Precisamente fueron los Peréire los primeros que consiguieron llevar a buen término una solicitud para crear una sociedad de crédito en España. Otro grupo de la misma nacionalidad había presentado en marzo de 1.855 un proyecto en el mismo sentido. No se llegó a tramitar. Quizá la razón de su fracaso estribó en que solicitaban para su compañía el derecho de emisión (289).

La solicitud de los Peréire, sin embargo, fue acogida por el ministro de Hacienda, Bruil, que la transformó en un proyecto de ley que presentó a las Cortes el día de nochebuena de 1.855 (290). En él se incluía también un proyecto de "ley que sirviera de base a la organización del crédito mercantil". En el preámbulo se afirmaba que aunque el gobierno tenía el proyecto preparado desde hacía tiempo, había preferido esperar a que la revolución se asentara y la propia estabilidad del régimen infundiera confianza a los capitalistas españoles y extranjeros. Esa hora había llegado. No era el gobierno el que llamaba sino el capital el que deseaba intervenir. Había, por tanto, que abrirle las puertas, pero nunca antes de organizar un marco adecuado para la regulación de esas "sociedades destinadas a dar inmenso impulso al desarrollo material del país, largos años hace comprimido por efecto de circunstancias cuyo recuerdo es enojoso (291).

(289) Así lo reconoció Orense en su intervención en las Cortes en la sesión de 18 de enero de 1.856, p. 6.260. Los solicitantes de esta "Caja General de Crédito Público en España" eran el vizconde de Kervegen, diputado de la Asamblea Francesa y M. Millaud, director de la Banque Immobilière de Paris. El dictamen, en D.S.C.C., apéndice 3º al núm. 231. Los votos particulares, apéndice único al núm. 234.

(290) D.S.C.C., apéndice al núm. 274. v. G. Tortella, Los orígenes..., pp. 59-63.

(291) Ibidem.

Otras dos solicitudes se presentaron prácticamente al tiempo. Una, inspirada por los Rothschild, aunque autodefinida como "casa esencialmente española". Así se prolongaba en suelo español la rivalidad entre esta firma, que promovía sociedades de corte nacionalista (292) y la de los Peréire. Otra estaba promovida por un grupo que encabezaba Alfred Prost. Estos tres proyectos y la ley general fueron tramitados simultáneamente (293).

La comisión dictaminadora, que era la misma que se formó para la ley general de ferrocarriles y de la que formaban parte librecambistas tan destacados como Figuerola y democratas como Orense (294) elogió a las sociedades anónimas que "desarrolladas y perfeccionadas en nuestro siglo, eran el medio alcanzado para acometer empresas en alguna manera titánicas", a la vez que criticó la "severa ley" de 1.848. Esta, por tanto, debía ser reformada en un camino que ya había sido iniciado por la ley de ferrocarriles. De nuevo cabe insistir aquí en el hecho de que la opción del momento consistió en retocar la ley moderada para ciertos sectores que interesaba promocionar. La vía del desarrollo económico, se consideraba

(292) Sobre este matiz que separa a las sociedades promovidas por los Rothschild y los Peréire, v., por ejemplo, B. Gille, "La Banca...", p. 284.

(293) Los estatutos de la Compañía General de Crédito e Industria de España, firmada por capitalistas españoles pero ligada a la Casa Rothschild fueron presentados por Bruil el 8 de enero de 1.856, D.S.C.C, apéndice 2º al núm. 283 y dictaminados en apéndice al núm. 289; los de la Compañía General de Crédito español (Prost), dictaminados en 12 de enero de 1.856 (apéndice al núm. 288). El dictamen sobre la ley general, que incluía la autorización a la Sociedad General de Crédito (Peréire), llevaba fecha de 7 de enero de 1.856 (apéndice 1º al núm. 282).

(294) La comisión estaba formada por F. Santa Cruz, I. de Olea, M. Sánchez Silva, J. Alfonso, J. Mª Orense, C. Labrador y L. Figuerola.

era la del ferrocarril cuyas máquinas serían alimentadas por un combustible proporcionado por las sociedades de crédito y que, a su vez, extenderían el capitalismo a todo el territorio español.

El debate sobre la ley de sociedades de crédito fue corto (15 a 18 de enero de 1.856) y no muy virulento. Son tres los factores que lo explican: el cansancio de los diputados ya que se acababa de tratar la ley de bancos de emisión, la escasa cualificación técnica de los parlamentarios y la ausencia de una oposición radical a este tema. No obstante, se manifestó una clara divergencia de opinión entre los más moderados, que se mostraron partidarios de incluir más restricciones y cláusulas precautorias —Jaén, Avecilla— y los más radicales, que pedían absoluta libertad —Orense—.

Los tres turnos en contra de la totalidad estuvieron a cargo de Jaén, Ramírez Arcos y Gil Sanz. Las objeciones de estos últimos fueron de poca importancia o de detalle. Jaén hizo una observación al fondo de la cuestión y, repitiendo argumentos de los moderados, consideró que la escasa extensión del comercio y la industria en el país no justificaba una ley tan amplia. Al tiempo, llamó la atención sobre los casos de los Bancos de San Carlos, San Fernando e Isabel II que, a su juicio, invitaban a tomar más precauciones sobre unas sociedades a las que esta ley daba excesivas atribuciones (295).

(295) D.S.C.C., 15 de enero de 1.856, pp. 6.202 a 6.205.

La pequeña oposición manifestada a la globalidad del proyecto dió pie a los individuos de la comisión para mostrar su optimismo. Olea aseguró que como la mayor parte del capital de la compañía de los Peréire era extranjero, allí quedarían los problemas que conlleva la especulación con los valores en Bolsa y aquí, en la sede del establecimiento, los beneficios. Orense proclamó su fe en el liberalismo económico, que tuvo ocasión de renovar en años sucesivos. Su largo discurso, aparte de responder a cuestiones concretas sobre las posibilidades de las sociedades de crédito, sorprende por su amplia defensa de una visión del desarrollo económico que le situaba muy cerca de concepciones contemporáneas avanzadas sobre la teoría de la crisis, dentro del debate que conmovía a la escuela clásica. Para este diputado, el desarrollo implica crisis; el temor hacia éstas y más si es fomentado por el gobierno (caso de 1.848) puede paralizar un país:

"Cuando se habla de los males que han acarreado las crisis de unas sociedades, es menester también tener en cuenta los inmensos bienes que han producido. Si queréis ver lo que son las naciones donde no hay esas crisis, porque no hay crédito ni recursos, mirad a Marruecos; si queréis ver lo que son naciones donde esas operaciones de crédito se llevan acaso a un punto excesivo, mirad a los Estados Unidos de América [...] yo quiero siempre para mi patria una situación como la de Estados Unidos e Inglaterra más bien que una situación como la de Marruecos, donde no hay esas crisis, pero todo respira pobreza" (296).

Otros miembros de la comisión hablan de la conveniencia de abrir la "frontera" pirenaica a los capitales europeos que pretendían atravesarla. Ese fue, pues, el reto que plantearon los progresistas con ocasión de este proyecto de ley: desarrollo versus subdesarrollo; Africa versus Europa. Tal era la enorme responsabilidad que se quería transmitir a los parlamentarios a la hora de expresar su voto. Sabemos cuál fue el brillante resultado que consiguieron los proponentes (297).

El artículo 4º del Dictamen, que describía en nueve puntos los objetos a los que se podrían dedicar las sociedades de crédito fue el más debatido aunque quedó aprobado tal y como lo presentó la Comisión. Las compañías podrían contratar empréstitos con el gobierno, corporaciones provinciales o municipales así como, previa autorización gubernativa, con países extranjeros (1); crear empresas de toda especie (2); practicar la fusión de las mismas y encargarse de la emisión de sus acciones y obligaciones (3); administrar, arrendar o recaudar contribuciones y empresas de obras públicas (4) emitir obligaciones por un valor igual al empleado en las cuatro clases de operaciones anteriores (5); prestar sobre efectos públicos, acciones, obligaciones, etc., con el límite del 10% del capital efectivo, del 60% del valor en Bolsa y de dos meses (7); actuar como representante de personas y sociedades (8); recibir depósitos y llevar cuentas corrientes (9).

(297) La discusión a la totalidad se llevó a cabo los días 15 y 16 de enero de 1.856 (D.S.C.C, pp. 6.202 a 6.210). La ley se sancionó diez días más tarde (apéndice 1º al núm. 300).

La oposición —diputados Jaén y Cantero— no tuvo éxito cuando propuso: a) limitar la capacidad de negociación de las sociedades de crédito para que no se convirtieran en árbitros de la Bolsa; b) impedir que realizaran préstamos sobre sus propias acciones; c) que se estipulara un interés fijo para los cuentacorrentistas. La comisión, en sus respuestas, se limitó a incidir en las ventajas que suponía la movilización del capital (298).

Esta ley reguló el modo de autorización de las sociedades de crédito como una excepción a la ley de 1.848. Y lo hizo de forma similar a la de los Bancos de emisión, promulgada el mismo día:

"Art. 10. El gobierno podrá hacer concesiones por medio de Reales Decretos para la organización de sociedades anónimas de crédito, conformándose a lo dispuesto en la presente ley, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan acudir a las Cortes solicitando la constitución de una sociedad por ley especial" (299).

Este artículo no originó debate. Los demócratas ya anunciaron su deseo de que la autorización de las sociedades fuera libre y también su renuncia a una defensa más extensa de este principio. La enmienda que Labrador planteó en la ley de Bancos de emisión fue incorporada directamente en ésta: los promotores de una sociedad de crédito podían solicitar su autorización mediante Real Decreto o mediante ley.

(298) D.S.C.C., 16 de enero de 1.856, pp. 6.127 a 6.225.

(299) D.S.C.C., 28 de enero de 1.856, apéndice 1º al núm. 300.

El resto del articulado trata de la duración de estas so-
ciedades (noventa y nueve años como máximo) (a. 2), del domi-
cilio (en España y, previo Real Decreto, agencias en el ex-
 tranjero (a. 3), del capital social (a. 5), acciones (a. 6),
 obligaciones (a. 7), balances (a. 8) y de sus estatutos y re-
glamentos (a. 9). En la regulación del capital y sus posibi-
 lidades de negociación —acciones al portador— así como en
 la de la emisión de obligaciones obtuvieron indudables venta-
jas respecto al resto de las sociedades industriales y mer-
 cantiles, que serán tratados en el próximo apartado.

De esta forma, la ley de 28 de enero de 1.856 abrió paso
 a las sociedades de crédito, dando unas facilidades para la
 centralización del capital que fueron aprovechadas inmediata-
mente por grupos nacionales y extranjeros. Ya hemos menciona-
 do que el mismo día que fue promulgada esta ley general y la
 de Bancos de emisión, fueron autorizadas la Sociedad Españo-
la Mercantil e Industrial (Prost), la Sociedad General
de Crédito Mobiliario español (Peréire) y la Compañía Ge-
neral de Crédito en España (Rothschild). Poco después surgi-
 rían otras. A partir de 1.856 y hasta la crisis de 1.866, Es-
paña participó en el boom de sociedades de crédito que se pro-
dujo en Europa entre 1.850 y 1.870. En nuestro país se die-
ron también los tres tipos que, en mayor o menor medida, se
 desarrollaron en otras naciones: las promovidas por los Pe-
 réire, las que lo fueron por los Rothschild y las que eran
 independientes de estos dos grupos internacionales, en las
 que la proporción de capital extranjero era varia-

ble (300).

Desde enero de 1.856 y hasta octubre de 1.868, todas las sociedades por acciones podían ser autorizadas por el gobierno (R.D.), sujetándose a las normas generales contenidas en las leyes de junio de 1.855 (ferrocarriles), enero de 1.856 (bancos de emisión y sociedades de crédito) y enero de 1.848 (resto de las compañías). Se consideró —y así fue aceptado entonces y por los historiadores hasta el día— que el Bienio relajó la dureza de las normas de 1.848 para los dos sectores que interesaba promocionar. Curiosamente éso se hizo devolviendo al gobierno una potestad que en 1.848 se le había detraído en favor de las Cortes gracias a —precisamente— la obsesión de los sectores más progresistas por primar al legislativo respecto al ejecutivo. La correlación de fuerzas y la composición del gobierno habían cambiado en los ocho años transcurridos y los progresistas confiaban en que la revolución era un proceso irreversible. En este concreto aspecto legislativo —y casi sólo en él— no se equivocaron.

Las sociedades industriales y mercantiles por acciones en general, no ocuparon la atención de los gobernantes ni de los parlamentarios del Bienio. Quizá el programa de revisión de la vieja legislación hubiera ido completándose de no romperse el pacto político que lo sostenía. Sean cuales fueran las intenciones, el hecho es que entre 1.854 y 1.856 fue mo-

(300) Sobre el desenvolvimiento de las compañías, Nicolás Sánchez-Albornoz, "Los bancos y las sociedades de crédito en provincias, 1.856-1.868", Moneda y Crédito, núm. 104, marzo de 1.968, pp. 39-67 y G. Tortella, Los orígenes..., caps. III, IV y VII.

dificada la legislación a favor de ciertas sociedades anónimas, exclusivamente; el sesgo de la política económica hacia el ferrocarril y las sociedades de crédito resulta más abrumador cuando se observa que nadie alzó su voz a favor de la libertad de constitución de las comanditarias por acciones. Ni siquiera los que lo hicieron en 1.847.

Las reglas del juego del Bienio progresista en este terreno no fueron cuestionadas por los gobiernos que dominaron la vida política española durante los doce años siguientes, a pesar de un intento inicial. En junio de 1.856, el conflictivo momento en el que la crisis de subsistencia provocó los desórdenes en el campo que contribuyeron a la caída del sistema político, fue aprovechado por Yáñez Rivadeneira para cuestionar las libertades permitidas a las compañías recién creadas. Este diputado, en el debate sobre las sociedades de crédito se había mostrado partidario de la introducción de mayores garantías sobre las mismas (301). El 28 de junio se preguntaba cómo era posible que las acciones de estas compañías estuvieran subiendo si su principal negocio —los ferrocarriles— tardaba años en ser rentable. Esto le llevaba a pensar que sus especulaciones estaban siguiendo unos derroteros que podían llevar a una catástrofe similar a la de 1.848. Por ello solicitaba un pronto remedio. Estimó excesiva la medida propuesta por el Ayuntamiento de Barcelona de prohibir la creación de nuevas sociedades durante un año, pero recla-

(301) D.S.C.C., 17 de enero de 1.856, pp. 6.237-6.239 y 18 de enero, pp. 6.250 y 6.251.

mó una reforma, en sentido restrictivo, de la legislación de 1.856, según la trayectoria francesa. Incidiendo sobre lo mismo, Gaminde reclamó un "gobierno fuerte" que remediara una situación de crisis económica de la que no culpaba tanto a las compañías cuanto a los jornaleros, que preferían quemar las fábricas de Valladolid y Palencia a construir el ferrocarril (302).

La respuesta parlamentaria del gobierno y las compañías fue:

1) la manifestación de una gran fe en las posibilidades del crédito y la presunción de inocencia y eficacia de las compañías hasta que no dieran muestras de lo contrario (F. Santa Cruz, miembro de la Comisión que dictaminó el proyecto de ley y ahora Ministro de Hacienda).

2) diferenciar la situación de 1.846, en que las sociedades tenían objetivos ficticios de la de 1.856, en que los tienen muy concretos y visibles (Olea, antiguo miembro de la Comisión citada y ahora del Consejo de administración del Crédito Mobiliario Español).

3) afirmar que si faltaban brazos en el ferrocarril no era tanto por la mala voluntad de los jornaleros cuanto porque el momento coincidía con el punto álgido de las faenas agrícolas (Luján, ministro de Fomento) (303).

(302) D.S.C.C., 28 de junio de 1.856, pp. 9.238-9.240. La intervención de Gaminde, que había sido elegido por Segovia en las filas progresistas, ibidem, p. 9.244.

(303) El debate, ibidem, pp. 9.238-9.245,

Este debate no fue, en definitiva, sino una manifestación más del que estaba conmoviendo en estos meses al país. Fomento del alarmismo por los adversarios del régimen, reclamaciones de una rápida imposición de la ley y el orden provenientes, incluso, de los iniciales partidarios del progreso; justificaciones desesperadas de la situación por los máximos representantes de aquel partido y que no revelaban sino impotencia... El régimen cayó; se mantuvo el reclamado "gobierno fuerte" pero la legislación general de sociedades no cambió.

En 1.866, un momento muy difícil para la economía española por la crisis financiera de los ferrocarriles, el ministro de Hacienda, Alonso Martínez, propuso en el Congreso la creación de un Banco Nacional Español como banco de emisión y descuento (304). En realidad se trataba de una concesión a un grupo de capitalistas ingleses a cambio de un empréstito de 100 millones de pesetas. El plan estaba destinado a atraer capital inglés y a sustituir a un Banco de España que, en palabras de Tortella, no era ya sino "un limón exprimido" (305). El proyecto fue muy bien acogido en los círculos financieros, por lo que tenía de inyección monetaria y rechazado por el Banco de España como institución. Pero el debate entre estas dos posturas antagónicas fue finalmente resuelto a favor de esta última por un acontecimiento externo, la quiebra de la

(304) D.S.C.C., 4 de abril de 1.866, apéndice 1º al núm. 59.

(305) Tortella, Los orígenes..., p. 278.

casa inglesa Overend, Gurney and co., una de las negociadoras. Como afirma Tortella, "sin posibilidad de empréstito, sin inyección milagrosa de capital extranjero, el gobierno - español, los bancos y las compañías de ferrocarriles habían de enfrentarse solos con la crisis" (306). Una profunda crisis económica y social asolaría a España.

3.2.3.- Libertad de constitución 1.868-1.923.

La revolución de 1.868 trajo consigo una revisión de la legislación sobre sociedades y un nuevo planteamiento acerca de su papel en el desarrollo económico, a la luz de los proclamados principios de libertad. La crisis iniciada en 1.864 no produjo los mismos resultados que la de 1.846-47, que reforzó el moderantismo; por el contrario, facilitó el triunfo de una alternativa más progresista. Se ha firmado (Fontana) que la revolución triunfó con la alianza de los intereses ferroviarios, lo que marcó la actuación del nuevo gobierno (307). Ello explicaría que los grandes programas y la exultante proclamación de los principios liberales realizada en los primeros textos, firmados por Ruiz Zorrilla y Echegaray,

(306) Ibidem., p. 279. La oposición de los Bancos de emisión y descuento, en D.S. C.C., pp.956, 999, 1.25, 1.026, 1.038, 1.050, 1.055, 1.076, 1.065, 1.078, 1.082, 1.157. La desesperada defensa de Alonso Martínez, el 20 de abril, p. 1.055, cuando la quiebra de la Casa ya era un hecho, así como las posiciones a favor de comerciantes de Barcelona y Valencia, 3 y 7 de mayo, pp. 1.210 y 1.216 .

(307) Josep Fontana, "Cambio económico y crisis política. Reflexiones sobre las causas de la revolución de 1.868", en Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, 1.975 (2ª ed. revisada), pp. 99-145.

fueran retocados en un sentido de creciente intervencionismo, patente en el sector de los ferrocarriles y demás obras públicas.

El Decreto de 28 de octubre de 1.868 derogó la ley de sociedades por acciones de 1.848 y restableció el Código de Comercio en lo referente a compañías hasta que las Cortes decidieran acerca de una nueva ley de sociedades (308). Los revolucionarios de la Gloriosa adoptaron el principio de la libertad de constitución frente al intervencionismo del Bienio. Apenas un mes después de proclamada la revolución, se derogó la legislación anterior en nombre de la libertad; tanta, que el Decreto permitía a las sociedades anónimas "elegir entre la ley del 48 y el presente decreto" (309). Este texto no se refiere explícitamente a las comanditarias por acciones; quizá porque los años de desarrollo económico les hicieron perder definitivamente su protagonismo.

La confesión liberal-democrática de la revolución y la fecha, más o menos coincidente con el movimiento de liberalización del principio de la responsabilidad limitada en Inglaterra (1.856 y 1.862) y Francia (1.863 y 1.867) son razones suficientes para explicar la diferente actitud de los legisladores españoles entre 1.855 y 1.868. No queda explicado, sin embargo, el abandono de los progresistas a la sociedad

(308) C.L.E., t. 100, pp. 516-520. Para las sociedades anónimas de Ultramar, D. de 17 de setiembre de 1.869, C.L.E., t. 102, pp. 528 y 529.

(309) Esta posibilidad permanecerá en el a. 13 de la ley de 19 de octubre de 1.869.

comanditaria por acciones (su protegida en el 48), que aún en el Bienio hubiera sido capaz de canalizar eficazmente la acumulación de capital hacia la industria y el comercio. Su empeño —no necesariamente erróneo pero chocante con los principios teóricos del liberalismo— de conducir el desarrollo económico mediante el impulso previo del sistema bancario y la construcción de una infraestructura vial, aún descuidando otros sectores, caracterizan con una fuerza considerable la evolución del capitalismo en España y determinan la preocupación por fórmulas asociativas más sofisticadas.

Por otra parte, es preciso señalar que España se incorporó con relativa presteza al movimiento de liberalización del principio de responsabilidad limitada, ya que fue la tercera nación europea en hacerlo, después de Francia e Inglaterra. En la década de los setenta lo hicieron Alemania y Bélgica, Italia en 1.883, Portugal en 1.888, Suecia en 1.895, Austria en 1.899. El resto de los países europeos se incorporó con retraso al movimiento (310).

El Decreto de 1.868, en su parte expositiva, alababa la figura de la sociedad anónima y la declaraba libre de la culpa que tantos textos oficiales anteriores le habían achacado : ser la causante de la crisis económica de 1.846-48. El texto las definía como "el mecanismo más sencillo, más económico y más perfecto que el espíritu de asociación ha creado hasta el día" y como un mero instrumento que sirve para "re

(310) Sobre esta secuencia, v., por ejemplo R. Cameron, Francia y el desarrollo... p. 50.

concentrar y poner en movimiento los capitales con la mayor economía posible". Como tal auxiliar, era inocente de "todo el daño que cause quien lo maneja con torpeza o con malicia". Por el contrario, se encontraba culpable de la crisis a la peculiar organización del sistema político del momento que, con su intervención legislativa vino "a provocar la catástrofe y a poner en desastrosa liquidación a todas las sociedades anónimas entonces existentes". Ya observamos cómo esta posición no fue mantenida en 1.855-56, en el debate sobre las leyes de Bancos y ferrocarriles, en las que la mayor parte de los demócratas apoyaban la reforma parcial de la ley de 1.848. Fue, quizá, una postura posibilista, pero significó el apoyo al modelo de desarrollo económico propuesto, y al papel del Estado en él. Ahora los tiempos habían cambiado y se podía, no sólo exponer, sino llevar a la práctica el esquema liberal.

El decreto de 1.868, sentados los principios expuestos, re saltaba la nueva interpretación oficial acerca del funcionamiento de la vida económica, mucho más acorde con la doctrina clásica que la derogada. Se trata de la proclamación de la fe en los mecanismos de mercado, sostenida en la falta de economicidad que supone que el Estado se comporte como fiscal de los ciudadanos, por que mata sus energías al acostumbrarles a vivir bajo tutela y protección; porque crea un aparato administrativo caro e inútil, que no garantiza la ausencia "de una de esas crisis a las que ni los gobiernos ni los particulares pueden oponerse jamás"; porque no es eficaz en la lucha contra la crisis, para la que se revela más adecuado el continuo tanteo que pueden

hacer en libertad los agentes económicos.

Ruiz Zorrilla, ministro firmante del Decreto de octubre de 1.868, en un informe a las Cortes fechado en febrero de 1.869, reconocía que las primeras disposiciones del nuevo gobierno no podían perseguir otro fin que la proclamación de los principios revolucionarios:

"Libertad y descentralización (...) libertad de trabajo y respeto a la propiedad" (311).

El ministro, acertadamente, señalaba que "una legislación restrictiva se puede anular de una vez por un solo decreto: para formar una legislación liberal, tiempo, calma y estudio son necesarios". El optimismo doctrinal le llevó a afirmar que la iniciativa individual, en un marco de libertad, iría ganando terreno hasta el momento en que el Estado diría: "podeís suprimir el Ministerio de Fomento" (312).

De ahí que, proclamados los principios, se presentara a las Cortes en marzo de 1.869 un proyecto de ley para la libre creación de sociedades anónimas y de crédito, basado en el mismo programa del decreto anterior. Fue dictaminado en mayo, con la inclusión de alguna reforma de detalle, entre las que destaca, por su transcendencia, la presencia de refe

(311) "Memoria de las disposiciones dictadas por el gobierno provisional desde su instalación", D.S.C.C., 24 de febrero de 1.869, apéndice al núm. 12.

(312) Ibidem. La actuación de Ruiz Zorrilla ofrece muchos ejemplos de sinceridad política. Quizá el más destacado sea la respuesta que dió al rey al dimitir como presidente de gobierno, tras perder su candidato a la presidencia del Congreso en 1.873: "En todas las crisis que han ocurrido en nuestra larga vida parlamentaria, el trono se ha decidido siempre por los gobiernos en contra del voto de las Cámaras. V.M. ha de dar el ejemplo de decidirse por los representantes del país".

rencias concretas a las sociedades cooperativas, a las que se exigía su constitución mediante escritura pública (a. 2) y la elaboración y publicación de un estado sobre el capital social y el número de socios, si bien más somero que el balance exigido a las anónimas (a. 4). Ante la queja de los obreros catalanes sobre estas disposiciones, que se consideraban gravosas para las cooperativas, el 31 de mayo se retiró el dictamen. El 28 de junio, sin embargo, volvió a ser presentado sin modificación. Fue poco después de que "varios capitalistas y negociantes españoles y extranjeros" elevaran una representación para que se discutiera con rapidez (313).

El debate a la totalidad tuvo lugar el 6 de octubre, con la única intervención en contra del diputado monárquico Cruz Ochoa, que se quejó de la escasez de parlamentarios presentes, hecho que era habitual cuando en el orden del día se encontraban cuestiones mercantiles. Este diputado aprovechó la ocasión para realizar una feroz crítica a la revolución septembrina, que después de haber destruido el trono, la unidad católica, la familia.... "viene hoy a destruir lo único que teníamos aquí algo sólido en materia económico-práctica, la unidad de Bancos, el crédito, que está reconcentrado, que es tá refugiado en ese asilo económico que se llama Banco de Es paña" (314). La única crítica al proyecto, por tanto, inci-

(313) El proyecto de ley, de 22 de marzo de 1.869, en D.S.C.C., apéndice 10 al núm. 33. El dictamen, de 20 de mayo, en D.S.C.C., apéndice al núm. 78. La comisión firmante: Madrazo (presidente), Pastor y Landero (secretario), Mosquera, Chao, Echegaray (que firmó la ley como ministro en octubre), Montemar e I. Zorrilla.

(314) D.S.C.C., 6 de octubre de 1.869, p. 3.883. Desde 1.874, el monopolio de emisión estará detentado por el Banco de España.

dió exclusivamente en la pluralidad de Bancos de emisión. La minoría republicana prefirió no intervenir, ausentándose de la Cámara.

Tras un breve debate del articulado, este proyecto fue convertido en la ley de 19 de octubre de 1.869, que "adoptó la ley francesa de 1.867 casi palabra por palabra" (315). El artículo primero fue aprobado sin discusión, tal y como había sido redactado por la comisión, de forma mucho más precisa que en el proyecto:

"Desde la publicación de la presente ley se declara libre la creación de Bancos territoriales, agrícolas, y de emisión y descuento, y de sociedades de crédito, de préstamos hipotecarios, concesionarias de obras públicas, fabriles, de almacenes generales de depósitos, de minas, de formación de capitales y rentas vitalicias y demás asociaciones que tengan por objeto cualquiera empresa industrial o de comercio".

El artículo 2º, también aprobado sin debate, obligaba a las compañías mercantiles a legalizar su existencia mediante escritura pública cuya redacción, a diferencia de lo establecido en la ley de 1.848, quedaba al libre albedrío de los fundadores, dentro de los límites formales del Código de Comercio. La disposición segunda destacaba que la posible reforma del Código de Comercio podía modificar este extremo. Así se hizo, por el artículo 151 del de 1.885, que no fue objeto de enmienda alguna. En él se determina con más precisión que en la ley de 1.869 los extremos que debían incluir-

(315) R. Cameron, Francia y el desarrollo..., p. 50. La ley, en C.L.F., t. 102, pp. 650-654.

se en la escritura social de las anónimas, cuya formalización e inscripción en el Registro Mercantil era obligatoria (a. 119). Dichos extremos son los siguientes:

- nombre, apellido y domicilio de los otorgantes.
- denominación, objeto y duración de la compañía.
- capital social, número de acciones en que esté dividido y forma de desembolso.
- forma de elegir a los administradores.
- forma de tomar los acuerdos en las Juntas generales de accionistas y modo de convocatoria de éstas.

El último párrafo establecía: "se podrá además consignar en la escritura todos los pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente establecer".

Según el artículo 3º de la ley de 1.869, las compañías deberían formalizar el acto de su constitución definitiva en un acta notarial. En el plazo de quince días deberían enviar copias de la misma, de las escrituras y de los estatutos y reglamentos "si los hubiere", al gobernador de la provincia en la que estableciera su domicilio, al Ministerio de Fomento y, para su publicación y "que lleguen al conocimiento del público", a la Gaceta de Madrid y al Boletín Oficial de la provincia. Es la sustitución del principio de la inspección y del control por el de la publicidad (316).

Los principios que sustentaban la legislación de 1.869 no se modificaron en el resto del período estudiado,

(316) La precisión sobre el lugar en el que debían publicarse los documentos se debe a una enmienda —aceptada sin discusión— firmada por Villalobos, García Briz, Alcalá Zamora, Herreros de Tejada, G. Rodríguez. Montesino y V. Rodríguez. D.S.C.C., 28 de mayo de 1.869, apéndice 3º al núm. 84.

aunque se produjeran, durante la Restauración, algunas reformas puntuales. Así fueron enunciados por Alonso Martínez en 1.882, cuando presentó en el Congreso el proyecto de Código de Comercio:

"libertad amplia de los asociados para constituirse como tengan por conveniente; ausencia completa de la intervención gubernativa en la vida interior de estas personas jurídicas; publicidad de los actos sociales que puedan interesar a terceros..." (317).

El ministro, asimismo, anunció que en el proyecto "se omiten todas las trabas y limitaciones que las diversas leyes anteriores establecían para la constitución de las sociedades mercantiles" (318).

Estos principios no se cuestionaron en el debate sobre el proyecto del Código y la libertad de constitución de las compañías fue consagrada al transformar el artículo 1º de la ley de 1.869 en el 117 del Código de Comercio.

Como ya se ha afirmado, las responsabilidades del gobierno no llevaron al primer gabinete postrevolucionario a matizar su programa demo-liberal. De ahí que, en el proyecto de 1.869, se incluyera una disposición que suspendía la creación de bancos en aquellas ciudades en las que hubiere alguno con privilegio exclusivo, hasta que éste caducara (a. 14). La Comisión, en nombre de la libertad, suprimió este artículo. No obstante, la presión de los bancos y del propio go-

(317) D.S.C., 20 de marzo de 1.882, apéndice 38º al núm. 85, p. 12.

(318) Ibidem, p. 13.

bierno —comprometido con ellos— la obligaron a aceptar su inclusión de nuevo (319). En su discurso, el ministro de Hacienda, Ardanaz, puso, por encima de los principios, la necesidad de respetar las negociaciones pendientes de los Bancos privilegiados con el Estado y con grupos extranjeros.

En el período considerado, sólo hubo un intento de modificar los requisitos para la constitución de las sociedades anónimas, en forma de una proposición de ley presentada por Pí y Arsuaga en 1.903. No se llegó a debatir. Ni siquiera fue defendida por su autor, por lo que sólo reseñaré que pretendía introducir ciertos controles (forma de realizar el balance, depósito previo, valor y tipo de las acciones y forma de emitir las obligaciones...) así como la creación de un Registro Central de Sociedades Anónimas y un Diario oficial de Sociedades Anónimas (320). La ausencia de éste fue pronto subsanada por la iniciativa privada. Aquél siguió siendo uno de los objetos del Registro Mercantil (v. 3.5 de este capítulo)

Otro asunto sobre el que se pronunció la legislación de 1.869 fue la tipificación de las sociedades. El Decreto de 20 de septiembre de 1.869, firmado por Echegaray y que fijó las bases para la redacción del Código de Comercio, criticó la normativa del anterior, que sólo reconocía "estos tres tipos clásicos, ya viejos e insuficientes...", que eran las colec-

(319) La expresión parlamentaria de esta opinión fue la enmienda firmada por diputados "de peso" como Cantero, Santa Cruz, Cirilo Alvarez y Olózaga, entre otros (D.S.C., 28 de mayo de 1.869, apéndice 3º al núm. 84), que fue defendida por el ministro de Hacienda, Ardanaz (D.S.C., 6 de octubre de 1.869, p. 3.892).

(320) D.S.C., 3 de diciembre de 1.903, apéndice 2º al núm. 90.

tivas, las comanditarias y las anónimas. Este texto no ofreció una clasificación nueva y más completa. Se limitó a considerar que la vigente tipificación sólo contemplaba las relaciones externas de las sociedades y no las internas; es decir, que sólo acudía a lo que une a las compañías con terceras personas y así realizaba una clasificación según la responsabilidad y no lo que enlaza a los socios entre sí (321).

Esta interpretación fue recogida en el Código de Comercio de 1.885, aunque tampoco en este caso se propuso una nueva ordenación. Su artículo 123 reprodujo la clásica tipificación, si bien la acompañó de la locución "por regla general", que dejaba la puerta abierta a posibles nuevas clases de sociedades. En el artículo 123 se consigna una enumeración de las compañías "por la índole de sus operaciones", que es la siguiente: sociedades de crédito, bancos de emisión y descuento, compañías de crédito territorial, de minas, bancos agrícolas, concesionarias de ferrocarriles, tranvías y obras públicas y almacenes generales de depósitos. También aquí se introduce una cláusula de salvaguardia al afirmar la legalidad "... de otras especies, siempre que sus pactos sean lícitos y su fin la industria y el comercio". Llama la atención el hecho de que precisamente las sociedades dedicadas específicamente a fines industriales no merecieran mención explícita. Tiene su explicación al observar que sólo las enumeradas merecieron una regulación especial en el Código de Comercio,

(321) C.L.E., t. 102, pp. 544 y 545.

como ya fue mencionado. Los artículos 176 a 219 se ocupan particularmente de estas sociedades. No afectan al modo de constitución sino de forma especial a las acciones y las obligaciones, por lo que serán tratados en el próximo apartado.

Estos artículos fueron objeto de crítica en el debate a la totalidad del proyecto del Código de Comercio, por parte de un grupo de diputados que proponían la explícita inclusión de la sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo se concibió para llenar el vacío existente entre la pequeña compañía personalista y la de capital, de dimensiones mucho mayores. Pretendía unir las ventajas de aquélla —pocos socios, simplicidad en los trámites de constitución y funcionamiento— y las de ésta —responsabilidad limitada—. Los comerciantes ingleses, franceses, alemanes, italianos y, desde luego, los españoles, buscaron su propia solución al margen (que no en contra) de la ley, legalizando sus pactos mercantiles mediante documentos notariales que eran mera expresión de acuerdos privados. Esta era una situación incómoda que la legislación europea fue paliando a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX.

Puede distinguirse el sistema inglés, que reconoció legalmente estas private companies en la Companies Act de 1.907, aunque eran habituales desde el último tercio del siglo XIX y el sistema alemán, que en la ley de 1.892 extendió a la compañía colectiva los beneficios de la responsabilidad limitada. En Francia fueron reguladas en 1.925 y en Italia fue-

ron incluidas en el Código de Comercio de 1.922 aunque en am bos países existían mucho antes (322).

En España estas compañías no se regularon hasta 1.953 aunque su existencia era también muy anterior. Su inclusión explícita en el Código de Comercio de 1.885 fue demandada, sin éxito, por un grupo de diputados que representaban intere ses mercantiles. La discusión ya fue reseñada en otro lugar. ¿Por qué fue rechazada la propuesta, lo que hubiera convertido a España en el primer país que regulaba este tipo de sociedades?.

La posición de la Comisión dictaminadora del proyecto del Código de Comercio y del Gobierno en 1.883 fue la de con siderar que estas sociedades podían constituirse legalmente al no estar prohibidas explícitamente por el Código (323). Se ha afirmado que la razón de que España no fuera el primer país en legislar sobre estas compañías fue la incompatibilidad de la propuesta de Fabra y Floreta, presentada fuera de plazo, con unas normas reglamentarias que imposibilitaban su viabilidad, debido al rígido procedimiento de discusión del proyecto (324). Sin negar el carácter coadyuvante de este

(322) Carlos Prieto González, "Los orígenes de la sociedad de responsabilidad limitada en España", Revista de Derecho Mercantil, núm. 108, 1.968, pp. 215-222.

(323) D.S.C., 24 de enero de 1.883, p. 612; 15 de febrero, p. 947. No considero relevante la promesa de revisión del asunto en el Senado —que no se hizo— o la cínica observación de Alonso Cast rillo de que si no fuera por los problemas formales del plazo y el procedimiento de discusión, él se mostraría partidario de admitir la enmienda.

(324) C. Prieto, "Los orígenes...", p. 245, Fabra presentó su enmienda fuera de plazo debido al retraso con que se le aceptó su acta de diputado por Orense.

hecho, que podía haber sido subsanado al debatirse el texto en el Senado, pienso que hay que tener en cuenta otras dos razones, a mi juicio más importantes:

1) la falta de elaboración de la propuesta de Fabra y Floreta y su incapacidad para conseguir apoyos. Ningún diputado la presentó como suya dentro del plazo consignado para las enmiendas. Ni siquiera Maciá y Bonaplata o Bosch y Labrús que se proclamaron partidarios de la misma, una vez formulada.

2) la mayor fuerza y la mejor posición de los partidarios de la postura contraria, que se encontraban en la Comisión y el Gobierno. Para ellos, la tan mentada locución "por regla general" del artículo 122 permitía la constitución de este tipo de compañías que, a su juicio, no necesitaban de más regulación.

En apoyo de esta interpretación de la derrota de la propuesta de Fabra se encuentran otros dos hechos. En primer lugar, que en España no se sentía como en otros países la necesidad de formalizar legalmente este tipo de compañías, tanto porque la constitución de sociedades anónimas era, desde 1.869, notablemente más sencilla que en otros países como por la conducta de nuestros comerciantes. Estos, si así lo necesitaban, formalizaban en escritura pública unos pactos sociales que eran, de hecho, sociedades anónimas con razón social. A mi juicio, dichos pactos tienen un claro antecedente en las comanditarias por acciones. Ello explica la relativamente tardía demanda de regulación de la sociedad de responsabilidad

limitada y enlaza con el segundo hecho a que me refería Cuando, al fin, en España, se desatan de nuevo las propuestas desde círculos jurídicos (Castellar, 1.895) y económicos (Cámara de Comercio de Valencia, 1.909), los términos de la polémica originada así como sus resultados fueron idénticos a los expresados en 1.883 (325).

La polémica mencionada se agudizó desde 1.914, volviendo a las Cámaras en 1.915 con una proposición —fallida— de Carner (326) y continuando más allá del período que nos ocupa, sin que los partidarios de la regulción especial de este tipo de sociedades lograran una ley hasta 1.953, dos años después que la de las anónimas. No podemos afirmar con rigor si la reflexión del diputado Carner en 1.915 estaba sostenida en una cuantificación del fenómeno. En dicho momento, sostuvo que si estas compañías no se creaban era por temor a que, en caso de quiebra y dada la ausencia de legislación, los jueces se inclinaran por la responsabilidad ilimitada de los directores. La inclusión de las sociedades de responsabilidad limitada en el Reglamento del Registro Mercantil en 1.919 (a. 108) y en la ley de utilidades un año después, parece que le dan la razón.

(325) Un resumen de esta polémica en C. Prieto, "Los orígenes...", pp. 223 a 228.

(326) D.S.C., 12 de febrero de 1.915, apéndice 4º al núm. 110.

3.3.- La centralización del capital.

3.3.1.- La legislación general.

Una asociación mercantil adopta la forma de sociedad anónima debido a las ventajas que supone para la centralización del capital exigida con mayor fuerza a medida que se desarrollaba el capitalismo. Las grandes empresas, desde el Antiguo Régimen adoptaron esta fórmula de compañía. En la segunda mitad del siglo XIX y, sobre todo, en el XX, la anónima se fue extendiendo a los diferentes sectores de la industria.

La sociedad anónima constituye su capital mediante la emisión y venta de acciones de idéntico valor que son las únicas sujetas a responsabilidad. De esta forma, el capital puede incrementar su volumen sin por ello elevar el riesgo de los participantes (accionistas) más que en la cuantía que cada uno esté dispuesto a asumir. Es, pues, la fórmula idónea para atraer el ahorro disperso, para estimular a la inversión a grupos sociales cada vez más amplios.

El capital dividido en acciones es lo que va a permitir operar a estas compañías. Su emisión, desembolso, negociación, aumento o disminución va a estar sometido a ciertas reglas a lo largo del período estudiado. Estas normas responden al espíritu del legislador, que ha sido analizado en el apartado anterior y, con aquél, fueron más o menos rígidas. Estas páginas se ocupan del análisis de los problemas mencioo

nados respecto a las acciones así como del principal mecanismo legal para la obtención de fuentes complementarias de recursos: la emisión de obligaciones o títulos de renta fija.

La legislación sobre estos problemas confirma y refuerza la imagen de un estado que promueve determinados sectores —sociedades de crédito y obras públicas— dejando en inferioridad de condiciones a las sociedades industriales y mercantiles. La legislación general es escasa y veda durante muchos años (1.848-1.868) la posibilidad de emisión de acciones al portador y de obligaciones, que las sociedades de crédito y de obras públicas pudieron realizar desde 1.856.

a) El capital social y su desembolso: Entre 1.829 y 1.847, una sociedad anónima no tenía que ajustarse a ninguna norma general respecto al monto de su capital social y su realización sino que debía limitarse a la observancia de sus reglas particulares que, como hemos visto, eran aprobadas de trámite por los Tribunales de Comercio.

Esta inicial etapa de indefinición legislativa, presidida por el Código de Comercio repercutió en la formación de sociedades que comenzaron a actuar con una divergencia asombrosa entre su capital efectivo y el nominal (v. cap. 4). La crisis de 1.846-48 no puede ser explicada únicamente por ello ya que actuaron factores económicos de repercusión internacional. No obstante, en España era el fenómeno más llamativo y sobre él, sobre las sociedades anónimas, actuó el gobierno moderado. En el terreno que ahora interesa, citaré

cómo el Real Decreto de 15 de abril de 1.847 dispuso en su artículo 3º que las compañías por acciones deberían tener un capital proporcionado a su objeto, colocado en su mitad y hecho efectivo en la cuantía que determinara su Real Decreto de autorización, antes de comenzar sus operaciones. Estas precauciones, destinadas a evitar la formación de sociedades puramente especulativas, fueron reproducidas en el proyecto de ley presentado el mismo año y precisadas por la Comisión dictaminadora, que estimó que el capital que debería hacerse efectivo previamente no podría ser nunca superior al 25% (327).

El porcentaje de capital suscrito y desembolsado motivó dos breves intervenciones en el Congreso. Mendizábal defendió —sin éxito— una reducción a la mitad del capital que debería estar suscrito al hacer una solicitud de compañía que, en su opinión, debía ser únicamente del 25% (328). Mientras fracasaba esta demanda progresista, triunfaba otra que permitía a los fundadores de las sociedades incrementar las garantías de la ley. Se trata de la adición de Fuentes al artículo 9 en el sentido de que los suscriptores pudieran —si así lo deseaban— incrementar la proporción de capital comprometido (329).

De este modo, según la ley de 27 de enero de 1.848 y re-

(327) D.S.C., 16 de abril de 1.847, apéndice. La lista de suscriptores con sus cartas de pedidos de acciones (que tenía fuerza legal) debería ser presentada a la hora de hacer la solicitud (a. 6).

(328) D.S.C., 21 de abril de 1.847, pp. 1.464 y 1.465.

(329) Ibidem, p. 1.465.

glamento posterior, entre esta fecha y 1.868, una sociedad por acciones debía tener un capital social fijo y cubierto en su mitad antes de constituirse definitivamente. La totalidad del capital debía ser cubierto en el plazo estipulado por cada Real Decreto de autorización.

Entre octubre de 1.868 y enero de 1.886 las normas anteriores son sustituidas por el poco preciso Código de Comercio de 1.829. Esta indefinición acaba con la entrada en vigor del nuevo Código mercantil, que prescribe que en la escritura social se anote "el plazo o plazos en que habrá de realizarse la parte del capital no desembolsado al constituirse la compañía, expresando en otro caso, quién o quiénes quedan autorizados para determinar el tiempo y modo en que hayan de satisfacerse los dividendos pasivos" (a. 151).

En síntesis, en 1.886 se continuaron los principios enunciados en 1.868 sobre las sociedades anónimas. En primer lugar, libertad: la compañía debe señalar el monto de su capital social; ella misma y no el gobierno, como entre 1.848 y 1.869, debe consignar el desembolso del mismo. En segundo lugar, publicidad: ambos extremos deben quedar reseñados en la escritura pública de constitución de la sociedad.

b) Las acciones y sus tipos: Una acción representa una parte alícuota del capital de una compañía. Tiene un triple carácter; por una parte, es el signo representativo del capital social o de la participación en el haber de una entidad mercantil y, en cierto modo, título de propiedad; por otra,

es el título necesario para el ejercicio de los derechos de socio y, en tercer lugar, representa la obligación de pagar los dividendos pasivos mientras no está totalmente liberada.

El Código de Comercio de 1.829 estableció que la representación de la propiedad de las acciones podía hacerse "por títulos de crédito reconocido" o "por su inscripción en los libros de la compañía" (aa. 280-282); las acciones podían ser al portador si estaban totalmente desembolsadas (a. 281).

Durante el período 1.847-1.868, el estricto control a que se sometió a las sociedades por acciones hizo que sólo se admitiera la emisión de acciones nominativas que, evidentemente, permiten un funcionamiento menos ágil que las acciones al portador debido, sobre todo, a la mayor dificultad que implica su transmisión. El artículo propuesto por el gobierno y que permaneció en la ley es el siguiente:

"Artículo 12. Hasta que se haya declarado constituida la Compañía no se podrá emitir ningún título de acción. Las acciones en que se divida el capital de la Compañía estarán numeradas y se inscribirán en el libro de registro, que habrá de llevarse necesariamente a nombre de la persona o corporación a quien corresponda" (330).

Esta normativa restrictiva no fue aceptada sin oposición. El gobierno pretendía con la autorización exclusiva de acciones nominativas que no se pudieran emitir hasta haber conseguido el Real Decreto de autorización (aunque desde este misis

mo momento pudieran cotizarse en Bolsa como valores comunes de comercio) y evitar una nueva crisis especulativa. La Comisión dictaminadora consideró excesivo este control y propuso que un tercio de las acciones —y siempre que estuvieran totalmente liberadas— pudieran ser al portador (331). Esta divergencia entre proyecto y dictamen fue discutida en el Congreso (21 de abril de 1.847) y en el Senado (22 a 24 de diciembre) con el resultado mencionado.

En la Cámara baja se produjeron dos intervenciones a favor de que todas las acciones fueran nominativas. Fueron las de Fuentes y Miguel Polo. Sus discursos estaban basados en la amenaza de la crisis económica, facilitada por las especulaciones fraudulentas que permitían las acciones al portador, con su fácil transmisibilidad. El primero solicitó, incluso, que se impidiera la especulación a las propias compañías, prohibiendo la práctica de sacar al mercado las acciones de reserva cuando el negocio estuviera asentado, para venderlas con ganancia. Bertrán de Lis y Miota, por la comisión, fueron los encargados de responder a estos oponentes. Lo hicieron con el único y pobre argumento de que las acciones al portador eran necesarias para incorporar como inversores a aquellos individuos de prestigio que preferían mantener el anonimato. Era, desde luego, un momento en el que había que facilitar la inversión y evitar aquellas medidas que pudieran dificultarla. La comisión, sin embargo, participaba del sentir

(331) D.S.C., 16 de abril de 1.847, apéndice 5º al núm. 76.

expresado por los enmendantes y aceptaban que las acciones al portador suponían un mayor riesgo de fraude. Tras este pobre debate, fue aprobado el artículo tal y como la comisión lo propuso frente al criterio gubernamental. Ello indica que, a pesar de la crisis brusátil, seguía existiendo una demanda de capitales y de facilidad para su centralización y negociación, que finalmente se impuso entre los diputados (332).

El debate fue más rico en el Senado, donde triunfó la primitiva propuesta gubernamental. Quizá porque desde abril a diciembre de 1.847, fechas del debate en ambas Cámaras, la situación económica en toda Europa había empeorado sensiblemente; quizá por la mayor coherencia y fortaleza del moderantismo radical en la Cámara Alta. A favor de que todas las acciones fueran nominativas se manifestaron el Marqués de Vallgornera, Pérez Seoane y Peña Aguayo, que lograron hacer triunfar su tesis frente a otros senadores —López Ballesteros— y la Comisión —Sáinz de Andino—, que ahora eran apoyados por el gobierno —Bravo Murillo—.

Los oponentes señalaron que las acciones al portador no suponían ninguna ventaja añadiendo, sin embargo, dos inconvenientes. El primero, aumentar la masa de papel al portador que ya existía con abundancia en Madrid. El segundo que "son un medio de corrupción para que se interesen en las operaciones ciertas personas influyentes sin dar sus nombres, y este medio es inmoral hasta el extremo" (333). De nuevo se acudía

(332) D.S.C., 21 de abril de 1.847, pp. 1.465 y 1.466.

(333) D.S.S., 23 de diciembre de 1.847, p. 274. Se trata de la intervención del Marqués de Vallgornera. Sobre lo mismo, Pérez Seoane (p. 277) y Peña Aguayo (p. 284).

a la crisis bursátil y al juego que en los años inmediatamente anteriores llegó a afectar incluso a las esferas gubernamentales, para proponer una medida de restricción general. De hecho, el juego y el fraude continuaron desarrollándose en la Bolsa y fuera de ella, sobre valores públicos y privados. La legislación restrictiva no se reveló como el medio eficaz para acabar con el juego y, desde luego, con la crisis. Dificultó, sin embargo, el libre desenvolvimiento del mercado con todo lo que éste pueda tener de positivo en un momento de inicio de la industrialización.

Por la Comisión, y a favor de un cierto cupo para las acciones al portador intervino Sáinz de Andino, cuyo discurso fue apoyado por Bravo Murillo y López Ballesteros sin que incorporaran a los suyos nuevos argumentos (334).

Sáinz de Andino insistió en el hecho de que los fraudes de aquellos años no fueron cometidos con acciones al portador sino, precisamente, nominativas. Afirmó que aquéllas estimulaban la inversión ya que "en las sociedades anónimas lo que se requiere principalmente son capitales. Es del todo punto indiferente el nombre de los simples accionistas", que sólo es necesario hasta que todo el capital sea desembolsado (335).

La acción al portador —afirmó— es, incluso menos peligrosa que la nominativa si aquella —como prevé la Comisión—

(334) Ibidem, pp. 276 a 292.

(335) Ibidem, p. 276.

está totalmente desembolsada, ya que su tenedor, seguramente, se limitará a percibir su renta sin jugar sobre ella. Sáinz de Andino buscó argumentos de autoridad en la legislación francesa, que admitía sin límites las acciones al portador (aa. 35 y 36 del Código de Comercio) así como en la propia definición de la sociedad anónima como asociación de capital y no de personas. La acción al portador proporciona —sigue el senador— más movilidad al capital, siendo sus ventajas mayores que sus inconvenientes, por lo que hay que desechar la desconfianza que llevaría a acabar con todos los títulos al portador, cuales son los de la Deuda o los de Banco (336).

El largo y enfático discurso de este senador, que veinte años antes había redactado el Código de Comercio que ahora se cuestionaba, y el apoyo del gobierno, no tuvieron el efecto deseado. El Senado rechazó el proyecto del Congreso y el dictamen de la comisión y aprobó el artículo tal y como fue reproducido al comienzo de este epígrafe. Así fue aceptado por la comisión mixta y transcrito en la ley. Durante veinte años, las sociedades industriales y mercantiles vieron vedada la posibilidad de emitir acciones al portador, lo que impidió un eficaz método de captación de capital. Esta norma fue reformada en el Bienio progresista, pero sólo para aquellas sociedades que merecieron legislación especial —sociedades de crédito y obras públicas—.

Con arreglo a la ley, las sociedades no podían realizar

(336) Ibidem, pp. 279 a 284.

su primera emisión de acciones hasta que no se hubieran constituido definitivamente, cosa que no se podía conseguir hasta haber suscrito la mitad de su capital social. La Real Orden de 16 de abril de 1.853 (337) denunció el hecho de que se emitían "títulos provisionales de acción", que circulaban como valores de crédito cuando la sociedad estaba aún en la fase de proyecto. No se dictaron sanciones ni se volvió a producir una llamada de atención del gobierno, lo que no quiere decir que hubieran desaparecido las infracciones sino, más bien, que en una coyuntura económica alcista se relajó la aplicación de la ley.

La ley de 1.869 permitió —cosa que fue aceptada en la Cámara sin debate— que todas las sociedades anónimas emitieran acciones nominativas o al portador, sin ningún tipo de restricción (a. 5).

El Código de Comercio de 1.885 fijó definitivamente las reglas al respecto, en la línea de matización al liberalismo radical de 1.869 que le caracteriza. Todas las acciones serían nominativas hasta que estuviera desembolsado el 50% de su valor facial. Pasado este límite podrían convertirse en acciones al portador, si así estaba consignado en sus estatutos o se acordaba en una Junta General. Como garantía, se incluyó la obligación de que en el título de acción constara la cuantía de capital desembolsado (aa. 161 y 164) (338). Las su

(337) C.L.E., t. 48, pp. 307-308.

(338) El mencionado proyecto de Pí y Arsuaga en 1.903 pretendió sin éxito que todo el capital de una sociedad estuviera suscrito en el momento de su constitución y desembolsado un 20% (a. 10). D.S.C., 3 de diciembre de 1.903, apéndice 2º al núm. 90.

cesivas series de acciones sólo podrían emitirse a medida que las anteriores se desembolsaran (a. 165).

c) Modificación del capital social.— La modificación de la cuantía del capital social suponía, de hecho, una revisión del pacto social e implicaba la realización de los trámites inherentes a la formación de una nueva compañía. Entre 1.829 y 1.848, la decisión se tomaba con arreglo a los estatutos de cada sociedad y debía ser comunicada —en forma de nueva escritura— al Tribunal de Comercio correspondiente. Entre 1.848 y 1.868, la decisión social debía ser confirmada por Real Decreto para que pudiera aplicarse. Desde 1.868 se volvió al régimen de libertad que suponía el Código de Comercio.

La falta de regulación precisa sobre este tema fue subsanada por el nuevo Código y su liberalismo matizado. El mismo artículo que se ocupa de la modificación de los estatutos, autoriza a las Juntas Generales de Accionistas a decidir sobre el aumento o reducción del capital social (a. 168). Para ambas cosas se introducen ciertas reglas destinadas a proteger al pequeño accionista y al resto de los acreedores de las compañías. En primer lugar, este punto debía estar anunciado en la convocatoria de la reunión; en segundo, la existencia de un cierto quorum en la reunión, que debía ser reseñado en los estatutos de cada compañía y que, en ningún caso, podía ser inferior a los dos tercios del capital nominal y de los socios. Esta norma pretendía que una minoría de grandes ac-

cionistas no pudieran imponer sus decisiones a una mayoría de pequeños poseedores de títulos. Por último, se estipula que la reducción del capital social sólo puede hacerse si que da la sociedad con un efectivo superior en un 75% a las deudas y las obligaciones de la compañía. Esta norma pretendía salvaguardar los derechos de los acreedores.

El proyecto del Código de Comercio presentado en el Congreso de 1.882 proponía que cada compañía regulara este extremo en sus estatutos. En caso de que no lo hiciera, se establecía la unanimidad para tomar cualquier decisión que implicara reforma del capital social.

Este artículo fue objetado en el Congreso, pero debido a que no lo fue mediante enmienda sino en un discurso contra la totalidad, no fue considerado (338). En realidad, aunque fue presentado por los oponentes como un artículo restrictivo, permitía una gran libertad a las compañías que, sin violar la ley, podían estipular en sus estatutos cualquier norma para realizar su reforma. Este extremo, y quizá por esta razón, fue reformado por la comisión dictaminadora del Senado y aprobado sin debate tal y como se ha señalado en un párrafo anterior (339).

Desde 1.886, por tanto, para reformar el capital social se requería un quorum de dos tercios, tanto del capital social como del número de socios. El desarrollo de la sociedad

(338) D.S.C., 24 de enero de 1.883, p. 610.

(339) D.S.S., 17 de junio de 1.885, apéndice 5º al núm. 149, p. 15.

anónima y la generalización de las acciones al portador imposibilitaron el cumplimiento de este último requisito pues el número de socios no podía ser cuantificada. De ahí que desde 1.903 se propusiera la reforma del artículo 168 del Código, en el sentido de facilitar la toma de decisión que nos ocupa. Entre esta fecha y 1.910, esta reforma fue solicitada en tres proposiciones y un proyecto de ley que no lograron su desarrollo parlamentario completo; no tanto por la voluntad de apoyo a un artículo que era, en realidad, letra muerta si no por los problemas inherentes al funcionamiento parlamentario (340). Finalmente, la proposición de ley del diputado Salvador Raventós (341) de julio de 1.910, siguió la tramitación parlamentaria hasta convertirse en la ley de 19 de junio de 1.911 (342). En ella se estipuló que en primera convocatoria se exigiera la mayoría de dos tercios del capital social y, si las acciones eran nominativas, también de los socios. En segunda convocatoria, bastaba con una mayoría simple. De esta forma se facilitaba la toma de decisiones en

(340) Proposición de ley de Pí y Arsuaga, en D.S.C., 3 de diciembre de 1.903, apéndice 1º al núm. 90; de Raventós, en D.S.C., 14 de febrero de 1.906, apéndice 6º al núm. 87; de Osorio, Ibidem, apéndice 11º proyecto de ley de Armada Losada, D.S.C. 24 de julio de 1.908, apéndice 1º al núm. 264.

(341) Este diputado inició sus lides parlamentarias en 1.906, precisamente con este tema. Era indudable su capacidad como jurista especializado en cuestiones mercantiles. Fue pasante en el gabinete de Canalejas, al que estaba adherido políticamente, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, presidente de los "Previsores del Porvenir" y consjero de los ferrocarriles del Sur.

(342) La ley, en C.L.E., t. 41 (2º vol. de 1.911), pp. 706-707. La proposición de Raventós, D.S.C., 12 de julio de 1.910, apéndice 22 al núm. 23. El dictamen del Congreso, en D.S.C., 18 de mayo de 1.911 (apéndice 1º al núm. 37); al día siguiente fue aprobada sin debate (p. 941). Este, en el Senado versó sobre cuestiones de procedimiento y se aprovechó para introducir el tema de las suspensiones de pagos (D.S.S., 17 de junio de 1.911, pp. 899-901, y 19 de junio, pp. 905-909).

unas sociedades cuyo capital disperso hacía cada vez más difícil la reunión de Juntas numerosas.

d) Las obligaciones.— La emisión de obligaciones es el mecanismo utilizado por las sociedades para conseguir efectivo sin aumentar su capital social. Equivale, de hecho, a un préstamo, a plazo más o menos largo, a cambio de un interés fijo, con garantía en el activo social.

El obligacionista es un acreedor de la sociedad que no participa en sus beneficios; recibe, a cambio de su dinero, un interés fijo e independiente de la marcha de la empresa. La emisión de obligaciones es, pues, el mecanismo para atraer a la inversión aquellos ahorros cuyos poseedores no quieren asumir el riesgo que implican las acciones, cuyo interés depende de los beneficios sociales.

Sólo la ley de 19 de octubre de 1869 autorizó al conjunto de sociedades anónimas a realizar emisiones de obligaciones (343). Hasta dicho año, sólo disponían de autorización precisa para ello las compañías de ferrocarriles y las de crédito. A ello hay que añadir las emisiones subastadas por el Estado para financiar las obras públicas, fundamentalmente carreteras y traídas de agua (344). Según la ley de 1.848, las sociedades debían someter sus estatutos y reglamentos así como cualquier reforma de los mismos a la aprobación del gobierno (a. 11) y no podían emitir ningún documento al

(343) C.L.E., t. 102, pp. 650-654.

(344) Ejemplos en la ley de 19 de junio de 1.855 (canal de Isabel II), R.O. de 15 de abril de 1.856 (carreteras), R.O. de 1 de abril de 1857 (carreteras de Madrid).

portador "al no hallarse autorizada por la ley" (a. 15). Es decir, que toda emisión de obligaciones estaba sometida a la misma tramitación legislativa que la autorización para la constitución de las sociedades.

Los artículos 8 y 9 de la ley de 19 de octubre de 1.869, que tratan sobre la emisión de obligaciones, fueron aprobados en el Parlamento sin apenas debate y sin, desde luego, oposición alguna al fondo. El primero de los mencionados permite a las compañías "emitir obligaciones al portador con las condiciones que estimen convenientes, siempre que así lo consignen en sus estatutos, y a condición de poner cada emisión en conocimiento del público, así como del gobernador de la provincia y del Gobierno, dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha del acuerdo"

En esta disposición vemos, una vez más, plasmados los principios predicados por la Gloriosa: la libertad, que sustituye a la tutela y la publicidad, que se considera una garantía contra el fraude más efectiva que el control a base de trámites complicados.

Este último principio es el que inspiró el artículo 9, que obliga a las compañías a consignar en los balances las emisiones de obligaciones (nominativas o al portador), su valor nominal, el producto ingresado en caja, la fecha de la emisión, la de amortización "y las demás condiciones del contrato para conocimiento del público".

Ramos Calderón fracasó en su pretensión de que se prescribiera a las sociedades que explicitaran en los títulos

emitidos la advertencia de que ya no contaban con la vigilancia —y por tanto la garantía— del Estado. La Comisión se negó a aceptar tal propuesta, argumentando que sería prevenir al público contra las compañías (345).

Estas normas van a regir durante todo el período. El Código de Comercio de 1.885 no se refiere explícitamente a las obligaciones de las compañías mercantiles; solamente a las emitidas por las compañías de crédito, ferrocarriles y obras públicas. Solamente en ellas se centró el debate del proyecto de Código en las Cortes. No quiere esto decir que las demás compañías no pudieran emitirlas, pues algunos artículos aluden a dichos títulos (346), sino que —como en el 69— nada se dice sobre quién, cuándo, cómo y por qué cantidad puede, una anónima, emitir obligaciones. La práctica hace que se apruebe en Junta General y que la propia prudencia de administradores y socios sea la que marque los límites a las emisiones, según el principio de la doctrina económica liberal que indica que el individuo es el mejor juez de sus intereses. En control del gobierno quedó reducido a la fiscalización (sello) y a las normas sobre su forma y dimensiones, a fin de que no se confundan con los billetes del Banco de España (347).

(345) D.S.C., 6 de octubre de 1.869, pp. 3.888-3.890.

(346) Por ejemplo, el a. 175, 4ª considera entre las atribuciones de las compañías de crédito "... encargarse de la emisión de acciones ú obligaciones de las mismas [sociedades mercantiles] "; el artículo 21, 10, regula la inscripción de "obligaciones de ferrocarriles y de toda clase que sean de obras públicas, de crédito u otras".

(347) R.O. de 16 de julio de 1.881, C.L.E., t. 127, pp. 57-58.

e) Los límites a la utilización del capital.— El Real Decreto de 15 de abril de 1.847 fue el primero que se ocupó de este tema al prohibir que el capital de las compañías se empleara "en otras negociaciones que las peculiares de su empresa u objeto", haciendo responsables a los administradores de las pérdidas que pudieran sobrevenir por el incumplimiento de esta norma (a. 7). Es, como ya hemos mencionado, una advertencia lógica, dentro de la explicación que los moderados dieron a la crisis económica. Pero aún en esta disposición se permitía a las compañías que emplearan sus fondos sobrantes en descuentos o préstamos (a. 8). Ambas normas pervivieron en la legislación del 48 y permanecieron hasta 1.869. Los préstamos y descuentos, no obstante, no podían exceder de noventa días y su garantía debía ser siempre papel de la deuda consolidada (348).

La legislación de 1.848 obligó a las compañías por acciones a la constitución de un fondo de reserva equivalente a una décima parte del capital social, que debería formarse con los primeros beneficios no repartidos (349).

Estas normas permanecen vigentes hasta 1.869, fecha desde la que no se volvió a legislar sobre estos extremos con carácter general.

Un problema central es el de la regulación de la compra de las propias acciones y del préstamo sobre ellas. No fue

(348) a. 31 del R.D. de 17 de febrero de 1.848, C.L.E., t. 43, p. 106.

(349) Ibidem, a. 1, núm. 12.

abordado por la ley de 1.848 y de ahí que fuera práctica seguida como un modo de reducir el capital social, de manipular el mercado de las propias acciones y, en el caso de los préstamos, un buen negocio para los grandes accionistas y los especuladores.

La Real Orden de 31 de mayo de 1.852, promulgada bajo el mandato de un gabinete presidido por Bravo Murillo (350), prohibió la compra de acciones por parte de las compañías a menos que fuera acordada en Junta General de Accionistas y pudiera realizarse "sin desmembrar lo más mínimo el capital social", ya que sólo podían utilizarse al efecto las ganancias líquidas. Además, sólo podrían ser objeto de la operación las acciones que estuvieran totalmente liberadas que, tras su compra, pasarían a ser patrimonio común de los accionistas.

Nada se dijo sobre los préstamos con garantía de acciones propias y ajenas. En realidad, esta actividad es poco recomendable. aunque, como recuerda Tortella, tanto esta práctica como "los préstamos a sociedades mercantiles, industriales y de transporte con garantía de las acciones de las sociedades prestatarias fue sin duda un paso transcendental hacia la técnica de promoción de empresas que tan crucial resultó ser en varias revoluciones industriales del siglo XIX y del XX" (351). De ahí su utilización por parte de Bancos y socieda-

(350) C.L.E., t. 56, p. 111.

(351) G. Tortella, Los orígenes..., p. 32.

des de crédito, que muchas veces fue abusiva y que vendría a frenar el Código de Comercio de 1.885.

Efectivamente, el vacío legislativo agudizado por la ley de 1.869, fue llenado por el nuevo Código. El proyecto permitía la compra de las propias acciones con los beneficios (a. 166) y del préstamo sobre ellas hasta un 10% del capital social y un 60% del máximo valor de cotización (a. 167) siempre que se efectuaran sobre acciones totalmente liberadas (a. 168). Los grupos encabezados por Maciá y Bonaplata y Bosch y Labrús pretendieron, en el Congreso, su supresión (352). No tuvieron éxito en su pretensión, basada en el temor a las prácticas especulativas aún con las limitaciones señaladas. Cabe resaltar que la supresión de estas prácticas era apoyada por un grupo que representaba intereses mercantiles e industriales, fundamentalmente catalanes. Alonso Martínez, sin embargo, aparte de señalar las limitaciones propuestas, consideró interesante la práctica de prestar con garantía de acciones propias para evitar que éstas salieran a la venta y disminuir su valor. Por otra parte, consideraba que la compra de acciones era beneficiosa para los accionistas, al permitir que esta operación se fuera efectuando con beneficios no repartidos. De este modo las acciones, "de gracia", no representarán capital desembolsado sino beneficios no repartidos (353).

(352) Ambas enmiendas en D.S.C., 11 de diciembre de 1.882, apéndice 11º al núm. 5.

(353) El debate en D.S.C., 12 de diciembre de 1.882, pp. 80-83.

El enfrentamiento entre la opción liberal, que estimaba beneficiosa esta práctica a la que podían renunciar las sociedades en sus estatutos y la que solicitaba una intervención del Estado prohibiendo cualquier actividad que pudiera dar lugar a una especulación fraudulenta se saldó, en el Congreso, con el triunfo de la primera. Esta sería coyuntural, pues años después, la revisión del proyecto en el Senado optó por la segunda, que fue la reflejada en el Código de Comercio de 1.885:

"A. 166. Las compañías anónimas únicamente podrán comprar sus propias acciones con los beneficios del capital social para el solo efecto de amortizarlas (...).

A. 167. Las compañías anónimas no podrán prestar nunca con la garantía de sus propias acciones".

3.3.2.- Las regulaciones especiales.

a) Sociedades de crédito.-- La ley de 28 de enero de 1.856 (354) daba a las sociedades de crédito, como hemos visto, unas posibilidades de actuación muy amplias. En el aspecto que ahora nos ocupa cabe resaltar su capacidad para "adquirir" fondos públicos y acciones u obligaciones de toda clase de empresas industriales o de crédito" (a. 4,1); "practicar la fusión y transformación de toda clase de sociedades mer-

(354) G.L.E., t. 67, pp. 96-97.

cantiles y encargarse de la emisión de acciones u obligaciones de las mismas" y emitir acciones y obligaciones al portador (aa. 6 y 7), cosa que no tenían permitido las sociedades industriales.

Para poder constituirse, una sociedad de crédito debía realizar una primera emisión de acciones que oscilaba entre un tercio y una mitad del capital social. En aquél caso, el primer dividendo pasivo, a desembolsar a los treinta días, sería de un 30%; en éste de un 25%. Si comparamos estas cifras con la ley de 1.848 obtenemos que las sociedades de crédito, en el peor de los casos se equiparaban al resto pero tenían la posibilidad de obtener una ventaja sustancial. En un ejemplo práctico, la situación sería la siguiente:

Una sociedad x, con 100 unidades monetarias (u.m.) de capital social, según la ley de 1.848 debía emitir inicialmente acciones por valor de 50 u.m. con un desembolso de 12'5 u.m.; la misma sociedad siendo de crédito, desde 1.856, tenía esa misma opción máxima y una mínima (que es la que siempre se aplicó) de una emisión de 33'3 u.m. y un desembolso de 9.99 u.m.

El límite a la emisión de obligaciones —siempre garantizadas por valores en cartera— quedaba establecido en el décuplo del capital social si estaba totalmente desembolsado y en el quíntuplo del realizado, en caso contrario. Como garantía adicional, se estipuló que la suma de obligaciones a plazos menores de un año y de las cuentas corrientes no podía sobrepasar nunca el doble del capital social (a. 7).

Estas compañías tenían permitido, además, vender y dar en garantía los valores adquiridos así como prestar sobre efectos públicos, acciones y obligaciones de sociedades (a.4, 6 y 7). El préstamo sobre acciones propias no podía exceder del 10% del capital efectivo, del 60% de su valor en la plaza y del término de dos meses (a. 4,7). Se trataba de evitar que en caso de necesidad perentoria, saliera a la venta un paquete de acciones, lo cual podía repercutir negativamente en su precio y en el crédito de la sociedad.

Esta amplia gama de posibilidades sitúa a las sociedades de crédito como el instrumento más efectivo de centralización de capital y de canalización del ahorro, que podían admitir en cuentas corrientes (a. 4,9). La ley reflejaba casi exactamente el proyecto de ley presentado en diciembre de 1.855 (355) que tuvo una tramitación asombrosamente rápida y que los progresistas se mostraban dispuestos a mantener contra cualquier crítica en el debate parlamentario que tuvo lugar entre los días 15 y 18 de enero de 1.856 (356).

El debate se centró en los siguientes puntos:

Acciones y obligaciones al portador. El moderado Avecilla propuso que las acciones debían ser nominativas mientras no estuvieran totalmente desembolsadas (357). Sostuvo

(355) DSCC., apéndice al 1º núm. 27 . Se trata del proyecto para la constitución de la compañía de los Péreire, que se tomó como base la redacción de un dictamen para el conjunto de las sociedades de crédito (DSCC, 7 de enero de 1.856, apéndice 1º - al núm. 282.

(356) DSCC, pp. 6202-6265

(357) DSCC, 16 de enero de 1.856, pp. 6226-6227

también que las obligaciones —figura y palabra importadas de Francia— eran totalmente innecesarias. Los "pagarés a la orden" que regulaba el Código de Comercio eran, a juicio del orador, suficientes para la movilización del crédito a corto plazo. Era la expresión de una inútil resistencia moderada al proyecto progresista, la manifestación —una vez más— del temor al desarrollo del crédito frente al deseo de su promoción. Estimaba Avecilla, que el que quisiera colocar sus fondos en una sociedad, lo debería hacer en acciones. Si la sociedad necesitaba más numerario, debía acudir al préstamo bancario y no a los particulares (358).

Cuantía del primer dividendo pasivo. El diputado Tomás Jaén propuso elevarlo al 50%, como un modo de incrementar las precauciones sobre estas sociedades, cuyas atribuciones consideraba excesivas (359). Al hacerlo, se apoyaba en el ejemplo francés y se situaba no sólo por encima del proyecto y dictamen, sino de la ley de 1.848.

Préstamo sobre las propias acciones. Fue también Jaén el que apoyado por Cantero y por la legislación francesa propuso que se suprimiera esta facultad de las concedidas a las compañías de crédito. Sus discursos tenían como telón de fondo el recuerdo de la especulación que en la década de los cuarenta se realizó en base a esta práctica que consistía en lo siguiente: el jugador solicitaba un préstamo, dejando en

(358) D.S.C.C., 17 de enero de 1.856, pp. 6.240-6.242.

(359) D.S.C.C., 16 de enero de 1.856, pp. 6.225-6.226.

garantía unas acciones cuyo valor había subido artificialmente. Conseguido su objetivo, acababa su jugada al alza. Cuando las aguas volvían a su cauce, la sociedad con sus arcas llenas de acciones devaluadas, se hundía. Reconocida la veracidad de una experiencia que habían conocido la mayoría de los diputados, moderados y progresistas se dividían. Aquéllos pretendían evitar el riesgo, prohibiendo la operación; éstos, con la misma intención, optaron por un cierto control que evitara la especulación tanto como que el mercado se viera inundado de valores cuando ello se podía evitar (360). La victoria, evidentemente, fue de éstos y así quedó consignado en la ley. Este criterio triunfante volvió a ser defendido por la mayoría gubernamental en 1.882, en el proyecto de Código de Comercio aunque, como hemos visto, a la larga triunfó el criterio más restrictivo. Ni la opción liberal fue cuestionada entre 1.857 y 1.868 ni la restrictiva a partir de 1.885. Se iniciaba una época de creciente intervencionismo.

Volumen de la emisión de obligaciones. De nuevo en este aspecto se enfrentaron moderados y progresistas. Aquéllos consideraban excesiva la cuantía fijada en el proyecto —y luego consignada en la ley—, ya que produciría una inflación de títulos, un exceso de capital que no se sabría dónde invertir (361). El progresismo, por el contrario, afirmaba que existía una fuerte demanda de crédito que debía ser satisfe-

(360) El debate, ibidem, pp. 6.219-6.224.

(361) D.S.C.C., 15 de enero de 1.856, p. 6.202 (Jaén); 17 de enero, p. 6.242 (Aveilla); ibidem, pp. 6.237-6.239 (Yáñez Rivadeneira).

cha. Las sociedades estaban llamadas a realizar las grandes empresas que eran necesarias al país —en primer lugar, la construcción de la red ferroviaria— y debían contar con los medios suficientes para realizarlas, a medida que lo necesitaran. La emisiones, de obligaciones, por otra parte, no podían superar el ritmo marcado por las propias posibilidades de las compañías, que no podrían realizarlas sino "por una cantidad igual a la que se haya empleado y exista representada por valores en cartera" (a. 4,5 de la ley) (362).

Las obligaciones a corto plazo. El artículo 7 del dictamen —y de la ley— posibilitaba la emisión de obligaciones a plazos menores de un año, cuya suma, unida a la de las cuentas corrientes, no podía exceder del doble del capital efectivo de la sociedad. Esta disposición venía heredada de los estatutos del Crédit Mobilier al que el gobierno francés forzó a incluir la limitación mencionada para inutilizarla. De hecho, el incremento de las cuentas corrientes supuso el paulatino descenso de las obligaciones a corto plazo (363). Como ha señalado Tortella, lo mismo sucedió en las grandes sociedades de crédito españolas, como el Crédito Mobiliario Español o la Sociedad Española Mercantil e Industrial. Pero en las pequeñas sociedades de ciudades donde la promoción industrial era inviable, aquéllas se dedicaron al descuento de letras y a los préstamos a corto plazo, utilizando las obliga-

(362) D.S.C.C., 15 de enero de 1.856, p. 6.203 (Olea), pp. 6.209-6.210 (Orense). 17 de enero, pp. 6.237-6.240 (Figuerola y Labrador).

(363) R. Cameron, Francia y el desarrollo..., p. 143.

ciones como cualquier otro banco comercial lo hacía con los billetes (364). De ahí que la profecía de Avecilla resultara acertada en parte cuando afirmó: "lo que aquí se quiere es dar emisión a estos establecimientos" (365).

Las objeciones moderadas resultaron infructuosas por cuanto, al contrario que en 1.848, no estaban favorecidas ni por la coyuntura política ni por la económica. Los artículos que versaban sobre las acciones y las obligaciones de las sociedades de crédito fueron aprobados con facilidad sin que mediara, para la mayoría de las intervenciones, sino meras respuestas de trámite.

Debemos mencionar la única enmienda que fue aceptada por la comisión sin debate. Se trata de la que proponía dar consideración de fondos públicos a las acciones de estas sociedades a efectos de contratación (366). A partir de este momento, las sociedades de crédito no sólo tenían unas posibilidades mayores —y mejores— para la emisión de sus títulos, sino también para su negociación, pues serían publicados y cotizados en Bolsa junto a los valores del Estado, frente a los del resto de las sociedades, considerados "valores comunes de comercio".

El 18 de enero, teniendo como fondo el rumor de un atentado contra las Cortes, se discutió una enmienda presentada

(364) G. Tortella, Los orígenes..., p. 62.

(365) D.S.C.C., 17 de enero de 1.856, p. 6.241.

(366) Firmada por García Briz, R. Pérez, P. Bayarri, V. Vírveda, J.J. de Fuentes, J.A. Bueno y J. Vázquez Bugueiro. D.S.C.C., 17 de enero de 1.856, p. 6.225.

por un sector moderado de la Cámara, encabezado por Yáñez Rivadeneira y que no era sino una de las tres que —con matices— se presentaron en el mismo sentido. Ese día se logró una transacción. Se trataba de incluir la exigencia de un depósito previo, en metálico, en títulos de la Deuda o en otros valores del Estado, admitidos según su cotización; tal depósito no sería devuelto hasta que se hubiera hecho efectivo el primer dividendo pasivo que señala la ley. Esta disposición trataba de evitar la proliferación de proyectos sin base real —otra vez el eterno fantasma del 48!— pues el depósito debía realizarse al inicio de la tramitación de la solicitud y no sería devuelto caso de que la constitución no se consumara en el plazo legal (367).

La Comisión consideró en sus intervenciones —Santa Cruz, Orense— que era suficiente garantía la prohibición que tenían las sociedades de emitir acciones hasta que estuvieran constituidas tal y como reza en la ley de 1.848, que en este punto no se modifica. No obstante, aceptó el espíritu de la enmienda para evitar la proliferación del proyectismo, para que todas las iniciativas que se formularan tuvieran una base real. Sentado este principio, el debate giró en torno al regateo sobre las propuestas de los enmendantes (5-3%) y se llegó a aceptar un depósito previo en torno a un 1% (368).

(367) Las enmiendas en D.S.C.C., 16 de enero de 1.856, p. 6.227; la intervención de Yáñez Rivadeneira en 18 de enero, pp. 6.250-6.251.

(368) D.S.C.C., 18 de enero de 1.856, pp. 6.250-6.259. En sentido restrictivo intervinieron Gaminde y Madoz.

La posición de los miembros demócratas de la comisión dictaminadora del proyecto, Orense y Figuerola, revela la existencia de dos actitudes diferentes respecto al Bienio en este grupo. Aquél mantuvo su posición conciliadora con el progresismo hasta el final y, sin cuestionar el depósito previo, se limitó a solicitar que todas las sociedades que tenían presentada su solicitud fueran aprobadas a la vez, para evitar agravios comparativos (369).

La actitud de Orense motivó una intervención muy virulenta de Figuerola, que afirmó:

"Llegado ya el límite de las concesiones, y seguro de mis doctrinas, no podía convenir con la que se propone en el artículo, y las Cortes me permitirán, para salvar mi responsabilidad, que diga los fundamentos en que me apoyo" (370).

Radicalmente opuesto al depósito previo, se separó de la Comisión y, específicamente del "señor marqués de Albaida [que] está pues en contradicción consigo mismo" (371). Estimaba que la aceptación de esta enmienda era una garantía extraordinaria e innecesaria que estaba, incluso, por encima de la ley "llamada restrictiva" de 1.848. Se lamentó de la existencia de multiplicidad de las normas para los diferentes tipos de sociedades y fue entonces cuando reclamó una ley general de sociedades anónimas:

(369) Ibidem, pp. 6.255-6.256.

(370) Ibidem, p. 6.260. Subrayado mío.

(371) Ibidem, p. 6.261.

"En la de ferrocarriles adoptamos un sistema; por otra enmienda proponemos otro; y cuando necesariamente para reformar el Código de Comercio debíamos de dar unidad a la legislación y hacer una ley general de sociedades anónimas y no de determinadas sociedades de crédito, que representan aquí como un cuerpo destacado...".

Se lamentó de la restricción planteada respecto al primer desembolso de acciones y de la dificultad que suponía el depósito previo, cosas que considera como una doble e innecesaria garantía:

"El sistema que adoptamos por esta enmienda es el de aristocratizar las sociedades anónimas y los grandes capitales, y sin duda ahora que marcha el mundo en cierto modo a la democracia, no debían poner trabas a sociedades anónimas de menos capital"

Frente a esta intervención, Orense sólo formuló una frase, en la que expresó con laconismo la razón de su posición:

"El Sr. Figuerola tiene razón: yo he cedido por el deseo de que pase esta ley, imperfecta como es, porque de otra manera creo que no hubiera pasado" (372).

Tras esta aclaración de las dos posiciones que mantuvieron los representantes demócratas, se aprobó, con la aquiescencia de parte de éstos, la enmienda que incluía la obligación de realizar un depósito previo de un 10% del importe del primer dividendo de las acciones emitidas, lo que suponía entre un 0'99% y un 1'25% del capital social.

La época de auge de las sociedades de crédito se sitúa

(372) Ibidem, pp. 6.260-6.262 para esta polémica. Subrayados míos.

en Europa en las décadas de 1.850 y 1.860. En España tuvieron su etapa de esplendor entre 1.856 y 1.866. La crisis económica, iniciada en los ferrocarriles en 1.864 y prolongada en los años siguientes afectó duramente a estas sociedades de cartera cuyo principal paquete de valores consistía, precisamente, en títulos ferroviarios. Cuando las aguas volvieron a su cauce, el sector estaba reestructurado y se tendió hacia una mayor concentración bancaria y a una diversificación de las inversiones (v. cap. 4).

Esta nueva situación y el liberalismo matizado respecto a 1.869 que caracteriza, como ya hemos repetido, al Código de Comercio de 1.885 hace que se reduzcan ligeramente. Los privilegios de esas sociedades de crédito a los que tan espectacularmente abrió camino el Bienio progresista. El nuevo Código se ocupa de ellos especialmente en la sección 7ª del libro segundo, que consta de dos artículos que no merecieron debate. El primero de ellos (a. 175) enumera las operaciones que pueden realizar las compañías y que equivale al artículo 4 de la ley de 1.856. De esta enumeración se ha eliminado —como para el resto— la posibilidad de realizar préstamos sobre las propias acciones. El segundo (a. 175) establece el límite de la emisión de obligaciones como en 1.856, en una cantidad igual "a la que hayan empleado y exista representada por valores en cartera" sin que —como en la ley anterior— se establezca un límite máximo respecto al capital social.

b) Bancos de emisión.— El Banco de San Fernando mantuvo su monopolio como banco de emisión desde su creación en 1.829 hasta 1.844, fecha en que tuvo que competir en la Corte con el de Isabel II y en que fue creado un tercero, en Barcelona.

El primer banco emisor estaba constituido como una sociedad anónima con un capital social de 60 millones de reales divididos en acciones nominativas de 2.000, que podían ser adquiridas tanto por nacionales como por extranjeros.

El Banco de San Fernando tenía autorizada la emisión de billetes al portador en Madrid, cuyo importe no podía bajar de 500 reales ni superar los 2.000. Podía, asimismo, efectuar descuentos de letras con la garantía de tres firmas, una de las cuales podía ser sustituida por acciones del propio Banco, cuyo nominal debía corresponder al de la letra a descontar. Por último, cabe resaltar sobre este tema, la facultad de admitir cuentas corrientes, por las que se exigía una comisión que, a partir de 1.833 desapareció (373).

Ya resaltamos cómo la actividad de promoción industrial de este establecimiento fue prácticamente nula, cómo desde 1.840 entró en el engranaje crediticio ligado a la desamortización, mediante el descuento y cobro de pagarés emitidos por los compradores de bienes nacionales o fincas desamortizadas y cómo estuvo ligado, a lo largo de su existencia a los problemas hacendísticos del Estado.

(373) R.C. de 9 de julio de 1.829, C.D.D., t. 14, pp. 215-230.

Por su parte, el Banco de Isabel II (374) fue constituido como una sociedad anónima con un capital social de 100 millones de reales divididos en acciones nominativas de 5.000. Su emisión inicial fue de un tercio, sus primeros desembolsos de un 20% y se preveía uno máximo de un 40%.

El nuevo banco podía realizar las mismas operaciones que el de San Fernando y lo hizo de una forma arriesgada. Podía realizar préstamos a "individuos o sociedades mercantiles o fabriles" de hasta un millón de reales sobre garantía de sus valores, a un interés máximo de un 6%. Esta actividad era peligrosa, pero sin duda necesaria par la promoción del crédito en los primeros momentos de la industrialización.

No estaba expresamente autorizado para prestar con garantía de sus propias acciones, pero lo hizo, y con exceso. En 1.847, en el momento de su fusión con el Banco de San Fernando, tenía dos tercios de su activo en préstamos de esta clase.

El Banco de Isabel II fue un peligroso competidor del de San Fernando y fue un instrumento de promoción del crédito y de canalización del ahorro muy superior a éste. A lo que ya ha sido resaltado, cabe añadir que lanzó a la circulación billetes de baja denominación —200 reales— frente al Banco de San Fernando, en el que los menores eran de 500. Tal emisión podía hacerse hasta el doble del capital efectivo de la entidad.

(374) R.D. de 25 de enero de 1.844, C.B.D., t. 32, pp. 129-138. R.D. de 23 de febrero (Reglamento), ibidem, pp. 260-261.

El Banco de Isabel II abrió, asimismo, una sucursal en Cádiz (1.846) que, junto al Banco de Barcelona (1.844) completa el mapa bancario de la época.

La fusión de los dos bancos madrileños en el nuevo Banco de San Fernando en 1.847, acabó con la competencia bancaria en la Corte (375). En páginas anteriores fue caracterizada esta medida como la fórmula ideada por el moderantismo para superar la crisis de ambas sociedades y para hacer frente a la que, con carácter general amenazaba al conjunto de la economía española. Aquí interesa resaltar algunos resultados de esta unión:

La nueva sociedad anónima se constituyó con un nominal de 400 millones de reales; es decir, más del doble que las dos anteriores, aunque no todo estaba hecho efectivo ni saneado, pues en parte provenía de la conversión de las acciones de los antiguos Bancos, cuya situación era crítica. Junto a esta medida, se reducía la capacidad de emisión (al equivalente del efectivo), se aumentaba el fondo de reserva de la sociedad (al 8% del capital social) y se elevaba el nominal de los billetes. Estos podían ser de 500 a 10.000 reales, aunque mediante Real Decreto se podía autorizar la emisión de billetes de 200 reales.

La legislación restrictiva tuvo su continuación en la ley de 1.849, de reorganización del Banco de San Fernando (376).

(375) R.D. de 25 de febrero de 1.847, C.L.E., t. 40, pp. 230-232.

(376) Ley de 4 de mayo de 1.849, C.L.E., t. 47, pp. 19-22

Su promulgación, cuando todavía no se había iniciado la recuperación económica, seguía siendo una expresión del temor al crédito del moderantismo. las medidas precautorias de esta ley, en el terreno tratado, consistieron en dar la exclusiva de la emisión al Banco de San Fernando —salvando a los existentes—, en limitar ésta a la mitad del valor efectivo de una sociedad a la que se había reducido su nominal a la mitad y en la elevación del fondo de reserva al 10%.

El Real Decreto de 1.851, promulgado en un momento en el que, superada la crisis, se iniciaba la recuperación económica, elevó la capacidad emisora hasta el importe del capital efectivo, sin modificar el resto de las normas citadas. Hay que considerar, sin embargo, que se reorganizaba el Banco con un nominal de 120 millones de reales, es decir, 80 menos que en 1.849 (377).

La ley sobre Bancos de emisión de 1.856, cambió radicalmente el panorama. El proyecto que fue debatido fue presentado en noviembre de 1.855 y sus disposiciones en los aspectos que aquí nos ocupan convertidos, sin modificación, en ley (378). Son las siguientes:

Las acciones que emitan los Bancos serán de 2.000 reales y totalmente desembolsadas (a. 6 P y a. 7 L) (379), la emi-

(377) C.L.E., t. 54, pp. 537-543.

(378) El proyecto en D.S.C.C., 9 de noviembre de 1.855, apéndice 3º al núm. 240; el dictamen en 21 de noviembre, apéndice al núm. 248; la ley de 28 de enero de 1.856 en C. L.E., t. 67, pp. 93-96. En el texto se citan entre paréntesis los artículos, seguidos de una P (proyecto) o una L (ley).

(379) Se exceptúan los Bancos de Barcelona y Cádiz, a los que se les dió un plazo —indeterminado— para que reclamaran el desembolso de sus acciones.

sión de billetes al portador podrá alcanzar el triple del capital efectivo y la reserva metálica queda establecida en un tercio de la emisión (a. 10 P. y l. 10 L.); los bancos de emisión —el de España, en Madrid, y los que se creen en otras ciudades— podrán "descontar, girar, prestar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobranzas, recibir depósitos, contratar con el gobierno y sus dependencias competentemente autorizadas, sin que quede nunca en descubierto" (a. 15 P. y a. 14 L.) aunque no podrán realizar préstamos sobre sus propias acciones ni negociar en efectos públicos (a. 16 P. y a. 15 L.). Como garantías se establecía la formación de un fondo de reserva igual al 10% del capital efectivo (a. 25 P. y a. 24 L.), que la suma del metálico más los valores realizados a menos de noventa días que existieran en caja y en cartera debía bastar a cubrir los débitos por billetes, cuentas corrientes y depósitos (a. 21 P. y a. 20 L.) y que los préstamos al gobierno nunca pudieran superar el capital efectivo del Banco (a. 18 P. y a. 17 L.).

La oposición a estas normas provino de un grupo de diputados encabezado por el progresista Camilo Labrador (380) y sus enmiendas fueron las siguientes:

- 1) Se debe especificar que las acciones sean nominativas

(380) El resto de los firmantes eran A. de Larrúa, I. Acha, Gil Vírveda, M. Acevedo, C.M. de la Torre y J. del Arenal. D.S.C.C., 14 de ~~enero~~ de 1.856, pp. 6.161-6.162. García Briz, en el debate a la totalidad, había propuesto que se estipulara el pago de intereses a las cuentas corrientes. No fue recogida su petición, dejando este extremo al arbitrio de cada banco (p. 5.993). El resultado fue que ninguno pagó intereses mientras que las sociedades de crédito, que sí lo hicieron, les arrebataron gran parte de la clientela.

y cotizables en Bolsa.

2) La emisión de billetes debe equivaler como máximo a la cuantía del capital efectivo para todos los Bancos, excepto para los establecidos en Madrid que, a juicio de los enmendantes debían ser dos, ya que la competencia bajaría el tipo de interés. En éstos, la emisión podría alcanzar el duplo del capital efectivo.

3) Los billetes deben tener un valor mínimo de 200 reales y uno máximo de 10.000 y no podrían ser puestos en circulación sin el timbre del estado.

4) Los préstamos al Tesoro deben estar limitados a los dos tercios del capital efectivo del Banco y siempre sobre la garantía de efectos de fácil realización.

5) Los descuentos y los préstamos no podrán realizarse por un plazo mayor de noventa días.

Se trata de un conjunto de enmiendas que tendían a incrementar las garantías de la negociación bancaria (1), limitando su actividad (4,5), reduciendo su capacidad emisora (2), aumentando el valor de los billetes.

Algunas de estas enmiendas ni siquiera fueron defendidas (1,4 y 5); una (3) lo fue muy ligeramente, siendo una mera exposición de la misma que fue respondida con la certera afirmación de que la reducción de la denominación de los billetes era necesaria "para facilitar las transacciones y facilitar el conocimiento de este signo en todas las clases" (381).

(381) D.S.C.C., 15 de enero de 1.856, p. 6.201 (Udaeta).

Efectivamente se trataba de la ampliación del sistema bancario, de la creación de unas normas que posibilitaran la extensión del crédito y, con él, de las actividades económicas. Extraña ver que las enmiendas partieron de las filas progresistas, de un hombre que, como Camilo Labrador, defendía la competencia bancaria en la Corte. En este debate, del que surgió, como observamos en un apartado anterior, una ley ambigua, en la que la extensión de los Bancos de emisión se combinaba con el mantenimiento de los privilegios al Banco de España, el progresismo se presentó dividido. Junto a la corriente mayoritaria de éste se encontraban, sin embargo, elementos destacados del moderantismo, como Pablo AVECILLA, secretario de la Comisión de citaminadora, que pudo permitirse mostrar su extrañeza de que tales objeciones provinieran de los bancos de la izquierda (382).

Este debate, como ya mencionamos, no reflejó un enfrentamiento entre moderados y progresistas, sino entre los banqueros madrileños, partidarios del privilegio del Banco de San Fernando —ahora de España— y una alianza heterogénea que, a la vez que defendían una ampliación del número de Bancos de emisión y una reducción de los privilegios del establecimiento madrileño, podían reclamar mayores garantías y restricciones en la ley. Los primeros —moderados y progresistas— se mostraron partidarios de la ampliación del crédito, una vez aprobados unos artículos que preservaban el privile-

(382) Ibidem, p. 6.200.

gio del Banco de España en el establecimiento de bancos en las ciudades más importantes (v. 3.2.2). Los segundos —moderados y progresistas— unían su deseo de ampliar el número de entidades al temor de los efectos de una emisión súbitamente elevada.

Este planteamiento puede ejemplificarse en el debate sostenido sobre la enmienda que pretendía reducir la capacidad de emisión, que fue el único digno de tal nombre.

Camilo Labrador, en la defensa de la misma, se apoyó en la crisis de 1.848 y en el temor a una posible crisis monetaria futura. En un país que desconoce "los mecanismos del crédito y los medios de desarrollarlo" —sostuvo— la triple emisión es descabellada, y mucho más cuando se piensa que va a beneficiar fundamentalmente al Banco de España:

"¿Y qué vamos a hacer? A aumentar tres veces el capital con billetes al portador: vamos a decir a los Bancos, y especialmente al de San Fernando: 'crea papel de crédito' ¿para qué, señores? Para que haga préstamos al Gobierno, y ganes con esta facultad que te damos. El Gobierno, si está apurado, dirá al Banco: 'crea papel: tú me lo darás a mí, y yo te daré interés por ese papel para el que yo te he autorizado'" (383).

Sólo considerando el temor a que esta ley convirtiera al Banco de España en un nuevo tesorero del gobierno, como lo fue el de San Fernando —previsión que no era descabellada— se puede entender que la propuesta de reducción de la emi-

(383) Ibidem, p. 6.199. Subrayados míos.

sión partiera de filas progresistas. Ahora bien, ¿por qué se propuso que los bancos de las diferentes localidades sólo pudieran emitir el equivalente a su capital efectivo?. La razón que expuso Labrador era que en Madrid "se conocen mejor las operaciones de crédito", que tiene mayor población y que "no puede desconocerse que el Banco de Madrid hace operaciones con el gobierno, y ésto le coloca en una situación especial" (384). Precisamente por ello, los enmendantes proponían restablecer la competencia bancaria en la capital de la nación.

La intervención de la comisión fue encomendada al moderado Pablo Avecilla que centró así el problema:

"La gran cuestión, la cuestión de las emisiones, está en facilitar a los Bancos la mayor emisión posible, pero garantida de manera que no pueda abusarse de ella" (385).

La confianza pública —afirmó— es lo que sostiene el credito y por ello se ha podido pasar, desde la mitad del capital de emisión en 1.849 al triple en 1.856. Y la proporción, estima la comisión, debe ser ésa dado que se establecer la pluralidad de emisión. Si hubiera un Banco único —concluye— la misión debería ser ilimitada.

La votación de esta enmienda fue nominal y rechazada por una abrumadora mayoría, 112 votos contra 26 (386).

El dictamen fue aprobado sin mayor oposición y la ley de

(384) Ibidem, p. 6.200.

(385) Ibidem.

(386) Ibidem, p. 6.201.

28 de enero de 1.856 permaneció vigente hasta la de 19 de octubre de 1.869 (387), que declaró libre la creación de Bancos de emisión, tal y como se establecía para el resto de las sociedades. Desde este momento, los Bancos quedaban capacitados para emitir billetes al portador "hasta la cantidad o límite que fijen sus estatutos" (a. 6). La libertad de emisión se consideró una consecuencia "del sistema de libertad de la ley" (388), acorde con los supuestos revolucionarios, por lo que si bien se admitió la enmienda que pretendía evitar la constitución de nuevos Bancos en las localidades en las que existiera alguno con privilegio exclusivo (389) no lo fue la solicitud de limitación del derecho de emisión (390).

Un grupo de enmendantes encabezado por Gil Bergés y entre los que se encontraba Orense y Pablo Alsina, lograron introducir en el mencionado artículo sexto, que autorizaba la emisión sin límites, una cláusula precautoria:

"En los billetes se expresarán las tres circunstancias indicadas: la relación entre el capital efectivo de la sociedad y el fiduciario, su admisión voluntaria y su carácter ejecutivo" (391).

No hubo debate acerca de ella y la promoción de su inclu

(387) C.L.E., t. 102, pp. 650-654.

(388) D.S.C.C., 6 de octubre de 1.869, p. 3.885 (Mosquera).

(389) Firmada por Cantero, Fernández Vallín, Santa Cruz, Cirilo Alvarez, Jontoya, Herrero y Olózaga (D.S.C.C., 28 de mayo de 1.869, apéndice 3º al núm. 34). fue convertida en en a. 14 de la ley.

(390) Pellón y Rodríguez (D.S.C., 6 de octubre de 1.869, p. 3.885).

(391) La enmienda fue presentada el 13 de julio de 1.869 (D.S.C.C., apéndice 6º al núm. 125) y aceptada por la comisión el 6 de octubre (ibidem, pp. 3.885-3.886).

sión por parte de elementos destacados de las filas democráticas muestra que todavía el billete de banco era un elemento poco generalizado.

El sector bancario, duramente afectado por la crisis de la segunda mitad de la década de los sesenta contaba con menos de quince Bancos de emisión en toda España en 1.874, cuando un Decreto del gobierno provisional otorgó el monopolio de emisión al Banco de España. El gobierno de Serrano, con Echegaray en Hacienda, confesó en el preámbulo al decreto, estar "decidido a establecer el Banco Nacional y la circulación fiduciaria única, sean cuales fueren los obstáculos que se le opongan; mas quiere realizar esta idea salvando intereses dignos de respeto" (392).

Los obstáculos e intereses eran los de los Bancos establecidos, que se declaraban en liquidación (a. 4). La forma de salvar sus intereses era facilitar su anexión al Banco de España, al que quedarían integrados como sucursales, cosa que aceptaron la mayoría. La banca privada quedó reducida a algunas instituciones de Barcelona, Santander y Bilbao.

La implantación de la circulación fiduciaria única era una medida necesaria a medio plazo pero el objetivo del gobierno provisional no era tanto la racionalización de la política monetaria sino la búsqueda de una entidad que actuara como prestamista del Estado. De nuevo encontramos el esquema de la concesión de un privilegio a cambio de un servicio. Así

(392) D. de 19 de marzo de 1.874, C.L.E., t. 112, pp. 477-483. La cita, p. 480. Subrayado mío.

lo confesó sin rebozo el preámbulo del decreto señalado:

"... forzoso es acudir a otros medios para consolidar la Deuda flotante y para sostener los enormes gastos de la guerra que ha dos años aflige a la mayor parte de nuestras provincias".

Ese medio es:

"... crear, bajo la base del Banco de España y con el auxilio de los Bancos de provincias, un Banco Nacional, nueva potencia financiera que venga en ayuda de la Hacienda pública sin desatender por esto las funciones propias de todo Banco de emisión" (393).

Y quedó consignado en el articulado:

"Art. 17. Como compensación de las facultades concedidas al Banco de España por aumento de capital y de emisión, prolongación de su privilegio y fusión de los Bancos de provincia, anticipará el mismo al Tesoro 125 millones de pesetas".

El único Banco de emisión se reorganizó con un capital de 100 millones de pesetas, con posibilidad de aumentarlo, mediante Real Decreto, a 150. Estaba formado por acciones de 500 pesetas, es decir, de un valor que ya era tradicional en los bancos de emisión españoles (a. 1). Su capacidad emisora era cinco veces su capital efectivo en billetes que no podían exceder de 1.000 pesetas y con una reserva metálica de una cuarta parte de lo emitido (aa. 2 y 3).

De esta forma, el volumen de los billetes en circulación vino a depender cada vez más de los problemas presupuestarios de un Estado que aumentó el tipo de emisión a medida que lo necesitaba (394).

(393) Ibidem, p. 477. Subrayado mío.

(394) Sobre este problema, Gabriel Tortella Casares, "El Banco de España entre 1.829-1.929. La formación de un Banco central", en El Banco de España. Una historia económica, Madrid, 1.970.

El Decreto de 1.874 incluyó las repetidas disposiciones que impedían realizar préstamos sobre las propias acciones (a. 11) y que regulaban la formación de un fondo de reserva del 10% del capital efectivo (a. 12).

Con este decreto se inauguró una nueva etapa del sistema bancario español, caracterizada por la existencia de un Banco de emisión único, con una amplia red de sucursales y una banca privada, forzada a reorganizarse sobre nuevas bases, con predominio de la banca mixta (395).

El Código de Comercio de 1.885 dedicó la sección octava de su libro segundo a las normas especiales sobre "bancos de emisión y descuento" (aa. 177 a 183). Cuatro de los artículos (179 a 182) regulaban la emisión de billetes y, por tanto, se referían exclusivamente al Banco de España, que conservaba el privilegio de emisión. Se trata de reglas generales que no significan innovación sobre el Decreto de 1.874.

El artículo 177 describe las operaciones bancarias (descuentos, depósitos, cuentas corrientes, préstamos, giros, contratos con el gobierno...) y el 183 regula la publicación mensual de sus "estados de situación". Ninguno de ellos fue objeto de enmiendas en el debate parlamentario, como tampoco la prohibición de realizar operaciones a más de noventa días (a. 178). Sí lo fue la segunda parte del último artículo citado, que en el proyecto estimaba que el descuento de letras,

(395) Pedro Tedde de Lorca, "La banca privada española durante la Restauración (1.974-1.914)", en Servicio de Estudios del Banco de España, La Banca Española en la Restauración, Madrid, 1.974.

pagarés u otros valores de comercio se debía hacer con la garantía de tres firmas de responsabilidad. El grupo encabezado por Maciá consideraba excesiva la fórmula y logró su rebaja a dos, tras un corto debate (396).

Analizado el marco legislativo, que tras 1.885 no se modifica en sustancia, no podemos entrar, en los límites de este trabajo, en la descripción del sistema bancario entre esta fecha y 1.923. Sobre ello, los estudios realizados hasta el momento permiten afirmar que el monopolio de emisión del Banco de España y su sistemas de sucursales, que sólo tardíamente fue incorporado por la banca privada, dió a aquél un indudable predominio en la recepción del ahorro de los particulares. Que el Banco de España concedió una atención preferente al sector público. Que sólo en el siglo XX, y "lentamente, se afianzó el modelo de banca mixta, con dedicación al crédito a corto y largo plazo y a la inversión directa en diferentes sectores económicos, contando con abundantes recursos propios y con un eficaz sistema de drenaje del ahorro disperso" (397), relacionado con la repatriación del capital español en las Antillas y con la prosperidad económica de las regiones septentrionales. La modernización del sistema bancario español fue lenta y no traspasó la barrera de los países industrializados hasta entrado el siglo XX (398).

(396) D.S.C., 12 de diciembre de 1.882, pp. 84 y 85.

(397) Pedro Tedde de Lorca, "El sector financiero y el fracaso de la revolución industrial en España, 1.814-1.913", Información Comercial Española, núm. 623, julio 1.985, p. 42.

(398) Entre los estudios que permiten realizar estas afirmaciones destacamos los de José Luis García Delgado, en S. Roldán, J.L. García Delgado con la colaboración de Juan Muñoz, La formación de la sociedad capitalista en España, Madrid, 1.973, t. II y Servicio de Estudios del Banco de España, La banca española en la Restauración, 2 vols. Madrid, 1974.

c) Compañías de ferrocarriles y demás obras públicas.— En la mayor parte del período estudiado, hablar de obras públicas es hacerlo de ferrocarriles. No sólo tienen una normativa específica sino que una parte de la legislación del sector, aun cuando se presente como general, tiene como telón de fondo el camino de hierro y sus necesidades. Quizá donde esto se revele con más claridad sea en la ley de 1.860 "sobre ampliación del uso del crédito a las compañías concesionarias de obras públicas". Esta situación lleva a que los textos, en su mayor parte, empleen la locución que encabeza estas líneas y hace que aquí analicemos, al tiempo, legislación específica de ferrocarriles y general de obras públicas.

Las compañías de obras públicas —como el resto— estaban sometidas desde 1.830 a las escasas normas del Código de Comercio, que prescribía en su artículo 294 que las compañías privilegiadas —en general las de obras públicas— se regirían por sus Reales Cédulas (leyes) de concesión. Como ya reseñamos, la Real Orden de 31 de diciembre de 1.844 —Pidal— vino a regular el sistema de concesiones ferroviarias y a dotar al sector de un sistema homogéneo. Ya fueron analizadas las disposiciones sobre la concesión y sus posibilidades de corrupción administrativa. En el aspecto que ahora interesa, cabe destacar que exigía garantías elevadas para que una compañía pudiera optar al establecimiento de un ferrocarril, a la declaración de "utilidad pública" para la empresa y a los privilegios que se consideraran convenientes. Los re-

quisitos consistían en tener las tres cuartas partes del capital suscrito (que no desembolsado) y un décimo del mismo, depositado en alguno de los Bancos de emisión madrileños (399).

Esta fue la norma que, junto al pliego de condiciones adjunto reguló el sector ferroviario hasta la ley general de ferrocarriles, de 1.855. Hasta entonces, como ya fue señalado, se presentaron dos proyectos generales (Bravo Murillo, 1.848 y Seijas Lozano, 1.850), que no prosperaron. Por otra parte, se legisló sobre el importante aspecto de las subvenciones y los privilegios a las empresas.

Bravo Murillo presentó su proyecto un mes después de aprobada la ley de sociedades por acciones y en él pretendía facilitar la fase de presentación de solicitudes por parte de las compañías que optaran a una concesión, e incrementar las condiciones para la constitución definitiva de aquéllas (400). Para la fase de solicitud, la compañía debería tener la mitad de sus acciones suscritas y quedaba eximida de la obligación de realizar un depósito previo (a. 12). Para que la concesión fuera definitiva y la compañía pudiera constituirse, se exigía que hubiera suscrito la totalidad del capital social que debería equivaler al capital presupuestado para la ejecución de las obras. Asimismo, que hubiera depositado en dinero efectivo la décima parte del valor de las acciones

(399) R.O. de 31 de diciembre de 1.844, núm. I, en Anibal Casares, Estudio histórico-económico..., anexo 8, p. 470.

(400) D.S.C., 24 de febrero de 1.848, apéndice 39 al núm. 70.

(a. 16), que podría ir retirando a medida que ejecutara las obras, y bajo la vigilancia del ingeniero inspector (a. 17).

Seijas Lozano planteó a las Cortes un nuevo proyecto "sobre caminos de hierro" a principios de 1.850, cuando la economía —a nivel internacional— presentaba los primeros síntomas de reanimación. Así se consignaba en el preámbulo, en el que a la vez que se señalaba la dificultad de reunir capitales suficientes para la construcción de ferrocarriles, se mostraba la esperanza de que la situación de paz interna e internacional lograra atraer sumas considerables hacia las obras públicas, apoyadas por el Estado en forma de subvenciones directas o garantías de un interés mínimo (401).

Este proyecto ya establecía claramente la diferencia entre empresa ferroviaria y compañía. Para poder optar a una concesión, toda empresa debía garantizar que "tiene asegurada la mitad al menos del capital necesario para la construcción" (a. 10) y realizar un desembolso por valor de la décima parte del presupuesto aprobado para la construcción del camino de hierro (a. 11). Sobre esto, si la empresa pertenecía a una compañía por acciones, ésta debía justificar su constitución con arreglo a la ley; es decir, que cuenta con aprobación legislativa y que ha desembolsado la parte del capital señalada (a. 11).

La comisión del Congreso que entendió en el proyecto estimó, de acuerdo con el gobierno, que el asunto que requería

(401) D.S.C., 10 de enero de 1.850, apéndice 10 al núm. 34.

urgente resolución era el de las subvenciones y las garantías al interés del capital. Cuatro días después de recibido el proyecto se presentó un dictamen que se ocupaba únicamente de este extremo y que se convirtió en la ley de 20 de febrero de 1.850 (402). El dictamen sobre el conjunto del proyecto no se realizaría en esta etapa política.

El problema de las subvenciones y los privilegios había sido abordado por la Real Orden de 16 de febrero de 1.847. En ella se dispuso la creación de una comisión para que informara acerca de la mejor forma de dispensar ayuda económica a las empresas de caminos de hierro, caso de que esta política se considerara conveniente. El origen de esta disposición se encuentra en el marcado interés —ya señalado— que los moderados tenían en la promoción del ferrocarril como motor de la industrialización. Por ello se intentó encontrar el mejor modo de promover estas compañías, "atendiendo a la perplejidad y zozobra que tales empresas inspiran en España, tanto por las dificultades inherentes a nuestro atraso, cuanto por no haber llegado ninguna a término" (403). Hay que señalar que esta Orden fue promulgada una semana después de la que suspendió la creación de sociedades por acciones.

Esta comisión no llegó a dictaminar, pero el proyecto de Bravo Murillo abordó este asunto, y en él se optó porque el

(402) El dictamen en D.S.C., 14 de enero de 1.850, apéndice 30 al núm. 37. La ley en C.L.E., t. 49, pp. 416-417.

(403) C.L.E., t. 40, pp. 213-214. La cita está tomada de la p. 214. La comisión estaba formada por dos senadores (Marqués de Miraflores y Mazarredo), tres diputados (Salamanca, Madoz y Gonzalo Morón), J. Subercase, como inspector general de caminos y canales y J.H. de Arche, como director de la Caja de Amortización.

apoyo estatal adoptara la forma de garantía de un interés mínimo al capital, que nunca superaría el 6% aunque sería discutido para cada proyecto en particular (a. 7) y que sería devuelto en caso de que la compañía llegara a obtener rendimientos superiores al 8% (a. 9).

Como acotación marginal, resaltaremos que las compañías de ferrocarriles, a la vez que se les garantiza un interés mínimo a sus acciones, tienen limitada su ganancia. Al estar situadas bajo la protección del Estado, quedan fuera de las reglas del mercado libre; al ser consideradas empresas de servicio público, tienen intervenido el precio de su producto. En este proyecto, la situación se explicita en que cuando el beneficio supere el 15%, deberán someterse a una revisión de tarifas a la baja (a. 9). Idéntica proposición se encuentra en el proyecto de 1.850 y la legislación posterior, con variantes, recogerá este principio.

El citado proyecto de Seijas Lozano enunció de forma general la posibilidad de subvenciones a las empresas y la garantía de un interés mínimo a las compañías (a. 7). La disposición transitoria sirve de guía al indicar la cifra de un 6% de interés máximo de garantía al capital invertido, cantidad de la que hay que restar un 1%, que se dedicará exclusivamente a la amortización del capital, tanto si existe subvención como si no (a. 28,3). De esta forma, se preveía la reversión al Estado de toda la red. Asimismo, se regulaba la revisión de las tarifas cuando el capital alcanzara un rendimiento del 12%.

El dictamen, que se pronunció exclusivamente sobre este punto, introdujo algunas modificaciones respecto al proyecto, que tendían a beneficiar a las compañías. Se solicitaba que el 1% de amortización se sumara —y no se restara— del 6% de rendimiento mínimo, es decir, que la garantía cubriera de hecho, hasta el 7% de interés; que el mencionado 1% fuera pagado por el gobierno "hasta la extinción del capital y consiguiente adquisición del ferrocarril por el Estado" y que se suprimiera el artículo que preveía la revisión de tarifas cuando se superara un cierto nivel de beneficios (404).

Este dictamen se discutió breve y rápidamente. La única objeción de cierta importancia la planteó Orense, cuando se manifestó en contra de la existencia de un 1% anual dedicado a la amortización del capital. Se mostró de acuerdo con la idea de garantizar un interés mínimo, reclamando incluso el honor de haber sido el primero en proponerlo en 1.844, pues "me parece conveniente, sobre todo en un país atrasado como España, que haya un aliciente para entrar en estas empresas" (405). Así el acuerdo entre las fuerzas políticas, desde el moderantismo hasta los demócratas, estaba asegurado en este punto: el apoyo a las compañías debía ser amplio. La captación de capital necesitaba, para realizarse, una garantía de rendimiento mínimo que el Estado debía proporcionar. Los demócratas —su portavoz Orense— rechazaban, sin embargo, la

(404) D.S.C., 14 de enero de 1.850, apéndice 32 al núm. 37.

(405) D.S.C., 15 de enero de 1.850, p. 916. Ocho días antes, Orense había presentado una proposición de ley sobre ferrocarriles, que ni siquiera llegó a ser defendida (D.S.C., p. 705).

pólitica de reversión de los ferrocarriles al Estado —sistema francés— frente a la concesión a perpetuidad a la iniciativa privada —sistema inglés—. Esta opinión de un defensor del liberalismo económico clásico fue rechazada por Seijas Lozano, que para ello se basó en la tradición caminera española. Lo que no era sino una reflexión histórica se convirtió —como tantas veces— en la justificación de una política económica. Orense renunció a consumir su turno de rectificación y el debate sobre este punto quedó porpuesto a la discusión de una ley general de ferrocarriles. El camino estaba trazado y no se volvió sobre él.

El dictamen no mereció más debate en el Congreso y ninguno en el Senado y quedó convertido en la ley de 20 de febrero de 1.850.

Pasamos por encima del —prolijo y nunca tomado en consideración— proyecto de Reinoso (406) que proponía de forma poco definida un modo de financiación de ferrocarril a base de "acciones de caminos de hierro", garantizadas por el Estado a un 7% (6% + 1% de amortización) y con cargo a los pueblos y a una subida de impuestos (407). Nos interesa, sin embargo, considerar con detenimiento el proyecto que presentó Luján a las Constituyentes en diciembre de 1.854 y que se

(406) que, a pesar de no haber conseguido aprobación parlamentaria logró uno de sus "objetivos escondidos, la contrata de la construcción por cuenta del Estado de cierto número de líneas a José de Salamanca y a otros contratistas" (Diego Mateo del Peral, "Los orígenes de la política ferroviaria en España (1.844-1.877)", en M. Artola y otros, Los ferrocarriles..., I, p. 77).

(407) D.S.C., 6 de diciembre de 1.851, apéndice al núm. 72.

convirtió en la ley de 3 de junio de 1.855 (408).

Dichos textos forman el primer y último eslabón de una ley general de ferrocarriles que tenía el objetivo de diseñar la red y fomentar su construcción así como la constitución de unas compañías que veían suavizada ley de 1.848. La constitución provisional de las compañías, por esta ley, estaba dentro de las atribuciones del gobierno que, desde julio de 1.856, se atribuiría también la autorización definitiva (v. 3.2.2).

El proyecto de ley establecía una serie de requisitos sobre el desembolso del capital para las compañías concesionarias y proponía ciertas normas que facilitaban su negociación. Son las siguientes:

— La suscripción previa de los dos tercios del capital social necesario para costear las obras, que se identificaba con el capital social (aa. 8 y 9,1). Se proponía, así, una elevación sobre proyectos anteriores, e incluso sobre la ley de 1.848, que estipulaba una suscripción inicial de la mitad de las acciones. A diferencia de éstas, la suscripción total de las mismas no tenía que realizarse dentro de un plazo pre determinado.

— La posibilidad de emitir acciones al portador, aunque sólo si estaban totalmente desembolsadas (a. 9,3), lo que implicaba una cierta ventaja sobre el resto de las sociedades.

(408) El proyecto, en D.S.C.C., 2 de diciembre de 1.854, apéndice 3º al núm. 25. La ley, ibidem, 4 de junio de 1.855, apéndice 2º al núm. 171.

—La posibilidad de emitir obligaciones al portador, pero únicamente para cubrir el tercio de capital social no suscrito y necesario para realizar las obras (a. 11). Es decir, se estipulaba una proporción máxima de las obligaciones sobre las acciones de 1/2. La autorización para la emisión de aquellas era competencia del gobierno (409).

El proyecto, además, incluyó la exigencia para los concesionarios de un depósito previo que oscilaría entre el 2 y el 5% del presupuesto de la empresa (a. 7), que sería recuperable en sus 4/5 partes a lo largo de la ejecución de la obra, dejando el otro quinto como fianza hasta su total terminación (a. 17).

El texto no se pronunció acerca de las subvenciones o garantías sobre el capital. Incluyó una cláusula de revisión de las tarifas, a partir del décimo año de la explotación del camino y desde entonces, cada cinco años si antes no lo solicitara la empresa. La revisión sería a la baja cuando el rendimiento medio del capital excediera en un 3% el del invertido en efectos públicos y al alza si no llegara al 6% (a. 32).

El dictamen (410) incluyó en su capítulo IX las normas sobre las "compañías por acciones para la construcción y explotación de los ferrocarriles", que pasarían íntegramente a

(409) El R.D. de 21 de noviembre de 1.852 había determinado el paso desde el ministerio de Fomento de Hacienda de las competencias sobre acciones y obligaciones de las sociedades de obras públicas, que se podrían emitir dentro de los límites de las leyes de autorización de cada compañía (C.L.E., t. 57, pp. 498-499).

(410) D.S.C.C., 20 de marzo de 1.855, apéndice 2º al núm. 10.

constituir el texto de la ley (aa. 46-49). No hubo modificaciones sustanciales al proyecto, al que se añadieron dos disposiciones. En primer lugar, que los primeros suscriptores, al transferir su acción, sólo eran responsables subsidiarios del pago de los dividendos pasivos, hasta que aquélla estuviera desembolsada en un 50% (a. 46,5). Esta norma estaba destinada a fomentar la compra de acciones ferroviarias al ofrecer una ventaja sobre su transmisión, respecto al Código de Comercio y a la ley de 1.848 por la que el primer poseedor de un título era responsable subsidiario de la realización de los desembolsos. Como manifestó Navarro Zamorano (por la comisión) ante una duda de Camilo Labrador, se suavizaba la legislación general "para hacer posible la constitución de sociedades que construyan caminos de hierro, porque la comisión está en el entender de que, si se hacen caminos de hierro, será por medio de sociedades, y es necesario facilitar su formación" (411).

En segundo lugar, el dictamen incluyó un artículo por el cual sería el gobierno el que autorizara el aumento del capital social de las compañías cuando no fuera suficiente para terminar la línea y siempre que no afectara "de modo alguno los fondos públicos. Si los afectase, la autorización será objeto de una ley" (a. 49). Esta norma estaba destinada a facilitar el incremento del capital social a unas compañías de autorización legislativa. Cuando ésta se pudo hacer por Real

(411) D.S.C.C, 23 de mayo de 1.855, p. 3.371.

Decreto (julio de 1.856) dejó de tener sentido.

Excepción hecha de la intervención citada de Labrador, que no fue oposición, pues se mostró de acuerdo con el artículo propuesto, las disposiciones sobre sociedades sólo merecieron una intervención en contra. Fue la de Sagasta, cuya oposición fue más amplia y que, en el terreno que ahora nos ocupa, pretendió resucitar el artículo 9,2 del proyecto. Este hacía a los directores responsables subsidiariamente de la obligación de los primeros suscriptores hasta la definitiva constitución de la sociedad. Este diputado pretendía con ello garantizar que sólo iniciaran su tramitación los proyectos que pudieran culminar y no aquéllos que fueran concebidos sin base (412). Su objeción, hecha en su discurso en contra de la totalidad, no fue escuchada.

El dictamen —el proyecto y la ley— no se decantó hacia un determinado tipo de ayuda o subvención a las compañías. El artículo 8 determinaba la posibilidad del auxilio con fondos públicos mediante la ejecución directa de determinados fragmentos de la línea, mediante la subvención directa hasta un total equivalente a lo presupuestado o mediante la garantía de un interés fijo. Todo ello se debería establecer en cada ley de concesión (a. 8). El artículo 9 incluía a las provincias y los pueblos directamente interesados en las líneas en la contribución pública que se establecería en cada caso (a. 9). Respecto al depósito previo, quedaba establecido en un

(412) D.S.C.C., 17 de abril de 1.855, p. 2.592.

1% del valor de las obras presupuestadas, para poder concurrir a la licitación (a. 11), cifra que sería aumentada en el momento de la concesión definitiva a un 3% si la línea no estaba subvencionada y el 5% en caso contrario (a. 12). Esta suma se iría recuperando a medida que avanzaran las obras (a. 13).

La revisión de las tarifas se haría cada cinco años. Las compañías podrían, en cualquier momento, reducirlas, sin más requisito que la comunicación al gobierno (a. 36). Su aumento no queda regulado, pero su reducción, caso de conflicto entre el gobierno y la compañía, podría hacerse por ley, si bien "garantizando a la empresa los productos totales del último año y además el aumento progresivo que hayan tenido por término medio en el último quinquenio" (a. 35). Se establecía así el control del precio de este servicio público pero se destacaba que ello no afectaría en ningún modo la rentabilidad del capital para los accionistas.

El debate de este dictamen se centró en el tema de las subvenciones y en la participación de los pueblos en la financiación del ferrocarril.

Respecto al primer punto, Sagasta, en su amplia intervención contra la totalidad, se opuso a la amplitud con la que el proyecto consideraba los diferentes tipos de ayuda a las compañías y solicitó que sólo se admitiera la subvención directa, que era la única que por ser fija no permitía el fraude y el engaño posibilitado por las indirectas (413). Su en-

(413) D.S.C.C., 17 de abril de 1.855, pp. 1.590-92 (contra la totalidad) ibidem, 22 de mayo de 1.855, p. 3.340 (contra el a. 8).

mienda, sin apoyos, no fue tomada en consideración por la comisión. Mejor suerte tuvo la presentada por Ugarte (414), que fue integrada en el articulado. Se trata de que la subvención siempre fuera proporcional al capital invertido y no al presupuestado, como fijaba el dictamen. Se pretendía así . evitar el abuso que permitía la recepción de fondos por una cuantía elevada y que no fueran empleados en la realización de las obras.

La obligatoriedad de la contribución de los pueblos a la financiación del ferrocarril fue ampliamente discutida. Se admitió a consideración una enmienda de Ugarte declarando el carácter voluntario de la contribución de pueblos y provincias y otra que solicitaba su contribución por mitad, que fue retirada. Los discursos que motivó aquella enmienda estuvieron llenos de juicios de intenciones (si se deja libertad ningún pueblo contribuirá, el gobierno es el mejor garante de la redistribución justa de cargas y beneficios...) y concluyeron con el rechazo de la enmienda por 78 votos contra 41. Dentro de la enorme dispersión del voto en estas Cortes, puede decirse que progresistas y demócratas rechazaron la enmienda —de Luján a Figuerola— mientras que sectores tibios de estas tendencias —con excepciones como la de Figueras— la apoyaron (415).

(414) sus otros firmantes fueron Falcón, D. García, Pomés y Miquel, Gil Vírveda, P. Avelilla y C. Valera. Incluida en D.S.C.C., apéndice al núm. 39. Su aceptación, ibidem, p. 3.340.

(415) La enmienda en D.S.C.C., apéndice 1º al núm. 139. El debate, ibidem, 22 de mayo de 1.855, pp. 3.341-3.349. La votación nominal en p. 3.349.

Sentado este principio, un grupo de diputados encabezado por Labrador, propuso la inserción de un artículo adicional, en el que se estipulara la contribución de los pueblos y provincias directamente interesados en la construcción de líneas ya concedidas, en un tercio de la subvención. Este artículo fue propuesto con la intención equitativa de incorporar a todas las provincias a la promoción ferroviaria, aún aquellas que ya estaban concedidas sin haber incluido una cláusula de esta índole.

La enmienda fue aceptada por 118 votos contra 38, y la ley contó con un artículo adicional que pretendía incorporar a todas las provincias a la financiación de la construcción ferroviaria. Contó con el apoyo del gobierno —Luján—, de la mayoría del progresismo —Cortina, Labrador...—, del moderantismo —Avecilla— y de los demócratas —Sagasta—. La posición contraria también contó con elementos de todas estas tendencias. Como ya dijimos respecto a la ley de Bancos, los diputados se separan por su diferente participación en el negocio ferroviario y sólo cuando no hay intereses de este tipo aparecen en algunos de ellos posiciones doctrinales puras (416).

Desde este momento se asiste a la consolidación del sistema de subvención directa así como al incremento de la demanda de emisión de obligaciones, más allá de un límite legal que resultaba estrecho.

(416) La votación nominal en D.S.C.C., 23 de mayo de 1.855, p. 3.380. El debate, en pp. 3.371-3.379.

La ley de 11 de julio de 1.856 (417), que facultó al gobierno para autorizar mediante Real Decreto la constitución de compañías para realizar obras públicas que ya hubieran sido aprobados por ley, incrementó las facilidades para la centralización de capital de este tipo de sociedades. Aunque la disposición tenía un carácter general, era evidente que la máxima preocupación estribaba en las de ferrocarriles.

Sobre la de ferrocarriles de 1.855, esta nueva ley permitía a las compañías de obras públicas la conversión de sus acciones en títulos al portador a partir de un desembolso del 30%, siendo el primer dividendo pasivo de un 15% (a. 5), lo que le situaba en clara ventaja sobre el resto de las sociedades e, incluso, sobre las disposiciones del Código de Comercio de 1.885. Además, los cedentes de las acciones quedaban eximidos absolutamente de responsabilidad sobre ellas, que, según la ley anterior, les alcanzaba hasta que se hubieran desembolsado en un 50% (a. 6).

También se amplía la facultad de emitir obligaciones al portador hasta la mitad del capital realizado en acciones (a. 7), sea cual sea la cuantía de éste. Por último, señalaremos que, desde este momento, tanto acciones como obligaciones de obras públicas pasan a tener la consideración de efectos públicos a efectos de contratación (a. 8), lo que les concedía una facilidad de negociación que no poseían los títulos del resto de las sociedades (excepto de crédito), considerados

como valores comunes de comercio.

La ley de 11 de julio de 1.860 (418) aún ampliaba las ventajas de estas compañías. El proyecto, presentado en las primeras sesiones de la legislatura, fue concedido como "ampliación del uso del crédito a las compañías concesionarias de obras públicas" pero el interés fundamental, dentro de ellas, era la promoción de las ferroviarias:

"La importancia cada día creciente de los ferrocarriles, y la conveniencia de facilitar su construcción y explotación, dando a las compañías que para este objeto se constituyen, hasta donde la prudencia y su interés bien entendido permiten, los medios de levantar capitales, han fijado la atención del Ministro que suscribe desde que tuvo la honra de ponerse al frente de su departamento" (419).

La situación, tal y como aparecía ante los ojos del Marqués de Corvera, ministro de Fomento, y a las del gabinete de la Unión Liberal (presidido por O'Donnell) al que pertenecía, era que las compañías de ferrocarriles colocaban con más facilidad sus obligaciones que sus acciones. Dada la preferencia de los ahorradores por los títulos de renta fija y la dificultad de cambiar a corto plazo la tendencia que mostraban tanto los inversionistas nacionales como los extranjeros, de cuya colaboración no se podía prescindir, se revelaba necesario ampliar la facultad de emitir obligaciones (420).

(418) C.L.E., t. 84, pp. 69-70.

(419) D.S.C., 1 de junio de 1.860, apéndice 60 al núm. 7.

(420) D.S.C., 20 de junio de 1.860, p. 263 (Marqués de Corvera). El mismo en D.S.S. 27 de junio, p. 99.

El nuevo límite que se proponía era el de una cantidad igual a la del capital realizado (a. 1) y se facultaba al gobierno para su ampliación "en casos de reconocida utilidad pública, oído el consejo de Estado" (a. 4). Asimismo, se prescribía que la suscripción necesaria para la constitución definitiva de las compañías fuera de un 50% del capital social, en vez de los dos tercios que dictaba la ley anterior (a. 1). Sobre esta ventaja actuaba el artículo 2, que la incrementaba al considerar que la subvención obtenida podía contabilizarse como capital social, a la hora de calcular el número de acciones que se debían emitir (que así se reducía) y el de obligaciones que se podían lanzar al mercado (que así se aumentaba).

El artículo tercero preveía la posibilidad de que las compañías adquirieran una nueva obra. En este caso, podrían "verificar el pago del precio de la compra en obligaciones hasta el límite que la sociedad vendedora esté facultada para emitir"

El dictamen fue presentado en el Congreso una semana después de conocido el proyecto (421), sobre el que se realizó alguna modificación sustancial. Se conservaba el límite de la suscripción y emisión de acciones y obligaciones aunque se suprimía la facultad del gobierno para autorizar su elevación, conservándola en el poder legislativo. Así quedó consignado en la ley (a. 1). La supresión de esta atribución del

(421) D.S.C., 7 de junio de 1.860, apéndice al núm. 11.

ejecutivo se hizo con el acuerdo ministerial, aunque Corvera manifestó que sólo se cedió ante la opinión de la mayoría de las secciones, pues el gobierno consideraba que ésta sería un modo adicional de incrementar la facilidad de obtención de capital por parte de las empresas (422). El recuerdo del abuso ministerial de las atribuciones en materia ferroviaria todavía estaba vivo entre los diputados.

El dictamen se debatió en el Congreso los días 20 y 21 de junio y en el Senado el día 27. Hubo en cada Cámara una intervención contra la totalidad, cuyos autores aceptaban el principio del texto presentado, aunque se mostraban partidarios, bien de un incremento de las garantías que sostenían las obligaciones, bien de una limitación de su emisión. De ahí que se propusiera que las compañías tuvieran su obra y rendimientos hipotecados para responder de los pagos y que el límite a la emisión fuera, precisamente, la obra ejecutada y no la suma del capital realizado más la subvención: "no se pueden emitir obligaciones si no hay obra que garantice" (423).

El temor al incremento del crédito se basa en que posibilitaba la constitución de compañías sin los recursos necesarios (424), en que su abuso fomentaba el aumento del nivel de precios (según un razonamiento de índole cuantitati-

(422) D.S.C., 20 de junio de 1.860, p. 265.

(423) D.S.C., 20 de junio de 1.860, p. 260 (Nuñez de Prado).

(424) Ibidem, p. 269.

vista) y en que dejaba indemnes a los acreedores si estallaba una crisis (425).

El gobierno estaba decidido, por el contrario, a promover el crédito por todos los medios a su alcance y a las anteriores objeciones y a la enmienda del senador Alonso, que pretendía restringir la emisión de obligaciones al 80% del capital social, respondió que incluso el 100% le parecía poco y que:

"Únicamente porque nos hallamos al principio de nuestra carrera, porque las ideas de crédito no están aún bastante generalizadas es por lo que el gobierno ha convenido en fijar ese límite a las emisiones" (426).

No prosperaron, pues, las solicitudes de disminución del volumen de obligaciones ni las de incremento del capital desembolsado para la constitución de las compañías:

"Pero en el caso presentado por S.S. de que con $7\frac{1}{2}$ por 100 no tenga bastante capital para ejecutar las obras y empezar a disfrutar de las ventajas que ofrece esta ley, resultará que se obligará a las compañías que se hallen en ese caso extremo a pedir más capital a los accionistas para colocarse en situación de poder aspirar a dichos beneficios (...) aparte de que el objeto de esta ley es facilitar la formación de compañías por medio de capitales que vengan a comprar obligaciones, ya que hay pocos capitales que quieran emplear se en acciones" (427).

(425) D.S.S., 27 de junio de 1.860, p. 97 (Vázquez Queipo).

(426) Ibidem, p. 100 (Marqués de Corvera).

(427) D.S.C., 20 de junio de 1.860, p. 267 (Bernar, de la comisión). Subrayado mío.

En definitiva, la ley fijó el límite de la emisión de obligaciones de las empresas (428) de obras públicas en la suma total del capital realizado y la suscripción necesaria para constituirse, en un 50% de las acciones, con un 15% de desembolso. Es decir, un 7'5% sobre el capital social.

El artículo segundo del dictamen que explicitaba que las subvenciones se contabilizaran como capital social tanto para la suscripción de acciones como para la emisión de obligaciones fue sustituido por una enmienda aceptada sin debate por la comisión. Esta prescribía que la subvención sólo se reputara como capital social a efectos de la emisión de obligaciones de forma que se evitara el caso extremo de constitución compañías sin realización de capital social al contabilizar como tal a todos los efectos, la suma de obligaciones más subvenciones (429). Así quedó en la ley, pero una locución de este artículo despertó la mayor polémica del debate y curiosamente no tuvo como protagonista a una compañía ferroviaria, sino al Canal de Urgel. Se trataba de la que calificaba a la subvención contabilizable como "la entrega de una parte del capital invertido".

Figuerola y Madoz solicitaron la supresión de dicha frase que sólo permitía gozar de las ventajas de la subvención a aquellas compañías que la tuvieran directa. Sus interven-

(428) Este vocablo sustituye al de "compañías", a sugerencia del diputado Ortiz de Zárate (D.S.C., 21 de junio de 1.860, pp. 271 y 273).

(429) Sus firmantes fueron A. de Mena, F. Millán y Caro, D. Carballo, J. Fernandez del Cueto, J.J. Caña, T. Capdepón y J.P. Muchada. D.S.C., 21 de junio de 1.860, pp. 273-274.

ciones tenían como objetivo la defensa del Canal de Urgel, obra que gozaba de un anticipo del Estado sin intereses de 16 millones de reales, equivalente al 50% del capital social. Se preguntaban los intervinientes si esos 16 millones podían contabilizarse a la hora de calcular la emisión de obligaciones (430). La cuestión originó una polémica entre los que opinaban que la emisión no podía exceder de 16 millones de reales pues ya tenía los otros 16 comprometidos con el Estado —Ardanaz—, los que pensaban que se podía alcanzar una emisión de 48 millones, al sumarse los 16 del anticipo a los 32 del capital suscrito —Figuerola y Madoz— y el gobierno, cuyo criterio triunfante fue que el límite se estableciera en 32 millones, sin que se contabilizara a favor ni en contra el anticipo del Estado, pues éste no era subvención, sino suma reintegrable.

El artículo tercero del dictamen —nuevo respecto al proyecto— establecía que el dividendo pasivo, cuyo desembolso era indispensable para autorizar la constitución de estas empresas, no fuera inferior al 7'5% del capital social lo que rebajaba a la mitad este requisito, respecto a las leyes anteriores. Sobre él se presentó una enmienda, que fue aceptada sin discusión, por el que la mencionada cantidad se establecía en el 10% (431).

(430) D.S.C., 21 de junio de 1.860, p. 274 (Figuerola y Madoz). El debate sobre la cuestión, pp. 274-276.

(431) Los firmantes fueron Millán y Caro, Paz, Calzada y Rodríguez, Mena, Ugarte, Modet y Uría. D.S.C., 21 de junio de 1.860, p. 278.

El artículo cuarto, que regulaba el pago en obligaciones del importe de la compra de una nueva compañía fue considerado reiterativo aunque fue aprobado en el Congreso sin oposición. En el Senado se aprobó el dictamen del Congreso sin modificación, tal y como ha sido descrito, y sin apenas debate.

Esta ley que despejó el camino de la emisión de obligaciones en las empresas de obras públicas (léase ferrocarriles) fue completada de forma inmediata por la Real Orden de 3 de agosto de 1.860, que aclaró que el computo de las obligaciones se realizaría según su valor nominal (a.1). Tal disposición estaba destinada a limitar las ventajas de la tradicional práctica de la venta de obligaciones, en primera emisión, por un valor inferior al facial, que algunas sociedades tenían concedida legalmente "como gracias especiales" (432). De esta forma, una sociedad no podía emitir un volumen doble de capital en obligaciones por el hecho de venderlas a un 50% de su nominal, lo que era un recurso para colocarlas rápidamente con la promesa de un beneficio extraordinario, pues la amortización se debía hacer por el 100% del nominal.

La ley de 29 de enero de 1.862 (433) terminó de precisar

(432) C.L.E., t. 84, pp. 198 y 199. La Real Orden de 25 de julio (ibidem, pp. 92-93) había determinado que las compañías debían informar trimestralmente al gobierno sobre las obligaciones emitidas. El primer informe debía cursarse a principios de agosto y fue, seguramente, el que motivo la promulgación de esta disposición.

(433) C.L.E., t. 87, pp. 146 y 147.

la forma de calcular las posibilidades de emisión de obligaciones. Regulaba que el volumen de obligaciones se calculara según su valor nominal y siempre que el interés fuera del 6% (a. 1). Si el tipo de interés era superior o inferior, éste se reducía o aumentaba, no pudiendo nunca superar el doble del capital realizado más la subvención (aa. 2 y 3).

Esta ley introdujo dos garantías suplementarias. En primer lugar, que el plazo de amortización de las obligaciones debía efectuarse dentro del período de concesión y poder realizarse con el rendimiento de las obras y sin acudir a un nuevo crédito (a. 4). En segundo, que el gobierno publicaría en la Gaceta un extracto de los estados trimestrales que les remitieran las compañías, en el que se expresaría el número de obligaciones emitidas, su valor nominal e interés, así como el importe del capital realizado y de la subvención recibida (a. 5).

Estas normas no impidieron (ni se puede afirmar que por sí mismas provocaran) la crisis ferroviaria iniciada en 1.864. Como ha señalado Artola, en este año, en que se realizaron 361 millones de reales en obligaciones, comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de saturación del mercado" (434). En 1.865, se produjo una brutal caída del volumen de las nuevas emisiones, que descendió hasta los 60 millones, logrados a costa de aceptar mayores quebrantos, es decir, un mayor vo-

(434) M. Artola, "La acción del Estado", en Artola y otros, Los ferrocarriles..., I, p. 377.

lumen de títulos para el mismo ingreso. La crisis, potenciada por el cierre de la Bolsa de París, afectó duramente a los obligacionistas, forzados a aceptar conversiones que constituían una pérdida patrimonial real. Esta situación provocó un debate amplio en el que fueron mayoría los partidarios del apoyo estatal para paliar una crisis de la que se culpaba al propio Estado por su política de fomento de la emisión de obligaciones. Las compañías solicitaron del gobierno la cobertura de un 6% de interés y un 1% de amortización para el capital invertido, cuya cuantía "inflan hasta los 5.100 millones de reales" (435).

En esta situación, Alcalá Galiano, ministro de Fomento de un gabinete Narváez, presentó en el Senado dos proyectos de ley destinados a incrementar "el uso del crédito", ambos con fecha de 15 de febrero de 1.865. El primero, estaba destinado a las compañías de obras públicas concedidas por una ley (camino de hierro, carreteras y canales de navegación fundamentalmente) (436).

En el preámbulo, consideraba el ministro la conveniencia de "facilitar a las compañías concesionarias de obras públicas los medios y recursos indispensables para terminar..." los trabajos planeados. La ayuda era necesaria para superar la crisis económica, concebida como una crisis de confianza. Este texto hablaba del éxito de las leyes de 1.856 y 1.860

(435) Ibidem, p.378.

(436) D.S.S., 15 de febrero de 1.865, apéndice 3º al núm. 25.

para la ampliación del crédito, política que se pretendía continuar, concediendo la ampliación de emisión de obligaciones hasta el doble del capital realizado más la subvención recibida. El cálculo —como en normas anteriores— se hacía sobre un interés del 6%, pudiendo aumentarse la emisión si éste era menor (a. 1). Además, este proyecto consideraba que la suscripción de acciones necesaria para autorizar la constitución de compañías debía disminuir hasta un 25% (a. 2).

La política propuesta por Alcalá Galiano contra la crisis, según se desprende de este proyecto, era el apoyo a las compañías, sosteniendo e incrementando su crédito, fomentando "el espíritu de asociación y empresa". Confiaba en que una inyección de efectivo y, sobre todo, de confianza (437) fuera suficiente para volver las aguas a su cauce.

La causa próxima de este proyecto era una demanda de la Compañía Norte. Tres meses después de que aquél se presentara, se leyó en el Senado un proyecto de ley que solicitaba la ampliación de la emisión de obligaciones de la mencionada compañía hasta 330 millones de reales nominales a un interés del 3% (438). Esto implicaba una nueva emisión por valor de 165 millones, para los que la Compañía debería, según la ley, incrementar su emisión de acciones en 82'25 millones, lo que le era imposible en este momento de crisis.

(437) Este antiguo converso de moderantismo nunca dejó de admirar a Inglaterra y sus teóricos. Quizá su "política anticrisis" se derive de la caracterización de éstas como "crisis de confianza" de John Stuart Mill (Principios de economía política, cap. XIV.

(438) D.S.S., 17 de mayo de 1.865, apéndice 5º al núm. 62.

La comisión dictaminadora mostró sus dudas acerca de que una emisión tan amplia desbordara las posibilidades de la compañía y no fueran suficientes sus productos líquidos para pagar los intereses y realizar su amortización. De ahí que propusiera —y así se aprobó sin debate en ambas cámaras— que se autorizara la emisión de 130 millones nominales, y al gobierno a establecer el ritmo de emisión de los otros doscientos, de manera que se garantizara el abono de los intereses y la amortización, dentro del período de la concesión (439).

El segundo proyecto, que completaba el plan, estaba destinado a extender los beneficios de las leyes de 1.856, 1.860 y 1.862 (que posibilitaban la emisión de obligaciones hasta una suma equivalente al capital realizado) a otras compañías consideradas de utilidad pública. Eran éstas:

"las sociedades mercantiles por acciones cuyo objeto sea ejecutar canales de riego, desecación de pantanos, saneamiento de terrenos, alumbrado público por gas, ensanche de poblaciones y demás obras de reconocida utilidad pública que el gobierno haya otorgado u otorgue en virtud de Reales Decretos, y juzgue oído el Consejo de Estado en pleno, dignas de esta protección, bien por su especialidad o por la cuantía de los capitales que su realización exija" (440).

Esta fe asombrosa en el crédito que manifestó Alcalá Galiano, como la inyección de confianza requerida para remon-

(439) El dictamen estaba firmado por F. Infante, Marqués de O'Gavan, M. Bermúdez de Castro, J.B. Irúpita, F. de Luján, A. Miranda, M. de Sierra y Moya. D.S.S., 29 de mayo de 1.865, apéndice 3º al núm. 66. La ley sancionada se publicó en apéndice 3º al núm. 90 (4 de julio).

(440) D.S.S., 15 de febrero de 1.865, apéndice 4º al núm. 25.

tar la crisis, fue rechazada por los sectores interesados, que desconfiaban de una solución expansionista cuando había una gran recesión en el mercado de obligaciones y cuando los poseedores de las mismas deseaban garantizar su amortización. La tramitación de los proyectos se frenó en un ambiente de amplio debate público, hasta que, el nuevo ministro, Orovio, los retiró y a cambio presentó el ya comentado para la Compañía Norte (439). Quizá la proposición de Alcalá Galiano resultaba doctrinaria e ineficaz, por cuanto los factores de la crisis eran más profundos que una mera falta de confianza y porque el gobierno no gozaba de suficiente fuerza, representatividad y credibilidad. La política emprendida por Orovio tendió, como hemos visto a contemplar los casos particulares y, por otra parte a reforzar el control sobre las compañías, regulando con cuidado los acuerdos de acreedores y las suspensiones de pagos. El gobierno, incapaz de solucionarla, se había resignado a administrar una crisis que estaba sirviendo como detonante que facilitó el estallido y triunfo de la Revolución de septiembre de 1.868.

En la nueva etapa política. se promulgó el Decreto de 14 de noviembre de 1.868, que estableció las "bases generales para la nueva legislación de obras públicas", que regi-

(441) Manifestaron su oposición fundamentalmente los capitales catalanes: la Sociedad Catalana General de Crédito (D.S.S., 6 de abril de 1.865, p. 579), "varios capitalistas e industriales de Barcelona" (*ibidem*, 8 de abril, p. 614), la comisión directiva de los ferrocarriles de Zaragoza a Barcelona (*ibidem*, 24 de abril, p. 697), "varios accionistas de compañías de ferrocarriles" (*ibidem*, 3 de mayo, p. 832).

rían el sector durante ocho años. No interesa a estas páginas el desarrollo de esta legislación, general de obras públicas, por cuanto no reforma la de compañías. Unicamente cabe destacar que el decreto revolucionario mencionado es una muestra de la justificación de la intervención estatal en este terreno, necesaria entre los que se confiesan liberales radicales. De ahí que doctrinalmente se proclame "la libertad en obras públicas: es el radicalismo en toda su pureza" y a renglón seguido se pase a considerar la conveniencia de la actuación del Estado.

"Pero al salir del radicalismo y descender al terreno de los hechos y de las prácticas establecidas... preciso es confesar que hay en obras públicas (...) dificultades más serias y problemas más complejos de los que a primera vista, o tras un superficial examen se descubren" (442).

En el terreno que nos ocupa, la ley de sociedades anónimas de 1.869, con su declaración de libertad para la emisión de acciones y obligaciones al portador, disolvió en la norma general estos beneficios de las sociedades de obras públicas. Sin embargo, la ley de 12 de noviembre de 1.869, que contiene reglas sobre la suspensión de pagos de las compañías de ferrocarriles y demás obras públicas, dispone que sus obligaciones siguen sujetas a las leyes mencionadas de 1.855, 56, 60 y 62, con lo que sus emisiones no pueden exceder del límite de los capitales realizados por los respecti

(442) C.L.E., t. 100, p. 663.

vas empresas (443). Así se recuerda y reafirma en un proyecto de ley de 1.877 que, aprobado en el Senado, nunca llegó a ser tramitado en el Congreso (444). En él se trataba de permitir que las compañías pudieran realizar nuevas emisiones cuando hubieran puesto en explotación las dos terceras partes de las obras concedidas y "hasta el límite de las tres cuartas partes de los rendimientos líquidos de la explotación" (a. 2). Para realizar las nuevas emisiones bastaba con la autorización del Ministro de Fomento y su consignación en escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad (a. 4). Este proyecto fallido de un largo ministerio conservador revela la imposibilidad de resucitar este sistema de financiación del tendido de una red, que ya se haría fundamentalmente mediante subvenciones, tanto como que las preocupaciones y los objetivos económicos eran ya otros (445).

Las últimas disposiciones en el período considerado se encuentran en el Código de Comercio de 1.885 (aa. 184 a 192). Según este texto, el capital social de las compañías más la subvención había de ser, menos, la mitad del presupuesto total de la obra (a. 185). Con ello, se rebajaba en un 50% las disposiciones de las leyes anteriores a 1.869, no sin la oposición de Bosch y Labrús y García Lomas, que preconizaban una vuelta a la legislación anterior. Son los restos de una

(443) C.L.E., t. 102, pp. 755-764 (aa. 1 y adicional).

(444) El proyecto fue aprobado en el Senado en 9 de junio de 1.877, presentado en dicha fecha en el Congreso y reproducido en 13 de marzo de 1.878 (apéndice 12 al núm. 18).

(445) Para el desarrollo del tendido, M. Artola y otros, Los ferrocarriles..., esp. t. II.

interpretación que achacaba la crisis ferroviaria y bancaria de los finales de la década de los 60, a una legislación permisiva en exceso (446).

Se elevaban, sin embargo, los requisitos para la constitución de las compañías que se cifraban en la suscripción de la totalidad del capital social y en la realización del 25% (a. 185). El proyecto presentado por Alonso Martínez prescribía, a este respecto, un 33%. Como fue reseñado, el grupo de enmendantes encabezado por Bosch y Labrús pretendía su reducción al 20% y, tras una negociación, se llegó a la cifra mencionada (447).

El artículo 186 permite a estas compañías la emisión de obligaciones que serán amortizables o no (a. 187) sin más limitación que la de sus propios estatutos. Se consigna, además, el orden de antigüedad para el pago del cupón y para la amortización, así como la obligatoriedad de su inscripción en el Registro Mercantil de la provincia.

Para las compañías que gocen de subvención del Estado o sean de concesión temporal, las obligaciones deberán ser amortizadas o extinguidas en el plazo de la concesión, a fin de que el Estado las reciba libre de gravámenes (a. 187).

Estas normas regularon la constitución y el funcionamiento de las compañías de obras públicas en el resto del período considerado. Fueron promulgadas con escasa oposición y escaso debate. Cuando lo hubo, se reclamó —y se obtuvo— ma

(446) D.S.C., 1 de febrero de 1.883, pp. 736-738. Ver pp. 456 y 457 de esta Tesis.

(447) D.S.C., 12 y 13 de enero de 1.883, pp. 432 y 437.

yor facilidad para su constitución aunque se rechazó el incremento de control sobre las mismas, solicitado por aquéllos que periódicamente repetían la tesis de que la excesiva libertad de estas compañías habían motivado una fuerte crisis económica.

Los cuadros adjuntos muestran de forma significativa la evolución de la legislación general de sociedades anónimas y permiten realizar la comparación entre ésta y las regulaciones especiales. Sólo se han incluido las sociedades de crédito y las de obras públicas, pues lo que interesa destacar es el privilegio que estas sociedades gozaron hasta 1.869 para realizar la centralización del capital.

CUADRO III,1
DISPOSICIONES ACERCA DEL CAPITAL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS

1.- LEGISLACION GENERAL

	C.C. 1.829	Ley 1.848	Ley 1.869	C.C. 1.885	Ley 1.911
Capital suscrito (= acciones comprometidas = 1ª emisión).	-	50%	-	según escrituras	-
1 ^{er} dividendo pasivo	-	≤ 25%	-	según escrituras	-
Acciones al portador	Si están totalmente desembolsadas.	No	Sí	Si el desembolso es ≥ 50%	-
Ampliación y Reducción del capital.	Junta General de Accionistas, según escrituras. Inscripción Tribunal de Comercio.	R.D. o Ley	-	Junta General Accionistas con mayoría de 2/3 de capital y de accionistas.	J.G.A. mayoría 2/3 capital. En 2ª convocatoria, mayoría simple del capital.
Compra propias acciones	-	No si significa pérdida cap. social (1.852).	-	Sólo con los beneficios.	-
Préstamo sobre propias acciones.	-	-	-	No	-
Obligaciones	-	-	sí (según escrituras).	Sí	-
Fondo de Reserva	-	10%	-	-	-

FUENTES: legislación citada en el texto (C.L.E.)

CUADRO III,2
DISPOSICIONES ACERCA DEL CAPITAL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS

2.- COMPARACION ENTRE LA LEY GENERAL DE 1.848 Y LA DE SOCIEDADES DE CREDITO DE 1.856

	Ley 1.848	Ley 1.856
Primera emisión de acciones	50%	33,33% ó 50%
Primer dividendo pasivo	≤ 25%	30% 25%
Acciones al portador	No	Sí
Obligaciones al portador	No	<p>— Plazo > 30 días. "Por una cantidad igual a la que se halla empleada y exista representada por valores en cartera".</p> <p>— <u>A largo plazo</u>: hasta 5 veces capital desembolsado. hasta 10 veces capital social si está desembolsado totalmente.</p> <p>— <u>A corto plazo</u>: < 1 año. Obligaciones + cuentas corrientes ≤ 2 veces capital efectivo.</p>
Préstamo sobre acciones propias	No se contempla	Hasta 10% capital efectivo. Hasta el 60% del valor de mercado de las acciones. Hasta dos meses.
Cotización en Bolsa	Como valores comunes de comercio	Con la consideración de efectos públicos.
Depósito previo	-	entre 0,83% y el 12% del capital social.

FUENTES: v. cuadro II,4.

CUADRO, III,3

DISPOSICIONES ACERCA DEL CAPITAL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS

3.- SOCIEDADES DE FERROCARRILES Y OBRAS PUBLICAS (Modificaciones sobre la legislación general)

	R.D. 1.844 (FF.CC.)	Ley 1.850 (FF.CC.)	Ley 1.855 (FF.CC.)	Ley 1.856 (OO.PP.)	Ley 1.860 (OO.PP.)	Código de Comercio 1.855
Capital suscrito	75%	-	66.66%	66.66%		100%
Primer dividendo pasivo			10% de la acción	15% del cap. soc.	10% del cap.soc.	25%
Depósito previo	10% cap. suscrito	-	3-5%	-	-	-
Interés garantizado	-	6% + 1% amortización	A determinar en cada concesión.	-	-	-
Capital social	-	-	= capital presu- puestado para la obra y la explo- tación.	id.	id.	50% del presu- puesto de la em- presa.
Acciones al portador	-	-	Cuando estén to- talmente desem- bolsadas.	Cuando estén de- sembolsadas en un 30%	-	-
Obligaciones al portador	-	-	1/3 capital so- cial mientras és- te no estuviera colocado.	1/2 capital rea- lizado en accio- nes.	100% capital rea- lizado en accio- nes + subvención.	Según los esta- tutos de cada compañía.
Revisión de tarifas	-	-	Por las Compa- ñías. Por el Go- bierno, por R.D. garantizando el rendimiento de los 5 años anteriores	-	-	-
Cotización Bolsa Acciones	-	-	-	Con la considera- ción de efectos públicos.	-	-

FUENTES: v. cuadro II,4.

3.4.- La negociación del capital. La Bolsa.

"Es la Bolsa una plazuela circundada de pilares... y llamáse Bolsa ya por encerrarse los mercaderes en ella, como en una Bolsa, o ya por la diligencia que hace cada uno por llenar la suya en ella"

(Josef de la Vega, Confusión de confusiones).

3.4.1.- Introducción.

La Bolsa de valores es el centro de contratación de los valores mobiliarios. Es, por tanto, un mercado secundario en el que se intercambian los títulos ya emitidos. Ejerce una primera función, que consiste en colocar los títulos entre los compradores para que las entidades emisoras —tanto en el sector público como en el privado— dispongan de recursos suficientes para emprender sus operaciones. En segundo lugar, la Bolsa sirve a los poseedores de títulos para posibilitar su liquidez ya que en ella pueden ser convertidos en medios directos de pago. De este modo, actúa frente a los valores como la ventanilla de una Banco frente a los depósitos (448). Efectivamente, la Bolsa es una institución básica del sistema financiero, como los Bancos, aunque de desarrollo más temprano. Por otra parte, la negociación de valores posibilita una rentabilidad en el acto de compra-venta, que se añade a

(448) Imagen utilizada por José Antonio Aguirre Rodríguez, La Bolsa en España y en el mundo occidental, Madrid, 1.976, p. 38.

la que se obtiene de ordinario (dividendos) y que es superior a la del depósito bancario. Como contrapartida, el riesgo es también mayor.

Esto nos enlaza con un tercer aspecto de la Bolsa que interesa a estas páginas. Y es la de que pronto, por encima de su primitiva función de facilitar y servir de marco garantizado legalmente para las transacciones de valores, se crea en ella un mercado especulativo con una lógica independiente y que no necesariamente refleja la marcha de la economía real. La Bolsa, que teóricamente actúa a través de las cotizaciones como termómetro de la situación (449) también puede influir en ella. No sólo es reflejo de la opinión general: es también —y más— el escaparate que decoran los jugadores y en el que se miran los pequeños y medianos inversionistas. Al menos en la época estudiada.

En estas páginas vamos a analizar la Bolsa de valores en España: su —relativamente— temprana creación —1.831— y su desarrollo en los tres niveles mencionados. Es conocido que el origen de la Bolsa es muy anterior al siglo XIX y que, en sus inicios, compartió su función de mercado de valores con la deservir a otros productos. Aquí prescindimos de este último tipo de operaciones; no obstante, será conveniente revisar las definiciones que proporciona la legislación española entre 1.829 y 1.923 para mejor comprender los debates y las

(449) "La cotización es la brújula que sirve de guía a los comerciantes en sus especulaciones", Pedro Sáinz de Andino, Ensayo crítico sobre la contratación de la Bolsa de Comercio y las ventas simuladas de los efectos públicos, Madrid, 1.845, parte primera, p. 69.

normas del momento. Tarea que ocupa el artículo primero de todos los proyectos y decretos a pesar de que los demócratas la consideraban inútil:

"De manera que aquí se empieza por definir lo que es la Bolsa, una cosa que todo el mundo sabe lo que es, y que con la definición se pone más oscura" (450).

La Bolsa de Comercio fue definida en 1.831 como el lugar en el que se reúnen con sujeción a reglas determinadas y bajo la inspección de la autoridad competente, "las personas dedicadas al tráfico y giro comercial y los agentes públicos que intervienen en sus contratos y negociaciones" (451). En esta primera disposición se enumeraban las operaciones especiales que se realizarían en dicho lugar: compra-venta de efectos públicos, letras de cambio, pagarés..." y cualesquiera especie de valores de comercio de personas particulares", venta de metales preciosos y de todo género de mercaderías, aseguración de efectos comerciales contra toda clase de riesgos terrestres o marítimos, fletamento de buques y contratos de transportes interiores, tanto por tierra como por agua (a. 2).

Así pues, en 1.831 se creó la Bolsa de Madrid como un mercado de efectos y mercancías de todas clases. Era, por tanto, y como queda definido, una Bolsa de comercio, prolonga-

(450) Intervención de Orense contra la totalidad del proyecto progresista de ley de Bolsas. D.S.C.C., 16 de junio de 1.856, p. 8.961.

(451) a. 1 del R.D. de 19 de septiembre de 1.831; C.DD., t. 16, p. 275.

ción de las antiguas Lonjas.

La definición mencionada fue sólo variada ligeramente en la ley provisional de 1.845 firmada por Armero, que se refería a la Bolsa como el local en el que se realizaban las operaciones antedichas (452).

Menos de un año después, en el proyecto de ley orgánica provisional de la Bolsa de Comercio de Madrid, que se impuso como Real Decreto de 5 de abril de 1.846, se pasó a decir que la Bolsa de Comercio:

"tiene por objeto la reunión de las personas que se dedican al tráfico y giro comercial y de los agentes públicos que intervienen en sus negociaciones, con sujeción a las reglas establecidas legalmente y bajo la inspección de la autoridad pública" (453).

Esta concepción —la Bolsa como reunión— fue la que perduró en el Real Decreto de febrero de 1.854 (454) que permaneció vigente hasta 1.869 y, después, desde 1.874 hasta 1.885. Se mantuvo, asimismo, en el proyecto y dictamen progresistas (455).

En el Real Decreto de febrero de 1.854 es en el que por primera vez, en la descripción de las operaciones a realizar en la Bolsa, se introdujo la mención explícita de las accio-

(452) a. 1 de la ley provisional de 23 de junio de 1.845, C.DD., t. 34, p. 302.

(453) a. 1 del R.D. de 5 de abril de 1.846; C.DD., t. 35, p. 71.

(454) a. 1 del R.D. de 8 de febrero de 1.854; C.L.E., t. 61, p. 168.

(455) a. 1 del Proyecto de ley de 9 de diciembre de 1.854, D.S.C.C., ap. 1ª al núm. 30 y del Dictamen de 30 de abril de 1.856, ibidem, apéndice 2ª al núm. 371.

nes de las sociedades (a. 2). Esta alusión fue ampliada en el proyecto del Bienio Progresista, en cuyo texto se encuentra, por primera vez, un artículo que define los valores comerciales (a. 8). Al tiempo, hay una simplificación de la enumeración de las operaciones de Bolsa, que quedaba así: "los efectos públicos; los valores comerciales; las mercaderías de toda clase y los contratos permitidos por derecho" (a. 6).

El artículo 64 del Código de Comercio de 1.885, volvió a la definición de Bolsa de Comercio como el lugar ("establecimiento público") donde se reúnen los comerciantes y los agentes intermediarios colegiados "para concertar o cumplir las operaciones mercantiles expresadas en esta sección". Tales operaciones quedaban agrupadas en ocho apartados: 1) valores y efectos públicos; 2) valores industriales y mercantiles emitidos por particulares o por sociedades o empresas legalmente constituidas; 3) las letras de cambio, libranzas, pagars, etc.; 4) los metales preciosos; 5) las mercaderías de todas clases y los resguardos de depósitos; 6) los seguros de efectos comerciales; 7) los fletes y transportes, conocimientos y cartas de porte; 8) cualquier otra operación análoga y que sea lícita (a. 67).

La Bolsa como lugar (a.831 a 1.845 y 1.885 a 1.923) o como reunión (1.846 a 1.885), pero siempre de comercio; es decir, para la contratación de mercaderías de todas clases. Como veremos, dentro de los valores predominará el efecto público durante todo el período estudiado. Los valores industriales co

menzaron intercambiándose casi exclusivamente fuera de la Bolsa para irrumpir en ella —aunque tímidamente— en la Restauración y, de forma clara, en el cambio de siglo, sobre todo en las Bolsas de Bilbao y en la todavía privada de Barcelona. Madrid permaneció como un mercado de efectos públicos y rentas fijas hasta, al menos, la Primera Guerra Mundial. Para entonces, la contratación de mercancías no era sino letra muerta.

Antes de comenzar a desarrollar el análisis de la legislación bursátil en España, quizá sea conveniente introducir algunas definiciones sobre los tipos de operaciones que se pueden realizar en la Bolsa. La primera diferencia a tener en cuenta es la que existe entre operaciones al contado y operaciones a plazo. Dentro de éstas, cabe resaltar las realizadas en firme y a voluntad, con prima o sin ella. Por último, hay que considerar la posibilidad de combinación del contado y el plazo en las negociaciones de dobles así como la existencia de condiciones sobre el contrato. Esta breve reseña no pretende ser exhaustiva sino únicamente dar algunas definiciones básicas para la comprensión de los términos bursátiles que, inevitablemente, se han de emplear en el texto (456).

(456) Para estas definiciones, se han utilizado, fundamentalmente, J. Ignacio de Garmendia y Miangolarra, Diccionario de Bolsa, Madrid, 1.977 y Antonio Rodríguez Sastre, Operaciones de Bolsa. Doctrina, legislación y jurisprudencia españolas, Madrid, 1.954, (2ª ed.).

Operaciones al contado: Son aquéllas en las que las obligaciones recíprocas de los contratantes deben consumarse el mismo día de la celebración del contrato, pudiéndose efectuar la entrega material de los títulos en un breve plazo que señala la legislación.

Se trata, pues, del cambio inmediato del valor o título por el metálico representativo de su precio o cotización.

Operaciones a plazo: son aquéllas en que las obligaciones recíprocas de los contratantes no deben quedar satisfechas en el día del contrato, sino al vencimiento de un plazo convenido.

Ahora bien, este último tipo de operaciones pueden liquidarse de forma diferente:

En firme: en virtud del contrato, el comprador y el vendedor quedan definitivamente obligados y, por tanto, el plan fijado para su vencimiento y las condiciones del contrato son inalterables, liquidándose la operación en la fecha convenida. Por tanto, sólo difiere del contado en la fecha de ejecución. El riesgo —y el beneficio— lo proporciona la posible diferencia de la cotización en el momento de la celebración del contrato y en el de su ejecución.

A voluntad: Contrato de operación a plazo condicional, en virtud del cual comprador y vendedor quedan definitivamente obligados, reservándose el derecho de liquidar en cualquier día de los que median hasta el plazo convenido, pero debiendo avisar con cierta antelación, fijada reglamentariamente (suele ser —como actualmente— de 24 horas).

Este contrato puede pactarse a prima. En este caso, el tomador de la prima puede abandonar el contrato en cualquiera de las sesiones de Bolsa, mediante el abono del importe de la misma.

La prima puede ser en beneficio del comprador o del vendedor. La parte contraria, que es la que debe pagarla, podrá actuar, rescindiendo o no el contrato, según la evolución de la cotización de los títulos negociados, bien para aprovechar una coyuntura favorable (al alza o a la baja) que se prevé que termine o bien para evitar una pérdida mayor si es tima que tendencia desfavorable continuará.

La operación a plazo se puede efectuar con opción. Esta condición consiste en que el comprador o el vendedor, mediante una diferencia de cambio a su cargo respecto al cambio cotizado para el mismo valor a plazo en firme, adquiere el derecho de exigir la entrega o la recepción de valores de una misma clase, igual o múltiple en número a los que son objeto de la operación. Esto permite a los contratantes modificar el negocio a su favor, según la tendencia de las cotizaciones.

Los contratantes, asimismo, pueden reservarse el derecho a aplazar a otra fecha convenida el cumplimiento de la operación ("report").

Operaciones dobles: consisten en la compra al contado o a plazo de valores al portador, y en la reventa simultánea a plazo y a precio determinado a la misma persona de títulos de igual especie. En ocasiones, se hace constar en las pólizas

zas la numeración de los títulos, para impedir su negociación. En este caso se reduce a ser un préstamo a corto plazo, Pero en caso contrario, las posibilidades de la operación se acrecientan con la de la negociación de los títulos.

Las operaciones a plazo pueden contratarse en descubierto, es decir, sin que se exija en el momento de la firma del contrato que los compradores posean el dinero ni los vendedores los títulos. En este caso, los contratantes sólo están obligados a cumplir con sus obligaciones al vencimiento del contrato, pudiendo, mientras, jugar al alza o a la baja para estar en las mejores condiciones posibles en el momento de su consumación.

Por otra parte, hay que considerar que los contratos pueden ser formalizados por los agentes con la expresión de los nombres de los contratantes o puede estar permitida la reserva de la identidad de los mismos. En este caso, para la época estudiada, se denominan a comitente. Esta oportunidad podría ser aprovechada por algunos agentes para efectuar ellos mismos las operaciones, así como por algunos políticos que ocupaban altos cargos para ocultar su identidad.

La liquidación de los contratos podía ser efectuada por su totalidad o por el saldo. En este caso, se denomina a diferencias y se trata de la compensación de operaciones contrarias.

Puede concluirse que las operaciones al contado tienen escasas posibilidades especulativas. En ellas, por ejemplo, el comprador sólo se beneficia con el alza mientras que el

plazo permite realizar beneficios tanto en épocas de alza como de baja y la versatilidad de sus contratos permite a los bolsistas defender mejor sus carteras. Los tipos de operaciones aquí expuestas son sólo una muestra de ellas. Con estos elementos se pueden realizar múltiples combinaciones que los especuladores han ido perfeccionando y las diversas legislaciones nacionales en mayor o menor medida, aceptando (457).

3.4.2.- La legislación bursátil (1.831-1.923).

Tres características destacan al realizar una lectura de conjunto de la legislación bursátil en la España del siglo XIX y principios del XX. La primera es lo tardío de su primera regulación —1.831— en comparación con Europa, aunque resulta una fecha relativamente temprana si tenemos en cuenta que todavía reinaba el absolutismo en España y que apenas había títulos negociables. Esta primera ley es una consecuencia del Código de Comercio (que no se ocupaba de la Bolsa) y se debe a la misma pluma —Sáinz de Andino—. La segunda es que ninguna ley específica de Bolsa fue el resultado del proceso legislativo regular sino que todas fueron impuestas por decreto. Aparte de la primera, promulgada en una fecha en la que el único acuerdo necesario para la legalidad de una nor-

(457) Las diversas combinaciones y posibilidades del plazo en la época actual a nivel internacional están expuestas de forma completa, en E. Fondevila Roca, Las operaciones bursátiles a plazo. Principios y técnicas, Barcelona, 1.967.

ma era el del propio monarca (1.831), la única excepción fue el Código de Comercio de 1.885. Este, tramitado como proyecto de ley de artículo único incorporó en su articulado la legislación sobre las Bolsas de Comercio. Desde esta fecha —y en el período estudiado— se renunció a una ley separada sobre el tema.

La tercera característica es el dominio de la legislación dictada en período moderado, hasta que el Código de Comercio de 1.885 incorporó a su articulado de forma permanente algunos de los principios del 69. La evolución de la legislación bursátil apoya la tesis ya definida en páginas anteriores: se descubre un cierto acuerdo entre moderados y progresistas primero, y entre liberales y conservadores después, que responden de forma similar a la evolución de la coyuntura. Sólo los demócratas rompieron esta armonía de fondo que se descubre si leemos con atención la legislación —decretada o proyectada— y los discursos y preámbulos que la acompañan. Armonía y continuidad que aparecen si descorremos el velo de la única polémica real: la de las operaciones a plazo y que depende más de la ausencia de un análisis técnico de la coyuntura socio-económica que de las posiciones políticas. Incluso la oposición democrática es más verbal que real; por eso fue virulenta en 1.856 y ampulosa pero continua en 1.869.

De este modo, el Real Decreto de febrero de 1.854 inspiró muy directamente el proyecto progresista de Luján; sólo parcialmente —y en puntos menores— fue derogado en 1.869 y

restablecido en su integridad durante buena parte de la Restauración. Asimismo, cuando se debatió el Código de Comercio —muy liberal en este punto— apenas hubo críticas por parte de los conservadores y nunca a lo sustancial.

a) El Real Decreto de 1.831.— La Bolsa de Comercio de Madrid, que fue la única oficial en nuestro país hasta 1.890, fue creada en 1.831, por un Real Decreto de inspiración francesa firmado por López Ballesteros y redactado por Sáinz de Andino (458). Cabría repetir aquí las consideraciones hechas al comienzo de este capítulo sobre lo temprano de la organización legal del capitalismo en España promulgada antes —mucho antes— de que existiera una presión de la demanda digna de ser así llamada.

Una vez más, el comportamiento del Borbón y su gran ministro, por peculiar que parezca, respondió a una lógica fielmente seguida en el Antiguo Régimen español y hasta, al menos, 1.869: la organización de un aparato legal adecuado al desarrollo económico aunque faltaran las necesarias condiciones económico-sociales al efecto, cosa en la que los gobernantes tenían también un alto grado de responsabilidad. Descuidado este campo, se actuó sobre aquél, dado que el esfuerzo requerido era mucho menor y con la pretensión y la confianza —ya manifestadas en el Antiguo Régimen— de que

(458) R.D. de 10 de septiembre de 1.831, C.D.D., t. 16, pp. 274-306. Para la afirmación de la inspiración francesa de esta ley, aparte de la evidencia surgida de la comparación, el propio autor en la Enciclopedia de la administración, Madrid, 1.853, VI, 676, afirma: "formada la ley de 1.831 en sus bases principales de la legislación francesa...".

la reforma de la legislación llevara automáticamente al desarrollo económico. Esta visión peculiar, sesgada y parcial de lo que era la política económica, hizo que en medio del absolutismo político, el rey firmara el decreto mencionado, que contiene un muy correcto preámbulo que glosa la utilidad de las Bolsas (459).

El preámbulo del Real Decreto de 1.831 alude a la necesidad de organización del mercado tras la aprobación del Código de Comercio. Este no contenía ninguna disposición específica sobre la Bolsa pero aludía a ella en dos ocasiones: en el artículo 69 y en el 115: En aquél, al prohibir entrar "en las bolsas de comercio" a los corredores intrusos; en éste, al incluir como primera atribución del colegio de corredores "velar que en las Casas de Contratación o Bolsas de comercio se observen las leyes y reglamentos sobre el cambio...". Estas alusiones pueden ser interpretadas como aceptación por parte del autor del Código y posterior redactor del Real Decreto de la Bolsa de la existencia libre de este organismo. Creo más acertado pensar que en la cabeza de Sáinz de Andino se encontraba un completo plan de revisión legislativa del que el Código era simplemente el principio. De ahí la alusión a instituciones que aún no estaban reguladas, denominando Bolsa a lo que todavía no eran sino Lonjas.

(459) Durante algún tiempo ha sido lugar común afirmar que el mérito de la ley es de los hombres preclaros que rodeaban a Fernando VII y que ingeniosamente burlaban su absolutismo: López Ballesteros y Sáinz de Andino (ej., Galvariato, La Bolsa de Madrid, 1.831-1.931, Madrid, 1.935, p. 56). Como se ha afirmado más arriba, pienso que esta es una razón necesaria —la existencia de hombres capaces— pero que no es suficiente.

El preámbulo del Real Decreto de 1.831 utilizó un tono asombrosamente liberal para hablar de la concurrencia, del mercado y de la publicidad como garantía de los contratos:

"Facilitándose con la reunión periódica de las personas que ejercen el tráfico, la comunicación de las especulaciones que combine el interés individual de cada uno".

El interés del gobierno en este momento se cifraba en estimular un tipo de contratación que no está reseñada en el preámbulo: el de los efectos públicos. Los últimos quince años del siglo XVIII habían conocido negociaciones de vales reales y de acciones del Banco de San Carlos y de la Compañía de Filipinas pero no con la abundancia y continuidad necesaria como para dar origen a un centro de contratación de valores, a pesar del intento de crearlo en el seno del propio Banco:

"Será de cuenta del Banco comprar o arrendar la casa que le convenga pagar para situar en ella el Banco y sus oficinas. En esta casa se podrá elegir sitio, sin interrupción de las operaciones del Banco, en que puedan concurrir los comerciantes y corredores desde las once de la mañana, para tratar sus negociaciones de letras, acciones y demás; porque la publicidad de estas operaciones es el mejor medio de evitar las usuras y monopolios ocultos que emplea la codicia" (460).

En la tercera década del s. XIX, los valores públicos es

(460) a. 36 de la R.C. de creación del Banco Nacional de San Carlos, Madrid, 1.782. Ya lo había señalado Floridablanca en su exposición al rey: "... a fin de evitar la ruina total del crédito del Estado y facilitar al mismo tiempo el fomento de las operaciones de comercio..." (cit. por Galvarriato, Historia..., p. 58, nota 1).

pañoles se cotizaban —oficial y extraoficialmente— en la Bolsa de París. La Gaceta de Madrid publicaba diariamente las cotizaciones de vales, deuda y acciones del Banco. Fue la necesidad de fomentar el crédito del Estado en un momento crítico, de impulsar la negociación de sus valores y de dar oficialidad a su cotización, lo que provocó finalmente la creación de la Bolsa de Madrid.

Este Decreto se mantuvo en vigor durante casi catorce años, hasta que fue sustituido por la ley provisional de junio de 1.845 (461), firmada por Armero como ministro de Marina y Comercio en el primer gabinete Narváez. Fue el mismo gobierno que presentó el primer proyecto de ley que pretendía regular, en sentido restrictivo, la creación de sociedades anónimas.

Antes de abordar el resto de la legislación quiero destacar el grado de permanencia del Real Decreto de 1.831. Todas las normas que siguieron, continuaron afirmando la necesidad de que las operaciones sobre efectos públicos se realizaran en la Bolsa con la intervención de agentes, que éste era el único lugar autorizado para negociar, que se consideraban nulas a efectos judiciales las operaciones realizadas fuera de ella (lo que tendía a desanimar la negociación extra-bursá-til) y que sólo esta institución podía dar cotización oficial a los valores. El Decreto de 1.831, además, inició la tradición de privilegiar la contratación de efectos públicos

(461) Ley provisional para la Bolsa de Comercio de Madrid, 26 de junio de 1.845, C.DD., t. 34, pp. 301-321.

dándoles mayores formalidades, garantías y seguridades respecto a los valores comunes de comercio. A efectos de organización, la continuidad es notable.

b) Los proyectos de 1.841 y 1.842.— Si bien como hemos dicho el Real Decreto de 1.831 no fue sustituido hasta junio de 1.845, desde julio de 1.841 se habían presentado en el Senado tres proyectos de ley que no culminaron su tramitación, dos de ellos suscritos por García Camba (27 de julio de 1.841 y 12 de abril de 1.842) y el tercero por Capaz (16 de noviembre de 1.842) (462). Son proyectos esencialmente iguales en su concepción de la Bolsa y en los tipos de contratación permitida, diferenciándose solamente por el grado —cada vez mayor— de control sobre las operaciones a plazo y sobre los agentes. Estos textos deben ser entendidos como reacción a la baja espectacular de la Bolsa que tuvo lugar durante la Regencia de Espartero, influida por causas políticas.

La primera sacudida importante de la Bolsa motivada por factores políticos tuvo lugar en julio de 1.834 (asalto a los conventos). Desde este momento hubo otras por la guerra (principios de 1.835), la desamortización (1.836), la suspensión de pagos de los intereses de la deuda (principios de 1.837)... pero todas ellas fueron pequeñas por el escaso movimiento bursátil y pronto superadas por la pervivencia del

(462) D.S.S., 27 de julio de 1.841, apéndice 2º al núm. 56; 12 de abril de 1.842, apéndice al núm. 40; 16 de noviembre de 1.842, apéndice 2º al núm. 5.

movimiento especulativo dentro de las operaciones a plazo, que se podían realizar con gran libertad (463).

En la Regencia de Espartero asistimos a un doble fenómeno: en primer lugar, el movimiento bursátil creció espectacularmente (464); en segundo, la Bolsa se comenzó a utilizar como arma política. Lo primero se explica dentro del general ambiente de euforia que siguió al fin de la guerra civil; lo segundo, por el descubrimiento de nuevas posibilidades en este instrumento recién creado. Así, poder y oposición pretendieron utilizar la Bolsa para sus fines: el gobierno quiso encauzar la expansión de la Bolsa y las críticas de la oposición mediante la aplicación rigurosa de la ley de imprenta (465).

No es extraño, por tanto, que gobierno y oposición explicaran la crisis bursátil de 1.841 por causas políticas. El gobierno, por la campaña de prensa; ésta, afirmando que las alzas se debían a maniobras políticas de sostenimiento del gobierno y al tiempo, sosteniendo que las bajas eran producidas por el descrédito de éste. De forma paralela —se dice— se producen alzas y bajas por el simple movimiento especulativo favorecido por los jugadores entre los que se encontra-

(463) Afirmaciones realizadas sobre las cotizaciones reproducidas en la Gaceta de Madrid y por Juan Francisco Esteban en su Boletín de Cotización. Sobre estos años, José Anonío Torrente Fortuño, Historia de la Bolsa de Madrid, Madrid, 1.974 (3 vols.), v. 2, pp. 39-59.

(464) La sesión de 17 de diciembre de 1.840 llegó a contratar más de 70 millones de reales (Torrente Fortuño, ibidem).

(465) O. de 9 de septiembre de 1.841, C.O.D., t. 27, pp. 643-644. v., sobre la campaña contra el gobierno: El Irueno, El Cangrejo, El Guirigay... y, por parte gubernamental, el Eco del Comercio.

ban algunos ministros (466).

La baja de los fondos públicos iniciada en enero de 1.841 se intentó frenar, aparte otras medidas (467), por el anuncio de una nueva ley de Bolsa. El ministro García Camba presentó su proyecto en julio (468). Su objetivo —afirma el preámbulo— era incrementar las garantías sobre las que debía asentarse la negociación para que no saliera "del círculo legal y moral que conviene" de modo que la Bolsa se convirtiera en "una rueda útil a la máquina del crédito del Estado". Este proyecto fue presentado como una autorización (ley del artículo único), pero no logró su objetivo. Los efectos públicos siguieron bajando dentro de un escaso nivel de negociación (469) y el ministro retiró su propuesta debido a la existencia de "algunos incidentes desgraciados ocurridos en las negociaciones de efectos públicos en la Bolsa de esta Corte" y para hacer las modificaciones que evitaran "los ardides de las especulaciones de mala fe" (470). Se pre

(466) Sobre esto, los periódicos citados en nota anterior. Destaca el pleito de El Irueno con los ministros Gamboa (Hacienda) y Cortina (Gobernación) sobre una carta de un lector publicada en 15 de enero de 1.841 y que terminó con un desmentido —obligado— publicado un mes después en el mismo periódico.

(467) Tales como la capitalización de intereses, la centralización de fondos, la solicitud de anticipo al Colegio de Agentes... (v. Torrente, Historia..., Madrid, v.2, pp. 88-90).

(468) D.S.S., 27 de julio de 1.841, apéndice 2º al núm. 56.

(469) Como observa Torrente Fortuño, Historia... Madrid, v. 2, p. 86: "dos millones y millón y medio de reales en operaciones a plazo y al contado, con cuatro y tres operaciones".

(470) D.S.S., 4 de agosto de 1.841, p. 842. La Comisión dictaminadora había sido elegida con rapidez (29 de julio de 1.841) y estaba formada por Martín de los Heros, como presidente, Jordá y Santandreu como secretario, Camps y Aviñó, Ferrer y Muguero e Iribarren. No llegó a dictaminar.

tendía así controlar la especulación bursátil que el R.D. de 1.831 permitía efectuar con gran libertad. Este proyecto, si bien era más preciso y superior técnicamente al Real Decreto de 1.831, era muy similar en su conjunto. De hecho, más de la mitad de sus 118 artículos son idénticos y otros sólo tienen modificaciones de estilo. El grandilocuente preámbulo, una vez más, no se correspondía con las reformas propuestas.

La prensa, que había criticado la presentación del proyecto hizo lo mismo con su retirada:

"El inocente ministro de Marina y Comercio, según nos cuenta el Hablador Patriota, ha retirado el proyecto de ley de Bolsa, creyendo que su presentación ha influido en la baja de los fondos públicos, que tiene asustados a sus compañeros. ¡Qué tontería! La verdadera causa de la baja es la desconfianza y el poquísimos crédito del Gobierno Titiritesco" (471).

"Nos abstenemos de añadir todos los pormenores que se nos han referido acerca de los culpables manejos empleados para promover la baja en estos últimos días. De ello aparecería que las alteraciones de la Bolsa no son otra cosa que el resultado de inmorales confabulaciones entre especuladores y hombres públicos" (472).

Mientras, la prensa gubernamental achacaba la baja también a "confabulaciones", pero llevadas a cabo por los reaccionarios que querían derribar al gobierno:

"Varios especuladores de efectos públicos cuyas ideas políticas no están en consonancia con las del proyecto... se arrojaron a expender grandes masas, con el fin de hacer bajar los precios de

(471) El Cangrejo, 6 de agosto de 1.841.

(472) El Correo Nacional, 11 de agosto de 1.841.

nuestra deuda consolidada y desacreditar por este medio al Sr. Ministro de Hacienda" (473).

Nadie hizo un análisis técnico del movimiento de la Bolsa. Las iniciales alzas y bajas motivadas por la natural reacción a las medidas de arreglo de la Deuda, tanto en los inversores españoles como en las Bolsas extranjeras, principalmente París, fueron agrandadas espectacularmente por la efervescencia política del momento. Se retiró el proyecto de Bolsa y, al tiempo, se silenció a la prensa. Ello hizo que las aguas fueran volviendo a su cauce y que las cotizaciones de efectos públicos subieran en el último trimestre de 1.841 después de un verano en el que se negoció un millón y medio de reales como media diaria.

El nuevo proyecto de García Camba presentado en abril de 1.842 (474) fue concebido, como el anterior, como una reacción al movimiento de alzas y bajas fuertes y continuadas que se reprodujo en el primer trimestre del año. La intención del proyecto, muy similar al anterior, era la misma: "urgente necesidad de acordar mayores seguridades a las negociaciones mercantiles de los efectos públicos que se ejecutan en la Bolsa de esta Corte". Era una nueva expresión de temor ante el riesgo del desenvolvimiento del mercado libre. Era el afán constante de impedir cualquier tipo de crisis, vano intento, aún a riesgo de frenar la negociación.

(473) Eco del Comercio, 2 de agosto de 1.841.

(474) D.S.S., 12 de abril de 1.842, apéndice al núm. 40.

Este proyecto se dictaminó en julio (475) con una sensacional propuesta: no son suficientes las garantías propuestas por el gobierno, todas las operaciones a plazo —se entiende que de efectos públicos— deben desaparecer. Y ello para evitar "el escandaloso e inmoral espectáculo que está ofreciendo hace algunos meses la Bolsa de Madrid". El diagnóstico era excesivo a todas luces. El preámbulo del dictamen que comentamos se aleja de los presupuestos de la economía clásica al diferenciar claramente los intereses individuales y los del Estado, que no sólo no coinciden sino que se contraponen; el legislador —naturalmente— debe salvar a la nación contra "el capitalista", que juega y descuida las industrias, que forma grandes compañías sólo para especular con su papel:

[se debe] "poner una barrera contra las instigaciones de la codicia privada y los extravíos del cálculo individual que tantas veces ha comprometido la suerte del país, sacrificado a sus miras y ambiciones particulares"

La comisión se mostraba partidaria de fomentar la función tutelar del Estado, mostrando claramente los peligros del juego. Si así se hace, la especulación no desaparecerá —afirman—, pero, al menos, no estará bendecida por la ley y se alejará del juego a tantos "empleados beneméritos, comerciantes de buena fe, hijos de familia, artesanos probos y

(475) D.S.S., 9 de junio de 1.842, apéndice 7º al núm. 77. La comisión firmante: Alejandro López, Joaquín M^a Ferrer, Juan José García Carrasco y Manuel Marliani.

sin malicia... "como ahora hay sometidos al riesgo de la ruina. No se considera que el individuo sea el mejor juez de sus intereses; la crisis económica —se piensa— se evitará con una legislación restrictiva que —se insiste— no es reaccionaria, pues es la que se tiene en París, Londres y "varias plazas de Holanda y Alemania".

¿Estaba tan extendido el juego? ¿Habían accedido a él las capas medias?. La prensa, el gobierno, el parlamento y cierta historiografía así nos lo dicen:

"La gente madrileña, de ritmo de vida bien tranquilo, se entregó con pasión furiosa a las especulaciones bursátiles. Todo el mundo jugaba a la Bolsa; la lucha entre alcistas y bajistas era empeñada; jugaban lo mismo el aristócrata que el burgués y que el plebeyo; de igual modo el poderoso que cuantos sin blanca en en bolsillo aspiraban a llenarlo; los paisanos, los políticos, la gente de pluma, los artistas y aún aquéllos mismos que formaban parte del gobierno" (476).

No obstante, si nos fijamos en el volumen de las negociaciones parecen un poco exageradas estas afirmaciones que sin embargo se han solido dar por válidas. Una vez más se sacaban conclusiones generales a partir de una ciudad: Madrid; y dentro de ella, de una institución: la única Bolsa oficial. Allí se negociaban casi exclusivamente fondos públicos, que era lo que preocupaba (en cuanto exponente del crédito del Estado) y no la suerte de las familias de las clases medias o el alejamiento del capital de las inversiones productivas. Si

(476) Romanones, El Marqués de Salamanca, Obras completas, Madrid, 1.935, I, pp. 172.

estas últimas hubieran sido las preocupaciones del gobierno, las medidas hubieran sido otras y no la regulación exclusiva de los fondos públicos y las posteriores leyes —ya criticadas— sobre las sociedades por acciones. Se hubiera —por ejemplo— puesto más atención en el juego realizado al margen de la Bolsa y ante sus mismas puertas, con acciones de sociedades y se hubiera facilitado su negociación libre en el seno de la institución, única forma de encauzarlo. No obstante, repetimos, todo indica que, aunque muy llamativo en Madrid, su volumen era muy pequeño si consideramos el conjunto del territorio español.

El Dictamen cuyo preámbulo acabamos de comentar fue presentado al Senado el 9 de julio de 1.842, cuando ya ocupaba el poder otro gobierno —marqués de Rodil— con otro ministro de Marina y Comercio —Capaz—. Cuatro días antes se había promulgado una orden de Hacienda —Calatrava— que no fue publicada en la Gaceta de Madrid y que instaba a los organismos competentes a estudiar la conveniencia de separar los cupones mandados capitalizar para evitar el juego especulativo (477). Su preámbulo mostraba el temor por parte del gobierno de que la Bolsa se hallara "monopolizada por unos cuantos agiotistas" dada la gran variación de las cotizaciones en el día, dado que las operaciones al contado tenían un precio más bajo que el plazo y que eran éstas las operaciones que fundamentalmente se realizaban y, entre ellas, los títulos

(477) R.O. de 5 de julio de 1.842, C.O.D., t. 28, pp. 8-9.

al portador al 5% con los once cupones vencidos.

Contra esta orden, Castaños formuló una interpelación (478), en la que sostenía que esta norma reavivaba los rumores de bancarrota que recientemente habían sido desmentidos por el propio ministro firmante y que no se mostraba ningún dato para sostener la afirmación de que la Bolsa estaba monopolizada.

La interpelación sin contestar, comenzó el debate del proyecto de ley en el Senado con la proposición de suspensión del mismo por parte de Capaz. Se basaba el ministro en el escaso tiempo que llevaba ocupando la cartera. La Comisión aceptó tal petición aunque manifestando que entre las dos legislaturas había habido tiempo suficiente para que el ministro estudiara el asunto y para que se manifestaran las diferentes posiciones sobre el tema. Por boca de Ferrer, además, se defendió un punto del dictamen en conexión con la Orden antedicha, el corte de los cupones de las rentas quince días antes de los respectivos vencimientos semestrales para evitar la especulación con cupones vencidos (479).

Esta ocasión fue aprovechada por Calatrava para contestar a la interpelación que le había sido formulada en el Congreso. Afirmó que la Orden de 5 de julio fue tomada ante los "rumores de escándalo" en la Bolsa de Madrid y que sólo pretendía abrir una información sobre la conveniencia de tomar

(478) D.S.C., 13 de julio de 1.842, p. 4.160.

(479) D.S.S., 15 de julio de 1.842, pp. 1.436-39.

medidas. Esa fue la única razón por la que no se consideró necesaria su publicación en la Gaceta de Madrid (480).

Suspendido el debate y sin más resoluciones acerca de la materia planteada en la Orden de 5 de julio, el ministro Capaz, que se había declarado incompetente para pronunciarse acerca del proyecto anterior, presentó uno esencialmente igual al Dictamen^a cuya discusión se había negado aunque suprimiendo la disposición sobre el corte anticipado del cupón, que era el punto central de discusión. No se llegó a dictaminar en 1.843 y fue, finalmente, retirado en el otoño de 1.844 por Armero, ministro de Marina y Comercio del primer gabinete Narváez. Cinco gobiernos y tres ministros habían olvidado el tema en una coyuntura alcista en la que el mercado especulativo funcionó ampliamente (481).

En resumen: la tendencia a la baja —en precios y Bolsa— que comenzó en 1.839 y culminó en 1.843 fue explicada por causas políticas y se intentó frenar mediante tres proyectos de ley que no conocieron su culminación parlamentaria y que incidían sobre un sólo punto —el que para el gobierno y la mayoría era causa de la crisis—: las operaciones a plazo de efectos públicos; primero se trataron de restringir (1.841) y luego de prohibir (1.842). En anuncio de estas medidas siempre repercutió desfavorablemente en la Bolsa, pues esas eran, precisamente, las operaciones que la sostenían;

(480) Ibidem, pp. 1.439-40.

(481) El proyecto, en D.S.S., 16 de noviembre de 1.842, apéndice 2º al núm. 5; el oficio de Armero reclamándolo, en 18 de octubre de 1.844, p. 42.

así, en el mejor de los casos, si no fomentaron la baja, no la impidieron y se tradujeron en una restricción del negocio.

c) La legislación moderada.— El proyecto de ley "para el régimen de la Bolsa de Comercio de Madrid" que presentó Armero en abril de 1.845 fue convertido en ley provisional en junio del mismo año sin haber sido dictaminado (482).

Precisamente un miembro de la Comisión parlamentaria —La Toja— propuso autorizar al gobierno para aplicar este proyecto como ley provisional dado que, seguramente, no habría tiempo de debatir el tema antes de que finalizara la legislatura. No fue apoyado por la mayoría de la Comisión que, por boca de Alcalá Galiano, su presidente, recordó que el gobierno no había pedido tal cosa y que ello supondría resucitar el "fatal" artículo 100 del Reglamento de las Cortes extraordinarias y de los años 1.820 y 21 por el que, si se sometía a las Cortes un asunto declarado urgente, se hacía ley. El presidente de la Cámara dirimió el asunto al manifestar la imposibilidad legal de tramitación de la propuesta si no mediaba proposición autorizada por las secciones (483).

A pesar de esta trayectoria y terminada la legislatura sin dictamen, el proyecto se convirtió en Ley provisional da

(482) El proyecto en D.S.S., 24 de abril de 1.845, apéndice 19 al núm. 116. La ley provisional de 5 de junio de 1.845 en C.DD., t. 34, pp. 301-304.

(483) D.S.S., 14 de mayo de 1.845, pp. 2.695-2.697. La Toja insistió, con idéntica suerte, en 16 de mayo (p. 1.705). Los otros miembros de la comisión eran: Alcalá Galiano como presidente, Rodríguez de la Vega como secretario, Gironella, Bordiú, Marqués de Villagarcía y Díaz Cid.

da "la necesidad de poner un eficaz remedio a los males que se advierten en las negociaciones de efectos públicos a plazo que se hacen en la Bolsa de Madrid" y sobre la misma argumentación de La Toja.

Una vez más debemos considerar esta ley como respuesta a la evolución de la coyuntura económica y la contratación bursátil aunque lo pequeño de las modificaciones que contiene contrasten con lo alarmista de su preámbulo.

En 1.843 se produjo un nuevo movimiento al alza del índice de precios y de la Bolsa. En 1.844 se inició una nueva etapa de especulación y negocios dentro de una coyuntura internacional alcista. Fue el año de la creación de los Bancos de Isabel II y de Barcelona. La creación del 3% produjo una inyección de dinero que favoreció el movimiento bursátil; los políticos seguían jugando a la Bolsa... En 1.845 continuaba todo este movimiento especulativo. La política de préstamos que seguía el Banco de San Fernando, en vez de frenar o dirigir el movimiento reforzaba su tendencia prestando más cuando había alza y menos en épocas de baja; así, había un importante volumen de pignoración sobre fondos públicos, acciones propias (484) del ferrocarril Madrid-Aranjuez y del Canal de Castilla. Todo este movimiento especulativo en el que estaban mezclados políticos y personajes del grupo promotor del Banco de Isabel II, al cesar ocasionó multitud de incumplimientos y quiebras en los primeros meses de 1.845. La causa

(484) Que desde 1.833 compraba para vender al alza (Torrente Fortuño, Historia... Madrid).

próxima fue la decepción ocasionada por el fracaso de las negociaciones sobre el Concordato, sobre cuyo éxito estaban sostenidas las posiciones de los alcistas. Este fue el ambiente que provocó en abril la presentación del mencionado proyecto y su conversión en ley provisional a finales de junio (a pesar de lo cual la liquidación de las operaciones de primer julio fue desastrosa. Esta disposición endureció —aunque sin prohibir— las operaciones a plazo, rodeándolas de garantías suplementarias.

Precisamente mientras estaba el proyecto en Cortes, Pedro Sáinz de Andino escribió un libro exculpatorio, el Ensayo crítico sobre la contratación de la Bolsa de comercio y las ventas simuladas de los efectos públicos (485). Su intención era, reconocida la crisis del momento, "explicar el verdadero sentido de aquellas disposiciones [el R.D. de 10 de septiembre de 1.831], para que se rectifique la inteligencia equivocada que generalmente se ha dado al texto literal de algunos artículos de esta ley, cuya redacción se hizo en la forma que están concebidos por consideraciones especiales, nacidas del objeto económico con que se creó al Bolsa" (486). Interesaba al redactor de la norma de 1.831 demostrar que la crisis de la Bolsa no había sido producida por la existencia

(485) ... en que se analizaba el proyecto de reforma de la ley de Bolsa presentado por el gobierno a las Cortes en la última legislatura. Parte primera, Madrid, 1.845.

(486) Ibidem, p. XIV, § 13. También en p. II § II: "amparándolas [las ventas simuladas de efectos públicos] con el escudo de una ley, a cuyas disposiciones literales se ha dado en su aplicación una latitud contraria a su espíritu, y a los principios más conocidos y comunes de justicia y conveniencia pública"; también en pp. 179-182.

de una incorrecta legislación sino por el abuso sobre sus disposiciones, con una argumentación similar a la que sostuvo cuando defendió al Código de Comercio de 1.829. A la vez, dentro de la línea, tan frecuente en el momento, de fe ciega en las normas, manifestaba su intención de contribuir al perfeccionamiento de la legislación; que es —según el autor— lo que sostiene el bien general del país (487).

Lamentablemente no escribió sino la primera parte de su obra, que es fundamentalmente descriptiva; quizá porque pronto se promulgó la ley mencionada que colmaba los deseos del autor al limitar —que no prohibir— la negociación de los efectos públicos a plazo.

Como es natural, en su obra no dió Sáinz de Andino ninguna importancia a la negociación de acciones de compañías, limitándose a la descripción de las operaciones de los efectos públicos según el Real Decreto de 1.831. Unicamente señaló que, además de los efectos públicos, "tienen curso en la Bolsa" los de algunas empresas comerciales e industriales "a quienes se concede el privilegio de la cotización" (Bancos y compañías de obras públicas) (488).

Contra las operaciones a plazo se promulgó el Real Decreto de 5 de abril de 1.846, firmado por el propio Armero quien, ante la evolución de los acontecimientos, endureció su posi-

(487) Ibidem. p. XIII § XIII.

(488) Ibidem, p. 126. Subrayado mío.

ción (489).

Este Decreto había sido la causa de la crisis del gabinete Narváez con Pezuela como ministro del ramo —"crisis de la Bolsa"— y de su sustitución por el de Istúriz, con Armero en Marina y Comercio. Narváez volvió al poder en febrero de 1.846, manifestando que una de las primeras medidas que tomaría sería la de "moralizar la Bolsa" y que "si para eso era preciso cerrarla, mi firma será la primera en la exposición que se eleve a S.M." (490). Pezuela, ministro del ramo, encargó al Consejo Real la preparación de una ley de Bolsa pues, contra la opinión de Narváez, no era partidario de su cierre. La diversidad de criterios en el gabinete se resolvió en una crisis y la inmediata promulgación del decreto mencionado en el que se prohibían las operaciones a plazo.

Este decreto estuvo en vigor hasta febrero de 1.854, excepto en el punto de las operaciones a plazo de efectos públicos, autorizadas entre octubre de 1.847 y marzo de 1.848 (491). La evolución de la Bolsa en estos años muestra una clara tendencia a la baja hasta 1.853. La crisis de 1.847 repercutió también en la legislación de sociedades por accio-

(489) R.D. de 5 de abril de 1.846. C.L.E., t. 37, pp. 71 a 89. El decreto fue firmado por Armero el mismo día de su nombramiento.

(490) Cit. por Ildefonso Antonio Bermejo, La Estafeta de Palacio, ed. 1.871, t.II, pp. 641-642. Romanones, Salamanca conquistador de riqueza, gran señor explica esta frase por el resentimiento de Narváez contra su asociado bursátil, Salamanca (pp. 173-74), que le había llevado a la ruina en 1.845. Torrente Fortuño, Salamanca bolsista romántico, Madrid, 1.969, pp. 68 a 92, critica de forma convincente la novelesca interpretación de Romanones y muestra que Salamanca fue mucho más prudente de lo que se creía. La actitud de Narváez debe ser entendida como reflejo de su mentalidad de espadón.

(491) El Real Decreto de 30 de septiembre de 1.847 las autorizó (C.L.E., t. 42, p. 201) y el de 22 de marzo de 1.848 las suprimió (C.L.E., t. 43, p. 319). Aquél, inspirado por Salamanca ministro de Hacienda; éste, en un gobierno de nuevo presidido por Narváez y con Bravo Murillo en Fomento.

nes (febrero de 1.847) que, aunque no se cotizaban en Bolsa lo hacían en sus aledaños, en un movimiento especulativo paralelo que supuso la ruina de aquellas que se habían creado con fines especulativos y no estaban sostenidas en una base real.

El año crítico de 1.848 fue catastrófico para la Bolsa madrileña, que también se vió influida por la crisis de la de París (492). El movimiento levemente alcista de 1.850, año de recuperación económica, se interrumpió con el arreglo de la Deuda de Bravo Murillo, que hizo se vinieran abajo los títulos españoles en París, Londres y Amsterdam de forma inmediata y que estas dos últimas se cerraran para los títulos españoles (493) reduciéndose así drásticamente por veinte años la entrada de capitales ingleses y holandeses. Más tarde el impago incluso después del arreglo, provocó también el cierre de París. 1.853 fue, de nuevo, un año aciago. En enero y febrero sólo hubo cotización algunos días y ninguna entre marzo y el mismo mes de 1.854, aunque se produjeron algunas negociaciones particulares, como reconocía el preámbulo del "proyecto de ley sobre organización de la Bolsa" de noviembre de 1.853 (494). Es la primera vez que se habla de

(492) Torrente Fortuño, Historia..., v. 2, p. 189, señala la existencia de fuga de capitales españoles para comprar valores baratos en París. En el movimiento participa también el Banco de San Fernando; la razón que lo justifica es una labor de sostenimiento de los cambios en operaciones de open-market. El autor se inclina a considerar que en realidad es un simple arbitraje especulativo.

(493) R. Cameron, Francia y Europa..., p. 370.

(494) D.S.C., 21 de noviembre de 1.853, apéndice 7º al núm. 2.

"Bolsa" y no de "Bolsa de Madrid" en el título de un proyecto; se presentó como una autorización —ante la urgencia de la reforma— y contenía cuatro puntos fundamentales:

a) Se simplificaba la contratación, tanto al contado como a plazo; se rodeaba a ésta de ciertas garantías para impedir el juego, como son la brevedad del plazo, la responsabilidad de los contratantes y la reserva de la "fuerza civil de obligar" sólo para las operaciones cubiertas por la ley. El resto no tendría más validez que la de un contrato privado.

b) Se intentaba crear un Colegio de Agentes que fuera "una verdadera corporación con intereses colectivos y comunes a todos".

c) Se contemplaba por primera vez el tema del préstamo con garantía de efectos públicos, restringiéndolo en gran medida (495).

d) Se prohibía explícitamente la negociación fuera de la Bolsa.

Este proyecto —presentado por Esteban Collantes— se convirtió en Real Decreto en febrero de 1.854 (496) sin que hubiera siquiera iniciado su tramitación en Cortes debido a

(495) La regulación de este punto y en este sentido era reclamada en la Enciclopedia de la administración..., 1.853, t. VI, pp. 652-653, así como, en general, toda esta reforma. Destaquemos también que este punto pervive casi "a la letra" en el articulado del Código de Comercio de 1.885 como señala Galvariato, Historia..., p. 170, nota 2.

(496) R.D. de 8 de febrero de 1.854, C.L.E., t. 71, pp. 168-182.

su suspensión por la cuestión ferroviaria.

La Bolsa seguirá —con retraso— al movimiento alcista de los precios y el gobierno pudo, así, capitalizar este decreto ya que desde marzo la cotización oficial fue fluida y masiva (497).

d) El proyecto progresista.— La Vicalvarada cerró la Bolsa. Su reapertura sólo conoció poco negocio y baja sensible hasta el verano de 1.855. Desde entonces hubo una recuperación lenta, en sintonía con la tendencia alcista de los precios.

El progresismo abordó muy pronto el problema bursátil con pretensiones de dar a su organización estabilidad y permanencia (498). Su interés cristalizó en el proyecto de ley sobre "Bolsas de Comercio" de diciembre de 1.854, firmado por Luján (499). Su título indica una loable generalidad, pero el preámbulo volvía a incidir exclusivamente sobre el tema de la Bolsa de Madrid. En él se distinguía entre "la contratación lícita sobre efectos públicos" y "el reprehensible y perjudicial juego de la Bolsa". Para acabar con éste no se prohibía el plazo pero sí las operaciones en descubierto y a comitencia, no reconociendo a éstas ni a las que se realiza-

(497) El análisis de los Boletines de Cotización revela que casi todos los valores se cotizaron diariamente, lo que no se conocerá hasta veinte años después (cfr. Torre Fontuño, Historia... Madrid, v. 2, pp. 256-257).

(498) R.D. de 23 de agosto de 1.854, creando una comisión para preparar un proyecto de ley de Bolsa, C.L.E., t. 63, p. 297.

(499) D.S.C.C., 9 de diciembre de 1.854, apéndice 12 al núm. 30.

ran al margen de la ley fuerza civil de obligar. En general, este proyecto sigue el anterior de Esteban Collantes.

El dictamen no se presentó hasta abril de 1.856 con la petición de gobierno y comisión de que su discusión se declarara urgente (500). En su presentación, la comisión dictaminadora dió muestras de un progresismo más abierto que el del proyecto y de un gran optimismo. Se achacaban al texto de Luján los defectos propios de una formulación tímida por la situación de desconfianza ante una revolución recién emprendida; pero ahora —afirman— había renacido la confianza y por ello era necesario poner en armonía la ley de Bolsas con las de ferrocarriles, Bancos y sociedades de crédito y para ello debía descansar "en una base amplia y liberal". Por ello, la comisión se mostró partidaria de facilitar la contratación a plazo, de dar a todas las operaciones fuerza civil de obligar, de disponer la no reivindicación de los efectos al portador y de incrementar el número de agentes, ya que se preveía un aumento de las operaciones.

No bastaba este talante progresista a Orense, único que se opuso realmente a la totalidad en un debate inconcluso por la involución política producida el propio verano de 1.856 (501). El Marqués de Albaida, en su radical defensa de la li-

(500) D.S.C.C., 30 de abril de 1.856, apéndice 2º al núm. 371. Las peticiones de urgencia, en 25 de abril, p. 8.056. La comisión firmante del dictamen: Marqués de Corvera como presidente, Labrador como secretario, Masadas, Udaeta, Moyano, Mollinedo, P. Avecilla y Echevarría.

(501) D.S.C.C., 16 de junio de 1.856, pp. 8.960-8.966. Iranzo también tomó la palabra contra la totalidad pero sólo para oponerse a las operaciones a comitente y a las restricciones a los colegios de Corredores: que se supriman —dice— o que se potencien. Ibidem, pp. 8.966-67.

bertad estimaba innecesaria, incluso, la ley de Bolsa y criticaba la tendencia de los "gobiernos medios" a caer en la conducta de los gobiernos despóticos de "meterse en todo". Se mostraba partidario del sistema inglés, cuya Bolsa estaba regulada por un simple reglamento interior y repudiaba el legalismo intervencionista hispano-francés:

"Yo no sé por qué este afán de legislarlo todo; es el prurito francés" (502).

Este dictamen —afirmó— pretendía negar la legitimidad de las reuniones que se realizaran al margen de la Bolsa, de modo que no sólo quedarían prohibidas las reuniones políticas sino también las de los especuladores. Orense realizó, en definitiva, un discurso de loa a la libertad ("cuantas menos trabas se impongan mejores resultados se conseguirán"), apoyado en la idea de que como la legislación no evita las catástrofes, es inútil. La respondieron Luján, como ministro de Fomento, y Camilo Labrador en nombre de la Comisión. Aquél sosteniendo la necesidad de la ley en la organización social y la relación directa entre el número de leyes y el grado de civilización; éste, en la misma línea, afirmó que "la completa libertad introduciría la anarquía" (503).

El debate del articulado fue interrumpido muy pronto por la evolución de los acontecimientos. Los tres artículos que hubo tiempo de discutir fueron cuestionados por los demócra-

(502) Ibidem, p. 8.961.

(503) Ibidem, p. 8.955.

tas que lograron la reprobación del segundo y del tercero. El primero, que definía la Bolsa, fue aprobado a pesar de la oposición de Orense que consideraba innecesaria toda definición. El segundo prohibía la contratación de fondos públicos fuera de la Bolsa, bajo pena de nulidad e ineficacia en juicio. Fue criticado por Orense, Figueras y García Briz, que rechazaban la idea de conceder el "odioso monopolio" de la contratación de efectos públicos a Madrid y pedían la retirada del artículo. Iranzo sugirió que la prohibición rezara sólo donde hubiera Bolsa. Nada de ésto fue aceptado en principio por la Comisión que, por boca de Avecilla, afirmó que una cosa era que se hicieran negociaciones de efectos públicos fuera de la Bolsa —cosa que cualquiera podía hacer— y otra que se les concediera validez legal. Se retiró el artículo, no obstante, para darle una nueva redacción (504).

El artículo 3º se refería a las personas que podían entrar en la Bolsa. Contra él, tres argumentos principales: la ley es demasiado restrictiva (Coello); no es lícito impedir la entrada en Bolsa a aquéllos que hayan contratado sin ser agentes pues es un atentado contra la libertad (Orense); no se puede prohibir "entrar" a nadie; si acaso "contratar" (Forgas). Puesto a votación, el artículo fue desechado (505).

e) El proyecto de la Unión Liberal.— Entre 1.856 y 1.868 asistimos a una Bolsa indecisa, con escasa negociación y nu-

(504) Ibidem, pp. 8.968-8.971.

(505) Ibidem, pp. 8.971 y 8.972.

la respuesta a los cambios políticos. La crisis de 1.857 repercutió escasamente en Madrid a diferencia de Barcelona y entre 1.858 y 1.863 se asitió a una recuperación y a un incremento del negocio importante (cinco veces en cinco años) Hay que considerar que, sin embargo, la cifra total del negocio entre 1.856 y 1.864 es igual a la del año 1.844. Se incrementaron las publicaciones sobre Bolsa y la presencia de las sociedades en la cotización oficial. En abril de 1.861 se presentó en el Senado un proyecto de ley firmado por Corvera (506).

El preámbulo anunciaba la intención del ministro de acabar con la provisionalidad en materia bursátil, cosa que no se logró pues no se llegó siquiera a dictaminar. Proclamaba su deuda con el dictamen de 1.856 en cuya elaboración participó y tendía a la simplificación de las operaciones y al incremento de la agilidad del plazo.

Ese mismo año se produjo un descenso técnico, debido a la crisis monetaria que produjo —una vez más— las famosas "colas" ante el Banco de España lo que obligó a cambiar las medidas legislativas: retirada del proyecto, elevación del tipo de descuento para dificultar la pignoración de títulos, emisión de empréstitos, inyección monetaria... A pesar de todo ello, las Bolsas extranjeras reaccionaron negativamente hacia los nuevos valores españoles.

(506) D.S.S., 8 de abril de 1.861, apéndice 12 al núm. 91. la comisión que debía dictaminar sob él estaba presidida por Rodríguez Vaamonde, actuaba como secretario, A. Oliván y sus otros miembros eran Gálvez Cañero, Joaquín M^a Pérez, V. de Cerrajería, J. de Barroeta y Aldemar y F. Luján.

La crisis se logró retrasar pero la crisis acusó una baja desde 1.863, y continuará la misma tendencia hasta alcanzar su punto más bajo en 1.866, siendo en este momento un elemento más de la crisis económica-política general. La suspensión de pagos de Guilhou supuso la irrupción en Bolsa de su cartera de acciones del ferrocarril Sevilla-Cádiz en octubre de 1.865, lo que fomentó la baja; hubo quiebras y ausencia de dinero; el que huyó de la Bolsa se refugió en el negocio inmobiliario (Salamanca).

f) La legislación del Sexenio Revolucionario y la reacción de 1.874.— El crack de 1.866 en Madrid y Barcelona fue seguido de una cierta recuperación aunque el Sexenio Revolucionario fue pobre, en términos bursátiles, en ambas plazas. En noviembre de 1.868 un Decreto declaró libres los oficios de agente de Bolsa y Corredor de Comercio en virtud del principio de libertad de trabajo (507); dos meses después se liberaliza la creación de Bolsas de Comercio en virtud del "sagrado principio de propiedad" (508). Las consecuencias fueron que el número de agentes aumentó de una forma que no estaba justificada por el negocio, que era escaso en la Bolsa oficial (509) y que el número de éstas permaneció estacionario. Los demócratas del 69 dejaron —por lo demás— en vigor

(507) D. de 30 de noviembre de 1.868; C.L.E., t. 100, pp. 843-848.

(508) D. de 12 de enero de 1.869; C.L.E., t. 101, p. 108-111.

(509) En marzo de 1.868 había 29 agentes; en abril de 1.871, 116. Torrente Fortuño, Historia..., Madrid, v. 2, p. 406.

el Real Decreto de 8 de febrero de 1.854 al que —curiosamente— dieron el reconocimiento de ley (aa. 5 y 6 del D. de 12 de enero de 1.869).

El poder ejecutivo de la República restableció el 10 de julio de 1.874 el mencionado decreto del 8 de febrero de 1.854 (510). Esta norma, de hecho, era redundante pues —como hemos comentado— el decreto de 1.854 sólo fue cuestionado en 1.869 en dos puntos concretos a la espera de una nueva ley de Bolsas que nunca llegó. No obstante, la promulgación del Decreto —que hay que considerar como una de las medidas "pre-Restauración"— fue utilizada de forma propagandística por sus mismos formuladores y por el canovismo. Por aquéllos, que lo conciben como un acto de responsabilidad gubernamental, que así, "con su acción rápida y enérgica" conseguirá evitar la constante caída de los valores públicos y "evitar que la libertad se haga odiosa por el abuso de su ejercicio". Todavía entrando en el último cuarto del siglo XIX se aplicaba la baja bursátil por una errónea política legislativa (511) y se estima que es la actuación en ese terreno lo que logrará remontarla. En este sentido se manifiesta el preámbulo cuando explica la intención del decreto:

"[poner] saludable correctivo a este desvarío de las pasiones, encauzando la marcha de la Bolsa" (subrayado mío).

(510) D. de 10 de julio de 1.874, C.L.E., t. 113, pp. 57-59.

(511) De hecho existían causas socioeconómicas que explican suficientemente la baja. Como causa próxima, en este momento, de la baja de valores públicos se encuentra la suspensión de los pagos de los intereses de la Deuda.

He afirmado que el canovismo también utilizó propagandísticamente la promulgación de este Decreto. Por ejemplo, Orovio, al afirmar, menos de un año después:

"El poder ejecutivo de la República, cuando, anteponiendo la conservación de los intereses sociales a las teorías revolucionarias desenvueltas en el decreto de 30 de noviembre de 1.868... (512).

g) El Código de Comercio de 1.885.— La Bolsa continuó bajando en el período de reajuste 1.875-1.877 a pesar de la autocalificada reforma legislativa. A partir de la fecha mencionada subieron las cotizaciones, al compás del relanzamiento industrial y del ordenamiento de la Hacienda y la Deuda Pública. Entre 1.882 y 1.885 se conoció una fase depresiva, por la repercusión de la crisis internacional y la retirada del capital extanjero, sobre todo. Los valores industriales, que habían comenzado a aparecer, apenas se cotizan. Los dos baches fundamentales en esta coyuntura fueron, el segundo semestre de 1.883 (noticias de las bajadas en Bolsas extranjeras) y finales de 1.885 (muerte de Alfonso XII).

Fue precisamente en esta coyuntura de crisis bursátil —1.882/1.885— cuando se presentó, discutió y aprobó el Código de Comercio que lleva incorporada a su articulado la ley de Bolsas. Esta disposición opta por el sistema que Garrigues ha calificado de "libertad templada" (513). Yo aún

(512) R.D. de 12 de marzo de 1.875; C.L.E. t. 114, p. 371.

(513) Garrigues, Curso..., I, 51.

diría más: con toda la insistencia que se hace en la palabra libertad en el preámbulo, el sistema, en lo fundamental, no varía respecto a 1.831 ó 1.854 (514). Se elige —dice Alonso Martínez en su discurso— el sistema de la libertad de Bolsas, como en 1.869, pero precisiones legales quitan toda validez a la negociación no oficial. Se proclama la libertad para contratar dentro o fuera de la Bolsa, con agente o sin él, pero la contratación libre no tiene cotización oficial ni es operativa en juicio. Un paso adelante se detecta, al reconocer mayor amplitud para que los títulos de todas las sociedades constituidas con arreglo a la ley sean objeto de negociación (515).

La discusión sobre los artículos referentes a la Bolsa —como ya hemos tenido ocasión de considerar— fue escasa, versó únicamente sobre aspectos técnicos y todas las enmiendas fueron aceptadas sin debate. Ni en este momento del proceso legislativo ni en el preámbulo se hizo ninguna referencia a la coyuntura. Se tenía fe en el futuro y —sobre todo— se legislaba con pretensiones de permanencia.

Aprobado el Código, debía promulgarse un "Reglamento para la organización de Bolsas de Comercio", que se preveía para el 1 de enero de 1.886, el mismo día en que el Código entraría en vigor. La muerte del rey y su repercusión en el pacto

(514) La semejanza con el R.D. de febrero de 1.854 ya fue señalada por Alvarez del Manzano, Bonilla y Miñana, Códigos españoles y extranjeros, 1.909-1.914, 6 vols, t. VI.

(515) Preámbulo al Código de Comercio, D.S.C., 20 de marzo de 1.882, apéndice 380 al núm. 85, pp. 9-12.

político de la Restauración hizo que la elaboración del Reglamento citado no cumpliera los plazos. Alonso Martínez presionado quizá por el pánico bursátil desatado a la muerte del rey y por un respeto hacia el legislativo llevado más allá de lo que aconsejaban las circunstancias, se decidió a dictar un Decreto estrictamente reglamentario e interino, dado:

"que existen notables divergencias sobre puntos graves y delicados entre el proyecto redactado por la Comisión nombrada al efecto, y el dictamen que acerca del mismo ha emitido el Consejo de Estado" (516).

No sabemos cuáles serían estas divergencias. El hecho es que este reglamento perdurará durante todo el período estudiado.

Desde esta fecha ya no se modificaron las disposiciones generales sobre la Bolsa aunque cabe destacar que en el Reglamento de la de Madrid de 1.904 se aludía por primera vez en un preámbulo a los valores industriales, que tan lentamente en nuestro país se incorporaron a la cotización oficial:

"Siendo, como sin duda alguna lo es, la Bolsa oficial de Comercio de esta Corte el punto principal, el centro más importante, por lo que concierne a la contratación de efectos públicos y valores industriales..." (517).

(516) R.D. de 31 de diciembre de 1.885; C.L.E., t. 135, pp. 1.793-1.812, la cita, p. 1.794.

(517) R.D. de 11 de marzo de 1.904; C.L.E., t. 17 (NS), pp. 535-552; la cita, p. 536. El 18 de junio de 1.886 se había dado otro reglamento a la Bolsa de Madrid; C.L.E., t. 136 (2ª parte), pp. 1.267-1.283.

Estaba emprendiéndose una nueva etapa de industrialización y las acciones industriales comenzaban —si bien tímidamente en Madrid— a cotizarse en Bolsa.

En cuadro adjunto resume la evolución de la legisla**ci**ón bursátil en España y refleja las normas promulgadas y su vigencia así como los proyectos presentados en Cortes y que no llegaron a convertirse en ley.

3.4.3.- La creación de las Bolsas.

El Real Decreto de 1.831 no explicitaba el modo de creación de Bolsas de Comercio pues trataba exclusivamente del acto fundacional de una determinada, la de Madrid, que fue la única oficial durante más de medio siglo. Los proyectos de 1.841, 1.842 y 1.843, que no consumaron su tramitación, atribuían al gobierno la facultad de crear Bolsas donde lo estimara conveniente. Tal disposición fue incluida en la ley provisional de 1.845 y en el Real Decreto de febrero de 1.854 (518).

El proyecto del Bienio Progresista obviaba este tema aludiendo sólo indirectamente a las prerrogativas del gobierno al atribuir a éste la facultad de señalar el lugar para la reunión de la Bolsa (519).

(518) aa. 1 de los proyectos de 27 de julio de 1.841 (D.S.S., apéndice 2º al núm. 56), 12 de abril de 1.842 (D.S.S., apéndice al núm. 40), 16 de noviembre de 1.842 (D.S.S., apéndice 2º al núm. 5), de la ley de 23 de junio de 1.845 (C.DD., t. 34, p. 302) y del R.D. de 8 de febrero de 1.854 (C.L.E., t. 61, p. 168).

(519) a. 1 del proyecto de 9 de diciembre de 1.854 (D.S.C.C., apéndice 1º al núm. 30) y del dictamen de 30 de abril de 1.856 (D.S.C.C., apéndice 2º al núm. 371).

CUADRO, III,4
LA LEGISLACION BURSATIL EN ESPAÑA (1.831-1.923)
NORMAS GENERALES Y PROYECTOS: CRONOLOGIA

1	2	3	4	5	6
CARACTER DISPOSICION	FECHA DISPOSICION	FECHA Y CAMARA PRESENTA CION PROYECTO (PR) O DICTAMEN (D).	MINISTRO FIRMANTE	GABINETE (Jefe de)	VIGENCIA
R.D.	10-09-1.831		López Ballesteros	González Salmón	14 años
		PR. 27-07-1.841 (S)	García Camba	A. González	-
		PR. 12-04-1.842 (S)	García Camba	A. González	-
		D. 09-07-1.842			
		PR. 16-11-1.842 (S)	Capaz	Mq. Rodil	-
		PR. 24-04-1.845 (C)→	Armero	Narváez	
⇒Ley Provis.	05-06-1.845		Armero	Narváez	8 meses
R.D.	05-04-1.846		Armero	Istúriz	7½ años
		PR. 21-11-1.853 (C)→	Esteban Collantes	Sartorius	-
⇒R.D.	08-02-1.854		Esteban Collantes	Sartorius	15+11 años (1)
		PR. 09-12-1.854	Luján	Espartero	
		D. 30-04-1.856			
		PR. 08-04-1.861 (C)	Corvera		
DD.	12-01-1.869				
	y 11-1.868		Ruiz Zorrilla	Serrano	
D.	10-07-1.874=		Alonso Colmenares	Zavala	(1)
=R.D.	08-02-1.854				
		PR. 22-03-1.882 (C)→	Alonso Martínez	Sagasta	-
⇒Ley	22-08-1.885 (Cód. de Com.)		Silvela	Cánovas	Resto del pe- riodo conside- rado.

(1) El R.D. de 8 de febrero de 1.854 estuvo vigente en su totalidad entre esta fecha y noviembre de 1.868 y luego entre julio de 1.874 y agosto de 1.885. En realidad, entre 1.868 y 1.874 su reforma fue parcial, como se destaca en el texto.

FUENTE: C.L.E. y D.S.C., años correspondientes.

En la primavera de 1.860, el ministro de Hacienda, Salaverría, habló sobre la conveniencia de crear otras Bolsas, aludiendo especialmente a Barcelona y Bilbao:

"Creemos que Bilbao, cuya actividad comercial es tan grande y que cada día se va interesando más el crédito público, es uno de los pueblos a quien convendría el establecimiento de una Bolsa y cuyo comercio debería pedirla con más insistencia" (520).

Este anuncio cristalizó en la Real Orden de 31 de agosto de 1.860 firmada por Corvera, ministro de Fomento. En el preámbulo se anunciaba la intención del gobierno de establecer Bolsas "allí donde la frecuencia e importancia de las transacciones sobre efectos públicos le haga considerarlo conveniente" (521). Hay que tener presente que la preocupación del gobierno en estos años seguía siendo la contratación de efectos públicos: su regulación y fomento. Eran —no hay que olvidar— años de la política grandilocuente de la Unión Liberal y, en el terreno que nos ocupa, de recuperación del negocio bursátil.

El procedimiento que se arbitró para la creación de una Bolsa fue el siguiente: la iniciativa debía partir de la Junta de Agricultura y Comercio de la ciudad correspondiente, que elevaría consulta al Ayuntamiento sobre la conveniencia de instalación de una Bolsa. Si la respuesta fuera afirmativa, se debía cursar la propuesta pertinente al Ministerio de Fomento por conducto del gobernador de la provincia. En el pro

(520) Discurso de Salaverría de 7 de julio de 1.860 recogido por José Luis Fernández, La Bolsa de Bilbao, Bilbao, 1.977, p. 9.

(521) C.l.E., t. 84, p. 192. Las bases de esta Real Orden se reprodujeron en el proyecto de 8 de abril de 1.861 (D.S.S., apéndice 1º al núm. 91, a. 2).

yecto debería estar incluida una estimación del número de agentes necesario, del presupuesto de la instalación y de los arbitrios que se consideraran indispensables para reembolsar los costos de instalación y sufragar el mantenimiento de la Bolsa. La autorización se realizaría por Real Decreto de Fomento

Esta oportunidad no fue aprovechada por ninguna plaza mercantil. Barcelona no estimó conveniente oficializar su muy ventajosa negociación libre del Casino Mercantil a pesar de estar atravesando un duro momento en la recuperación de la crisis de 1.857 (522). Desde la década de 1.840 se realizaban en esta plaza negociaciones de valores. Desde 1.851 el Diario de Barcelona publicó unas cotizaciones que pronto fueron oficializadas por el Colegio de Corredores. Los valores negociados eran fundamentalmente de sociedades, es decir, "valores comunes de comercio" frente al dominio de los "efectos públicos" de Madrid.

El negocio pronto creció en Barcelona y su marco fue el Casino Mercantil. Era evidente que existía una mayor facilidad para el intercambio que en la Bolsa oficial, dada la ausencia de obligación de contratar con agente colegiado y con un plazo fijo para la liquidación. Quizá estas circunstancias provocaron un funcionamiento especulativo que absorbió buena parte de los capitales, que olvidaron la industria como fuente de acumulación y su primera consecuencia grave

(522) "de los seguros marítimos" como la ha llamado J. Fontana, "La vieja bolsa de Barcelona (1.851-1.914)" en Ayuntamiento de Barcelona, Documentos y Estudios, La Bolsa de Barcelona de 1.850 a 1.930: líneas generales de su evolución, v. VIII, Barcelona, 1961, pp. 20-25.

fue la amplitud de la crisis de 1.857.

Bilbao, aunque cierta opinión apoyaba la idea (523) —y a pesar de la intervención del gobernador— no consiguió el acuerdo del Ayuntamiento y, en frase de Torrente Fortuño, "dejó pasar la mejor coyuntura para la creación de su Bolsa" (524). Valencia fue la ciudad que más avanzó en este terreno y llegó, incluso, a solicitar un anticipo al Banco de España para este proyecto que, sin embargo, no prosperó (525).

El ya comentado Decreto de 12 de enero de 1.869 firmado por Ruiz Zorrilla dió libertad para la creación de Bolsas de comercio (a. 1). Se pretendía que coexistieran las Bolsas oficiales con las privadas "y el público escogerá". A pesar de ello, la contratación oficial seguía teniendo en el sexenio revolucionario indudables ventajas. El procedimiento por el que se podría crear una Bolsa con carácter oficial era similar al mencionado en la normativa anterior: "siempre que el comercio, la Diputación provincial o Ayuntamiento de la localidad lo soliciten y se presten a costear los gastos que puedan ocasionarse por este motivo, en la forma que estimen conveniente" (a. 6) (526).

(523) desde el periódico Irurac-Bat, poco antes de aparecer la Real Orden (7 de julio de 1.860).

(524) Torrente Fortuño, Historia de la Bolsa de Bilbao, 75 años: 1.890-1.965, Bilbao, 1.966, p. 40.

(525) Sobre esta iniciativa, Torrente Fortuño, Historia... Madrid, v. 2, p. 304.

(526) C.L.E., t. 101, pp. 109-111. Cabe preguntarse qué se entiende por "el comercio" de una ciudad en un régimen que ha suspendido toda colegiación mercantil obligatoria.

Tras el golpe de estado de Pavía, en vísperas de la Restauración, el poder ejecutivo restableció el Real Decreto de febrero de 1.854 en su integridad (527). A partir de este momento, se volvieron a cerrar las puertas a la iniciativa privada y local para la creación de Bolsas de Comercio, actividad que retornó de forma exclusiva al gobierno. Terminaron seis años de libertad que no fueron aprovechados por la iniciativa privada para la creación de nuevos establecimientos. Quizá porque la coyuntura económica no era la más propicia para sostener más de dos Bolsas en la nación.

El Código de Comercio de 1.885 dió las normas definitivas sobre el punto que tratamos; se confesaba heredero de la tradición del 69 y estableció dos procedimientos para la creación de Bolsas de comercio: el primero, a iniciativa del gobierno; el segundo, de las sociedades legalmente constituidas, salvando el privilegio del ejecutivo para declarar oficiales las cotizaciones "previos los informes que estime necesarios sobre su conveniencia pública" (a. 65).

El reglamento que, con el Código, entró en vigor el 1 de enero de 1.886, perfiló la tramitación para la creación de las Bolsas. Las que cree el gobierno serán con cargo al Presupuesto; las de iniciativa local, siempre "en poblaciones que lo soliciten por razón de conveniencia para la contratación pública" (a. 4) podrán ser subvencionadas para su formación y mantenimiento; las formadas por sociedades serán de ex

(527) D. de 10 de julio de 1.874, C.L.E., t. 113, pp. 57-59.

clusivo cargo de las mismas (528).

Sólo conocemos —en el período considerado— dos creaciones de Bolsas de Comercio al margen de la de Madrid: las de Bilbao y Barcelona; la primera, a iniciativa particular, que fue gubernamental para la segunda. Además, un proyecto que no culminó: la concesión a la sociedad comanditaria S. Cabal y cía. de la facultad para crear una Bolsa en Gijón (529).

El 20 de noviembre de 1.889 se creó la sociedad anónima "Bolsa de Comercio de Bilbao", con 25 años de duración prevista y cincuenta mil pesetas de capital social dividido en doscientas acciones al portador de 250 pesetas cada una, que fueron suscritas inmediatamente por 29 accionistas. Estos pertenecían fundamentalmente a tres grupos: madereros y bacaladeros, banqueros y siderúrgicos (530). La Bolsa fue autorizada por Real Decreto de 20 de julio de 1.890 y abierta el 5 de febrero de 1.891. La repercusión de este hecho fuera de la plaza fue nula; la prensa apenas le dedicó una pequeña nota (531).

La de Barcelona fue creada por Real Decreto de 26 de marzo de 1.915 (532), a propuesta del ministro de Fomento, que aprovechó la crisis que provocó la Primera Guerra Mundial en el mercado de valores barcelonés, agrandando sus dimensiones

(528) R.D. de 31 de diciembre de 1.885; C.L.E., t. 135, pp. 1.793-1.812.

(529) R.D. de 20 de junio de 1.902; C.L.E., t. 12 (NS), pp. 314-15.

(530) Torrente Fortuño, Historia... Bilbao, p. 50

(531) Según Basas contó, además, con la oposición de la Junta del Colegio de Corredores en defensa de sus atribuciones y su bolsín oficioso. Cit. por J.L. Fernández, Historia..., p. 14. No he encontrado otras referencias sobre esta oposición.

(532) C.L.E., t. 53 (NS), pp. 738-741.

para, con el apoyo de parte del Casino mercantil, oficializar la contratación en esa plaza.

De esta forma, el "irritante monopolio concedido a la plaza de Madrid", al que se refirió Alonso Martínez en 1.882 (533) fue roto en 1.890 (Bilbao) y 1.915 (Barcelona). Pudo también haberlo sido entre 1.860 y 1.874 pero en dicho período, ninguna plaza fue capaz de sostener una institución bursátil y la única con un nivel de contratación suficiente —Barcelona— no tenía interés en oficializar su ágil mercado libre. La polémica creación de una Bolsa oficial en esta última ciudad merecen consideración aparte.

La Bolsa de Barcelona sufrió en el siglo XIX tres grandes crisis. La ya mencionada de 1.857, la de 1.866 (crisis de las sociedades de crédito) y la de 1.882 (crisis de los Bancos) (534). Esta última no tocó fondo hasta 1.898, en un fin de siglo particularmente difícil para Cataluña. En el siglo XX, el inversor catalán se volvió a la industria, tras su desengaño en las finanzas. Esta razón, su conducta prudente y la favorable coyuntura, motivaron que la Bolsa de Barcelona se recuperara entre 1.901 y 1.913.

En julio de 1.914 se produjo el pánico provocado por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Para atenuarlo, el gobernador de la provincia catalana ordenó el cierre de la Bolsa el día 27 del citado mes, quedando pendiente la liqui-

(533) Preámbulo al proyecto de ley de Código de Comercio, D.S.C., 20 de marzo de 1.882, apéndice 38^o al núm. 85, p. 9. En realidad era una frase dicha por Orense en 16 de junio de 1.856 (D.S.C.C., p. 8.968).

(534) Los calificativos son de J. Fontana, "La vieja Bolsa de Barcelona..." al que sigo en su interpretación de la evolución bursátil en esta plaza (pp. 15-69).

dación del grueso de las operaciones a plazo. Lo cierto es que el Casino Mercantil barcelonés tenía por costumbre la "liquidación diaria de las diferencias" en un funcionamiento similar al de una "Cámara de compensación" (535). Para evitar el pánico subsiguiente a la reapertura de la Bolsa, el gobierno autorizó al Casino Mercantil a finales de agosto para que practicara las liquidaciones pendientes a un tipo medio, de forma que las pérdidas quedasen limitadas. Lo cierto es que el Casino arrancó esta medida —que se llamó "matanza"— exagerando el monto de las pérdidas, que se cifraron en 11 millones de pesetas.

Esta situación y los rumores sobre la creación de una Bolsa oficial en Barcelona provocaron una interpretación parlamentaria por parte de Corominas, diputado por Barcelona. Sostuvo el orador que a pesar de la cuantía de títulos pendientes de liquidación (120.000) (536) y de la falta de apoyo del Banco de España, que concedió un crédito ridículo a los corredores catalanes (250.000 pts.), el 1 de septiembre estaba la liquidación casi completa; quedaban pendientes 89.000 pts. que se habían pagado después, siendo el único impago en el momento de su intervención —19 de diciembre— 1.031,25 pesetas correspondientes exclusivamente a la cuenta de un agente.

(535) Intervención de Corominas en el Congreso, 19 de diciembre de 1.914, p. 3.624.

(536) La relación exacta es la siguiente: 62.750 títulos de Nortes; 35.300 de Aliantes; 11.900 de Orenses; 5.675 de Andaluces; 225 del Banco Español de Cuba; 25 del Crédito Mercantil; 2.625 de Hispano Colonial; 2.050 de Ríos de la Plata y 175 de Canal del Ebro más 11.050.000 pts. nominales de Deuda del 4%. Frente a esto, en Madrid no se cotizaban más de 6.000 títulos al mes. Ibidem.

Por lo tanto —afirmó el diputado— el problema no era la liquidación de las operaciones a plazo sino la de las operaciones de dobles donde el conflicto se planteaba entre "prestamistas y capitalistas". Aquéllos querían su dinero y éstos pretendían devolver el préstamo en unos títulos ahora muy depreciados: ése —afirma Corominas— es el verdadero problema y lo que ha movido a la intervención gubernamental a pensar instalar una Bolsa oficial de Comercio en Barcelona aunque la libre no haya fracasado. De ahí que reclame la permanencia del Casino Mercantil con su viejo funcionamiento, al menos de forma paralela a la Bolsa oficial que se cree, quedando aquél como coulise y ésta como parquet (537).

Martín Lázaro, en nombre de opiniones políticas opuestas a las de Corominas, apoyó su posición en este tema sosteniendo que la Bolsa libre facilitaba las transacciones, que es lo que necesitaba en ese momento Cataluña (538).

El ministro de Fomento, Ugarte, se limitó a hablar en su intervención de "escandalosos hechos" sin citar ningún dato y a optar por las garantías y la responsabilidad cosas que, según el ministro, no podían sostenerse sino en la ley. Mientras para Corominas la ley posibilitaba (a. 65 del Código de Comercio) la coexistencia de dos Bolsas en la misma ciudad, una oficial y otra privada, Ugarte lo negaba (539).

Los diputados catalanes fueron derrotados y se creó la

(537) Ibidem, p. 3627.

(538) Ibidem, pp. 3.629-3.630.

(539) D.S.C., 19 de diciembre de 1.914, p. 3.628 para la posición de Corominas; p. 3.629 para la de Ugarte.

Bolsa de Barcelona por Real Decreto de 26 de marzo de 1.915. Su preámbulo, citando como argumento de autoridad al proteccionista Fomento del Trabajo Nacional, argumentaba que la crisis de 1.914 tuvo lugar, precisamente, porque el mercado bursátil era libre. Se convirtió al colegio de corredores de Barcelona en Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa y sobre ellos se edificó la nueva Bolsa oficial.

Investigaciones posteriores han venido a dar la razón a Corominas, Martín Lázaro y, en general, a los diputados catalanes y los librecambistas defensores del mercado libre (540). Pero en 1.914 los doblistas interesados —especialmente el Banco Español de Crédito y el Banco de Castilla— consiguieron hacer triunfar su posición.

Desde el 14 de julio de 1.915 —y hasta 1.940— coexistieron la Bolsa oficial y el Mercado Libre de Valores, con mucha más contratación en éste que en aquélla (541). Las instancias oficiales no tuvieron más remedio que transigir y aceptar esta dualidad: el mismo día que el gobernador civil de Barcelona presidía la inauguración de la Bolsa oficial, su secretario lo hacía en la del Mercado Libre. El llamado "pacto" entre los representantes del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa y los de la Asociación del Mercado Libre de Va-

(540) Como la comisión nombrada veinte años después por la Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, presidida por A. Rodríguez Sastre. V., también de este autor, La cuenta corriente de efectos o valores de un sector de la Banca catalana, Madrid, 1.935 y Operaciones de Bolsa. Doctrina, legislación y jurisprudencia española, 2ª ed., Madrid, 1.954, pp. 22-25.

(541) v., sobre la evolución posterior de la Bolsa de Barcelona, V. Villacampa "La Bolsa oficial (1.915-1.930)", en Ayuntamiento de Barcelona, Documentos y Estudios. La Bolsa de Barcelona de 1.851 a 1.930: líneas generales de su evolución, v. VIII, Barcelona, 1.961, pp. 73-97.

lores quiso poner fin a esta duplicidad bursátil, cosa que nunca se logró por la mayor liberalidad con la que actuaba esta institución y que sólo terminó con su clausura en 1.940 (ley de 23 de febrero) (542).

3.4.4.- Los efectos negociables.

En 1.853 decía un ilustre jurisconsulto que las operaciones de Bolsa tenían tres objetos:

"... el 1º le constituyen las que se hacen sobre mercancías, seguros, transportes, préstamos y todos los demás que pueden llamarse comunes y usuales del comercio, los cuales se rigen exclusivamente por las leyes mercantiles, sin que influya(¿..) la circunstancia de celebrarse en Bolsa.

El 2º le forman las operaciones de cambio, o sean las que se ejecutan sobre los valores comunes del comercio, como son las letras de cambio, libranzas, pagarés y demás documentos de giro, hallándose también estos actos regidos por aquella legislación especial y en el mismo caso que las anteriores.

El tercer objeto consiste en las compras y ventas de los efectos públicos y negociables que sólo pueden hacerse útilmente en las Bolsas de Comercio" (543).

(542) La oficialización del pacto en R.O. de 27 de noviembre de 1.916: permitía a ambas instituciones operar en el mismo corro y publicar una única cotización, publicar una única revista... El M.L.V., no podía, sin embargo, operar a plazo.

(543) Arrazola y otros, Enciclopedia..., VI, p. 635. ya he comentado que creo que el artículo "Bolsa" de esta Enciclopedia, de donde tomo la cita, está escrito por Sáinz de Andino, En cualquier caso, todos los colaboradores de la obra son grandes juristas del momento, como el propio Arrazola o Cirilo Alvarez.

Pero —continuaba—, en la práctica sólo se negocian estos últimos por su "inmensa multitud", "la suma facilidad de especular sobre ellos" y su mayor atractivo sobre los valores de comercio; éstos además, pueden negociarse fuera de la Bolsa dado que en ellos solo está comprometido el interés particular y no el general. Por ello puede dejarse su negociación al libre albedrío de las partes. De esta concepción se deriva que la legislación bursátil en España para el período considerado sólo se realizó durante los dos primeros tercios del siglo XIX para regular la contratación de efectos públicos, bastando para los títulos de las compañías comunes el Código de Comercio. De ahí que las leyes a partir de 1.855 consideraran los títulos de las compañías de obras públicas y sociedades de crédito como efectos públicos a efectos de contratación lo que, evidentemente, la facilitaba.

En estas páginas vamos a prescindir de las mercancías y de los contratos de seguros y transportes que —como vimos— tienen abiertas las puertas de la Bolsa durante todo el período considerado; nos centraremos en los títulos que ya en 1.831 recibieron la clásica denominación de efectos públicos y valores comunes de comercio (544) que, desde este momento, se contratarán en horas diferentes.

Los efectos públicos quedan definidos en el R.D. de 1.831 como aquellos títulos de crédito de circulación autorizada

(544) La denominación exacta en el artículo 2 del R.D. de 19 de septiembre de 1.831 es "valores de comercio de personas particulares" dejando fuera la consideración de los valores de las compañías. Ello se puede explicar porque en la fecha de la norma no se consideraba posible la existencia de un mercado más que para las antiguas Compañías públicas privilegiadas.

por Real Decreto y cuya emisión se haya hecho por la Corona —efectos públicos reales—, por un gobierno extranjero, por un establecimiento público o por uno particular que ostentara Real Privilegio. Por tanto, emisiones del Estado, de empresas públicas o privilegiadas y las realizadas por gobiernos extranjeros. En todos los casos, su negociación en Bolsa debía ser autorizada por el gobierno y publicada "en los anuncios oficiales" (a. 2). Muy pronto se adueñaron de la Bolsa (545).

Las acciones de las comanditarias o anónimas "no serán consideradas para el modo y efectos de su negociación, sino como los valores comunes del comercio" (a. 58). Estos no fueron definidos aunque sí enumerados: "letras de cambio, pagarés, etc.". Sus operaciones no estaban sujetas a publicación salvo si se realizaban con intervención de Agente (a. 35). Constatamos que su cotización no apareció en los Boletines hasta 1.850.

Los proyectos fallidos en 1.841 y 1.842 conservaron esta situación, modificando tan sólo algunas palabras para conseguir una redacción más precisa y acorde con los tiempos; un ejemplo es la sustitución de la palabra "reales" por "nacionales" para designar los efectos públicos emitidos por el Estado.

La ley de 1.845 incorporó una mayor precisión en la defi

(545) "Muy pronto la Bolsa de Madrid, a imitación de los demás países vino a ser un mercado exclusivo para la compra y venta de los títulos de crédito y demás efectos de la Deuda Pública", Arrazola y otros, Enciclopedia..., VI, p. 630.

nición de los efectos públicos:

"1.- Los que representan créditos contra el Estado y se hallan reconocidos por éste como negociables.

2.- Los de algunos establecimientos públicos o empresas particulares a quienes el gobierno haya concedido permiso para su creación y circulación.

3.- Los emitidos por gobiernos extranjeros, siempre que su negociación se halle autorizada" (546).

En esta enumeración ha desaparecido ya la mención a las Compañías privilegiadas, que es sustituida por una referencia a establecimientos acogidos a la garantía del Estado, de forma más acorde con los tiempos. No es difícil suponer, dada la fecha —1.845— que se estaba pensando en Bancos y compañías de obras públicas. Por otra parte se explicita la necesidad del permiso del gobierno para la cotización oficial de cualquier clase de efecto público.

El artículo 23 de la ley que comentamos se encarga de recordar que aparte de los Bancos y de las compañías a las que se permita emitir efectos con la consideración de públicos, "las acciones de compañías anónimas expedidas con arreglo al Código de Comercio, se considerarán "valores comunes de éste". No dispondrán, por tanto, de la ventaja que supone la garantía del Estado y la cotización oficial; por el contrario, será obligación de los contratantes asegurarse de la legitimidad del título y de la solvencia del comprador.

El Real Decreto de 5 de abril de 1.846 no supone otra no

(546) a. 3 de la ley provisional de 24 de abril de 1.845, C.O.D., t. 34, p. 302.

vedad —en este aspecto— que la de prescribir que sólo se podrán negociar en Bolsa "los títulos definitivos de las acciones expedidas bajo la responsabilidad de sus directores sobre valores que se hayan hecho efectivos en las cajas de la sociedad" (a. 34). hay que considerar que todavía la ley de 1.848 no había puesto garantías subsidiarias para acabar con la temida especulación de valores ficticios.

Por lo demás, sigue su consideración como valores comunes del comercio, a lo que no escapan más que "los Bancos" y las debidamente autorizadas para apellidar "públicos" a sus efectos.

El proyecto de Esteban Collantes, que se convertirá en el Real Decreto de febrero de 1.854, introdujo un cambio importante de vocabulario y otras novedades destacables. Aquél consistió en la reincorporación de la palabra privilegio en lugar de permiso para indicar la posibilidad que tenían algunas compañías de dar consideración de públicos a sus valores. Era el reconocimiento de que desde 1.848 se había vuelto a un régimen privilegiado en el campo de las compañías que había sustituido al mercado libre anterior.

Resalta, asimismo, que ya cuando se habla de los valores comunes de comercio se especifica, sobre la vaga alusión a las letras de cambio y pagarés: "...acciones de minas, de sociedades anónimas legalmente autorizadas..." (547). Es, pues,

(547) a. 2. la autorización se refiere, naturalmente, a la exigida en la ley de 1.848. A dicha reglamentación se tenía que ceñir la negociación de las acciones de las compañías (a. 39).

la primera vez que aparecen especificados los títulos de las anónimas en el artículo que describe los valores cotizables.

El proyecto de Luján, como destacamos en su momento, debe mucho al anterior. Sobre él, dedica, por primera vez, un artículo a la definición de los valores comerciales y su enumeración es más precisa, completa y más acorde con la importancia que daban a las compañías los progresistas de 1.854:

"las letras de cambio, libranzas, pagarés, así de particulares como del tesoro público, acciones de sociedades anónimas, de las comanditarias, de minas y de cualquiera otra empresa legalmente autorizada y todo título representativo de valores de comercio" (a. 8).

Las acciones de las sociedades anónimas ya se consideran de forma específica como materia de contratación bursátil, aunque se las englobe en un amplio conjunto en el que todavía —al menos dentro de la Bolsa oficial— no son protagonistas.

En este proyecto se especificaba también más en lo referente a los efectos públicos. Ya no se hablaba de "permiso" o "privilegio" de emisión a determinadas empresas sino de los títulos "emitidos legalmente bajo la garantía u obligación subsidiaria del Estado" (a. 7). De esta forma, lo que caracteriza a los efectos públicos es la responsabilidad final del Estado, que está ausente de los valores comunes de comercio. Por ello, éstos están sujetos al Código de Comercio y demás leyes vigentes —1.848— sobre su transmisión y responsabilidad. Se observa, por tanto, una mayor claridad en la definición de las áreas de competencia que, de hecho, estaban per

filadas desde 1.831.

En el aspecto que nos ocupa, sólo hay un punto en el que el dictamen —emitido en 1.856— varió el articulado del proyecto. Es el referente, precisamente, a la definición de los valores comerciales. Conservando ésta, se añadió un primer párrafo que resaltaba la intención de promover el mercado de acciones de las sociedades de crédito recién creadas:

"Las acciones del Banco de España y las de las sociedades constituidas conforme a la ley de sociedades de crédito de 22 de enero de este año, tendrán la consideración de los fondos públicos para los efectos de la cotización, y podrán ser publicadas, según dispone la citada ley. Sin embargo, los corredores podrán intervenir en estas operaciones al contado con fuerza obligatoria en la hora destinada a los efectos comerciales" (a. 6).

La fecha del dictamen y la protección que el Bienio progresista otorgó a la Banca y a las sociedades de crédito como movilizadoras de un capital que en este momento se quería encauzar la infraestructura vial, explica esta adición. Sus valores debían gozar de todo el respaldo del Estado y por ello se les abrió un hueco en la cotización oficial.

No obstante, nunca tendrá vigencia este programa y se volverá al enfoque de la ley de febrero de 1.854 hasta el Código de Comercio de 1.885, pues la legislación del 68 no afectó este problema. La única excepción será precisamente la consideración de efectos públicos de las acciones y obligaciones de las sociedades de crédito y ferrocarriles, incluida en sus respectivas leyes sin ninguna oposi-

ción (548).

El Código de Comercio de 1.885 siguió conservando en el gobierno la facultad de otorgar carácter oficial a las cotizaciones de las Bolsas privadas (a. 65) y arbitró un procedimiento —seguido tradicionalmente desde el Reglamento de 1.854— para la admisión a negociación en las Bolsas oficiales de los efectos públicos y los valores de comercio.

Así, se consideran efectos públicos y como tal estarán incluidos en la cotización oficial: los créditos contra el Estado, provincias o municipios reconocidos como negociables en Bolsa y aquellos emitidos por naciones extranjeras cuando su negociación haya sido autorizada por el gobierno, previo dictamen de la Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio (a. 69).

Podrán ser también admitidos en la cotización oficial los documentos de crédito al portador emitidos por establecimientos, compañías o empresas nacionales siempre que la emisión esté inscrita en el Registro Mercantil y así conste ante la Junta Sindical del Colegio de Agentes. Ya no necesitarán la consideración de efectos públicos para poder aparecer en la cotización oficial sino que serán incluidos en ella "como materia de contrato en la Bolsa" (a. 69). También en el Reglamento de Bolsas de 31 de diciembre de 1.885 se regulaba este

(548) Además —y también sin oposición— la ley de sociedades de crédito dispuso: "no tendrá efecto contra los cedentes de estas acciones lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Comercio". Es decir, el poseedor de un título no desembolsado totalmente de una de estas sociedades, se liberaba de esta atadura incómoda que significaba la responsabilidad subsidiaria de los desembolsos de los dividendos pasivos aún después de haberlo vendido.

extremo así como la obligación por parte de la Compañía cuyos títulos fueran admitidos a cotización, de publicarlo en la Gaceta de Madrid (a. 34).

La Real Orden de 9 de febrero de 1.905 dictada a solicitud de la Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Bilbao modificó el artículo 31 del citado reglamento. Este disponía que la admisión de valores a cotización era atribución exclusiva de la Junta del Colegio de Agentes de Madrid; la Bolsa de Bilbao solicitaba —y consiguió— autonomía para admitir valores a cotización. Pronto los agentes de Madrid protestaron contra esta medida y consiguieron su suspensión antes de finalizar el mes. Durante todo el período considerado, la Bolsa de Madrid conservó su prerrogativa (549).

Este nuevo aspecto tratado nos reafirma en la idea de la preocupación casi exclusiva del Estado por los efectos públicos aún en los momentos de mayor clamor sobre la abundancia de negociación especulativa con acciones de sociedades anónimas. Sólo el Código de 1.885 incorporó los valores mercantiles e industriales en pie de igualdad a la negociación y la cotización bursátiles. Quizá antes hubiera sido demasiado pronto, dado el escaso desarrollo económico del país. Pero quizá la dignificación de los títulos de las anónimas hubiera supuesto un empuje necesario para el tímido inversionis-

(549) R.O. de 9 de febrero de 1.905 (C.L.E., t. 21 (NS), p. 345), anulada por R.O. de 25 del mismo mes (ibidem, p. 413). Tres días después se abrió una información pública cuyos resultados pasaron a la Comisión para la reforma del Reglamento de Bolsas (R.O. de 27 de agosto de 1.914, C.L.E., t. 51 (NS), pp. 274-275).

ta español y la oficialización de su contratación un freno a la especulación. Un poco de atención hacia estos valores hubiera sido algo concebible en un Estado que se mostraba tan intervencionista y dirigista; quizá por eso mismo pensó en adueñarse del escaso mercado de capitales para solucionar sus propios problemas hacendísticos y huyó de la competencia.

3.4.5.- La negociación de valores.

a) Los títulos de las compañías anónimas.- Como ya hemos tenido ocasión de comentar, la legislación bursátil, hasta 1.885, se ocupó casi exclusivamente de los efectos públicos. La razón estribaba tanto en que eran los títulos más abundantes en el momento de creación de la Bolsa de Madrid como en que éste era el único mercado que interesó promover a lo largo del siglo XIX hasta, al menos, 1.869, dada la legislación sobre sociedades por acciones existente.

Todo ello no quiere decir forzosamente que hubiera una actitud restrictiva sobre la negociación de acciones; al menos no la hubo en el terreno de los principios. La libre transmisión de acciones era un supuesto asentado ya en el si glo XVIII, subyacente en el Código de Comercio de 1.829 y nunca cuestionado en nuestra legislación. Incluso bajo el ré gimen de 1.848, si alguna sociedad no aceptaba este punto en sus escrituras, se le denegaba el permiso para su constitu-

ción (550).

La legislación a la que se tuvieron que acoger las compañías para la negociación de sus títulos fue, durante más de medio siglo, el Código de Comercio de 1.829. Así lo estipuló el Real Decreto de 10 de septiembre de 1.831:

"Las acciones con que se presente el capital de las compañías de comercio en comandita, o de las anónimas, de que se expidan a los interesados títulos nominales con arreglo a las disposiciones de los artículos 275 y 281 del Código de Comercio, no serán considerados para el modo y efectos de su negociación sino como los valores comunes del Comercio, bien se hallen representadas por cédulas de crédito endosables, o por acciones inscritas en los registros de la Compañía.

En este segundo caso será del cargo de los que tengan la gestión y dirección de los negocios sociales y del tomador de la acción asegurarse del derecho, capacidad legal e identidad de la persona del cedente, así como de que el traspaso se ejecute conforme a las reglas adoptadas por la sociedad en sus estatutos" (a. 58).

Así lo repitieron los proyectos de julio de 1.841 (a. 40), abril de 1.842 (a. 30), noviembre del mismo año (a. 24), la ley provisional de 1.845 (a. 23), y el Real Decreto de abril de 1.846 (a. 33).

Según el Código de Comercio, las acciones debían ser nominativas si no estaban totalmente desembolsadas (a. 281); dichos títulos debían estar inscritos en los libros de la compañía y su transferencia —hecha en Bolsa o no; con mediación de agente, corredor o no— formalizada en ellos para que su cesión fuera eficaz (a. 282). Además, el cedente quedaba

(550) Como, por ejemplo, el caso de la especial minera Buena Fe, que en su escritura señalaba que las acciones no se podían enajenar (C.L.F., t. 88, pp. 680-681).

garante del pago de los dividendos pasivos (a. 283). Las negociación de acciones al portador queda libre, naturalmente, de la formalidad de su registro en los libros de la compañía.

En cualquier caso, las acciones de las sociedades eran consideradas valores comunes de comercio y, como tales, su negociación estaba asimilada a la de las letras de cambio (aa. 83 y ss). De ahí que fuera muy libre, pudiendo intervenir los corredores de comercio además de los agentes (a. 89); que estos profesionales no fueran responsables de la comprobación de la solvencia de los contratantes sino sólo de la autenticidad de las firmas (a. 83) y del cumplimiento del contrato aunque, incluso, las partes podían eximirles de estas obligaciones (a. 90).

Nuestro primer Código de Comercio no hablaba específicamente de las acciones al portador, por lo que éstas debían adaptarse a las normas sobre las "letras de cambio u otro valor endosable". Significativamente, los seguros tenían un tratamiento separado (a. 94). También por asimilación es como únicamente podemos hablar de la licitud de las operaciones a plazo de las acciones, y se puede afirmar que había libertad en la formulación del contrato (a. 428). El plazo nunca fue cuestionado para las acciones de compañías —valores comunes de comercio— sino sólo para los efectos públicos. A veces, incluso, se explicitó su legalidad, como en el dictamen de julio de 1.842, el proyecto de noviembre del mismo año y la ley de 1.845 (551). Claro que entre 1.848 y 1.869,

(551) "las negociaciones de efectos públicos que se hagan en la Bolsa se entende-

al estar prohibidas para la generalidad de las compañías las acciones al portador y prescrita la formalización de la transferencia en los libros de la sociedad, el plazo quedaba privado de gran parte de su interés.

Nunca hubo una prohibición explícita de realizar la transmisión de acciones fuera de la Bolsa, ni limitaciones para su forma de contratación; ésto se justificó siempre en el hecho de que en ellas no estaba comprometido el crédito del Estado. Sin embargo, esta amplitud se veía coartada por los derechos que gravaban la transmisión de acciones de compañías, hasta 1.885 superiores a los que incidían sobre la negociación de efectos públicos (552). Todo ello provocaba que el marco para la negociación de acciones de compañías desde 1.840 fueran los Bolsines paralelos.

La legislación de 1.848 se ocupó específicamente de este problema. La ley de 28 de enero, en su artículo 14 estipuló que la cotización de las acciones (siempre nominativas) se realizaría como valores comunes de comercio y "conforme a las disposiciones prescritas en la ley de Bolsa". Como veremos, dado que no hubo nueva ley de Bolsa hasta 1.885, las leyes posteriores se limitaron a remitir al Código de Comercio y —hasta 1.869— al Reglamento de 17 de febrero de 1.848

rán al contado; pero podrá hacerse a plazo todos los demás valores de metales preciosos, mercancías o efectos" (a. 22 del Dictamen de 9 de julio de 1.842 incorporado al a. 13 del Proyecto de 16 de noviembre de 1.842); "las negociaciones sobre metales preciosos, mercaderías o efectos de comercio podrá hacerse a plazos convencionales" (a. 13 de la ley de 23 de junio de 1.845).

(552) En la ley de 1.845, el arancel se fijó entre 1/4 y 1/2% sobre el nominal de los efectos públicos mientras el de "acciones de los bancos y empresas mercantiles" se estipuló en 2%. Era el arancel que se seguía por costumbre desde, al menos, 1.840 y que continuó en el Real Decreto de 1.854.

dictado sobre la ley de sociedades mercantiles de dicho año, que prescribía en su artículo 33:

"Las transferencias de las acciones han de consignarse en un registro especial para estas operaciones que llevará cada compañía, interviniendo en ellas un agente corredor de cambios para la autenticidad del acto, quedando aquel responsable de la identidad de las personas entre quienes se hiciere la negociación.

Cuando no estuviera cubierto el valor íntegro de la acción, se hará expresión formal en el acto de transferencia de quedar el cedente subsidiariamente responsable del pago que deberá hacer el cesionario de las cantidades que falten para cubrir el importe de la acción, según se prescribe en el artículo 283 del Código de Comercio".

A esta disposición y al Código remitía el artículo 39 del Real Decreto de febrero de 1.854, que curiosamente no se modificó en el segundo período de vigencia completa del mismo (1.874-1.885) cuando, de hecho, la legislación de 1.848 estaba abolida. Seguía siendo preocupación fundamental legislar para fomentar y regular el mercado de efectos públicos. Las acciones, no protegidas y en un marco general de liberalismo tenían, todavía, escaso mercado.

A las mismas normas remitía el proyecto de Luján de 1.854 (a. 33) y el dictamen de 1.856 (a. 36), lo que revela tanto la pequeñez del mercado como la ausencia de interés progresista en su promoción indiscriminada. Lo mismo cabe decir del último proyecto conocido, el del Marqués de Corvera (a. 37). No hay que olvidar que los títulos de las compañías ferroviarias y de las sociedades de crédito fueron convertidos en valores públicos a efectos de cotización; por tanto,

entraron dentro de ese mercado regulado, protegido y fomentado.

El decreto de 12 de enero de 1.869, que liberalizó la creación de Bolsas de comercio, restauró el Código de 1.829 como única norma a la que debería sujetarse la contratación de valores (a. 3); sin embargo, dejó vigente "ínterin se dicte una ley sobre contratación pública". la norma de 1.854 para la Bolsa de Madrid (aa. 5 y 6).

El Código de Comercio de 1.885, finalmente, puso en pie de igualdad los títulos de las compañías por acciones y los públicos, a efectos de contratación, a la vez que liberalizó las transacciones bursátiles en su conjunto (aa. 64 a 79). Desde el uno de enero de 1.886, además, el arancel que gravaba la compra-venta de valores industriales y mercantiles era idéntico al de los efectos públicos (2% sobre el valor efectivo) y no superior, como venía ocurriendo desde 1.831 (553).

(553) aa. 68 y 70 del Reglamento de 31 de diciembre de 1.885, C.L.E., t. 135, pp. 1.810-1.811.

b) Los efectos públicos.— El Código de Comercio de 1.829 sólo contemplaba un cuerpo de intermediarios —los correctores— para que entendieran en todo tipo de negociación. La ley de 1.831 realizó una distinción que perduró en lo sucesivo, entre los agentes de cambio y bolsa y los corredores de comercio (a. 15). Aquéllos, para que entendieran exclusivamente en el negocio sobre efectos públicos, letras de cambio y valores de comercio (a. 64); éstos, para el resto de la contratación, en la cual podían actuar también los agentes (a. 16). Desde 1.845, además, los corredores podían intervenir en la negociación de acciones. Esta dualidad causó frecuentes problemas de competencia que estallaban, evidentemente, cuando las crisis bursátiles hacían disminuir el monto total de las operaciones y, por tanto, de los aranceles a repartir. Esta cuestión no se dirimió hasta que, a principios del siglo XX, se suprimieron los colegios de corredores allí donde hubiere Bolsa (554). No obstante, en la negociación de efectos públicos sólo podían actuar legalmente los agentes y es el supuesto que sirve de base a este apartado.

No nos vamos a ocupar en estas páginas de los problemas de los agentes de forma específica y por ello quiero mencionar brevemente un aspecto que debe ser tenido en cuenta en el análisis de la variación de la regulación de las operaciones de efectos públicos: las fianzas. La fianza de un agente

(554) Ley de 24 de diciembre de 1.910, C.L.E., t. 39, pp. 512-514.

de cambio quedó fijada en 1.831 en 10.000 reales, cantidad respetable pero simbólica por cuanto no llegaba a cubrir una quiebra; el moderantismo de las leyes bursátiles hizo que entre 1.845 y 1.868 se pensara que incrementando la fianza el riesgo de crisis especulativa quedaba cubierto y, así entre estos años, permaneció por encima de las 100.000 pesetas (150.000 en 1.845, 125.000 en 1.846 y 1.854). Los demócratas criticaron esta postura y optaron por una fianza pequeña para los agentes colegiados —25.000 pts.— que fuera simple garantía individual pues "no puede convertirse al individuo en asegurador de la colectividad" (555).

La Restauración, que resucitó en su integridad el Real Decreto de 1.854 y con él la fianza de 125.000 pesetas, pronto siguió el criterio del sexenio y la disminuyó a 50.000 (a. 2 R.D. de 12 de marzo de 1.875). Este importe no fue incrementado —en tres veces— hasta 1.900 (R.D. de 29 de enero).

Las operaciones de efectos públicos podían ser al contado o a plazo entre 1.831 y 1.846, entre octubre de 1.847 y marzo de 1.848 y desde febrero de 1.854 hasta el fin del período estudiado, aunque no siempre se pudiera realizar con la misma facilidad. El plazo sólo estuvo prohibido totalmente durante poco más de siete años. En los años 1.846-1.853, esta medida fue concebida como un elemento más de protección contra la crisis y de control del mercado de capitales, acom

(555) D. de 30 de noviembre de 1.868, C.L.E., t. 100, p. 845. La fianza es la cantidad de debe depositar el agente como garantía del cumplimiento de sus obligaciones.

pañando a las leyes bancarias y de sociedades anónimas. El moderantismo ocupó las esferas del poder durante mucho más tiempo que el que estuvo prohibido el plazo. Y es que no creo —como se ha solido afirmar— que el lema del conservadurismo a lo largo del siglo XIX fuera "abajo el plazo" (556). No fue así desde 1.856 cuando el moderantismo continuó con la aplicación de las leyes progresistas de ferrocarriles y sociedades de crédito ni desde 1.874, cuando los conservadores participaban del empeño en la modernización económica y no se cuestionaron las medidas de 1.869 respecto a las sociedades anónimas. La prohibición del plazo sólo cuajó en el programa moderado ante la crisis de la década de los cuarenta. Es posible que, objetivamente, sea una medida aconsejable de saneamiento pero en aquél momento, como el resto de las leyes analizadas, fue una solución errónea. Fue un elemento más destinado a frenar la especulación, el juego y también la inversión y las posibilidades de acumulación capitalista en un momento de tanteos en la industrialización, en el que se necesitaba la máxima libertad económica para iniciar el despegue.

Las operaciones al contado son las que se consuman en el día o, a lo más, hasta el inicio de la siguiente sesión bursátil. La redacción del contrato es sencilla y desde 1.831

(556) Por ejemplo, en Ramón Canosa, la especulación a plazo en los centros de contratación de valores. Apuntes para la historia de las Bolsas españolas, Madrid, 1.967, pp. 7-8.

no sufrió modificaciones.

La regulación de las operaciones a plazo en sus diferentes variedades absorbió la mayor parte de la legislación bursátil en España entre 1.831 y 1.885 (557). Estas operaciones, cuando estaban permitidas, sólo se podían realizar en Bolsa para que tuvieran validez legal. Así se consignó explícitamente en todas las leyes, desde el artículo 6 de la de 1.831, aunque desde 1.868 se cambió el enfoque: no se sancionaban las operaciones realizadas al margen de la Bolsa pero se les negaba validez en juicio (558).

La ley de 1.831 admitía las operaciones a plazo en firme o bajo condición resolutoria; es decir, dejando a favor del vendedor la prima de indemnización si el comprador renunciaba al contrato (a. 42). Se podían realizar hasta a 60 días (a. 43) y siempre se suponía la buena fe de los contratantes. En definitiva, había una gran libertad en la contratación, que se podía realizar aunque el vendedor no tuviera los valores en el acto de la firma, quedando únicamente comprometido a entregarlos en el momento que expirara el plazo (a. 45). Incluso existía —de hecho— la posibilidad de realizar operaciones de dobles (559).

(557) Torrente Fortuño lo expreso así: "El derecho político-bursátil caracolea tan solo en torno a tres aspectos importantes: las operaciones a plazo, el número de agentes y sus fianzas y los aranceles" (Historia..., Madrid, v.3, p. 218).

(558) El artículo 2 del D. de 30 de noviembre de 1.868 niega la prueba en juicio de los contratos realizados por los agentes libres; el R.D. de 12 de marzo de 1.875 niega la fuerza civil de obligar de los contratos a plazo que no se realicen en Bolsa, como el artículo 74 del Código de Comercio de 1.885.

(559) El artículo 60 del Reglamento de la Caja de Liquidación del Banco de San Fernando, como cita Torrente Fortuño, admite depósitos de garantías de dobles (Historia..., Madrid, v. 2, p. 170).

No obstante, se detecta a lo largo de la historia de la Bolsa de Madrid la existencia de negociaciones a plazo al margen de la institución. La razón —parece ser— radicaba en el hecho de la impunidad que gozaban estas operaciones, pues eran toleradas a pesar de las multas insertadas en la letra de la ley (560).

Hay que señalar, por último que la negociación de efectos públicos estaba protegida durante buena parte de la época estudiada, por una serie de garantías suplementarias que no poseía la de acciones industriales. La morosidad, en aquel caso, estaba salvaguardada por la responsabilidad del Agente —fianza— y la específica actuación de la Junta Sindical.

La liberalidad en la contratación se amplió por R.O. de 27 de octubre de 1.831, que permitía a los agentes realizar operaciones a comitente; es decir ocultando el nombre de los contratantes bajo la responsabilidad de estos notarios públicos.

Precisamente la derogación de esta clase de operaciones inauguró en 1.841 (RR.OO. de 2 y 30 de septiembre) el movimiento de restricción al plazo que se siguió como respuesta a las crisis bursátiles (561). Los proyectos presentados bajo la Regencia de Espartero, en julio de 1.841 y abril de 1.842, reflejaban la obsesión por explicar dichas crisis por la especulación originada por las operaciones a plazo y, así, propusieron una serie de garantías, que se resumen en:

(560) Arrazola y otros, Enciclopedia..., VI, p. 648.

(561) Ambas órdenes, firmadas por Camba, en C.L.E., 27 pp. 630-631 y 680-681. La reserva de nombres —se argumentaba— podía ocultar negociaciones hechas por los propios agentes.

—restringir la liquidación del plazo a unos días concretos: los dos o cuatro primeros de cada mes. A este efecto, los contratos debían hacerse para el último día del mes corriente o entrante (a. 24 del proyecto de julio de 1.841; a. 17 del de abril de 1.842).

—imponer la exigencia de realizar un depósito previo por ambas partes contratantes de, al menos, la décima parte del valor efectivo de lo contratado (a. 12 del proyecto de abril de 1.842).

—mayores precisiones en la redacción de la póliza (a. 19 del proyecto de abril de 1.842).

—incremento de la responsabilidad de los agentes (a. 9 del proyecto de abril de 1.842).

La opinión parlamentaria contra el plazo llegó a su límite antes que la gubernamental. El dictamen al proyecto de García Camba, presentado en julio de 1.842, proponía la supresión de cualquier clase de operación a plazo de efectos públicos (a. 9) (562). Estas sólo sirven —dice la Comisión— para realizar un juego artificial sin satisfacer ninguna necesidad real.

Comenzó también con este dictamen la discusión acerca de la cotización de los efectos públicos con interés con o sin los cupones vencidos, que hemos resaltado en páginas anteriores.

(562) Lo que se avalaba con una representación de "varios individuos del comercio de Madrid", D.S.C., 12 de mayo de 1.842, p. 882.

El proyecto de noviembre de 1.842 propuso, asimismo, la abolición del plazo; pero dado que no siguió su proceso parlamentario, el diputado Monreal presentó una proposición en este sentido a principios de 1.845 (563). Con el mismo tipo de argumentación utilizado hasta ahora, incidía sobre los es cándalos y la especulación a que daban lugar las operaciones a plazo. Mon, en su contestación, aunque no se opuso a la discusión de la proposición, recordó que el gobierno estaba preparando una ley de Bolsas completa. La posición intermedia del primer gobierno Narváez se adivina en esta intervención del ministro de Hacienda, en la que sin condenar absolutamente las operaciones a plazo reconoció la necesidad de "poner un límite o término y moralizar esta clase de operaciones" (564). Sólo después de las crisis de 1.845 pensaría Narváez, de nuevo en el gobierno, en suprimir las operaciones a plazo e, incluso, cerrar la Bolsa.

Aunque la proposición de Monreal siguió su curso, nunca fue dictaminada, lo que provocó sospechas de boicot ministerial. En mi opinión, en un debate tan influido por la coyuntura como éste, el movimiento especulativo al alza provocado por las negociaciones del Concordato hizo que se olvidara el asunto. Fue precisamente el desencanto por el resultado de las mismas lo que reactivó el problema (565).

(563) La proposición, fechada en 21 de diciembre de 1.844, fue leída en el Congreso el 10 de enero de 1.845 (D.S.C.C., ap. 2ª al núm. 63); su defensa, ibidem, p. 1.139.

(564) Ibidem, p. 1.140.

(565) La comisión que debía dictaminar la proposición estaba presidida por González Romero y compuesta por Gironella (secretario), el propio Monreal, Conde de la Vega del Pozo, Sartorius, Oliván y Gonzalo Morón (D.S.C., 18 de enero de 1.845, p. 1.286). Las

Efectivamente, Armero presentó un proyecto en abril de 1.845 que sería convertido en la ley de 23 de julio del mismo año, con una vigencia de ocho meses escasos. En ella se estipulaba que las operaciones de los efectos públicos no podían superar el plazo de 60 días, bajo la responsabilidad de los agentes que, para cubrirla, podían exigir de los contratantes un depósito previo del 10% como máximo, del valor de la orden de compra-venta (a. 7).

El Real Decreto de 12 de febrero de 1.846, dictado el mismo día de la toma de posesión del gabinete Miraflores con Topete en Comercio y Marina, prohibió absolutamente las operaciones a plazo sobre efectos públicos desde el vencimiento del 30 de abril. Con esta medida, que Armero negó a Monreal, inauguró Topete su ministerio. Antes de que se cumpliera el plazo previsto en el decreto, el ministerio cayó; fue sustituido por Narváez con Pezuela en Marina; la divergencia entre ambos políticos impidió una actuación coherente sobre la Bolsa y fueron sustituidos por un nuevo ministerio Istúriz con Armero en Marina y Comercio y Mon, de nuevo en Hacienda.

El mismo día de su nombramiento, Armero promulgó el Real Decreto de 5 de abril ya comentado. Este ministro había cambiado de opinión desde que un año antes —ley de junio de 1.845— había optado por permitir—con precauciones— el plazo en los efectos públicos. Ahora —forzado por la coyun-

interpelaciones sobre el estado de sus trabajos fueron formuladas por Villalba (7 de marzo, pp. 1.686-87) y Gutierrez de los Ríos (15 de marzo, pp. 1.849-1.850). En ambos casos, comisión y gobierno se limitaron a recitar excusas.

tura las prohibirá absolutamente (aa. 16 y 36) (566), así como la contratación a comitente (a. 22) y sin la previa entrega de los efectos (a. 21). La prohibición no logró acabar con el plazo sino que lo trasladó fuera de la Bolsa.

Ros de Olano, ministro de Fomento del efímero gobierno de García Goyena, fue el firmante de la medida que, hasta el momento, se reveló como la más polémica y que menos de seis meses después sería derogada por Bravo Murillo. Me refiero al Real Decreto de 30 de septiembre de 1.847, probablemente inspirado por el Marqués de Salamanca, bolsista y ministro de Hacienda. Esta norma legal, admitía las operaciones a plazo con ciertas restricciones, como eran la responsabilidad de los agentes, la exigencia del depósito previo de los efectos y que el plazo fuera menor de 59 días (567).

Esta medida fue seguida inmediatamente por un incremento de las operaciones a plazo en cuya negociación los agentes adoptaron dos posturas. Por la más laxa, algunos operaron sin exigir el depósito previo. Así, los agentes trasladaban la responsabilidad a los contratantes y no podían ser obligados legalmente a liquidar. Previendo un conflicto en una posible crisis, la Junta Sindical de la Bolsa consultó sobre el tema a principios de octubre, precisamente el día en que tomó posesión un nuevo gabinete presidido por Narváez y con Bravo

(566) Cabe mencionar la curiosa decisión salomónica de la reina, que creyó satisfacer las distintas opiniones dando una fecha media para la abolición del plazo (15 de abril) mostrándose absolutamente desconocedora de la Bolsa, que tenía la práctica de realizar los vencimientos a fin de mes.

(567) R.D. de 30 de septiembre de 1.847, C.L.E., t. 42, p. 201.

Murillo en Fomento. Fuera por ello o por otros hechos todavía no explicados y en relación con la especulación bursátil, no hubo respuesta hasta el 5 de marzo de 1.848. Por una Orden de esta fecha y que no fue publicada en la Gaceta de Madrid, se eximía de responsabilidad a los agentes que operaron sin depósito, afirmando que era de cuenta de los contratantes haberlo realizado en el Banco de San Fernando. Así quedaba legitimada por el gabinete Narváez toda la especulación a plazo realizada en los seis meses anteriores. No obstante, la orden —y el plazo— debieron ser derogados por una presión parlamentaria, en la que tomaron parte tanto moderados como progresistas. Quizá fue el hecho de la participación de estos últimos, y para que no capitalizaran una campaña por la moralidad bursátil en un momento en el que el gobierno temía las repercusiones políticas de la revolución del país vecino, lo que movió a Bravo Murillo a abolir el plazo.

El iniciador de la campaña fue el diputado de la mayoría Marqués de Montecastro, que formuló una pregunta al Gobierno sobre su posición en este tipo de operaciones a la vez que anunció su petición para que el plazo fuera suprimido. Bravo Murillo, en una confusa respuesta, mezcló la conciencia del peligro que representaba la baja experimentada por la Bolsa de Madrid y la posible influencia de los acontecimientos de Francia con el reconocimiento de que "el mal no es ya tan grave y que el remedio no es tan urgente"; la confesión de que el gobierno "no se ha ocupado hasta ahora en ningún proyecto de ley de Bolsa" con la opinión personal de que "no se reco-

nozcan absolutamente más operaciones válidas y con fuerza civil de obligar que las operaciones al contado" y la conciencia de que las limitaciones del decreto de septiembre eran tales "que serán pocas las operaciones que se hagan" (568).

En esta interpelación terció Sagasti, reclamando la unidad de los partidos en cuestiones de "moralidad pública" y "crédito nacional". De ahí que se mostrara de acuerdo con Montecastro en su condena al gobierno: no debió legislar por encima de las Cortes y debió tomar medidas antes de que "los terribles sucesos de Francia" incidieran en la Bolsa. Lanzó además la acusación —reiterada por la opinión pública— de que los especuladores más interesados en las operaciones a plazo "están estrechísimamente enlazados con vínculos de parentesco con altos funcionarios" (por no hacer alusiones directas al gobierno) y que la ausencia de una contestación a la Junta Sindical hasta el 5 de marzo había permitido que se realizaran operaciones a comitente en descubierto (569).

Mendizábal, a su vez, confesó su total ignorancia sobre el tema hasta el momento y pidió se llevara a la Cámara el expediente completo. Se extrañó de que este decreto no fuera suspendido como lo fueron, por acuerdo de Cortes y gobierno, el conjunto de reformas del anterior y efímero gabinete. Bravo Murillo aceptó presentar la totalidad del expediente ante la sugerencia de Mendizábal de que si no lo hacía podía pen-

(568) El debate en D.S.C., 17 de marzo de 1.848, pp. 1.839 a 1.843. Las citas, de la p. 1.842.

(569) Ibidem, p. 1.845.

sarse que tenía algo que ocultar.

En la siguiente sesión, un grupo de progresistas y del incipiente núcleo demócrata formuló una proposición solicitando que el Congreso nombrara una comisión para investigar los hechos que salieron a la luz en la discusión antedicha (570). Ordax fue el encargado de defenderla (571). La falta de claridad en la legislación que había dado pie a la realización de operaciones ilegales y la actitud del gobierno eximiendo de responsabilidad a agentes que habían operado a comitente sin depósito previo, hizo que los firmantes solicitaran que el Congreso siguiera investigando el verdadero alcance de las disposiciones, de los sucesos en el país vecino y de la intervención del gobierno en el asunto (572).

Bravo Murillo fue el ministro encargado de responder a estas acusaciones y lo hizo, con claro retroceso en sus posiciones, en dos puntos: por el primero, declaró que la orden de 5 de marzo afectaba sólo a las operaciones realizadas desde ese día, con lo que no se cuestionaban las sanciones que la Junta Sindical hubiera puesto a los Agentes que operaron a comitencia hasta dicho momento. Por el segundo, que según prometió, ya había llevado al Congreso todo el expediente solicitado (573). Por tanto, planteada así la cuestión, la vo-

(570) En realidad, ninguno. Sólo veladas acusaciones y dos preguntas: ¿por qué no se derogó el R.D. de 30 de septiembre de 1.847? ¿por qué se tardó tanto en contestar a la Junta Sindical? Los hechos estaban todavía por denunciar.

(571) Los otros firmantes eran López Grado, Marqués de Albaida, V. Alsina. I. Jaén, F. Ruiz de Arbol y G. Gascó.

(572) D.S.C., 18 de marzo de 1.848, pp. 1.891-1.894.

(573) ibidem, pp. 1.894-1.896. El índice del expediente en p. 1.913.

tación nominal desestimó la toma en consideración de la cues
tión, por 91 votos contra 48 (574). Pero la crisis no esta-
ba resuelta.

A continuación, probó fortuna otra proposición, que enca-
bezaba Mendizábal, y que pidió los expedientes con todos los
antecedentes y extractos que tuvieran relación con el Decre-
to de septiembre de 1.847 y la orden de marzo de 1.848 (575).
Tras la repetición por Bravo Murillo de la promesa de mos-
trar el expediente y asegurar de nuevo que dicha orden no te
nía carácter retroactivo, se retiró la proposición (576).

La reacción parlamentaria, la participación de todos los
grupos en ella, el afán de arrebatarse al progresismo la bande-
ra de la moralidad, el temor de proporcionar un nuevo elemen-
to que pudiera ser capitalizado por la oposición... todo ello
hizo que Bravo Murillo, tres días más tarde, derogara el con
trovertido decreto de septiembre de 1.847 (577).

Desde el 22 de marzo de 1.848, por tanto, volvió a regir
la ley provisional de 1.846, que se mantuvo en vigor hasta
el R.D. de febrero de 1.854. Este rigió hasta 1.886 con el
mencionado paréntesis del sexenio revolucionario.

(574) Ibidem, pp. 1.896-1.897.

(575) Los otros firmantes eran Sagastí, Gálvez Cañero, Orozco, Herráiz, Montañés
y Villalobos. Todos ellos habían votado la proposición anterior. Ibidem.

(576) Ibidem. pp. 1.898-1.899. Al día siguiente, fiel a su promesa, el ministro
envió el expediente, que no volvió a ser punto de atención debido a la modificación legisla-
tiva.

(577) R.D. de 22 de marzo de 1.848, t. 43, p. 315.

La prohibición de las operaciones a plazo había contribuido al descenso del negocio en la Bolsa de Madrid; por ello, en 1.853 la Junta Sindical solicitó su autorización legal ya que se seguía realizando de forma clandestina (578). El decreto de febrero de 1.854 integró esta demanda, si bien rodeando el plazo de ciertas garantías: el agente es mero intermediario (a. 28); sólo tienen fuerza civil de obligar cuando están los títulos en poder del vendedor (a. 27) y solo pueden hacerse a fin del mes corriente o del siguiente (a. 26), reservándose el último día de cada mes para la liquidación.

Por primera vez, en el R.D. de febrero de 1.854, se mencionaba un aspecto que ya había causado más de un escándalo financiero: los préstamos con garantía de efectos públicos, cosa que se permitió siempre que la operación fuera intervenida por agentes de cambio (a. 52). Se establecieron una serie de normas (aa. 33 a 38) que pretendían evitar el juego a la baja del prestador (579) como era la de darle únicamente derecho preferente al cobro en caso de impago si presentaba a la Junta Sindical los mismos títulos que recibió en garantía.

(578) Entre el uno de enero y el 15 de febrero de 1.853, sólo se cotizaron 8 días efectos públicos; desde esta fecha hasta el 22 de abril, ni una vez. Esta última es la fecha de la Exposición al Gobierno de la Junta Sindical de Agentes de Cambio, cit. en Arrazola y otros, Enciclopedia..., VII, p. 666. Comenta también esta obra el hecho de que se llegó a no poder ejecutar testamentarias dada la imposibilidad de calcular el precio de los valores. Ya mencionamos la opinión proclive al plazo de los autores.

(579) La operación, como fácilmente se intuye, era la siguiente: el prestador tomaba los títulos, los vendía potenciando la baja por el aumento de oferta y, al final del plazo, los recompraba más baratos y los devolvía. Así realizaba un doble negocio: el inherente al préstamo con interés más el derivado del juego bursátil.

El proyecto progresista de diciembre de 1.854 se apartaba poco del anterior decreto, tanto en la cuestión de los préstamos con garantías de efectos públicos (aa. 26 a 29) como del plazo. Este se debía realizar siempre mediante agente (a. 9) y a fin del mes corriente o del siguiente (a. 15). Prohibía las operaciones a comitencia (a. 22) e insistía que para que las operaciones a plazo tuvieran fuerza civil de obligar debían estar los títulos en poder del vendedor, para lo que se obligaba a hacer constar en la póliza de contratación la numeración de los mismos (a. 16).

Asimismo, se intentaba evitar la especulación dando responsabilidad al agente en caso de incumplimiento de alguno de los requisitos (a. 20) siendo, en caso contrario, mero intermediario (a. 17).

El dictamen —de 1.856— introdujo escasas —pero importantes— críticas en los aspectos que nos ocupan. Era debido a que, transcurridos dos años de revolución, se consideraba ésta asentada y el enfoque era más optimista. Se pretendía facilitar la contratación de los efectos públicos a plazo y, para ello, se suprimió la constatación en la póliza de la numeración de los efectos vendibles; como dijo la propia comisión: "el comprador lo que desea y quiere es que al cumplimiento del plazo se le entregue el capital representado por títulos corrientes y legítimos" (580). También se explicitaban las formas del plazo —a voluntad, en firme o a prima—

(580) Preámbulo del Dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de Bolsas de Comercio, 30 de abril de 1.856, apéndice 2º al núm. 371.

y se ampliaban las posibilidades de liquidación —a quince y fin del mes corriente y los mismos días del siguiente— (a. 13). Asimismo, se suprimió la existencia de operaciones realizadas en Bolsa y sin fuerza civil de obligar (581) y se admitieron las operaciones a comitente (a. 16).

El Decreto de 12 de enero de 1.869 liberalizó durante cinco años las operaciones de Bolsa, al afirmar que podrían hacerse al contado y a plazo "a voluntad de los contratantes" (a. 3) y que "sean cuales fueren sus formas y condiciones, so lo estarán sujetas a las prescripciones del Código Civil y criminal y Código de Comercio" (582).

Restablecido desde julio de 1.874 el Real Decreto de 1.854, una disposición de marzo de 1.875 vino a regular —por diez años— el Colegio de Agentes de cambio y, en la misma disposición, las operaciones a plazo (583). Se destacó la idea de que tendrían fuerza de obligar sólo si estaban publicadas en Bolsa e intervenidas por la Junta Sindical, sin cuyos requisitos serían consideradas fraudulentas y punibles (a. 4). Asimismo, que serían siempre a voluntad del comprador y su plazo, fin del mes corriente o siguiente (a. 6). Se daba más responsabilidad al Agente, encargado de que todas las operaciones se realizaran legalmente (a. 7).

El Código de Comercio de 1.885 liberalizó de nuevo la contratación. Cualquiera podía realizar cualquier tipo de

(581) "operaciones autorizadas por la ley, sin fuerza civil de obligar, podían dar lugar a quebrantos considerables en las transacciones, introduciendo además como introducían perturbación en el orden de contratar", ibidem.

(582) C.L.E., t. 100, p. 842.

(583) R.D. de 12 de marzo de 1.875. C.L.E., t. 114, pp. 370-374.

transacción con o sin agente de cambio; pero si se elige esta última posibilidad, el contrato, no tendrá más valor que "el que naciere de su forma y le otorgare al ley común" (a.74); las operaciones realizadas en Bolsa, sin embargo, generan obligaciones exigibles en los Tribunales (a. 75).

A partir del Código se podían realizar en la Bolsa operaciones al contado y a plazo, en firme o a voluntad, con prima o sin ella... pues se proclamaba la libertad de los contratantes para pactar sus condiciones siendo las únicas garantías la publicidad del pacto (a. 38) y la responsabilidad del agente interventor (aa. 75 a 79). Con ello se pretendía evitar el peligro de las operaciones a plazo, que habían sido durante mucho tiempo las más importantes y el marco de la especulación; en palabras de Alonso Martínez: "a pesar de las fluctuaciones de la opinión y de las vacilaciones de los gobiernos, la verdad es que con prohibición o sin ella, las operaciones a plazo han continuado practicándose, lo mismo en la Bolsa de Madrid que en las Bolsas extranjeras, siendo impotentes los esfuerzos del legislador y los anatemas de la opinión pública para suprimirlas" (584).

La aplicación de estas normas va a depender de la coyuntura y de la opinión política del ministro del ramo pero, en términos generales, la victoria del plazo fue un hecho desde 1.854. A principios de 1.919 todavía se plantearon las dos posiciones en el parlamento: de un lado, el senador González de Echevarri consideraba ilegales las operaciones de doble y

(584) D.S.C., 20 de marzo de 1.882, apéndice 38º al núm. 85., p. 10.

aquéllas en las que el vendedor no posee los títulos en el momento del contrato y reclamaba una acción del gobierno contra ellas. De otro, el Marqués de Cortina, que defendiendo el Código de Comercio resume el pensamiento mayoritario:

"el prohibir las operaciones a plazo es prohibir la especulación, es prohibir la Bolsa, es prohibir todo lo que significa el empuje moderno en la colocación de los grandes empréstitos, las operaciones y el movimiento bursátil" (585).

El cuadro adjunto refleja la evolución de la regulación del plazo desde 1.831, tanto en la legislación promulgada como en los proyectos que no lograron su culminación parlamentaria, lo que resume lo descrito en este apartado.

(585) D.S.S., 4 de febrero de 1.919, p. 1.898.

CUADRO III,5

REGULACION DEL PLAZO EN LOS EFECTOS PUBLICOS: LEYES Y PROYECTOS

1 CARACTER Y FECHA DEL TEXTO	2 PLAZO ADMITIDO	3 TIPOS OPERACIONES PLAZO ADMITIDAS Y FORMAS REALIZACION	4 RESPONSABILIDAD DEL AGENTE (Fianza)
R.D. 10-09-1.831 P: González Salmón H: López Ballesteros	≤60 días (a. 43)	En firme; a voluntad del comprador; bajo condición resolutoria, con la prima a favor del vendedor (a. 42). No hay necesidad de que el vendedor posea los títulos previamente (a. 45).	Sí (aa. 90 y ss) 100.000 rs. vn. (a.71)
R.O. 27-10-1.831 P y H: id.	id.	id. + posibilidad negociación a comitente, con reserva de los nombres,	id.
RR.OO. 2 y 30-09-1.841 P: A. González H: Surrá F: Ga Camba	id.	Restablece obligatoriedad consignar nombres en la póliza.	No Mero intermediario
Proyecto Ley Provisional 27-07-1.841 (artículo único) P, H y F: id.	Fin mes corriente o entrante, días de vencimiento (a. 24). Liquidación: 1º y 2º días mes (a. 24)	En firme, a voluntad, a prima (a. 23 y 26). No hay necesidad de que el vendedor posea los títulos previamente (a. 27 y 28). Posibilidad reserva de nombres (a. 41)	Sí (a. 90) 400.000 rs.vn. (a. 52)
Pr. Ley 12-04-1.842 P, H y F: id.	id. vencimiento Liquidación: 4 primeros días mes (a. 17).	Depósito previo >1/10 valor efectivo (a. 12) para que tengan fuerza legal. En firme, a voluntad, a prima (a. 16 y 18) Obligación consignar nombres contratantes (a.19).	100.000 rs.vn. (a.38)

1	2	3	4
Dictamen 09-07-1.842	Ninguno (a.9)	-	Sí (a. 31) 100.000 rs.vn. (a.41)
Pr. Ley 16-11-1.842 P.H. y F.: id.	Ninguno (a.8)	-	Sí (aa. 54 y ss) 100.000 rs.vn. (a.32)
Prop. Ley 10-01-1.845 P: Narváez H: Mon F: Armero	Ninguno (a.1)	-	-
Pr. Ley 24-04-1.845= Ley Prov.23-06.1.845 P.,H. y F.: id.	60 días (a.7)	Depósito previo <10% valor efectivo (a.7)	Sí (a. 7) 600.000 rs.vn (a.29)
R.D. 12-02-1.846 (2) P.: Mq. Miraflores H.: Peña Aguayo F.: Topete	Ninguno (1)	-	id.
R.D. 05-04-1.846 (2) (Ley provisional) P.: Istúriz H.: Mon F.: Armero	Ninguno (a. 20)	-	Sí (aa.77-87) 500.000 rs.vn.(a.55)
R.D. 30-09-1.847 P.: Gª Goyena H.: Mq.Salamanca F.: Ros de Olano	(a.2) 59 días	Depósito de los efectos (a.1) (no especifica tipos)	Sí (a.4)

1	2	3	4
R.D. 22-03-1.848 (3) P.: Narváez H.: Mon F.: Bravo Murillo	Ninguno	-- --	id. 05-04-1.846
Pr. Ley 21-11-1.853⇒ R.D. 08-02.1.854 P.: Sartorius H.: Doménech F.: Esteban Collantes	Fin mes co- rriente o fin mes siguien- te (a.26)	Depósito numeración títulos (a.27) o de los propios títulos (a. 38) (no especifica tipos)	No (a. 28) 500.000 rs. (a.44)
Pr. ley 09-12-1.854 P.: Espartero H.: Collado F.: Luján	Fin mes siguiente o fin mes corrien- te (a. 15)	Depósito numeración títulos (aa. 16-18). En firme Bajo condición resolutoria (a. 21) Préstamos c/garantía ef. públicos (a.26-32)	No (a. 17) 500.000 rs. (a. 39)
Dictamen 30-04-1.856 P.: Espartero H.: Sta. Cruz F.: Luján	Fin mes siguiente o fin mes corrien- te (a. 13)	"A voluntad, en firme o a prima" (a. 13) Obligatoriedad consignar nombres en la póliza (a. 14). No es necesaria numeración títulos Préstamos c/garantía ef. públicos (a.29-35)	Sí (a. 19) 500.000 rs. (a. 42)
Pr. Ley 08-04-1.861 P.: O'Donnell H.: Salaverría F.: Mq. Corvera	Fin mes corriente o fin mes siguien- te (a. 14)	En firme, a voluntad, a prima (aa. 16-18) No es necesario consignar la numeración de los títulos (a. 15). Préstamos c/ garantía efectos públicos (aa.28-36)	Sí (a. 15) --
D. 30-11-1.868 P.: Serrano H.: Figuerola F.: Ruiz Zorrilla	Libre, a vo- luntad de los contratantes.	--	-- 100.000 rs.(a.4,1)

1	2	3	4
D. 12-01-1-869 P., H. y F.: id.			
R.D. 12-03-1.875	(4) Fin mes co- rriente. Fin mes si- guiente (a.6)	(4) Siempre a voluntad del comprador (a. 6).	200.000 rs. (a.2)
R.D. 22-08-1.885 (Código Comer. 1.885) P.: Cánovas H.: Cos-Gayón F.: Pidal y Mon	Plazo libre- mente pacta- do (aa.75-76) Liquidación general fin mes (a. 105)	"En firme o a voluntad, con pri- ma o sin ella" (a. 75). Puede haber reserva nombres (a.77)	200.000 rs. (a.61 del Reglamento)

NOTAS: —En letra pequeña, lo que no llegó a entrar en vigor.

—P. = Presidente del gobierno; H.= Ministro de Hacienda; F.= Ministro de Fomento.

(1) Desde el 30-04-1.846. La caída del gabinete impidió su entrada en vigor.

(2) Promulgadas el mismo día de la toma de posesión gabinete.

(3) Es derogación del anterior.

(4) En realidad no modifica sino reafirma el R.D. 08-02-1.854

3.5.- El control sobre las sociedades anónimas.

En este apartado se contemplan las normas que regulan la obligación de las compañías de dar a conocer detalles sobre su constitución y funcionamiento, así como las posibilidades de control sobre las mismas. Hay tres colectivos que están —o pueden estar— interesados en la marcha de estas asociaciones por diferentes motivos, y a los que las compañías deben facilitar diversa información.

En primer lugar, los propios accionistas. Ya ha sido repetidamente destacado que las dimensiones de las anónimas impiden que todos sus socios participen en su dirección. En realidad, tampoco éstos están capacitados para realizar esta labor ni lo desean, incluso en un primer estudio de este tipo de compañías, cuando la cualidad de socio era indispensable para formar parte de la dirección. Esta era la norma general en el Antiguo Régimen y fue seguida durante la vigencia del Código de Comercio de 1.829, aunque no había obligación explícita de ello. Entre 1.848 y 1.868 fue una exigencia legal y, por las noticias que tenemos, siguió siendo práctica habitual durante muchos años, hasta llegar a una clara diferenciación entre el núcleo directivo y los poseedores del capital. Pero todos los accionistas, por definición, desean dar el mayor rendimiento posible a su capital, buscando la relación más adecuada en cada caso entre posibilidades de beneficio y riesgo.

La forma de articular el derecho de participación del ac

cionista en la marcha de la empresa es muy variada ya que la legislación se suele limitar a enunciar este derecho y a regular algunos casos especiales, como es la modificación de estatutos y la variación del capital social. No voy a entrar en el análisis del sistema político de las compañías (regulación del derecho de los socios a participar en la toma de decisiones) pues su estudio en profundidad requeriría el manejo de una muestra amplia de escrituras, estatutos y reglamentos, lo que desborda con creces mi objetivo actual, aunque es un proyecto que deberá ser emprendido. En estas páginas me limité a analizar el marco legislativo que regula este derecho a la participación y, especialmente, la constitución y atribuciones de las Juntas Generales de Accionistas.

En segundo lugar, se considera a las sociedades anónimas como unidades económicas que funcionan dentro de una sociedad a la que interesa su marcha, por cuanto influye en el desarrollo general de la economía. De ahí que se les exija se ajusten a unas reglas generales de funcionamiento, que ya fueron detalladas a la hora de analizar las normas que regulan su constitución. La creación de una compañía no debe atentar contra el marco teóricamente definido —mercado libre— pero, además, en su desarrollo, tampoco debe burlar sus normas. De ahí que generalmente se exija que ciertos datos sean públicos (balances, estatutos) y que haya facilidad de acceder a ellos a través del Registro Público de Comercio (1.829), del Registro Mercantil (1.885) y de su inserción en las publicaciones oficiales. Las normas acerca de la publici

dad varían a lo largo del período estudiado, según la importancia que se dé al control público general frente al del Estado, ejercido mediante la inspección. No hay que olvidar, sin embargo, que este aspecto es una vertiente del control estatal, pues es el Estado el que puede obligar a las sociedades a facilitar cierto tipo de información así como es el propio Estado el que asume la responsabilidad de la organización de los Registros Públicos y de la elaboración de estadísticas.

Con ello entramos en la última forma del control que tratamos. El Estado, en cuanto institución, es la tercera instancia interesada en al marcha de la compañía, por cuanto ha de velar por los intereses públicos. Pero hay una gran diferencia entre un Estado-tutor, como el que existía programáticamente entre 1.848 y 1.868 y un Estado-administrador. Aquél pone énfasis en la inspección y en su deber como fiscal de los intereses públicos. Este renuncia a tal misión, al considerar al individuo como el mejor juez de sus intereses, interviniendo únicamente en caso de conflicto. Renuncia al control y, por contra, pone especial énfasis en la publicidad, en la transparencia de funcionamiento y en la agilidad del sistema judicial.

Estos tres problemas serán tratados aquí y veremos cómo la legislación varía mucho en las dos últimas formas de control reseñadas en las tres etapas analizadas (1.829-1.848, 1.848-1.868 y 1.868-1.923) mientras que para la primera vale, en esencia, lo ya establecido en la primera parte de esta Te-

sis, al hablar de las sociedades por acciones en el Antiguo Régimen.

Sobre este problema, pueden caracterizarse así las etapas legislativas que venimos estableciendo:

Entre 1.829 y 1.848, hay un primer momento de indefinición legal, debido a la escasa regulación en el Código de Comercio de los derechos de los accionistas, de la publicidad de los actos sociales y por la ausencia de control gubernamental. Entre 1.848 y 1.868 existe una mayor regulación de los derechos de los accionistas, una gran información acerca de los actos sociales y una amplia intervención gubernativa, que el Bienio Progresista no cambió sino que reforzó para las sociedades de crédito y de obras públicas. Desde, 1.868 se abre un período de libertad de constitución de las sociedades, que coincide con la supresión de la inspección, el incremento de la publicidad de los actos sociales y una mejor regulación de los derechos de los accionistas en el Código de Comercio de 1.885.

A partir de la década de los noventa, con un cierto retraso respecto a otros países, comenzó un nuevo debate acerca de la conveniencia del intervencionismo estatal, que no se llegó a cerrar en la época estudiada. El aumento del número y de las dimensiones de las anónimas así como la nueva legislación internacional eran los argumentos que sostenían las demandas de intervencionismo. Con ello no se deseaba volver a la denostada "legislación restrictiva" del 48, sino garantizar de forma más efectiva los derechos de los accionis-

tas y del Estado a supervisar la marcha de las Compañías. Se pretendía que aquéllos pudieran —sin necesidad de constituir mayoría— solicitar de la Administración la inspección de la sociedad en la que tienen comprometido su capital. Asimismo, la regulación del derecho del Estado en cuanto representante de la sociedad, a investigar el funcionamiento de las compañías periódicamente.

Estos son los aspectos que van a ser aquí considerados. No lo será el análisis de la organización interna de las compañías ni formas de obligada intervención del Estado, regulada como actividad cotidiana —fiscalidad— o extraordinaria —suspensiones de pagos y quiebras—.

3.5.1.- Las Juntas Generales de Accionistas.

La participación de los socios en la marcha de la compañía quedó regulada desde el Código de Comercio de 1.829 en su asistencia a las Juntas Generales de Accionistas que se debían celebrar anualmente. En ellas se elegía a los directores y se sometía a juicio su gestión, mediante el examen de los Balances y Memorias que presentaban. Otras atribuciones fundamentales de las Juntas son la aprobación de los estatutos y su reforma, la modificación del capital social y el reparto de los dividendos.

La protección de los derechos de los socios fue materia de la legislación desde el primer Código de Comercio y esta-

ba destinada a impedir los posibles abusos de la administración (palabra con la que se designaba al grupo directivo durante la mayor parte de la época estudiada). No obstante, el enfoque era distinto en cada uno de los tres períodos considerados. Entre 1.829-1.848 y desde 1.868, la ley se limitó a consignar los derechos fundamentales de los accionistas y a atribuirles a éstos la responsabilidad de su ejercicio. Entre 1.848 y 1.868, el Estado se constituyó en el representante de los socios y pasó a ser el "guardián de los abusos de la administración". A continuación, consideramos estos problemas en los años estudiados.

a) Composición y frecuencia de la reunión de la Junta General de Accionistas.— La composición de la Junta General de Accionistas (en adelante J.G.A.) no estaba regulada por la legislación, por lo que la práctica revela una enorme casuística, que puede ser resumida en los tres modelos que ya fueron descritos en otro lugar (pp. 257-260).

Se puede afirmar que en la mayor parte de las compañías existía un sufragio censitario, que se manifestaba en la exigencia de un número determinado de acciones —más de una— para la participación en la J.G.A. y en que el número de votos estaba en relación directa con el volumen de títulos poseídos aunque, en algunas asociaciones, aquél estaba limitado para evitar una excesiva concentración de poder.

Como consecuencia, aparece la existencia de tres categorías de socios dentro de las compañías, cada una de las cua-

les presupone la anterior. En primer lugar, el accionista, cualidad que se obtiene por la mera posesión de un título. En segundo, el votante (elector), o participante activo en la J.G.A. En tercero, el elegible, ya que en buena parte de las compañías los cargos directivos implicaban la cualidad de socio activo. La ley sólo obligó a ello entre 1.848 y 1.868, pero ya antes era una costumbre que se perpetuó después (586).

Más adelante consideraremos cuáles eran las decisiones para las que la legislación exigía la presencia de un determinado número de socios reunidos en J.G.A. Son aquéllas que implican una reforma sustancial de la organización societaria, por lo que interesa impedir que tales acuerdos puedan ser tomados por una minoría. Fuera de estas situaciones, la composición de la J.G.A. queda a su determinación estatutaria, lo que provoca una casuística muy importante.

Los Códigos de Comercio, al establecer que los balances anuales deben ser aprobados en J.G.A. indican de forma indirecta la frecuencia de su celebración (aa. 36 y 310.CC 1.829, a. 37 CC 1.885). Sólo el R.D. de 17 de febrero de 1.848 reguló este extremo explícitamente, al consignar que la escritura de fundación debía determinar "las facultades que se reserven a la Junta General de Accionistas y época de su convo

(586) El a. 13 de la ley de 28 de enero de 1.848 obligaba a los directores a depositar durante su mandato un número determinado de acciones, en papel y forma especiales, a fin de que no pudieran ser negociables. Por una parte, se pretendía dar a los socios la seguridad de no verse estafados. Por otra, daba el dominio a los grandes accionistas, que podían permitirse tener acciones inmovilizadas. Se participa de la idea —ya desarrollada en el Antiguo Régimen— de que cuantas más acciones tuviera un individuo, mejor ejercería la dirección (C.L.E., t. 43, p. 53).

cación, no pudiendo menos de verificarse una vez cada año" (a. 1,11).

Esta norma estuvo vigente para todas las sociedades por acciones durante veinte años, al fracasar la solicitud de que las sociedades de crédito debían reunir sus Juntas semetralmente (587).

La legislación de 1.868 restauró las normas del Código de Comercio de 1.829. El de 1.885 no hizo sino resaltar la autonomía de las sociedades para regular su funcionamiento interno. En este punto, dispuso que las escrituras debían contener:

"Los plazos y forma de convocación y celebración de las Juntas Generales ordinarias de socios y los casos y el modo de celebrar las extraordinarias.

La sumisión al voto de la mayoría de la junta de socios debidamente convocada y constituida, en los asuntos propios de su deliberación.

El modo de contar y constituirse la mayoría, así en las Juntas ordinarias como en las extraordinarias, para tomar acuerdo obligatorio" (a. 151).

Se trataba simplemente de dar publicidad en las escrituras sociales a las reglas de funcionamiento de las compañías, a fin de que el potencial accionista calibrara el derecho a la participación que iba a tener y pudiera luego reclamarlo.

Los veinte años que rigió la ley de 1.848 iba a dar al Jefe Político (luego gobernador civil) atribuciones que en

(587) D.S.C.C., 17 de enero de 1.856, p. 6.245. La enmienda fue presentada por Gaminde.

el resto de la época estudiada correspondían a los accionistas. Así, el artículo 25 del Real Decreto de 17 de febrero de 1.848, preveía que esta autoridad era la encargada de convocar y presidir la primera J.G.A. así como las demás, caso de que los administradores no lo hicieran en el período prescrito para ello (a. 40).

Nada dice la legislación sobre la posibilidad de que un grupo de accionistas pudiera reclamar la convocatoria de una reunión, extremo que los diversos estatutos consideran de forma diferente (588). Esta cuestión, así como el incremento de las facultades de los accionistas para controlar la dirección fueron materia de debate en las Cortes desde la década de los noventa sin que se llegara a resolver dentro del período considerado (v. 3.5.3).

b) Atribuciones de la Junta General de Accionistas.

1.- Nombramiento de la dirección: Esta facultad ya fue reseñada en el Código de Comercio de 1.829 (a. 265), que no hacía sino perpetuar la tradición de nuestra legislación. No varió en disposiciones posteriores ya que formaba parte de la propia definición de la anónima (589), pero la forma de realizarla se dejaba a su consideración en los estatutos (590). Lo mismo cabe decir para la estipulación de las atri-

(588) Por ejemplo, en la Fábrica del Bidasoa (siderurgia) los estatutos de 1.884 estipulaban que se podía hacer por un colectivo de más de 10 accionistas que poseyeran más de un tercio de las acciones.

(589) a. 16 del R.D. de 17 de febrero de 1.848, a. 155 del C.C. de 1.885.

(590) a. 277 C.C. 1.829, a. 25 del R.D. 17 de febrero de 1.848, a. 155 del C.C. 1.885

buciones de los directores.

Las sociedades de crédito, desde 1.856 son una excepción a la norma general. Las que fueron aprobadas por ley habían consignado en el documento sometido al Parlamento el número de miembros del Consejo de Administración, por lo que no podían reformarlo sino por una disposición del mismo rango. De ahí que la ley de 18 de mayo de 1.862 permitiera que se autorizara esta operación mediante Real Decreto, a solicitud de la J.G.A. (591).

2.- Control sobre la dirección y votación de los balances: En toda la legislación analizada, este extremo se regula de una forma similar. Los accionistas sólo pueden revisar la actuación de la dirección en el momento de la rendición de cuentas anual:

"En las compañías comanditarias y las anónimas no pueden los socios ni los accionistas hacer examen ni investigación alguna sobre la administración social sino en las épocas y bajo la forma que prescriban los contratos y reglamentos de las compañías" (592).

Sólo en ese momento, los accionistas podían exigir "todos los documentos comprobantes de los balances que se formen para manifestar el estado de la administración social" (a. 173, C.C. 1885 y a. 310, C.C. 1.829).

En el debate sobre la ley de sociedades de crédito, se

(591) C.L.E., t. 87, p. 535.

(592) a. 309 del C.C. 1.829 y a. 158 del C.C. 1.885 (salvo modificaciones de estilo).

alzaron voces que demandaban se incrementaran las posibilidades de control de la dirección por parte de los accionistas. En él, Jaén propuso que los que poseyeran un número determinado de acciones (él puso, como ejemplo, más de 100), pudieran inspeccionar los libros en cualquier momento. Orense, por la comisión, fue el encargado de contestarle, negando la conveniencia de la intervención constante de los accionsitas, con lo que su propuesta no prosperó (593).

La situación, pues, quedó como la hemos descrito en todo el período estudiado, permaneciendo las posibilidades de control de los accionistas reducida a la revisión del balance anual, lo que quedó establecido en el artículo 158 del Código de Comercio de 1.885:

"Los socios o accionistas de las compañías anónimas no podrán examinar la administración social ni hacer investigación alguna respecto a ella, sino en las épocas y en la forma que prescriban sus estatutos y reglamentos". (Subrayado mío).

En dicho momento, sin embargo, los gerente o administradores no podían negar a los socios "el examen de todos los documentos comprobantes de los balances que se formen para manifestar el estado de la administración social" (a. 173).

En 1.906, el Senador García San Miguel manifestó que en muchas sociedades se negaba a los accionistas el examen de los libros, con la excusa de que podía ser una fuente de información utilizada por la competencia. De ahí que solicita-

(593) D.S.C.C., 17 de enero de 1.856, pp. 6.245 y 6.246.

ra —sin éxito— que se aprobara una ley que explicitara claramente la obligación de presentar en J.G.A. el Balance y una Memoria "lo más clara posible" a los seis meses del fin de año social, dando estos documentos a los accionistas con una antelación de, al menos, ocho días en los cuales pudieran revisarlos y expresar sus mociones (594).

La preocupación por la explicitación legislativa de los derechos de los accionistas en una época en que el incremento del número y del tamaño de las sociedades era muy destacable, no era nueva ni terminaría este año. En otras ocasiones —1.903, 1-910— se formuló como la posibilidad de canalizar una demanda de intervención del Estado, por lo que será analizada en un próximo apartado (3.5.3).

3.- La reforma de estatutos y reglamentos: Como ya fue mencionado, el Código de Comercio de 1.829 preveía las mismas solemnidades para tomar y formalizar este acuerdo que para la realización del contrato de sociedad (aa. 289 y 292). Entre 1.848 y 1.868, la decisión debía ser aprobada en J.G.A. y por el gobierno (a. 11 ley de 28 de enero de 1.848). Desde 1.868 se volvió al régimen de autonomía de las compañías para realizar la reforma de sus estatutos.

Unicamente hubo una excepción. La ley de 21 de enero de 1.870 se formuló para regular la forma de tomar esta decisión en Bancos y sociedades autorizadas por el Gobierno y que

(594) D.S.S., 14 de marzo de 1.906, apéndice 2º al núm. 110.

no hubieran previsto el modo de realizar la reforma de estatutos. Sin efectuarla, muchas sociedades no podían ajustarse al nuevo régimen legislativo. Para facilitar tal transición, la ley mencionada dispuso que las sociedades cuyos estatutos no hubieran previsto el caso, pudieran reformarlos en J.G.A. según las siguientes normas:

1) La previa inclusión del asunto en el orden del día de la J.G.A.

2) Que el acuerdo sea tomado por un número de votos que represente las cuatro quintas partes del capital social en primera convocatoria y, en segunda, por mayoría simple (595).

Cabe considerar que esta norma se limitaba a consignar una práctica mediante la cual, la dificultad de obtener una mayoría cualificada para la toma de decisiones implicaba su realización, de forma más sencilla, en una segunda convocatoria.

El Código de Comercio de 1.885 no se ocupó más que de fijar el modo de tomar la decisión de modificación del capital social (596). El debate sobre este tema ya fue descrito en el capítulo 2 (pp.461,463 y 468). El resultado fue que se dispuso que el número de asistentes a la J.G.A. que debía tomar esta

(595) C.L.E., t. 103, p. 68. El origen de esta ley fue una proposición presentada, entre otros, por V. Balaguer y P. Madoz y fue aprobada sin apenas debate (D.S.C.C., 10 de noviembre de 1.869, apéndice 4º al núm. 165).

(596) Hay que considerar que las sociedades autorizadas por ley necesitaban una disposición del mismo rango para poder realizar esta reforma.

decisión (previamente anunciada e incluida en el orden del día) no podía ser menor de las dos terceras partes del capital nominal y del número de socios (a. 168).

Pronto se reveló poco operativo este artículo para las compañías que tuvieran sus acciones al portador. De ahí que, tras un debate que comenzó en 1.903 a iniciativa de Pi y Arsuaga cuya bandera recogió Raventós, se aprobara la ley de 29 de junio de 1.911 que, al reformar el mencionado artículo 168, eliminó el requisito de la presencia de los dos tercios de los socios cuando el capital estuviera representado por acciones al portador. Desde este momento, la única exigencia fue la asistencia de los dos tercios del capital social, presente o representado (597).

Dentro de las atribuciones de la J.G.A. se encuentra la decisión de efectuar la fusión con otras sociedades. Este aspecto —considerado para las sociedades de crédito en la ley de 1.856— sólo fue contemplado por el Código de Comercio de 1.885 para las sociedades ferroviarias, en las que el interés del Estado era particular. Estas sociedades podrían tomar tal decisión por unanimidad que todos los socios. A continuación, el mismo artículo (el 188) estipulaba, "a menos que en los estatutos se hubieren establecido otras reglas para alterar el objeto social". Esta redacción era la misma que se había propuesto para la alteración de los estatutos en el conjunto de las sociedades y que, como hemos visto, fue

(597) C.L.E., t. 41 (N.S.), pp. 706-707).

reformado. La ausencia de enmiendas a éste hace pensar que las ferroviarias, que estaban precisamente desarrollando un importante proceso de concentración, tenían regulado perfectamente este tema en sus estatutos. En segundo lugar, el Código requería la unanimidad de los acreedores, sin posibilidad de reforma estatutaria.

4.- El reparto de dividendos: Como vimos para el Antiguo Régimen, ésta era una de las atribuciones de la J.G.A., que debía tomar esta decisión tras el análisis del balance presentado por la administración. El Código de Comercio de 1.829 no reguló este extremo, que tradicionalmente debe respetar dos reglas: el reparto de pérdidas y ganancias de forma proporcional al número de títulos (aa. 318 y 319) y que no se realizara a costa del capital.

La legislación posterior sigue sin considerar normas especiales al respecto, que han de arbitrar las propias compañías. Unicamente el Reglamento de 1.848 introdujo una condición general: el reparto de dividendos no podía hacerse antes de haber constituido un fondo de reserva que se estima en un 10% (aa. 35, 36 y 1-12).

3.5.2.- La publicidad.

"Las sociedades anónimas deben vivir publicamente para el mercado" (598).

La publicidad de las escrituras y reglamentos de las compañías fue un aspecto considerado por la legislación desde el Código de Comercio de 1.829 aunque estuvo sometida a diferentes regulaciones. Podemos decir, con carácter general, que el ámbito del colectivo que se consideraba interesado en tales documentos fue ampliándose a medida que las sociedades anónimas aumentaban y que, por ello, la obligación de la publicación de los mencionados documentos así como de los balances fue incrementándose con el tiempo, a la vez que se desarrollaba el deseo de las propias sociedades de darse a conocer. Esta realidad está combinada con el ejercicio de la creación de unas estadísticas de sociedades que deben servir tanto para el control por parte del Estado como para constituir una fuente de información fidedigna y de fácil acceso para el público interesado. De ahí que en este apartado consideremos tanto el aspecto de la inscripción obligatoria de los documentos sociales como el de la publicación de su extracto y de la información periódica de su funcionamiento (balances).

(598) Intervención del diputado Palomo, en un debate sobre la frecuencia y modo de publicación de los balances (D.S.C., 5 de diciembre de 1.907, p. 458).

a) 1.829-1.848.— El Código de Comercio de 1.829 creó un Registro Público de Comercio (R.P.C.) en cada provincia, en el que se debía inscribir un testimonio autorizado de las escrituras y reglamentos de las compañías (aa. 22 y 25). El secretario de la intendencia (y desde la supresión de esta instancia, del gobierno civil) debía enviar una copia de los mencionados documentos al Tribunal de Comercio (o, en su defecto, al juzgado ordinario) para que los fijara en el estrado ordinario de sus audiencias y los insertara en el registro particular del Tribunal (a. 31). Así se conseguía cumplir el doble objetivo considerado: la estadística y la publicidad. Ambas, en estos años, se mantuvieron en el ámbito provincial.

La inscripción era un requisito obligatorio para las compañías y su incumplimiento era penado con una multa elevada (a. 30) a la vez que implicaba la invalidez de los contratos a favor de la compañía. Efectivamente, de no mediar la inscripción, las compañías no podían demandar judicialmente el cumplimiento de los contratos que hubiera realizado. Por el contrario, podían ser utilizados a su favor por parte de terceros interesados (a. 28).

El Código preveía el mismo tipo de requisitos de inscripción y publicación de los documentos modificativos de la escritura social. Nada se dice, sin embargo, sobre la inscripción y publicación del balance anual.

La escasa regulación de la publicidad sobre sociedades se combinaba con la ausencia de normas sobre la inspección, lo que respondía a la creencia de que no era necesario inmis-

cuirse en la buena marcha del comercio en general y de las sociedades en particular, que:

"sólo deben someterse a los actos establecidos por la ley, como garantías contra el abuso que pueda hacerse del crédito en las relaciones mercantiles" (a. 21).

Estos actos eran: la inscripción de los documentos fundacionales en el R.P.C., llevar un orden riguroso de la cuenta y razón y conservar la correspondencia mercantil. En caso de conflicto, intervendría el Tribunal de Comercio y sólo en esta circunstancia serían revisados los documentos de las compañías.

b) 1.848-1.868.— El régimen de autorización gubernativa o legislativa existente en esta etapa hace que nos sea conocida la secuencia de creación de compañías debido a la obligada inserción de las normas prescritas en la Gaceta de Madrid y a su recogida en la Colección Legislativa de España. La difusión de los documentos fundacionales adquiere un carácter nacional frente a la anterior etapa, que únicamente contemplaba el ámbito provincial. Cabe destacar, sin embargo, que el tipo de información que estas fuentes proporcionan es muy desigual, ya que en ocasiones se insertan a la letra los estatutos bastando, las más de las veces, la escueta autorización. Solamente para los Bancos y las sociedades de crédito —y desde 1.856— quedó regulada la obligación de la inserción completa de estatutos y reglamentos en la Gaceta de

Madrid (599).

Por lo demás, el Real Decreto de febrero de 1.848 mantuvo las normas del Código en lo referente a la inscripción con la adición, claro está, de la ley o Real Decreto de autorización de cada compañía (a. 26).

La citada norma de 1.848 prescribió la obligación de la publicación del balance anual dentro del ámbito provincial (Boletín oficial de la provincia) y efectuada por la autoridad gubernativa. Previamente, tal documento debía haber sido aprobado por la J.G.A. y enviado al Jefe político que, tras su comprobación, sería el encargado de su publicación y de su envío al Tribunal de Comercio y al gobierno (aa. 34 y 37).

La publicación del balance como responsabilidad del gobierno es consecuencia, en esta etapa, del sistema de control sobre las compañías por acciones. Es resaltada en algunos textos, como la Real Orden de 22 de marzo de 1.850, en la que se recuerda a las autoridades provinciales el cumplimiento de las normas del 48, que se habían ignorado el año anterior:

"En las sociedades por acciones se encuentra hasta cierto punto comprometido el nombre y el crédito del gobierno que las examina y autoriza, y esta circunstancia es otra razón más para que por cuantos medios la ley le concede, vigile el buen manejo directivo y económico del capital social y publique su situación, para que nunca la autorización del gobierno sirva de capa a criminales agiotages" (600).

(599) a. 8 de la ley de 28 de enero de 1.856 (Bancos), C.L.E., t. 67, p. 93; a. 9 de la ley de 28 de enero de 1.856 (sociedades de crédito), ibidem, p. 98.

(600) C.L.E., t. 49, p. 599.

Las leyes de 28 de enero de 1.856 reforzaron para Bancos y sociedades de crédito las exigencias de publicación de los balances. Debían incluir en la Gaceta de Madrid un "estado mensual" y, siempre que el gobierno lo solicitara, remitirle "estados de caja, cartera y resumen de las operaciones" (601).

El dictamen del proyecto de ley sobre las sociedades de crédito prescribía únicamente la publicación trimestral pero la comisión, ante la abundancia de demandas de una mayor información, aceptó esta nueva redacción. Se comenzaba así a primar la publicidad sobre el control gubernativo, cosa que alcanzaría su máxima expresión tras la revolución de 1.868:

"Toda sociedad anónima o por acciones tiene que dar gran publicidad a sus operaciones" (602).

c) 1.869-1.923.- La ley de 19 de octubre de 1.869, que consagraba la libertad de creación de las compañías, incrementaba los requisitos de publicidad al tiempo que eliminaba la inspección. Tras su constitución, en un plazo de quince días, la compañía debía enviar sus escrituras, estatutos, reglamentos y acta de constitución al gobernador de la provincia que, a su vez, enviaría la documentación al Ministerio de Fomento. La publicación, "para que lleguen al conocimiento del público" se haría tanto a nivel provincial (Boletín oficial de la provincia) como nacional (Gaceta de Madrid)

(601) a. 21 de la ley de 28 de enero de 1.856 (Bancos), C.L.E., t. 67, p. 95; a. 8 de la ley de 28 de enero de 1.856 (sociedades de crédito), ibidem, p. 98.

(602) De la intervención de Gaminde en el debate de la ley de sociedades de crédito (D.S.C.C., 17 de enero de 1.856, p. 6.246).

(a. 3).

Esta misma ley reforzó las exigencias de publicidad de los Balances para el conjunto de las compañías. Debía ser presentado a la J.G.A. y, tras su aprobación, al gobernador provincial y al Ministro de Fomento. Hasta aquí, la situación no varía respecto al 48, hecha la salvedad de que ahora el balance no estaba sometido a la aprobación y las observaciones gubernativas. Una segunda diferencia estriba en que, ahora la publicación se haría tanto a nivel provincial como nacional del mismo modo que para la de los documentos fundacionales. En tercer lugar, que la publicación es ahora responsabilidad de las compañías y no del gobierno.

La preocupación por la publicidad de la información de la marcha de las compañías llegó a su punto álgido en 1.885, al exigir el Código la publicación de un balance mensual en la Gaceta de Madrid con arreglo a las siguientes condiciones:

"balance detallado de sus operaciones, expresando el tipo a que calculen sus existencias en valores y toda clase de efectos cotizables" (a. 157).

Este artículo no mereció ninguna enmienda o comentario en el debate. Tampoco el 183, que exigía la misma frecuencia para los Bancos de emisión y descuento pero una publicación tanto en la Gaceta de Madrid como en el Boletín oficial de la provincia. Era habitual —no sólo en España— que a las sociedades financieras se les exigiera una mayor frecuencia en la publicación de los balances. La existencia de dos artícu

culos debía indicar, en principio, la contemplación de dos situaciones diferentes: una para Bancos, otra para el resto. Al no ser así, al insertar dos artículos que preveían la misma frecuencia de publicación sólo cabe pensar en la existencia de una fe desmedida en la publicidad o en que al regular las "sociedades anónimas" se estuviera pensando únicamente en las "sociedades de crédito", que se quería evitar cayeran en una nueva crisis. Como tendremos ocasión de ejemplificar, los textos de la época permiten sostener ambas hipótesis.

El fuerte incremento del número de sociedades anónimas a partir del último tercio del siglo XIX revelaba una doble realidad. Por una parte, las dimensiones de las grandes compañías crecían pero, por otra, comenzaba a extenderse la utilización de esta fórmula asociativa a entidades de menor tamaño. Todo ello hizo que la norma del Código no se cumpliera y que fuera muy difícil ejercer una constante vigilancia sobre ello.

La Real Orden de 2 de abril de 1.904 es significativa de la situación a la que se había llegado. Por ella se comunicó a la empresa concesionaria de la Gaceta de Madrid que, si bien podía incoar expediente de apremio contra deudores morosos por la inserción de anuncios obligatorios no pagados, no podía hacerlo sobre balances no publicados. Frente al sistema del 48 —se afirmó— el cumplimiento de las normas sobre publicación "únicamente la podrán exigir los accionistas de las referidas sociedades" (603).

(603) C.L.E., t. 18 (N.S.), pp. 10 y 11. La cita corresponde a la p. 11.

Las normas del Código resultaban excesivas y de ahí que pronto adquirieran el carácter de garantía a la que los socios se podían acoger si lo deseaban y que no se castigara su incumplimiento. Por ello, la ley del 25 de junio de 1.908 modificó el artículo 157 del Código y limitó la obligación a la publicación del balance anual (604).

Las protestas contra el mencionado artículo tuvieron su primera expresión parlamentaria en 1.903. Dos proposiciones de Pí y Arsuaga contemplaban la distinción entre balance trimestral y balance anual. Esto debería publicarse en la Gaceta de Madrid y así alcanzar la más amplia difusión. Aquél, en un diario cuya creación solicitaba: el Diario oficial de sociedades anónimas. Así, los sectores interesados podrían tener acceso a una información más abundante, a través de una publicación especializada. El balance se convertiría en mensual para Bancos, sociedades de crédito, seguros y ferrocarriles y en semanal para los Bancos de emisión. Aparte de esta distinción entre diversos tipos de sociedades y entre la publicación oficial de amplia difusión y la especializada, Pí y Arsuaga reclamó se consignara el derecho de accionistas y obligacionistas a solicitar la ampliación de la información contenida en el balance (605).

Tres años más tarde fue Raventós el que llamó la atención sobre el hecho de que el artículo 157 del Código de Co-

(604) C.L.E., t.32 (N.S.), p. 519.

(605) Propuso 1/10 de las acciones u obligaciones en circulación ó 250.000 pts.D.S. C., 3 de diciembre de 1.903, apéndices 1 y 2 al núm. 90.

mercio estaba pensado fundamentalmente para las sociedades de crédito, que fueron las que lo cumplieron. El resto de las compañías, muchas con capitales modestos, hicieron caso omiso de la norma. Haciéndose eco de una petición de la Liga de Sociedades Anónimas afirmó:

"En suma: la Comisión gestora de esta Liga no rehúye para las sociedades anónimas la publicidad debida y por esto pide que anualmente se forme y publique el verdadero y no engañoso balance y tampoco intenta evadir el artículo 157 del Código de Comercio y sí darle su verdadero alcance" (606).

Esta proposición fue dictaminada favorablemente pero no llegó a ser debatida. Quince meses después —noviembre de 1.907— fue resucitada en términos similares por Alcalá Zamora (607). Este diputado resaltó que la mayoría de las sociedades tenían un capital inferior al millón de pesetas y que en muchos casos no llegaba a las 100.000. Para ellas, la publicación en la Gaceta de Madrid era pretenciosa y cara.

Eran hechos incuestionables. Como ha sido resaltado, ya en 1.904 el gobierno reconoció la imposibilidad de hacer cumplir la obligación de la publicación del balance mensual pasando así el mentado artículo 157 a ser un punto de referencia más que una norma obligatoria. En esta ocasión no hubo problemas y se pudo incluir en el orden del día el debate de

(606) Preámbulo a la proposición de ley. Subrayado mío. D.S.C., 16 de marzo de 1.906, apéndice 7º al núm. 111. La defensa en 20 de marzo, p. 3.250. En esta legislatura se nombró la comisión, se presentó el dictamen (D.S.C., 16 de noviembre 1.906, ap. 5º, 134) y una enmienda (Iriarte Gallego) que incorporaba la institución de los censores de cuentas, que se incorporó finalmente a la ley de 1.951 (D.S.C., 22 de noviembre de 1.906, apéndice 3º al núm. 139).

(607) D.S.C., 9 de noviembre de 1.907, apéndice 16º al núm. 89.

esta proposición. De hecho, apenas lo hubo y el artículo 157 del Código quedó así redactado desde la ley de 25 de junio de 1.908:

"Las compañías anónimas tendrán obligación de publicar anualmente en la Gaceta el balance detallado de su situación económica, expresando el tipo a que calculen sus existencias en valores y toda clase de efectos cotizables" (608).

Las compañías de seguros fueron especialmente consideradas por la legislación en estos años. En lo que aquí nos ocupa, cabe destacar que para la publicación de sus balances tenían que ajustarse a un modelo estricto y mucho más detallado (609).

Un aspecto que no podemos olvidar es la regulación de la inscripción de las sociedades en registros públicos que sirvieran tanto a la formación de una estadística oficial como para ofrecer los datos que interesaran al público en general. Vimos cómo el Código de 1.829 había creado el Registro Público de Comercio de carácter provincial y cómo desde 1.848 —en teoría— debía haber un completo archivo de sociedades autorizadas en los gobiernos civiles y en los Ministerios de Gobernación (seguros mutuos), Hacienda (crédito y Bancos) y Fomento (resto). De hecho, hasta 1.885 el Registro siguió siendo provincial y no hubo apenas ninguna actuación dedicada a regular la elaboración de estadísticas nacionales. La

(608) Ley de 25 de junio de 1.908, C.L.E., t. 32 (N.S.), p. 519.

(609) R.D. de 31 de marzo de 1.909, C.L.E., t. 34 (N.S.), pp. 824-825.

información gubernativa sólo produjo resultados entre 1.858 y 1.868 (A.E.E.).

El Código de Comercio de 1.885 creó el Registro Mercantil (R.M.) en cada provincia (aa. 16-32) en sustitución del Registro Provincial de Comercio (610). Las prescripciones de 1.829 no habían tenido resultado, los trabajos estadísticos apenas habían rendido fruto y por ello, ahora se creaba un organismo independiente en el que se debían inscribir los comerciantes (lib. 1º), las sociedades mercantiles (lib. 2º) y los buques (lib. 3º).

La inscripción era obligatoria para las sociedades españolas y extranjeras (aa. 17, 21 y 119), para las acciones (a. 23) y para las cotizaciones de Bolsa (a. 31). Los principios que la regulan, por lo demás, permanecen idénticos a los del Código de Comercio de 1.829, en cuanto a las escrituras no registradas (a. 24) y la obligación de la inscripción de cualquier acto que modifique los estatutos o suponga cambio en el capital social (aa. 25 y 119).

Como el R.P.C., el Registro Mercantil tenía carácter público (a. 57), para garantizar "la información sobre la capacidad y salvabilidad de comerciantes y sociedades".

En 1.899, la estadística del R.M. todavía no estaba formada (611). La razón, para el gobierno, era que "perdura aún

(610) Desde 1.921, Las Palmas cuenta también con R.M. el Reglamento del Registro Mercantil en R.D. de 21 de diciembre de 1.885, C.L.E., t. 135 (2ª parte), pp. 1.757-1.777. Los aa. 36a 44 desarrollan las normas del Código de Comercio y los aa. 57 a 63 destacan las disposiciones sobre el carácter público del R.M.

(611) R.O. de 18 de mayo de 1.899, C.L.E., t. 3 (N.S.), p. 418.

en todas nuestras clases sociales el recelo y la desconfianza que tradicionalmente inspiran las oficinas del Estado" (612). Esto era indudablemente cierto, pero también había que considerar la imperfección de la organización de la estadística en España.

En 1.906, la constitución del Centro Nacional de Informaciones comerciales y Archivo de Sociedades Anónimas fue, indudablemente, un paso adelante para el "estudio del mercado interior y de sus relaciones con los nuevos mercados extranjeros" (613).

Este nuevo organismo dependía del Ministerio de Fomento y la formación del Archivo de Sociedades Anónimas quedaba a cargo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (614). Desde 1.913 pasó a depender de la Dirección de Comercio, Industria y Trabajo (615).

El Archivo se formaría con la información recogida por estos organismos, ya que su envío no era obligatorio para las compañías. Su carácter público era destacado, así como su utilidad:

"de tal modo que cualquiera que desee emplear su capital o sus ahorros en valores industriales pueda enterarse detalladamente del

(612) Del R.D. de 2 de noviembre de 1.906, C.L.E., t. 27, (NS), pp. 136.

(613) Ibidem.

(614) Cosa de la que el nuevo Reglamento del R.M. (1.919) les separaría, a pesar de las protestas de la Cámara (v. R.D. de 19 de septiembre de 1.919, C.L.E., t. 76, NS, pp. 280-357 y R.D. de 6 de noviembre, C.L.E., t. 77, pp. 16 y 17).

(615) RR.DD. de 7 y 15 de febrero de 1.913, C.L.E., t. 47, p. 215 y 289-290.

estado, situación y funcionamiento de cada sociedad desde su creación" (616).

Una última misión de la Dirección de Comercio era la de averiguar las compañías que no hubieran cumplido con la obligación de insertar el balance en la Gaceta y publicar en ella la lista de las infractoras, lo que contrasta con la renuncia —en 1.904— al control del cumplimiento de una norma que entonces se consideraba excesiva (publicación del balance mensual).

En 1.922, el Archivo de Sociedades Anónimas pasó a depender del Ministerio de Trabajo (617). A pesar de estas reorganizaciones, sin embargo, el Registro General de Sociedades Anónimas no se estableció de forma efectiva hasta 1.930.

Este Registro ya estaba contemplado en el Reglamento de 1.919 del Registro Mercantil y su necesidad se derivaba del "espectacular desarrollo de las sociedades y del comercio" (618). Esta afirmación contrasta con la situación de 1.885, cuando se consideraba: "siendo... no muy numerosas las sociedades obligadas a inscribir..." (619).

El Reglamento de 1.919 consolidó una práctica que se venía realizando desde hacía una decena de años, cual era la publicación de la estadística anual del R.M. por la Dirección

(616) R.D. de 7 de febrero de 1.913, C.L.E., t. 47 (NS), p. 215.

(617) R.D. de 4 de marzo de 1.922, C.L.E., t. 76 (NS), pp. 66-81.

(618) R.D. de 20 de septiembre de 1.919, C.L.E., t. 66 (NS), p. 280.

(619) R.D. de 21 de diciembre de 1.885, C.L.E., t. 135 (2ª parte), p. 1.757.

General de Registros y del Notariado (620).

En definitiva, podemos afirmar que la publicación como principio proclamado tuvo un gran desarrollo en España desde 1.868, que la organización de la formación de estadísticas por parte del Estado tuvo un tardío y lento desarrollo siendo pobres los medios para su publicación, por lo que los resultados fueron escasos hasta principios del siglo XX y desiguales a partir de entonces.

3.5.3.- Control gubernativo vs. control administrativo.

Entre 1.829 y 1.848 no existía ningún tipo de control sobre el desenvolvimiento de las sociedades y la inscripción en el Tribunal de Comercio no pasaba a ser un trámite que se realizaba con facilidad. Era una inicial etapa de tanteos en la que no había tanto un rechazo programático a la intervención (como en 1.868) cuanto una indefinición sobre este tema. Fue a partir de 1.848 cuando se desarrollaron las dos posturas que hemos denominado —con la nomenclatura de la época estudiada— control gubernativo y control administrativo.

(620) Anuario de la Dirección General de los Registros Civiles, de la Propiedad y del Notariado, a partir de 1.910. Esta Dirección publicó en 1.901 y 1.911 dos volúmenes de Estadísticas del R.M. correspondientes a 1.886-1.909.

a) 1.848-1.868.-- La ley de 28 de enero de 1.848 estableció tanto la autorización gubernativa como la inspección. Se destacó que sería gratuita para las compañías (621) y que no entorpecería su marcha. Por lo demás, se limitó a afirmar que se efectuaría de la forma que el gobierno "conceptúe necesaria" (a. 17).

Esta indeterminación fue criticada en el debate sobre la ley por parte de aquéllos que pretendían incrementar el control gubernamental continuado sobre las compañías (622). La respuesta a estas objeciones por parte del gobierno fue muy distinta:

En el Congreso intervino el entonces ministro de Fomento, Pastor Díaz. Expuso la idea de que la intención del gobierno era la de incrementar los requisitos de la autorización para luego dejar libre el funcionamiento de las compañías (623).

En el Senado fue otra la respuesta. Habían transcurrido ocho meses y la crisis económica se seguía agudizando. El gobierno, además, era otro. Ahora estaba presidido por Narváez. El entonces ministro de Fomento, Bravo Murillo, no hizo ninguna declaración sobre su posición acerca del grado de intervencionismo más conveniente y se limitó a afirmar

(621) cosa que desapareció para los de crédito desde 1.865.

(622) La voz más destacada fue la de Gonzalo Morón en el Congreso, que reclamaba se remitiera un estado semestral al Jefe Político (D.S.C., 18 de abril de 1.847, p. 1.419). En el Senado, Pérez Seoane (D.s.S., 24 de diciembre de 1.847, p. 294).

(623) D.S.C., 20 de abril de 1.847, p. 1.442.

que las reglas para la inspección no debían ser materia de la ley sino del Reglamento (624).

Efectivamente, el Reglamento se dictó bajo su mandato y reguló de forma muy minuciosa el régimen de inspección de las compañías, que debía estar al cargo del Jefe Político como delegado del gobierno. Como ya hemos mencionado, esta autoridad debía garantizar la convocatoriq de la J.G.A., presidir su reunión, comprobar el balance y encargarse de su publicación. Sobre ello, debía vigilar el régimen administrativo de las compañías y el cumplimiento de los estatutos y reglamentos:

"Si el régimen administrativo y directivo de la compañía ofrece las garantías morales que son indispensables para el crédito de la empresa y la seguridad de los intereses de los accionistas y del público" (a. 13). (Subrayado mío).

De esta forma, el Jefe Político no se limitaba a la mera comprobación de datos objetivos sino que debía realizar un juicio calificado en la misma norma de moral. A su vez, esta autoridad debía informar al gobierno acerca de las irregularidades detectadas para que éste, "oído el Consejo Real", decidiera sobre la anulación o suspensión de la compañía. Se aplicaba así un remedio drástico, más efectivo que las multas pero también potencialmente más peligroso, pues el excesivo control, si bien puede resultar tranquilizador para el accionista puede crear un clima de indefensión que desanime a los

(624) D.S.S., 24 de diciembre de 1.847, p. 295.

promotores que necesitan, en estos inicios de la industrialización, un amplio campo de acción.

¿Sirvieron estas normas reglamentarias para reforzar la figura, para garantizar a las sociedades existentes y así animar la inversión o, por el contrario, crearon un sistema de control tan absoluto que hizo a los promotores temerosos? La respuesta, como en la mayoría de las cuestiones planteadas al historiador, sólo se encuentra en el análisis de los resultados, cosa que se realizará en el próximo capítulo. Es, sin embargo, una respuesta incompleta, pues sólo realizando extrapolaciones podemos deducir cuál hubiera sido el comportamiento de promotores y ahorradores si no hubiera existido esta norma.

Así pues, desde 1.848 la inspección sobre sociedades por acciones era función del gobierno, ejercida a través del Ministro de Fomento y de los gobernadores civiles. Pronto el de Madrid tuvo que nombrar delegados especiales para que cumpliera con las tareas que él, por la concentración de las sociedades en esta ciudad y por la acumulación de sus funciones, no podía cumplir. La regulación de la inspección así diseñada ofrecía dificultades, ya que se carecía de un organismo que, de forma específica, ordenara trabajos y resultados.

Tal situación se intentó, en parte, en febrero de 1.854. En un Real Decreto del día 15 se exponía la situación mencionada: los delegados especiales no podían cumplir su cometido de forma eficaz al no tener un "centro adonde dirigir sus observaciones y de donde recibir a cada momento las instrucciones

nes y advertencias necesarias". De ahí que —y sólo para las sociedades madrileñas— se nombrara un delegado especial del Ministerio de Fomento, del que pasaban a depender los interventores especiales, destacados para cada compañía o grupo de ellos (625).

Seis meses más tarde, un decreto firmado por Luján derogó esta disposición, con lo que se volvió a la situación anterior (626). No se abolió la inspección sobre las sociedades sino que ésta recaía de nuevo en los gobernadores civiles. ¿Pretendía así el Bienio progresista dificultar y por tanto rebajar el ejercicio de esta actividad? Es posible, aunque las fuentes consultadas no permiten confirmarlo. Se puede afirmar, sin embargo, que durante este bienio la preocupación del gobierno —en este terreno—eran las sociedades de crédito, dependientes del Ministerio de Hacienda, sobre las que los años posteriores reforzarían la inspección.

La ley de 28 de enero de 1.856 estableció la forma de realizar la inspección de las sociedades de crédito. Se obligaba a las compañías a elaborar un estado de situación trimestral que se debía remitir al gobierno y publicar en la Gaceta de Madrid. De forma paralela, se destacaba la facultad del gobierno de "hacer examinar siempre y cuando lo estime conveniente las operaciones y contabilidad de las sociedades, y comprobar el estado de sus cajas" así como de pedir

(625) C.L.E., t. 61, pp. 243-246.

(626) R.D. de 15 de agosto de 1.854, C.L.E., t. 62, p. 247.

en cualquier momento los "estados de caja, cartera y resúmenes de operaciones" (a. 8). Es decir, que, a la vez que se resalta la facultad del gobierno para inspeccionar las sociedades, se arbitra un sistema de publicidad periódica de mayores dimensiones (frecuencia y difusión) que el establecido en 1.848 para el resto de las sociedades.

Tras el paréntesis del Bienio progresista se volvió a reorganizar la inspección de sociedades, tanto para las dependientes de Fomento (1.857) como para las de crédito (1.865). Hay que resaltar que ambas medidas se tomaron en un momento de crisis económica, de mayor o menor envergadura.

El Real Decreto de 12 de diciembre de 1.857 (627) fue firmado por Salaverría como ministro de Fomento de un gabinete presidido por Armero, que había sido el que presentó el primer proyecto de ley (1.846) que tendía a controlar la creación de las sociedades por acciones (pp. 487-488). Esta nueva norma articulaba la inspección de sociedades en unos términos similares a los del 48. La renovación de los principios se puede explicar por la necesidad de reafirmar la continuidad de los mismos tras el bienio y en un momento de crisis. Junto a ello, se articulaba una nueva organización de la inspección que tendía a reforzar su carácter técnico, en línea con lo esbozado en febrero de 1.854.

Así se volvió a destacar que el ejercicio de la inspección correspondía a los gobernadores civiles (cosa que nunca

(627) C.L.E., t. 74, pp. 199-204.

se había puesto en cuestión) y se creaba un cuerpo de "delegados especiales del gobierno" para ejercerla (a. 1). Tales delegados estaban sometidos a la autoridad provincial pero se comunicarían directamente con el gobierno o con la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio (a. 2). Al tiempo que se explicitaba cuál era el organismo que debía centralizar la labor de los inspectores, se detallaban las atribuciones de éstos con más precisión que en 1.848 y prescindiendo de la carga moral presente en la norma de aquel año. Su labor quedaba así establecida:

En la autorización, comprobar si existe en caja el primer dividendo pasivo, reunir la J.G.A. y dar cuenta del Real Decreto o de la ley de autorización, cuidar de que los administradores dejen depositadas antes de quince días las acciones que les dan derecho al cargo, de que en este plazo se remitan al Tribunal de Comercio copias de la autorización, de los estatutos y de los reglamentos y de que se comiencen las operaciones en el plazo previsto (a. 4).

En el funcionamiento, comprobar que la contabilidad sea llevada en la forma dispuesta por el Código de Comercio (a. 5), rubricar y anotar los libros (Diario, Mayor, de Inventarios, de transferencia de acciones, de actas de las Juntas) (a. 6), asistir a las Juntas generales y a las de dirección como presidentes honoríficos sin voz ni voto (a. 7), comprobar la veracidad de los "estados de situación" trimestrales (a. 8) (628), de las Memorias y de los balances generales

(628) Los estados de situación trimestrales se incorporaron a la generalidad de las

(a. 14) antes de remitirlos al gobierno (a. 12) y formar, con toda esta documentación, un archivo de cada compañía (a. 19).

De forma especial, en las compañías de obras públicas de bían cuidar del uso de las subvenciones (a. 15) cosa que se realizaría, como hasta entonces, por delegados adscritos a cada una de ellas.

Dos semanas más tarde se reguló de una forma similar la inspección de las sociedades de seguros mutuos, cuya aprobación dependía del ministerio de la Gobernación (629). Esta vía de autorización se utilizó para constituir verdaderas so ciedades financieras. Este decreto, en un momento de crisis, reforzó la inspección de las sociedades mercantiles que dependían de Gobernación dado que "a los defectos de sus bases constitutivas se ha unido una tolerancia mal entendida por parte de los delegados del gobierno, o una ignorancia censurable de los deberes que su cargo les imponía".

En 1.865, la crisis económica llevó a reforzar la inspec ción de las sociedades de crédito, que eran las grandes protagonistas de la asociación capitalista desde hacía una dece na de años. La ley de Presupuestos de 1.865/66 incluyó la si guiente norma:

"a. 13. El gobierno ejercerá por medio de Inspectores o delegados, y en la forma que determine un reglamento, la vigilancia que le corresponde en las sociedades de crédito establecidas o que se es-

compañías en esta fecha. Para las de crédito existían desde la ley de 28 de enero de 1.856

(629) R.D. de 28 de diciembre de 1.857, C.L.E., t. 74, pp. 296-298.

tablezcan con sujeción a la ley de 28 de enero de 1.856" (630).

Para sufragar esta inspección se autorizó la imposición de un gravamen anual a las sociedades, que oscilaba entre 400 y 2.000 escudos para cada una de ellas, lo que representaba alrededor de un 1% sobre el capital nominal. De esta forma, eran las propias sociedades las que se hacían cargo de los costes de la inspección, aunque no remuneraban a individuos determinados sino al cuerpo, lo que pretendía evitar la corrupción.

El reglamento anunciado se promulgó quince días más tarde y fue firmado por Alonso Martínez como ministro de Hacienda de un gabinete O'Donnell (631). En él se resaltaba la insuficiente inspección realizada por los gobernadores civiles sobre las sociedades de crédito y los abusos de éstas "debidos en gran parte a la negligencia de los accionistas, que no velan como deben por sus propios intereses".

A partir de este momento comienza a resaltarse el protagonismo de los accionistas en la vigilancia de la marcha de las sociedades. Es cierto que la frase anterior corresponde a un texto firmado por Alonso Martínez, cuyas ideas liberales en lo económico hemos tenido ocasión de resaltar al realizar el análisis de la gestación del Código de Comercio. Sobre ello, creo que no es casualidad que se busquen nuevos

(630) Ley de 15 de julio de 1.865, C.L.E., t. 94, pp. 55 y ss. Esta norma se promulgó a pesar de las protestas de las sociedades, que se oponían a sufragar su propia inspección (D.S.C., 6 y 25 de abril y 18 de mayo de 1.865).

(631) R.D. de 30 de julio de 1.865, C.L.E., t. 94, pp. 232-240.

culpables para explicar las razones de las quiebras de las compañías en un momento socio-económico particularmente difícil.

Este decreto, a la vez que considera conveniente la organización de la inspección periódica de las sociedades de crédito, preludia la nueva etapa. En él se distingue entre la responsabilidad de los accionistas, que deben velar por sus intereses y la del gobierno, que debe cuidar de que las compañías, en sus operaciones, no traspasen el círculo de sus facultades.

El articulado del decreto disponía que al inspección fuera ejercida por el gobernador provincial, los inspectores nombrados al efecto o los delegados especiales (a. 1), que asistirían a las J.G.A., cursarían visitas trimestrales, revisarían los balances y vigilarían si la sociedad se ajustaba a sus fines y pagaba sus impuestos (aa. 9 y 16). Por su parte, era obligación de las sociedades presentar a la inspección un estado mensual, otro trimestral y un balance anual (a. 13).

En visperas de la revolución de 1.868, un nuevo Real Decreto reguló la inspección de sociedades de crédito como dependiente de la Dirección General del Tesoro Público y reduciendo la plantilla. Su artículo 5 afirmaba textualmente:

"Queda derogado el reglamento de sociedades anónimas de 30 de septiembre de 1.865 y demás disposiciones vigentes, en cuanto se opongan al presente decreto" (632).

(632) R.D. de 23 de agosto de 1.868, C.L.E., t. 100, pp. 172-173.

La norma aludida se refería sólo a las sociedades de crédito y no a la totalidad de las anónimas. No es ésta la primera vez, ni será la última, que en los textos legales o en las intervenciones parlamentarias se emplea esta sinécdoque. Las sociedades de crédito no eran las únicas pero eran las más importantes y las que merecían una preocupación especial por parte del gobierno.

b) 1.868-1.923.— El decreto de 28 de octubre de 1.868, que derogó las leyes de sociedades de 1.848 y 1.856, criticó también la inspección llevada a cabo en los veinte años anteriores:

"Cerca de cada sociedad un agente nombrado por el gobierno representa al Estado, siempre vigilante y celoso, y sin embargo, esta vigilancia y este celo son de todo punto estériles; ni evitan el mal, ni procuran el bien, y en cambio entorpecen y dificultan lo que por naturaleza debe ser rápido, fácil y sencillo.

Hay, en efecto, algo superior a la voluntad de los hombres, y es ley demostrada por veinte años de experiencias tristísimas, que por mucha que sea la honradez e inteligencia de los Delegados, nunca impide lo que el gobierno con esta vigilancia constantes quisiera, aunque inútilmente, impedir" (633).

Los demócratas consideran la inspección inútil, pues es incapaz de impedir las crisis económicas periódicas cuya génesis la doctrina todavía se mostraba incapaz de explicar. Los gastos dedicados a la inspección son, por tanto, despil-

(633) D. de 28 de octubre de 1.868, C.L.E., t. 100, pp. 516-520. La cita en p.518. Subrayado mío.

farro. Por ello, se suprimieron todos los delegados del gobierno cerca de las sociedades, incluso los de las de ferrocarriles (a. 4). El 68 critica la inspección en sí misma, sin abordar el tema de la presunta incompetencia técnica de los encargados de realizarla o las corrupciones del sistema. Ambas cosas serán tenidas en cuenta en la Información Parlamentaria abierta en 1.869 y en el proyecto de Calbetón de 1.910 (634).

Sobre la inutilidad de la inspección para lograr su fin último (evitar el fraude y la crisis) se derivan de ella efectos negativos, cuales son impedir el libre desenvolvimiento de las relaciones económicas, anular el espíritu asociativo, dificultar la constitución de compañías, adormecer a los accionistas en una "mortal confianza", acostumar a los ciudadanos a vivir en perpetua tutela,

"sin que al menos la protección administrativa les libre de despertar un día, o inícuamente despojados, o arruinados en buena ley y con todos los requisitos reglamentarios, por causa de malos negocios o por una de esas crisis a las que ni los gobiernos ni los particulares pueden oponerse jamás" (635).

Dos meses después, sin embargo, se promulgan dos decretos. El primero, en 10 de diciembre, de Hacienda (Figuerola), para regular la inspección de las sociedades de crédito. El segundo, en 12 del mismo mes, de Fomento (Ruiz Zorrilla), pa

(634) v. pp. 786-788.

(635) D. de 28 de octubre de 1.868, C.L.E., t. 100, p. 518.

ra el resto de las sociedades.

El Decreto de Figuerola (636) constata la existencia del crítico estado de Bancos y sociedades de crédito, lo que —a su juicio— demuestra la inutilidad de la inspección y del gasto impuesto a las compañías, que cifra en 75.000 escudos al año más los sueldos del gobernador del Banco de España y del comisario regio del de Barcelona. De ahí que se proponga la reforma de la inspección, en armonía con la del régimen general de sociedades, "inspirándose en los principios liberales que siempre ha profesado y cuya aplicación en la cuestión del crédito, como en todas las demás que se relacionan con la industria y con el comercio, ha de contribuir poderosamente a la regeneración económica de nuestro país".

Este Decreto suprimió los comisarios de los Bancos, aunque no los gobernadores de los Bancos de España y Barcelona (a. 1). Derogó el sistema de inspección instaurado para las sociedades de crédito en 1.865 y se consideró que así se "obligará a los interesados en ellas a ejercer por sí mismos una vigencia eficaz, en vez de la ilusoria confiada al gobierno". No obstante, éste conservaba la facultad de ordenar visitas de inspección a Bancos y sociedades cuando lo estimara oportuno y permanecía la obligación de que las compañías publicaran un balance mensual en la Gaceta de Madrid y de remitir una copia al Ministerio de Hacienda (a. 5).

El Decreto de Fomento de 12 de diciembre se limitó a or-

denar que fuera mantenido el cuerpo de delagados especiales, pero con menor plantilla, para atender a las sociedades que prefirieran seguir acogidas al régimen del 48 (637).

La ley de 19 de octubre de 1.869, que declaró libre la constitución de sociedades, en un artículo que pasó sin debate, fijó definitivamente la norma:

"Las sociedades que se constituyan desde la publicación de esta ley no estarán sujetas a inspección y vigilancia del gobierno, y las cuestiones que se susciten sobre su índole, derechos y deberes de los socios, cumplimiento de estatutos y demás, serán de la competencia exclusiva de los Tribunales" (638).

Estos tribunales eran los ordinarios, dado que la revolución había suprimido la especial jurisdicción mercantil. El a. 11 de la misma ley contemplaba el derecho de los accionistas (de forma individual o colectiva) a "reclamar ante los tribunales ordinarios el cumplimiento de los estatutos y reglamentos...", así como a exigir el cumplimiento de los acuerdos de la J.G.A., la exactitud de los balances etc. Quedó establecido el derecho pero la falta de indicación concreta sobre el número de accionistas necesarios para solicitar una intervención judicial o administrativa fue materia de debate en las Cortes en los inicios del siglo XX.

La abolición de la inspección sobre las sociedades se combina con el incremento de las exigencias de publicidad so

(637) C.L.E., t. 100, p. 912.

(638) C.L.E., t. 102, p. 653 (a. 10).

bre su marcha, tal y como vimos en el apartado anterior.

Así quedan configuradas las bases de esta etapa —1.868 a 1.923— que fueron matizadas para las sociedades de obras públicas (R.D. de 19 de enero de 1.872), las de seguros (ley de 14 de mayo de 1.908) o las navieras durante la Primera Guerra Mundial. Eran sectores que, por sus características o por determinada coyuntura, reclamaban una particular atención del Estado. El esquema no fue cambiado a lo largo del período a pesar de la tentativa de 1.910. Antes de considerarla, digamos algunas palabras acerca de un último juicio del Sexenio Revolucionario sobre la inspección de sociedades.

LA INFORMACIÓN PARLAMENTARIA.

Dos factores confluyen en la apertura de una información parlamentaria sobre sociedades anónimas en 1.870: el cambio político y la crisis económica iniciada en la segunda mitad de la década anterior. La proposición de ley reclamaba el nombramiento de una comisión de catorce diputados para informar acerca de las sociedades de seguros, crédito y ferrocarriles. Precisamente aquéllas que habían sido más afectadas por la crisis (639). Los solicitantes justificaron el recurso a este mecanismo, que era un "medio al cual se acude en todos países regidos por instituciones liberales y muy principalmente Inglaterra, donde son frecuentísimas", así como la utilidad del mismo, ya que era la forma de probar que "la inter

(639) D.S.C.C., 23 de marzo de 1.870, p. 6.852. Firmada por G. Rodríguez, Francisco de P. Villalobos, S. Ruíz Gómez, A. López Betas, J. Gil Bergés, R. Prieto y R. Rodríguez Real.

vención gubernamental es nefasta" a una "opinión" que acepta mejor el liberalismo político que el económico. De ahí que se considerara que la información era el medio más adecuado para renovar la confianza en las instituciones mercantiles (640).

No hubo oposición a esta propuesta y se formó una comisión de 21 miembros para investigar los tres grupos de sociedades mencionados. Se programó la realización de una información de los trabajos a la Cámara con una periodicidad semanal (641).

La Comisión anunció que sus cuatro primeros objetivos serían el Banco peninsular hipotecario, la Sociedad del Ferrocarril de Almansa, el Crédito Comercial y La Tutelar (sociedad de seguros creada al amparo del ministerio de la Gobernación).

Transcurrió año y medio hasta que se presentó el dictamen sobre el Banco peninsular, que fue el único que se finalizaría a pesar de las continuas renovaciones de la Comisión durante el sexenio (642).

La información parlamentaria, iniciada con grandilocuentes exposiciones programáticas no cumplió sus objetivos y, por ello, ofreció argumentos a los que sostenían que no existían

(640) D.S.C.C., 25 de abril de 1.870, p. 7.407.

(641) Ibidem, p. 7.443.

(642) El Dictamen, en D.S.C., 30 de octubre de 1.871, apéndice 1º al núm. 131. No se llegó a debatir. Las renovaciones de la comisión en D.S.C., 11 de mayo de 1.872 (p.271), 1 de octubre (pp. 245-246) y 15 de febrero de 1.873 (p. 79).

los escándalos anunciados. La deseada confianza en la sociedad anónima fue restablecida a través de la propia evolución de la coyuntura económica. En ella, la existencia de la Comisión fue un mero acontecimiento sin importancia.

LA CONVENIENCIA DE LA INSPECCION.

A comienzos del siglo XX se produjo un debate en las Cortes españolas acerca de la conveniencia de arbitrar un método para realizar la inspección de las sociedades anónimas. Los que sostenían tal propuesta, pretendían que la inspección fuera realizada por expertos y que, aparte de una práctica de inspección periódica, se regulara la posibilidad de que los propios accionistas pudieran demandarla.

La cuestión fue planteada en 1.903 en el Congreso, en la ya citada proposición de Pí y Arsuaga(643). No se llegó a debatir, pero no cabe duda de que respondía a una preocupación extendida, que ya había sido resuelta en otros países. De ahí que la conveniencia de resucitar un mecanismo de inspección fuera considerado por los gobiernos y mereciera un debate parlamentario. Ni este tema ni el de las incompatibilidades de los cargos públicos y los societarios se llegó a resolver en la etapa considerada. Ambas preocupaciones son, sin embargo, una muestra de la tendencia a la revisión crítica del modelo de capitalismo liberal, motivada por los problemas generados en el desarrollo económico (644).

(643) D.S.C., 3 de diciembre de 1.903, apéndice 1 al núm. 90.

(644) Sobre las incompatibilidades, por ejemplo, D.S.C., 13 de julio de 1.886, p. 640, D.S.C., 9 de marzo de 1.892, pp. 4.269-72, D.S.C., 23 de noviembre de 1.900, apéndice

En 1.909, Alcalá Zamora formuló una pregunta en el Congreso destinada a saber si el gobierno pensaba implantar un régimen de inspección por Decreto o si, por el contrario, pensaba acudir al Parlamento. Sánchez Guerra, en su respuesta manifestó su intención de seguir esta segunda vía. para Alcalá Zamora, todos los países habían pasado por tres etapas en este terreno. La primera o antigua era la de restricción completa, que en España se desarrolló entre 1.848 y 1.868; la segunda, de libertad absoluta. La tercera, de síntesis o composición de los dos criterios, que es la que proponían fuera implantada en España. En ella, la inspección se realiza a través de los Tribunales y no del gobierno (645).

La respuesta a este problema fue presentada en el proyecto de ley de Calbetón de octubre de 1.910 (646). En su preámbulo reseñaba cómo la legislación, en todos los países, era hacia:

"... restringir, sin amenguar su libertad, las sociedades por acciones, en evitación del gran número de engaños que han ocurrido con el anterior régimen de libertad absoluta"

Efectivamente, éste era el problema: ¿Cómo evitar los fraudes y la crisis económica? La rígida inspección de 1.848 no lo había logrado. El régimen de libertad tampoco. ¿Es que el mercado libre no

160 al núm. 4, D.S.C., 30 de junio de 1.903, pp. 642-643, o el proyecto de ley de Calbetón, D.S.S. 27 de enero de 1.909, apéndice 30 al núm. 71.

(645) D.S.C., 6 de febrero de 1.909, pp. 2.365 y 2.366.

(646) D.S.S., 22 de octubre de 1.910, apéndice al núm. 49.

era capaz de autoregularse tanto en un problema como en otro? No se planteó así el debate. A nivel doctrinal todavía no había una respuesta válida en el seno de la escuela clásica. El fantasma de la crisis estaba, sin embargo, detrás de esta discusión y del preámbulo del proyecto se desprende la intención de capitalizar el recuerdo de la crisis para realizar esta reforma legislativa. La discusión versó meramente en torno a los medios —como realizar una inspección compatible con la libertad mercantil— y sobre un argumento de autoridad —la legislación internacional—.

Se citaba la ley belga de 1.883, la alemana de 1.884, la francesa de 1.893, la inglesa de 1.900 y la rusa de 1.904. En todos los casos se trataba de la articulación de un mecanismo que permitiera a los accionistas solicitar la intervención judicial de sus empresas a partir de un porcentaje que oscilaba entre un 5% (en Rusia, para los Bancos) y un 20% (Bélgica, Inglaterra).

Como argumentó Calbetón, "incluso en Inglaterra el sistema del 'self government' no es absoluto para las sociedades anónimas". En definitiva, defendía la idea de la necesidad de la intervención del Estado:

"es un deber de los poderes públicos vigilar su funcionamiento, regular su constitución, investigar su situación, y evitar, en fin, el engaño y la estafa a que con tanta facilidad pueden prestarse".

El proyecto de Calbetón pretendía crear un "Registro e inspección general de Bancos y Sociedades Anónimas" depen-

diente de la Dirección de Comercio e Industria. Este organismo sería el encargado de realizar una inspección anual que sería obligatoria para las compañías y a cargo del Tesoro y unas voluntarias que se harían a solicitud del Consejo de Administración o de un número de accionistas que representaban la décima parte del capital social (a. 6).

A este efecto se crearía un Cuerpo de Contadores (a. 6) cuyas atribuciones serían inspeccionar las sociedades y redactar una periódica memoria de resultados, confeccionar el balance anual si la compañía no se ajustara al modelo prescrito, elaborar un historial claro y conciso de cada sociedad de la región que se le asignara, formar el Anuario de Sociedades que debería publicar el Ministerio de Fomento, asistir a la J.G.A. cuando lo estimaran oportuno o cuando lo solicitaran la décima parte de los accionistas u obligacionistas y realizar cualquier servicio complementario que les atribuya el reglamento de la ley (aa. 8 y 12).

El proyecto se dictaminó pronto (647) y en él se reducían las atribuciones del gobierno al suprimir la inspección anual y se aumentaba el porcentaje de accionistas u obligacionistas que podían solicitar la intervención a un 15% (a. 6) (648) y siempre que acreditaran que poseían los títulos desde un año antes de realizar la solicitud (a. 10).

(647) D.S.S., 6 de diciembre de 1.910, apéndice 110 al núm.83. Firmado por el Marqués de Barzanallana, Caledonio Rodrigáñez, Díaz Cordovés, Solsona, Díaz Moreu Pelegrín y Alvira.

(648) A pesar de que ciertos núcleos mercantiles habían solicitado se redujera a un 50%. Fue Semprún el que logró que la comisión aceptase un porcentaje mayor para evitar que un pequeño núcleo de accionistas impidiera la marcha de la compañía (D.S.S., 15 de diciembre de 1.910, p. 1.475).

En definitiva, se mantuvo la idea de la inspección pero únicamente como iniciativa de una fracción destacada de acreedores y no del gobierno. También se suavizó este proyecto extremadamente restrictivo al rebajar las multas por reincidencia, que pasaron de 50.000 a 15.000 pts (a. 10).

A pesar de ello, como consideraron Semprún y Díaz Cobeña, este proyecto pretendía volver a épocas restrictivas. En primero consideró que una ley de acuerdo con el proyecto que se presentaba, aumentaba la crisis al desprestigiar la sociedad cuando:

"el ahorro en nuestro país no va, por desgracia, a las sociedades anónimas, ni a las colectivas. El poco ahorro público que hay en nuestro país va a los valores del Estado" (649).

En definitiva, se sostenía que "holgaba esta ley, que no viene sino a poner trabas a las sociedades de crédito" (una vez más, por anónimas) (650).

También intervino contra la totalidad Sanz y Escartín que criticó la excesiva intervención que se quería imponer frente a la legislación de otros países, que se limitaba a la protección de los derechos de los accionistas dándoles la posibilidad de reclamar una intervención exclusivamente judicial (651).

(649) D.S.S., 15 de diciembre de 1.910, p. 1.675.

(650) D.S.S., 17 de diciembre de 1.910, p. 1.725.

(651) D.S.S., 15 de diciembre de 1.910, p. 1.677.

La oposición a la ley se manifestó, asimismo, en la presentación de enmiendas a la casi totalidad de los artículos, destacando la que solicita reducir la inspección sólo al momento en que se hubiera suspendido el pago de los intereses o la publicación de balances por dos años consecutivos (652).

La defensa del dictamen se basó en dos puntos fundamentales. En primer lugar, en que España no podía permanecer indiferente al "movimiento intervencionista" europeo, que ponía fin a los "desastres" de la inhibición del Estado sin caer por ello en los excesos de la intervención gubernativa. De ahí que se reclame la administrativa y no meramente la judicial, que sólo se produce cuando ya hay una situación con frecuencia irreversible (653). En segundo lugar, en la estimación de que había que proteger a los accionistas, cuya actividad es escasa por ignorancia o abandono. De ahí que hubiera que facilitar los medios técnicos para que pudieran ejercer sus derechos (654).

A pesar de ello, la presentación de enmiendas y el debate a la totalidad reveló la existencia de una importante oposición al proyecto y, en general a la inspección. La regulación de ésta era, sin embargo, inevitable en el marco de un capitalismo desarrollado. De ahí que el debate de 1.910 no hiciera sino retrasar unas medidas que se tomarían más tarde. La época liberal estaba llegando a su fin.

(652) Enmienda firmada por G. Rolland, D.S.S., 10 de diciembre de 1.910, apéndice 2º al núm. 86.

(653) Marqués de Barzallana, D.S.S., 15 de diciembre de 1.910, p. 1.677.

(654) Alvira, D.S.S., 17 de febrero de 1.911, p. 1.732.

CAPITULO 4

LA CREACION DE SOCIEDADES (1.840-1.923)4.1.- Las fuentes utilizadas.

El ritmo de creación de sociedades en España y de emisión de acciones y obligaciones no puede ser establecido de forma completa hasta 1.886, con la creación del Registro Mercantil. Desde 1.829, sin embargo, existía la obligación de inscribir las nuevas entidades en los Registros Públicos de Comercio constituidos en cada provincia. Nunca se emprendió la tarea de centralizar esta información, que se ha perdido en gran parte.

La información más completa de la evolución de la figura de la sociedad por acciones en España antes de 1.848 nos la proporciona el Diccionario geográfico y estadístico de Pascual Madoz, que en la parte dedicada a Madrid incluye una descripción de un conjunto de veinticuatro compañías y unos cuadros que establecen el ritmo de creación de las sociedades por acciones hasta 1.847 (655).

Estos datos permiten obtener una visión representativa si bien no completa de la asociación de capitales en España en la cuarta década del siglo XIX, que sirve como una primera aproximación a un estudio que deberá completarse en el futuro sobre la evolución de la inversión en España en la transición del Antiguo Régimen al liberalismo y, en definitiva, al sistema capitalista.

Desgraciadamente, el volumen que corresponde a Barcelona

(655) Pascual Madoz, Diccionario..., t. X, pp. 948-970

dentro del Diccionario de Madoz fue publicado en 1.846, tres años antes que el que incluye información sobre Madrid y, si bien contiene una muy interesante consideración sobre su industria, no trata el aspecto específico que aquí interesa. Lo mismo cabe decir de los tomos correspondientes a Bilbao o Cádiz.

Hasta 1.848, pues, no existe una estadística oficial sobre las sociedades por acciones y la información al respecto debe recabarse de publicaciones aisladas. La más destacada es, sin duda, la citada. Junto a ella, un vaciado sistemático de las escasas y esporádicas revistas especializadas de la época puede completar y matizar el cuadro aquí expuesto. Entre las dedicadas a la información general, con noticias económicas dispersas, quiero destacar la que puede considerarse como precedente de las que surgirían con profusión en la segunda mitad del siglo: el Boletín de empresas, fundado en 1.844 (656).

La dispersión y escasez de información sobre las sociedades por acciones desaparece entre 1.848 y 1.868 en virtud de dos circunstancias:

1) La ley de 27 de enero de 1.848, que obligó a las sociedades existentes a revalidar su existencia por un Real Decreto (o una ley para Bancos y ferrocarriles). Las de nueva

(656) Boletín de empresas, dedicados al mayor y más rápido acrecentamiento de la riqueza pública. De carácter semanal, su primer número apareció el 15 de noviembre de 1.844. Se publicó puntualmente durante, al menos, un año.

creación debían sufrir, asimismo, esta tramitación. En consecuencia, la Colección Legislativa de España, entre 1.848 y 1.868 contiene una completa información sobre las sociedades por acciones constituidas en este período. No sólo la autorización, sino también la modificación de capitales, de estatutos y la disolución se reflejan en esta colección y en la Gaceta de Madrid.

2) La publicación de cinco volúmenes del Anuario Estadístico de España (1.858, 1.859-60, 1.861-62, 1.862-65 y 1.866-67). El régimen de control gubernativo implantado en 1.848 conllevaba la centralización de puntual información acerca de estas sociedades en diferentes ministerios: Hacienda (Bancos y sociedades de crédito) y Fomento (resto) (657).

Gracias a esta coyuntura, la información estadística sobre sociedades es, en estos años, más completa que entre 1.868 y 1.886.

Con la excepción del Anuario correspondiente a 1.859-1.860, que sólo reseña los Bancos y sociedades autorizados en 1.859, el resto de los volúmenes ofrecen la siguiente información:

—Bancos y sociedades de crédito existentes en España (1.858 a 1.864 y 1.867), domicilio, fecha de su autorización, capital nominal y desembolsado.

—Sociedades industriales existentes en España (en 1.859, 1.861, 1.864 y 1.867), domicilio, fecha de su autorización y

(657) Las sociedades de seguros mutuos dependían de Gobernación. No interesan a estas páginas salvo en aquellas ocasiones que utilizaron el nombre como tapadera para realizar otro tipo de especulación, ya que su autorización fue, hasta 1.857, notablemente más sencilla (v. 3.4).

objeto social.

—Sociedades de seguros y afianzamientos, con el mismo tipo de información que las anteriores.

—Sociedades concesionarias de obras públicas existentes en España (en 1.859, 1.861, 1.864, 1.866 y 1.867), domicilio, fecha de autorización, capital social, obligaciones y objeto social. Los estados correspondientes a 1.861 incluyen también el presupuesto del coste de las obras y material de explotación y las subvenciones directas concedidas. Los de 1.864, 66 y 67 añade información sobre el capital desembolsado en acciones y obligaciones, el tipo de interés de éstas, el tipo medio de emisión, su quebranto, valor líquido entrado en caja y las amortizadas.

Se observa que para las sociedades industriales, de seguros y para los ferrocarriles hasta 1.864 no se reseña el capital desembolsado que consta, sin embargo, para las dependientes del Ministerio de Hacienda.

La integración de ambas fuentes —Colección Legislativa y Anuarios— nos ofrece la secuencia completa del ritmo de la asociación de capitales en España entre 1.848 y 1.868 y su distribución geográfica y sectorial (658). La información de los balances anuales no goza el mismo nivel de publicación que, en estos años, permanece para la mayoría de las sociedades en la esfera provincial. De ahí que la Gace-

(658) Una fuente complementaria la ofrece el Boletín oficial del Ministerio de Fomento, publicado desde 1.852, que contiene la legislación sobre compañías así como unos valiosos resúmenes semanales de las Cotizaciones de Bolsa.

ta de Madrid sólo ofrezca información puntual de Bancos y sociedades de crédito y que sea en los Boletines oficiales de cada provincia donde se encuentre la serie completa (v. cap. 3.4.).

Para esta época hay que reseñar, además, la existencia de revistas especializadas que, aparte artículos técnicos y doctrinales de interés contienen una información variada y no sistemática sobre compañías. El estudio de los diferentes sectores económicos debe considerarlas, especialmente en este momento, para el que es muy difícil la obtención de Memorias y otras informaciones procedentes de las propias compañías, exceptuados los Bancos, las sociedades de crédito, los ferrocarriles y algunas de las más importantes sociedades industriales. Como ejemplo, reseñamos dos de las publicaciones más interesantes, sobre todo debido a su continuidad.

En primer lugar, la Gaceta de los Caminos de Hierro, industria, minas, gas, seguros y sociedades de crédito. Publicación semanal, iniciada en 1.855. Sus 16 páginas contienen artículos de opinión así como resúmenes de Memorias y Estatutos de sociedades y unas interesantes crónicas de los debates de las Cortes que se refieren a los temas de economía en general e industria en particular cuya consideración debe completar el análisis realizado en estas mismas páginas acerca de las opiniones manifestadas en las Cámaras (659).

(659) Esta revista se ampliará a otros sectores desde 1.875 (canales, telégrafos, gas y navegación). Desde 1.903, sin embargo, se reducirá a lo que siempre fue su objeto principal: el ferrocarril.

En segundo término, cabe citar la Revista Minera que, iniciada en 1.850, puede considerarse el primer intento sistemático de centralización de la información del sector económico al que se refiere el título.

En el aspecto que nos ocupa, el período 1.868-1.923 ofrece características diversas, que permiten distinguir tres etapas: 1.868-1.885, 1.886-1.915 y 1.916-1.923.

El Decreto de 1.868 que declaraba libre la creación de sociedades, supuso la desaparición de la información que acerca de las mismas centralizaron en los dos décadas anteriores los Ministerios de Hacienda y Fomento. Se volvió al régimen del Código de Comercio de 1.829 y a la dispersión y ausencia de centralización de la información sobre constitución de sociedades. Un solo elemento cambió. Tal y como destacábamos en el capítulo anterior, desde este momento existe la obligación de publicar en la Gaceta de Madrid el Balance anual de las compañías anónimas.

La publicación del Anuario Estadístico fue interrumpida en 1.870, con el volumen correspondiente a 1.866-67. De ahí que la información sobre la asociación de capitales deba ser reconstruida a partir de las escasas Memorias publicadas por las compañías y de los datos dispersos incluidos en las revistas especializadas que ya comienzan a ser más frecuentes. Los mejores datos que poseemos hasta el momento, indican que entre 1.875 y 1.885 aparecieron en España al menos treinta publicaciones periódicas de interés para el estudio de la

Historia económica de España (660). Hay que destacar, sin embargo, que muy pocas adquieren un grado de generalidad y de permanencia suficientes como para ofrecer otra cosa que lo que las revistas mencionadas para el período anterior —y que continúan en éste— ya reseñaban: Bancos, ferrocarriles, sociedades de crédito y alguna destacada sociedad industrial.

El panorama se enriquece en la segunda etapa considerada: 1.886-1.915. Con la entrada en vigor del Código de Comercio se creó el Registro Mercantil, cuyas características han sido reseñadas en el capítulo anterior. Lo que ahora interesa resaltar es la publicación de la Estadística del Registro Mercantil para todos los años considerados, a raíz de la regulación de su formación en 1.899 (661). En 1.901 se publicó la referente a los años 1.886-1.898 y en 1.911 la que resumía los datos de 1.899 a 1.910 (662). La utilidad de la misma ha sido puesta de relieve por Jiménez Araya (663) y en estas páginas ha servido para analizar la evolución de la sociedad anó

(660) Victoria Ma de Diego Vallejo y Jesús Timoteo Alvarez, La prensa económica y financiera, 1.875-1.940, Instituto de Estudios Fiscales, monografía núm. 35, Madrid, 1.985.

(661) R.O. de 18 de mayo de 1.899. Sobre ella, v. cap. 3.4.

(662) Estadística del Registro Mercantil formada por el negociado 4º de la Dirección General de los Registros y del Notariado con arreglo a los datos suministrados por los registradores de la propiedad encargados interinamente de los Registros Mercantiles, Madrid, 1.901. Estadística del Registro Mercantil..., Madrid, 1.911.

(663) Tomás Jiménez Araya, "Formación de capital y fluctuaciones económicas. Materiales para el estudio de un indicador: creación de sociedades mercantiles en España entre 1.886 y 1.970". Hacienda Pública Española, 1.974, pp. 137-185.

nima entre 1.886 y 1.923. La reproducción de los datos de constitución y capital por provincias permite calibrar la importancia relativa de colectivas, comanditarias y anónimas, tanto en número como en capital. Su desglose por provincias, sirve para considerar la localización de la inversión y la importancia de las diversas zonas aunque en ocasiones, como en el caso de Madrid, no refleja la existencia en la provincia de las plantas industriales de las sociedades allí censadas. por último hay que reseñar la práctica —desde el origen de la publicación— de consignar de forma separada la constitución de Bancos, sociedades de obras públicas, minas, almacenes generales de depósitos y seguros.

La publicación de la Estadística del Registro Mercantil adquirió periodicidad anual desde 1.911, con su inclusión en el Anuario de la Dirección General de los Registros civiles y de la Propiedad y del Notariado. En el volumen aparecido en la fecha mencionada se incluyen los datos del año anterior y esta práctica permanece durante todo el período considerado.

Es indudable que un estudio pormenorizado de la formación del capital en España debe abordar la tarea del análisis de cada uno de los Registros, labor que ya ha sido emprendida, según nuestras noticias, y que sólo el trabajo en equipo utilizando los medios que la técnica actual pone a nuestra disposición, podrá culminar con éxito.

Las mismas consideraciones sobre las publicaciones periódicas realizadas para la etapa anterior pueden aplicarse a

ésta. El número de publicaciones aumentó (145 nuevas revistas) y aparecieron algunas muy interesantes, como son El Economista (1.886), España Económica y Financiera (1.893), Revista de Economía y Hacienda (1.898), El Financiero (1.901), La Actualidad Financiera (1.902) Boletín de la Liga de Sociedades Anónimas de España (1.902), La Semana Financiera (1.913). Además, este período conoce la aparición de buena parte de los Boletines de las Cámaras de Comercio cuya calidad —bien es cierto— es muy desigual.

La escasez de estadísticas para los años mencionados hace que se miren con especial interés las publicaciones de forma esporádica en obras generales (como la Reseña geográfica y Estadística de 1.885) y aquéllas que con un propósito fiscal proporcionan alguna información acerca del número y nombre de las sociedades, localización geográfica y cuota de contribución. En este caso se encuentra la Estadística administrativa de la contribución industrial y de comercio para el año 1.893-94. Los volúmenes posteriores prescinden de la referencia a las compañías y se limitan a la ordenación de los datos de la contribución, por provincias e industrias.

La última etapa considerada, 1.915-1.923, supone sobre la anterior un importante incremento de información, especialmente en publicaciones privadas. Consideraremos tres grupos de fuentes fundamentales:

1.- Estadísticas oficiales: Como se ha mencionado, la Estadística del Registro Mercantil continúa su publicación anual.

En 1.913 se inició, esta vez sin solución de continuidad, la serie del Anuario Estadístico de España, con el volumen correspondiente al año anterior. En este tomo no hay información sobre sociedades y sólo una muy superficial de Bolsa, que remite a una publicación particular (664). El correspondiente a 1.915 (segundo publicado) incluye un apartado de "instituciones de contratación y crédito" (665) en el que se encuentra un estado de las "cantidades de valores públicos negociados en la Bolsa de Madrid en 1.915" y otros específicos sobre la cotización oficial de la Deuda, de las acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos y del Banco de España. La situación de los Bancos de 1.915 es reflejada en seis cuadros, correspondientes a las siguientes zonas geográficas: Madrid, Norte, Cataluña, Baleares, Valencia y Murcia y Centro y Sur.

La siguiente sección está dedicada a la "riqueza mobiliaria e inmueble" y en ella la información sobre sociedades mercantiles se reduce a la reproducción del cuadro-resumen de la Estadística del Registro Mercantil; es decir, de los datos nacionales sin su desglose por provincias.

Ferrocarriles y tranvías merecen una consideración detallada y se incluye su capital nominal y rendimientos, aparte de diversa información sobre accidentes, gastos de explotación, etc. (666).

(664) El Anuario de la Bolsa, del Comercio y de la Banca de Díez Pinedo.

(665) Anuario Estadístico de España, 1.915, parte tercera ("Producción y cambio", sección G.

(666) Quinta parte, "comunicaciones", sección E (ferrocarriles).

El Anuario de 1.916 incrementa el volumen de información que interesa a estas páginas, tanto en Bolsa como en sociedades. Sobre lo primero, se incluyen cuadros sobre el cambio más alto y más bajo mensual de nueve efectos públicos y 21 comerciales y un resumen del trienio 1.914-15-16 de más de trescientos valores. La información sobre sociedades vuelve a consistir en el resumen de la Estadística del Registro Mercantil. Cuando se añade un cuadro más completo (compañías creadas en 1.916, capital y emisiones de acciones y obligaciones de este año) proviene de una publicación no oficial (667).

Las sociedades de seguros, que cuentan desde 1.908 con un específico sistema de registro, se incorporan desde este año al apartado "Economía social". En él se ofrecen datos detallados por compañías de las primas recaudadas y un estado-resumen del número de sociedades españolas y extranjeras existentes en España en 1.911, 1.914, 1.915 y 1.916.

La estructura del Anuario de 1.917 es muy similar al anterior pero: a) se incorpora información de las Bolsas de Bilbao y Barcelona; b) hay una muy completa de las empresas hidroeléctricas al incluir su nombre, domicilio y potencia (HP disponibles y en explotación); c) desaparece la información sobre sociedades constituidas el último año.

El Anuario de 1.918 sigue conservando el índice de los dos anteriores y anuncia un incremento de la información sobre

sociedades anónimas y emisión de capitales "por referirse a Estadísticas de reciente elaboración". Cuando se afirma ésto se alude a la aparición de detalladas informaciones a cargo de publicaciones particulares; como consideramos a continuación:

—Estado de las sociedades anónimas constituídas en 1.918, tomado de la revista España Económica y Financiera. En él se incluye el domicilio y el capital social de cada compañía y éstas se agrupan por sectores. El mismo Anuario reconoce su carácter meramente indicativo, dadas las "dificultades de información" a pesar de la creciente atención que a este asunto van dedicando las Cámaras de Comercio". En la relación figuran sociedades fundadas en 1.917 y faltan algunas de 1.918 por no haber llegado los datos correspondientes.

—"Índice de sociedades anónimas existentes en España al principio del año 1.918, clasificadas por su especial característica", tomado del Anuario de sociedades Anónimas (1.918-19) que publica La Ilustración Financiera dirigida por D. José García Ceballos (Anuario Garciceballos). Consiste en una indicación de su número para 23 grupos considerados.

Si el Anuario de 1.918 se lamentaba del retraso de su publicación debido a las huelgas de tipógrafos, el de 1.919 justifica la reducción de sus páginas respecto a las anteriores —y por tanto de información— en la insuficiencia presupuestaria y la carestía de papel. En el tema aquí tratado, junto a la Estadística del Registro Mercantil sólo se publica un re

sumen de las sociedades constituidas a partir de los datos contenidos en el Anuario Garciceballos (número y capital por sectores).

Los Anuarios de 1.920 y 1.921-22 siguen alimentándose de los datos elaborados por diversas publicaciones particulares: El Economista, para Bolsa; El Financiero, para Bancos y el Anuario Garciceballos para la estadística de las sociedades existentes y constituidas el último año.

Los Anuarios de 1.922-23 y 1.923-24 contienen unos "índices sociales y económicos" con datos desde 1.913. Respecto a sociedades se trata de un mero resumen de la Estadística del Registro Mercantil. Por otra parte, crece la información sobre Bolsas y Banca (con la inclusión de los balances de los Bancos españoles). Los datos sobre sociedades anónimas (aparte el resumen de la Estadística del R.M.) se toman ahora del Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España (Daniel Ríu) y del Anuario Financiero de Bilbao (Guillermo Ibañez). Se trata de una clasificación por grupos, con expresión del número, capital nominal y desembolsado y otra por provincias. En estos años se incluye también la expresión de los "beneficios y dividendos de las principales sociedades anónimas", el desarrollo financiero desde 1.913 de las principales empresas industriales cuyos títulos se cotizan en la Bolsa de Madrid (12) y en 1.923-24 el número de quiebras declaradas por provincias, con expresión de su calificación, número de acreedores y de importe de los créditos.

Durante todos estos años, como ya fue reseñado, la infor

mación sobre las compañías de ferrocarriles y las de seguros es mucho más completa.

En resumen, durante estos años la estadística oficial sobre sociedades es sumamente incompleta, tanto si se la pone en relación con la serie de Anuarios del siglo XIX, como con el número de sociedades existentes en este período o con las publicaciones particulares que, para estos años son mucho más completas.

Una ejemplar excepción es el Anuario Estadístico de la ciudad de Barcelona y, en esta misma ciudad, las Memorias de la Cámara de Comercio.

El Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona es una publicación realizada desde 1.902 por el Ayuntamiento, en su negociado de Estadística, Padrón y Elecciones. Desde 1.911 publica información acerca de sociedades, con datos referentes a 1.909 y sobre la base de las que han tributado por el concepto de utilidades durante el año. Ofrece los nombres y el capital, en acciones y obligaciones por sectores. Da pues, una imagen completa de las sociedades por acciones que operaban en Barcelona (204) en 1.902. Posteriormente se incorpora información sobre Bolsa y sobre el capital desembolsado y los beneficios de las sociedades existentes.

2.- Anuarios publicados por diversas organizaciones y entidades particulares.- Dentro de este grupo, la serie más importante (por la cantidad, calidad y elaboración de la información) es el Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de

España, realizado por la Revista de Economía y Hacienda, siendo el director de ambas publicaciones D. Daniel Ríu y Periquet para todo el período aquí considerado. Esta colección, la Estadística del Registro Mercantil y los Anuarios Estadísticos de España son las bases fundamentales en las que se sostiene el punto 4º de este capítulo.

El Anuario citado aparece en 1.916 (con información —en éste y sucesivos volúmenes— del año anterior) ante la ausencia de Estadísticas oficiales (668) y con el título de Anuario Financiero y de Valores Mobiliarios, que cambia en su tercer volumen (1.918) por el reseñado más arriba.

El primer volumen aparece dividido en cuatro partes. La primera, de "Economía General", la tercera, de "Legislación fiscal española" y la cuarta con datos referentes a las "Repúblicas Hispanoamericanas". Es la segunda, "Economía financiera" la que interesa a estas páginas.

En ella, aparte de interesante información acerca de la Hacienda del Estado y una muy detallada sobre el Banco de España, se incluye una relación de cincuenta y tres Bancos españoles y 3 extranjeros y de las sociedades de seguros (53 españoles y 74 extranjeras, con expresión de su capital nominal y desembolsado).

La estadística de valores mobiliarios y cotizaciones comprende la siguiente información: nombre de la sociedad, capital nominal y desembolsado, dividendos repartidos en 1.914 y

(668) "Hace falta en España una obra de carácter exclusivamente estadístico e informativo que exponga todos los factores y elementos que forman la constitución económica de un pueblo" A.F.V.M., 1.916, p. V.

15, la cotización en los mismos años y el interés de las acciones. Cubre un total de 593 sociedades y, como reconoce el propio Anuario, "estos cuadros revelan la escasa contratación de valores industriales en las Bolsas oficiales de España" (669). Para 15 sociedades en Madrid, 2 en Barcelona y 4 en Bilbao se incluye, además, la cotización diaria.

El Anuario de 1.917 sigue criticando la inexistencia de estadísticas oficiales (670). La información contenida en este volumen es similar a la del anterior, con la adición de los balances de cuarenta y tres bancos españoles entre 1.900 y 1.917.

En 1.918, el Anuario adquiere su definitiva fisonomía (para el período considerado), lo que se refleja en el propio título: Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España. Sus ochocientas páginas se dividen en dos partes: "Economía financiera general" y "La Hacienda de España. El ahorro en España. El capital extranjero en España. Los empréstitos de la Guerra".

En la parte primera se incluyen los siguientes datos que interesan a estas páginas:

—Información completa del Banco de España entre 1.914 y 1.917, con sus balances semanales.

(669) Ibidem, p. VI.

(670) "El Estado no tiene organizado un servicio de Estadística Económica y financiera a base científica y racional" (A.F.V.M., 1.917, p. V). Los organismos creados al efecto "Sólo se sienten en el Presupuesto del Estado" (ibidem, p. VI).

—Cuadro general de las acciones de Bancos e información de 69 de ellos, consistente en su año de constitución, su domicilio, capital, consejo de administración y último balance. Lo mismo para 10 extranjeras.

—Breve información de un total de casi 800 sociedades, agrupadas en 12 sectores, que comprende, aparte su nombre y localización, la composición de su Consejo de Administración y, en numerosas ocasiones, una breve referencia a su situación y el último balance. Al final de cada uno de los mencionados 12 sectores se incluye un cuadro que expresa la relación de las compañías, domicilio, su capital nominal y desembolsado, el valor de cada acción, la cotización a final de los años 1.914, 1.915, 1.916 y 1.917 y el dividendo repartido durante los mismos años, Asimismo, se inserta otro para las obligaciones de las compañías, con expresión de su interés, valor nominal, cotización a fin de 1.916 y 1.917 y el importe de su renta (con indicación del total y de la renta líquida).

—La cotización en la Bolsa sigue la tónica del volumen anterior, con inclusión de la de 17 títulos españoles en la Bolsa de París.

En la segunda parte, junto a información sobre la liquidación real de los Presupuestos del Estado desde 1.909 y una muy completa sobre las imposiciones en Cajas de Ahorros y Bancos por regiones de 1.907 a 1.909, se encuentran datos completos sobre la inversión extranjera en España.

El volumen correspondiente a 1.919 tiene la misma estruc

tura que el anterior pero sobre él, una importante carencia, ya que no incluye los cuadros generales sobre las sociedades para los diferentes sectores.

Los volúmenes de 1.922 y 1.923 suponen un importante incremento de información. Como se expresa en sus páginas iniciales, "dividimos las sociedades en grupos, según la clase de negocios a que se dedican y, dentro de su grupo, las clasificamos por provincias. En el Índice se clasifican por riguroso orden alfabético" (671). Dentro de cada uno de los 51 grupos, la información individualizada de cada compañía expresa la fecha de constitución, su capital nominal en acciones y desembolsado, las obligaciones en circulación, el domicilio social, el dividendo repartido en los tres años últimos y la cotización en Bolsa (cuando existe), los nombres de Consejo de Administración y el Balance último cuando se conoce.

En las páginas iniciales del Anuario de 1.922 se expresa con justeza la dificultad de reunir una información completa de todas y cada una de las sociedades anónimas existentes:

"Son innumerables las dificultades de información que nos oponen gran parte de las sociedades. Pocas son las que comprenden la utilidad social de la publicación de sus datos y situación financiera. Aun siendo gratuita esta publicidad en nuestro ANUARIO, declaramos que los directores de sociedades anónimas en España son refractarios y enemigos de la publicidad de la vida y actos financieros de la sociedad que dirigen..."

(671) A.F.S.A., 1.922, p. IX.

"... Esta enemiga de las sociedades anónimas a la publicidad de sus actos explica, quizá, la debilidad del crédito industrial en España. En el extranjero, los directores de sociedades anónimas y de Bancos especialmente, solicitan de los Anuarios Financieros la publicidad clara de su vida financiera y mercantil; en España, la mayoría de los directores de sociedades odian la publicidad, negando sistemáticamente la entrega de sus Memorias y Balances anuales" (672).

No obstante, este volumen recoge información de 3.795 sociedades anónimas existentes en España en 1.921 y en el de 1.924 (datos de 1.923), que ya es exclusivamente de sociedades anónimas, se puede seguir afirmando que este Anuario es:

"la única publicación española (...) que expone, en forma concreta, los datos necesarios para conocer la situación de las sociedades de nuestro país" (673).

Si bien el Anuario que hemos descrito es indudablemente el más completo no es el único, como ya fue mencionado al tratar del A.E.E. Junto a aquél destacan el Anuario Garciceballos, publicado por la Ilustración Financiera y cuyo director era D. José García Ceballos y el Anuario Financiero de Bilbao (674).

Esta era una publicación que desde su inicio, 1.914, estaba a cargo de Guillermo Ibáñez, subdirector del Banco de Vizcaya y abarca todo el período considerado. Se divide en dos partes. La primera se destina a informaciones varias (no

(672) A.F.S.A., 1.922, p. XIV.

(673) A.F.S.A., 1.924, p. VII.

(674) Anuario Financiero de Bilbao, que comprende el historial de valores públicos y de sociedades anónimas de España.

ticias, legislación) y a la consideración de las Deudas (municipales y provinciales) y de las obligaciones de las Juntas de obras de Puertos. La segunda parte está dedicada a ofrecer información de sociedades de una forma desordenada (frente a la sistematización del Anuario de Ríu) y que abarca un número considerablemente menor de entidades. Como ejemplo, citaremos que el volumen correspondiente a 1.923 comprende menos de 800 sociedades, frente a las casi cuatro mil del otro Anuario.

Por último, comentaremos brevemente el Anuario de los Valores admitidos a la cotización oficial de la Bolsa de Madrid publicado por el Ilustre Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de esta plaza desde 1.918.

Reproduce los datos que figuran en los expedientes de admisión a la cotización oficial (675). Se pretende con ello expresar el estado de los efectos públicos españoles y los valores de sociedades que se negocian en la Bolsa de Madrid para "dar a conocer la situación de las entidades cuyas acciones, obligaciones, bonos, cédulas. etc., están admitidos a la cotización".

Respecto a la información sobre la evolución de la sociedad anónima, este Anuario es un auxiliar eficaz del publica-

(675) Aparte de la tramitación inicial, las sociedades cuyos valores se cotizaban en Bolsa tenían la obligación de facilitar a la Junta Sindical sus periódicos Balances y Memorias. El artículo 17 del Reglamento interno de la Bolsa de Madrid facultaba a la Junta Sindical para acordar la suspensión de la cotización sino se cumplía este requisito. Tal medida no se llevó nunca a cabo hasta que, con ocasión de la publicación de este Anuario se decidió no incluir en ella los datos de aquellas compañías que no cumplieran las mencionadas obligaciones legales.

do bajo la dirección de D. Ríu, pero reducido a un grupo limitado de sociedades que son, sin embargo, las más importantes. Como ejemplo, citaremos que el de 1.918 contiene detallada referencia sobre 11 Bancos y sociedades de crédito españolas y 7 extranjeras, 20 sociedades industriales, 21 de ferrocarriles y tranvías, mineras, 22 de electricidad y gas y 22 de objetos varios. El correspondiente a 1.924 había modificado este número, para cada uno de los citados grupos en 3, -2, 3, 8, -7, 11 y 10.

Lo mismo cabe decir para los Boletines de Cotizaciones de la Bolsa de Madrid (1.854), Bilbao (1.891) y Barcelona (1.915), si bien su interés radica en la inclusión promenorizada de la evolución del precio de los títulos y no en la de otros datos sobre la vida de las sociedades.

3.- Revistas especializadas: En los años considerados (1.915-1.923) se fundaron en España al menos 49 revistas especializadas en temas económicos. Su interés es muy desigual y el estudio de la evolución de la doctrina y de la práctica mercantil en nuestro país debe comenzar por considerar una docena de títulos, muchos de ellos fundados en una época anterior y que son, a mi juicio, los más significativos:

La Actualidad Financiera (1.902).

El Economista (1.885).

Economía i finances (1.918).

España Económica y Financiera (1.893).

El Financiero (1.901).

Gaceta de los Caminos de Hierro (1.855).

Mercurio (1.901).

Revista Nacional de Economía (1.910).

Revista Ilustrada de Banca, Ferrocarriles, Industrias y Seguros (1.893).

Revista Financiera de la Sociedad Anónima Arnús-Garí (1.922).

Revista Económica (1.913).

Revista Minera (1.850).

La Semana Financiera (1.913).

Para una completa ficha bibliográfica de estas publicaciones remitimos al estudio ya citado de V.M^o de Diego y J. Timoteo Alvarez, La prensa económica y financiera, 1.875-1.940. Aparte de lo mencionado hay que considerar, como ya destacamos, las Memorias de las Cámaras de Comercio, que son de valor desigual.

Hay que hacer referencia, por último, a la propia documentación de las compañías, publicada o no (Memorias, Estatutos, Balances, contabilidad) que es la base indispensable para reconstruir la evolución de los distintos sectores económicos. Su escasez es notoria hasta el último tercio del siglo y aún después hemos de seguir lamentando su dispersión e incluso su pérdida.

4.2.- Las sociedades por acciones hasta 1.848.

Para la elaboración de los cuadros que integran este apartado se ha utilizado fundamentalmente el Diccionario geográfico estadístico de Pascual Madoz. El volumen correspondiente a Barcelona fue publicado en 1.846 y no incluye ninguna información estadística sobre sociedades. Sin embargo, el que contiene la voz "Madrid" está editado tres años más tarde e incorpora un cuadro muy detallado del número de compañías, capital, año de fundación y objeto. No solamente incluye información acerca de las constituídas sino también de las que fueron anunciadas y no formalizadas así como sobre las que apenas llegaron a funcionar. Todo ello resulta de gran ayuda para calibrar el verdadero alcance de la especulación de los años 1.845-47, para comprender el efecto de la legislación de 1.848 y para ofrecer un dato adicional a tener en cuenta a la hora de valorar la crisis económica que cierra este período.

Se ha utilizado también la Colección Legislativa de España, que incluye los Reales Decretos o, en su caso, las leyes necesarias para la continuación legal de las sociedades por acciones que existían en España antes de febrero de 1.848. Sus volúmenes nos proporcionan datos acerca de las compañías que tramitaron su autorización entre esta fecha y octubre de 1.868. La ley de 28 de enero de 1.848 y su Reglamento (R.D. de 17 de febrero) obligaban a las sociedades a celebrar una Junta general de accionistas para decidir acerca de su continuación y, en su caso, para autorizar a la Dirección para rea

lizar los trámites pertinentes. Las compañías que no cumplieron este requisito se vieron compelidas por la autoridad gubernativa a convocar la mencionada reunión.

Estas son las razones por las que en la Colección legislativa de España se encuentran los nombres de las compañías que existían en 1.848 y diversos datos acerca de ellas. En todos los casos, su nombre y objeto; en muchas ocasiones, su capital y su duración; en algunos, los nombres de los Directores y otros adicionales acerca de su régimen interior. Para las compañías disueltas disponemos, además, de una información de gran interés: las razones por las que se les denegó el Real Decrero de autorización.

Este conjunto legislativo nos permite, por tanto, establecer el ritmo con el que las nuevas normas se pusieron en vigor (algunas sociedades tuvieron que esperar seis años), los criterios de selección y el grado de control gubernativo. Todo ello será de gran utilidad en el siguiente apartado. Ahora interesa el número de compañías que existían en 1.848, su objeto social y su capital.

El cuadro núm. IV,1 expresa el número de sociedades por acciones que se constituyeron en España antes de febrero de 1.848, con expresión de su capital. No se han incluido los Bancos de emisión, que se contemplan en el cuadro IV,3 para evitar una distorsión, sobre todo en la columna referente al capital. Se ha prescindido, asimismo, de las sociedades de seguros mutuos y de las de cuentas en participación, cuyas

características exceden los propósitos de este trabajo (676). No se contabiliza tampoco la Compañía del Guadalquivir, constituida como privilegiada en 1.814, cuya azarosa existencia bajo esta fórmula ha sido contemplada en otro capítulo y que en estos años se limitaba a terminar ciertas obras de canalización

Por último, reseñaremos que no se han contemplado 40 sociedades que, con diversos objetos, fueron anunciadas y no constituidas entre 1.844 y 1.847. Veintiocho de ellas lo fueron en 1.846, diez en 1.847 y dos en 1.844. Su objeto era vario y, en muchas ocasiones, peregrino. Junto a cinco de giro y banca, 3 de ferrocarriles, 3 editoriales, 3 para la compra y explotación de baños, lavaderos y balnearios, dos inmobiliarias, dos de fabricación y venta de productos químicos y una para la realización de canales de riego y navegación se encuentran proyectos con un objeto muy general y a veces ciertamente curioso.

Entre las que tienen un objeto escasamente determinado se encuentran cinco para el "fomento industrial y mercantil". Entre las que tienen un fin atípico destacamos "La Fortuna" y "La Felicidad", para realizar inversiones en la lotería primitiva o el "Banco de socorros", para "hacer bien a la Humanidad". Ninguna de estas sociedades podía englobarse bajo el concepto "utilidad pública" requerido por la nueva legislación. No es extraño que —aparte las propias dificultades para sobrevivir— no solicitaran su autorización en 1.848.

(676) Son las de "seguros mutuos contra incendios de casas de Madrid" (1.822), "seguros mutuos contra incendios de casas extramuros de Madrid" (1.834) y la de "puentes colgantes" (1.842). v. Madoz, Diccionario..., t. X, pp. 950-51, 952 y 955.

CUADRO IV,1
NUMERO Y CAPITAL DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES CREADAS EN ESPAÑA HASTA 1.848
(exceptuados los Bancos de Emisión)

AÑO CONSTITUCION	1 NUMERO		2 CAPITAL NOMINAL (Rs.)	3 CAPITAL DESEMBOLSADO	
	ANONIMAS	COMANDITARIAS		(Rs.)	(a)
Antes de 1.840	3		17.183.000	72.000	(1)
1.841	3		59.100.000	10.100.000	(3)
1.842	6		125.200.000 (b)	23.141.338	(3)
1.843	3		9.220.000	7.713.000	(3)
1.844	1 (c)		-	-	(0)
1.845	17	3	651.870.000 (d)	106.965.200	(9)
1.846	38	2	3.424.000.000 (e)	456.656.150	(31)
1.847	11 (f)		691.600.000 (g)	239.523.822	(6)
1.848	5 (h)		217.220.000	140.000.000	(1)
TOTAL	87	5	5.194.593.000	842.612.010	(5)

FUENTES: P. Madoz, Diccionario..., t. X, pp. 948-960.
C.L.E., años 1.847-1.853.

NOTAS AL CUADRO IV, 1:

- (a) En número consignado entre paréntesis expresa el número de sociedades cuyo capital desembolsado se conoce.
- (b) No está consignado el capital nominal de la "Fabrica de Papel continuo de Burgos", que desconozco. Cien millones corresponden de la "Compañía general del Iris", de seguros, con un 16% desembolsado.
- (c) Se trata de la Compañía de Minas de Asturias, domiciliada en Londres. Otras dos fueron anunciadas y no constituidas (nominal = 17.400.000 reales).
- (d) El capital nominal de la Empresa Gaditana de Buques de Vapor está constituido por 200.000 reales en acciones más 400 huebras de tierra. De otras dos sociedades desconozco su capital.
- (e) A lo que hay que añadir 28 sociedades que, anunciadas, no se llegaron a constituir y que totalizaban 2.651.584.000 reales de capital social. No se incluye, sin embargo, el capital nominal de las compañías "Tejido de lana de Azcoltia" y "Froix, Silva, Blanc y cia", que desconozco. Están sumados 110.000.000 reales de incremento de capital de la Compañía general española de seguros, creada en 1.841.
- (f) No contabilizo "El fecundo escolano", integrada este mismo año en la "Sociedad metalúrgica catalana". Desconozco el capital de ésta y de la compañía de San Pedro de Araya.
- (g) A lo que hay que añadir 10 sociedades que, anunciadas, no se llegaron a constituir y que totalizaban 787 millones de reales de capital nominal.
- (h) Incluyo aquí compañías existentes en 1.848 y de las que desconozco su fecha exacta de constitución así como el Banco de fomento y Ultramar, creado para la negociación de un empréstito de 200 millones de reales para la construcción de caminos y correos marítimos. De hecho, se limitó a financiar una compañía transatlántica de navegación que hacía el trayecto entre la península y la Habana (cfr. Tortella, Los orígenes..., p. 35). Se crea a partir de la fusión de La Probidad (1.845), Banco de fomento (1.846) y Banco Español de Ultramar (1.846).

Por último, se encuentran aquellas cuatro que pretendían realizar el comercio de artículos de primera necesidad y que también atentaban contra los supuestos de la nueva legislación.

Lo que nos resta es un total de, al menos, 92 sociedades por acciones constituidas en España antes de que la legislación de 1.848 entrara en vigor (677). Este cuadro es incompleto, dada la ausencia de estadísticas para la época pero contiene, sin duda, una muestra significativa. En él se encuentran todas las compañías por acciones que sobrevivieron en la nueva etapa legislativa, todas las que solicitaron su autorización sin lograrlo y dibuja, con bastante aproximación, lo que fue el inicial ensayo de la asociación de capitales en España bajo el régimen ^{de} del Código Comercio de 1.829. En él se encuentran todas las iniciativas gestadas en Madrid, el mayor centro de capitales del momento y las más importantes entre las que tuvieron lugar en otras provincias; es decir, aquéllas que lograron convertirse en noticia en algún momento.

En el cuadro IV,1 se observa que más del 80% de las compañías por acciones se crearon entre 1.845 y 1.847, con un

(677) Del número total de sociedades hay que restar seis, que son compañías constituidas entre 1.845 y 1.847 e integradas en otra preexistente o fusionadas para una nueva sociedad. Se trata de: Compañía de Diligencias Peninsulares (1.843) unida con Postas Catalanas (enero 1.845) en septiembre de 1.845. La nueva sociedad conserva aquel nombre y se unió a Diligencias Generales (1.845) en febrero de 1.847. Gran Taller de Coches (1.846) refundida con la de Collantes, Moore y compañía en 1.847. En 1.848 se convertirá en la anónima Gran Taller de Coches de Recoletos. Gran Antilla (1.846) refundida en el Banco Español de Ultramar (1.847), integrada, a su vez, en el Banco de Fomento y Ultramar en 1.848, que también absorbió al Banco de Fomento y empresa de caminos y canales.

pico en 1.846, que absorbe casi el 50% del total. Esta "fiebre" creadora de sociedades anónimas tenía un claro componente especulativo que voy a tratar de determinar posteriormente pero refleja también el desarrollo de nuevas iniciativas económicas tras la guerra carlista. Era el momento en el que se iniciaba la incorporación de España al nuevo modelo de desarrollo, basado en la industrialización y en la asociación de capitales.

El cuadro (IV,1) reseña el nominal de las sociedades y su capital desembolsado. La cifra de aquél es bastante exacta, pues refleja el de 84 sociedades, no así la del capital desembolsado, que sólo contiene el de 57 de ellas.

En resumen, podemos destacar cinco aspectos principales:

1) que las sociedades por acciones tuvieron un inicial desarrollo a partir de 1.840 y que los años 1.845-47 conocieron un incremento desmesurado de la creación de sociedades anónimas que no corresponde a las posibilidades ni a las realizaciones económicas del momento.

2) que la sociedad comanditaria por acciones fue una figura olvidada en estos años, ante la facilidad de constitución de anónimas, cuyas ventajas eran superiores. Se prefería la anónima, para grandes asociaciones y la colectiva y comanditaria simple para la industria incipiente.

3) que la demanda de capital alcanzó unas cifras astronómicas para la época. El nominal de las constituidas hasta 1.848 superaba los 5.000 millones de reales y los 8.000

si consideramos las que sólo fueron anunciadas.

4) que el desembolso real fue muy pequeño (<20%) si consideramos al conjunto y muy variable en las diferentes sociedades. Oscilaba entre el 2% (Compañía General Española de Seguros, Caja de Descuentos Marítimos, Compañía Ibérica...) y el 100% en pequeñas compañías con pocos socios.

5) que el tamaño de las sociedades era muy variable, oscilando entre los 200.000 reales de La Esperanza, sociedad de seguros de quintas y especulación de granos (1.845) o los 400.000 de la Mina pública de aguas de Tarrasa (1.842), que no elevó su capital hasta 1.866 en que lo multiplicó por 2'5 y los 200 millones de la compañía Aumento de Aguas a Madrid (1.846), la Aurora de España (seguros, 1.846) o el Banco de Fomento de Ultramar (1.848).

Estos datos nos sugieren una serie de preguntas, entre las que destacan, inicialmente, las siguientes: ¿qué tanto por ciento de este capital se pensaba invertir en empresas industriales y comerciales inabordables con la compañía común? ¿cuánto se empleó en ensayar nuevas técnicas y procedimientos? ¿cuánto encubría planes proyectistas? ¿cuánto, directamente, fue destinado a promover un negocio especulativo?

Una primera respuesta se encuentra en el cuadro núm. IV,2 que refleja los sectores a los que se dedicaban las sociedades por acciones con anterioridad a 1.848. Giro y Banca y Seguros absorben, a partes iguales, 22 sociedades. Les siguen textil con 10, transporte terrestre con 9, minería y metalur

CUADRO IV,2
NUMERO DE SOCIEDADES POR ACCIONES CREADAS EN ESPAÑA HASTA 1.848, POR SECTORES

AÑO CONSTITUCION	NUMERO	GIRO Y BANCA	SEGUROS	FF.CC.	TEXTIL	F. PAPEL	TR.TERR.	TR.MAR.	AGUAS Y CANALIZ.	MINERIA Y METALUR.	ALUMBRADO GAS	VARIOS (a)
Antes de 1.840	3		1									2
1.841	3		1					1		1		
1.842	6		1			2			3			
1.843	3				1		1				1	
1.844	1									1		
1.845	20	2	4	1	3	1	2	1		1		5
1.846	40	8	4	2	3 (b)	1	4		2	1	2	13
1.847	11				2	1	2	1		3		2
1.848	5	1 (c)			1	1				1		1
	92	11	11	3	10	6	9	3	5	8	3	23

FUENTES: v. cuadro IV,1.

NOTAS AL CUADRO IV,2:

- (a) "Compañía española para la fabricación de bujías", Madrid. Constituida en 1.839, subsiste durante más de treinta años.
"Compañía de Impresores y Libreros del Reino", creada por Real Cédula en 1.763, renovada la autorización en 1.850.
"La Probiidad", 1.845. Objeto social: "Adelantos a la agricultura, seguros y otros". Refundida en 1.848 con el "Banco de fomento to y Ultramar" (sociedad de giro y banca constituida en 1.846).
"Azucarera Peninsular", 1.845.
"La Esperanza", 1.845. Objeto social: "Seguros de quintas, acopio y especulación de granos".
"Sociedad de las Aguas de La Puda", 1.845. Objeto social: "Casa de curación, convalecencia y recreo"
"Sociedad Cerámica", 1.845. Objeto social: "Fábrica de porcelana o de china".
"La Aurora de España", 1.846. Objeto social: Seguros, préstamos a labradores y ganaderos y otros objetos como la corta, labra y venta de maderas para construcción. Desde 1.862 abandonó el ramo de seguros.
"Compañía española de comercio", 1.846. Objeto social: "Depósito y venta de géneros nacionales y extranjeros".
"Gran taller de coches", 1.846. Objeto social: "construcción y recomposición de toda clase de carruajes".
"Depósito general del comercio y de la industria", 1.846. Objeto social: "Establecer grandes depósitos de géneros, frutos y efectos y otras operaciones mercantiles".
"La Publicidad", 1.846. Objeto social: "El ramo literario.tipográfico".
"La España", 1.846. Objeto social: "Publicación de un periódico, obras y folletos que defiendan las ideas e intereses monárquicos"
"Villa de Madrid", 1.846. Objeto social: "Expedición de productos de fábricas nacionales y extranjeras".
"La Actividad", 1.846. Objeto social: "Administración de bienes, préstamos sobre alhajas y otros ramos".
"La Ceres", 1.846. Objeto social: "Especulaciones agrícolas".
"La Previsora", 1.846. "Contratos de suministros, bagajes, alojamientos y hospitales, etc."
"La Unión Hispano-Filipina", 1.846. Objeto social: "Compra y venta de géneros y frutos en Europa, Filipinas y otras plazas de Ultramar".
"Fomento mutuo", 1.846. Objeto social: "Subsistencias y frutos coloniales".
"Compañía agrícola catalana. Objeto social: "fundar uno o varios establecimientos agrícolas beneficiados por los mejores métodos de cultivo".
"La Propietaria", 1.847. Objeto social: Construcción de edificios en Madrid y otros objetos análogos".
"La Perseverante", 1.847. Objeto social: "Propagar los conocimientos útiles a la industria fabril, establecer fábricas y otros análogos".
"Compañía gaditana del Irocadero", (?). Objeto social: "Establecer un carenero y habilitar almacenes para efectos navales, casas de maestranza, etc.".
- (b) Incluyo aquí la "Sociedad Fabril y Comercial de los Gremios", que es la antigua de los Cinco Gremios Mayores de Madrid reorganizada.
- (c) Se trata del Banco de fomento y Ultramar (v. nota (h) del cuadro anterior).

CUADRO IV,3
BANCOS DE EMISION CREADOS EN ESPAÑA ANTES DE 1.848

FECHAS AUTORIZACION	NOMBRE	CAPITAL NOMINAL (Rs.)	NUMERO ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	DESEMBOLSO	
					%	IMPORTE
R.D. 09-07-1.829	Banco Español de San Fernando	60.000.000	30.000	2.000		
R.D. 25-01-1.844	Banco de Isabel II	100.000.000	20.000	5.000	100	100.000.000
R.D. 01-05-1.844	Banco de Barcelona	20.000.000	5.000	4.000	25	5.000.000
R.D. 25-12-1.846	Banco de Cádiz	50.000.000	50.000	1.000	30	15.000.000
R.D. 25-02-1.847	Banco Español de San Fernando	400.000.000	200.000	2.000	50	200.000.000

FUENTES: v. cuadro IV,1.

gia con 8, fabricación de papel con 6, aprovechamiento de aguas y canalización con cinco y con tres, ferrocarril, transporte marítimo y alumbrado por gas. Veintitrés compañías que dan agrupadas en el apartado de "varios" que recoge empresas de diferentes sectores así como algunas constituidas para varios ramos o con objetos muy generales. La nota (a) de este cuadro reseña estas sociedades.

Como una primera aproximación a lo que será estudiado en detalle en el próximo apartado, cabe señalar que sólo 29 de ellas subsistían en 1.858. Todos los sectores sufrirán una importante reestructuración entre 1.848 y 1.858.

La repercusión en España de la crisis de la segunda mitad de la década de los cuarenta impide conocer la evolución de este movimiento asociativo en unas circunstancias más favorables. La intervención del gobierno moderado —aún antes de la crisis, como se ha visto— lo hubiera impedido en cualquier caso. Desde 1.848 no fue la acción del mercado sino la intervención gubernamental la que se encargó de dirimir acerca de la honorabilidad de los promotores y de las posibilidades de éxito de los proyectos.

Es evidente que en 1.848 se cerró la puerta a la libre creación de sociedades por acciones en España, que el capital nominal de aquéllas era, entre 1.845 y 1.848, desproporcionado e imposible de suscribir, dada la situación del mercado de capitales en España. Frente a esta situación, había dos opciones: dejar que la competencia frustrara los proyectos disparatados o intervenir. El primer camino era el más

correcto doctrinalmente aunque el más costoso socialmente a corto plazo y el más lento. ¿Hubiera sido más eficaz? A posteriori, el análisis del fracaso de la industrialización en España ha llevado a los historiadores a considerar que sí. Como ya he manifestado en páginas anteriores, tal afirmación debe estar acompañada de algunas reflexiones que sin destruirla la matizan. Entre éstas, destaca que la intervención gubernamental y parlamentaria en la constitución de sociedades anónimas fue la tónica europea en buena parte del siglo, que los progresistas aceptaron dicha intervención en una actitud que no creo fuera sólo posibilismo (cosa que sí era en el caso de los demócratas) sino que respondía a la asunción de la concepción de un Estado -interventor y que la legislación de 1.848, por regla general, no destruyó las compañías que habían mostrado un funcionamiento regular.

Dadas las circunstancias del momento es difícil calibrar la incidencia que tuvo la legislación y que tuvo la propia crisis económica en la escasa supervivencia de las sociedades textiles, de seguros, mineras y metalúrgicas y giro y banca. De ello me ocupo en el próximo apartado.

4.3.- 1.848-1.868

4.3.1.- Los efectos de la ley de 1.848 sobre las sociedades constituidas.

a) Sociedades por acciones preexistentes autorizadas según la nueva legislación.— El cuadro núm. IV,4 refleja el número de sociedades existentes en 1.848 y que sobrevivieron a la nueva normativa. Son un total de 39, dos de las cuales son comanditarias. Este número representa más del 40% de las que se crearon hasta la fecha. Son casi un 70% de las constituidas hasta 1.845 y sólo un 36% de las formadas a partir de ese año. Podemos considerar, por tanto, que la ley actuó sobre el grueso de las compañías creadas en el trienio 1.845-1.847.

El capital nominal que representaban las compañías autorizadas, sin embargo, comparado con el conjunto, significa una parte sensiblemente menor (28% aproximadamente). Y ello porque lo modesto de su capital (dada la obligación de su suscripción total y de su desembolso obligatorio cercano al 20%) y lo concreto de su objeto son derivados de la nueva norma, lo que contrasta con lo ambicioso de aquél y lo abstracto y amplio de éste que son las características, como veremos, de las sociedades disueltas.

Sólo conocemos el capital nominal de 33 de las compañías autorizadas. Su distribución es la siguiente:

CUADRO IV,4
SOCIEDADES POR ACCIONES CONSTITUIDAS CON ANTERIORIDAD A LA LEY
DE 28 DE ENERO DE 1.848 Y AUTORIZADAS SEGUN LA NUEVA NORMATIVA

AÑO AUTORIZACION	NUMERO SOCIEDADES AUTORIZADAS	GIRO Y BANCA	SEGUROS	FF.CC.	TEXTIL	PAPEL	TR. MAR.	CANAL.	MIN. Y MET.	VARIOS
1.847	1 (a)	2 (b)			1					
1.848	6				2	1				1
1.849	13 (c)			1	2	2	1	2	1	4
1.850	9 (c)		1	1 (d)	1		1	3	1	1
1.851	4		2			1				1
1.852	1			1 (c)						
1.853	2		1							1
1.854	2								2	
1.858	1									1 (f)
TOTALES	39	2	4	3	6	4	2	5	4	9

FUENTES: v. cuadro IV,1.

- NOTAS : (a) Se trata de la Industrial Malagueña que fue autorizada por Real Decreto de 18 de noviembre de 1.847.
- (b) Caja de Descuentos Zaragozana convertida en Banco de Zaragoza en 1.856 y Valenciana de Fomento, transformada en sociedad de crédito en 1.859.
- (c) Una de ellas, comanditaria por acciones.
- (d) Camino de Hierro Barcelona-Mataró integrado en la línea Barcelona-Gerona desde 1.862.
- (e) Se trata del ferrocarril de Iangreo, autorizado en 1.852. Fue disuelta en 1.853 debido a sus dificultades financieras y vuelta a autorizar por R.D. de 27 de diciembre de 1.854 para que pudiera tramitar la ley definitiva que consiguió en 6 de julio de 1.855.
- (f) Azucarera Peninsular. Por R.O. de 31 de marzo de 1.854 se le obligó a modificar sus estatutos. No fue autorizada definitivamente hasta 1.858 (R.D. de 20 de octubre).

Hasta 5 millones de reales	12	36,4%
Hasta 15 millones de reales	11	33,3%
Hasta 100 millones de reales	7	21,2%
Más de 100 millones de reales	3	9,1%

Los grupos contemplados en el cuadro IV,4 son los mismos que en el IV,2. Observamos que destaca el textil (6 sociedades) y las dedicadas al aprovechamiento de aguas y canalización (5). Siguen las que tienen por objeto la fabricación de papel (4), la minería y la metalurgia (4), el seguro (4), los ferrocarriles (3), la navegación y los transportes marítimos (2) y las de giro y banca (2). Las compañías de diligencias han desaparecido y las supervivientes han sufrido un proceso de concentración (Diligencias Postas Generales).

Estas cifras no significan porcentualmente lo mismo. El cuadro IV,5 refleja el número de sociedades que fueron creadas para los diferentes sectores hasta 1.848, las que sobrevivieron a la crisis y a la nueva normativa y las que, entre ellas, seguían subsistiendo en 1.858 y 1.862:

SECTORES	CUADRO IV,5 NUMERO DE SOCIEDADES			
	CREADAS HASTA 1.848	AUTORIZADAS	EXISTENTES EN	
			1.858	1.862
Giro y Banca	11	2	2	2
Seguros	11	4	4	4
Ferrocarril	3	3	2	2
Textil	10	6	4	4
F. Papel	6	4	3	3
Transporte Terrestre	9	1	1	-
Transporte Marítimo	3	2	1	1
Aguas y canalización	5	5	4	3
Minería y metalurgia	8	4	3	3
Alumbrado Gas	3	1	1	1
Varios	23	7	6	6
	<u>92</u>	<u>39</u>	<u>31</u>	<u>29</u>

FUENTES: v. cuadro IV,1. Anuario Estadístico de España, 1.858 y 1.862-65.

Sobre estas cifras podemos hacer dos consideraciones principales:

1) que los sectores más afectados por la legislación y la crisis fueron los de giro y banca, los de seguros y las compañías de diligencias, mientras el ferrocarril vió permanecer sus concesiones (Madrid/Aranjuez, Barcelona/Mataró y Langreo) y los de agua y canalización sobrevivieron en su totalidad. En un próximo apartado consideraremos las causas de la desaparición de las sociedades del resto de los sectores.

2) que las sociedades autorizadas tuvieron un alto grado de permanencia, lo que permite afirmar, como hipótesis que, en general, la legislación del 48 actuó correctamente en su selección. Cabe destacar que todas las de seguros sobrevivieron a la crisis de 1.857.

Claramente expuesta en los cuadros IV,4 y IV,5 la índole de las operaciones de la mayor parte de las compañías, me detendré únicamente en las englobadas bajo el epígrafe "varios" y que son aquéllas entre las aprobadas que son únicas en su sector. Son las ya citadas para el transporte terrestre (Diligencias Postas Generales) y para el alumbrado por gas (Catalana del Alumbrado por gas) así como la Compañía Gaditana del Trocadero, constituida como almacén de depósitos, la Compañía española para la fabricación de bujías esteáricas, la Compañía de Impresores y Libreros del Reino, la Azucarera Peninsular que no logró su formalización hasta 1.858, una compañía catalana para la explotación del balneario de La Puda

y que pronto sucumbió, La Aurora de España, Sociedad de Seguros, de banca y giro y para la explotación de la madera y, por último, una muy fisiocrática compañía, de larga vida, la Agrícola Catalana, cuyo objetivo era "fundar uno o varios establecimientos agrícolas beneficiados por los mejores métodos de cultivo"

El cuadro IV,6 nos muestra el porcentaje que suponen cada uno de los sectores considerados, respecto al número total de las autorizadas y respecto al capital nominal. Se ha incluido también una columna indicativa, sobre el capital medio de las sociedades en cada sector. La ordenación por el número de sociedades autorizadas la encabeza el textil aunque en la realizada por importancia del capital invertido destacan los seguros, con sólo cuatro sociedades y con la cifra más elevada de capital medio. Si sumamos La Aurora de España, sociedad que se dedicó a este ramo hasta 1.862 y que abarcó también los de Banca y Giro y el maderero, la suma se eleva, pues dicha compañía tenía un capital de 200 millones de reales. Se ha preferido no incluirla en ninguno de los campos mencionados y hacerlo en la de varios, aunque hay que considerar que sólo ella supone el 71% del capital de esta partida, dejando al sector de varios con 8 sociedades con un escaso capital medio (poco menos de 10 millones).

Quiero resaltar, asimismo, que la imagen ofrecida por el sector del seguro no refleja exactamente la importancia de su capital efectivo pues si la nueva legislación exigía a las nuevas compañías un desembolso inicial de un 25% máximo (y

CUADRO IV,6
NUMERO Y CAPITAL DE LAS SOCIEDADES AUTORIZADAS

SECTOR	NUMERO SOCIEDADES AUTORIZADAS	% SOBRE Nº TOTAL	CAPITAL NOMINAL (Rs.)	% SOBRE C. TOTAL	CAPITAL MEDIO (Rs.)
Textil	6	15.4	109.680.000	9.7	18.280.000
Aguas y canal.	5	12.8	229.400.000	20.1	45.880.000
Seguros	4	10.3	332.000.000	29.1	83.000.000
Min. y Met.	4	10.3	31.200.000	2.7	7.800.000
F. Papel	4	10.3	7.362.500	0.6	1.472.500
FF.CC.	3	7.7	111.000.000	9.7	37.000.000
Giro y Banca	2	5.1	25.000.000	2.2	12.500.000
Transp. Marítimos	2	5.1	15.000.000	1.3	7.500.000
Varios	9	23.0	279.768.365	24.6	31.085.375
TOTAL	39	100	1.140.410.865	100	29.241.304

FUENTES: v. cuadro IV,5.

NOTA: En el caso de las sociedades de capital desconocido (una papelera, una textil, una de navegación y una de varios) se ha optado por calcularlo haciendo media con las demás del sector.

la mayoría de las veces mínimo), las de seguros se fueron autorizando con un 6% de desembolso, convertido en norma a raíz del Real Decreto de 11 de septiembre de 1.850 (678).

A nivel geográfico, las sociedades se concentraban en Madrid (38.5%) y Barcelona (28.2%), estando el resto disperso por Andalucía (7.7%), Valencia (5.1%), y salpicadas en el Norte, Aragón y Castilla.

LOS REALES DECRETOS DE AUTORIZACION.

Estos documentos se ajustaban a un modelo que revela el grado de escrupulosidad con el que se llevaron a cabo las normas del 48 aunque, como se observa en el cuadro IV,4, esto llevó a un retraso muy inconveniente en la tramitación de los expedientes.

El texto se divide en tres partes fundamentales. En la primera, se citan los documentos que acompañan a la solicitud de la compañía, entre los que forzosamente se deben encontrar la escritura de constitución, los estatutos y reglamentos, la aprobación del Tribunal de Comercio, el acta de la Junta General de Accionistas que avala esta solicitud y el último balance. La segunda parte resume, en varios considerandos, la cuidadosa confrontación de los documentos y libros de la compañía con los informes del Jefe Político y la legislación vigente. La tercera, comienza siempre con la frase "oído el Consejo Real" y dicta la resolución de aprobación que en ocasiones está condicionada a ciertas modifica-

(678) C.L.F., t. 51, pp. 89-92.

ciones estatutarias que se detallan.

Las condiciones que debe cumplir una compañía para ser aprobada se contienen en la ley de 27 de enero de 1.848 y en el reglamento adjunto, y fueron detalladas en otro lugar en esta Tesis (679). En síntesis consistían en la obligación de haberse inscrito en el Tribunal de Comercio, tener un objeto considerado de utilidad pública y un capital adecuado para realizarlo así como no ejercer el monopolio en ningún ramo o el comercio de artículos de primera necesidad.

Las modificaciones dictadas a las compañías que se autorizaron son de diversa índole y atacaban los puntos mencionados. A la Compañía de los Gremios se le impide realizar "operaciones comunes de comercio" y debe limitarse a comprar las primeras materias para la fabricación de sus tejidos y vender su propia producción. También se le ordena arreglar sus libros a las normas del Código de Comercio, como a la Fábrica de Papel continuo de Rascafría, a la que se autoriza porque el informe de la inspección concluye que el desorden de los libros de contabilidad estaba motivado por la "falta de inteligencia de los encargados" y no por mala fe de los mismos (680). El grueso de las modificaciones a que se obliga a las Compañías (a 11 de ellas) afectan a su funcionamiento interno y tienden a incrementar las facultades de la Junta General de Accionistas y las garantías y el control de los

(679) pp. 489 y ss.

(680) R.D. de 9 de abril de 1.851, C.L.E., t. 52, p. 531.

socios respecto a la dirección que —se insiste— debe ser siempre elegida. A continuación reproducimos alguno de los textos que tratan de este punto:

"Considerando, por último, que tampoco puede extenderse la autorización a la cláusula 15 de los mismos estatutos, por la que se reserva D. José de Llanos la dirección y administración perpetua de la compañía, cuya cláusula repugna a lo prevenido en el párrafo tercero, del a. 265 del Código de Comercio, en cuyo cumplimiento el manejo de las sociedades debe encargarse a mandatarios amovibles a voluntad de los socios.

Oído el Consejo Real, vengo en conceder mi Real autorización para que pueda continuar en sus operaciones a la sociedad anónima denominada Aumento de Aguas de Madrid..." (681).

"Oído el Consejo Real, vengo en conceder mi Real autorización a la compañía titulada Sociedad de las Aguas de la Puda, casa de curación, convalecencia y recreo, para continuar sus operaciones, entendiéndose limitado su duración a veinte años, y quedando nulas y sin efecto alguno las cláusulas de la escritura social que consignan y reservan para los socios fundadores dos empleos de los que cree para su servicio la sociedad, y dos plazas efectivas en la junta directiva y administrativa de la misma" (682).

"Oído el Consejo Real, vengo en conceder mi Real autorización a la sociedad anónima titulada Navegación e Industria para que pueda continuar sus operaciones, entendiéndose en esta concesión con las declaraciones siguientes: 1ª. Que la administración de la sociedad se haya de nombrar en junta general de accionistas por tiempo determinado (...). 2ª. Que la misma junta general acuerde la forma en que ha de desempeñar dicha administración, determinando las atribuciones de la junta de gobierno (...). 3ª. Que en el mismo reglamento se establezca la época en que haya de reunirse la junta general de accionistas

(681) R.D. de 7 de agosto de 1.850, C.L.E., t. 49, pp. 707-708.

(682) R.D. de 7 de marzo de 1.849, t. 46, p. 213.

para el examen y revisión de las cuentas y balances de la compañía, así como también las formalidades con que haya de procederse en estas operaciones y la forma y tiempo en que haya de acordarse la distribución de dividendos (...) (683).

Hechas estas consideraciones generales, cabe mencionar dos casos en los que se suavizó la legislación. El primero afecta al sector del seguro cuyas compañías pudieron desde 1.850 limitar su desembolso al 6% de su capital social y emplear la mitad de su efectivo en préstamos a noventa días y con garantía de papel de la deuda (684).

El segundo es el de la Compañía Agrícola Catalana, autorizada por Real Decreto de 8 de enero de 1.851 (685). Los argumentos que sostenían tal decisión eran "que ofrecía todavía esperanzas en su porvenir, según informa el gobernador de Barcelona [aunque observó] que la administración de la empresa no había sido siempre acertado, que el desaliento de algunos accionistas que se habían negado a facilitar fondos era la causa principal de que se hubiesen paralizado las obras más necesarias, y que no era próspero el estado actual de la compañía, según demostraba el balance". A pesar de ello, la mencionada autoridad afirma "que la fe en el porvenir no había muerto en la gran mayoría de los interesados, y que la sociedad prometía resultados ventajosos para lo sucesivo por los elementos de riqueza que encerraba en sí".

(683) R.D. de 22 de junio de 1.849, C.L.E., t. 47, p. 255.

(684) R.D. de 11 de septiembre de 1.850, C.L.E., t. 51, pp. 89-92.

(685) C.L.E., t. 52, pp. 64-66.

¿Nos encontramos ante la decidida promoción de la única sociedad de fomento agrícola que solicitó autorización, ante la pervivencia del proyectismo a pesar de las rígidas normas del 48 o ante la mera suavización de la ley ante el interés personal de una autoridad política? No podemos ofrecer una respuesta satisfactoria al no conocer los libros de la sociedad en cuestión pero es indicativo que el Anuario de 1.866-67 consigna que esta compañía seguía funcionando. De esta forma, su autorización puede ser considerada como un ejemplo de que el legislador estaba dispuesto a apoyar los proyectos de fomento de la agricultura y la industria siempre que tuvieran un concreto plan de inversiones.

Los decretos que hemos citado, que son sólo una muestra del conjunto, revelan cómo se transigió con ciertos desórdenes en la contabilidad, siempre que fueran achacables a la inexperiencia y no a la mala fe; cómo se dió publicidad a las escrituras, reglamentos, proyectos y balances y cómo otorgaron una muy necesaria protección al accionista frente a los fundadores que pretendían monopolizar la dirección con un criterio patrimonial, perpetuando un funcionamiento propio de las compañías personalistas.

Todo lo expuesto —y con la conciencia de que se ha perdido buena parte de la información sobre este problema— lleva a aventurar la hipótesis de que la ley se aplicó con suavidad allí donde las sociedades eran prósperas o había esperanzas fundadas de estimarlo así y se aplicó con dureza en caso contrario. Hay indudables excepciones, como podemos con

siderar a continuación.

b) Sociedades por acciones disueltas en virtud de la nueva legislación. El cuadro IV,7 muestra el número de sociedades disueltas en cada año y los sectores a los que pertenecían. Resalta el hecho de que fueron rechazadas menos de una tercera parte de las autorizadas. Asimismo, que dos terceras partes fueron disueltas en 1.849, lo que indica una resolución muy rápida de estos expedientes frente a la lentitud que caracterizaba la de las peticiones de aquellas sociedades que fueron autorizadas nacida, como se ha resaltado, de la necesidad que tuvieron muchas de ellas de modificar sus estatutos. De esta forma, las sociedades rechazadas —y así se indica en los Reales Decretos— podían reiniciar su tramitación reformando su estructura.

La tercera parte de las compañías pertenecían al sector textil; otro tanto, por partes iguales, a seguros y minería y metalurgia y el resto, con un caso en cada grupo, a diligencias, giro y banca y prensa. Todos estos grupos, excepto el último, tenían también sociedades autorizadas. ¿Cuáles fueron las razones del rechazo?.

Antes de contestar a esta pregunta, quiero señalar que es muy difícil indicar el porcentaje de capital que suponen estas sociedades, dado que desconozco el de 5 de ellas. El de las siete restantes suma 205.880.000 reales. La media que suponen es muy similar al de las autorizadas (v. cuadro IV,6).

Estas cifras son, sin embargo, engañosas, pues hay una sociedad

CUADRO IV,7

SOCIEDADES POR ACCIONES CONSTITUIDAS CON ANTERIORIDAD A LA LEY DE
28 DE ENERO DE 1.848 Y DISUELTAS EN VIRTUD DE LA NUEVA NORMATIVA

FECHA DECRETO DISOLUCION	NUMERO SOCIEDADES DISUELTAS	SEGUROS	TEXTIL	MIN. Y MET.	GIRO Y BANCA	DILIGENCIAS	PRENSA	DESCONOCIDO
1.849	8 (a)	1	3	2		1		1
1.850	1						1	
1.851	1		1 (b)					
1.852	-							
1.853	2	1			1			
TOTALES	12	2	4	2	1	1	1	1

FUENTES: v. cuadro IV,1

NOTAS : (a) Una sociedad comanditaria.

(b) Se trata de la Castellana para el fomento de la seda.

dad de 150 millones de reales (anticipos a labradores y ganaderos), otra de 40 (seguros), otra de 12 (diligencias) y otras tres con un capital igual o menor a un millón. Por otra parte, el capital desembolsado es muy pequeño aunque no se pueda establecer una regla general (686).

Estas compañías tenían su domicilio social bastante disperso. Un tercio de ellas en Madrid, dos en otras zonas castellanas, dos en Barcelona y otras tantas en el País Vasco, una en Valencia y otra en Londres, con representación en Oviedo.

La estructura de los Reales Decretos de disolución es muy similar a los citados anteriormente: una referencia a la solicitud, la confrontación de la documentación presentada por la compañía con la legislación vigente y la comunicación de la resolución negativa con explicación de sus razones. Estas disposiciones terminan con la orden de que se practique la liquidación de la sociedad según el Código de Comercio y el artículo 44 del Real Decreto de 17 de febrero de 1.848.

Entre las razones que se aducen para denegar la autorización a las mencionadas compañías destaca una, que afecta a ocho de ellas: no haber formalizado su escritura ante el Tribunal de Comercio. De ahí que se considere su existencia nula, al no haberse ajustado al a. 293 del Código mercantil. Esta razón está acompañada de otras que se reseñan a continuación, pero quiero destacar que en el único caso en que esta

(686) v. Madoz, Diccionario..., t. X, pp. 956-960.

infracción aparece como única (San Pedro de Araya) el propio decreto indica la posibilidad de que se subsane:

"... pudiendo sus socios, si persisten en constituirse en sociedad anónima, solicitar mi Real autorización, sujetándose a todos los trámites y requisitos que exige la ley de 28 de enero y reglamento de 17 de febrero últimos" (687).

Esta posibilidad —evidente aunque no estuviera señalada en todos los casos— no fue aprovechada por ninguna de las sociedades analizadas.

Las otras razones que llevaron a disolver las sociedades fueron: la situación deficitaria (6 casos), el desorden o irregularidad de los libros (4 casos), la estimación de que el capital era insuficiente (3 casos). Otras causas, que aparecen una vez, son: a) estar constituida "para especulaciones de mero interés individual", de ahí que, al no poder obtener la calificación de "utilidad pública" se aconseje su conversión a colectiva (688); b) estar domiciliada fuera de España (689); c) haber empleado el capital social en operaciones extrañas a su objeto (690); d) tendencia al monopolio y al comercio de artículos de primera necesidad (691) y e) no haber conseguido reunir mayoría en Junta General de Ac-

(687) R.D. de 31 de enero de 1.849, t. 46, p. 103.

(688) R.D. de 30 de agosto de 1.849, C.L.E., t. 47, pp. 687-689 (Compañía La Estrella; cuyo propósito era "hilar algodón, moler granos y establecer telares mecánicos").

(689) R.D. de 26 de junio de 1.849, C.L.E., t. 47, pp. 283-287 (Compañía de Minas de Asturias).

(690) R.D. de 12 de enero de 1.853, C.L.E., t. 58, pp. 48-52 (El Fénix)

(691) R.D. de 15 de marzo de 1.849, C.L.E., t. 46, pp. 238-240.

cionistas para solicitar la continuación de la sociedad (692).

Ninguna de estas razones aisladas bastaron para denegar la autorización de una compañía excepto en el caso señalado de San Pedro de Araya. Sin embargo, hay que destacar que se disolvieron sociedades que venían funcionando con cierto éxito como la textil La Estrella (capital 720.000 reales) y El Fénix. Estos dos casos muestran que el gobierno no estaba dispuesto a fomentar anónimas de pequeño capital (La Estrella) ni ambiciosas compañías que realizaban operaciones arriesgadas y consideradas ilegales aunque tuvieran un balance positivo.

El Fénix se creó en 1.846 para "asegurar los ganados, crear bancos de ahorros, depósitos de comisión de interés mercantil y un Banco agrícola en todas las provincias del Reino". Madoz señala que repartió un 9% de utilidades en 1.847, un 12% en 1.847 y otro tanto en 1.848 (693). Sin embargo, fue disuelta en razón de que había emitido pocas acciones y había realizado operaciones extrañas a su objeto y que se consideraban ilegales según la nueva ley, como era la compra de acciones propias y ajenas y préstamos sobre ellas (694).

En resumen, la razón fundamental por la que se denegó la autorización a las sociedades fue la ausencia de inscripción en el Tribunal de Comercio. No es explicable que las com-

(692) R.D. de 7 de agosto de 1.850, C.L.E., t. 50, pp. 708-710 (La España, empresa editora del periódico La Esperanza)

(693) Madoz, Diccionario..., t. X, p. 953.

(694) R.D. de 12 de enero de 1.853, C.L.E., t. 58, pp. 48-52.

pañías por este hecho renunciaron a su formalización como anónimas y se convirtieron en colectivas, pero así ocurrió. Y es que esta irregularidad no era la única en la gran mayoría de las sociedades sino que estaba acompañada por problemas financieros o porque su objeto atentaba contra la ley (comercio de artículos de primera necesidad).

c) Sociedades por acciones que no llegaron a solicitar su legalización. En el cuadro IV,8 se observa que fueron al menos 30 las sociedades por acciones que no presentaron siquiera su solicitud de aprobación. Esto supone casi un 40% de las existentes en 1.848. La proporción se eleva a más del 50% si contemplamos el capital de las compañías. Y ello, porque la mayoría de las consideradas en este apartado tenían un nominal fantástico si bien apenas tenían desembolsado un 10% en la mayoría de los casos (695). El nominal de estas compañías es el siguiente:

<u>CAPITAL NOMINAL</u>	<u>NUM. COMPAÑÍAS</u>
Hasta 25 millones reales	8
Hasta 50 millones reales	10
Hasta 100 millones reales	6
Hasta 200 millones reales	6

El capital medio resultante es de poco más de 92 millones, es decir, tres veces superior al de las sociedades auto

(695) v. Madoz, Diccionario..., t. X, pp. 956-960.

rizadas. Si exceptuamos las dos únicas compañías que pretendían explotar un establecimiento fabril determinado (La Cerámica, 1'5 millones y Fábrica de Papel continuo de Villarluego, 3 millones) la media se eleva a casi 100 millones.

Las sociedades consideradas no tramitaron su autorización por estar claramente fuera de la ley o porque sucumbieron en la crisis económica. En aquél caso estaban las que tenían un objeto muy general y ambicioso y las que se proponían comerciar con subsistencias. Entre las primeras cabe considerar una parte importante de sociedades de seguros que a la vez quieren dedicarse a otras actividades como los préstamos y depósitos. Respecto a las sociedades de seguros podemos considerar que las cuatro sumaban un capital de 500 millones de reales. Una de ellas no llegó a emitir acciones —La Seguridad—, otras dos tenían entre un 4 y un 8% de capital desembolsado. Ninguna pudo superar la crisis. La cuarta era la Compañía General del Iris, que unida al Banco de Fomento, sucumbió con ella en 1848.

Las sociedades de giro y banca fueron también duramente afectadas por la crisis, tanto las que poseían un correcto planteamiento como el Banco de Fomento o el de la Unión (696) como las iniciativas proyectistas, como el Banco Agrícola Peninsular, creado en 1.846 con un nominal de 25 millones y cuyo presidente era D. Francisco de Paula Antonio (697).

(696) Tortella, Los orígenes..., p. 35.

(697) Otros Bancos: la Caja de Descuentos Marítimos (1.846), con un capital de 200 millones, La Actividad (1.846) con 40, el Banco de Progreso, con 200, la Caja de Descuentos, sociedad filantrópica mercantil (1.846) con 20.

CUADRO IV,8
SOCIEDADES POR ACCIONES EXISTENTES EN 1.848
Y QUE NO LLEGARON A TRAMITAR SU AUTORIZACION

AÑO CONSTITUCION	NUMERO SOCIEDADES	GIRO Y BANCA	COMERCIO GENERAL	SEGUROS	ALUMBRADO GAS	TRANS. TERR.	(a) F.PAPEL VARIOS
1.842	1			1			
1.843	-						
1.844	-						
1.845	4	1		2			1
1.846	19	5	5	1	2	1	4
1.847	5					1	3
1.848	1	1					
TOTAL	30	7	5	4	2	2	8

FUENTE: Madoz, Diccionario..., pp. 956-961.

NOTAS : (a) Una sociedad de los siguientes sectores: fabricación de cerámica, imprenta, agricultura, minería, construcción, transporte marítimo, contratos de suministros, establecimientos de fábricas.

Otras 10 sociedades, al anunciar sus objetivos se limitaban a referirse en general a un sector de producción o servicios sin concretar los establecimientos a los que iban encaminados. Además tenían una clara desproporción entre su noминаl y su desembolso. Ambas cosas les impedían optar a su legalización después del 48 en los casos que hubieran superado la crisis. Entre ellos podemos mencionar algunos casos llamativos como el de La Perseverante, que constituida en 1.847 con un nominal de 20 millones y 300.000 reales colocados un año después pretendía "propagar los conocimientos útiles a la industria fabril, establecer fábricas y otros [ob-jetos] análogos". La Ceres se proponía realizar "especulaciones agrícolas", se constituyó con 100 millones de reales nominales en 1.846 y en 1.848 había emitido 350 acciones de 2.000 reales. La Compañía de Transportes generales de España se encontró con parecida dificultad para colocar sus acciones y cumplir su objetivo de "mejorar y facilitar los transportes (698).

Un grupo de compañías que no podían optar a su legalización estaba constituido por aquellas cinco que se proponían realizar el comercio de diversos géneros nacionales y extranjeros, incluidas las subsistencias. Totalizaban 740 millones de nominal —148 de media— y un capital desembolsado de un 27.2% de media. A mi juicio fueron estas grandes empresas co

(698) Otras sociedades eran La Peninsular de Alumbrado por gas, constituida en 1.846 con 50 millones de nominal y que en 1.848 solo había emitido 9.000 acciones de 2.000 reales con un desembolso de un 30%, la Unión ferro-carbón que con el mismo nominal que la anterior pretendía explotar minas y que apenas colocó acciones (Madoz, Diccionario..., t. X, p. 959).

merciales las cercenadas por la nueva legislación en virtud de una teórica defensa del pequeño comerciante. Entre ellas, las había prósperas, como la Compañía general de Comercio (1.846) o el Depósito general de Comercio e Industria (1.846) y también críticas, como Villa de Madrid (1.846), Unión Hispano Filipina (1.846) o Fomento Mutuo (1.846). Pero la legislación acabó con todas, y con cualquier esperanza de organizar una anónima en el sector.

Junto a ese grupo de empresas con escasa base financiera, que sucumbieron fundamentalmente por la acción del mercado aunque el poder público fuera el encargado de prohibirlas en su pretendida labor educadora, las empresas de comercio organizadas bajo la fórmula de sociedades por acciones perdieron toda posibilidad de crearse. El doble propósito de los moderados —y así lo anunciaron en el Parlamento— era proteger al pequeño comercio y evitar la especulación con las acciones. Para lo primero acabaron con la fórmula asociativa en el sector mercantil. Así, se podría sintetizar su labor en el siguiente lema: sociedades industriales, de seguros y de giro y banca con objeto concreto y capital colocado, sí; comerciales o con objeto poco definido, no.

La legislación de 1.848 destruyó la consideración de que la sociedad por acciones era una fórmula normal para toda clase de actividad e impidió que fuera el mercado el regulador de su marcha. La acción del Estado, en general, no destruyó prósperas iniciativas industriales. Las sociedades que con objeto industrial se quedaron en la cuneta fueron las que

no habían logrado una mínima suscripción de capital. Junto a estas afirmaciones, que creo pueden sostenerse con carácter general, está el hecho de que la legislación intervencionista, promulgada en un momento de crisis, afectó al normal desarrollo de algunas interesantes iniciativas.

La más destacable es, sin duda, la primera sociedad anónima que se creó en España en el sector siderúrgico. Se trata de Santa Ana de Bolueta, fundada en 1.841 en Bilbao, con un capital de 800.000 reales que, ante la ley de 1.848 decidió reorganizarse como colectiva. Bajo esta fórmula se siguió desarrollando de forma próspera (699).

Otras, de prosperidad menos evidente pero que hubieran merecido mayores facilidades para iniciar su andadura fueron la Fábrica de papel continuo de Villaluengo o La Hispano-Lusitana, que pretendía realizar la explotación de la pita y otras plantas textiles para la fabricación de papel, La Propietaria, empresa urbanizadora Madrileña o la compañía de alumbrado por gas La Madrileña.

4.3.2.- Las sociedades por acciones entre 1.848 y 1.868.

En 1.847 nos encontramos, como se ha visto en el apartado anterior, con un total de 92 sociedades por acciones con-

(699) Tortella, Los orígenes..., pp. 101 y 233 y ss.

tabilizadas, con diverso grado de funcionamiento (cuadro IV,1). De ellas, 39 fueron autorizadas entre 1.847 y 1.854 (cuadro IV,4), 12 rechazadas (cuadro IV,7) y 30 no llegaron a tramitar su expediente para ajustarse a la nueva legislación (cuadro IV,8). Las once restantes sufrieron —antes o en el momento de su legalización— distintos procesos de fusión o absorción.

Discutido el momento de la transición, se considerará ahora el proceso de formación de sociedades por acciones entre 1.848 y 1.868, utilizando la información que proporcionan la Colección Legislativa de España y los Anuarios Estadísticos de 1.858, 1.859-60, 1.862-65, 1.866-67.

Gabriel Tortella ha utilizado las últimas estadísticas citadas para elaborar dos series sobre las fundaciones anuales de las compañías por acciones y su capital desembolsado entre 1.848 y 1.868: la primera se refiere a compañías industriales y la segunda a Bancos (700). Son incorporados aquí en su integridad con alguna adición que se ha podido realizar y que será comentada en su momento. La razón de su inclusión es que la otra fuente de información utilizada —Colección Legislativa de España— no ofrece apenas ninguna acerca del capital desembolsado de las compañías por lo que debemos reducirnos al Anuario Estadístico de España, las Memorias y los Balances de las compañías. Con todo ello podemos concluir que:

(700) G. Tortella, Los orígenes..., pp. 206 y 209.

1) La información es muy completa para las sociedades dependientes del Ministerio de Hacienda (Bancos de emisión, sociedades de giro y banca y de crédito). Los Anuarios incluyen una serie de "estados" en los que se refleja el capital nominal, efectivo, número de acciones y obligaciones, valor nominal y porcentaje desembolsado. Todo ello, además, puede ser contrastado gracias al mayor volumen de publicaciones que producen estas sociedades, debido a su tamaño y a la obligación de reproducir sus Balances en la Gaceta de Madrid (v. cap. 3).

2) La información es escasa y desigual para las sociedades dependientes del Ministerio de Fomento (industriales, seguros y obras públicas). Los Anuarios sólo incluyen el dato del capital nominal y no el desembolsado. Estas compañías sólo tenían la obligación de publicar sus Balances anuales en los Boletines Oficiales de las provincias. Su vaciado sistemático es una tarea lenta pero no imposible que merece ser emprendida en equipo. Sólo ello nos ofrecerá la verdadera imagen de la inversión de capital en la industria a través de sociedades por acciones entre 1.848 y 1.868, ofreciendo el telón de fondo a los estudios sectoriales que felizmente están siendo emprendidos con éxito creciente.

El caso de las compañías de obras públicas es una excepción. La información sobre ellas aumenta a partir del Anuario de 1.860-61 (datos de diciembre de este año), con la inclusión del capital presupuestado, subvenciones concedidas, valor nominal de las obligaciones y, desde 1.862-1.865 (da-

tos de 1.864), del capital desembolsado.

De ahí que los datos ofrecidos sobre las sociedades industriales deban ser sólo tomados como expresión de una tendencia y no como reflejo exacto del capital invertido en cada momento. Como se vió en el capítulo 2, las sociedades, para constituirse, debían contar con un desembolso inicial de sus acciones en torno a un 25% y el resto debía realizarse en un plazo determinado en cada caso y que solía ser de un año. No sabemos la rigidez con la que se planteó esta norma que, desde luego, se relajó de forma extraordinaria para las compañías de seguros.

Mucha mayor precisión reflejan las series que establecen el ritmo de creación de sociedades por acciones en los veinte años considerados. La utilización de la Colección Legislativa de España permite: a) distinguir las sociedades de nueva creación de las que renuevan su existencia con arreglo a las nuevas normas (701); b) conocer las sociedades que se disolvieron antes de 1.858 y que, por tanto, no están recogidas en el Anuario; c) fechar con exactitud las disoluciones de las sociedades que siempre debían estar refrendadas por Real Decreto y que no se reflejan en el Anuario del que, simplemente, desaparecen.

La evolución del número de sociedades por acciones existentes en España entre 1.848 y 1.868 queda reflejada globalmente en los cuadros IV,9 y IV,10 y en la curva (A) del grá-

(701) Tortella, al utilizar el Anuario Estadístico de España encontró este problema que él mismo expresa: "Por desgracia, resulta imposible distinguir las nuevas [sociedades] de las viejas en la lista publicada" (Los orígenes..., p. 208).

fico IV,1.

Hay una primera fase, que podemos encuadrar entre 1.847 y 1.850, en la que el importante crecimiento de iniciativas en estos años malos (gráfico IV,1) oculta el hecho de que todas ellas a excepción de dos son formalizaciones de sociedades existentes con anterioridad a 1.847, que deben adaptarse a la nueva legislación (702). Tal situación se refleja en la columna 1 del cuadro IV,9.

En el punto anterior destacamos el hecho de que la nueva normativa pudo retraer la formación de sociedades anónimas en determinados sectores industriales y aunque poco partidaria de tal tesis recogía el ejemplo que siempre se cita en favor de la misma, el de Santa Ana de Bolueta, constituida como anónima en 1.841 y convertida en colectiva desde 1.848. Es arriesgado emitir un juicio que culpe a la legislación intervencionista del raquitismo de las empresas industriales españolas de los dos primeros tercios del s. XIX. Y lo es porque utilizando el mismo tipo de dato se puede sostener la opinión contraria. En 1.852, la colectiva Fabril Algodonera prefirió adoptar la forma anónima. En 1.853 siguió el mismo camino la antigua comanditaria. La Algodonera, en 1.863 La Herculana, de desagüe y explotación de minas de Sierra Almagre-
ra y en 1.868 Robles y Compañía se transformó en la Metalúr-
gica de Vinuesa. Hay, pues, que seguir buscando factores explicativos al margen de una legislación que sirvió como te-

(702) Son en realidad 29, si exceptuamos los tres bancos existentes en 1.847 y que ya estaban autorizados por Real Decreto.

lón de fondo a muy diferentes conductas.

De las 53 sociedades autorizadas entre 1.847 y 1.854, 38 eran anteriores a aquél año y sólo 15 de nueva creación. 1.849 y 1.850 resaltan como los años en los que se autorizó la continuación de más sociedades y 1.853 como un pico desta
cable en la legalización de nuevas compañías.

Podemos considerar que en 1.851 estaba muy avanzado el proceso de adaptación de las viejas entidades con el 77% ya autorizadas, y que en 1.852 comienza sin solución de conti
nuidad la creación de nuevas asociaciones (703).

El enorme crecimiento relativo de 1.853 (autorización de siete nuevas sociedades y dos antiguas) es un reflejo de la recuperación económica. Esta fase alcista fue limitada, en el aspecto que nos ocupa, en 1.854, año de revolución y trans
formación política, y se reanuda con fuerza en 1.855 y 1.856, años que no conocieron quiebras ni liquidaciones de so
ciedades.

Las leyes de ferrocarriles, Bancos y sociedades de crédi
to rindieron sus frutos a partir de 1.856. Entre este año y 1.864 se crearon 112 sociedades, lo que significa un 77% de las constituídas hasta la fecha y un 74% si consideramos todo el período (704).

Dentro de esta etapa de aumento del ritmo de creación de sociedades por acciones cabe distinguir tres fases. La prime
ra abarca los años 1.856-57, en los que aparecen 41 nuevas

(703) En 1.850 hubo dos precedentes: La Oportuna (minera) y la Fundición Barcelonense.

(704) El cálculo está hecho sin considerar las creadas antes de 1.847 y refrendadas entre este año y 1.858.

sociedades y en los que la única disolución efectuada no es si no una transformación: la Caja de Descuentos Zaragozana, crea da en 1.848 se convierte en el Banco de Zaragoza.

Entre 1.858 y 1.862 se interrumpe el ritmo desmesurado de crecimiento. La saturación del mercado y la repercusión de la crisis de 1.857 (especialmente en el sector del seguro) son factores que explican la disminución de la creación de nuevas sociedades y la existencia de quiebras que son porcen tualmente muy importantes en 1.861 (tres sociedades de segu ros, una textil y La Industrial Quincallera).

En 1.863-64 se produce una nueva fase de recuperación que, sin embargo, tiene menor dimensión que la del bienio 1.856-57. El número de sociedades creadas cada año queda lejos de las cifras de 1.857 y sólo superaron ligeramente las de 1.856. La crisis económica comenzó a dejarse sentir en 1.864, lo que aquí se manifiesta en la drástica reducción de las nue vas iniciativas (que incluso desaparecen en 1.867) y en el crecimiento del número de quiebras. Las cifras de 1.866 a 1.868 nos indican la profundidad de una crisis que aquí se refleja en que estos tres años conocieron una disminución del número global de sociedades de casi un 10%, no habiendo nin-guna constitución en 1.867.

El movimiento descrito y que queda reflejado en las co lumnas 1 y 2 del cuadro IV,9 queda matizado si consideramos la número 3, que refleja las modificaciones de capital con sagradas por la legislación —teóricamente todas— entre 1.848 y 1.868.

CUADRO IV,9
SOCIEDADES POR ACCIONES: CONSTITUCION, DISOLUCION
Y MODIFICACIONES DE CAPITAL (1.847-1.868)

AÑOS	1 AUTORIZACIONES (a)		2 DISOLUCIONES (c)		3 MODIFICACION CAPITAL	
	nueva creación	anteriores a 1.848	nueva creación	no refrendadas	Incremento	Disminución
1.847		4 (b)				
1.848		6				
1.849		13		8	1	
1.850	2	9		1		
1.851		4		1	1	
1.852	2	1				
1.853	7	2	1	2		
1.854	4	2				2
1.855	8	1			1	
1.856	15					
1.857	26		1		2	
1.858	6	1			1	1
1.859	8		2		1	1
1.860	4		1		3	2
1.861	10		5		3	2
1.862	8		1		6	
1.863	17				3	1
1.864	18		4		4	1
1.865	6		1		3	1
1.866	3		5		3	3
1.867	-		8			
1.868	3		6		1	

FUENTES: Colección Legislativa de España, años 1.847 á..1868.

Anuario Estadístico de España, 1.858, 1.859-60, 1.860-61, 1.862-65 y 1.866-67.

NOTAS : (a) Excluyo las autorizaciones provisionales de compañías de ferrocarriles, Bancos y sociedades de crédito, reseñando únicamente la autorización definitiva. También quedan fuera el Banco de España (1.856) y sus sucursales: Valencia y Alicante (1.858) y Cartagena (1.864).

(b) Se trata de la sociedad Industrial Malagueña, autorizada según la legislación provisional de 1.847 y los tres Bancos de emisión, que no tuvieron que obtener nueva autorización.

(c) A efectos de no distorsionar las cifras, las transformaciones de sociedades (generalmente a sociedades de crédito) se anotan como disolución y como creación. En este cuadro no tiene tanta importancia como en el desglose de las sociedades por sectores.

CUADRO IV,10

NUMERO DE SOCIEDADES POR ACCIONES
EXISTENTES EN CADA AÑO (1.847-1.868)

AÑO	NUMERO	AÑO	NUMERO
1.847	4	1.858	111
1.848	10	1.859	117
1.849	23	1.860	120
1.850	34	1.861	125
1.851	38	1.862	132
1.852	41	1.863	149
1.853	49	1.864	163
1.854	55	1.865	168
1.855	65	1.866	166
1.856	79	1.867	158
1.857	104	1.868	155

FUENTE: cuadro IV,9, . Columna 1-columna 2, excluyendo del cómputo las sociedades no refrendadas por no estar contabilizadas previamente, ya que son de creación anterior a 1.847.

La mencionada columna nos refleja tres episódicos incrementos en 1.849 (Caja de Descuentos Zaragozana), 1.851 (Navegación e Industria) y 1.855 (La Fabril Algodonera) así como dos disminuciones en 1.854 (dos compañías de seguros). A partir de 1.857 las disposiciones sobre este tema aumentan, siguiendo la complejización del mercado de capitales y reforzando la tendencia desde 1.860. En 1.866 son tantas las compañías que incrementan su capital (2 ferroviarias y la "Mina Pública de Aguas de Tarrasa" como las que lo disminuyen (una metalúrgica, una textil y un almacén de depósitos (705)). En 1.867 no hay movimiento de capitales que se añada a las 8 sociedades quebradas y en 1.868, el Banco de Jerez de la Frontera amplía su capital.

La descripción de la evolución global, para que cobre su verdadero sentido debe ir acompañada de su desglose por sectores, cosa que se realiza en los cuadros IV,11 y IV,12 y en los gráficos IV-1 y IV-2.

Se ha consignado el número de sociedades existentes cada año, en grandes grupos. El bancario se ha dividido en las tres formas usuales en la época (Bancos de emisión, banca y giro y sociedades de crédito); el ferrocarril se ha separado, así como los seguros, dadas las peculiares características de estos sectores. El resto se ha englobado en la última columna, que se desglosa en el cuadro IV,12. Se ocupa de las sociedades fabriles e incluye, asimismo, el transporte —excep

(705) Metalúrgica de San Juan de Alcaraz (1.854), La España Industrial (1.848) y la Compañía Gaditana del Tirocadero.

to ferrocarril— los servicios y las empresas de aprovechamiento de aguas y canalización. Es decir, que se ha preferido no distorsionar las cifras de ferrocarril englobándolo bajo el concepto "obras públicas" a al vez que éstas pueden ser fácilmente restadas —si así se juzga conveniente— con una operación muy simple sobre el cuadro IV,12. Esta solución es sumamente inconveniente cuando tratamos el capital de las compañías. En ese caso, las obras públicas —de alto capital— se han separado de las manufacturas.

El gráfico IV-1 refleja el número de sociedades existentes cada año desglosado en cuatro sectores, ya que las sociedades bancarias —desagregadas en el cuadro IV,11— se contemplan en conjunto.

Sobre las fases anteriormente diseñadas, los cuadros por sectores permiten matizar. La curva B (Manufacturas y otros) es la que marca la evolución de la curva A (Totales) hasta 1.855. En esta fecha, la pendiente de B se suaviza y se separa de A pues el crecimiento lo absorbe en su casi totalidad el ferrocarril (D).

Desde 1.856 hasta 1.865 es la Banca la que sufre un crecimiento más espectacular, multiplicándose el número de sociedades por 4'6. En 1.856 se crearon seis sociedades de crédito y un Banco de emisión (706). En 1.857, seis Bancos(707).

(706) Sociedad General de Crédito Mobiliario Español, Compañía General de Crédito en España, Sociedad Española Mercantil e Industrial, Sociedad Catalana General de Crédito, Crédito Mobiliario Barcelonés y Unión Comercial.

(707) Bancos de Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Santander, Bilbao y la Coruña.

CUADRO IV,11

NUMERO DE SOCIEDADES POR ACCIONES
EXISTENTES CADA AÑO (1.847-1.868): SECTORES (I)

AÑOS	1 BANCOS DE EMISION	2 BANCA Y GIRO	3 S. CREDITO	4 FERROCARRIL	5 SEGUROS	6 (a) INDUSTRIA (Y OTROS)
1.847	3					1
1.848	3	2				5
1.849	3	2		1		17
1.850	3	2		2	1	26
1.851	3	2		2	3	28
1.852	3	2		3	3	30
1.853	3	2		2	4	38
1.854	3	2		2	4	44
1.855	3	2		6	5	47
1.856	4	3	6	6	8	51
1.857	10	3	6	10	16	59
1.858	10	3	7	13	17	61
1.859	10	3 (+1 -1)	7 (+1 -1)	16	17	64
1.860	11	3	8	16	16	66
1.861	11	3	12	21	13	65
1.862	12	3	17	23	13	64(+1 -2)
1.863	15	5	23	25	13	68
1.864	21	3	34	25	14	66
1.865	21	3	36	26	15	67(+2 -1)
1.866	20	3	33	26 (+1 -1)	15	69
1.867	20	3	26	26	14	69
1.868	19	3	21	27	14	71

FUENTE: v. cuadro IV,9.

NOTA : (a) Se incluyen las obras públicas (canales), que se han desagregado de la columna 4 (ferrocarriles), junto a las sociedades industriales y de servicios.

CUADRO IV,12
 NUMERO DE SOCIEDADES POR ACCIONES EXISTENTES
 CADA AÑO (1.847-1868): SECTORES (II)

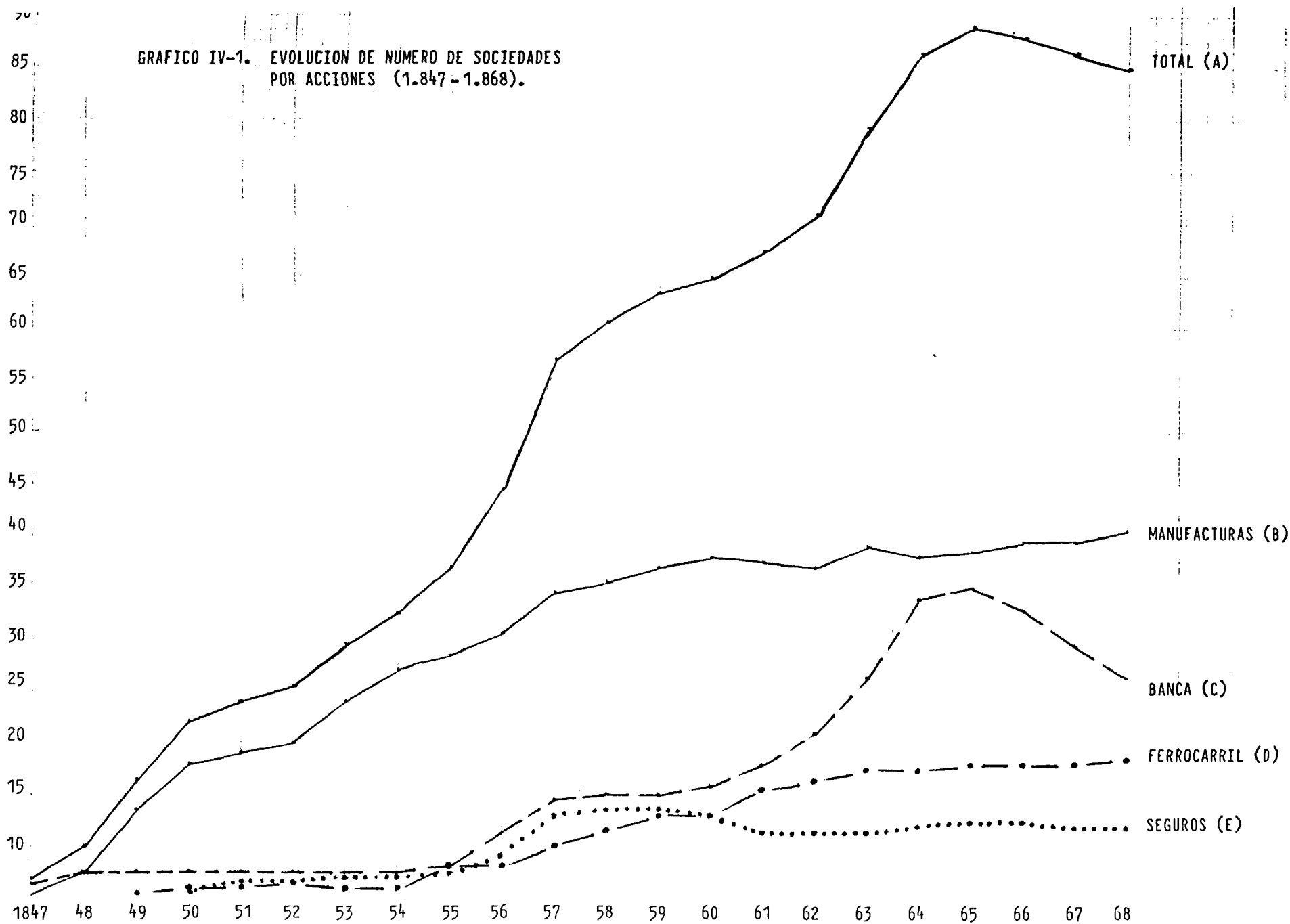
AÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.847	1								
1.848	2		1						2 (a)
1.849	4		3	1	1	2	1		5 (b)
1.850	5	3	3	2	1	5	1		6 (c)
1.851	5	3	4	2	1	5	1		7 (d)
1.852	6	3	4	2	1	6	1		7
1.853	11	3	4	2	2	6	1	1	8 (e)
1.854	11	5	4	2	3	6	1	1	11 (f)
1.855	13	5	4	2	3	7	1	1	11
1.856	14	6	4	3	4	7	1	1	11
1.857	16	9 (g)	4	3	4	7	1	2	13 (h)
1.858	17	9	4	3	4	7	1	2	14 (i)
1.859	17	9	4	3	7	7	1	2	14
1.860	17	9	4	3	7	9	1	2	14
1.861	16	9	4	3	7	9	2	2	13 (j)
1.862	15	9	4	3	7	9	2	2	13
1.863	15	11	4	3	7	9	3	2	14 (k)
1.864	14	11	4	3	7	9	3	2	13 (k)
1.865	14	11	4	2	8	9	3	2	14
1.866	14	11	4	2	9	10	3	2	14
1.867	14	11	4	2	9	10	3	2	14
1.868	14	12	4	2	9	11	3	2	14

FUENTES: v. cuadro IV,9.

- NOTAS : (1) Textil.
 (2) Minería y Metalúrgia.
 (3) Fabricación Papel.
 (4) Navieras y Transporte Marítimo.
 (5) Alumbrado Gas.
 (6) Aguas y Canalización.
 (7) Transportes Terrestres, menos ferrocarriles.
 (8) Curtidos.
 (9) Otros.
- (a) Almacén y taller de coches.
 (b) Un balneario, una de anticipos a labradores y una de objeto desconocido.

- (c) Una de imprenta.
- (d) Fomento agrícola.
- (e) Fabricación bujías.
- (f) Construcción; fabricación porcelana; fabricación objetos quincallería.
- (g) Dos siderúrgicas
- (h) Dos fábricas de harinas.
- (i) Fábrica de azúcar.
- (j) Se disuelve la Industrial quincallera.
- (k) Una de construcción —El ensanche y Mejora de Barcelona— que se conver
tirá el siguiente año en sociedad de crédito.

GRAFICO IV-1. EVOLUCION DE NUMERO DE SOCIEDADES
POR ACCIONES (1.847-1.868).



El Bienio 1.856-57 es verdaderamente excepcional pues es un momento en el que se desarrollaron todos los sectores reseñados. Aparte lo mencionado para el bancario, en 1.856 se crearon tres nuevas compañías de seguros, una textil, una metalúrgica (la Maquinista Terrestre y Marítima, el Gas Reusen se y una de navegación). Todas en Cataluña. En 1.857 el crecimiento es aún mayor, con 4 de ferrocarriles, ocho de seguros, dos textiles, 1 minera, dos siderúrgicas, 1 de curtidos y dos fábricas de harinas.

El crecimiento excepcional se frenó entre 1.858 y 1.860, años en los que el sector bancario se estabiliza y el del seguro se estanca, afectado por la crisis. La disolución de estas compañías, no obstante, se retrasará hasta después de esta fecha, en que incluso se promulgó una disposición legislativa para facilitar la liquidación de las compañías catalanas (R.O. de 20 de abril de 1.860).

Este sector y este problema merecen un mayor comentario. Hemos tenido ocasión de observar que el seguro fue el campo en el que la asociación de capitales tuvo un desarrollo más temprano, debido a varios factores. Destacaremos aquí su necesidad, pues es una fórmula idónea de disminuir los riesgos mediante una pequeña aportación extraordinaria que los comerciantes están dispuestos a efectuar. Desde otro punto de vista, se revela —aún en época de precaria teorización estadística— como un negocio lucrativo, que exige escaso desembolso y proporciona sustanciosos dividendos. Como fue mencionado, mientras el desembolso inicial del resto de las sociedades desde

1.848 se estipulaba en torno a un 20%, desde 1.850 se legali
zó el de un 6% para estas sociedades. Hemos señalado también
(Parte I, cap. 3) que, respondiendo a estas premisas, las com
pañías de seguros tuvieron un desarrollo muy temprano adqui
riendo el carácter de asociación de larga duración desde el
último tercio del siglo XVIII, asociadas al comercio. En ese
momento, la forma adoptada era la de compañías comanditarias
por acciones, que incluían la cláusula de limitación de res-
ponsabilidad.

A falta de una exploración detallada de los Archivos de
Protocolos de Barcelona, Cádiz, Bilbao y Valencia, como puer
tos más importantes, hay elementos de juicio para aventurar
que el sector que entró en crisis a finales del siglo XVIII y
principios del XIX no se recuperó hasta la década de 1.840.

En 1.848 existían 11 sociedades de seguros constituidas
y una anunciada. En su mayoría tenían un elevado nominal y un
escaso desembolso y no sobrevivieron a la crisis de 1.845-48
La nueva legislación autorizó cuatro. Una en 1.850, dos en
1.851 y 1 en 1.853. El sector sufrió un importante desarro-
llo entre 1.855 y 1.857, siguiendo la fase alcista.

La crisis de 1.857 ha sido justamente llamada por Fonta-
na "crisis de los seguros" (708). Nuestro indicador muestra
que aún en 1.858 se creó una nueva entidad, "La Garantía", co
sa que puede ser explicada por la tardanza en la tramitación
de su autorización. De hecho, apenas funcionó pues su disolu

(708) J. Fontana, "La vieja Bolsa...".

ción se confirmó en mayo de 1.860.

De las 16 compañías de seguros creadas hasta 1.857, 13 es taban domiciliadas en Barcelona, dos en Madrid y una en Valencia. 10 de ellas, se dedicaban exclusivamente al seguro marítimo. La crisis de 1.857 repercutió de forma espectacular en estas sociedades que incluso, para facilitar su disolución conocieron la R.O. de 20 de abril de 1.850. Esta disposición fue aprovechada por una sociedad este mismo año y por otras tres catalanas en 1.861 y aún en 1.867 quebró una sociedad catalana dedicada al seguro marítimo. Hasta 1.864 no se volvió a crear otra sociedad en el sector. Tanto la constituida este año como la formada en 1.865 lo fueron (en Barcelona) para atender el ramo de incendios.

Entre 1.858 y 1.860 crecen los otros grupos. El ferrocarril aumentó en seis sociedades y entre las industriales destacan las dedicadas al alumbrado de gas, con tres nuevas empresas en 1.859.

A partir de 1.860 y hasta 1.864 el sector bancario crece espectacularmente. Diez nuevos Bancos de emisión y treinta y una sociedades de crédito se extienden por toda la geografía española. A su sombra crece el ferrocarril y, sin embargo, como ya señaló Tortella, la inversión en industria se estanca (709). En este sector no hubo creación de sociedades sino en 1.863, fecha en la que se constituyeron dos sociedades domiciliadas en Madrid (La Reformadora de Carruajes y la Hercu

(709) G. Tortella, Los orígenes..., p. 210.

lana, para la explotación de las Minas de Sierra Almagrera), una en Málaga (Ferrería del Angel) y una en Barcelona, La Sociedad del Ensanche y Mejora de Barcelona, que un año después se convertiría en la Sociedad de Crédito y Fomento de Barcelona.

La crisis de 1.866 se nota particularmente en las sociedades de crédito (3 liquidaciones este año, 7 en 1.867 y 5 en 1.868). La caída de la curva que refleja esta evolución (gráfico IV-1,C) es la responsable del descenso de la del número total de sociedades (A). La manufactura, que apenas había tenido participación en el capital invertido en España en la década anterior no sufrió la crisis con tanta virulencia. En 1.866 se creó una nueva compañía para el alumbrado por gas (Sevilla) y en 1.868 la de abastecimiento de aguas de Jerez de la Frontera y la Metalúrgica de Vinuesa. Ninguna sociedad quebró en estos años.

En la década anterior, el capital, tanto nacional como extranjero, había buscado unas inversiones seguras (garantizadas por el Estado) y la industria fue abandonada en gran medida, quedando "desvalida", por utilizar un certero calificativo de Tortella (710). La industria —escasa— siguió financiándose mediante fórmulas de compañía común. Esta situación no fue buscada deliberadamente, claro está, pero fue un efecto derivado de la política de promoción ferroviaria de los gobiernos. Este enorme sector protegido fue una competen

(710) Ibidem, cap. VI.

cia demasiado fuerte para la industria, cuyo atractivo quedaba muy disminuido ante el común de los ahorradores.

El período se cierra con 14 textiles, 12 mineras, 11 empresas de canalización y 9 para el alumbrado de gas. Un panorama bien pobre en los albores del último tercio del siglo XIX.

El gráfico IV-2 muestra la importancia (en %) que tenían cada uno de los sectores expresados en el gráfico IV-1 a lo largo del período considerado. Banca, seguros y ferrocarril unidos tienen una importancia inferior al 50% hasta 1.862. El significado del sector bancario aparece sobreestimado en los primeros años, hasta que se consumó la adaptación del resto de las sociedades a la nueva legislación.

A partir de 1.855 se observa como la importancia relativa de las sociedades industriales va disminuyendo en favor, sobre todo, del sector bancario. En 1.865 alcanza su punto más bajo (a sólo un 8% de distancia de la Banca), para volver a aumentar en los tres últimos años, no tanto por su propio crecimiento cuanto por la crisis bancaria y ferroviaria.

La evolución del capital de las sociedades es un indicador mucho más adecuado para analizar la evolución de las inversiones. Desgraciadamente, no poseemos series completas y fiables en este aspecto. La información del Anuario Estadístico es, como ya reseñamos, muy desigual.

De ahí que nos limitemos a reproducir los datos elaborados por Tortella para las compañías bancarias e industriales (cuadro IV-13). Para estas últimas se ha completado la infor

GRAFICO IV-2. PORCENTAJE DE LOS DIFERENTES SECTORES SOBRE EL NUMERO TOTAL DE SOCIEDADES POR ACCIONES (1.847 - 1.868).

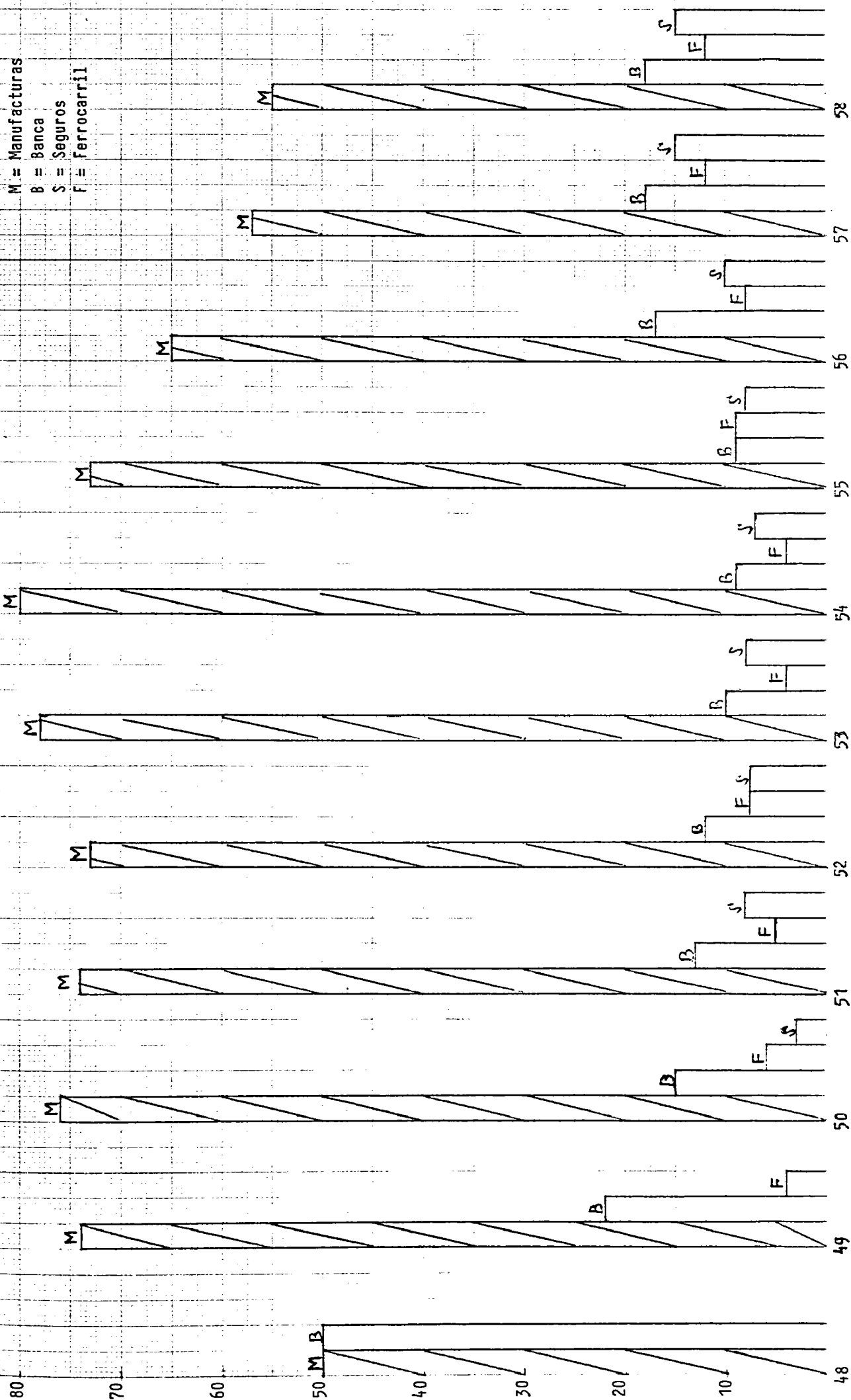
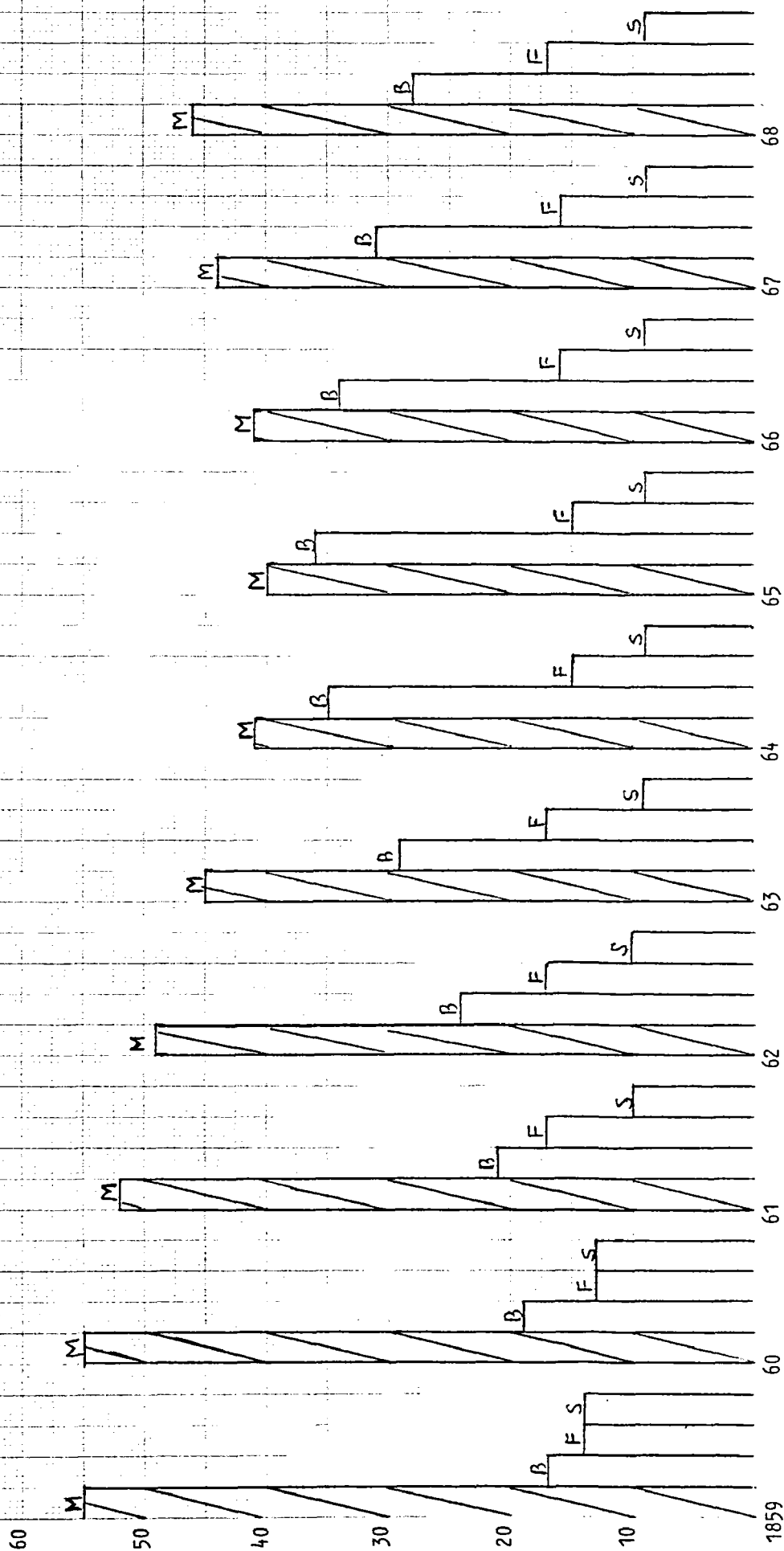


GRAFICO IV-2 (2).



CUADRO IV,13
 COMPAÑÍAS POR ACCIONES BANCARIAS E INDUSTRIALES:
 CAPITAL DESEMBOLSADO Y MEDIO: 1.847-1.868
 (en miles de pesetas)

AÑOS	1 BANCARIAS		2 INDUSTRIALES		
	C. DESEMBOLSADO	C. MEDIO	C. DESEMBOLSADO	C. MEDIO	
1.847			1.200	1.200	
1.848			9.800	1.450	
1.849			21.956	1.830	
1.850			5.353	595	
1.851			2.700	1.350	(+ 625)
1.852			2.500	2.500	
1.853			10.200	1.275	
1.854			9.800	1.633	
1.855	1.000	1.000	3.500	1.750	(+ 500)
1.856	10.500	2.100	9.325	2.331	
1.857	8.750	1.458	26.375	3.297	(+ 1.250)
1.858	750	750	1.140	570	(- 815)
1.859	5.750	2.875	1.088	363	(+ 500)
1.860	1.750	875	100	100	(- 750)
1.861	6.600	1.650	0	0	
1.862	9.250	1.541	794	794	
1.863	15.914	3.183	3.000	1.500	
1.864	40.109	2.005	-	-	(+ 63.000)
1.865	12.500	6.250	7.700	3.850	(- 3.500)
1.866	-		2.850	2.850	(- 4.850)
1.867	-		0	0	
1.868	-		9.000	4.500	

FUENTE: Columna (1): G. Tortella, Los orígenes..., cuadro VI,4, p. 209.
 Columna (2): Colección Legislativa de España, años 1.847-1.857 y 1.868. A partir de 1.858 y hasta 1.867, Tortella, Los orígenes..., cuadro VI,3 p. 206.

NOTAS : —Se ha prescindido de todas las compañías de obras públicas, que por su volumen podían distorsionar las cifras.
 —Entre paréntesis, los aumentos y disminuciones de capital.
 —Las discrepancias con el cuadro de Tortella se deben únicamente al empleo de información anterior a 1.858 y por ello: a) a la presencia de sociedades que en aquella fecha estaban disueltas y b) a la consignación del capital desembolsado en el momento de la fundación y no en 1.858.

mación de los años 1.847, a 58, 1.867 y 1.868 con datos obtenidos a partir de la Colección Legislativa de España. Además, se han incluido entre paréntesis los incrementos y reducciones de capital en los diferentes años. Estas cifras refuerzan la idea de que la inversión industrial mediante sociedades por acciones decreció de forma importante frente a la bancaria (reconducida hacia el ferrocarril) a partir de 1.858. Las cifras son menos espectaculares porque se han eliminado de la serie "las tres grandes compañías francesas, la sociedad Española Mercantil e Industrial, el Crédito Mobiliario Español y la Compañía General de Crédito en España" (711). Su capital era fundamentalmente francés y mucho mayor que el de las empresas españolas. Respectivamente, 15'2, 17'1 y 10 millones de pesetas.

CUADRO IV,¹⁴
CAPITAL NOMINAL DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES
(en miles de pesetas)

AÑOS	BANCOS	S. CREDITO	GIRO Y BANCA	INDUSTRIALES	OO.PP.	SEGUROS
1.859	32.000	355.750	23.750	99.818	391.925	131.000
1.861	39.000	387.000	35.000	95.986	565.369	101.000
1.864	36.000	717.700	35.000	118.440	968.833	112.750

FUENTE: Anuario Estadístico de España, 1.859-60 y 1.862-65

NOTAS : En 1.861 las sociedades de obras públicas habían emitido más de 100 millones de pesetas en obligaciones; las sociedades de crédito 332 millones.

En 1.864, las sociedades de obras públicas habían emitido casi 1.400 millones de obligaciones (1.300 en circulación); las de crédito, 63 millones (poco más de 30 en circulación).

(711) G. Tortella, Los orígenes..., p. 209.

El cuadro IV,14 compara el capital nominal de los distintos sectores, lo que marca aún más las distancias en favor de obras públicas y sociedades de crédito, aún considerando que su desembolso sea pequeño, si tenemos en cuenta que éstas, a diferencia de las industriales, podían emitir obligaciones y, de hecho, lo hacían en una cantidad muy elevada. En él se ha prescindido del Banco de España pero se han incluido las tres sociedades de crédito mencionadas.

Podemos concluir que la sociedad por acciones era una figura poco extendida en España en el sector industrial. Que la compañía comanditaria por acciones, sujeta a las mismas condiciones que la anónima, fue abandonada en favor de esta. Que las sociedades existentes estaban concentradas en Madrid y Barcelona, y que el protagonismo de estas decrece de una forma espectacular a partir de 1.858, que es precisamente el momento en el que comienza a haber más creaciones de sociedades en otras provincias. Son fundamentalmente bancos y sociedades de crédito, que quizá hubieran sido unos eficaces canalizadores de la inversión de no mediar la crisis que cierra este período.

4.4.- 1.868-1.923.

La liberalización de la constitución de sociedades anónini desde 1.869 no significó un inmediato cambio en la conducta de los promotores e inversores españoles del momento. Una mamanifestación de ello es el lento desarrollo de la industrialilización en España. La variable aquí analizada (número y capital de las sociedades anónimas) es difícil de medir entre 1.868 y 1.886 pero se puede afirmar con carácter general a la espera de poder recopilar y elaborar nuevos datos que, por un lado, la eclosión de iniciativas por parte de los "capitatalistas", tan esperada por los legisladores del 60, no se proprodujo; por otro, que el ahorrador español —y no sólo él— manmantuvo su preferencia por los valores seguros (efectos públipúblicos, títulos de renta fija).

Una significativa muestra del número de sociedades anóninimas en 1.884 queda reflejada en el cuadro IV,15.

No creemos refleje el número total de anónimas dado el nivel de la organización estadística del país en estos momenmentos, pero es la más completa que poseemos para esta fecha. Debe ser tomada como un índice de la importancia de la asoasociación de capitales en los diferentes sectores económicos en una fecha inmediatamente anterior a la entrada en vigor del nuevo Código de Comercio.

CUADRO IV,15
SOCIEDADES ANONIMAS EN ESPAÑA, 1.884

SECTOR	1 NUMERO	2 CAPITAL NOMINAL (miles pesetas)	3 CAPITAL MEDIO
FF.CC	22	823.300	37.423
Giro y Banca	16	281.175	17.573
Obras Públicas	15	123.690	8.246
Industriales	42	74.549	1.775
Alumbrado	15	64.740	4.316
Seguros	11	50.750	4.613
Tranvías	22	43.880	1.995
Agrícolas	12	6.906	575
Varias	<u>56</u>	<u>125.595</u>	2.243
	211	1.594.585	

FUENTE: Reseña geográfica y Estadística de España, 1.885.

El ferrocarril es, con mucha diferencia, el sector que el mayor volumen de capital. Su nominal significa poco más de la mitad del total (51'6%) y el sector que le sigue, giro y banca, sólo alcanza el 17'6%.

La columna 3, que refleja el capital medio para cada sector es meramente indicativa, pues refleja realidades muy diversas. Revela, sin embargo, la gran diferencia de tamaño de la explotación media de cada grupo. Una vez más destacan los sectores ferroviario y de giro y banca y, en el extremo contrario, las pequeñas sociedades agrícolas cuya presencia, no obstante, es interesante, pues revela la lenta introducción de la anónima en este sector. Cabe destacar la importante pre-

sencia que están adquiriendo las eléctricas, que, como observaremos en párrafos sucesivos, se incrementará de forma espectacular en años posteriores, hasta desembocar en una obligada concentración, necesaria para evitar los problemas inherentes a la atomización característica durante todo el período considerado. (En 1.923 había en España, al menos, 462 sociedades anónimas en este sector (712)). Las sociedades industriales tienen un capital medio que no alcanza los dos millones de pesetas. Dentro de ellos, destacan las Minas del Pedroso, en Sevilla, con 12'5 millones o la textil La España Industrial, con 8 (713).

Como ya se ha reseñado, desde 1.886 disponemos de una fuente estadística de excepcional importancia: el Registro Mercantil. Sus Estadísticas generales por provincias y tipos de sociedades han sido utilizadas para elaborar los cuadros generales que se incluyen en estas páginas. Esta presentación sirve de marco a una reflexión general sobre el desarrollo del capitalismo español entre 1.886 y 1.923 y consideran de forma pormenorizada una evolución que ha sido presentada gráficamente para un período más amplio por Jiménez Araya (714).

(712) A.F.S.A., 1.924, pp. 309-486.

(713) Fundada, como se consideró en el apartado anterior en 1.847, tuvo durante todo el período aquí considerado una existencia próspera (v. A.F.S.A., 1.924, p. 975).

(714) I. Jiménez Araya, "Formación de capital...", especialmente los mapas incluidos en pp. 165 y 166.

NUMERO DE SOCIEDADES.

Esta variable es considerada como un indicador de las expectativas empresariales y se resume en el cuadro IV,16. En 1.886 se crearon 661 sociedades colectivas, 138 comanditarias y 55 anónimas. En 1.923, 767, 119 y 448, respectivamente. Este último año hay que añadir 267 limitadas, incorporadas al Registro desde 1.920.

La comparación entre 1.886 y 1.923 muestra que el número total de sociedades registradas cada año casi se ha duplicado. El análisis de las cifras correspondientes a cada grupo muestra que este incremento afecta de forma diferente a cada tipo de sociedad cuyos multiplicadores son 1'2 (colectivas), 0'9 (comanditarias) y 8'9 (anónimas). Es decir, que esta última figura se va asentando con fuerza en el período considerado, frente a una estabilización de las colectivas y un descenso de las comanditarias, que son preteridas frente a la sociedad de responsabilidad limitada.

Estas palabras iniciales sólo quieren mostrar la diferente situación al principio y al final del período. Entre ambos límites se producen oscilaciones en cuyo análisis en detalle no entramos para pasar a comentar los hitos más importantes.

La sociedad anónima ocupó el último puesto hasta 1.899, fecha en la cual superó a la comanditaria hasta 1.903. 1.904 a 1.907 son años de equilibrio entre estas dos formas de sociedad hasta que desde 1.908 adquiere la anónima un segundo puesto que no abandonará en el resto el período considerado.

CUADRO IV, 16
NUMERO DE SOCIEDADES MERCANTILES EN ESPAÑA,
(1.886-1.923)

AÑOS	NUMERO TOTAL DE SOCIEDADES	COLECTIVAS %	COMANDITARIAS %	R. LIMITADA %	ANONIMAS %
1.886	854	77	16		6
1.887	929	78	15		7
1.888	881	78	14		8
1.889	929	74	15		11
1.890	897	75	16		9
1.891	984	72	18		10
1.892	995	76	15		10
1.893	949	75	16		9
1.894	1.031	74	15		11
1.895	957	73	18		9
1.896	907	76	14		10
1.897	1.031	75	15		10
1.898	944	73	16		11
1.899	1.180	63	17		20
1.900	1.317	63	16		21
1.901	1.357	65	14		21
1.902	1.371	73	12		15
1.903	1.286	69	14		17
1.904	1.268	70	15		15
1.905	1.260	69	17		14
1.906	1.176	73	13		14
1.907	1.229	70	15		15
1.908	1.190	69	14		17
1.909	1.166	70	14		16
1.910	1.157	66	14		20
1.911	1.149	66	15		19
1.912	1.198	67	13		20
1.913	1.291	63	16		21
1.914	1.272	61	14		25
1.915	1.313	62	13		25

AÑOS	NUMERO TOTAL DE SOCIEDADES	COLECTIVAS %	COMANDITARIAS %	R. LIMITADA %	ANONIMAS %
1.916	1.684	59	14		27
1.917	2.413	50	21		29
1.918	2.556	50	20		30
1.919	3.016	56	15		29
1.920	3.085	56	12	7	25
1.921	1.947	56	8	9	27
1.922	1.431	48	8	15	29
1.923	1.641	47	7	16	30

FUENTE: Estadísticas del Registro Mercantil.

CUADRO IV,17

NUMERO DE DISOLUCIONES Y RESCISIONES DE SOCIEDADES(1.886-1.923)

AÑOS	Nº DE DISOLUCIONES	Nº DE RESCISIONES	
		TOTAL	PARCIAL
1.886	155	16	34
1.887	191	40	40
1.888	218	36	52
1.889	223	48	51
1.890	243	53	49
1.891	262	55	54
1.892	257	53	28
1.893	236	42	51
1.894	282	47	57
1.895	286	41	45
1.896	335	43	56
1.897	262	37	49
1.898	271	39	69
1.899	213	2	39
1.900	253	13	47
1.901	248	42	49
1.902	317	5	44
1.903	293	1	43
1.904	292	2	54
1.905	337	4	46
1.906	303	1	66
1.907	329	3	49
1.908	307	2	49
1.909	318	12	57
1.910	491	18	64
1.911	480	14	67
1.912	452	17	53
1.913	434	17	79
1.914	472	5	35
1.915	434	21	36

AÑOS	Nº DE DISOLUCIONES	Nº DE RESCISIONES	
		TOTAL	PARCIAL
1.916	529	13	44
1.917	579	2	49
1.918	653	21	73
1.919	737	19	102
1.920	1.161	42	125
1.821	1.871	2	84
1.922	1.369	196	114
1.923	1.024	43	87

FUENTE: Estadística del Registro Mercantil.

Existe pues una tardía y vacilante implantación de la anónima en España. La fecha de 1.899, que hemos considerado como la primera vez que la anónima abandonó el último puesto en el número de nuevas sociedades está claramente ligada al auge finisecular de la economía vasca, que en nuestro indicador se refleja en que entre 1.896 y 1.901, el Registro de Vizcaya ocupó el primer (4 años) y segundo lugar (2 años) por el volumen de capital inscrito.

Durante estos años, se crearon en Vizcaya 243 anónimas con un capital de casi 750 millones de pesetas. Para las mismas fechas, las cifras en Madrid son de 149 y 334'4 millones y en Barcelona, en la que el fin de siglo tuvo un significado bien distinto, 39 y 70'5 millones.

Hay que considerar, asimismo, la prosperidad asturiana, manifestada en nuestro indicador en que entre 1.898 y 1.903 el Registro de Oviedo ocupó el segundo lugar en 1.900 por la importancia de su capital inscrito, en tercer lugar en 1.898, 99 y 1.901, y en cuarto en 1.902 y 1.903. Estos años totalizaron en esta provincia 81 nuevas anónimas con casi 200 millones de capital social.

El segundo momento de auge de la anónima se produce entre 1.914 y 1.919, ligado a la coyuntura extraordinaria que supuso la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial. No obstante, la escasa eficacia de las nuevas empresas constituidas en un momento en el que excepcionalmente la competencia internacional estaba muy disminuida, se revelará muy pronto. El número total de nuevas sociedades descendió brus-

camente en 1.921 y, para las anónimas, se dividió por dos entre 1.919 y 1.922

Las conclusiones que por ahora podemos establecer son las siguientes:

1.- Lenta introducción de la figura de la anónima en España, según las cifras globales que hemos comentado. No superó definitivamente a la comanditaria hasta 1.906. Hasta 1.921, la colectiva supone más de la mitad de las nuevas creaciones y la pérdida de esta proporción se explica más por la decidida irrupción de la sociedad de responsabilidad limitada desde 1.920 que por un incremento de nuevas iniciativas en forma de anónima que, por el contrario, descienden entre 1.919 y 1.922. La industria española siguió mucho tiempo aferrada a las formas tradicionales de autofinanciación y de organización en base a las fórmulas de compañía personalista.

2.- La existencia de dos momentos de auge generalizado. El primero, en torno a 1.898-1.902 y el segundo, en torno a 1.914-1.920. El primero, muy localizado en el Norte y el segundo, más difundido, con ocasión de las circunstancias económicas excepcionales de que disfrutó nuestro país en la Primera Guerra Mundial. Ambas coyunturas alcistas se distinguen, sin embargo, por su falta de consistencia. Entre 1.902 y 1.909 la importancia de la anónima disminuye claramente frente a las personalistas (de un 21% se estabiliza a un 16%). Respecto al segundo período de auge, debemos considerar la repercsión de la crisis postbélica en la creación de anónimas, co-

mo ya hemos citado, aunque la figura no pierda su importancia relativa dentro del conjunto. El fin del período aquí considerado coincide precisamente con este momento de crisis y la posterior reorganización de la sociedad española, tanto a nivel económico como político.

3.- La correlación entre la legislación proteccionista o la excepcional limitación del mercado en el incremento del número de nuevas iniciativas. Este último aspecto ya ha sido comentado. La repercusión de la legislación proteccionista y de fomento a la industria nacional fue sin duda importante aunque aún no ha sido medida con exactitud. Sin duda este aspecto merece un estudio pormenorizado que contemple el problema a nivel doctrinal, político (Debates de Corte) y de opinión (prensa, folletos) y su repercusión en la economía (715).

4.- El desarrollo de la sociedad anónima fue desigual en las diferentes provincias, revelando la polarización de las

(715) Cabe citar, por ejemplo, la ley de 28 de junio de 1.898 de auxilio a las industrias perjudicadas por la pérdida de las colonias, ley de 14 de febrero de 1.907 de protección y fomento a la industria nacional, de 14 de julio de 1.909 para la industria naval. Las leyes de protección a la industria entre 1.914 y 1920 (especialmente las de 1.917 y 18) son analizadas en detalle en S. Roldán, J.L. García Delgado y J. Muñoz, La formación..., Asimismo hay que considerar la repercusión de la ley de 27 de marzo de 1.900, cuya tarifa III (utilidades), a que se debían ajustar las sociedades anónimas era mucho más fácil de burlar que la I (colectivas), aunque mis datos me indican que la repercusión de este hecho no es tan alta como considera Jiménez Araya "Formación...", p. 153. Ambas hipótesis necesitan una mayor apoyatura de datos. Por mi parte, considero que la evolución del número de colectivas en 1.900-1.095 (830-886-994-891-880-872) y la de las anónimas (271-279-207-217-194-180) no avalan la afirmación de que la ley fiscal motivara la disminución de colectivas y el incremento de anónimas.

actividades económicas. Los 38 años considerados aquí (1.886-1.923) muestran una concentración de la creación de sociedades en Madrid, Barcelona y Vizcaya, que es mucho más evidente aún en el caso del capital. En conjunto, estas tres absorben el 44% de las sociedades anónimas creadas en todo el período. Suelen ocupar los tres primeros lugares de la serie y sólo son sustituidos de forma episódica por otras provincias cuando en éstos se crea alguna gran sociedad (Banco, generalmente) (716).

En Vizcaya, el número de nuevas sociedades anónimas supera por primera vez al de comanditarias en 1.899 aunque a lo largo del período no abandone el segundo lugar, tras las colectivas. La misma situación se produce en Barcelona, en cuya industria tienen gran tradición las fórmulas personalistas. En esta provincia podemos situar el auge de la anónima a partir de 1.916 y, aunque la crisis postbélica tendrá una repercusión muy importante, la anónima alcanzará el primer lugar en número de nuevas sociedades a partir de 1.924 y a un nivel claramente superior a Madrid (717).

La capital de la nación tiene unas características especiales. La domiciliación de las anónimas en ella responde a la búsqueda de una renta de situación político-financiera y quizá a razones fiscales más que a la real implantación en la

(716) Una visión de conjunto de los diez primeros registros en períodos quinquenales, en J. Araya, cuadro A, p. 164; en períodos quincenales, Mapas de las pp. 166-67.

(717) Posteriormente se considera que este dominio en número sobre Madrid no se producirá en el capital, debido a la atomización de la industria catalana, al menor capital medio de las sociedades.

zona de las explotaciones (718). El alto capital medio de sus sociedades respecto a provincias mucho más industrializadas como Barcelona, refleja la situación. El alto número de eléctricas, mineras y ferrocarriles en Madrid, avalan estas afirmaciones.

CUADRO IV,18
NUMERO DE SOCIEDADES ANONIMAS CREADAS
EN MADRID Y BARCELONA (1.901-1.905 y 1.916-1.923)

AÑO	MADRID	BARCELONA
1.901	28	24
1.902	29	15
1.903	44	32
1.904	38	13
1.905	32	21
.....		
1.916	58	189
1.917	76	251
1.918	113	
1.919	152	334
1.920	154	252
1.921	90	165
1.922	72	121
1.923	99	136

FUENTE: Estadísticas del Registro Mercantil.

NOTA : Se han escogido estos años a efectos de comparación de la situación en el primer quinquenio del siglo XX y a partir de 1.916. Entre 1.911 y 1.915 las dos provincias tuvieron aproximadamente el mismo número de nuevas constituciones (media de 40 anuales). El salto, como afirmamos, se produjo en Barcelona a partir de 1.916.

5.- El cuadro número IV,17 revela una evolución ascendente del número de quiebras que es poco significativa en su conjunto hasta 1.920. Destacan los picos de 1.896 y 1.905 pero en conjunto no muestran una clara respuesta a la coyuntu-

(718) Sobre ésto, I. Jiménez Araya, "Formación...", pp. 153 y 1.69.

ra. Estos datos requieren, para su cabal entendimiento, un análisis por provincias así como del capital que suponen, que no está reflejado en las Estadísticas del Registro Mercantil. Muy significativas son sin embargo, las cifras de 1.920-1.923 que reflejan la honda repercusión de la crisis postbélica. Cuando las iniciativas han sido escasas, la repercusión de las épocas de contracción económica es relativamente pequeña. Cuando han sido elevadas (1.916-1.918), la caída es mucho más profunda.

CAPITAL DE LAS NUEVAS SOCIEDADES (1.886-1.923).

Sólo poseemos una serie completa del capital nominal de las sociedades de nueva creación, por lo que la lectura de las cifras del cuadro IV,19 debe tener en cuenta que no reflejan la cuantía de capital desembolsado y ni siquiera el puesto efectivamente en circulación cada año. Como fue descrito en otro lugar de este trabajo, el Código de Comercio de 1.885 no estableció sino exigencias puntuales sobre estos extremos (compañías de ferrocarriles).

El cuadro IV,19 muestra fielmente, sin embargo, las dimensiones de las nuevas sociedades y es útil para compararla diferencia de tamaño de los distintos tipos así como para evaluar su importancia relativa. El cuadro IV,20 refleja, por quinquenios, la dimensión media de las empresas. La serie se completa con el IV,21, que indica el volumen de acciones y obligaciones de sociedades ya constituidas que se pusieron en circulación cada año.

A diferencia de lo que observábamos al considerar el número de nuevas sociedades, cuando reparamos en el capital que representan, la anónima ocupa el primer lugar. Estas compañías representan más del 75% del capital inscrito en 27 de los 38 años considerados y, en todos ellos, más de la mitad.

La evolución del capital nominal de las sociedades anónimas tiene una gran oscilación y no siempre sigue la misma tendencia que el de las compañías personalistas. Bien es cierto que aquélla está distorsionada algunos años por la creación de grandes sociedades con alto volumen de capital. Hecha esta consideración, pasamos a comentar los datos que se reflejan en los cuadros IV,19 a IV,21:

El período se inicia con unos años de alto nivel de capital de las anónimas inscritas, que se sitúa entre los 190 y los 230 millones de pesetas/año. La misma época es menos fructífera para las personalistas, que tienen una evolución a la baja excepto en 1.890, fecha en que las colectivas inician una recuperación.

La etapa 1.892-1.890 significa un claro declive para la anónima, situándose la inscripción en una media de 83 millones, que descienden a 74 si exceptuamos del cálculo el año 1.894, único momento de crecimiento.

El auge vasco finisecular se refleja en estas tablas con la misma precisión que cuando considerábamos el número de sociedades constituidas. El incremento de capital es incluso superior al del número de empresas creadas, lo que no hace sino revelar la índole de las nuevas iniciativas ligadas a la

CUADRO IV,19

CAPITAL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN ESPAÑA

(1.886-1.923)

AÑOS	CAPITAL TOTAL (miles pesetas)	CAPITAL S. COLECTIVAS %	CAPITAL S. COMANDITARIAS %	CAPITAL S. R. LIMITADAS %	CAPITAL S. ANONIMAS %
1.886	242.621	15.7	4.3		79.8
1.887	269.139	13.5	7.9		78.6
1.888	264.126	14.4	4.1		81.3
1.889	310.786	11.5	4.5		83.9
1.890	236.515	11.4	8.2		80.4
1.891	288.277	15.3	4.4		78.9
1.892	121.112	34.6	10.4		55.0
1.893	133.465	24.3	8.6		67.0
1.894	191.608	19.5	8.6		72.0
1.895	119.724	24.3	16.8		58.9
1.896	97.229	34.5	8.0		57.5
1.897	135.359	26.6	11.4		62.0
1.898	116.002	25.1	8.8		66.1
1.899	368.187	9.2	7.2		83.6
1.900	540.403	7.7	7.1		85.2
1.901	878.860	6.4	3.4		90.2
1.902	439.752	10.1	7.7		82.2
1.903	379.708	14.4	7.8		77.8
1.904	205.148	24.9	11.8		63.3
1.905	229.657	24.9	14.8		60.7
1.906	461.558	10.5	4.7		84.8
1.907	511.618	6.7	5.3		88.0
1.908	330.399	11.7	7.6		80.7
1.909	216.613	16.1	10.2		73.7
1.910	253.567	13.1	6.4		80.5
1.911	308.275	10.7	3.1		86.2
1.912	298.712	11.8	6.5		81.7
1.913	197.321	13.7	8.0		78.3
1.914	163.439	22.2	7.5		70.3
1.915	250.934	13.9	3.1		83.0

AÑOS	CAPITAL TOTAL (miles pesetas)	CAPITAL S.COLECTIVAS %	CAPITAL S. COMANDITARIAS %	CAPITAL S. R. LIMITADAS %	CAPITAL S.ANONIMAS %
1.916	236.087	16.7	4.7		78.6
1.917	767.472	9.1	2.7		88.2
1.918	1.120.564	6.8	2.4		90.8
1.919	822.256	14.1	4.4		81.5
1.920	2.113.525	4.8	1.7	1.7	91.8
1.921	1.452.119	5.0	1.5	1.6	91.9
1.922	803.113	8.1	2.2	2.7	87.0
1.923	634.898	9.4	3.7	4.6	82.3

FUENTE: Estadísticas del Registro Mercantil.

CUADRO IV,20
NUMERO, CAPITAL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS,
EMISION DE ACCIONES Y OBLIGACIONES

AÑOS	NUMERO	CAPITAL TOTAL NUEVAS SOCIEDADES	EMISION ACCIONES	EMISION OBLIGACIONES
1.886	55	193.699	28.121	98.000
1.887	65	211.482	60.598	142.696
1.888	72	215.249	34.722	121.670
1.889	100	260.880	57.841	127.700
1.890	80	190.220	13.223	99.380
1.891	98	227.323	231.300	230.650
1.892	97	66.588	157.875	46.710
1.893	89	89.530	15.040	210.182
1.894	118	137.445	30.800	196.581
1.895	85	70.499	21.073	47.290
1.896	94	55.890	22.214	5.280
1.897	98	83.893	17.211	197.849
1.898	104	76.745	15.786	94.010
1.899	235	307.975	271.495	93.440
1.900	271	460.747	180.339	103.084
1.901	279	792.387	262.022	321.635
1.902	207	361.394	463.989	125.089
1.903	217	295.250	1.265.415	467.668
1.904	194	129.925	593.005	87.960
1.905	180	139.330	85.442	210.168
1.906	166	391.473	405.062	80.250
1.907	177	449.901	1.419.220	66.256
1.908	202	266.611	308.658	212.713
1.909	191	159.648	293.247	591.648
1.910	231	204.255	283.700	492.050
1.911	217	265.829	3.816.578	383.043
1.912	237	244.056	252.935	219.814
1.913	269	154.507	2.330.784	547.178
1.914	315	114.917	142.366	706.415
1.915	332	208.470	94.407	159.100

AÑOS	NUMERO	CAPITAL TOTAL DE NUEVAS SOCIEDADES	EMISION ACCIONES	EMISION OBLIGACIONES
1.916	458	185.492	395.100	2.123.320
1.917	613	677.162	502.097	31.208.973
1.918	780	1.016.973	669.214	1.285.358
1.919	865	670.424	1.092.109	430.744
1.920	776	1.939.561	1.472.989	976.123
1.921	532	1.335.274	596.222	582.317
1.922	410	698.698	510.884	930.535
1.923	488	522.391	812.290	939.383

FUENTE: Estadística del Registro Mercantil.

CUADRO IV,21

CAPITAL MEDIO DE LAS SOCIEDADES DE NUEVA CREACION(por quinquenios, en miles de pesetas)

PERIODOS	COLECTIVAS	COMANDITARIAS	ANONIMAS
1.886-1.890	51	111	2.880
1.891-1.895	51	93	1.214
1.896-1.900	47	115	1.228
1.901-1.905	58	160	1.595
1.906-1.910	46	135	1.522
1.911-1.915	42	73	721
1.916-1.920	60	64	1.285
1.921-1.923	77	164	1.788

FUENTE: Estadística del Registro Mercantil.

NOTA : Las sociedades de responsabilidad limitada, inscritas entre 1.920 y 1.923 tenían un capital medio de 127.000 pesetas.

siderurgia vasca, y con necesidad de un alto volumen de inversión.

El capital que representan las nuevas sociedades anónimas sufre un brusco descenso entre 1.902 y 1.905, iniciándose una desigual recuperación entre 1.906 y 1.916. Las medidas de política económica que se ensayaron en estos años con amplio debate y vacilaciones, no tuvieron el éxito esperado, a juzgar por su nula repercusión en la creación de nuevas anónimas. Como destacamos, sólo tendrán éxito en sectores concretos cuyo estudio está necesitado aún de mayor número de trabajos (carbón, navieras, eléctricas...).

Será una causa externa la que proporcione una nueva oportunidad —otra vez perdida— para el desarrollo del capitalismo español. Entre 1.917 y 1.921 el volumen de capital de las nuevas compañías aumenta espectacularmente.

Hemos visto como el incremento del número de sociedades anónimas se inició en 1.916. No ocurre lo mismo con el capital, lo que da un índice de la dimensión de las nuevas empresas. Por el contrario, en 1.921, fecha en la que desciende el número de nuevas inscripciones, se mantiene muy alto el nominal. La imagen se matiza cuando consideramos las nuevas emisiones de acciones y obligaciones, que reflejan con más exactitud la coyuntura: el crecimiento se inicia en 1.916 y se frena en 1.920 (v. cuadro IV, 20).

El análisis de estas cifras globales no hace sino poner una vez más en evidencia el carácter débil y polarizado del capitalismo español. La debilidad se muestra en la ausencia

de una tendencia sostenida de crecimiento, en la gran sensibilidad a la constitución de una sola sociedad, cuyo alto capital puede distorsionar las cifras y en la dimensión del capital medio de las empresas.

Este último aspecto ha sido considerado en el cuadro IV, 21. Se han agrupado los datos por quinquenios para eliminar los efectos puntuales y buscar la tendencia de la evolución de la dimensión media de las empresas. Las cifras consignadas muestran que el capital medio de las anónimas disminuye a la vez que se eleva el de las personalistas. Esto indica la generalización de la figura de la sociedad anónima, que escapa de la colosal empresa para incorporarse a un número cada vez mayor de actividades. Este, que es sin duda un aspecto positivo —y tardío— en la construcción del capitalismo, queda matizado cuando se observa que la dimensión media reflejada es ciertamente pequeña. Aún queda reforzada esta afirmación cuando se considera la participación de los distintos sectores.

De forma general, observamos que el período se inicia con un capital medio cercano a los tres millones y que desciende a 1'8 en su final. El brusco descenso del segundo período considerado refleja la caída de 1.892 y 1.895. En 1.896, el capital medio de las anónimas era de 595.000 pesetas, iniciándose una recuperación en los años siguientes que, sin embargo, no llega a alcanzar la media de 1.886-90. En 1.917-19, el tamaño de las empresas no crece de forma espectacular (1'1, 1'3 y 0'8 millones respectivamente). La tónica cambiará pre-

cisamente en 1.920 y 21, cuando, al par que disminuye el número de nuevas iniciativas, se incrementa su capital medio. La crisis más espectacular —y más estudiada— en el caso de las grandes sociedades, afectó con gran dureza a las de pequeña y mediana dimensión, que sufrieron de forma más clara los efectos de la retracción de la inversión.

Decíamos más arriba que estas cifras ponen también en evidencia el carácter polarizado del capitalismo español. Sólo un estudio pormenorizado por provincias podrá describir las auténticas dimensiones de este desarrollo desigual. Como una primera aproximación consideraremos, como en el apartado anterior, la concentración de la domiciliación de las sociedades en las tres provincias: Madrid, Barcelona y Vizcaya.

En los 38 años considerados, las sociedades inscritas en las tres provincias, absorbieron el 57'6% del capital de las nuevas sociedades. Madrid por sí sola significaba la cuarta parte del total (25.7%). Aunque sólo la acumulación de monografías regionales matizarán estos datos son, sin duda significativos de la peculiar estructura del capital en España.

DISTRIBUCION SECTORIAL. CONSIDERACIONES GENERALES.

No poseemos una serie completa de la distribución sectorial de las sociedades anónimas hasta su publicación continuada desde 1.919 en el Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas. La Estadística del Registro Mercantil sólo publica de forma separada información sobre Bancos, Ferrocarriles, Tranvías, Obras Públicas, Minas, Seguros y almacenes generales de depósitos. Responde a la clasificación "por la índole

de sus operaciones" que hace el Código de Comercio de 1.885 (a. 123) y no hace distinción por fórmulas jurídicas lo que, si bien no tiene importancia en la mayoría de los sectores, en el minero distorsiona en gran medida las cifras. Quedan fuera interesantes sectores como el naviero, la siderurgia o las eléctricas, de creciente importancia a lo largo de este período. Su reconstrucción es relativamente sencilla de realizar debido a la concentración o la importancia de la actividad pero otras, especialmente las industrias de bienes de consumo, quedan ocultas en el cómputo general. De nuevo se revela imprescindible un análisis que, partiendo de los Registros provinciales reconstruya la imagen del desarrollo del capitalismo español, quizá distorsionada por el exceso de literatura respecto a unos sectores y zonas y la práctica ausencia de otros.

He titulado este apartado "consideraciones generales" pues no pretende ser más que eso. La reproducción de estadísticas puntuales no haría sino incidir sobre ideas ya conocidas: la conexión del auge finisecular con la expansión minera metalúrgica del Norte y sectores que gozan de un incremento de la demanda de sus servicios (naviera, banca, seguros), o la expansión de aquéllos que, durante la Primera Guerra Mundial sirvieron a una demanda suplementaria o a la sustitución de importaciones.

Con carácter general se puede afirmar que los sectores punta (Bancos, Ferrocarril, Siderurgia, Minería), determinadas zonas (Barcelona, Valencia, País Vasco, Madrid...) y las

épocas de auge económico son las mejor conocidas, tanto por su importancia objetiva como por el volumen de información que proporcionan. Queda, sin embargo, todavía por analizar en detalle el conjunto de las células que componen el organismo vivo del capitalismo español: esa mayoría de sociedades que, mezcladas con las grandes, motiva que el capital medio de las empresas sea inferior a dos millones de pesetas durante la mayor parte del período considerado.

Es evidente que no pretendo insinuar una crítica a la imagen general que poseemos acerca del capitalismo español del siglo XIX gracias a importantes estudios de los últimos años, con algunos de los cuales he mostrado mi deuda explícita en este trabajo, sino ponerme del lado de los que llaman la atención hacia la necesidad de realizar una reconstrucción estadística del conjunto de la red que compone el capitalismo español. Debo citar algunos nombres de los que han insinuado esta tarea, como J.F. Botrel y G. Chastagneret, "Une source pour l'histoire économique et sociale de l'Espagne contemporaine. Los Registros Mercantiles", Mélanges de la Casa de Velázquez, tomo IX (1.973), la han emprendido, como Jiménez Araya o establecido bases de trabajo como J. Nadal, a quien le oí expresar la necesidad de un vaciado sistemático de los Registros Mercantiles por primera vez en el I Congreso de Historia Económica. Creo que no es sólo esta fuente la que requiere un vaciado sistemático, sino también la prensa, tal y como mencioné en páginas precedentes que es de vital importancia en los años anteriores a 1.886 y que en años sucesivos

sigue proporcionando información cuya fuente original se ha perdido. La centralización de la documentación dispersa emanada de las propias compañías es, asimismo, tarea necesaria. En definitiva, creo que la creación de un Banco de datos sobre la información de las compañías mercantiles es una labor que puede y debe ser emprendida, pues aunque no alcance resultados inmediatos y gratificantes a nivel particular, será, a medio y largo plazo, de una ayuda inestimable al conjunto de los investigadores.

Ese trabajo callado, ingrato y poco brillante debe posibilitar la labor de completar y matizar la imagen del sistema capitalista español, cuya construcción se emprendió con fuerza —aunque a veces mal encaminada— desde una fecha muy temprana, como he pretendido mostrar en estas páginas. Los medios que hoy nos ofrece la técnica permiten realizar esta labor de reconstrucción estadística.

Como colofón a estas páginas, incluyo el cuadro-resumen del número y capital de las sociedades anónimas existentes en España en 1.923. Sirva de comparación con la situación de 1.868, que se cerraba con 155 sociedades anónimas en funcionamiento. En menos de medio siglo este número se ha multiplicado por 25, con un incremento de capital de orden superior. El punto de partida estaba muy bajo y el mencionado aumento no debe ocultar la pobreza de resultados ni la consideración de que este año fue un año crítico. La imagen, sin embargo, ha cambiado sensiblemente. Debemos reconstruir la transformación pormenorizadamente y rellenar los importantes huecos que suponen muchos de los 55 sectores contemplados.

CUADRO IV,22

SOCIEDADES ANONIMAS EXISTENTES EN ESPAÑA EN 1.923:NUMERO, CAPITAL NOMINAL Y DESEMBOLSADO

(en miles de pesetas)

SECTOR	NUMERO	CAPITAL NOMINAL	CAPITAL DESEMBOLSADO
Aceites y grasas	59	78.931	57.864
Agencias de aduanas	40	16.138	14.705
Sociedades agrícolas	36	16.588	15.444
Aguas potables y riegos	105	164.831	121.382
Alcoholes	27	36.699	30.700
Artes gráficas	117	108.307	82.104
Automóviles	87	68.974	61.923
Azucareras	28	289.891	245.041
Balnearios	29	23.222	20.658
Bancos (sin Banco de España)	91	1.482.792	785.256
Carbones	33	61.434	52.117
Cementos	71	112.114	96.561
Cervezas	35	29.333	27.432
Cinematografía	28	37.058	26.418
Comercio en general	76	91.704	72.053
Construcción buques	16	131.625	107.508
S. Crédito diverso	53	202.344	73.309
Cuero y pieles	39	40.982	36.972
Eléctricas y gas	462	1.586.542	1.300.483
Tintorería	17	4.863	4.863
Transporte	94	73.660	53.757
Harinas y panificación	58	46.818	41.026

SECTOR	NUMERO	CAPITAL NOMINAL	CAPITAL DESEMBOLSADO
Productos alimenticios	77	47.907	45.349
P. Químicos y farmacéuticos	186	325.501	299.605
Minería	288	791.068	634.484
Maquinarias y construc. metálicas	239	304.416	264.966
Material eléctrico	98	132.392	104.767
Importación - exportación	78	62.775	46.594
Hoteles	19	30.984	29.259
Maderas	49	37.827	26.842
Navieras	85	475.991	407.794
Papeleras	32	103.577	86.607
Salineras	8	18.752	14.636
Servicio público	33	21.872	14.282
Seguros	83	159.968	71.738
Edificación y obras públicas	130	193.569	150.958
Teléfonos	13	55.275	38.189
Vinícolas	53	45.248	42.909
Auxiliares industria y comercio	36	10.060	8.349
Tabacos	2	135.000	82.500
Siderurgia	19	350.120	310.420
Vidrieras	22	45.755	41.441
Industrias diversas	84	93.891	75.023
Confecciones	26	26.303	25.473
FF.CC.	96	1.289.336	1.213.824
Textiles	140	369.269	332.069
Tranvías	53	249.650	234.703
Recreos	109	53.104	43.308
Varias	37	30.573	28.124

FUENTE: A.F.S.A., 1.924.

CONCLUSION

El análisis de la construcción de las reglas del juego que marcaron el ámbito de desenvolvimiento del capitalismo en España hasta 1.923 ha sido el objetivo central de este trabajo. Este sistema económico aparece como una construcción frente al Antiguo Régimen, en un momento en que sus estructuras frenaban las posibilidades de desarrollo. De este modo el capitalismo aparece como una opción elaborada y no como el sistema natural, como lo han querido presentar algunos de sus más destacados teóricos.

El sistema requiere la posibilidad de realizar una centralización de capital de envergadura, que posibilite su inversión en actividades industriales cuyas exigencias a este respecto, en un marco de auge del maquinismo, superan de forma espectacular las del Antiguo Régimen. La respuesta es la asociación de capitales en sociedades anónimas, cuyo análisis es punto central de esta Tesis. El seguimiento de esta figura me llevó a realizar un análisis de sus precedentes, para considerar sobre qué bases actuó la temprana ordenación del sistema en España.

El Antiguo Régimen produjo una normativa muy limitada y dispersa acerca de la compañía mercantil, no reconociendo sino la personalista o "común", basada en la calidad de las personas asociadas. El capítulo I,1 muestra lo avanzado de esta legislación en una época temprana de la historia a la vez que las limitaciones que suponía para el desarrollo de la asociación

ción de capitales a partir del siglo XVIII. La dispersión de la legislación y la creación de normas particularizadas por parte de los propios comerciantes interesados aparecen como una consecuencia de la organización socio-política del Antiguo Régimen.

Fruto de esta organización —arcaica y dividida— es que quedaron fuera del sistema común las compañías de capitales que, así, fueron llamadas privilegiadas. Era necesario el privilegio en un mundo privilegiado para responder a las demandas crecientes de capital que exigían las grandes empresas asociadas al comercio marítimo.

El análisis de la asociación de capitales en el Antiguo Régimen debe considerar, pues, las razones de la aparición de la privilegiada en España, un tipo de compañía que fue precedente de la moderna sociedad anónima. Por su forma, porque en ella se encuentran las características constitutivas de la misma —personalidad jurídica y responsabilidad limitada— y en la práctica, porque la asociación de capitales en la primera mitad del siglo XIX estuvo marcada por su fracaso. La reticencia del ahorrador a la aceptación de la anónima en España tiene una de sus causas en el recuerdo de la quiebra de las grandes compañías del XVIII tanto como en la crisis especulativa de 1.845-1.847.

El desarrollo de la asociación de capitales en el Antiguo Régimen, por tanto, se enmarca dentro del sistema privilegiado. El Estado mercantilista actúa como promotor económico y como garante de las nuevas iniciativas.

La compañía privilegiada en el marco del comercio exte-

rior tiene su justificación en la doctrina económica mercantilista: la organización del comercio colonial estaba a cargo del Estado, que no se mostraba partidario de hacer dejación de sus deberes pues la promoción, estímulo y protección de aquél estaban a su cargo y, por otro lado, eran los propios mercaderes los que demandaban auxilio para realizar un comercio de envergadura, de utilidad para el Estado.

Así, hemos observado cómo la privilegiada en el marco del comercio exterior se desarrolla en un doble campo. Por un lado, en la primitiva organización del comercio sevillano, que aparece como una peculiar privilegiada constituida por los comerciantes matriculados que, en la práctica, tiene una estructura que puede asimilarse a las organizaciones inglesa o francesa.

El fracaso del sistema no debe achacarse, pues, a una defectuosa organización (no era la peor de las posibles a menos que se tuviera la voluntad de destruir el sistema del Antiguo Régimen) sino a una serie de factores socio-económicos que dificultaron el aprovechamiento de un excepcional punto de partida, que impidieron la utilización racional del marco legal y rechazaron su ampliación y que motivaron el dispendio de los recursos.

Aparte del sistema de la Casa de Contratación, aparecen una serie de proyectos alternativos que fracasaron, ya que no había fuerza suficiente como para romper una organización que funcionaba satisfactoriamente para un grupo mercantil cualificado. De ahí que los comerciantes de las regiones aparta

das de esta actividad idearan la formación de unas compañías de capitales —de nuevo privilegiadas— para comerciar exclusivamente con aquellas zonas que no estuvieran servidas por flotas y galeones. Entre ellas, hemos destacado las de Caracas, Habana, Barcelona y Filipinas. De ahí que, frente al fracaso de los "proyectos alternativos" estos "proyectos complementarios" se pudieran constituir con éxito.

De nuevo se nos plantea la cuestión de la efectividad del principio del privilegio. Quizá fue conveniente para enfrentarse con la peculiar organización del comercio exterior en el Antiguo Régimen. Quizá el apoyo del Estado era necesario para mantener el dominio político y económico sobre las colonias. Era el reflejo de la mutua necesidad que tenían el Estado y los comerciantes en el marco de un sistema mercantilista, en el que la promoción del comercio exterior se consideraba el objetivo fundamental de la política económica. No obstante, la protección generó en España un resultado negativo. Canalizó unas expectativas que se desarrollaron de forma que, con la excepción de la Compañía de Barcelona, no pudieron seguir desenvolviéndose en un marco de libre competencia. La razón estriba en que, en este último caso, la privilegiada fue el único modo de facilitar, mediante su refrendo legal, una actividad para la que los comerciantes catalanes habían mostrado estar altamente cualificados.

Pero en la España del siglo XVIII se desarrolló también un tipo especial de privilegiadas dedicado a la promoción industrial. En realidad, fueron concebidas como unas grandes em-

presas regionales integradas, especialmente en el sector textil, que abarcaban el cultivo de la materia prima, el proceso de transformación y su comercialización. Son las "Reales Compañías de Comercio y Fábricas" de Extremadura, Zaragoza, Granada, Sevilla y Toledo, creadas entre 1.746 y 1.748. El principio que guió la constitución de estas compañías fue la promoción industrial y mercantil de nuevo bajo una global concepción mercantilista. El fracaso de las mismas se produce en un plazo relativamente corto.

Fracasaron en su fomento industrial, que no se desarrolló sino brevemente al amparo de una legislación fuertemente proteccionista. Se ha analizado cómo una impecable organización formal, precedente de la anónima, no pudo desarrollar la producción nacional debido a que falló una adecuada articulación de la gestión empresarial. Eran asociaciones nacidas bajo el privilegio y que sólo podían subsistir con él. De ahí que fueran abandonadas por el poder central desde 1.752 pues, lejos de cumplir su misión, resultaban extremadamente gravosas al erario.

Las compañías no tuvieron el efecto multiplicador que se esperaba, no fueron punta de lanza de las actividades mercantiles y manufactureras y no fueron una alternativa a la organización gremial. De ahí que los decretos de 1.752 que generalizaban los privilegios de gremios y compañías para el conjunto del sector manufacturero, no fueran la causa sino la consecuencia del fracaso de las compañías. Se optó por extender los privilegios a un conjunto cada vez más amplio: era, en ne

gativo, la progresiva liberalización del comercio y la industria.

Estas compañías habían desaprovechado una importante cantidad de capital centralizado que sumó, entre 1.746 y 1.748 alrededor de 20 millones de reales.

Si bien la compañía de capitales no quedó desacreditada ni en la legislación ni en la doctrina, la opción privilegiada fue abandonada excepto para el comercio marítimo o grandes compañías de promoción; como fue la de Burgos (1.767). La Corona siguió reservándose la concesión de personalidad jurídica hasta 1.929. Quizá ello fuera necesario para sustituir la pérdida de garantía que suponía la responsabilidad limitada, pero dificultaba la creación de compañías al margen de las grandes empresas estatales. La pérdida de capitales por parte de los inversores y el hundimiento de las esperanzas de aquellos núcleos dispersos por la geografía española que se apuntaron a esta fórmula de promoción económica, sí tuvo, sin embargo, un efecto multiplicador en la opinión que, así, quedó marcada por la desconfianza hacia la compañía de capitales.

La necesidad de asociación seguía, sin embargo, abierta e incluso potenciada con el desarrollo económico. De ahí que, al margen del privilegio, se desarrollaran compañías comanditarias por acciones que incluían cláusula de limitación de responsabilidad.

El capítulo I,3 se ha ocupado de estas asociaciones y de su desarrollo en el último tercio del siglo XVIII, que podrían marcar la transición a la anónima. Se constituían me-

dian te acuerdo privado y, aunque incluían la responsabilidad limitada conservaban un fuerte tono personalista en, por ejemplo, las restricciones a la transmisión de acciones. De esta forma, sus posibilidades de centralización de capital son limitadas y renuncian —salvo alguna excepción señalada en Barcelona— a la captación del ahorro fuera del sector ya interesado en las actividades mercantiles.

Por otra parte, las Compañías de los Cinco Gremios Mayores se nos aparecen como un enorme cuerpo mercantil que, junto a su éxito particular dificultó la aparición de otras fórmulas de asociación de capital y centralización del ahorro en Madrid en la vía seguida por Cádiz o Barcelona.

El último tercio del siglo XVIII y el primero del XIX contemplan el difícil momento de la transición del Antiguo Régimen al capitalismo en los diferentes países, entre los que se encuentra España. En nuestro país se produjo una muy temprana recepción de las normas que permiten el desarrollo de este sistema. Normas que pasan por la destrucción de las limitaciones que las reglas del Antiguo Régimen imponían.

El nuevo sistema económico requiere la existencia de un ámbito de relaciones que permitan el desenvolvimiento libre del capital y del trabajo; la construcción de un mercado nacional y la organización de sociedades anónimas. El Estado liberal es la formulación política de este programa, frente a la peculiar estructura de poder del Antiguo Régimen. En lo social, la organización clasista sustituye a la estamen-

tal.

Es necesario, pues, no sólo la eliminación de barreras sino la elaboración de nuevas normas. La importancia del estudio de la legislación queda analizada en la introducción a la segunda parte, en la que, además se establece su significado relativo. No es la única causa del desarrollo, si bien es una más a tener en cuenta para la comprensión de la historia económica. La legislación mercantil no debe ser considerada como un sujeto con vida propia e independiente de las tensiones sociales, los avances de la técnica y de las doctrinas político-económicas.

Se considera, asimismo, que la legislación promulgada no es sino la expresión final de la relación de fuerzas existentes en cada momento en la fracción dominante. De ahí la importancia de analizar el debate previo a la misma. Si es que lo hubo, hay que considerar cuáles fueron las alternativas propuestas, a qué respondían y, en la medida de lo posible, valorar el esperado efecto de las mismas.

Una cuestión que subyace en estas páginas trata de la enorme diferencia existente entre la temprana recepción de normas (mercado libre, Código de Comercio) y lo tardío y lento desarrollo del capitalismo en España.

El Código de Comercio de 1.829 es un exponente de tal aparente contradicción. Se promulgó bajo el reinado de Fernando VII, en un momento en el que el sistema capitalista en España no había conocido siquiera su inicio. Su temprana recepción responde a la demanda de articulación de un Código

único sin el cual la actividad mercantil cada vez más amplia se veía dificultada en su desenvolvimiento. La demanda, sin embargo, no era tan evidente en un punto en el que el Código se adelantó a su tiempo y se separó de legislaciones extranjeras, notablemente restrictivas: la libre creación de sociedades anónimas. Sorprende esta liberalidad, que no correspondía a la estructura política ni al nivel de la demanda. Consideramos responde a la arraigada concepción, muy desarrollada en el Antiguo Régimen, de que la legislación es el motor del desarrollo. De nuevo era el camino escogido para fomentar la centralización de capitales que el capitalismo requería. No obstante, unas normas económicas arcaicas, si bien influyen, no son la única causa del atraso. Antuando sobre ellas se olvidó la reforma socio-política necesaria para que tuvieran el efecto adecuado.

Fue en el punto de la regulación de la anónima precisamente, en el que el Código sufrió las más radicales reformas. El moderantismo, en 1.848, acabó con el régimen de libertad para someter de nuevo la creación de compañías de capitales a la autorización gubernativa y, en algunos casos —Bancos y ferrocarriles—, legislativa.

El análisis de la legislación moderada ha querido profundizar en algunos aspectos fundamentales. En primer lugar, en el grado de aquiescencia que tuvo la norma. Observamos cómo progresistas y mdoerados coincidieron en la conveniencia de su promulgación, que daba a la legislación española un mayor grado de homogeneidad con la europea. En segundo, en el

grado de disensión de las fuerzas políticas en presencia, que se revela en que mientras los moderados incluyeron en la ley a toda clase de sociedades por acciones, los progresistas pretendieron —sin éxito— su exclusión. Así se frenó definitivamente la utilización de esta figura, que era muy efectiva en los inicios de la industrialización.

En tercer lugar, se ha querido analizar la aplicación de la legislación y medir sus efectos. La conclusión que aparece es que junto a la comanditaria por acciones, la verdadera víctima de la legislación moderado-progresista fue la compañía de comercio. La ley exigía a las nuevas asociaciones tener un objeto de "utilidad pública". Esta calificación era relativamente sencilla de obtener para las fabriles, en unos años en los que esta actividad era deseada. Sin embargo, era imposible para las empresas comerciales que, hasta 1.868 quedaron reclusas en la compañía común.

La legislación progresista, por su parte (1.855-56), no atacó el grueso de la norma del 48 sino que la reforma para algunos sectores que, por ello, podemos calificar de privilegiados. Se trata de la Banca, sociedades de crédito y los ferrocarriles. Con la ley de sociedades de crédito, España se incorporaba al movimiento general de desarrollo de estas compañías en Europa. Pero con esta reforma parcial, se apuesta por un modelo de desarrollo en el que la inversión se canaliza hacia los ferrocarriles. Desde este momento, este sector quedará protegido y privilegiado frente a una industria que no podrá competir con semejante adversario.

Una vez más en 1.855 se manifestó el acuerdo político. Si bien los progresistas emprendieron con vigor —frente a los moderados— la reforma del Código de Comercio, ésta no se llevó a cabo hasta 1.885. No estaba claro, por tanto, el deseo de liberalizar la constitución de anónimas sino el de atraer el capital nacional y extranjero hacia la inversión ferroviaria. Los demócratas mantuvieron en estos años una posición pragmática, por la cual la corriente mayoritaria apoyó decididamente esta opción "vía exceso de capacidad". La minoría, partidaria de liberalizar el conjunto de los sectores, permaneció acallada ante la posición expresada por el portavoz de la mayoría, Orense.

Los efectos de esta legislación han sido expuestos en el capítulo 4, en el que se manifiesta cómo las sociedades industriales tuvieron un desarrollo muy escaso. Cuando se produjo, fue puntual y al amparo de medidas proteccionistas o circunstancias económicas extraordinarias.

En definitiva, he querido profundizar en el análisis de un Estado liberal que, en la práctica, se revela como un Estado tutor, intervencionista y canalizador de la actividad económica. No fue tanto la ley de 1.848 —similar a otras de corte europeo— sino la decidida opción por el ferrocarril entre 1.855 y 1.868 la que dejó a la industria desvalida. Otra cuestión a considerar es cómo la liberalización legal de la creación de sociedades anónimas no tuvo un efecto inmediato en la práctica.

Un último aspecto contemplado es la legislación del mer

cado de capitales. Como el Código de Comercio, tuvo una regulación temprana, en el reinado de Fernando VII (1.831). Estas normas revelan, una vez más, el acuerdo de fondo entre moderados y progresistas primero y liberales y conservadores después. De este modo, las modificaciones legislativas—nunca profundas—responden a variaciones de la coyuntura más que a diferentes cambios políticos. De nuevo destacan los demócratas como los que pretendieron liberalizar el sector. Sus proposiciones serían derogadas a partir de 1.874 y recogidas en el Código de Comercio de 1.885. Por otra parte, se revela que ninguna ley de Bolsa fue el resultado de un proceso legislativo completo, sino que todas fueron impuestas por decreto, salvo la última incluida en el Código de 1.885.

Finalmente, cabe destacar la continuidad legislativa que aparece si exceptuamos la única polémica real, la de las operaciones a plazo sobre efectos públicos, que solo estuvo prohibida durante poco más de siete años. El plazo siempre estuvo permitido para los efectos comunes de comercio (acciones y obligaciones de compañías) pero su negociación fue muy escasa, lo que es una muestra más de la debilidad del capitalismo español.

Este trabajo ha querido arrojar alguna luz sobre la organización del capitalismo en España. Profundizar en el análisis de la legislación y en su repercusión en el desarrollo económico así como considerar que aquélla es sólo la opción finalmente tomada. Su comprensión cabal debe pasar por el análisis de las alternativas expuestas y de su viabilidad.

La ausencia de éste puede distorsionar la imagen de una oposición (progresista, moderada, demócrata) que, a la hora de juzgar los efectos negativos de algunas leyes promulgadas se ve favorecida por su falta de responsabilidad gubernamental. En estas páginas, se puede observar cómo la oposición, importante en algunas ocasiones, las más de las veces no mantuvo sino una postura doctrinal que no iba acompañada por la proposición de alternativas.

Quiero para terminar, llamar la atención de nuevo hacia la conveniencia de la centralización de la dispersa información sobre compañías anónimas, tarea necesaria para culminar la reconstrucción de la imagen de la evolución del capitalismo español en la época aquí considerada.

FUENTES

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

- Sección Contratación

- legs. 5001-5003, Real Compañía de Caracas
- leg. 5004, Real Compañía de la Habana
- leg. 5005, Real Compañía de Barcelona
- leg. 5006, Real Compañía de Comercio y Fábricas de Granada
- leg. 5007, Real Compañía de San Fernando de Sevilla

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS.

- Sección Consejos - Consejo Supremo de Hacienda

- legs. 206 - 230, Libros de Registro
- legs. 245 - 385, Expedientes de la Junta de Comercio (1768-1834)
- legs. 386 - 391, Consultas originales de la Junta de Comercio (1800-1833)
- legs. 852 - 853, Real Compañía de Comercio y Fábricas de Extremadura
- leg. 855, Real Compañía de Comercio y Fábricas de Burgos
- leg. 856, Real Compañía de Comercio y Fábricas de Zaragoza
- leg. 857, Real Compañía de Comercio de Fábricas de Granada
- libs. 209 a 212, REgistros de Decretos y Ordenes Reales relativos a Comercio (1763-1820)
- libs. 213 y 214, Registros de Consultas de la Junta de Comercio (1729-1820)

lib. 242 , Inventario de los papeles que existen en el Archivo de la Secretaría de la Real Junta General de Comercio y Minas según el arreglo hecho en el año de 1786

ARCHIVO GENERAL DE LA CORONA DE ARAGON

- Sección Audiencia, serie Consulado de Mar

serie 3 , Manuales de escrituras de la Escribanía del Real Consulado (20vols),
1761-1855, 3/1 - 3/20

serie 6 , Registro de Ordenes de la Superioridad, sus respuestas y representaciones, cartas y oficios (2vols),
1781-1866, 5/1 a 5/21

serie 13 , Registro de Ordenes, Decretos, Cédulas Reales y Cartas de oficio de la superioridad (3vols), 1768-1780 ,
13/1 a 13/3

ARCHIVO HISTORICO DE GUADALAJARA

"Libro de Actas de la Comisión Real del Código de Comercio desde su instalación hasta que terminó sus trabajos" (fondos de D. Pedro Gómez de La Serna)

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL

- Sección Consejos

libros 1475 a 1528, REales Cédulas

- Sección Estado

Libro 26, Decretos de S.M. en consultas de la Junta

de Comercio y Moneda sobre asuntos relativos a los
Consulados

legajos 2491,2944,3182,3182,3188,3205,3208 (expedientes
sobre comercio, siglo XVIII)

leg. 3222(Compañía Marítima)

- Sección Hacienda

Colección de Ordenes Generales de Rentas

ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE BARCELONA

Escribanía núm. 997, José Mariano Avellá (1755-1791)
(IMA)

" núm. 1023, Juan Pamiés (1763-1793) (JP)

" núm. 1062, Ramón Font y Alier (1755-1786)
(RFA)

" núm. 1149, Francisco Roquer y Simón (1808
-1834) (FRS)

Compañías y documentos analizados en esta Tesis:

Compañía de Seguros Marítimos bajo la invocación de
la Sagrada Familia Jesús, María y Joseph

-Escritura de constitución, 21 de diciembre (RFA, 1771,
fols. 474r.482v)

-Escritura de renovación, 24 de enero de 1774 (FRA,1774,
fols. 52r-58v)

-Acta de la Junta General de Interesados de 22 de enero
de 1776, fols. 32r y v.)

-Escritura de renovación, 31 de enero de 1776 (RFA,1776,
fols. 43r-56v). A partir de este momento añade a su nombre
...San Joaquín y Santa Ana.

- Escritura de compra de acciones, 12 de abril de 1777,
fols. 208v-210r)

-Escritura de renovación, 20 de diciembre de 1801 (JRS,
1801, fols. 285r-295r)

Compañía de Seguros bajo la invocación de la Inmaculada Concepción de María Santísima Señora Nuestra y de la Gloriosa Santa Eulalia

- Acta de la reunión preliminar a la constitución, 27 de enero de 1772 (RFA, 1772, fols 58r-65v)
- Escritura de constitución, 13 de febrero de 1772 (FRA, 1772, fols. 87r-93v)
- Acta de la Junta General de Interesados de 13 de marzo de 1774 (RFA, 1774, fols. 159r-162r)
- Escritura de renovación, 3 de febrero de 1775 (RFA, 1775 fols. 37r-46v)
- Acta de la Junta General de Interesados de 8 de marzo de 1776 (RFA, 1776, fols. 179r-180v)
- Acta de la Junta General de Interesados de 12 de febrero de 1781 (RFA, 1781, fols. 80r-93v)

Compañía de Seguros Marítimos bajo el patrocinio de la Virgen Nuestra Señora invocada con el nombre de la Merced, Patrona de Barcelona de los gloriosos San Antonio de Padua y San Ramón de Peñafort

- Escritura de constitución, 13 de julio de 1774 (RFA, 1774, fols. 329r-340r)
- Escritura de renovación, 15 de julio de 1775 (RFA, 1775, fols. 289r-292r)
- Escritura de renovación, 31 de julio de 1776 (RFA, 1776, fols. 325r-333r)
- Escritura de renovación, 19 de julio de 1777 (RFA, 1777, fols. 301r-318v)
- Escrituras de incorporación de socios, 4 de agosto de 1777 (RFA, fols. 349r-315v.) y 6 de agosto de 1777 (RFA, fols. 315v-353v)

Sociedad de Fondos Perdidos bajo el patrocinio de la Virgen Santísima de las Mercedes Nuestra Señora y - Santa Eulalia

- Escritura de constitución, 8 de junio de 1776 (JMA,1776, fols. 291r-310r)
- Acta de la Junta General de Interesados de 18 de agosto de 1779 (JMA,1779, fols. 309v-331r)
- Acta de la Junta General de Interesados de 16 de enero de 1783 (JMA,1783, fols. 20v-23r)
- Acta de la Junta General de Interesados de 28 de julio de 1785 (JMA, 1785,fols.289r-300r)
- Acta de la Junta General de Interesados de 3 de agosto de 1786 (JMA,1786, fols.274r-314v)
- Acta de la Junta General de Interesados de 3 de febrero de 1791 (JMA,1791,fols.60v-66r)

Compañía de Seguros bajo el patrocinio e invocación de la Purísima e Inmaculada Concepción de María Santísima Señora Nuestra

- Escritura de constitución, 23 de enero de 1777 (JMA, 1777, fols. 41r-46r)
- Acta de la Junta de Dirección de 21 de junio de 1780 (JMA, 1780,fols.289r-289v)

Compañía de Seguros Marítimos bajo la invocación y patrocinio de Nuestra Señora de la Esperanza y las Almas del Purgatorio

- Escritura de constitución, 30 de enero de 1777 (RFA, 1777, fols. 77r-90r)

Compañía de Comercio bajo la invocación y patrocinio de la Santísima Virgen María de los Dolores, Madre y Señora Nuestra y del Glorioso San Juan Evangelista (razón social: Durán, Larrad, Gibert y compañía)

- Escritura de constitución, 5 de enero de 1778 (RFA,1778, fols. 29r-35r)
- Escritura de renovación, 25 de abril de 1782 (RFA,1782, fols. 219r-224v)

Real Compañía de Hilados de Algodón

- Escritura de renovación, 4 de diciembre de 1778 (JP, 1778, fols. 43r-51r)

Compañía de Seguros Marítimos bajo la invocación y patrocinio de Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo y Santa Catalina de Siena

- Escritura de renovación, 12 de abril de 1779 (RFA, 1778 fols. 124r-127v)

ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE MADRID

- Protocolo núm. 17.614 (Mateo Alvarez y Fuentes), fols 5r-17r. Escritura de constitución de la compañía formada por los individuos del Gremio de mercaderes de paños en 7 de enero de 1748.

- Protocolo núm. 17.866 (Gabriel de Benavente), fols. 14-20. Reglas para la nueva Compañía de los Cinco Gremios Mayores, 27 de marzo de 1753, fols. 14r-20v.

- Protocolo núm. 19.103 (Antonio Badiola):

Escritura de constitución de la nueva Compañía de los Cinco Gremios Mayores , 6 de octubre de 1763 (fols.368r-381r)

Reglas de la nueva Compañía de los Cinco Gremios Mayores, 10 de noviembre de 1763 (fols.505r-524r)

ARCHIVO DEL PALACIO REAL

- Papeles Reservados de Fernando VII
- Tomo 83, "Proyecto de Código de Comercio" (Sainz de Arandino), 254 fols. manuscritos
- Tomo 84, "Proyecto de Código de Comercio formado por la comisión especial creada en Real Orden de 11 de enero de 1828", 132 fols. manuscritos

BIBLIOTECA DE LA DIPUTACION DE VIZCAYA

"Manifiesto que al M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya en su Junta de Guernica presenta su diputado en la Corte de Madrid, D. José Zavala y Miranda sobre establecer en la Villa de Bilbao, comercio y navegación por Reglas de Compañía para la Carrera de Buenos Aires y otras de America" 1743 (v-5-4-7)

"Noticia y extracto sucinto de los expedientes y papeles que se hallan en la Secretaría de la Junta General de Comercio y Moneda, tocante a la Real Compañía de Comercio y Fábricas de San Fernando de la ciudad de Sevilla, desde su creación en el año 1747 hasta el presente de - 1783 (leg.3113)

"Varias Respuestas fiscales, del fiscal de la Junta de Comercio D. Juan Antonio de los Heros; apuntaciones de algunas especies y resoluciones, en materias de Comercio, Moneda, Minas y Dependencias de extranjeros", 1784-1791 13 vols. manuscritos

BIBLIOTECA NACIONAL

"Planta , que da orden del rey nuestro Sr. ha formado D. Luis Cerdeño y Monzón, caballero de Santiago, de los Consejos de S. M. en el Real de Castilla y de las Indias, para la instrucción de una compañía de los Reynos de Castilla, por cuya dirección corra el comercio privado de la América" B.N, ms 19.711

"Quatro compañías de la Zarza, Zaragoza, Granada y Sevilla", año de 1748" (ms.20.261)

MINISTERIO DE HACIENDA

"Historia de la Real y General Junta de Comercio, Mo

neda y Minas y dependencias de extranjeros y colección integra de las RR.DD., Pracmáticas, Resoluciones, Ordenes y Reglamentos que pór puntos generales, se han expedido para el gobierno de los Comercios, y manufacturas del Reyno

Compuesta en virtud de Reales resoluciones en consulta de la misma Junta por D. Eugenio Larruga y Boneta.

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

"Instrucción que previene el número de acciones que deberán tener los interesados que hayan de asistir a la J.G. de la Compañía de la Habana: circunstancias con que procederan a la justificación de sus respectivos votos y cualidades que se necesitan para el uso y limitación de éstos" (R.A.H., Col. Mato-Linares, Impreso, 1 f., 32cm., T. LXXV f. 136 nº 3135 catál.)

"Discurso e informe que el 13 de abril de 1669, hizo D. Eugenio Carnero al Excmo. Sr. D. Cristobal Crespi sobre puntos de Estado, de navegación guerra y comercio, en que se citan consultas de la Junta a él, tocantes al establecimiento de compañías, mandadas ajustar por S. Mgad., R.A.H., Colección Muñoz, Tomo 34, fols. 4-75

REALES CEDULA DE CREACION DE COMPAÑIAS Y ORDENANZAS CITADAS

Nombre (abreviado) de la Compañía	Fecha de la R.C. y Ordenanza (O)	Referencia del docto
Caracas.....	25-IX-1728	A.I, Contratación, legajo 5001.
Habana.....	18-XII-1740	A.H.N., Hacienda, lib. 8014, núm. 23
Extremadura.....	22-V-1746	Larruga, Historia, t. X, folios 75-82
(O) 16-X-1746		

Nombre(abreviado) de la Compañía	Fecha de la R.C. y Ordenanza (O)	Referencia del docto
	10- X-1746	Larruga, <u>Memorias</u> , t. XXX, pp 128-161
Zaragoza.....	27-VII-1746	A.H.N. Hacienda, lib. 8015, núm. 866
(O) s/f		A.G.S., Hacienda, lega jo 856
Granada.....	6 IV-1747	A.G.I, Contratación, legajo 5006.
Unión.....	VI-1747	Larruga <u>Memorias</u> , t XXXIX, pp.162-165
Sevilla.....	7-VIII-1747	B.D.G., 3113
(O) 26-VIII-1749		A.H.N., Estado, lega- jo 4571
Toledo.....	10 II-1748	Larruga <u>Memorias</u> , t. VII,, págs 68-74.
(O) 12 V-1748		Larruga, <u>Memorias</u> , t VII, pp. 75-110
Requena.....	2 IX-1753	A.H.N., Hacienda, lib 8019, núm 1357
Barcelona.....	4 V-1755	A.I., Contratación, legajo 5005.
(O) 12 IV-1756		Rahola, <u>Comercio en</u> <u>Cataluña</u> , pp89-113
Burgos.....	29 XI-1767	Larruga, <u>Memorias</u> , txxx
Pesca Marítima.	16 II-1775	Larruga, <u>Historia</u> , t. ix, fols, 413-418
Banco de San Carlos	2 VI-1782	A.H.N, Real Cédula, núm.589.
Filipinas.....	10 III-1785	A.H.N. Real Cédula, núm. 711:
	12 VII-1803	Aguirre, <u>Prontuario</u> t.VII, pp. 28-59

Nombre(abreviado) de la Compañía	Fecha de la R.C. y Ordenanza (0)	Referencia del docto
Marítima.....	19 IX-1789	A.H.N., Estado, lega- jo 3222, exp. 31
	2 VI-1792	<u>Ibidem</u> , exp.60
Pesca del Coral	23 V-1790	A.H.N., Hacienda, lib. 8041, núm. 4368
Seguros Marítimos	23 II-1800	Aguirre, <u>Prontuario</u> , t.V, pp.28-34
Viñeros Málaga	12 IX-1806	A.G.S. Hacienda, le- gajo 337, núm. 20

COLECCIONES

a) LEGISLATIVAS

1.- Colecciones de Decretos y órdenes

---"Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y extraordinarias" desde 24 de septiembre de 1810 hasta 14 de septiembre de 1813 (DD.CC tomos I a 47

---"-----ordinarias", desde 25 de septiembre de 1813 hasta 11 de mayo de 1814 (DD.CC, t.5)

---"Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes Ordinarias de 1820 y 1821" (DD.CC, t.6y7)

---"-----generales expedidos por las Cortes extraordinarias desde 22 de septiembre de 1821 hasta 19 de febrero de 1823 (DD.CC, tomos 8 a 10)

---"Decretos del Rey Don Fernando VII o Colección de Reales Resoluciones expedidas por los diferentes ministerios y consejos"

. desde 4 de mayo hasta 31 de diciembre de 1814 (DD.R, t.1)

.1815-1819, volúmenes anuales (DD.R, tomos 2 a 6)

.1 de enero a 7 de marzo de 1820 y 28 de abril a 31 de diciembre de 1823 (DD.R.,t.7)

---"Decretos del Rey Nuestro Señor D. Fernando VII, y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos generales expedidos por las Secretarías del despacho universal y Consejos de S.M."

.de enero de 1824 a 31 de diciembre de 1831 (DD.R., tomos 8 a 16) (1)

----"Decretos del Rey Nuestro Señor D. Fernando VII y de la Reina su Augusta esposa: Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos generales expedidos por las Secretarías del despacho Universal y Consejos de S.M."

.de 1 de enero de 1832 a 31 de diciembre de 1833 (DD.R., tomos 17 y 18)

---"Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II en su real nombre por su Augusta madre la reina gobernadora, y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos generales expedidos por las Secretarías del despacho universal"

.años 1834,1835 y1836 (CDD,tomos 19 a 21) (2)

---"Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos generales expedidos por las Secretarías del Despacho"

.años 1837 a 1845 (CDD, tomos 22 a 35) (3)

(1) Volúmenes anuales, excepto para el año 1824, en que son semestrales.

(2) Aunque cambian los títulos, continua la numeración correlativa de los volúmenes.

(3) Periodicidad anual entre 1838 y 1841.Semestral para el resto de los años.

---"Colección legislativa de España (continuación de la Colección de Decretos)"

.1846 (CLE, tomos 36 a 39)

.1847 a 1855, 1 tomo por cuatrimestre (CLE, tomos 40 a 66)

.1856 a 1859, 1 tomo por trimestre (CLE, tomos 67 a 81)

.1860 a junio 1891, 1 tomo por semestre (CLE, tomos 82 a 146)

A partir de 1877, el volumen de legislación requirió la publicación de un tomo en dos volúmenes todos los años excepto en 1883, 1884 y 1887. Ello llevó a modificar el ritmo de publicación. Desde julio de 1891, cada tomo equivale a un volumen, publicándose para cada año los que requiere el volumen de legislación (2, 3 ó 4).

.julio de 1891 a diciembre de 1897, (CLE, tomos 147 a 146)

.Desde 1898 comienza una nueva serie:

.1898 a 1923 (CLE (NS), tomos 1 a 81)

2.- Diarios de Sesiones de Cortes

---De ambas cámaras, correspondientes al periodo estudiado.

b) ESTADISTICAS

Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona (1919)

Anuario Estadístico de España (1858, 1859-60, 1861-62, 1862-65, 1866-67, 1915 a 1924).

Anuario Financiero de Bilbao (1919-1924)

Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España (1918 - 1924)

Anuario Financiero y de Valores Mobiliarios (1916 y 1917).

Anuario de Sociedades Anónimas (Anuario Garciceballos)
(1918 y 1919)

Anuario de los Valores admitidos a la cotización oficial
de la Bolsa de Madrid (1918 - 1924)

Estadística del Registro Mercantil (1886 - 1923)

LIBROS Y ARTICULOS

AGUIRRE, Severo: Prontuario alfabético y cronológico por orden de materias de las Instrucciones, Ordenanzas, - Reglamento, Pragmática y demás Reales Resoluciones no recopiladas, que han de observarse para la administración de justicia y gobierno de los pueblos del Reino, Madrid, 1799-1805 (7 vols)

ALEJANDRE GARCIA, Juan Antonio: La quiebra en el derecho histórico español anterior a la codificación, Sevilla, 1970

-----: "Un proyecto de compañía universal del comercio - con las Indias en el siglo XVII", III Congreso Internacional de Derecho Indiano, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1973

-----: Temas de Historia del Derecho: Derecho del Constitucionalismo y de la Codificación, I., Sevilla, 1980

ANDRES, Juan: Sumario breve de la práctica de la aritmética de todo el curso del arte mercantil, Valencia, 1515

ANTUÑEZ Y ACEVEDO, Rafael: Memorias históricas sobre legislación y gobierno del Comercio de las Indias Occidentales, Madrid, 1797

ARGEMI Y D'ABADAL, Lluís: "La fisiocracia a Espanya", Estudis i Notes, I, 1982

ARIAS RAMOS, J: "Los orígenes del contrato de sociedad :

consortium y societas" Revista de Derecho Privado, 1942

ARRAZOLA y otros: Enciclopedia de la Administración, Madrid, 1848-1853

ARTOLA GALLEGU, Miguel: Antiguo Régimen y revolución liberal, Barcelona, 1978

-----: "La acción del Estado", en M. Artola y otros, Los ferrocarriles en España, 1844-1943, Madrid, 1978

-----: Los orígenes de la España Contemporánea, Madrid, 1975

ASCARELLI, Tulio: Iniciación al estudio del Derecho Mercantil, introducción de Evelio Verdura y Tuelles, Barcelona, 1964

BASTERRA, Ramón de: Una empresa del siglo XVIII. Los navios de la Ilustración. La Real Compañía de Caracas y su influencia en los destinos de America, Caracas, 1925

BENITO MANUEL, José L. de: La personalidad jurídica de las compañías y sociedades mercantiles, Madrid, s.f.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A: "Notas sobre el origen histórico del Derecho Mercantil" Estudios homenaje a Garrigues, Madrid, 1971

BERMEJO VERA, José: Régimen jurídico del ferrocarril en España (1844-1974). Estudio específico de RENFE, Madrid, 1975

- BEAWESS, Wyndham: Lex mercatoria rediviva or Merchants Directory, being a complete guide to men in Bussines, Londres, 1793
- BLUSSE, L. y GAASTRA, F.: Companies and Trade (essays on overseas trading companies during the Ancien Regime) Leiden University Press, Leiden, 1981
- BOREHARDT, Knut: "La revolución industrial en Alemania. 1700-1914", en Carlo Ma Cipolla, ed, Historia económica de Europa, 4,1, Madrid, 1982, pp. 78-164
- BOTREL, Jean-Francois et CHASTAGNARET, Gerard: "Une source pour l'hitoire économique et sociale de l'Espagne contemporaine. Les Registros Mercantiles", Melanges de la Casa de Velázquez, IX, 1973, pp.745-754
- BOULLE, Pierre H.: "French Mercantilism. Commercial companies and Colonial Profitability", en L. Blussé y F. Gaastra (eds), Companies and Trade, pp. 97-117
- BRUHL, Henry Lévy: Histoire juridique des sociétés de commerce en France aun XVII et XVIII siecles, Paris, 1938
- BUSSI, E.: La formazione dei dogmi di diritto privato - nel Diritto comune, Padua, 1971
- BUSTELO GARCIA DEL REAL, Francisco: "Nueva Historia Económica": revisión crítica", Moneda y Crédito, núm.125 junio de 1973, pp. 37-63
- CABANA, Francesc: La Banca a Catalunya. Apunts per una historia, Barcelona, 1966

CADALSO, José: Cartas Marruecas, Madrid, 1978

CAMPILLO Y COSIO, José del: Nuevo sistema de gobierno económico para la América, con los males y daños que le causa el que hoy tiene, de las que participa copiosamente España, y remedios universales para que la primera tarea tenga ventajas considerables y la segunda mayores intereses, Imp. de Benito Cano, Madrid, 1789

CANELLAS LOPEZ, Angel: "La Real Compañía de Comercio y Fabricas de Zaragoza: Historia de su primer trienio" Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, C.S.I.C., Zaragoza 1954, pp 79-102

CANGA ARGUELLES, José: Diccionario de Hacienda con aplicaciones a España, 2ª ed, Madrid, Imp Marcelino Calero y Portocarrero 1833 (s.L.: Madrid) Ministerio de Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales (s.a. 1968

CANOSA, Ramón: La especulación a plazo en los centros de contratación de valores. Apuntes para la historia de Bolsas españolas, Madrid, 1967

CANTILLON, Richard: Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, México, 1950

CAPELLA, Miguel: Los Cinco Gremios Mayores de Madrid, Estudio crítico-histórico, Madrid, 1957

CARRERA PUJAL, Jaime: Historia de la economía española, Barcelona, 1945, (5 vols)

-----: Historia política y económica de Cataluña (siglos XVI a XVIII), Barcelona, 1946

CASARIEGO, Jesús Evaristo: Historia del Derecho y de las Instituciones marítimas del mundo hispánico, Madrid, 1947

CESPEDES DEL CASTILLO, Guillermo: La avería en el comercio de Indias, Sevilla, 1945

CLAVERO, Bartolomé: Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836), Madrid, 1974

CLEMENT, Pierre: Lettres, instructions et memoires de - Colbert, París, 1873

Código de Comercio (ed. oficial); Madrid, 1829

Código de Comercio (ed. oficial); Madrid, 1885

Códigos españoles concordados y anotados. (12 vols. 4º m)
Madrid = Publicidad = 1847-51

CONDE, J: "La transformación del Derecho patrimonial en la época del capitalismo", Revista de Derecho Mercantil, nº 10, 1947, pp. 167-191

Constitutions, capitols y actes de Cort, fetes y otorgats per la S.O.R. Majestat el Rey Nostre Senyor Don Felip IV de Aragó y V de Castella, Comte de Barcelona, etc, Barcelona, 1702

COORNAERT, E.L.J.: "Europe economic institutions and the New World; the chartered companies", en E.E. Rich y - C.H. Wilson (eds), The Cambridge Economic History of Europe, IV, Cambridge, 1967

- CAXA DE LERUELA, Miguel: Restauración de la antigua abundancia de España, 1631
- CHASTAGNARET, Gérard et BOTREL, Jean Francois: "Une source pour l'histoire économique et sociale de l'Espagne contemporaine. Les Registros Mercantiles", Melanges de la Casa de Velázquez, IX, 1973, pp.747-754
- CHAUDHURI, K.N.: "The English India Co. in the 17th. and 18th. centuries. A pre-modern multinational organization", L. Blussé y F. Gaastra (eds), Companies and Trade..., pp. 29-46
- CHAUNU, Huguette y Pierre: Seville et l'Atlantique (1504-1960), Paris, 1955-1960
- DEANE, Phyllis: "La revolución industrial en Gran Bretaña", en Carlo Ma Cipolla, ed, Historia Económica de Europa, u,1, Barcelona, 1982, pp. 165-233
- DERMIGNY, L: "La organisation et le role des compagnies en M. Mollat (ed), Societes et companies, pp. 453-466
- DIAZ TRECHUELO, María Lourdes: La Compañía de Filipinas, Sevilla, 1965
- DONÉZAR Y DIEZ DE ULZURRUM, Javier Ma: "Los bienes de los pueblos y la desamortización", Información Comercial Española, núm. 623, julio 1985, pp. 69-82
- ESTORNES LASA, José: La Compañía Guipuzcoana de Caracas, Buenos Aires, 1984
- FEBRERO, Josef: Librería de escribanos, abogados y jueces, Madrid, 1807

FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa 1766-1833: cambio económico e historia, Madrid, 1975

FERNANDEZ DE NAVARRETE, Martín: Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, con varios documentos inéditos concernientes a la historia de la marina castellana y de los establecimientos españoles en Indias, Impr. Nacional, Madrid, 1858

-----: Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de ultramar, Sucs. de Rivadenerra, Madrid, 1885

FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano: "Conyuntura y política económicas", en Manuel Tuñón de Lara (dir), Historia de España, VII, Centralismo, ilustración y agonía del Antiguo Régimen (1715-1833), Barcelona, 1980, pp. 11-173

FOHLEN, Claude: "La revolución en Francia, 1700-1914" en Carlo Ma Cipolla, ed. Historia económica de Europa (4) El nacimiento de las sociedades industriales, 1. Barcelona, 1982, pp. 7-77

FONDEWILA ROCA, Eduardo: Las operaciones bursátiles a plazo, Barcelona, 1977

FONTANA, Josep: "La vieja bolsa de Barcelona (1815-1914) en Ayuntamiento de Barcelona, Documentos y estudios, La Bolsa de Barcelona de 1850 a 1930: Lineas generales de su evolución, V. VIII, Barcelona

-----: "Cambio económico y crisis política. Reflexiones so

bre las causas de la revolución de 1868", en Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, 1975 (2ª ed. revisada), pp. 99-145

-----: "Formación del mercado nacional y toma de conciencia de la burguesía" Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, 1973

-----: "La desamortización de Mendizabal y sus antecedentes", en Angel García Sanz y Ramón Garrabou (eds), Historia agraria de la España contemporánea, Barcelona, 1985, T. I

FORNIÉS BAIGORRI, Ascensión: Vida comercial española, 1829-1885, Zaragoza, 1962

FORONDA, Valentin de: "Disertación sobre la nueva compañía de las Indias Orientales, leída en la Junta Pública que celebró la Sociedad Vascongada en 1784, día de S. Carlos, en la villa de Bergara", Miscelánea o colección de varios discursos, Imprenta de Benito Cano, 1787

FOSTER, William: England's Quest of Eastern trade, London 1966

FURBER, H: "The History of East India Companies: general problems", en M. Mollat (ed), Sociétés et compagnies, pp. 415-418

GAASTRA, Femme: "The shifting balance of trade of the Dutch East India Company", en L. Blussé y F. Gaastra, Companies and trade... pp. 47-69

GACTO FERNANDEZ, Enrique: La jurisdicción mercantil en España, Sevilla, 1971

GARATE OJANGUREN, María Monserrat: "Las cuentas de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas", Moneda y Crédito, Revista de Economía, núm 153, junio 1980, pp. 49-75

GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, Antonio: Cádiz y el Atlántico (1717-1778), (2. Vols), Sevilla, 1976

GARCIA DELGADO, José Luis, ROLDAN LOPEZ, Santiago y MUÑOZ GARCIA, Juan: La formación de la sociedad capitalista en España, 1914-1920, Madrid, 1973 (2 vols)

GARCIA ORMAECHEA, Rafael: Supervivencias feudales en España. Estudio de legislación y jurisprudencia sobre señoríos. Madrid, 1932

GARCIA SANZ, Angel y GARRABOU, Ramón (eds): Historia de la España contemporánea, Barcelona, 1985 (2 vols)

GARRIGUES, Joaquin: Tratado de Derecho Mercantil, Madrid 1947

GILLE, Bertrand: "La Banca y la industrialización europea 1730-1914", en Carlo Ma Cipolla, ed, Historia económica de Europa. (3), pp. 265-311

GLAMANN, Kristoff: "El comercio europeo 1500-1750" Carlo Ma Cipolla (ed), Historia económica de Europa (3), Barcelona, 1979, pp. 333-409

GOMEZ DE LA SERNA, Pedro: Código de Comercio, arreglado a la reforma decretada en 6 de diciembre de 1868, anotado y concordado, precedido de una introducción histórico-comparada, Madrid, 1869

GOMEZ MENDOZA, Antonio: Ferrocarriles y cambio económico

(1815-1913). Un enfoque de Nueva Historia Económica,
Madrid, 1982

-----: "Los efectos del ferrocarril sobre la economía es-
pañola. 1855-1913" Papeles de Economía Española, 1984
nº. 20. pp. 155-168

GERFCHENKRON, Alexander: Atraso económico e industriali-
zación, 1973

GONZALEZ DE CELLORIGO, Martín: Memorial de la política
necesaria y útil restauración de la República de Es-
paña, (1600)

GRAMPP, William: "Los elementos liberales en el mercanti-
lismo inglés", en Spengler y Allen, El pensamiento...,
pp. 75-105

GRAU, Ramón: "Empresari i capitalista a la manufactura ca-
talana del siglo XVIII. Introdució a la l'estudi de
les fabriques d'indianes", Recerques, 4, 1974, pp. 19-
57

GRICE-HUTCHINSON, Marjorie: El pensamiento económico en
España (1177-1740), Barcelona, 1982

GROUCH, R. L. : "Laissez faire in nineteenth-century Bri-
tain", The Manchester School of Economic and Social
Studies, XXXV, núm. 3, septiembre 1967

GUIARD Y LARRAURI, Teófilo: Historia del Consulado y Casa
de Contratación de Bilbao y del Comercio de la Villa
Bilbao, 1930, (3 vols)

GUNDER FRANK, A: La acumulación mundial, 1942-1789, Madrid
1979

GUTIERREZ, José Marcos: Librería de escribanos, abogados y jueces, que compuso D. Josef Febrero (...) y ha reformado de nuevo (...) el licenciado D. José Marcos Gutierrez... Madrid, 1807

GUTIERREZ DE RUBALCAVA, Joseph: Tratado histórico, político y legal del comercio de las Indias Occidentales, pertenecientes a los Reyes Católicos, conforme al tiempo de paz y guerras, en interpretación de las leyes de la Nueva Recopilación a ellas. Cádiz, 1720

HARING, Clarence H.: Comercio y Navegación entre España y las Indias en la época de los Habsburgos, México 1979 (1ª reimpr)

HARTWELL, R.M.: "Cambio jurídico, reforma jurídica y crecimiento económico en Inglaterra antes de la revolución industrial y durante ella", en VV.AA, Historia económica: nuevos enfoques y nuevos problemas, Comunicaciones al Séptimo Congreso internacional de Historia Económica, Barcelona, 1981, pp. 184-195

-----: "Ley, derechos de propiedad, instituciones legales y el funcionamiento de las economías" Historia económica: nuevos enfoques y nuevos problemas, Barcelona, 1981 pp. 175-183

HAUSER, Henry: La pensée et l'action économiques du Cardinal Richelieu, París, 1944

HECKSCHER, Eli. F.: La época mercantilista, México, 1943

DE LOS HEROS, Juan Antonio: Discurso sobre el comercio, las utilidades beneficios, y opulencias que produce, los dignos objetos que ofrece para el bien de la patria, el que ejercían los cinco Gremios Mayores de Madrid, parti-

cipando todo el reino de sus ventajas y que es compatible el comercio con la primera nobleza, Madrid, 1785, Semanario Erudito de Valladares, Impr. Antonio Espinosa, Madrid, 1970, tomo XXVI.

HEVIA BOLAÑOS, Juan de : Curia Philipica, Madrid, 1825

HINOJOSA, E. de: "La fraternidad artificial en España", Obras, Madrid, 1948

HOLDSWORTH, William Sir: A History of English Law, London 1966

HUSSEY, Ronald Denis: A study on the history of Spanish Monopolistic Trade. The Caracas Company 1728-1748 Cambridge, Mass., 1934

JIMENEZ SANCHEZ, Guillermo Jesús: "La acción en las compañías privilegiadas" Anales de la Universidad Hispalense, vol, XXIII, año 1963

JOVER ZAMORA, José María: "La época de la Restauración. Panorama político-social, 1875-1902", en Tuñón de Lara. (dir), Historia de España, VIII, pp. 271-406

JIMENEZ ARAYA, Tomás: "Formación de capital y fluctuaciones económicas. Materiales para el estudio de un indicador: creación de sociedades mercantiles en España entre 1886 y 1970" Hacienda Pública Española, núm. 27, 1974, pp. 137-185

LANDES, David S: The Unbound Prometheus. Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present, Cambridge, 1966, (ed. española, Barcelona, 1979).

LANGLE, Emilio: "Mercantilistas españoles de finales del siglo XIX y comienzos del XX", Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 34

LARRAZ LOPEZ, José: La época del mercantilismo en Castilla (1500-1700), Madrid, 1943

LARRUGA Y BONETA, Eugenio: Memorias políticas y económicas de los frutos, comercio, fábricas y minas de España, con inclusión de los Reales Decretos, órdenes, cédulas, aranceles, y ordenanzas expedidos para su gobierno y fomento, Madrid, 1787-1800, 26 vols en 45 tomos

-----: Historia de la Real y General Junta de Comercio, Moneda y Minas y dependencia de extranjeros y colección íntegra de los Reales Decretos, Prágmaticos, Resoluciones, Ordenes y Reglamentos que por puntos generales han expedido para el gobierno de los comercios y manufacturas del Reyno, Madrid, 1789 (11vols)

LASARTE ALVAREZ, Francisco Javier: "La acción en las compañías privilegiadas" Anales de la Universidad Hispalense, vol, XXIII, año 1963

LOPEZ, Marina: "Empresari i capitalista a la manufactura catalana del siglo XVIII. Introdució a l'estudi de las fabriques d'indianes", Recerques, 4, 1974, pp. 19-57

LOPEZ DE TOVAR: Códigos españoles concordatos y anotados Madrid, 1.848

LLUCH, Ernest: El pensament económic a Catalunya 1760-1840, Barcelona, 1973

-----: "La fisiocràcia a Espanya", Estudis i Notes, I, 1982

MALUQUER DE MOTES, Jorge: "Los orígenes del movimiento obrero español 1834-1874", en Historia de España, Menéndez Pidal (Fund), vol XXXIV

MANTRAN, R.: "Les origenes des compagnies" en M. Mollat (ed) Sociétés et compagnies, pp.397-413

MARTINEZ-ALCUBILLA, Marcelo: Diccionario de la administración española, Madrid, 1982 (5ªed), 9 tomos, y apéndices hasta 1924

MARTINEZ GIJON, José: La compañía mercantil en Castilla hasta las ordenanzas del consulado de Bilbao de 1737. Legislación y doctrina, Sevilla, 1979

-----: "Las sociedades por acciones en el Derecho español del siglo XVIII", Revista del Instituto de Historia - del Derecho Ricardo Levene, núm. 19, 1968

MARTINEZ SANTOS, V.: "La sedería de Valencia, 1750-1800", Moneda y Crédito, 1975, núm. 134

MARTINEZ-SHAW, Carlos: "Los orígenes de la industria algodонера catalana y el comercio colonial", Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea. Actas del Primer Congreso de Historia económica de España, Barcelona, 1974, pp. 243-267

-----: Cataluña en la Carrera de Indias, 1680-1756, Barcelona, 1981

MATEO DEL PERAL, Diego: "Los orígenes de la política ferroviaria en España (1844-1877)", en M. Artola y otros, Los ferrocarriles en España, 1844-1913, L, p. 77

MATILLA TASCON, Antonio: Los Cinco Gremios Mayores, Estu-

dio crítico-histórico, Madrid, 1957

MATILLA QUIZA, Ma Jesús: "Las compañías privilegiadas en la España del Antiguo Régimen" en La economía española al final del Antiguo Régimen, Instituciones, vol. IV (ed. c int.de Miguel Artola), Madrid, 1982, pp. 271-401

MEEK, Ronald: La fisiocracia, Barcelona, 1976

MERCADER RIBA, Joan: Felip V i Catalunya, Barcelona, 1968

MERCADO, Tomás de: Suma de tratos y contratos, Ed. Restituto Sierra Brezo, Madrid, 1975

MILL STUART, John: Principios de economía política, (1848) (ed. de México, 1969)

MINCHINTON, Walter: "Los modelos de la demanda, 1750-1914" en Carlo M. Cipolla (ed.), Historia económica de Europa (3). La Revolución Industrial. Barcelona, 1979 pp. 80-194

MOLAS RIBAMTA Pere: "Instituciones administrativas y grupos sociales en la España del siglo XVIII, Las Juntas de Comercio", I Jornadas de Metodología aplicada a las ciencias históricas, Universidad de Santiago de Compostela, 1973. tema 4-4, pp. 1-7

-----: "Los cuerpos generales de comercio. La pequeña burguesía a finales del Antiguo Régimen" Cuadernos de Historia de Cataluña, nov. 1978, núm. XIX

-----: "Sobre la burguesía valenciana en el siglo XVIII", Actes du premier Colloque sur le Pays Valencien a l'époque moderne, Pau, 1980. Incluido en La burgue-

sía mercantil en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1985, pp. 209-237

-----: "La restauración del Consulado de Burgos en el siglo XVIII", La Ciudad de Burgos. Actas del I Congreso de Historia de Burgos, Madrid, 1985

-----: "Las primeras etapas de la burguesía industrial - catalana. Los empresarios algodoneros del siglo XVIII" La burguesía mercantil en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1985, pp. 238-246

MOLLAT, M: Societes et compagnies de commerce en Orient et dans l'Océan Indien, Paris, 1970

MONCADA, Sancho de: Riqueza firme y estable de España 1618

MORALES LEZCANO, Victor: "La Compañía de Canarias: un capítulo sobre la historia económica del archipiélago", Anales de la Universidad Hispalense, 1966

MORALES PADRON, Francisco: Rebelión contra la Compañía de Caracas, Sevilla, 1955

MORET, Michele: Aspects de la société marchande de Seville au debut du XVII siecle, Paris, 1967

MOXO, Salvador de: La disolución del régimen señorial en España, Madrid, 1965

MUN, Thomas: La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior (o la balanza de nuestro comercio exterior es la norma de nuestra riqueza) (ed. póstuma, 1664), México, 1954

-----: Discurso acerca del comercio de Inglaterra con las Indias orientales (1621), México, 1954

MUÑOZ GARCIA, Juan, GARCIA DELGADO, José Luis y ROLDAN LOPEZ, Santiago: La formación de la sociedad capitalista en España, 1914-1920, Madrid, 1973, (2 vols)

MUÑOZ PEREZ, L: "Los proyectos sobre España e Indias en el siglo XVIII: el proyectismo como género" Revista Estudios Políticos, núm. 81, mayo-junio 1955, pp. 169-195

NADAL, Jordi: El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913, Barcelona, 1975

NORTH, Douglas: "Ley, derechos de propiedad, instituciones legales y el funcionamiento de las economías" Historia económica: nuevos enfoques y nuevos problemas, Barcelona, 1981, pp. 175-183

NOVISIMA RECOPIACION DE LAS LEYES DE ESPAÑA mandada formar por el Señor D. Carlos V, Madrid, 1805-7 (reimpr. del 1976), 6 vols

ORTEGA, Juan: Tratado subtilissimo de aritmética y geometría, Sevilla, 1542

ORTIZ, Luis: Memorial del Contador a Felipe II (1558)

PALACIO ATARD, Vicente: El comercio de Castilla y el puerto de Santander en el siglo XVIII. Notas para su estudio, Madrid, 1960

-----: Derrota, agotamiento, decadencia en la España del siglo XVII, Madrid, 1966

PEREZ DE MOYA, Juan: Arítmctica práctica y especulativa
Madrid, 1598

PETIT, Carlos: La compañía mercantil bajo el régimen de las Ordenanzas de Bilbao (1737-1829), Sevilla, 1980

PRIETO BANCE, Ramón: "Un contrato de sociedad del siglo-XII", Revista de Derecho Mercantil, núm. 27, 1950 pp. 347-353

PRIETO GONZALEZ, Carlos: "Los orígenes de la sociedad de responsabilidad limitada en España", Revista de Derecho Mercantil, núm. 108, 1968, pp.

Proyecto de Código Mercantil de España, Madrid, 1839

QUESNAY, Francois: "Fermiers", en Encyclopedie ou dictionnaire raisonné des sciences, des et de métiers, Paris, 1751

-----: "Máximas generales de la política económica en un país agrícola", 1758, en Le Tableau économique y otros estudios económicos, sel. y pról. de Valentín Andrés Alvarez, Madrid, 1.974

RAHOLA Y TREMOLS, Federico: Comercio de Cataluña con América en el siglo XVIII, Barcelona, 1931

REUS Y GARCIA, José: Código de Comercio, arreglado a la reforma decretada en 6 de diciembre de 1868, anotado y concordado, precedido de una introducción histórico-comparada, Madrid,, 1869

RICO LINAGE, R_aquel: "La Real Compañía de Fábricas y comercio de Granada: su cédula de creación", Actas del

I Congreso de Historia de Andalucía, T.IIIIm Córdoba,
1978, pp. 159-175

RODRIGUEZ CAMPOMANES Y PEREZ: Discurso sobre la educación popular de los artesanos, Antonio de Sancha, Madrid, 1775

RODRIGUEZ GONZALEZ, Ma Carmen: "La Real Compañía de Comercio y Fábricas de Extremadura", Cuadernos de Investigación Histórica, núm.6, 1982, pp. 39-70

RODRIGUEZ SASTRE, Antonio: La cuenta corriente de efectos o valores de un sector de la Banca Catalana, Madrid, 1935

-----: Operaciones de Bolsa. Doctrina, legislación y jurisprudencia española, 2ª ed, Madrid,, 1954

ROLDAN LOPEZ, Santiago, GARCIA DELGADO, José Luis y MUÑOZ GARCIA, Juan: La formación de la sociedad capitalista en España, 1914-1920, Madrid, 1973 (2 vols)

ROMERO Y GIRON, Vicente: El nuevo Código de Comercio para la península y las Antillas, profusamente anotado y concordado con nuestra legislación anterior y con la jurisprudencia nacional y extranjeras y exposición del proyecto del Sr. Alonso Martínez, precedido de una introducción por-----, Madrid, 1886 (2ªed., corr. y aum.), p. 147

ROUSSET DE MISSY, Jean: Recueil historique d'actes, negotiations, mémoires et traités, La Haya, 1728

RUBIO, Jesús: Sainz de Andino y la codificación mercantil
Madrid, 1950

RUEDA, Germán: "La desamortización de Mendizabal y Espartero, Información Comercial Española, núm, 623, julio pp. 53-68

RUIZ Y PABLO, Angel: Historia de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona (1758 a 1847), Barcelona, 1919

SAAVEDRA FAJARDO, Diego: Empresas políticas o idea de un príncipe político cristiano (1640

SAINZ DE ANDINO, Pedro: Ensayo crítico sobre la contratación de la Bolsa de Comercio y las ventas simuladas de los efectos públicos, Madrid, 1845

SALGADO DE SOMOZA, F: Labyrinthus creditorum concurrentium ad litem per debitorem communem inter illos causatèm, 1757

SANCHEZ, Santos: Colección de Prágmaticas, cédulas, provisiones, autos acordados y otras providencias generales expedidas por el Consejo Real en el reinado del Sr. D. Carlos III, viuda e Hijos de Marín, Madrid, 1803, (2 vols)

SANCHEZ ALBORNOZ, Nicolás: "De los orígenes del capital financiero: la Sociedad General del Crédito Mobiliario español, 1856-1902", Moneda y Crédito, núm. 97, junio de 1966

-----: "La integración del mercado nacional. España e Italia", en J. Nadal y G. Tortella, eds, Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea, Madrid, 1975

SANCHEZ APELLANIZ VALDERRAMA, Miguel: La Compañía mercan-

til de Málaga. Aportación al estudio de los anteceden-
tes jurídico-mercantiles de la sociedad anónima, Má-
laga, 1975 (Resumen de tesis doctoral)

-----: "El proyecto de compañía de comercio en Indias apro-
bado por la Junta de Comercio en 1683", Revista de
Derecho Mercantil, 1962

SANTILLAN, Ramón de: Memorias (1815-1856), ed. y notas de
Ana María Berazaluze, Pamplona, 1960

SEGURA, Simón: "La desamortización española del siglo XIX
en Papeles de Economía española, nº 20, 1984, pp. 74 -
107

SHEPHERD, J y WALTON, G.M.: "Trade, Distribution an Econo-
mic Growth in Colonial America", Journal of Economic
History, pp. 128-146

SMITH, Adam: Investigación acerca de las causas de la ri-
queza de las Naciones (1776), ed. de México, 1958

SMITH, Robert Sidney: Historia de los Consulados de Mar
(1250-1750), Barcelona, 1978

SPENGLER y ALLEN (drs): El pensamiento económico de Aris-
tóteles a Marshall. Madrid, 1971

STEENGSGAARD, Niels: "The companies as a specific insti-
tution in the History of European Expansion", en L.
Blussé y F. Gaastra (eds), Companies, and Trade...
pp. 245-264

SUAREZ, Federico: Documental del reinado de Fernando VII,
Pamplona, 1968

- SUPPLE, Barry: "El Estado y la Revolución Industrial, 1700-1914", en Carlo Ma Cipolla, ed, Historia económica de Europa (3), La Revolución industrial, Barcelona, 1979, pp. 312-370
- TEDDE DE LORCA, Pedro: "La banca privada durante la Restauración (1874-1914)", en Servicio de Estudios del Banco de España, La Banca Española en la Restauración, Madrid, 1974
- : "El sector financiero y el fracaso de la revolución industrial en España, 1874-1913", Información Comercial española, núm. 623, julio 1985, pp. 39-46
- : "Banca privada y crecimiento económico en España, 1874-1913", Papeles de Economía Española, núm. 20 1984, pp. 169-184
- TOMAS Y VALIENTE, Francisco: Manual de historia del derecho español, 1979
- : El marco político de la desamortización en España, Barcelona, 1971
- : "La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen", en José Ma Jover Zamora (dir), "La era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874)", vol. XXXIV de la Historia de España, Menéndez Pidal (Fund), Madrid, 1981
- TORRENTE FORTUÑO, José Antonio: Salamanca holsista romántico, Madrid, 1969
- : Historia de la Bolsa de Bilbao: 1890-1965, Bilbao 1966

-----: Historia de la Bolsa de Madrid, Madrid, 1974 (3vols)

TORTELLA CASARES, Gabriel: "El principio de responsabilidad limitada y el desarrollo industrial de España : 1829-1869", Moneda y Crédito, marzo de 1968, núm.104

-----: "El Banco de España entre 1829-1929. La formación de un Banco central", en El Banco de España. Una historia económica, Madrid, 1970

-----: La Banca española en la Restauración, 2 vols, Servicio de Estudios del Banco de España, Madrid, 1974

-----: Los orígenes del capitalismo en España. Banca, Industria y Ferrocarriles en el siglo XIX, Madrid, 1975

-----: "La economía española, 1830-1900", en M. Tuñón de Lara (ed), Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1928), Madrid, 1981, pp.11-167

-----: "La agricultura de la en la economía de la España contemporánea: 1830-1930" en Papeles de Economía Española, núm. 20. 1984, pp. 62-73

USTARIZ, Jerónimo de: Theorica y práctica de Comercio y Marina, Madrid, 1724

VEGA, Josseph de la; Confusión de Confusiones. Diálogos curiosos entre un philósopho agudo, un mercader discreto, y un accionista erudito describiendo el negocio de las acciones, su origen, su etimología, su realidad, su juego y su enredo, Amsterdam, 1668

VEITIA LINAJE, Juan de: Norte de la contratación de las Indias occidentales, Sevilla, 1672 rep facsimil por I. F, Madrid, 1981

VICENS VIVES, Jaime: Historia General Moderna. Del Renacimiento a la crisis del siglo XX. Barcelona, 1971

VILAR, Pierre: La Catalogne dans l'Espagne moderne. Recherches sur les fondaments économiques des structures nationales, Paris, 1962 (3 vols)

-----: "Los primitivos españoles del pensamiento económico. Cuantitativismo y bullonismo" Crecimiento y desarrollo, Barcelona, 1964

-----: Oro y moneda en la historia, 1450-1920, Barcelona,

-----: Movimientos nacionales de independencia y clases populares en América latina, Barcelona, 1976

VILLACAMPA, V : "La Bolsa oficial (1915-1930)", en Ayuntamiento de Barcelona, Documentos y Estudios. La Bolsa de Barcelona de 1815 a 1930: Líneas generales de su evolución. V. VIII, Barcelona, 1961

VIÑAS MEY, Carmelo: "Las compañías de comercio y el resurgimiento industrial de España en el siglo XVIII", Revista Nacional de Economía, 1922, pp. 239-275

WALKER, Geoffrey J. : Política española y comercio colonial, 1700-1789, Barcelona, 1979

WARD, Bernardo: Proyecto económico en que se proponen varias providencias dirigidas a promover los intereses de España, con los medios y fondos necesarios para su planificación, escrito en el año de 1762 por---, Joaquin Ibarra, impr., Madrid, 1779

ZAVALA Y MIRANDA, José: Manifiesto, que al M.N. y M. L.

Señorio de Vizcaya en su junta de Guernica presenta
su diputado en la Corte de Madrid, D.--- sobre esta-
blecer en la villa de Bilbao, comercio y navegación
por reglas de compañía para la carrera de Buenos Ai-
res, y otros de América, Madrid, 29 de julio de 1743

REUNIDO, EN EL DIA DE LA FECHA, EL TRIBUNAL QUE SUSCRIBE, ACORDO CONCEDER
A LA PRESENTE TESIS DOCTORAL LA CALIFICACION DE APTO CUM LAUDE (POR UN)
MADRID, 18, junio 1986

EL PRESIDENTE,

A. Sandoval

EL SECRETARIO,

J. M. Ruiz

FDO.: FDO.:
PRIMER VOCAL, SEGUNDO VOCAL, TERCER VOCAL,

Gustavo Añez

FDO.: FDO.: FDO.:
Pedro Redde Alfonso